

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

**FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y
SOCIOLOGÍA**

Departamento de Ciencia Política y de la Administración II,



**HECHO EN SOCIALISMO: EL SISTEMA SOCIALISTA DE
SOBERANÍA ALIMENTARIA EN VENEZUELA COMO
EJEMPLO DE NUEVOS TIPOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS
PARTICIPATIVAS (FEBRERO 1999-FEBRERO 2012)**

**MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR
PRESENTADA POR**

Daniel Castro Aniyar

Bajo la dirección del doctor

Juan Carlos Monedero

Madrid, 2013

Tesis doctoral

Programa Doctoral *Conflicto Político y Procesos de Pacificación*
Departamento de Ciencias Políticas y de la Administración II.
Facultad de Sociología y Ciencias Políticas
Universidad Complutense de Madrid



“Hecho en socialismo”

El Sistema Socialista de Soberanía Alimentaria en
Venezuela como ejemplo de nuevos tipos de políticas
públicas participativas (febrero 1999- febrero 2012).

Doctorando: Daniel Castro Aniyar
Tutor: Juan Carlos Monedero.

Abril, 2012

Índice

1. Planteamiento, hipótesis y justificación	1
1.1 Planteamiento.	1
1.2 Hipótesis	2
1.3 Justificación	4
1.3.1 La importancia de comprender la naturaleza del Estado periférico.	4
1.3.2 El proceso bolivariano como laboratorio de cambio social.	7
1.3.3 El papel de las políticas públicas participativas.	8
2. La alimentación como parte de la agenda soberanista en América Latina.	10
2.1. La idea de soberanía en la reforma y la revolución agraria latinoamericana.	11
2.2. La contribución de la teoría de la dependencia a la idea de la alimentación como fuente de soberanía.	17
2.3. El desdibujamiento de la alimentación como instrumento de soberanía en el neoliberalismo.	28
3. La perspectiva geopolítica de la alimentación.	32
3.1. La seguridad alimentaria.	34
3.2. La seguridad alimentaria y la dependencia global.	37
3.3 La seguridad alimentaria y el SSSA.	42
3.4 La soberanía alimentaria y el socialismo.	43

4. La debilidad estructural del Estado venezolano antes de Chávez (1920-1998).	51
4.1. Entender el Estado como relación en Venezuela.	51
4.2. La vinculación entre Estado y petróleo en Venezuela.	52
4.3. Desde la colonia hasta la República. Un breve acercamiento a la génesis del Estado	54
4.4. El Estado Gomecista: el petróleo no trae enfermedades económicas	58
4.5. Del <i>trienio</i> a Pérez Jiménez: se consolidan las prácticas discursivas del sistema político venezolano.	62
4.6. Pérez Jiménez. El populismo desarrollista	63
4.7. Los primeros ajustes contra los efectos perversos de la renta	65
4.8. Rómulo Betancourt: el sistema de pactos depreda las posibilidades de interdependencia	68
4.9. La <i>Gran Venezuela</i> y Pérez Alfonzo	74
4.10. El <i>pacto social</i>. La prolongación del modelo depredador sobre la crisis	80
4.11. La <i>Concertación</i>	85
4.12. La <i>Convergencia</i>. El último pacto	86
4.13. El Estado mágico	89
4.14. ¿Se puede sembrar el petróleo? La <i>siembra petrolera</i>, el <i>excremento del diablo</i> y las <i>oligarquías</i>.	93

4.15. Análisis de algunas políticas agroalimentarias implementadas y su relación con la seguridad alimentaria (1959-1999)	101
4.16. El extremo debilitamiento del Estado antes de Chávez.	110
5. La Asamblea Constituyente y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: El papel de la participación	113
6. El Sistema Socialista de Soberanía Alimentaria (SSSA)	127
6.1. Hitos del proceso bolivariano y su relación con “La siembra del petróleo”	128
6.1.1. Del “endogenismo” al socialismo: una transición en proceso	140
6.1.2. Las olas de participación	144
6.2. Componentes del Sistema Socialista de Soberanía Alimentaria	148
6.2.1. El Plan Bolívar 2000	149
6.2.2. La Ley de Tierras y Desarrollo Agrario (LTDA)	151
6.2.3. El Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007	153
6.2.4. Los Consejos Locales de Planificación Pública (CLPP)	155
6.2.5. Otros esfuerzos antes del 2003	156
6.2.6. Mercal	157
6.2.7. Comisión de Administración de Divisas (CADIVI)	160
6.2.8. Superintendencia Nacional de Silos,	

Almacenes y Depósitos Agrícolas (SADA)	162
6.2.9. La regulación de precios	163
6.2.10. La etapa socialista de las políticas del Sistema Socialista de Soberanía Alimentaria	165
6.2.11. Corporación Venezolana Agraria (CVA), Corporación de Abastecimientos y Servicios Agrícolas (CASA), Empresa de Producción Socialista Florentino, Fundación Programa de Alimentos Estratégicos (FUNDAPROAL) y Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos (PDVAL)	173
6.2.11.1. Corporación Venezolana Agraria (CVA)	174
6.2.11.2. Corporación de Abastecimientos y Servicios Agrícolas (CASA)	175
6.2.11.3. Fundación Programa de Alimentos Estratégicos (FUNDAPROAL)	176
6.2.11.4. Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos (PDVAL)	178
6.2.12. “La Banca Social”: El Fondo Único Social (FUS), El Banco del Pueblo, El Banco de la Mujer, el Banco Agrario de Venezuela (BAV), el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (BANDES), el Fondo Agrario Socialista (FONDAS), el Banco de Industrial de Venezuela (BIV), el Banco del Tesoro, Banco Bicentenario, el Fondo de Eficiencia Socialista, el Banco de Venezuela, el Fondo de Desarrollo Nacional (FONDEN), el Fondo Conjunto Chino y el Fondo Zamorano	180
6.2.13. El Sistema Integral de Control Agroalimentario (SICA), Fundación de	

Capacitación e Innovación para Apoyar la Revolución Agraria (CIARA), Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral (INSAI), Comercios Socialistas (Comersso), Corporación Venezolana de Alimentos (Cval), Abastos Bicentenario y la marca “Venezuela”	186
6.2.14. Ley Orgánica de Soberanía y Seguridad Alimentaria (LOSSA)	192
6.2.15. Agrotiendas Socialistas y Agropatria	194
6.2.16. Empresas de Producción Socialista (EPS), recuperadas y cooperativistas	198
6.2.17. Proyecto de Ley de Endeudamiento “Abono Siembra Petrolera” y la Gran Misión Agro Venezuela	202
6.3. El rol de la participación en el Sistema Socialista de Soberanía Alimentaria. Descripción de procesos y situaciones observadas	211
6.3.1. La 1a. ola de participación: los círculos bolivarianos y el ejemplo de la Ley Habilitante (1999-febrero 2003)	214
6.3.2. La 2a. ola: las misiones y los comités. El endogenismo (marzo 2003-2005)	225
6.3.3. La 3a. ola: los consejos comunales, los consejos agrarios y el fin de los CLPP. Las EPS y los NUDES (2006- noviembre 2007)	238
6.3.4. La 4a. ola: La nueva geometría del poder y la comuna (diciembre 2007-2009)	253
6.3.5. La 5a. ola (2010-febrero 2012): El reimpulso Bicentenario. La Gran Misión Agro-Venezuela	264

6.3.6. Conclusiones preliminares sobre las observaciones y las entrevistas	278
6.4. Los problemas de <i>desdibujamiento del mercado dentro del mercado</i> en el discurso explícito y <i>tras bastidores</i>	291
6.4.1. El discurso del <i>desdibujamiento del mercado dentro del mercado</i>	292
6.5. Los problemas de gasto público y absorción económica	304
6.5.1 Problemas atribuidos a la estructura económica en las observaciones del SSSA	306
6.5.2. Gasto público y absorción económica	315
6.5.2.1. Auge y declive de los emprendimientos sociales y económicos 2003-2009	317
6.5.2.2. Las evidencias de la crisis del 2009	326
6.5.2.3. La economía en Venezuela del 2003 hasta el 2011. Tejidos y dependencia	332
7. Los alcances del Sistema Socialista de Soberanía Alimentaria en términos de seguridad alimentaria y participación	352
7.1. Financiación, cobertura del sistema y el manejo del territorio	354
7.1.1. El tamaño de la financiación	354
7.1.2. Cobertura por superficies cosechadas	358
7.1.3. Cobertura por componentes de producción, comercialización y provisión directa	360

7.1.4. Manejo del territorio productivo	375
7.2. Evolución y análisis de los indicadores nutricionales y de pobreza	380
8. Conclusiones	400
8.1. La participación como modelo de gestión en la situaciones observadas: alcances y camino por recorrer	400
8.2. Impacto del Sistema Socialista de Soberanía Alimentaria en la generación de seguridad alimentaria	404
9. Fuentes	409
9.1. Libros y artículos científicos	409
9.2. Prensa, informes y otras fuentes indirectas	431
9.2. Fuentes directas y observaciones de campo	449

Índice de gráficos

<i>Gráfico 1. Población subnutrida en el mundo. 1969-2010</i>	38
<i>Gráfico 1a. Índice mundial de precios de alimentos, 1990-2011</i>	39
<i>Gráfico 2. Agricultura, manufactura y petróleo según PIB de 1950 a 1968</i>	66
<i>Gráfico 2a. Exportación de hidrocarburos en millones de Bs. a precios corrientes. 1950-1967</i>	67
<i>Gráfico 3. Pactos de gobernabilidad. 1958-1999</i>	72
<i>Gráfico 4. Relación entre exportaciones petroleras, no petroleras e importaciones a precios corrientes en miles de millones de bolívares. 1950-1978</i>	77

<i>Gráfico 5. Reservas internacionales del sector financiero nacional y del Banco Central de Venezuela. 1979-1988</i>	84
<i>Gráfico 6. PIB Venezuela 1950-2000</i>	106
<i>Gráfico 6a. Variación interanual del PIB, 1990-1999</i>	106
<i>Gráfico 7. Evolución de la subnutrición 1990-1999. Color naranja: “aumento en un millón o más”</i>	109
<i>Gráfico 8. PIB petrolero durante el paro petrolero. MMM Dólares</i>	135
<i>Gráfico 9. Ingresos, costos e inversiones de PDVSA. 1976-1994</i>	137
<i>Gráfico 10. Los 5 motores</i>	140
<i>Gráfico 10 a. Cronología e hitos de las misiones sociales en Venezuela</i>	141
<i>Gráfico 10 b. Las olas de participación social en Venezuela</i>	147
<i>Gráfico 11. Exportación de banano en Miles de Kgs. 1999-2008</i>	164
<i>Gráfico 12. Componentes del SSSA. Cronología y coyuntura, 1998-2006</i>	167
<i>Gráfico 12a. Componentes del SSSA. Cronología y coyuntura, 2006-2012</i>	168
<i>Gráfico 13. “Nueva redistribución del sistema de ingresos”</i>	184
<i>Gráfico 14. La arepa socialista contra la arepa capitalista</i>	189
<i>Gráfico 15. ¿Cómo se calcula el precio socialista de una taza de café?</i>	190
<i>Gráfico 16. Consumo de café por densidad, tamaño</i>	

<i>del hogar, región, edad, sexo y cuartil de ingresos</i>	191
<i>Gráfico 17. Consumo de arepa en el desayuno</i>	192
<i>Gráfico 18. El SSSA. La cadena económica socialista</i>	209
<i>Gráfico 19. El sistema alimentario venezolano según sus objetivos de seguridad y participación</i>	210
<i>Gráfico 20. Problemas atribuidos al funcionamiento del Estado como administrador</i>	307
<i>Gráfico 21. Problemas auto-atribuidos al funcionamiento de la empresa como tal</i>	308
<i>Gráfico 22. Problemas atribuidos a la estructura económica</i>	309
<i>Gráfico 23. Problemas actuales atribuidos al sabotaje político y/o la delincuencia</i>	310
<i>Gráfico 24. Problemas atribuidos al funcionamiento del Estado como administrador (Sistema Socialista de Soberanía no Alimentaria)</i>	313
<i>Gráfico 25. Problemas atribuidos al funcionamiento de la empresa no alimentaria como tal (Sistema Socialista de Soberanía no Alimentaria)</i>	313
<i>Gráfico 26. Problemas atribuidos a la estructura económica (Sistema Socialista de Soberanía no Alimentaria)</i>	314
<i>Gráfico 27. Problemas atribuidos al sabotaje político y/o la delincuencia (Sistema Socialista de Soberanía no Alimentaria)</i>	314
<i>Gráfico 28. Porcentaje de emprendimientos nacientes en 5 países latinoamericanos. 2003-2011</i>	319
<i>Gráfico 28 a. Tasa de propiedad de nuevos proyectos en 5 países latinoamericanos. 2005-2011</i>	321
<i>Gráfico 28 b. Tasa de propiedad de proyectos establecidos en 5 países latinoamericanos. 2005-2011</i>	321

<i>Gráfico 29. Evolución de las compras del SSSA para su comercialización en toneladas métricas. 2003-2011</i>	325
<i>Gráfico 30. Importaciones y exportaciones 2005-2009</i>	327
<i>Gráfico 31. Índice de precios al consumidor (IPC) en porcentaje del 2008 al 2010</i>	328
<i>Gráfico 32. Índice de precios al productor manufacturero privado en porcentaje de 1997 al 2008</i>	328
<i>Gráfico 32a. Índice de volumen de producción de manufactura privada del 2006 al 2009</i>	329
<i>Gráfico 33. Deuda pública externa venezolana 2005-2009. Millones de US\$</i>	330
<i>Gráfico 34. Porcentaje servicio de la deuda y evolución de las reservas internacionales, 2004-2010</i>	331
<i>Gráfico 35. Ingreso petrolero venezolano por año en miles de millones de dólares desde el 2004 a una proyección en el 2012</i>	333
<i>Gráfico 36. Precio de referencia de la cesta OPEP US\$/barril 1999-2009</i>	334
<i>Gráfico 37. Precio cestas OPEP y Venezuela 2009-2011 US\$/b</i>	335
<i>Gráfico 38. Deuda externa total y deuda pública venezolana. MM US\$. 2000-2010</i>	336
<i>Gráfico 39. Reservas internacionales venezolanas MM US\$. 2006-2010</i>	337
<i>Gráfico 40. Liquidez, en miles de Bsf. 2003-2010</i>	339
<i>Gráfico 41. Índice nacional de precios al consumidor, 2007-2011</i>	340
<i>Gráfico 42. Exportaciones no petroleras privadas</i>	

<i>e importaciones de bienes totales</i>	342
<i>Gráfico 43. Ingresos por importación total CIF, importación privada y exportaciones FOB totales. 2000-2010</i>	343
<i>Gráfico 44. Ingresos de exportación petrolera en relación al valor de la manufactura, la agricultura y la misma producción petrolera, en el PIB, per capita desde el 2001 hasta el 2010</i>	344
<i>Gráfico 45. Producción manufacturera del sector alimentos y agricultura en el PIB 2007-2011. Precios de 1997</i>	349
<i>Gráfico 46. Asociación entre gasto social e ingresos familiares 1986-1998 y 1999-2011</i>	355
<i>Gráfico 47. Consumo de alimentos por rubros x gramos x día x persona en los 2os. semestres del 2003, 2004, 2006, 2008, 2010 y primer semestre del 2011</i>	357
<i>Gráfico 48. Tasas medias de producción agrícola y pecuaria por rubros. Varios períodos</i>	362
<i>Gráfico 49. Empresas estatizadas entre el 2007 y el 2008 por sector productivo</i>	364
<i>Gráfico 50. Empresas recuperadas por decreto de expropiación 2005-2010</i>	364
<i>Gráfico 51. Distribución de puntos de acopio y comercialización de Mercal sobre el territorio nacional</i>	368
<i>Gráfico 52. Distribución de puntos de acopio y comercialización de Pdval sobre el territorio nacional</i>	371
<i>Gráfico 53. Beneficiarios de Pdval y Mercal por año y estrato social, 2008-2010</i>	373
<i>Gráfico 54. Déficit nutricional global en menores de 5 años. 1990-2011</i>	383

<i>Gráfico 55. Índice de prevalencia de la subnutrición. 1990-2008</i>	384
<i>Gráfico 56. Tasa de mortalidad infantil para niños menores de 1 año. 1990-2010</i>	385
<i>Gráfico 57. Tasa de mortalidad infantil de niños menores de 5 años. 1990-2010</i>	386
<i>Gráfico 58. Pobreza y pobreza extrema por línea de ingreso</i>	388
<i>Gráfico 59. Pobreza crónica, 2002-2011</i>	390
<i>Gráfico 60. Índice Nacional de Precios al consumidor (INPC) intermensual, 2011</i>	391
<i>Gráfico 61. Canasta alimentaria y salario mínimo, octubre 2011</i>	392
<i>Gráfico 62. Canasta alimentaria normativa y salario mínimo, 1999-2011</i>	393
<i>Gráfico 63. Ahorro familiar en Mercal, 2008-2010</i>	393
<i>Gráfico 64. Porcentaje de trabajadores con salario mínimo en el sector formal de la economía, 1999-2010</i>	394
<i>Gráfico 65. Tasa de desocupación, 1998-2011</i>	395
<i>Gráfico 66. Índice de Desarrollo Humano del PNUD. Comparación entre Venezuela, el mundo, los países de alto desarrollo humano y Latinoamérica y el Caribe, 1980-2010</i>	396
<i>Gráfico 67. Coeficiente Gini América Latina por países, 1998 vs. 2010</i>	397
<i>Gráfico 68. Renta del trabajo en la renta nacional, 1936-1974</i>	399

1. Planteamiento, hipótesis y justificación.

1.1. Planteamiento.

Cuando Hugo Chávez Frías ganó las elecciones venezolanas en diciembre del 1998 el país estaba pasando por un aumento sostenido de la pobreza desde 1983, una percepción generalizada de que sus clases políticas eran corruptas y que la economía viajaba sin rumbo. Para algunos autores, la pobreza creciente debía ser enmarcada en una percepción más global de la crisis del capitalismo existente en Venezuela, puesto que ella sobrepasaba los problemas derivados del clásico divorcio entre sociedad política y sociedad civil y había entrado en una crisis de la *generalidad ilusoria*, tal como la entendía Marx en relación al quiebre de las relaciones de hegemonía de todo el subsistema (Garrido y Montilla, 1999).

En relación a la pobreza, todos los indicadores de esta variable ascendían sistemáticamente y apuntaban a un aumento de la desnutrición, así como de la mortalidad infantil, vinculado a la caída del PIB y la productividad agroalimentaria (Purroy, 1980; Carmona, 2001; España, 1997; FAO y CAF, 2006; Morán Esparza, 2007). Además del drama que suponía en los mundos de vida de los sujetos, esto profundizaba la percepción que tenía la sociedad civil de que los beneficiarios del petróleo, tanto en el Estado como en la empresa privada, habían estafado a la sociedad (Coronil, 1997; 2008).

Hugo Chávez ganó las elecciones con un discurso nacionalista, en contra de la corrupción, a favor de políticas sociales más distributivas y políticas económicas más soberanas. Para ello propuso la refundación de los cimientos sociopolíticos de Venezuela mediante una Asamblea Nacional Constituyente y la redacción de una nueva Constitución.

La Asamblea Nacional Constituyente de 1999 hizo eco de las propuestas de diferentes sectores de la vida nacional y de las propuestas del propio presidente, otorgando a la participación política de la sociedad civil y a la inclusión social un rol protagónico en el diseño de la nueva República, a través de la Constitución.

En este contexto se crearon las primeras políticas alimentarias.

Luego del llamado paro petrolero-alimentario impulsado por la oposición entre el 2002 y el 2003, el Estado obtuvo un margen de maniobra y legitimidad para conducir las políticas de seguridad

alimentaria hacia su profundización en el llamado *endogenismo* y posteriormente, la *soberanía* y el *socialismo*.

Esta tesis trata de la descripción de estas experiencias en relación al papel de la participación ciudadana, los objetivos soberanistas de la nación y, fundamentalmente, la relación entre estas políticas y los objetivos fundamentales de la seguridad alimentaria.

Con el fin de ofrecer al lector una imagen articulada de estas políticas, esta tesis denomina **Sistema Socialista de Soberanía Alimentaria (SSSA)** el conjunto de políticas públicas realizadas desde 1999 con el objetivo de producir

a) *seguridad alimentaria*, esto es, permitir a la población venezolana acceder a los alimentos de la dieta diaria y con ello colaborar con la reducción de la pobreza;

b) *soberanía alimentaria*, esto es, producir, transportar y vender los alimentos a partir de recursos nacionales con el fin de reducir la dependencia extranjera y privada de la economía, y

c) *socialismo*, esto es, promover un sistema político-productivo autosostenido a través de la socialización de la propiedad sobre los medios de producción y servicios alimentarios para así impulsar la “solidaridad” (entendida como *responsabilidad social*) de los trabajadores/propietarios con el entorno social (Asamblea Nacional Constituyente, 2000; Chávez, 2007 a; Chávez y Asamblea Nacional, 2007; Chávez, 2010 c).

Esta tesis comienza con la primera de las políticas del SSSA, la creación de la Asamblea Constituyente y la Constitución bolivariana, y cierra con el propuesta del Fondo Zamorano en febrero del 2012.

1.2. Hipótesis

“EL SSSA venezolano, evaluado desde febrero 1999 a febrero del 2012, es un ejemplo de nuevas políticas públicas participadas popularmente con alcances en la generación de seguridad alimentaria”.

El Sistema Socialista de Soberanía Alimentaria venezolano es un ejemplo de políticas públicas con objetivos en la creación de independencia económica, suficiencia alimentaria y superación de la pobreza. Esto significa que los esfuerzos realizados en ese sentido

desde el 2000 hasta el 2011 han tenido como Norte reconducir las fuerzas sociales e institucionales hacia la superación de la dependencia al petróleo y las formas políticas y económicas derivadas del capitalismo periférico. Para ello se ha estimulado la generación de todo un nuevo entramado productivo y comercializador de alimentos con el fin de producir seguridad y, a partir de ésta, soberanía económica y política sobre nuevas bases de participación de la sociedad civil, así como de participación de la sociedad civil a través del Estado.

Esta tesis pretende mostrar que el objetivo del SSSA en producir mayor seguridad alimentaria ha tenido éxito. En otras palabras, independientemente de que otros objetivos del sistema aún no han mostrado los resultados previstos, la seguridad alimentaria en Venezuela ha tenido suficientes éxitos como para que, a la altura de 2012, Venezuela pueda considerar alcanzar los objetivos del milenio en este ámbito (Naciones Unidas, 2011).

Para entender esto se van a indicar varios caminos. En primer lugar, se identificará la importancia de la generación de seguridad alimentaria en una región cuya persistente desigualdad social ha acompañado las luchas sociales republicanas, de modo que puedan observarse antecedentes de los intentos por generar seguridad y soberanía alimentaria, u objetivos similares en su historia política.

En segundo lugar, se identificarán aspectos del contexto geopolítico neoliberal y sus impactos en el empobrecimiento de los tejidos soberanistas antes del SSSA.

En tercer lugar, se describirán algunas líneas generales acerca de la historia de la condición periférica del Estado venezolano, fundamentalmente desde 1810 hasta 1998, con el fin de explicar cómo se debilitaron los tejidos económicos y socio-políticos en virtud del papel estructural jugado por la renta petrolera en los problemas de absorción económica y los pactos de gobernabilidad.

Se destacará la idea de Jessop de Estado relacional a través del papel de los emprendimientos sociales y económicos como unidades de generación del tejido social e institucional.

Se procurará una descripción de los agregados del SSSA en tanto componentes del sector público alimentario de la economía venezolana.

Metodológicamente, se hará uso de la teoría de las políticas públicas (Aguilar Villanueva, 2007 y 2007 a; Rein y Goodin, 2008; Howlett, Ramaesh y Perl, 2009), el análisis macroeconómico para Estados periféricos (Sosa Barajas, 2002), el método etnográfico -observación participante (Mauss, 1967; Martínez, 1992; Ruiz Olabuénaga, 2009) y descripción densa (Geertz, 1995)- , así como las estrategias técnicas convenidas por la FAO (Schejtman, 1999; FAO, 2010 a; 2010 b; 2010 c; Espíndola, León, Martínez y Schejtman, 2004) para medir la seguridad alimentaria.

Teóricamente, se utilizarán recursos de la teoría del Estado tales como marxismo (Thwaites, 2007), Estado periférico (Prebisch, 1981; Rubinstein, 1988; Portantiero, 1988; Palacios Romeo, 1999), Estado relacional (Jessop, 2009), Estado experimental (Santos, 2011), participación (Asamblea Nacional Constituyente, 2000; Ibarra, 2005; Fung, 2008; Santos, 2008; Monedero, 2009; Putnam, 2011), participación aplicada a seguridad alimentaria y territorios sociales (FAO, 1996; 1996a; Schejtman, 1999; Berdegú y Schejtman, 2008) y Estado mágico (Coronil, 1997).

Igualmente se hará referencia a convenciones derivadas de la geopolítica de la alimentación (FAO 2010 a; 2012; Declaración de Nyéléni, 2007; Vía Campesina, 2009), así como algunos supuestos sobre la alimentación en la llamada Siembra Petrolera como postulado fundamental en la política económica venezolana (Pérez Alfonzo, 1976; Baptista y Mommer, 1992; Baptista, 1997; Crazut, 2006; Rodríguez Araque y Muller Rojas, 2009).

1.3. Justificación.

La importancia de estudiar los logros del Sistema Socialista de Soberanía Alimentaria en el área de seguridad alimentaria se puede resumir en 3 aspectos:

- a) su incidencia en la comprensión del *Estado periférico*,
- b) en la comprensión de los contextos en los que se produce el cambio social y
- c) en la comprensión del papel de las políticas públicas participativas.

1.3.1. La importancia de comprender la naturaleza del *Estado periférico*.

Venezuela es un caso tipo de Estado periférico. Contiene la reserva petrolera más grande del mundo en un solo país, pero, a pesar de manejar con relativa eficiencia sus procesos exploratorios y productivos en esa área, el resto de su aparato productivo aún no es suficiente para satisfacer medianamente su demanda interna, sus instituciones no han logrado comprometer a la totalidad de la sociedad con el proyecto nacional de modernidad (déficits educativos fluctuantes, tiene un Estado de Derecho débil, debilidad institucional, sistemas recaudatorios ineficientes, altos niveles de delincuencia, etc.), ni puede emprender sin cambios estructurales reformas en el mercado y la sociedad civil (Amín, 1974; Crazut, 2006; Monedero, 2009 a; López Maya, 2009).

Es un caso emblemático de sociedad petrolera y periférica (Coronil, 1997; Mendoza Potellá, 1995; Karl, 1997) y, al mismo tiempo, es un caso emblemático de ejemplos de políticas públicas y planes nacionales alternativos (Wilpert, 2007; Kozloff, 2008; Monedero, 2009 a; Harnecker, 2010).

La naturaleza del *Estado periférico* es uno de los temas recurrentes de la sociología política contemporánea. Su importancia radica en comprender que la existencia del Estado no puede ni debe entenderse desde su simple relación a lo interno de la nación sino en un intercambio de relaciones de poder, normas y valores diferenciales y desiguales entre diferentes sociedades que han venido configurando a la sociedad global, y que inciden en las relaciones a lo interior de los mismos Estados (Portantiero e Ipola, 1988; Rubinstein, 1988; Palacios Romeo, 1999).

Las contribuciones a este debate provienen, por ejemplo, de la obra de Lenin sobre el entonces nuevo papel del imperialismo en la consolidación de las fuerzas del modelo de acumulación capitalista (Ouviña, 2007), la obra de Gramsci en la que identifica el auge de los nacionalismos del *Mezzogiorno* con el papel entonces incomprendido por sus trabajadores en la división mundial del trabajo dentro del proyecto estatal italiano (Lacaste, 1981; Thwaites Rey, 2007a), las teorías evolucionistas de origen tayloriano que propusieron la difusión de las experiencias de modernización del Estado de los países culturalmente complejos a los Estados premodernos (Morgan, 2005

[1877]), el auge del movimiento llamado cepalino por identificar los escollos de la industrialización periférica (Prebisch, 1981; Treviño, 2006), las críticas realizadas por la *teoría de la dependencia* acerca del carácter estructural del rol de la periferia en relación a los centros de dominación postcolonial (Frank, 1967; Amin, 1974), los problemas de educación y cultura política que surgen en autores como Dahl, O'Donnell y García Canclini para la modernización y optimización de las libertades liberales en los Estados modernos, las recientes discusiones sobre *el fin de la historia* de Fukuyama, el *choque de civilizaciones* en Huntington, la obra pionera de Franz Fanon sobre las amenazas estructurales de la desigualdad global y las cruciales obras de Arrighi y Wallerstein sobre los sistemas-mundo y los ciclos de creación y recreación de los sistemas socio-económicos a escala planetaria (Arrighi, 2002; Wallerstein, 2006).

Por encima de esas contribuciones han surgido, además, nuevas e importantes capas de discusiones entre las que se encuentran aquellas sobre la acción política. Tal es el caso de las reflexiones de Boaventura de Sousa Santos sobre la descolonización del conocimiento científico o las de Mignolo sobre la descolonización del saber epistémico, las de Monedero, siguiendo a Santos, sobre el papel central de la participación como vía a la creación de nuevos tipos de Estado, y como avanzadilla de los análisis críticos, algunos caminos similares en Dussel, Hinkelammert o Quijano.

Asimismo se han desarrollado discusiones sobre el papel articulador y cimentador del tiempo en una memoria de las prácticas económicas y políticas que definen estructuras, sistemas, relaciones globales de dependencia e interdependencia. Sobre esta memoria se sostendrían las posibilidades epistémicas y de acción de la política. Por tanto, conceptos que estudian lo temporal como los de *Path Dependence*, y otros temas sobre *cambio político* y *cambio social* pueden ayudar con esta visión (Van Den Bosch y Cantillon, 2008).

Por tanto, esta tesis parte de la idea de que los problemas relativos a los Estados periféricos consisten en los problemas estructurales de la sociedad global toda, entendida como proyecto civilizatorio.

El Estado moderno, aún herramienta fundamental de los dispositivos *glocales* de transformación (Monedero, 2008 b; Jessop, 2008), requiere de un alcance académico cada vez más integrador y complejo. El caso

venezolano es una de las referencias de la discusión sobre este tema en el mundo contemporáneo (Amin, Bachi, Bello y Sader, 2009).

1.3.2. El Proceso bolivariano como laboratorio del cambio social.

Varios autores coinciden en la importancia seminal del proceso bolivariano venezolano en el quehacer político de la región latinoamericana actual.

Nicolás Kosloff, escritor de “Revolución!”, una edición norteamericana considerada por el Financial Times como el *mejor libro del 2009* (es decir, un circuito editorial conocido como poco favorable a Chávez), escribe que Venezuela, al enfrentar exitosamente las presiones del poder establecido, incluyendo un golpe de Estado y la animadversión de la administración de W. Bush, indicó que era posible otro camino:

“Por años, América Latina había visto revueltas sociales en contra de las reformas neoliberales. Ahora, inspirado por el ejemplo de Chávez, la gente votó a todo lo largo del territorio por gobiernos que implementaron la salida de esas reformas del poder” (Kosloff, 2009: 16)

En este sentido, las preguntas que esta investigación trata de responder procuran evaluar una parte de este esfuerzo utópico y permanente por cambiar las condiciones de dependencia y periferia en Venezuela y en el resto de la América Latina, con el fin de alertar sobre los errores que pueden producir ciertas políticas en el área alimentaria y en otras áreas.

El caso venezolano ofrece una apuesta para trascender de la dependencia del *Estado periférico* hacia un mundo de interdependencias globales, por lo que resulta importante atender a las transformaciones acaecidas, exitosamente o no, en su subsistema.

De tal modo que el SSSA venezolano es el resultado de una práctica que busca dilucidar una tensión entre deseo y realidad importante para la imaginación utópica del siglo XXI.

También en ese sentido, la comprensión del SSSA en su contexto periférico, permite reconocer algunas formas de la respuesta periférica al *postcontractualismo*, y las condiciones en que pueden desarrollarse

los llamados *Estados experimentales* como *novísimos movimientos sociales* (Santos, 2011).

1.3.3 El papel de las políticas públicas participativas.

La ilusión de bienestar que produce distribuir riquezas directamente, sin un proyecto eficiente de sustentabilidad económica, realmente oculta un empobrecimiento de los tejidos que hacen posible estas riquezas. Sin embargo el estímulo de la organización social y la creación de vasos comunicantes en lo político para este fin también revela formas de enriquecimiento de los tejidos sociales.

De tal modo que esta investigación ayuda a responder preguntas sobre democracia, sustentabilidad, desarrollo y tejidos sociales.

Cuando se hace referencia a tejidos sociales, se hace referencia a la necesidad de un contexto que produzca emprendimientos independientes de tipo político y económico.

Este es un tema fundamental en las discusiones sobre políticas públicas: hasta qué medida puede y debe el Estado impulsar tejidos en la sociedad civil que faciliten las políticas públicas, así como en qué medida puede y debe el Estado actuar en la creación de tejidos económicos. En qué medida se trata de crear nuevos actores en el mercado o en la sociedad civil, o en qué medida se trata de crearles contextos propicios para su aparición y fortalecimiento independiente e interdependiente.

Para un país periférico como Venezuela, la cuarta economía latinoamericana medida por el tamaño de su PIB, detrás de Brasil, México y Argentina (Reuters, 2011), superar las condiciones de pobreza supone importantes réditos políticos así como en capital social. Hacerlo por la vía de la intervención directa del Estado, pone a éste a jugar un papel central y centralizador en la sociedad. Los gobiernos fuertes, centralizados y centralizadores, son una tentación bien reconocida en los estudios sobre populismo en la región (De la Torre, 2010).

Por tal razón esta investigación también dialoga de manera cómplice con las discusiones sobre desarrollismo y populismo (Panizza, 2009, Laclau, 2009; Follari, 2011; Fernández Farías, 2011; De la Torre, 2010).

Las prácticas del SSSA pueden implicar lo contrario a lo que sugieren sus objetivos: la sustitución de tejidos impulsados por emprendimientos políticos y económicos en el seno de una sociedad, por políticas planificadas centralmente en la que el Estado recupera e instala para sí nuevas formas de poder y protagonismo.

Reconocer cómo se produce este proceso en las prácticas económicas organizacionales y culturales, incluir la comprensión etnográfica de algunas de sus situaciones en la realidad de políticas públicas concretas y su importancia luego en la definición del carácter del Estado, son preguntas cruciales reconocidas por los estudiosos de estos temas. Autores a favor y en contra del populismo como alternativa, coinciden en que hay pocas investigaciones a profundidad que expliquen el fenómeno en las prácticas políticas concretas (De la Torre, 2010:183; Follari, 2011:128)

En relación a las políticas alimentarias, el relato ideológico bolivariano luce urgente: hay que convertir la alimentación en un derecho social, pero, como se verá, ello debe pasar por la reconversión de los tejidos políticos y económicos que habían sido debilitados en el Estado y la sociedad civil venezolanos en anteriores momentos políticos.

El SSSA se propuso entonces como un nuevo tipo de política pública participada popularmente: su éxito depende de la aparición de un nuevo modelo de Estado y de políticas públicas derivadas, *postcontractuales* (Santos, 2011) o posiblemente *neocontractuales*, que descentren el mercado y la verticalidad tradicional del Estado (El-Troudi y Monedero, 2006; Monedero, 2008b).

En este nuevo tipo de política se entiende que la participación puede cumplir su papel regenerador de tejidos sociales en permanente transformación. A través de la construcción de ese nuevo modelo socio-económico, aunque todavía ineficiente y perecedero en muchos aspectos, se produce una nueva articulación entre sociedad civil y Estado, provocando un posible ensanchamiento y transformación del espacio público ciudadano.

Los alcances de la participación en el SSSA y su vinculación con el subsistema venezolano, tanto en sus fundamentos teóricos como en la ejecución de las políticas, serán temas de fondo a desarrollar en capítulos posteriores.

2. La alimentación como parte de la agenda soberanista en América Latina.

El hecho de que América Latina ha sido históricamente una de las regiones más desiguales del mundo es el resultado de su papel de proveedor de insumos en la organización del sistema colonial y luego en el mercado moderno.

En la vida de los sujetos, esta situación se expresa en la percepción de que las condiciones de pobreza aguda, subnutrición y pérdida de soberanía política se producen de manera simultánea a la generación de importantes excedentes, lujos e importación.

De tal modo que es posible indicar que la imagen del *pan* y la *tierra* en las movilizaciones agraristas en todos los países latinoamericanos, es una imagen “espinal” de la historia política de sus pueblos (García, 1985: 29), y al mismo tiempo, una imagen fundamental que ha articulado los mundos de vida y la cotidianidad de los sujetos, más allá de los programas políticos. Se desprende fácilmente de los documentos históricos y los especialistas en este tema, que la unidad del movimiento agrarista latinoamericano alrededor de consignas como *pan*, *tierra* o *libertad* representa una necesidad utópica de transformar el entorno no solo hacia el acceso a los alimentos, sino hacia la soberanía y la democracia.

Es posible respaldar estas percepciones, no solo en los estudios políticos y económicos sobre el tema, sino también en la prolífica tradición ensayística y literaria latinoamericana que, desde la República hasta el siglo XX (así como en la pintura y en la música), repiten consistentemente el relato de la desigualdad, el *pan* y la *tierra* como componentes fundamentales e inalienables del conocimiento, incluso, de un conocimiento descolonizado (Weinberg, 2004).

Es tal el peso de las descripciones literarias y ensayísticas, que el propio José Carlos Mariátegui sostenía a principios del siglo XX que no era posible entender la historia, la cultura y la sociedad latinoamericanas sin pasar por la literatura latinoamericana (Mariátegui, 2006: 72-76, 250-253). La imaginación utópica que hace la sociedad de un espacio propio donde ha sido derrotado el latifundio y que ha permitido la distribución de los alimentos, es la imaginación misma de la superación de la pobreza y, por tanto, un componente persistente (por inacabado) de la propia condición *nuestramericana* (Henríquez Ureña, 1990).

2.1. La idea de soberanía en la reforma y la revolución agraria latinoamericana.

“Le tienen mucho amor a la tierra. Todavía no lo creen cuando se les dice: ‘Esta tierra es tuya’. Creen que es un sueño. Pero luego que hayan visto que otros están sacando productos de estas tierras dirán ellos también: ‘Voy a pedir mi tierra y voy a sembrar’. Sobre todo ese es el amor que le tiene el pueblo a la tierra. Por lo regular toda la gente de eso se mantiene”.

Emiliano Zapata.
Conversación con Pancho Villa en el Pacto de Xochimilco, 1914

La utopía latinoamericana agraria no se ha presentado solo como un problema estrictamente reivindicativo de la tierra y la alimentación. Se presenta, consistentemente, como un problema de soberanía y democracia.

De tal modo que las ideas como *pan, tierra, democracia o soberanía* centran los movimientos agraristas que precedieron las independencias (como los decretos y proclamas sobre *tierra y libertad* en las campañas de Bolívar o en el *paecismo*), los que hicieron parte de la formación republicana (como la guerra federal venezolana o la revolución mexicana), los que fundaron los primeros nacionalismos populistas y socialismos (el gaitanismo, el peronismo, el aprismo, el PDN-AD venezolano de los años 30...), y las reformas y revoluciones agrarias del siglo XX (como la abortada reforma de Arbenz en Guatemala, la de Lázaro Cárdenas en México, las reformas agrarias desarrollistas impulsadas en los 60, la reforma de Frei en Chile y su continuación en la de Allende, la revolución agraria cubana, la revolución agraria sandinista...). Todos ellos describen las luchas sociales de los últimos 250 años en América Latina, así como los lazos históricos que les son comunes a todos sus países (García, 1985; Kay, 1998; Alegrett, 2003).

De hecho, en todos los países latinoamericanos, desde su formación hasta el siglo XX, no solo ha habido importantes movimientos agraristas sino que ha habido reformas y/o revoluciones agrarias, con la excepción de Argentina (De Souza Leite, 1994 en Kay, 1998).

Estos lazos históricos comunes entre los diferentes movimientos agraristas, difícilmente son una coincidencia o el efecto de la simple difusión de ideas. Todos ellos suponen que hay bases estructurales comunes (Ramos Mejías, García, Basadre, 2009). Aquí se destacan tres:

- 1) la desigualdad de ingresos es correspondiente a la posesión desigual de la tierra como medio de producción,
- 2) la desigualdad de ingresos genera altos niveles de pobreza, vulnerabilidad material, cultural y política de sus poblaciones, incluyendo la desnutrición y otros temas relativos a la seguridad alimentaria, convirtiendo este tema en un problema de opresión social,
- 3) todas las estructuras agrarias y de producción de alimentos no son el resultado de la demanda nacional, sino de las relaciones de dependencia de las economías latinoamericanas con las metrópolis, generando con ello un quiebre social, político y económico entre la vida urbana y la vida rural a lo interno de las sociedades.

Estos tres aspectos tienen, al menos, dos lecturas. La lectura enfocada en las posibilidades internas, esto es, locales y nacionales, de generar salidas propias, y la lectura enfocada a entender que no hay salidas que no impliquen alguna forma de independencia del mercado internacional como modelo de dominación.

En la primera lectura, se identifica como problema central el latifundio, en tanto es el resultado de la acumulación feudalista y de modelos heredados de la colonia. El latifundio debe ser derrotado en virtud de su incompatibilidad con el mercado moderno capitalista (García, 1985; Kay, 1998; Alegrett, 2003).

Durante su época de oro, desde los primeros años de la conquista hasta entrado el siglo XX, el latifundio estuvo asociado con la riqueza y el poder. Los territorios fueron delimitados y organizados por el poder de los terratenientes, y a su vez éstos conquistaron y ruralizaron el espacio nacional. Por ello, hasta la primera mitad del siglo XX, el latifundio constituía más del 50% del espacio rural latinoamericano (Alegrett, 2003).

La lucha por derrotar el latifundismo encontró, al menos, tres respuestas políticas por parte del movimiento social: la revolución agraria, la reforma agraria y las reformas marginales (García, 1985:20).

La primera respuesta parte de la premisa de que solo puede haber cambio cuando son desplazados todos los actores predominantes de un sistema, se transforman las reglas del juego, así como los equilibrios de intereses de clase. Son ejemplos de ella la guerra federal venezolana y la revolución mexicana .

Sin embargo la revolución como respuesta será mejor comprendida en el avance de las fuerzas revolucionarias socialistas y nacional-populistas, en los que habrán influencias tanto de teorías estructuralistas radicales como de la teoría de la dependencia. Más adelante se entrará en este aspecto.

La reforma agraria, por su lado, parte de la premisa de que es posible refundar el contrato social con objetivos de modernizar la estructura económica y redistribuir los recursos productivos en la forma de un sistema nacional agrario. El Estado tiene un papel fundamental en esta operación, generalmente, en representación de los modos productivos de una formación económico-social más compleja y moderna en ciernes. Para Raúl Alegrett (Alegrett, 2003) estas formaciones son el resultado de un crecimiento de la demanda asociada al crecimiento de actividades urbanas que han crecido junto a las exportaciones agrícolas. Son ejemplos de este tipo la reforma de Arbenz en Guatemala (derrocada por un golpe militar apoyado por una intervención estadounidense) y las reformas impulsadas en los años 60 por la Alianza para el Progreso, la FAO y la USAID en todo el continente (García, 1985; Kay, 1998; Alegrett, 2003).

Antonio García es particularmente cuidadoso en incluir un matiz en algunos tipos de reformas que denominará “marginales”, esto es, que por razón de condiciones específicas nacionales, las reformas agrarias no transformaron sustancialmente el contrato social o las condiciones dominantes de la estructura productiva agraria (García, 1985). Este caso podría ser el de Venezuela, por cuanto allí la reforma agraria no tenía la capacidad de transformar la dependencia al modo de producción asociado al latifundio, dado que los ingresos nacionales emanaban fundamentalmente del petróleo. Como en Venezuela las tierras ociosas y no productivas eran pertenecientes al Estado por ley, la reforma agraria se redujo básicamente a la entrega de tierras estatales con el objetivo de la colonización del espacio (Kay, 1998; Alegrett, 2003).

Para los sectores progresistas de América Latina, la reforma agraria era vista con buenos ojos, pues la sola redistribución de la tierra

permitía un mejoramiento de la distribución de recursos productivos e ingresos en el campo.

La crisis europea de los años 30 brindó a las economías latinoamericanas la posibilidad de una respuesta en el área de la industrialización, que ya había empezado a sembrarse en algunas regiones. Abierto el camino a la industrialización en Occidente, América Latina procuró la creación de reglas y planes específicos para poder integrarse al sistema capitalista mundial jugando un rol más protagonista, y sus élites económicas creyeron contar con los recursos para entrar en la competencia. Por ello, durante la crisis europea de los años 30,

“En América Latina asistimos al aumento en la intervención del Estado en la actividad económica, en una especie de keynesianismo antes de Keynes” (Malamud, 1999:28).

La oportunidad de desarrollar la industrialización latinoamericana, por la vía de impulsar políticas desde el Estado, inspiró las ideas llamadas cepalinas, hoy clásicas, de “centro y periferia”, “sustitución de importaciones”, “sustitución de exportaciones”, “desarrollo endógeno” y “estructuralismo cepalino”. Las fuerzas endógenas, en palabras de Sunkel han tenido y tienen la capacidad de superar el *décalage*, no solamente en el ejemplo de los '30 sino a través de toda la historia económica de latinoamericana desde entonces hasta hoy:

“El argumento es que las empresas transnacionales de países desarrollados que localizan subsidiarias en los nuestros generan dependencia, pero también crecimiento. Quizá ese crecimiento sea más rápido allá y más lento acá o que la capacidad de integración nacional sea menor aquí que allá. Pero no descarto la posibilidad de lograr un desarrollo nacional en el contexto de la dependencia, como en el caso de Corea del Sur o Taiwán, siempre que se cumplan condiciones muy precisas, que allá se buscaron y aquí ni se intentan” (Sunkel en Treviño, 2006).

De tal modo que las reformas agrarias representaron un componente en una visión de tipo keynesiana en la que el desarrollo podía ser impulsado por el Estado, por su gasto público, por su capacidad de alianzas económicas e, incluso, por su capacidad de actuar como factor productivo en inversiones de alto riesgo.

Se trata de una visión estructural, en el sentido de que incorporaba a la idea de desarrollo una visión integradora de los componentes del proceso productivo desde lo nacional hasta lo geopolítico.

En efecto, Prebisch y la CEPAL veían la necesidad de aprovechar los excedentes que producían los países latinoamericanos durante la contracción de los centros, para proteger sus sociedades ante venideros momentos de expansión. De esa forma las economías periféricas y centrales funcionaban en una suerte de simbiosis empujada por la naturaleza del mercado.

“Surgió entonces el concepto de centros. De un centro dinámico principal, que trasmite sus impulsos a una periferia. Impulsos de expansión cíclica seguidos periódicamente de movimientos de contracción. A los centros correspondía un papel activo, a la periferia un papel pasivo en estos movimientos ondulatorios de la economía, si bien la reacción periférica en la fase descendente del ciclo, contribuía a la recuperación de la actividad de los centros, dando lugar a nuevos impulsos”. (Prebisch, 1981).

En palabras de Raúl Prebisch, uno de los más importantes fundadores de la CEPAL, no había más alternativa que el optimismo:

“Difícilmente pudo haberse imaginado hace algunos decenios el impulso notable de la industrialización, la capacidad, iniciativa y empuje de muchos empresarios y las crecientes aptitudes de la fuerza de trabajo. Se han alcanzado elevadas tasas de desarrollo y se está aprendiendo a exportar manufacturas contra obstáculos internos y externos que antes parecían muy difíciles de superar. Y está penetrando el progreso técnico donde tardaba en llegar, especialmente en la agricultura tradicional” (Prebisch, 1981).

Sin embargo, una evaluación posterior indicará que tal redistribución no se vio acompañada de un crecimiento endógeno de las fuerzas productivas, como lo esperaba el espíritu keynesiano que residía detrás de la reforma agraria (Kay, 1998).

El nuevo diagnóstico era sociológico: el crecimiento de las fuerzas productivas no provocaba una mejor distribución de las riquezas en la sociedad, y América Latina se hizo aún mucho más desigual.

“(…) pero el desarrollo se ha extraviado desde el punto de

vista social y gran parte de esas energías vitales del sistema se malogran para el bienestar colectivo (...) Aquella distribución tan inequitativa de los frutos del desarrollo se debe primordialmente a la apropiación por los estratos superiores de la estructura social de una parte considerable del fruto del progreso técnico en forma de excedente económico (...) La acumulación de capital se vuelve insuficiente frente al extraordinario aumento de la fuerza de trabajo. El sistema tiende así a excluir grandes masas que quedan vegetando en el fondo de la estructura social” (Prebisch, 1981).

El optimismo del desarrollismo cepalino inspirado de los años 30 no lograba dar respuesta a los problemas de los años 50-60. Los diagnósticos entonces tendieron a encontrar otro tipo de causas estructurales y, con ello, a la redefinición de la idea de estructura económica.

Algunos autores cepalinos radicalizaron sus percepciones. Tal es el caso del propio Prebisch quien aunque, a diferencia de los autores de la teoría de la dependencia jamás se compromete con salidas fuera del modelo, indica problemas en el capitalismo como modelo económico por razón de su naturaleza no democrática.

“El capitalismo periférico se basa fundamentalmente en la desigualdad. Y la desigualdad tiene su origen, como decíamos, en la apropiación del excedente económico que captan principalmente quienes concretan la mayor parte de los medios productivos” (Prebisch, 1981).

Otros como Ocampo defienden que éste no es solo un problema de la estructura social y la democracia, sino de un persistente y estructural *décalage* relativo a la manera cómo se apropian las sociedades del centro y la periferia de la tecnología:

“La persistencia e incluso acentuación de estas desigualdades se han producido a pesar del impresionante proceso de industrialización registrado en los países en desarrollo durante la última mitad del siglo XX (e incluso más temprano en América Latina) (...) Existe un alto grado de concentración de progreso técnico en los países centrales lo cual determinó sus fuentes de competitividad; ellos han continuado dominando el mundo en la producción de maquinaria y equipos, y también lo predominan en el montaje de grandes

corporaciones transnacionales (...) Dentro del contexto del 'target móvil' representado por la frontera tecnológica mundial, solo pocos países –y pocos sectores y empresas entre ellos- manejan la posibilidad de moverse más rápidamente y así reducir su desfase tecnológico; muchos otros solo manejan más o menos mantenerse con el avance de la frontera y algunos de ellos caen” (Ocampo, 2001).

En el mes de julio de 1979, la FAO impulsó la Conferencia Mundial sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural (CMRADR). Ya entonces la mayor parte de las reformas agrarias de los años sesenta habían perdido su impulso inicial o habían dejado de aplicarse. En algunos casos la situación se había revertido a sus situación original (Alegrett, 2009).

La crisis de la reforma agraria había sido estudiada junto a la crisis general del desarrollismo desde los años 50 por los teóricos de la dependencia.

De ellos se desprende lo que esta tesis denomina la “segunda lectura”, la cual supone que las bases estructurales comunes al movimiento agrarista latinoamericano están realmente supeditadas a la estructura geopolítica en la que se inscriben relaciones mundiales de acumulación.

Pero, a diferencia del desarrollismo que acompañó a las reformas agrarias, esta estructura geopolítica no depende de las condiciones originales en las que se establecieron las estrategias productivas, sino de las estrategias políticas. La estrategia política que organizó la geopolítica y las relaciones centro-periferia, indicaría y asignaría roles que son necesarios para la estabilidad de la acumulación capitalista mundial.

2.2. La contribución de la teoría de la dependencia a la idea de la alimentación como fuente de soberanía.

A pesar de que la teoría de la dependencia es una respuesta a la crisis de las teorías del desarrollo, es posible decir que muchos de sus principios ya se encuentran en el pensamiento popular de las

revoluciones agrarias latinoamericanas, así como en los orígenes del marxismo agrarista latinoamericano¹.

La guerra federal venezolana, formalmente iniciada en la Batalla de Santa Inés en 1859 hasta el Tratado de Coche en 1863, casi 50 años anterior a la mexicana, había sido hasta entonces la guerra más sangrienta de la historia latinoamericana luego de la independencia.

En ella se expresaban las necesidades la población en recuperar las banderas sociales traicionadas luego de la guerra de independencia, y por las cuales los campesinos y esclavos habían salido a ofrendar sus vidas.

El entonces joven Ezequiel Zamora se hizo eco de la causa social más vulnerable, en la palestra del partido liberal venezolano. Allí se opuso a la manera como los *godos* o conservadores se habían hecho de las tierras, a cuya sombra se había levantado una prominente élite comercial. Los *godos*, representados por el antiguo general bolivarista José Antonio Páez, eran percibidos como una consecuencia de la traición a los principios sociales y agraristas de la independencia en la imagen utopista de Bolívar.

El descenso de los precios del café había empobrecido aún más a la población, en un 80% rural, generando descontento político y social. Los liberales parecían representar este descontento, por lo que muchos campesinos y los esclavos eran regularmente perseguidos y escarmentados públicamente con el objetivo de sofocar sus demandas (Brito Figueroa, 1994: 10-20).

¹ El anecdotario de la revolución mexicana puede ser ilustrativo en este respecto. Pancho Villa y Emiliano Zapata se encontraron en Xochimilco por primera vez en 1914. Ambos jefes rebeldes acababan de controlar el Norte y el Sur de México respectivamente y estaban dispuestos a entregar el poder a la Revolución naciente. Allí conversan:

“Francisco Villa: *Nuestro pueblo nunca ha tenido justicia, ni siquiera libertad. Todos los terrenos principales los tienen los ricos, y él, el pobrecito encuerado, trabajando de sol a sol. Yo creo que en lo sucesivo va a ser otra vida, y si no, no dejamos esos máusers que tenemos. Yo aquí juntito a la capital, tengo cuarenta mil mausseritos y unos setenta y siete cañones y unos...*

Emiliano Zapata: *Está bueno.*

Francisco Villa: *...dieciséis millones de cartuchos, aparte del equipo... (...) Mis ilusiones son que se repartan los terrenos de los riquitos... Dios me perdone ¿no habrá por aquí alguno?”* (Garcíadiego, 2010:399).

Las proclamas de Zamora indican un diagnóstico que solo puede resolverse sacudiendo la estructura de dominación socio-económica:

“Dios hizo iguales a todos los hombres en cuerpo y alma ¿Por qué entonces un puñado de ladrones y facciosos van a vivir del trabajo de los pobres, especialmente de quienes tienen el pellejo negro? (...) Cuando Dios hizo el mundo repartió en común el agua, el sol, la tierra ¿por qué entonces los godos se han apoderado de las mejores tierras, bosques y aguas, que son propiedad del pueblo?” (Zamora en Brito Figueroa, 1994:21)

El programa de la Sociedad Liberal de Villa de Cura, probablemente de 1846, el cual será el programa mismo de la revolución federal, es simple pero teóricamente muy denso: “1) Comunidad de las tierras; 2) Hombres libres; 3) Elección popular y principio alternativo; 4) Horror a la oligarquía” (Brito Figueroa, 1994:22).

La densidad de su pensamiento consiste en que el tema reivindicativo, tal como sucedió en todas las revoluciones agrarias latinoamericanas del siglo XX, se acompañaba de un programa igualitario, democrático y de inspiración pre-socialista o comunera. La redistribución de las tierras solo tenía sentido en la transformación del modelo político hacia la democracia y del modo de producción hacia alguna forma de socialismo primitivo o comunero.

Es por este sentido que el pensamiento zamorano y su propia figura hacen parte de la iconografía bolivariana y del SSSA, 160 años después: la Misión Zamora (encargada de coordinar la llamada Ley de Tierras), los fundos zamoranos (cooperativas socialistas de producción agrícola), el complejo azucarero Ezequiel Zamora (Empresa azucarera de producción socialista emblemática del sistema), el Fondo Zamorano (base pública y provada de inversión de la Gran Misión Agro-Venezuela en el 2012), etc.

Ezequiel Zamora forma parte del campo ideológico e imaginario simbólico que sostiene el Sistema Socialista de Soberanía Alimentaria venezolano. De hecho, en la fundación del primer partido bolivariano, el MBR-200, creado luego del intento del golpe de Estado de 1992, ya se reconoce una raíz zamorana como símbolo de la redemocratización del país (Biardeau, 2009: 68).

Sin embargo, realmente, no será hasta el pensamiento de José Carlos Mariátegui en los años 20 del siglo XX, que la idea de revolución

agraria se asociará con la generación de una nueva modernidad, el socialismo.

Mariátegui fue un importante estadista y escritor peruano que se deslinda del partido nacionalista APRA, entonces conducido por su fundador Haya de la Torre. Esta división se presenta como un giro a favor la tradición de las revoluciones agrarias, en abierta simpatía con la Revolución china y el maoísmo (Quijano, 2007:XCII-CXII).

A partir de ello, denuncia el papel socialdemócrata del APRA al creer que una transformación es posible en alianza, aunque sea circunstancial, con las oligarquías feudales peruanas.

“¿Los intereses del capitalismo imperialista coinciden necesaria y fatalmente en nuestros países con los intereses feudales y semi-feudales de la clase terrateniente? ¿La lucha contra la feudalidad se identifica forzada y completamente con la lucha antiimperialista?”(...)“El capital financiero se sentirá más seguro, si el poder está en manos de la clase más numerosa, que satisfaciendo ciertas reivindicaciones apremiosas y estorbando la orientación clasista de las masas, está en mejores condiciones que la vieja y odiada clase feudal de defender los intereses del capitalismo, de ser su custodio y su ujier” (Mariátegui, 2007[1928]: 152-153).

Como si respondiese al auge de las reformas agrarias desde los 40 hasta el principio de lo 70 en América Latina y de modo similar a como lo harán los teóricos de la teoría de la dependencia desde los años 60, Mariátegui denuncia que las transnacionales no solo son una referencia de nueva industrialización. Las transnacionales representan los actores protagónicos de relaciones geopolíticas de dominación sobre las que se sostiene la acumulación mundial y sobre la cual, a su vez, se sostiene el propio capitalismo.

Del mismo modo que se ha indicado que la reforma agraria es una suerte de desarrollismo keynesiano antes de Keynes, Mariátegui adelanta aspectos de una teoría de la dependencia antes de la teoría de la dependencia. Mariátegui responde a la reforma agraria antes de que ésta se produzca.

“... ese movimiento de liquidación de la feudalidad, coincide con las exigencias del crecimiento capitalista, promovido por las inversiones y los técnicos del imperialismo: que

desaparezcan los grandes latifundios, que en su lugar se constituya una economía agraria basada en lo que la demagogia burguesa llama la ‘democratización’ de la propiedad del suelo, que los viejos aristócratas se vean desplazados por una burguesía y una pequeña burguesía más poderosa e influyente –y por lo mismo más apta para garantizar la paz social– nada de esto es contrario a los intereses del imperialismo” (Mariátegui, 2007[1928]: 153).

Al reflexionar sobre el carácter de las revoluciones agrarias en América Latina, Mariátegui quizás contribuye de manera más significativa cuando identifica que en la práctica todas ellas son partes de un mismo proyecto democrático y civilizatorio, el socialismo, tal como se le entendía en los primeros años del siglo XX.

“La misma palabra Revolución, en esta América de las pequeñas revoluciones, se presta bastante al equívoco. Tenemos que reivindicarla rigurosa e intransigentemente. Tenemos que restituírle su sentido estricto y cabal. La revolución latinoamericana, será, nada más y nada menos, que una etapa, una fase de la revolución mundial. Será simple y puramente, la revolución socialista. A esta palabra se puede agregar, según los casos, todos los adjetivos que queráis: ‘anti-imperialista’, ‘agrarista’, ‘nacionalista-revolucionaria’. El socialismo los supone, los antecede, los abarca a todos” (Mariátegui, 2007[1928]: 157-158).

Tal revolución se desarrollaría desde las fuerzas de su cultura nativa, pero no se desentiende de los avances de civilización moderna, o más bien, debe desbordarlos.

“... el estímulo que se preste al libre resurgimiento del pueblo indígena, a la manifestación creadora de sus fuerzas y espíritu nativos, no significa en lo absoluto una romántica y antihistórica tendencia de reconstrucción o resurrección del socialismo incaico... El socialismo presupone la técnica, la ciencia, la etapa capitalistas; y no puede importar el menor retroceso en la adquisición de las conquistas de la civilización moderna, sino por lo contrario la máxima y metódica aceleración de la incorporación de esas conquistas en la vida nacional” (Mariátegui, 2007[1928]: 170).

De tal modo que Mariátegui crea las bases del pensamiento revolucionario agrarista y moderno en América Latina. Es la primera respuesta moderna al desarrollismo y a la reforma agraria. Mariátegui denuncia la visión “internista” que la teoría de la dependencia denunciará del desarrollismo cepalino, una visión que sería incapaz de reconocer a futuro las fuerzas sociales que están por constituirse en el mundo.

60 años después, Antonio García identifica el problema agrario de este modo:

“El problema agrario es solo la expresión y el componente de un cuadro de perspectiva: de una parte, en relación con la manera como funciona en su conjunto la estructura agraria (visión interna); y de otra, en relación con la manera como se adecúa esa estructura –en cada uno de los ciclos históricos- a las exigencias, mediatas o inmediatas, del modelo global de crecimiento económico tal como ha funcionado en la historia latinoamericana” (García, 1985: 29).

La reforma agraria, por tanto, será el reflejo de esta visión “internista” que haría imposible reconocer la verdadera naturaleza del problema y por tanto, la posibilidad de superarlo:

De ahí el error óptico de limitar el problema agrario a unos ciertos componentes de la estructura (tenencia de la tierra, sistemas de uso y explotación, relaciones sociales, articulación de la economía de transformación manufacturera y de mercado, mecanismos de acceso al aparato estatal) o a unos ciertos ciclos históricos, por importantes que sean (...) Resulta elemental precisar la existencia de diversos problemas agrarios en América Latina encuadrados, históricamente, dentro de grandes ciclos de colonialismo, la hegemonía extranjera y la dominación social y política” (García, 1985: 29).

Los aspectos introducidos por la teoría de la dependencia confieren al problema agrario una perspectiva más global, y sobre todo, no solo definida por las capacidades de competir que tengan los subsistemas económicos. Se entiende que, a diferencia de Prebisch, el papel de la dependencia no es solo el de la dependencia económica, entendida como dependencia tecnológica y de consumo, sino económico en

términos de juego global en el que participa la periferia para mantener el orden de la acumulación mundial.

La evolución política de la América Latina de los 70, reflejo del papel jugado por la periferia en la crisis mundial, puso en entredicho el optimismo cepalino, incluso en el mismo Prebisch.

América Latina había sido, anteriormente como entonces, escenario de invasiones, intervenciones militares y gobiernos de facto en la órbita de los Estados Unidos, todos al servicio de la estabilidad del capital internacional. La presencia neo-colonial era un hecho latente. Los niveles de desigualdad y pobreza en entornos rurales y urbanos eran crecientes. El auge modernista, entendido como el proyecto de la modernidad, no se correspondía con el bienestar social prometido (García Canclini, 1985) y los objetivos de la industrialización regional no parecían continuarse con éxito (Prebisch, 1981).

Al contrario de lo que sucedió en los años 30, la llamada crisis de los años 60 se acompañaba del hecho de que las economías domésticas periféricas volvían a sucumbir ante el avasallamiento de las empresas y finanzas internacionales, y tales procesos hacían urgente nuevas estrategias en el mundo de lo político.

Por todo ello, en muchos países de América Latina se debatieron a grandes rasgos tres formas de resistencia: los nacionalismos (buscando readaptar el papel de las burguesías locales y refundar a diferentes escalas la industrialización), el socialismo por tránsito pacífico (buscando sustituir el rol de la burguesía por el poder de “las masas” mediante transiciones democráticas y el juego institucional) y el socialismo por vía armada (buscando redireccionar la propiedad sobre los medios de producción a través de la acción directa del Estado tomado).

La historia de América Latina en todo este período participó de manera activa en los imaginarios políticos de la teoría de la dependencia, así como en las tres formas de resistencia mencionados. Mucha de la aproximación al historia latinoamericana hecha por la vía de la historia de sus resistencias, serán cimientos del proceso bolivariano en su ideología e imaginario (Calzadilla, 2010). Algunos ejemplos: en Colombia fue asesinado Jorge Eliézer Gaitán en 1948, luego de enfrentarse a la aristocracia y a las trasnacionales. En el mismo año fue derrocado Rómulo Gallegos en Venezuela, quien había dirigido una revolución socialdemócrata y anti-imperialista. En Guatemala fue

derrocado Jacobo Arbenz en 1954, luego de dos años de una tímida Reforma Agraria que se vió en la obligación de tocar la propiedad transnacional de las tierras. La derrota del peronismo y su consiguiente represión en 1955, convirtió al nacionalismo popular argentino en un fantasma indisoluble del espectro político hasta el siglo XXI. La revolución socialista tuvo éxito en Cuba en 1959 y reforzó su tendencia pro-soviética junto al PCC en 1964, luego de superar la etapa nacionalista del Partido Ortodoxo de Chibás y el M26J. Cuba adelantó una revolución agraria, la primera revolución moderna de ese tipo, que sirvió de ejemplo al movimiento agrario latinoamericano. Juan Bosch vio entrar en su país las tropas norteamericanas en 1965, luego de haber ganado la presidencia de República Dominicana con el apoyo del Partido Comunista.

Mención especial merece el caso del presidente socialcristiano Eduardo Frei, quien impulsó una reforma agraria en Chile. Según Kay (Kay, 1998) la reforma fue percibida socialmente como exitosa por lo que, a la victoria electoral de la Unidad Popular chilena, se radicalizó el proceso de expropiación, asignación de tierras y recursos para el desarrollo agrario (Kay, 1998). La Unidad Popular chilena junto a sus pares del Frente Amplio uruguayo, fueron las primeras irrupciones electorales del socialismo, pero fueron reprimidas por dos largas dictaduras en 1973, auspiciadas por los EEUU.

Sin embargo, la dictadura chilena no revirtió los avances más importantes de la reforma agraria socialcristiana-socialista, convirtiéndose en la base del fenómeno agrícola chileno de hoy (Kay, 1998).

Pareciera que el momento político que caracterizó a la teoría de la dependencia (guerra fría, movimientos revolucionarios, avance de los mercados transnacionales, luchas nacionalistas...) no dejaba espacio para otros tipos de diagnósticos. Las reformas y las revoluciones agrarias se enmarcaban en las tendencias geopolítica fundamentales de los 60 y los 70, incluyendo los apoyos tácitos y explícitos de las revoluciones china y soviética.

En este contexto prosperó la obra de André Gunder Frank, Theotonio Dos Santos, Juan Carlos Portantiero, Fernando Henrique Cardoso y Enzo Faletto, entre otros, como *teóricos de la dependencia*.

Theotonio Dos Santos, autor del libro "La teoría de la dependencia:

balance y perspectiva”, dio particular relevancia al economista André Gunder Frank en tanto representante de la Teoría de la Dependencia².

Gunder Frank indicó que la génesis de América Latina estaba determinada por su rol en el mercado capitalista.

“América Latina fue conquistada y su pueblo colonizado por la metrópoli europea para expropiar el excedente económico de los trabajadores del satélite y apropiárselo para su acumulación de capital, iniciando con ello el presente subdesarrollo del satélite y el desarrollo económico de la metrópoli. La relación capitalista metrópoli-satélite entre Europa y América Latina fue establecida por la fuerza de las armas. Y por esta misma fuerza, así como por la fuerza de la creciente vinculación económica y de otro tipo, se ha mantenido esta relación hasta hoy. Las principales transformaciones ocurridas en América Latina en los cuatro últimos siglos han sido producto de sus respuestas a las influencias económicas, políticas y otras que, o bien partieron de la metrópoli, o bien surgieron de la estructura metrópoli-satélite. Excepto en la Cuba post-revolucionaria, todos estos cambios no han alterado las esencias de esa estructura” (Frank, 1967).

Ello haría imposible superar el subdesarrollo por la vía de reafirmar el mismo sistema que subdesarrolló a la región:

“La conquista española incorporó e integró de lleno a Chile en el expansivo sistema capitalista mercantil del siglo XVI. Las contradicciones del capitalismo han engendrado un subdesarrollo estructural en Chile desde que éste comenzó a participar en el desarrollo de ese sistema universal. Contrariamente a la tan difundida opinión, el subdesarrollo de Chile y de otros países no es un atado de costes original o tradicional, ni una etapa histórica del crecimiento económico por la cual han pasado los países capitalistas hoy desarrollados. Antes bien, el subdesarrollo de Chile y de otros

² Aún más, Dos Santos lo considera el más importante economista de este tiempo: “¿Quién es el economista más citado y discutido en el mundo? No pierda su tiempo buscando entre los premios Nóbel y otros muy promovidos en la gran prensa. André(...)Gunder Frank es de lejos el más citado y el más discutido en el mundo como revelan varios estudios sobre el tema” (Dos Santos, 2010).

países, no menos que el desarrollo económico mismo, vino a ser a lo largo de los siglos el producto necesario del proceso, plagado de contradicciones, del desarrollo capitalista. Este mismo proceso continúa engendrando subdesarrollo en Chile, y este subdesarrollo no puede ser ni será eliminado con más desarrollo capitalista. En consecuencia, el subdesarrollo estructural continuará siendo engendrado y profundizado en Chile hasta que los chilenos mismos se liberen del capitalismo” (Frank, 1967).

De tal modo que no habría salida a los problemas estructurales en América Latina mientras se siga apostando por el modelo reformista. Nótese que la idea de *estructura* es profundamente diferente a la Prebischeana, la primera habla de la estructuras económica y política que da cuerpo al modo de producción, es un sinónimo de “sistema” con el agravante del matiz de rigidez, y la segunda refiere a un sistema de relaciones más o menos estables entre economía, Estado, cultura, geografía y tecnología. La experiencia comprobaría repetidas veces esa especie de callejón sin salida derivado de la dependencia:

“El aplastante peso de la realidad histórica objetiva sobre las buenas intenciones subjetivas, fue confirmado plenamente por el propio Arturo Frondizi cuando, como Presidente de Argentina que había sido elegido sobre la plataforma expuesta, sucumbió a esta situación de captura económica, política y psicológica creada por el imperialismo, renunció a las posibilidades nacionales de Argentina, y pasó a la historia como el hombre que entrega a los monopolios norteamericanos todo el petróleo de su país y la mayor parte de lo que restaba de su economía. Por su parte”... “Octavian Campos Sulas, ministro de industria del actual gobierno de México, ahora otorga al capital monopolista norteamericano las concesiones que una vez llamara ‘ilimitadas y excesivas’ y reside —como lo observó entonces— sobre ‘el progreso y permanente apoderamiento por parte de la metrópoli de importantes sectores de la actividad económica, lo que impide la formación de capitales domésticos’ (Frank, 1967).

Por otra parte, para la periferia, tanto las posibilidades de crecimiento económico como de una economía dirigida a las mayorías y no al crecimiento del capital a espaldas del trabajo, tuvieron en la experiencia socialista conocida en la órbita de la URSS un ejemplo.

En la obra de Gunder Frank, como de todos los teóricos de la dependencia, la alimentación, como lo fue en la guerra federal y en la revolución mexicana, adquirió la connotación de *pan* en la simbología política agrarista, esto es, que la alimentación no es solo un rubro de la economía (en proceso de reforma estructural), sino que es una señal de independencia y de soberanía: solo es libre el que come y que se garantiza su comida. Si el sistema impide la comida, el sistema es entonces opresor, y éste se convierte en la causa del problema:

“Dejando a un lado la propaganda y los buenos deseos, la tendencia real del aumento y descenso inicial del producto nacional bruto *per capita* (y del ingreso nacional *per capita*) en América Latina es: 1950 - 1955: 2.2% (1,9% de aumento); 1955-1960: 1,7% (1,4% de aumento); 1961-1962: 0,8 % (0,0% de aumento); 1962-1963: menos 1.0% (menos 0,8%), esto es, una baja absoluta (Naciones Unidas, CEPAL, 1964h: 6) (...) En tanto que desde antes de la segunda guerra mundial la producción *per capita* de alimentos se elevó en un 12% en el mundo entero hasta 1963-1964, y un 45% en la Unión Soviética y Europa oriental (cuyos fracasos agrícolas son conocidos universalmente), la producción latinoamericana de alimentos *per capita* descendió un 7% y su distribución entre el pueblo es cada día más desigual: el nivel absoluto de vida de la mayoría de los latinoamericanos está descendiendo (...) Para el pueblo latinoamericano la única salida del subdesarrollo es, se entiende, la revolución armada y la construcción del socialismo” (Frank, 1967).

Es importante matizar que no todos los autores de la teoría de la dependencia derivaron en la revolución socialista armada como solución. Incluso hay hoy una autora anglosajona, Terry Lynn Karl (Karl, 1997) que se autodefine como defensora de la teoría de la dependencia, postulando al mismo tiempo tesis anti-estatales y neo-neoliberales.

Lo que define centralmente a estos autores como “de la dependencia” es que asignan al sistema mundial de acumulación un peso radical en las posibilidades de los países subdesarrollados o periféricos en superar sus condiciones.

La teoría de la dependencia evolucionó de muchas formas. Sus

postulados económicos sirvieron de base a las teorías sobre Estado periférico (Frank, Portantiero, Ipola, Rubinstein, O'Donnell, Palacios Romeo, Coronil, Cardoso, Quijano, Amín...), inspiraron reflexiones sobre el papel del conocimiento y las desigualdades epistémicas (Fanon, Mignolo, Santos, Hinkelammert, Coronil...), e inspiraron la comprensión del capitalismo como parte de ciclos históricos de más larga data (Arrighi, Bachi, Amín, Sader, Wallerstein, Martins...).

2.3. El desdibujamiento de la alimentación como instrumento de soberanía durante el neoliberalismo.

Las reformas agrarias que se impulsaron en América Latina partían de la idea de que la productividad de la tierra se incrementaría más fácilmente por la vía de la redistribución que haciendo inversiones onerosas en tecnología, las cuales además, tenderían a reducir el peso del trabajo en la operación económica. Las reformas agrarias suponían que el aumento de la productividad se revertiría de manera más favorable a los estratos sociales más vulnerables, que si se hubiera hecho énfasis simplemente en la tecnología moderna (Kay, 1998).

Sin embargo, las ganancias por distribución de ingresos generadas por las reformas agrarias fueron, en general, menores a las previstas. Sin duda que la distribución de riquezas fue mayor cuando la redistribución de tierras fue mayor, en la medida en que accedían a las reformas mayor número de trabajadores, y en la medida en que la compensación estatal por estas expropiaciones o cesiones fue menor, de modo que los recursos dispuestos por un Estado para acometer la eliminación del latifundio y la distribución de recursos productivos comprometiesen menos las cuentas futuras de la nación. También el efecto de distribución de riquezas fue mayor si una inversión distributiva mayor en la población implicaba también inversiones en infraestructura, salud, educación, entre otras (Figuerola 1977 en Kay, 1998).

Sin embargo, a pesar de que las reformas tenían como fin principal el desarrollo de las potencialidades agrícolas y sociales en el mercado, en términos generales, no lograron aumentar la capacidad productiva del sector.

“El impacto inicial positivo de la redistribución de muchas de las reformas agrarias en América Latina fueron a menudo anuladas por el pobre rendimiento del sector reformado

(sea colectivo o privado) así como por factores macroeconómicos, tales como los términos desfavorables de intercambio en el mercado externo. Si la agricultura y la economía se estancaban, solo se podía redistribuir la pobreza” (Kay 1998).

Los problemas de producción eran enfrentados por el sector a lo interno de economías crecientemente endeudadas, sus pocas ganancias fueron erodadas por el sistema financiero, las devaluaciones, los impuestos, la inflación, entre otras formas de disipación de las riquezas en tiempos de crisis.

El resultado fue que, a pesar de la inversión y las redistribuciones, se produjo un estancamiento de la situación de pobreza en los años 80 asociada al estancamiento del campo, y luego, a la sombra del nuevo paradigma neoliberal, se produjo un aumento de la pobreza rural en toda la región del 28 al 31% y del 45% a cifras superiores del 50% durante los años 90 (en Kay, 1998 a partir de Feres y Leon, 1990, Altimir, 1994 y The Economist 1993).

El primer diagnóstico, relativo a la poca productividad de las reformas agrarias en la región sirvió de justificación a cambios paradigmáticos en las políticas públicas agrarias hacia el neoliberalismo.

El segundo diagnóstico, relativo al estancamiento y luego aumento de la pobreza, fue el resultado de la aplicación de las políticas neoliberales en la región en los 80 y los 90.

El neoliberalismo constituyó, pues, el fin de las reformas agrarias en América Latina y la contención de toda política de redistribución social de los recursos productivos agrarios, tal como se habían conocido desde la guerra federal venezolana en 1859 hasta la segunda mitad de los años 80 del siglo XX.

Las políticas neoliberales adoptadas por los Estados a mediados de los 80, formalmente, respondían a las recetas de los grandes organismos financieros mundiales para evitar impagos en los países periféricos. Sin embargo, también suponían toda una transformación profunda del modelo económico.

Esta transformación del modelo tocaba toda la relación entre Estado, economía y sociedad.

Cavarozzi lo entendía como el paso de la matriz *estadocéntrica*, la cual suponía la mediación y regulación entre los diferentes intereses de la

nación, así como sus productos propios como el clientelismo, el corporatismo, el populismo como estilo de gobierno... a la matriz *mercadocéntrica*, esto es, la extensión de la lógica del mercado a las relaciones sociales, favoreciendo a las sublógicas de la competencia, el rendimiento y el papel emprendedor de los individuos.

Para transformar una matriz en otra se requería la desregulación estatal y con ésta, el desplazamiento del poder político estatal a los individuos en condiciones teóricamente similares de competencia (Cavarozzi en Sottoli, 2000).

La transformación de la matriz *estadocéntrica* a la *mercadocéntrica*, supondría que, frente a la ineficiencia del Estado en generar un sector agrícola productivo y rentable, el sector privado, ahora capacitado políticamente en actuar por sus propios intereses, reconquistaría el mercado, la productividad, generaría prosperidad económica en su entorno y, con ello, se reduciría a mediano y largo plazo la pobreza.

La tierra y con ella, la alimentación, dejaban de ser un objetivo en sí mismo, o en una suerte cimiento social y estratégico de la sociedad (García, 1985) y se convertían en otros rubros del mercado. Para tal objetivo las políticas sociales alimentarias, junto a las demás, pasaron de ser interpretadas como derechos sociales a ser políticas de compensación, y solo tendrían sentido en la medida en que reactivaran al sujeto en cuanto capital productivo de una nación. Para lo cual se desarrolló la idea de capital social:

“Se trataba por sobre todo de respetar los equilibrios macroeconómicos, lo cual se convertiría así en principio regulador de las decisiones sobre el gasto social estatal. A ello se añadía la idea de que los gastos sociales del Estado deberían ser entendidos como una inversión eficiente y redituable destinada a la formación de capital humano. Estableciendo una clara conexión programática entre la nueva política social y la economía de mercado, comenzó a enfatizarse que el capital humano debería reforzar la relación positiva entre educación, salud, nutrición por un lado y el crecimiento económico y la productividad por el otro” (Sottoli, 2000:7)

Según Sottoli, Venezuela formó parte de los países donde se implementaron reformas neoliberales progresivas y de progreso limitado (Sottoli, 2000:12).

En efecto, el anuncio de las medidas neoliberales al arribo del segundo mandato del presidente Carlos Andrés Pérez en 1989 presentado como el Programa de Ajustes Estructurales (conocido en Venezuela popularmente como “el paquete”), generó una convulsión política que, en la práctica, impidió su aplicación plena. Sin embargo, el país siguió a la deriva en cuanto a respuestas políticas frente al impago a la banca mundial, la recesión periférica y las incapacidades del sector agrícola venezolano de despuntar por sí mismo ante la persistente caída de los precios petroleros y de las reservas internacionales.

A pesar de todo esto, la no aplicación explícita de medidas neoliberales también favoreció la ejecución de reformas neoliberales durante el período siguiente, conocido como la *Convergencia* (1994-1999). Por ejemplo, en el informe que presenta la primera directiva de las empresas básicas de Guayana (siderúrgica, extracción de hierro y bauxita, procesamiento de aluminio primario, entre otros), así como en las declaraciones de los Trabajadores-Presidentes del complejo industrial, las evidencias de la desinversión persistente sobre las industrias desde 1989 hasta el 1999 (incluso, hasta más allá de la primera directiva de la V República, en el 2005) deterioraba el precio de la empresa para hacer más competitiva su privatización en el mercado internacional.

Según sus trabajadores, reinvertir en la empresa hubiera sido la demostración de que el interés del Estado era seguir participando como agente accionario. Pero esto no fue así (Sayago, Ganlush, Sabbad y demás Trabajadores-Presidentes, 2010).

Si bien, producto la convulsión política generada por las condiciones sociales y el anuncio de “el paquete”, el carácter neoliberal de la ejecución de las políticas durante el segundo gobierno de Pérez podría ser opaco (no así sus intenciones públicas), durante el período de la *Convergencia* se creó la Agenda Venezuela, con el objetivo de ordenar los temas en los que Venezuela debía acatar las directrices generales del Fondo Monetario Internacional, y sacar provecho de la desinversión pública durante el tiempo de Pérez.

Luego de la crisis bancaria de 1994, el presidente Caldera ordenó al ex-guerrillero comunista Teodoro Petkoff encargarse de la aplicación de las medidas neoliberales a través de la elaboración de esta Agenda. Fundamentalmente ella tocaba lo concerniente a la liberación de los precios del carburante, de los servicios públicos, reforma fiscal, devaluación por bandas y un plan de privatización de la infraestructura

productiva estatal fundamental del país, el cual, hasta ese momento, no incluía aún a los hidrocarburos (Petkoff, 1997).

Si bien el país presentó un deterioro progresivo de la seguridad alimentaria desde los años 80, este proceso se aceleró en los últimos 10 años del siglo XX, correspondientes a estos dos gobiernos de orientación neoliberal. Disminuyó la disponibilidad energética promedio por habitante de 1989 a 1993 (Gutiérrez, Ablan y Abreu, 1995 en Anido 2002). La inflación y la devaluación redujeron el poder de compra internacional (PCA) en un 95% desde 1975 hasta 1995, del cual casi una cuarta parte cae solamente de 1980 a 1995, años asociados a las reformas neoliberales (Anido, 2002), todo lo cual fue particularmente grave si se considera la dependencia de la estructura económica alimentaria de las importaciones.

Y finalmente, fue un período claramente asociable a mayores niveles de desigualdad: de 1988 a 1998, a pesar de los programas llamados compensatorios de los ajustes neoliberales, el 50% más pobre del país recibió entre un 0,20% y un 1,20% menos ingresos del PIB. Esta diferencia del PIB, esto es, lo que dejó de ingresar en la mitad más pobre del país, se desplazó casi en su totalidad al penúltimo decil más rico, el cual acumuló además, entre un 71 y un 72% del ingreso nacional (Baptista, 2001).

Sin embargo no es posible entender el impacto del neoliberalismo en las políticas públicas alimentarias venezolanas sin un acercamiento sobre las condiciones que definieron y configuraron el Estado venezolano, concretamente en relación a la renta petrolera y la composición de los tejidos sociales políticos y productivos en su historia antes de los quince años de paradigma neoliberal.

3. La perspectiva geopolítica de la alimentación.

Las luchas por la alimentación pasaron de los problemas característicamente feudales de la redistribución de la tierra y la libertad de la fuerza de trabajo, al modelo de acumulación transnacional capitalista en el que la producción se organizó por empresas más tecnificadas (social y tecnológicamente) con el objetivo de satisfacer establemente una demanda internacional en movimiento proveniente de los países con mayor capacidad de compra y consumo.

La primera fase de este proceso consistió en la traducción de las estructuras productivas locales a las nuevas exigencias del mercado y

los nuevos recursos de explotación. Sin embargo, una vez estabilizadas las provisiones en el mercado, el propio mercado hizo más rentables las apuestas de portafolio que el propio beneficio orgánico-productivo. Esto significó un desplazamiento importante de capitales a sistemas de circulación y acumulación extra-productivos y al mismo tiempo, agregó un componente externo pero determinante en los precios de los alimentos y, consiguientemente, en el valor de la fuerza de trabajo en los países periféricos, sus monedas, sus posibilidades de crédito, etc.

Este fenómeno es denominado por algunos autores como la “financiarización” del mercado y se presenta como una de las características del paradigma neoliberal (Malinowitz, 2008; Gutiérrez y Albarracín, 2008; Huertas Vargas, 2011).

De tal modo que la relación entre la producción y la demanda se aliena progresivamente y las políticas públicas nacionales invertidas en el sector son más ineficientes, pues no llegan a afectar los nuevos concomitantes geopolíticos de la alimentación.

La geopolítica de la alimentación supone entonces tres dimensiones del problema alimentario:

a. La desigualdad en el acceso a los alimentos como consecuencia de las estructuras de acumulación locales vinculadas al latifundio o a la explotación de la tierra solo con fines de mantener la oferta en economías de puerto y el *status quo* local (García, 1985; Kay, 1998; Alegrett, 2003).

b. La desigualdad en el acceso a los alimentos como consecuencia de las estructuras de acumulación globales vinculadas a las transnacionales y el monopolio con el fin de mantener y hacer más eficiente la acumulación transnacional (García, 1985; Schejtman, 1999:16).

c. La desigualdad en el acceso a los alimentos como resultado de prácticas de acumulación extra-productivas que impactan los precios y otros factores en los subsistemas económicos donde se inscribe la producción (Gutiérrez y Albarracín, 2008; Malinowitz, 2008; 2010).

Entonces la alimentación, entendida como parte de sistemas mayores y determinantes de acumulación, pasa de ser un rubro del mercado internacional a ser también un *valor*, esto es, un componente representativo y proveedor de renta del mercado en general, y no solo del mercado de oferta y demanda de alimentos.

Así lo explican Navarro, Torres López y Garzón Espinosa en relación a la crisis de la economía global:

“Cuando los mercados financieros y el inmobiliario comenzaron a dar muestras de flaqueza y la inversión se hacía allí excesivamente peligrosa, los capitales especulativos (que no pueden parar ni dejar de ganar dinero ni por un minuto porque les pasa lo que a los ciclistas, que si se paran se caen) cambiaron de destino: de las hipotecas y productos financieros derivados de los inmobiliarios pasaron a los del petróleo y de productos alimenticios” (Navarro, Torres López y Garzón Espinosa, 2011: 26).

3.1. La seguridad alimentaria.

En 1996, dos años antes del primer triunfo electoral de Chávez, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, en sus siglas en inglés) consolidaba en la Declaración de Roma (FAO, 1996a) el concepto de “seguridad alimentaria”. El concepto de entonces fue luego actualizado en el 2010 manteniendo sus ideas básicas:

“Existe seguridad alimentaria cuando todas las personas en todas las épocas, tienen acceso físico, social y económico a comida suficiente, segura y nutritiva, que coincide con sus necesidades dietéticas y preferencias alimentarias para una vida saludable y activa. Seguridad alimentaria en el hogar es la aplicación de este concepto al nivel familiar, con individuos que son el foco de atención dentro de estos hogares” (FAO, 2010a).

La provisión de alimentos con el objetivo de disminuir el hambre (definida por la FAO como una cuenta por debajo de los mínimos niveles calóricos) de manera adecuada y segura, constituyó desde entonces un objetivo central de la Organización hacia las políticas públicas de los países del mundo (FAO, 2010).

En el “Plan de Acción de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación” realizado como parte de la “Declaración de Roma” (FAO, 1996) se anexan un sistema de 8 objetivos y sub-objetivos que definen la manera como se inscribe la seguridad alimentaria en el sistema político y económico desde lo local hasta lo global.

Grosso modo estos objetivos definen y revelan los factores que generan la inseguridad alimentaria y, por tanto, los aspectos que hay que intervenir para reducirla.

En primer lugar, se establecen objetivos políticos globales y locales que van desde la solidaridad internacional, la pacificación, la democracia, y los gobiernos transparentes y eficientes.

En relación a las estrategias del SSSA descritas en esta tesis, se subraya la importancia de la participación de las comunidades afectadas y la suma de iniciativas de todo tipo (públicas, privadas, individuales, colectivas...) en todos los niveles de decisión (Objetivos 1.1-1.4).

Luego se enfoca la inseguridad alimentaria como una consecuencia de la pobreza. Este enfoque genera el primer escenario medible: la seguridad alimentaria se logra aumentando el acceso de la alimentación *inocua* al sujeto familiar. Ello implica el aumento del ingreso por concepto de empleo y disminuir la vulnerabilidad social de la mujer (1.4-2.4).

Se entiende que la inseguridad se resuelve reduciendo la distancia entre productividad/eficiencia, tecnología/ciencia y nuevamente, participación/inclusión. El escenario de este proceso es el medio rural (2.4-3.5).

Posteriormente se produce un quiebre con la idea de *soberanía alimentaria*, tal como la describiremos en esta tesis en un próximo epígrafe: la estrategia para reducir estas distancias consisten en potenciar las capacidades del subsistema en entrar en el mercado, aumentar su Producto Interno Bruto Alimentario (PIBA), “considerando las fluctuaciones de los precios y suministros mundiales” a la vez que protegiendo a los grupos más vulnerables (3.5-4.5).

Luego, la seguridad es analizada como el producto de vicisitudes, como guerras o catástrofes naturales, para lo cual se habla del desarrollo de sistemas de socorro y disminución del peso de las deudas externas nacionales.

Ni el mercado ni los conflictos deben exceder en la frontera de la seguridad alimentaria. La sociedad en su conjunto debe proteger responsablemente esta frontera.

Dado el carácter político que ha alcanzado la alimentación en los interjuegos de dominación (y que Venezuela sufrió directamente

durante el paro petrolero-alimentario del 2002-2003 con el objetivo de derrocar a su presidente) la FAO y sus países miembros son claros en afirmar, en la Declaración de Roma:

“Los alimentos no deberían utilizarse como instrumento de presión política y económica. Reafirmamos la importancia de la cooperación y la solidaridad internacionales, así como la necesidad de abstenerse de aplicar medidas unilaterales que no estén en consonancia con el derecho internacional y con la Carta de las Naciones Unidas y pongan en peligro la seguridad alimentaria” (FAO, 1996a).

Generar seguridad alimentaria no supone la desaparición del mercado ni su desdibujamiento. El mercado, por el contrario, es una pieza de la voluntad política de la sociedad en su conjunto a través del cual es posible superar la inseguridad y la pobreza.

En el más reciente informe mundial sobre seguridad alimentaria los expertos de los tres organismos internacionales para la alimentación y la agricultura, concluyen que las políticas públicas más eficientes llevadas a cabo en estos años han sido, precisamente, aquellas que lograron ingresar en el mercado y dominarlo:

“Una estrategia de seguridad alimentaria que se basa en una combinación de incremento de la productividad agrícola, mayores políticas de predictibilidad y apertura general al intercambio serán más efectivas que otras estrategias. Políticas de intercambio restrictivas pueden proteger los precios domésticos de la volatilidad del mercado mundial, pero también pueden resultar en el incremento de la volatilidad de precios domésticos, como resultado de impactos a las provisiones domésticas, especialmente si las políticas gubernamentales son impredecibles y erráticas” (IFAD, WFP y FAO, 2011:16).

El mercado, sin embargo, tiene fronteras y debe retroceder ante ellas: los conflictos sociales, las catástrofes naturales, la ecología y los grupos sociales más vulnerables.

El mercado es percibido como un producto de la voluntad política de los pueblos, y debe por tanto ser regulado. Pero en él radicaría la capacidad de un subsistema en lograr seguridad alimentaria.

El SSSA es el reflejo aplicado de toda esta discusión. Allí se verán aspectos del papel que juega el mercado en la realidad concreta del

subsistema venezolano, del papel de la inversión social, la idea de vulnerabilidad social y, sobre todo el papel jugado por la participación.

Finalmente, el papel asignado por el bolivarianismo a la superación de la dependencia periférica y, desde el 2007, a la idea de *soberanía alimentaria*, son fundamentales en la comprensión de la experiencia venezolana. Por ello, los siguientes epígrafes tienen por objetivo mostrar la relación de estos temas con el SSSA.

3.2. La seguridad alimentaria y la dependencia global.

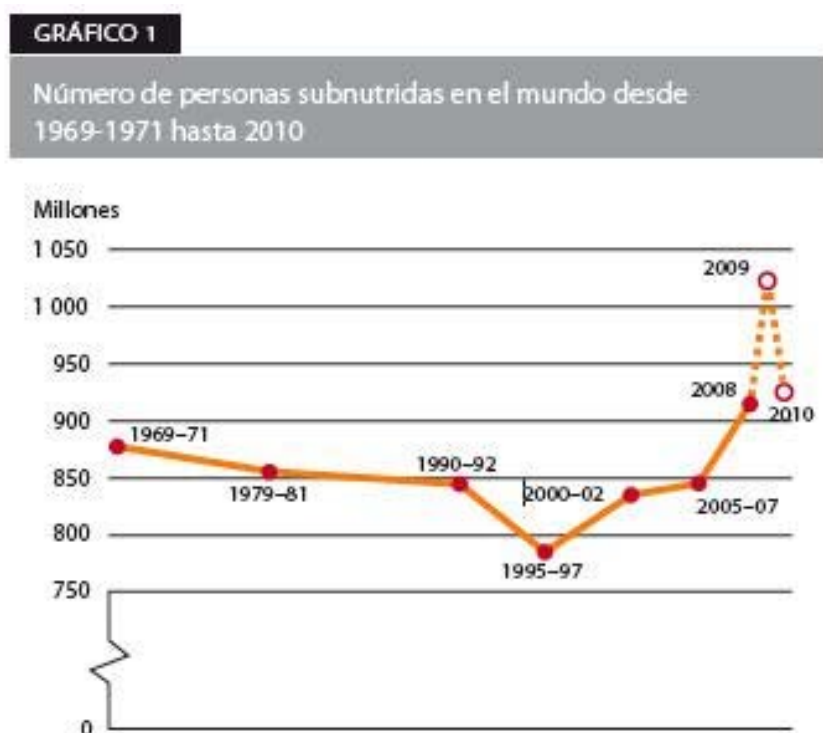
La FAO entiende que la seguridad alimentaria está sujeta a factores geopolíticos relativos al mercado de valores.

Las estadísticas sobre hambre y acceso a los alimentos depende hoy sustantivamente de los precios alimentarios. Sin embargo, la misma FAO reveló que éstos no están vinculados a los costos de producción o a los ingresos de los países.

“En general, los ingresos están creciendo a mayor velocidad en las economías emergentes y en los países en desarrollo que en los países desarrollados (...) Sin embargo, los precios de los alimentos casi en todos los países de bajos ingresos y con déficit de alimentos siguen estando por encima del nivel previo a la crisis, lo que repercute en forma negativa en el acceso de los grupos vulnerables de la población a los alimentos” (FAO, 2010 a).

Obsérvese el siguiente gráfico:

Gráfico 1. Población subnutrida en el mundo. 1969-2010. Fuente: FAO, 2010 a .



El comportamiento del mercado agroalimentario desde el 2005-2007 hasta el 2008-2009 expulsó a casi 200 millones de personas al hambre. La recuperación del 2009 al 2010 no es reconfortante, no solo porque no se recuperan todas las personas negadas a la alimentación, sino porque las causas que habrían provocado la primera subida de los precios de los alimentos se repetirían de manera quizás más cruda en el 2011. ¿Cuáles son esas causas?.

Stanley Malinowitz, Phd de la Universidad de Massachussets y experto en neoliberalismo y *financiarización* en América Latina, lo explica así:

“Muchos han olvidado las crisis alimentarias del 2007-2008, que no tenían que ver con los costos sino con varias burbujas especulativas (...) La burbuja inmobiliaria provocó que los sectores buscaran otras inversiones y las encontraron en el petróleo y los alimentos (...) el aumento del consumo de alimentos en China e India explica muy poquito el aumento de los precios (...) Esto hizo que las políticas dependan mucho de las competencias entre

empresas y que ahora la producción dependa de las grandes finanzas” (Malinowitz, 2010).

Los precios, cada vez menos tendrían que ver con los costos sino con la dinámica de la competencia de las grandes empresas del sector, así como con la especulación para-financiera. A su vez, la subida de los precios de los alimentos provoca niveles de hambre mayores. El contexto del 2007-2008 en que esto se produjo es similar al de la crisis energética que provocan las revueltas en el Medio Oriente y en el Norte de África en el 2011. Además, según el gráfico 1a, los precios de los alimentos para el 2011 suben, aun más que durante la crisis del 2008.

Gráfico 1a. Índice Mundial de Precios de Alimentos, 1990-2011.
FAO, 2010 c.



A pesar de que Hiroyuki Konuma, representante regional de la FAO en Asia, afirma “...ahora estamos en una situación mucho mejor que la de la crisis de 2008”, también dice que “...el riesgo potencial es que el petróleo crudo siga subiendo y, si las inundaciones y las sequías se repiten, también se verán más aumentos de precios”. Paralelamente, Abdolreza Abbassian, economista de la FAO, basándose en que, según el índice de precios de la FAO, los precios mundiales de los alimentos alcanzaron un récord histórico en febrero, declara: “Tendremos un aumento de la producción, pero no bastará para mejorar la situación

del mercado”. Incluso aseveró: “Los precios altos y volátiles continuarán en 2011 e incluso en 2012” (Bloomberg, 2010).

Efectivamente, el año 2012 no ha terminado durante la redacción de esta tesis, pero ya la FAO publica una disminución en su índice de precios de los alimentos (básicamente, cereales, ovino, porcino y azúcar, desde mayo del año anterior a enero). Sin embargo son peligrosamente altos. Tal como previsto por las autoridades de la FAO, la curva de ese año “superó el nivel máximo, de 200 puntos, registrado anteriormente (en 2008) y alcanzó el nivel más alto (en términos tanto nominales como reales) desde que la FAO comenzó a medir los precios internacionales de los alimentos en 1990” (FAO, 2012).

¿Qué sugiere la FAO para disminuir el impacto del mercado de valores en los precios de los alimentos?

El concepto de seguridad alimentaria toma protagonismo en el año 2000 cuando la FAO impulsa la erradicación de la pobreza a través de la primera meta del Milenio, la ODM1, la cual propone la reducción, para el 2012, de la mitad de las personas en el mundo con hambre o sub-nutridas. La FAO propone entender el impacto de financiarización de la economía a través de las posibilidades de los subsistemas en participar de manera más eficiente en el mercado.

Para tal fin, la FAO expone las orientaciones que requiere la consecución de esas metas, fundamentalmente en tres puntos:

1. “Los gobiernos deberán alentar una inversión mayor en la agricultura, ampliar las redes de protección social, así como mejorar las actividades que generan ingresos para los sectores pobres del medio rural y urbano” (FAO, 2010).

Esta es la línea general que sirve de plataforma a las orientaciones en materia de política agroalimentaria en Venezuela. Se está partiendo de la idea de que invertir en mejorar las condiciones de vida en el campo, supone un acto de confianza fundamental para la sustentabilidad del sistema, en tiempos de las llamadas parafinanzas globales, en las que actividades económicas especulativas y el sector terciario tienen mayor peso en las economías y en las decisiones sub-sistémicas de crecimiento del Estado.

La inversión social debe tener por objetivo la productividad y la eficiencia en el mercado:

2. “La identificación de las ventajas comparativas del sector

es un paso esencial hacia la definición explícita de los **objetivos** nacionales del sector. De una forma u otra, en el ámbito más general los objetivos deben incluir al **incremento de la productividad**, principal requisito previo para que crezca el ingreso, y la **reducción de la pobreza** (...) El objetivo de productividad comprende tanto los adelantos tecnológicos (aumentos de rendimientos) como el desplazamiento de los patrones de producción hacia cultivos de más alto valor u otros productos” (FAO, 2004:16).

De tal modo que la Seguridad Alimentaria puede lograrse invirtiendo más en el medio rural, integrándolo en condiciones beneficiosas al mercado, tecnificándolo, vinculándolo al crecimiento de las ciudades y haciéndolo parte del sistema global.

Queda por fuera aún la relación entre los objetivos de crecimiento del medio rural y el mundo de lo político y lo económico en el subsistema nacional o regional periférico. Las metas de seguridad alimentaria no pasan por alto que la consistencia de las políticas agroalimentarias requiere de un plan macroeconómico con importantes consensos políticos y ejes de continuidad:

3. “(...)Las mayores ventajas de reformar las políticas en el contexto de una estrategia global son: a) las políticas derivan de, y apoyan, determinados objetivos nacionales y una visión clara del futuro; b) *se diseñan para que sean mutuamente consistentes en todos los aspectos del sector y con la política macroeconómica*; c) ningún tema importante de reforma de la política es pasado por alto, y d) el proceso de formular la estrategia representa una oportunidad para alcanzar el consenso de los principales grupos de interés del sector” (FAO, 2004:17).

La frase “se diseñan para que sean mutuamente consistentes en todos los aspectos del sector y con la política macroeconómica”, es la frase clave para cualquier país periférico cuya integración con el sistema esté dada por sus compromisos de desarrollo, así como por el resultado macroeconómico y cultural que genera la dependencia a esos compromisos con el tiempo.

Para el caso venezolano, se trata de un objetivo fundamental de la

SSSA. Sin embargo, transformar la economía a partir de la agricultura ha resultado una pieza que no encaja fácilmente en la trama de intereses, *path dependences* y la historia cultural del país.

De tal modo que esta tesis procura identificar si Venezuela estaría proveyendo crecientemente de alimentos a su población y estaría reduciendo la pobreza y la desnutrición, pero al mismo tiempo si estaría enfrentando fuertes problemas para hacerlo “en todas sus épocas”, por la vía del “incremento de la productividad” y por tanto, como política diseñada para integrar todos los sectores con la política macroeconómica.

3.3 La seguridad alimentaria y el SSSA.

Con el fin de arrojar luz sobre los alcances del SSSA en materia de seguridad alimentaria, y en consonancia con los planteamientos de los organismos internacionales para la alimentación, esta tesis se propone evaluar la seguridad alimentaria en Venezuela de tres maneras:

- a) En su relación objetivo-meta. El SSSA se propone, como toda política alimentaria enmarcada en los objetivos del milenio, alcanzar mayor seguridad alimentaria (Espíndola, León, Martínez y Schejtman, 2004:17). Esta meta se traduce en una reducción de la pobreza y la desnutrición en un 50% para el año 2015 (FAO, 2010b). Se observarán las tendencias de estas variables en virtud de los esfuerzos realizados entre 1999 y 2011.
- b) En relación a los procesos sugeridos por Alexander Schejtman (FAO-Chile) a las políticas públicas sobre desarrollo económico y territorio. En este sentido se destacarán sus aportaciones en torno a nueva institucionalidad, homogeneidad de la estructura económica, relación mundo rural/mundo urbano, entender la seguridad como un resultado de la calidad general de vida y, fundamentalmente, la participación de la sociedad civil a través de organizaciones “homogéneas y representativas a nivel local” (Schejtman, 1994; Schejtman, 1999: 30; Berdegúe y Schejtman, 2008). Dada la centralidad de la idea de la participación en el paradigma bolivariano, también las prácticas y los fundamentos observados serán tratados por autores que confieren a la participación capacidad de regenerar tejidos sociales (Putnam, 1993) y de reconstituir la naturaleza relacional del Estado

(Jessop, 2008a).

- c) En último lugar, desde la perspectiva de los sub-objetivos fundamentales de la FAO para la seguridad alimentaria. Estos son: la *suficiencia* (nivel calórico mínimo y medio en niños menores de 5 años), el *acceso* (porcentajes de suficiencia alcanzada por la población), *disponibilidad* (oferta de alimentos) y la *estabilidad* (disponibilidad y acceso en el tiempo). Los sub-objetivos se pondrán en relieve junto a las políticas de SSSA. Otros sub-objetivos como *autonomía* (disponibilidad de energía calórica importada frente a la nacional), *inocuidad* (morbilidad asociada a la alimentación) serán igualmente comentados y puestos en contexto.

Finalmente, bajo la óptica geopolítica que han desarrollado los autores mencionados, la segunda y tercera orientación de la FAO pueden lucir insuficientes. ¿Cómo afectar los intereses de un gran mercado que cifra sus apuestas en el orden establecido de las cosas, por la vía de mayor productividad o de reformas solo en la estrategia macroeconómica de un país?

Esa percepción de insuficiencia es el nicho ideológico sobre el que se desarrollan conceptos políticamente más beligerantes como el de *soberanía alimentaria*, tal como se entiende en Venezuela.

3.4. La soberanía alimentaria y el socialismo.

En el contexto de Plan Nacional Simón Bolívar del 2006, el bolivarianismo coloca en el centro de sus definiciones la idea de *soberanía alimentaria*, sin desestimar la seguridad alimentaria como objetivo.

El concepto de soberanía alimentaria es una evolución del de seguridad alimentaria, e incluso, procura ocupar su espacio político vacío. De hecho, obtiene su más importante protagonismo en los Foros Sociales Mundiales y otros encuentros generalmente paralelos a las reuniones de comercio Mundial, organizaciones multilaterales como la FAO o encuentros de Jefes de Estado y sus representantes.

En el Foro Social para la Alimentación de Mali se hizo la declaración de Nyéléni en la que se actualizó el concepto. En este foro participó Vía Campesina y otras asociaciones campesinas mundiales, quienes estuvieron desarrollando por varios años el término de *soberanía*

alimentaria. Estas son las 2 ideas principales de esta declaración al respecto:

1. “La soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica, y su derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo. Esto pone a aquellos que producen, distribuyen y consumen alimentos en el corazón de los sistemas y políticas alimentarias, por encima de las exigencias de los mercados y de las empresas. Defiende los intereses de, e incluye a, las futuras generaciones” (Declaración de Nyéléni, 2007).

A diferencia del concepto de *seguridad*, que pone énfasis en la necesidad del subsistema agroalimentario en sobrevivir dentro de las condiciones del mercado, el de *soberanía* coloca el concepto en las posibilidades solidarias de la sociedad civil, aún sin negar el mercado pero secundarizándolo frente al trabajo y el trabajador.

Las llamadas revoluciones técnicas y tecnológicas (como la Verde – agrícola- y la Blanca –lechera-) habrían ofrecido la falsa idea de que ayudarían a superar la pobreza a través de la producción agroalimentaria masiva y a bajo costo. En su lugar habrían empobrecido las tierras, deteriorado los ecosistemas, producido alimentos tóxicos y no habrían logrado cumplir su oferta de mejores precios, mejor distribución de alimentos y reducir la pobreza (Declaración de Nyéléni, 2007). Ello sucede porque la alimentación es objeto de determinantes económicos y políticos, como la preeminencia de los mercados financieros, la optimización de los beneficios, el mantenimiento político del *status quo*, entre otros, que constituyen la raíz fundamental de los problemas de seguridad alimentaria.

De tal modo que un diagnóstico como el de la FAO sobre el impacto de la financiarización sobre los precios de los alimentos y la consiguiente expansión de la miseria, bajo la soberanía alimentaria, reviste de una lectura sistémica que incluye un replanteamiento de la idea de propiedad sobre los derechos y medios de la producción:

“Los fondos de Inversiones compran « futuros », es decir las cosechas de los próximos años, no para adquirir productos agrícolas, sino más bien para ganar dinero en la reventa posterior, y a mayor precio, de sus derechos sobre la producción” (Vía Campesina, 2008).

Visto así, las reformas neoliberales iniciadas en los 80 habrían desmantelado los recursos soberanistas de las naciones, despojándoles de sus derechos productivos por la vía de las privatizaciones. Esta es una de las razones principales por la que el impacto de los precios del 2008-2009 produce inseguridad alimentaria (Vía Campesina, 2008), y en términos humanos, produce el desplazamiento de 200 millones de personas al hambre (FAO, 2010a). La idea de *soberanía alimentaria* convierte la propiedad sobre el medio de producción en el centro del análisis.

Las revoluciones tecnológicas no podrían resolver la pobreza porque están al servicio del beneficio y el capital, no del trabajo y el trabajador. Por tal sentido los defensores de la soberanía alimentaria proponen la democratización de los oligopolios agroindustriales y una reforma agraria que revierta la revolución verde y promueva, en su lugar, la agro-ecología (Vía Campesina, 2008).

Tanto el modelo periférico-agroexportador colonial y post-colonial, como los iniciados por la revolución tecnológica verde-blanca en los años 60, habrían coadyuvado al aumento de la pobreza y de la desigualdad en los últimos 100 años (Korzienewick, Martins, Sandoval Ramírez, 2010).

Por tanto, lo que es deseable es cambiar las condiciones económicas y políticas en el sistema de acumulación y reubicar la planificación agrícola en “el corazón” de los pueblos que producen.

La segunda idea a destacar en el concepto de Soberanía Alimentaria se desprende precisamente del papel que juegan el neoliberalismo y las para-finanzas en el sector alimentos.

2. “¿En contra de qué luchamos? El imperialismo, el neoliberalismo, el neocolonialismo y el patriarcado, y todo sistema que empobrece la vida, los recursos, los ecosistemas y los agentes que los promueven, como las instituciones financieras internacionales, la Organización Mundial del Comercio, los acuerdos de libre comercio, las corporaciones multinacionales y los gobiernos que perjudican a sus pueblos; el dumping de alimentos a precios por debajo de su costo de producción en la economía global; el control de nuestros alimentos y de nuestros sistemas agrícolas en manos de compañías que anteponen las ganancias a las

personas, la salud y el medioambiente...”

En relación a políticas públicas no globales, como las del SSSA:

“...La privatización y la mercantilización de los alimentos, servicios básicos públicos, conocimientos, tierras, aguas, semillas, ganado y nuestro patrimonio natural; proyectos / modelos de desarrollo e industrias de extracción que desplazan a los pueblos y que destruyen nuestro medioambiente y nuestra herencia natural; guerras, conflictos, ocupaciones, bloqueos económicos, hambrunas, desplazamientos forzados y confiscación de sus tierras, y todas las fuerzas y gobiernos que los provocan y los apoyan; y los programas de reconstrucción tras un conflicto o catástrofe que destruyen nuestro medioambiente y capacidades; La criminalización de todos aquellos que luchan por proteger y defender nuestros derechos...”
(Declaración de Nyéléni, 2007).

Esta segunda parte del concepto de soberanía alimentaria parte de la necesidad de resistencia y destrucción del orden neoliberal (y capitalista, *in extenso*) que, según la declaración, es responsable del avanzado deterioro ecológico, el comercio opaco, la explotación de los productores, el hambre, el patriarcado y el paternalismo (al menos el patriarcado y el paternalismo global, que es el denunciado en la declaración).

Dentro del rol antitético de esta parte del concepto es importante destacar, para los efectos de esta tesis, la frase “[luchamos en contra de] la privatización y la mercantilización de los alimentos, servicios básicos públicos, conocimientos, tierras, aguas, semillas, ganado y nuestro patrimonio natural”.

De tal modo que el concepto no solo denuncia al comercio opaco, injusto e inequitativo, sino que todo alimento sea un bien comercial, como también denuncia que lo sea el conocimiento, las tierras, las semillas y el ganado. Esta frase, ubicada en su contexto, supone que la soberanía alimentaria reside en buena medida en la desprivatización de los alimentos.

En este punto la soberanía alimentaria se desplaza de la posición de resistencia ante los modelos imperantes y se compromete con ideas relacionadas con algún orden post-capitalista: solamente en la

transformación de la propiedad sobre el medio podría garantizarse la transformación deseada de la agricultura. Por todo ello, a pesar de que no es explícito, el concepto de soberanía alimentaria apunta a la transformación del modelo de acumulación.

La segunda evidencia de la relación entre socialismo y soberanía alimentaria se sostiene en el concepto clave: “derecho a alimentos”, tal como reza la primera parte del concepto redactado en Mali.

El concepto “derecho a alimentos”, tal como se le identifica dentro del contexto teórico-ideológico de la soberanía alimentaria, supone que los alimentos son bienes privados a transformarse en bienes públicos o colectivos. Este giro no es el que se indica el artículo 25, Num. 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, conteniente del principio de “Derecho a la Alimentación”. El artículo de 1948 hace hincapié en el derecho liberal a la seguridad social:

“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios...”
(Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948).

La declaración universal entiende el derecho como un componente de un nivel de vida. Tal nivel de vida puede producirse por la vía del mercado. El acceso a la alimentación por la vía de un sistema basado en el mercado sería suficiente para satisfacer el derecho. Pero la Declaración Nyéléni habla de derecho “a alimentos” y a su desprivatización:

“La soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos...” (Declaración de Nyéléni, 2007).

El derecho a los alimentos significaría des-mercantilizarlos. El derecho a la alimentación en el marco conceptual de la soberanía alimentaria significaría la desprivatización del proceso, pero no de sus unidades de intercambio, como se ha desprivatizado el derecho a la salud o a la educación. El derecho a alimentos más bien equivaldría al derecho a las medicinas o a las inyectoras del derecho a la salud.

La distancia semántica entre la primera y la segunda lectura del derecho indica de un modo bastante preciso la distancia entre un derecho que puede ser resuelto por la vía de crear algunos condicionamientos al mercado, tal como se presenta en el concepto de

seguridad alimentaria, o un derecho que solo puede ser alcanzado por la vía de extraer radicalmente los alimentos del mercado.

Así, el derecho a la alimentación está transformado, pues se entiende que los alimentos se han desplazado de su condición de bienes privados, escasos, comercializables, a la condición de bien público, entendido como parte de un *pool* de productos, provistos por el Estado o por organizaciones autogestionarias (Flinders, 2006; Laws y Hayer, 2008). Esta transformación supone otra perspectiva ideológica.

Como el sistema capitalista, capaz de convertir los bienes de subsistencia en mercancías, es la raíz del problema, para hacer válido el derecho sería necesario superar el sistema y entregar la producción y la distribución a las comunas o a algunas otras formas de organización solidaria, pública y popular. El mundo del trabajo tendría la posibilidad de alimentar a sus trabajadores sin la intermediación del gran mercado (Declaración de Nyéléni, 2007).

Como en la idea de la soberanía alimentaria se habla de “derecho a los alimentos”, esto es, a las unidades concretas del intercambio comercial que sostienen el sistema capitalista, y no del derecho a ser alimentado, por cualquier vía, y dada la importancia que tiene la alimentación en la economía de los pueblos, transformar la naturaleza de la propiedad sobre los alimentos supondrá la transformación de la sociedad toda, o al menos de sus ejes más estructurales.

La gran interrogante por resolver en estos documentos es cuáles son las políticas públicas, o las políticas participativas que podrían transformar el modelo neoliberal o post-neoliberal en un modelo social que permita la soberanía alimentaria.

El SSSA es, precisamente, un conjunto de políticas que tratan de resolver esta interrogante. Tal como se verá, el proceso bolivariano entiende la importancia de que sus políticas alimentarias sean rentables, pero esto no define las políticas. Las políticas se definen en el mundo de la soberanía política, en los factores políticos de la producción y en los derechos del consumo (Frente Socialista Campesino Pedro Camejo, 2010; Coop. Socialistas Sabana de Parra, 2010; Inmerca, 2010; Rodríguez, 2010; Directivo INSAI, 2010; CVA-ECISA, 2010).

En el discurso sobre la financiarización de los alimentos de Malinowitz (Malinowitz, 2010) indicada en el epígrafe anterior, como en el de soberanía alimentaria, se sigue sin resolver qué relación existe entre un modelo subsistémico centrado en tejidos productivos nacionales

creados en virtud de las demandas internas y externas, y la alimentación como derecho (esto es, ya no como un bien comercial).

Esta relación irresuelta entre derecho y *commodity*, entre las políticas públicas dentro del mercado y el derecho a los alimentos independientemente del mercado, al menos en el plano discursivo, es visible en los textos de Vía Campesina, en la Declaración de Nyéléni, en el pensamiento de Malinowitz y, como se verá, tanto en el discurso como en la práctica de las políticas públicas bolivarianas en el sector (Inmerca, 2010; Rodríguez, 2010; Directivo INSAI, 2010).

¿Por qué está irresuelta esta relación? Es posible adelantar prematuramente un aspecto del problema.

La relación irresuelta entre derecho y *commodity*, consiste en que la soberanía alimentaria es el resultado de una sociedad que funciona sobre bases históricas, productivas y estructurales diferentes a las históricamente predominantes. Es la consecuencia de otro tipo de sociedad, de tipo no-capitalista.

En la medida en que las sociedades a las que se dirige el discurso son aun capitalistas, resulta imperativo para las políticas públicas, y concretamente para las bolivarianas, cambiar eficientemente el modelo de acumulación a escala subsistémica, para que el concepto de soberanía alimentaria se aplique con todo su vigor.

Es entonces esperable una ausencia de experiencias y referencias sobre políticas públicas que reduzcan la distancia entre el alimento como *commodity* y el alimento como *derecho*, por cuanto ni el discurso de Nyéléni ni la práctica del SSSA venezolano se dirigen todavía a sociedades alternativas al capitalismo, menos aún a un modelo civilizatorio diferente (Gutiérrez y Albarracín, 2008).

Las políticas públicas del SSSA no solo deben procurar seguridad alimentaria, sino un cambio social de dimensiones sistémicas, lo cual resulta teórica y prácticamente muy complejo:

“Aunque desplazamientos dramáticos pueden ocurrir en las políticas, típicamente solo ocurren cambios más pequeños porque la configuración de procesos políticos existentes – miembros del subsistema, instituciones de políticas relevantes, ideas de políticas, discursos y marcos, Estado y capacidades sociales y limitaciones- no cambian sustancialmente entre iteraciones de ciclo” (Howlett, Ramaesh y Perl, 2009: 200).

De tal modo que nuevas políticas crean nuevas políticas (Schattschneider [1935] en Howlett, Ramaesh y Perl, 2009: 200) , pero también las viejas políticas crean más viejas políticas.

Es esta distancia la que procura reducir el SSSA. En esta distancia Vía Campesina habla de regular los mercados y la Venezuela bolivariana de intervenirlos por varias vías. Incluso han participado juntos en el proyecto ALBA-Alimentos (Vía Campesina, 2008: 105). Pero sigue tratándose de una distancia por recorrer.

Sin evaluar a profundidad los logros del SSSA en los temas de soberanía alimentaria y socialismo, es fundamental adelantar algunas reflexiones sobre el papel del mercado en el SSSA, y cuales son los factores estructurales-macroeconómicos que dificultan la realización de estos objetivos. Estas reflexiones serán tratadas en los epígrafes 6.4 y 6.5, y se apoyarán a lo largo de la tesis en la idea del SSSA como una política de un posible Estado experimental en constitución (Santos, 2011) y en el papel de la participación en la regeneración de tejidos resistentes contra la colonización sistémica del gran mercado (Monedero, 2009).

4. La debilidad estructural del Estado venezolano antes de Chávez (1920-1998).

La debilidad institucional del Estado venezolano se ha alimentado de modelos políticos como consecuencia de su papel periférico en el mercado mundial.

Dado que muy buena parte de los programas de crecimiento productivo, autosostenibilidad política y económica, así como sus políticas públicas desde 1928 hasta 1998 (y aún después) son percibidas por sus gobiernos como una derivación de las ganancias por concepto de exportación de los hidrocarburos, es importante entender cómo se tejieron las estrategias públicas de desarrollo con el objetivo de reducir la pobreza y la inseguridad alimentaria.

4.1. Entender el Estado como relación en Venezuela.

Aunque hay algunas coincidencias con la idea de Estado y democracia social en Dahl, la idea de Estado que aquí se asume es la estratégico-relacional de Robert Jessop (Jessop, 2008; 2008a).

Jessop retoma las críticas a la reificación del Estado, fundamentalmente prusiano, que hacía Marx contra la obra de Hegel. Marx intenta reubicar el Estado en su contexto histórico y como producto de las relaciones entre los sujetos. De tal modo que el Estado, como el capital, “no es una cosa, sino una relación social entre personas, establecida por la instrumentalización de las cosas” (Marx, 1991[1867]: 931; Jessop, 2008a:56).

El Estado relacional supone que lo que conocemos como Estado depende de vinculaciones “ambiguas” con organizaciones de todo tipo que giran a su alrededor. Mientras más cohesionado sea a lo interno, más depende de esas prácticas micropolíticas. Su naturaleza depende de su formación social e histórica. Su legitimidad está en permanente transformación, de manera que los discursos hegemónicos y anti-hegemónicos se convierten en prácticas políticas constitutivas (Jessop, 2008:11). Al final, el Estado dispone de una “selectividad estructural” o de una “capacidad estratégica” que reflejan la condición de “condensación” que tiene el Estado. En otras palabras, el Estado es un reflejo de la forma en que históricamente se han solventado los

conflictos sociales y la forma en la que en el presente los conflictos actuales son resueltos. Esto rompe con las determinaciones de algunos análisis marxistas –que señalan al Estado como un aparato de clase inamovible- pero no olvida que el Estado (en nuestro estudio, el Estado que hereda el gobierno bolivariano a partir de 1999) está constituido como un aparato al servicio de las clases sociales dominantes. En conclusión, y como ocurre con todo lo referente a la política, también el Estado se convierte en un campo de disputa (Jessop, 2008: 56-59; Monedero, 2008 b: XIV-XXXVIII).

Entendido de este modo, el Estado relacional no es un objeto exterior a las relaciones de la sociedad, como a veces puede interpretarse de la ilusión de un gobierno “fuerte”, sino que es tributario de fuerzas de interdependencia en el seno de su sociedad, que le permiten existir histórica, estable y legítimamente, con independencia de cualquier valoración normativa que se desee hacer sobre él.

Este capítulo revisa los problemas de interdependencia que se producen en una economía y de prácticas políticas que han debilitado el tejido social que sustentó al Estado venezolano antes de Chávez, muchas veces en nombre del mismo Estado. En tal sentido se mostrará cómo las ingentes rentas petroleras y el compromiso de los gobiernos venezolanos en mantenerlas, aumentarlas y administrarlas, han provocado las condiciones para dotar de unas particulares características al tejido relacional del mismo Estado.

4.2. La vinculación entre Estado y petróleo en Venezuela.

Como en casi todos los casos latinoamericanos, el proceso de modernización republicana en Venezuela se ha alimentado de la dependencia de uno o de pocos productos de exportación, los cuales suministran recursos al Estado y a una élite pero impiden el desarrollo de la sociedad en su conjunto.

Parece haber un consenso en el hecho de que el monoproducción establece normas de juego y de crecimiento de condiciones productivas desiguales, asociables con élites productivas y otras formas de estructuras de poder verticales, autocontenidas y relativamente aisladas cultural, familiar, económica y hasta jurídicamente del resto de la sociedad (Amín, 1974; Karl, 1997; Coronil, 1997; Malamud, 1999; Sosa Barajas, 2002). Incluso parece

haber un relativo consenso sobre el hecho de que la posesión de importantes recursos naturales tiene una relación negativa con el crecimiento (Pérez Alfonzo, 1976; Mommer, 1990; Karl, 1997; García Larralde, 2005).

Desde el gobierno de Juan Vicente Gómez entre 1908 y 1935, el petróleo se convierte en la columna vertebral de la economía venezolana. Desde entonces, el petróleo da la impresión de introducir una diferencia con relación a las experiencias de otros países de América Latina.

El petróleo, a diferencia del café y el cacao en períodos anteriores de la economía venezolana, es propiedad pública y no de sectores privados. Este proceso se profundiza con las mayores participaciones del Estado acordadas con las transnacionales en los años 40. Por lo tanto los recursos derivados de la actividad económica petrolera se canalizan hacia las manos del Estado.

Es el Estado quien tiene en sus manos todas las decisiones que se toman tanto sobre el petróleo como de los recursos que de la actividad petrolera se deriven. Es el Estado quien funge en una primera etapa como concesionista entre la producción y el mercado, en una segunda etapa, como co-actor productivo y, luego de la nacionalización, como único actor productivo. De forma que todo el subsistema político y económico se ha centrado progresivamente en el poder que se deriva de la capacidad de la sociedad política venezolana en administrar el recurso.

La naturaleza del Estado, diferente a la de las élites en la sociedad civil, supuso para el subsistema comportamientos distintos a los del promedio latinoamericano en lo relativo a la canalización prematura de transformaciones democráticas, y a formas de participación liberal de la sociedad civil. De tal modo que Venezuela explorará de manera prematura para la región ideas vinculadas a la expansión del espacio público (Baptista y Mommer, 1992), desde el desarrollismo populista hasta formas de socialismo.

El Estado liberal es susceptible a la participación de la sociedad y, por consecuencia, a la presión de partidos políticos, élites transnacionales, mayorías excluidas, corporaciones sociales, etc... En el caso venezolano, donde el Estado desde muy temprano de su proceso de modernización sumó los papeles de actor regulador y de actor económico (juez y parte

de la economía), la toma y transformación del Estado supuso un acceso importante al sistema político, económico y a las políticas sociales.

Es en este contexto que la habilidad del Estado como estructura institucional, de sus gobernantes, partidos, funcionarios e instituciones en proveer de equilibrios y beneficios a los sectores sociales que constituyen el escenario social, ha consistido en la habilidad misma del subsistema en pervivir y crearse condiciones de crecimiento (Mommer y Baptista, 1992).

4.3. Desde la Colonia hasta la República. Un breve acercamiento a la génesis del Estado.

El objetivo de este aparte es trazar algunas pinceladas acerca de los débiles cimientos con los que se constituyó lo que hoy se conoce como el Estado Venezolano, antes de la llegada del petróleo.

En contraste a la visión romántica, elitista y castrense construida sobre la independencia venezolana, la cual ubica en el centro de la gesta emancipadora el anhelo irrefrenable compartido por las élites americanas en provocar su independencia y generar una república (Siso Martínez, 1954; Salcedo Bastardo, 1977), muchos historiadores contemporáneos han re-indagado acerca de la naturaleza de las divisiones políticas de los venezolanos en los albores de la independencia, esto es, desde 1810 hasta 1815.

La importancia de estos nuevos planteamientos no consiste en la ilegitimidad del proceso republicano, el cual parece haber ganado apoyo desde 1815 hasta la separación de la Gran Colombia y aparición de Venezuela en 1830, sino en la indicación de que los tejidos políticos y económicos de sus élites intelectuales no estaban preparados para la aparición de un nuevo Estado cuando se produjo la independencia de 1810 y luego su firma constituyente en 1811 (Vallenilla Lanz, 2004 [1919]; Britto Figueroa, 1972; Carrera Damas, 1986; Arráiz Lucca, 2010).

De hecho, algunos historiadores sostienen que las élites que recibieron la independencia de manos del gobernador español de Caracas, el 19 de Abril de 1810, realmente constituían un movimiento civil que proclamaban la autoridad real de Fernando VII, en miras de recuperar

el orden monárquico perdido en la metrópolis (Arráiz Lucca, 2010; Calzadilla, 2010).

Desde una perspectiva marxista, Germán Carrera Damas enfatiza que el problema central era el de la “disgregación e integración políticas y sociales” de las sociedades hispanoamericanas, el cual consiste en *el problema* mismo del pensamiento latinoamericano del siglo XIX. Tal *problema* tiene sus raíces en la colonia, se extiende al siglo XX y “se refiere... al lapso que se abre con la ruptura del nexo colonial, la formulación inicial del proyecto nacional y la consiguiente dislocación de la estructura de poder interna” (Carrera Damas, 1986:12).

El autor evita hablar de Independencia. En cambio, utiliza el término “ruptura del nexo colonial” con el fin de desalojar una historiografía local que ha insistido sin comprobación rigurosa que “los venezolanos eran patriotas antes de la patria”. Muy por el contrario, “la ruptura”, sería más bien el resultado de fuerzas políticas que sobrepasaban a las oligarquías americanas:

“...la mayoría de los criollos lucharon durante catorce años y hasta el agotamiento en defensa del Rey, prefiriendo muchos el exilio a vivir bajo la República y alentaron sueños monárquicos hasta fines de siglo” (Carrera Damas, 1986:13).

Tal adhesión al Rey no se explica por la existencia de dos modelos contrapuestos, uno revolucionario y otro monarquista. Se explica por una coyuntura muy precisa vivida desde inicios del siglo XIX: la ausencia de un sólido vértice de poder colonial provocada por la crisis económica española y la invasión francesa (Carrera Damas, 1986:13).

Esta argumentación no desestima el papel de indígenas, clases pardas y esclavas y su deseo de igualdad y emancipación: más bien las coloca como un combustible definitivo en el impulso de la independencia (Calzadilla, 2010; Vallenilla Lanz, 2004 [1921])

Las clases dominantes, presionadas por los anhelos de igualdad de esclavos y pardos, durante una prolongada crisis de la monarquía (entendida como ausencia del poder metropolitano) “...condujeron a una determinación autonómica que culminó con la ruptura del nexo colonial” (Carrera Damas, 1986:14).

Visto de este modo, el proyecto nacional que habría surgido de la ruptura representaría, más que un nuevo modelo político que busca superar la dominación española, una respuesta ante el vacío de poder de una estructura económica y política precaria.

El historiador Juan Germán Roscio, uno de los redactores más importantes de la Declaración de Independencia del 5 de Julio de 1811 habría afirmado:

“...porque la España nos ha hecho la guerra con hombres criollos, con dinero criollo, con provisiones criollas, con frailes y clérigos criollos y con casi todo lo criollo; y mientras pueda continuarla del mismo modo y a nuestra costa, no hay que esperar de ella paz con reconocimiento de nuestra independencia” (Roscio en Vallenilla Lanz, 2004)

El mismo Bolívar habría declarado, luego de vencer a los españoles en la batalla de Araure, que los “americanos” (entendidos aquí como los criollos y mantuanos) eran *godos* o realistas, aun en 1813:

“Tenemos que lamentar entre tanto; un mal harto sensible: el que nuestros compatriotas se hayan prestado a ser el instrumento odioso de los malvados españoles. Dispuestos a tratarlos con indulgencia a pesar de sus crímenes, se obstinan no obstante en sus delitos... Mis sentimientos de humanidad no han podido contemplar sin compasión el estado deplorable a que os habéis reducido vosotros, americanos, demasiado fáciles en alistaros bajo las banderas de los asesinos de vuestros conciudadanos” (Bolívar en Vallenilla Lanz, 2004).

Carrera Damas explica que las quiebras sucesivas de la corona, sus problemas de gasto y la invasión francesa habrían precipitado los acontecimientos. Ideológicamente, habrían dos ideas en el “mercado de las formas de organización político social (...) la monarquía (...) y la república a la norteamericana” (Carrera Damas, 1986:14). De tal modo que una minoría criolla habría interpretado las energías simbólicas que emanaban de la Revolución y de la República para legitimar un *proyecto nacional*, apoyado por las clases dominadas.

El economista e historiador Federico Brito Figueroa provee de datos económicos a la insuficiencia de tejidos económicos en la constitución de un Estado para 1810.

A pesar de que materialmente “se desarrollan y forman los elementos integradores de Venezuela, considerada como una comunidad estable de territorio, vida económico-social y lengua común” (Brito Figueroa, 1972:2), revela que las fuentes predominantes de riquezas del territorio no están maduras como empresa económica nacional.

Señala que para el siglo XVIII la extracción de oro y perlas, así como el ganado introducido por los Welsers, requerían costos de producción que no satisfacían el esfuerzo (Brito Figueroa, 1972:2).

La llegada del contrabando de negros esclavos, el aumento de su tráfico por parte de los barcos ingleses (que hicieron prósperos y famosos a puertos como Liverpool), estimularon la producción de cacao, desarrolló el sector mercantil y afianzó el régimen colonial. El mismo tráfico y contrabando fue un importante negocio *negro* (ilegal, paralelo, entre lo tolerado y lo intolerable) entre Holanda, Inglaterra, españoles, criollos y la misma Compañía Guipuzcoana (Brito Figueroa, 1972:75).

Estas condiciones desarrollaron el carácter de una estructura colonial sumamente dependiente del puerto y del contrabando, impidiendo las bases de un sistema más moderno, centralizado, sobre el cual construir una nación económica y políticamente articulada a lo interno (Brito Figueroa, 1972:99).

El esquema centrado en el predominio de Caracas no estaba consolidado cuando advino la ruptura del nexo colonial. La ausencia de un centro, “de una red significativa de flujos de bienes y personas que interconectase las provincias, y al amparo de factores geográficos de aislamiento, condujo al repunte de las autonomías provinciales” (Carrera Damas, 1986:15).

Como la estructura de poder es débil, se disloca la estructura social “por el desbordamiento de los conflictos sociales con las clases dominadas” (Carrera Damas, 1986:16).

La idea de nación sustituirá, con mucha dificultad, las ideas de un Rey y la religión como recurso de cohesión hegemónica, sobre una estructura económica y social disgregada.

Los caudillismos someterán a Venezuela a una persistente guerra civil que no encontrará equilibrio político hasta lograr articular un pacto social convincente, en el Tratado de Coche y la constitución de 1864, 34 años después de la fundación nacional, y luego de la sangrienta Guerra Federal.

De tal modo que la ruptura del nexo colonial en 1810-1811 y la consecuente aparición de la nación venezolana luego de la disgregación de la Gran Colombia en 1830 es “la frustrante experiencia de un tránsito político (...) al cual se le creyó posible en forma ordenada y tranquila, y que una vez desencadenado abrumó con sus furias aún los espíritus más templados” (Carrera Damas, 1986:18).

Así el autor describe los siguientes años de República, incluyendo a la guerra federal, la primera revolución agraria de Venezuela.

Según Carrera Damas, la bases de un Estado moderno no se echarán hasta la aparición de una industria petrolera bajo el gobierno de Gómez, la cual permitió el ingreso de Venezuela al mercado capitalista mundial, aunque retrasando la institucionalización del Estado liberal democrático hasta 1958 (Carrera Damas, 1986:29).

4.4. El Estado Gomecista: el petróleo no trae enfermedades económicas.

A pesar de que ya había producción de asfaltos extraídos en el estado Táchira desde 1878, el verdadero comienzo de la industria petrolera puede ser fijado en 1917, bajo el gobierno de Juan Vicente Gómez (1908-1935), cuando la producción ascendió a 21.194 toneladas al año; siguió ascendiendo hasta el año 1926 de manera notable a 4 millones de toneladas y a 15 millones en 1928 (Bethell, 2000), y siguió ascendiendo por muchas décadas más en la medida en que, por un lado, la industrialización y el boom automotriz fue signando el carácter del capitalismo norteamericano, y por el otro, estalla la segunda Guerra Mundial haciendo que el petróleo venezolano se convierta en un agente estratégico fundamental de la victoria norteamericana en el Pacífico.

A manera de una convención, se ha señalado a Ley de Hidrocarburos de 1920 como el comienzo de la era petrolera en Venezuela, por cuanto

establece el control jurídico del Estado sobre la producción (Mommer, 1990: 146)

Gómez fue testigo y coartífice de la transformación de la Venezuela cafetalera a la petrolera llevándola, junto a las generosas concesiones norteamericanas, inglesas y holandesas, a convertirla en el primer exportador mundial de petróleo, con el 8 % de la producción mundial (Bethell, 2000: 326).

Germán Carrera Damas (1983) denominó a Gómez un “burgués rural” que se caracterizaba por cuentas minuciosas, pago de las deudas externas, adversario de los préstamos exteriores, proveedor de infraestructuras, círculos reducidos y personalizados de poder, y persecución y tratos crueles a sus adversarios políticos (desde los caudillos regionales hasta los líderes de la generación llamada del 28, futura clase política del país). De hecho, el historiador Manuel Caballero (1993) lo llamó por esto “el tirano liberal”.

De este modo Venezuela ingresó a las primeras expresiones de Estado moderno, esto es, no sólo formal o declarativo: aparición de un ejército unificado, sistema financiero interconectado y saneado de deudas, infraestructuras productivas, y clases sociales hegemónicas bajo la sombra del importante sector externo. Un Estado sostenido económicamente por medios de producción capitalistas integrados a los modernos mercados mundiales.

Antes de morir, Gómez había designado a sus sucesores, los generales Eleazar López Contreras e Isaías Medina Angarita, extraídos de sus filas más ilustradas y en el contexto de una nueva oligarquía creada a su sombra. Medina Angarita comenzó el proceso de modernización de los canales estatales de participación a través del primer llamado general a elecciones y la legalización del Partido Comunista de Venezuela, a partir de 1941. El proceso de apertura del espacio público se hizo desde entonces una bandera indeclinable de las luchas políticas nacionales hasta la fecha.

Caballero (1993) y Carrera Damas (1983), aunque ideológicamente muy diferentes, coinciden en que los períodos gomecista y postgomecista estuvieron signados por la aparición de nuevos tejidos sociales que transformaron a la sociedad y su relación con el Estado a partir del nuevo contexto productivo.

Hasta 1943-1945 las trasnacionales y los traficantes de las concesiones petroleras se quedaban con importantes excedentes de la explotación petrolera. El proceso de negociación sobre las utilidades petroleras aceleró el control del Estado sobre los recursos a partir de 1945 (Baptista y Mommer, 1992: 1-30).

Sin embargo, en ninguna parte de este proceso, desde los años 20 hasta al menos 1957, fue posible identificar la incapacidad total de la sociedad en absorber las riquezas que ingresaban al país. De hecho, según García Larralde (2005:121) los ingresos petroleros elevaron con cierta consistencia los ingresos nacionales no petroleros hasta principios de los años 70.

El efecto de un importante ingreso de divisas en una sociedad relativamente mucho más pobre, no resultaba mecánicamente en una *enfermedad holandesa* o en algunas otras perversiones características de países con altas rentas y bajo tejido productivo, como el Efecto Potosí (Karl, 1997). Fue posible contar, a partir de un equilibrio entre nuevas fuerzas económicas, nuevas inmigraciones y un desplazamiento de las potencialidades propias de la Venezuela rural a la capitalista, con una respuesta productiva privada que, si bien no despuntaba con todas sus fuerzas hacia el desarrollo, parecía estar respondiendo relativamente ante los requerimientos de la demanda interna.

Mommer en su célebre investigación “La distribución de la renta petrolera” (1990) calculó la renta petrolera *per capita* de 1936 al 85, en tanto componente de ingreso petrolero. Allí muestra como entre 1936 y 1972, si bien la renta existía y era mucho más alta que en los 80, su desarrollo creciente era paralelo al PIB no petrolero.

Esto significa que la existencia de una renta importante, aunque no producía independencia económica, no destruía los tejidos productivos.

Según este autor, sería fundamentalmente a partir de 1973 que la renta sube y desciende violentamente, haciendo imprevisible e implanificable el resto de la economía. Además, el tamaño de los ingresos petroleros era desproporcionado a cualquier intento de absorberlos. La economía no-petrolera desde entonces no crecerá al ritmo de los precios petroleros, incluso en varios períodos se destruirán los sectores secundario y primario, y la dependencia dejará

de ser simbiótica, sino depredadora. A partir de esa fecha, las variaciones en los precios del petróleo desnudaron la dependencia de la economía (Mommer, 1990:175-234)³.

El gráfico 4 muestra indicadores característicos de la demanda de la enfermedad holandesa, como lo son la evolución de las exportaciones petroleras, las exportaciones no petroleras y las importaciones, de 1950 a 1980, a precios corrientes. Nótese que la inestabilidad entre importaciones y exportaciones se produce hacia la crisis de 1973 (luego de la guerra del Yom Quipur) donde Venezuela recibió, sin ninguna preparación, importantes ingresos derivados de la reducción de sus cuotas de producción propuesta por los países árabes.

En relación a las cifras anteriores a 1950, se cuentan con datos de 1920 hasta 1935 donde se percibe que el aumento de las exportaciones petroleras de un 1,8% a un 91,2% de la masa exportada calculada en bolívares, va desplazando a las exportaciones no petroleras características como el café de un 98,2% a un 8,8%, lo que para Bernard Mommer es una señal de la destrucción del aparato precapitalista por uno “capitalista normal” (1990: 168). Sin embargo Alberto Adriani había analizado la relación entre la economía venezolana y la crisis mundial de los 30 en un famoso artículo “La Crisis, los Cambios y Nosotros”, y reconoce que los altos precios del café y otros productos de exportación no petroleros proveyeron, junto al petróleo, de un aumento de la producción nacional así como la generación de “cuantiosas sumas por concesiones, regalías, impuestos y gastos de explotación” (Adriani, 1990 [1937]: 32).

De tal modo que no es posible decir que la renta petrolera desde 1920 hasta al menos 1965, había destruido la producción nacional no petrolera, por el contrario, hay evidencias de que ésta creció, como dice García Larralde (2005:121), al mismo ritmo de los ingresos petroleros.

³ Luego de las alzas, las caídas fueron tan importantes que cuando Mommer cruza el gasto público luego del 73 con la renta petrolera *per capita*, en líneas generales y a pesar de los altibajos, la renta decrece tan fuertemente que le llevó a predecir (erróneamente) que Venezuela estaba asistiendo al fin del capitalismo rentístico.

4.5. Del *trienio* a Pérez Jiménez: se consolidan las prácticas discursivas del sistema político venezolano

El período a la transición democrática luego de Gómez y su consecuencia en el llamado “octubrismo” o *trienio* adeco, posicionan en la sociedad un importante discurso que relata sobre la existencia de un Estado elitista que se privilegia del producto petrolero, y, como contrapartida, debe surgir un Estado salvador que debe proveer de los medios económicos y políticos para reconocer a todos sus ciudadanos como sujetos históricos (Coronil, 1997).

Parece haber hoy en día un consenso entre los historiadores venezolanos acerca de las similitudes entre el “Trienio Adeco”, el desarrollismo populista de Pérez Jiménez, el populismo democrático de la IV República y el proceso bolivariano del siglo XXI (Coronil, 1997; Camero, 2000).

A partir del golpe de Acción Democrática a Medina Angarita el 18 de octubre de 1945, el cual marcó el inicio del *trienio* u “Octubrismo”, todos los procesos se sostienen discursivamente en relatos paralelos desde el siglo XX hasta el XXI: 1. El usufructo petrolero debe modernizar al país, y tal modernización supone la inclusión de las mayorías nacionales a la educación, la cultura, la política y al beneficio económico; 2. Una democracia ambigua que no terminaría de socializar los beneficios de un Estado rico, debe ser intervenida por un movimiento aún más radical, que acelere las condiciones de la democratización social (Mommer y Baptista, 1992). Así lo describe Ysrrael Camero (2000):

“La Revolución de Octubre [de 1945, u “Octubrismo”] abrió las puertas y derribó el dique de la política venezolana a los excluidos de todos los tiempos. El *trienio* que corre entre esa fecha y el 24 de noviembre de 1948 fue el rompimiento de la represa popular que durante siglos las élites estuvieron deteniendo.

(...) El Estado Democrático de Partidos, que asumía gran parte de las responsabilidades, desde la educación y la salud hasta el petróleo, es una herencia octubrista. Desde ese momento toda organización política que quisiera jugar un papel en Venezuela tenía que tener importantes características: ser policlasista, nacional, popular y de masas.

Esto es una herencia octubrista.

(...) La política de masas y popular se adueñó, no sólo de las calles, sino también de los pasillos del Palacio Legislativo y de Miraflores. El pueblo se sintió representado en sus líderes.

La movilización popular regular y común llenó las calles de las ciudades y politizó a la población, haciéndola partícipe en la construcción de su propio destino”.

Pero el reflejo del *trienio* en la cultura democrática venezolana y en el proceso bolivariano, no termina ahí. El presidente elegido del Trienio, Rómulo Gallegos, es derrocado en 1948 por una Junta militar, dentro de la cual destaca el general Delgado Chalbaud. La experiencia vivida había provisto a Acción Democrática de una popularidad importante, pero también fueron acusados de abrochar la creación de una polarización sectaria que habría impedido que las fuerzas democráticas lograran rápidos acuerdos frente a una nueva dictadura, la de Marcos Pérez Jiménez en 1949, tal como se documentará más adelante.

En 1959, casi diez años después del golpe contra el Octubrismo, sus mismos actores, Betancourt y AD ganarán las primeras elecciones de la que va a llamarse la IV República.

4.6. Pérez Jiménez. El populismo desarrollista incorpora las ideas de orden y desarrollo económico (1949-1957).

Invocando la experiencia del período de Gómez, la Junta militar que dio el golpe al *trienio* y luego el gobierno presidido por Marcos Pérez Jiménez intentarán de reorientar las políticas públicas hacia objetivos de orden y desarrollo.

Tal como se ha descrito, el contexto económico y geopolítico era propicio. En palabras del mismo Pérez Jiménez:

“Toda nuestra gestión obedeció al cumplimiento del Nuevo Ideal Nacional y que en resumen podía concretarse en tres índices de indiscutible aliento: Venezuela era la primera potencia económica de América Latina. Venezuela era el país de mayor crecimiento industrial en América Latina.

Venezuela era el país de mayor tasa de crecimiento demográfico en el mundo” (Pérez Jiménez entrevistado por Angulo Rivas, 1964: 44).

Pero otros estudios (López Portillo, 1986) subrayan un aspecto trascendente del Nuevo Ideal Nacional: una política cultural en la que Estado y “el pueblo” (cuerpo de la sociedad, sujeto y objeto del desarrollo) aparecían juntos bajo la misma imagen: una idea de modernidad, industrialización y desarrollo, al lado de las glorias históricas y raciales de los venezolanos: los próceres independentistas, la resistencia indígena a la conquista, la reciedumbre de los llaneros, las ventajas del mestizaje, el joropo, etc.

El nuevo cuerpo de significaciones no hace desaparecer a las élites económicas (transnacionales y oligarquías, por ejemplo, tan importantes en el discurso de la AD de entonces), pero las presume detrás de la representación general de un Estado, relevo histórico y étnico total de su sociedad. Este ejercicio, así descrito, no es uno más de los experimentos de modernización nacionalista del Estado en América Latina, sino que es el modelo precursor mismo de estos experimentos, luego aplicados en Brasil, México o Perú (López Portillo, 1986).

Para el Dr. Manuel Egaña, uno de los intelectuales más prominentes del decenio perezjimenista, y que fuera ministro de Fomento de Pérez Jiménez, el Nuevo Ideal Nacional era una “obligación”, consecuencia de los excedentes petroleros, de cuya desproporción entonces se hablaba sin pudores. Según Cartay (1998:14-15),

“Egaña estimaba en 1947, que la renta pública alcanzaría en la próxima década, a partir de 1948, un promedio de 1000 millones de bolívares cada año. Con tal ingreso, Venezuela, dice Egaña (1947:164):

‘...está en la obligación de elaborar ella misma un programa de gastos en obras que modifiquen fundamentalmente las mezquinas condiciones de su medio físico para que sus hombres puedan aprovecharlo con más intensidad’

De los 1000 millones, Egaña recomienda que se utilice anualmente un monto de Bs. 250 millones para la realización de obras “materiales, grandes, perdurables”, que actúen directamente sobre la naturaleza y corrijan las deficiencias

del medio físico venezolano y faciliten su óptima utilización por el hombre venezolano. Para actuar directamente sobre el hombre (lo que no hace su programa)”

(...)‘quedan a los hombres del gobierno 750 millones de bolívares por año y nuestro caudal de demagogia tropical’ (Egaña, 1947:169)”

Egaña entiende que el proyecto nacional corresponde a un experimento, facilitado por la doctrina sociológica, *cuya limitante fundamental, la escasez de dinero, no existe*. Por lo que no queda más que la ‘obligación’ de poner el experimento a funcionar.

Ni Egaña ni Vallenilla ni el mismo Pérez Jiménez dejaban de ser conscientes de consideraciones culturales, ni del impacto de la Venezuela petrolera en la cultura, pero no parecía ser, sino en el mejor de los casos, un lastre:

“Nosotros tenemos una serie de taras que debemos corregir (...) Si nosotros no modificamos nuestra manera de ser nos mantendremos como un pueblo atrasado (...) Por eso, dentro de las cuestiones del Nuevo Ideal Nacional, estaba en primer lugar la necesidad de mezclar nuestra raza con el componente de los pueblos europeos (...) habituados al trabajo (...) [había que formar en la gente en] (...) un espíritu de trabajo, darles capacitación para que comprendieran cuáles eran sus verdaderas funciones como ciudadano, es decir, sus derechos y sus deberes. Solo así el componente étnico está en condiciones de rendir para la nación lo que debe rendir.” (Pérez Jiménez entrevistado por Blanco Muñoz, 1983, en Cartay, 1998)

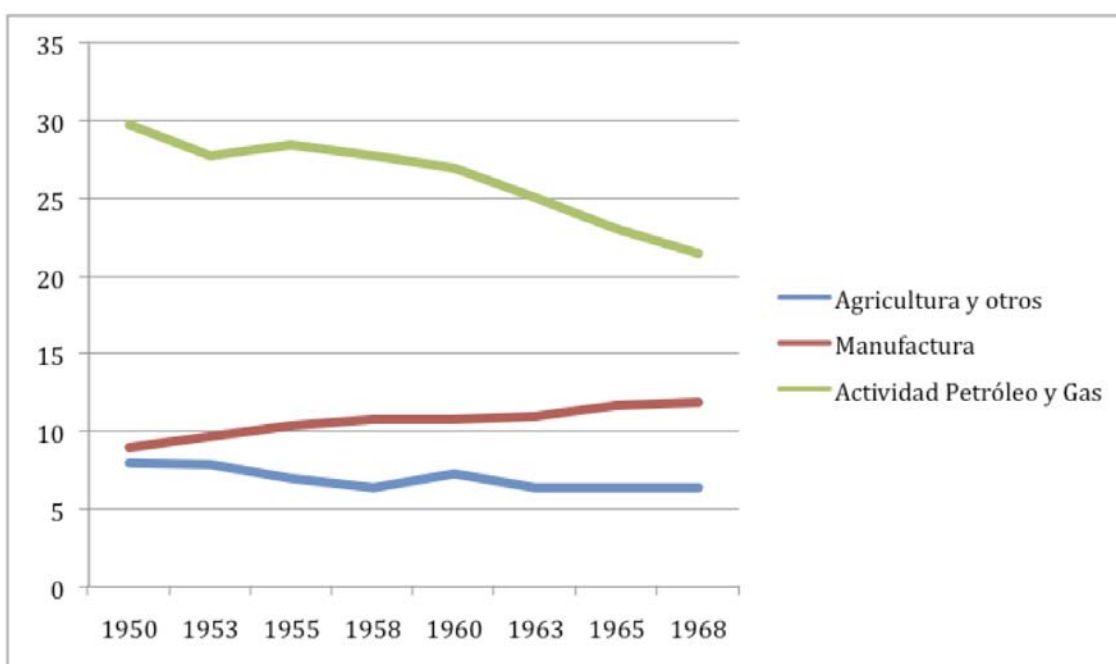
4.7. Los primeros ajustes contra los efectos perversos de la renta.

El período Perezjimenista (1949-1957) y los primeros años de la democracia (1958-1968) no evidenciaron demasiado los efectos perversos de la renta sobre el nuevo tejido productivo y social que se expandía en Venezuela.

Según el gráfico 2 es posible observar el crecimiento progresivo de la manufactura y la agricultura de la mano del petróleo desde 1951 hasta 1968, indicando con ello el crecimiento del tejido social. A pesar de que

las líneas de la agricultura y manufactura no son ascendentes, se trata del porcentaje en relación al PIB, y dado que el PIB crece de manera sostenida esos años hasta multiplicarse por 4, realmente se está mostrando un crecimiento absoluto de esos sectores. Es conveniente mostrar las líneas no ascendentes para indicar que el crecimiento de los sectores no petroleros es consistente y homogéneo con el crecimiento en términos absolutos del PIB. Ellos no despuntan por sí mismos pero son impulsados por el mismo ritmo que la renta petrolera.

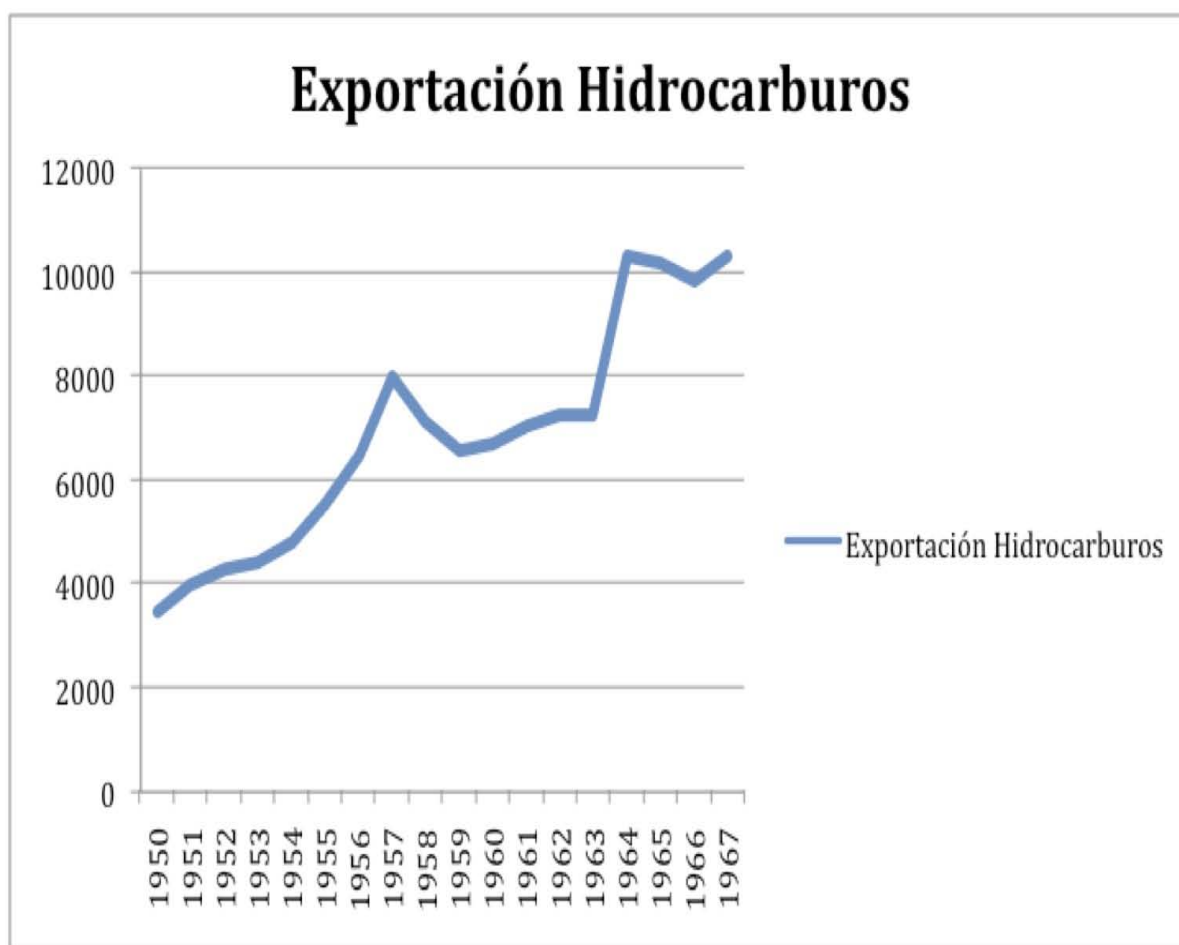
Gráfico 2. Agricultura, manufactura y petróleo según PIB de 1950 a 1968. A partir de Antivero-BCV, 1994.



Si bien también la actividad petrolera luce disminuir, hay que recordar que su participación se debe calcular en base a los precios ascendentes del mercado, los mismos que permitieron la multiplicación del PIB por 4 en ese período (Antivero-BCV, 1994). De tal modo que para entender los verdaderos ingresos petroleros hay que añadir el gráfico 2a. Como se ve allí, los ingresos petroleros ascienden abruptamente y, al

comprarlos con los volúmenes de producción para los mismos años en el gráfico 2, se observa que el petróleo no impide el crecimiento de la producción no petrolera.

Gráfico 2a. Exportación de hidrocarburos en millones de Bs. a precios corrientes. 1950-1967. Fuente Antivero-BCV, 1994.



Si bien los sectores no petroleros no despuntan rápidamente por su cuenta, como lo esperaban Egaña y Pérez Jiménez, tampoco es posible decir que la renta erosionaba el aparato productivo, sustituyéndolo por importaciones.

Sin embargo, en este período se producen algunas alertas acerca de este equilibrio. Pérez Alfonso observa que un aumento en los precios del petróleo al final del período Perezjimenista crea expectativas que se convierten en fuga de capitales y un proceso más agudo de importaciones que hicieron temblar a la industria nacional; este autor

menciona este ciclo como un detonante de la caída de Pérez Jiménez, el 23 de Enero de 1958 y como un anuncio de los problemas por venir con el aumento de los precios en 1973 (Pérez Alfonzo, 1976).

Después de Pérez Jiménez, durante el primer gobierno de la Democracia los precios del petróleo tienden a debilitarse, poniendo en evidencia la fragilidad de todo el sistema, y sobre todo del gasto. Para reducir el déficit fiscal el gobierno se endeuda y reduce sueldos y salarios. Es a partir de este período que comienza a percibirse una señal característica de la enfermedad holandesa, como es la fuga de capitales (Crazut, 2006:404).

4.8. Rómulo Betancourt. El sistema de pactos depreda las posibilidades de interdependencia (1958-1973).

Junto a Chávez, Rómulo Betancourt es la figura más importante de la política contemporánea venezolana. Fundador de Acción Democrática a partir de un partido llamado el PDN, en 1945, el mismo año en que el partido y una sección de las Fuerzas Armadas dieron el golpe contra Medina Angarita y inauguraron el llamado *trienio* adeco, u *octubrismo*.

Betancourt diagnosticó desde muy temprano que los escollos de la industrialización en Venezuela procedían de un sistema acomodado en el usufructo petrolero y con pocas intenciones de innovar y arriesgar, esto es, un problema entendido como de cultura productiva en las élites (Baptista y Mommer, 1992). Según su discurso, la respuesta a tal problema estaría en denunciar a los millonarios parásitos y ampliar el espacio público. Así lo había dicho ya en 1937, esto es, antes del *Trienio*:

“Nuestro capital es de franca tendencia parasitaria. No tenemos capitanes de industria, sino rentistas y usureros. La empresa audaz y de envergadura, que supone riesgo y aventura, no la afronta la docena escasa de nuestros millones. Tienden a la inversión segura ciento por ciento cuando son muy audaces. Los más prefieren colmar con sus depósitos improductivos las cajas fuertes de las instituciones bancarias del país o extranjeras. Nosotros, al hacer estas afirmaciones, no procedemos con empirismo ni por pasión. Constatamos

una realidad respaldados, como siempre que nos es posible, por el dato estadístico irrecusable. No hemos inventado una teoría al acusar de parasitario al grupo reducido de millonarios del país” (Betancourt, 1937:1).

Así Betancourt indicaba la incapacidad del sector privado en absorber las riquezas y provocar el repunte económico esperado por los ingresos petroleros: un problema cultural y de voluntad.

Más de veinte años después, luego de haber derrotado al perezjimenismo, Betancourt y Acción Democrática sellaron varias estrategias para impedir el retorno de la dictadura y algunos de sus sectores económicos. En este caso, Betancourt respondía con el argumento que había marcado la práctica política venezolana: ensanchar el espacio público, distribuir el dinero que por naturaleza pertenece a los “pisatarios del petróleo”, y crearse del apoyo de nuevos sectores políticos y económicos.

Esta “práctica política venezolana”, a la que Betancourt se sumaba, ha sido analizada. Mommer en su estudio sobre la renta petrolera, ha encontrado la existencia de un fenómeno político, aunque no lo indica explícitamente. Al cruzar la renta *per capita* y contrastarla con el gasto corriente y el PIB, Mommer identifica ciclos regulares en que el gasto crece fuertemente para luego caer. Sin embargo no le es posible identificar un ciclo en el seno de lo económico y le atribuye explicaciones en los contextos políticos, fundamentalmente como reacción de los gobiernos ante crisis económicas y políticas.

Efectivamente lo que está reconociendo expresamente es una evidencia del modelo político:

- a) Un importante aumento del gasto en 1936 por efectos de la crisis política.
- b) Un aumento insuficiente del gasto ante la crisis política y petrolera que provocó la caída de Pérez Jiménez -en esto Mommer coincide incluso con Pérez Alfonzo (Pérez Alfonzo, 1976)-.
- c) Un fuerte aumento del gasto en los 60 para que la reciente democracia, empujada por el mismo Betancourt, pueda estabilizarse ante amenazas políticas y un descenso en los precios de petróleo.
- d) Un formidable aumento para financiar el reto desarrollista de la *Gran Venezuela*. Y finalmente,
- e) los aumentos del gasto en los 80, en medio de un persistente crecimiento negativo, que terminaron por agotar las reservas internacionales y la capacidad de deuda externa (Mommer, 1990: 178).

El arribo de la democracia del 58 no fue entonces la excepción. Por el contrario la democracia estableció por medio de fórmulas políticas, un mecanismo que aseguraba el uso del gasto público ante amenazas políticas y económicas. Para lograr esto, Betancourt inauguró el pactismo en Venezuela.

Betancourt denunciaba la ausencia de tejidos productivos valientes. Sin embargo, en su lugar, promovió pactos políticos para garantizar la gobernabilidad del aparato, con el argumento de que la dictadura, o bien el ejemplo socialista cubano, pudiesen acabar con la institucionalidad alcanzada. Esto no hizo que los sectores productivos se hicieran más valientes, solo que se pusieran al servicio del pacto de gobernabilidad.

Para lograr esto de la mano de una democracia representativa (para entonces escasas y precarias en todo el subcontinente), era necesario ofrecer a los EEUU de la Guerra Fría un modelo viable de integración al sistema socioeconómico y político, que les garantizase un suministro estable de petróleo.

Cuatro movimientos fueron particularmente visibles: 1) la convocatoria a unas elecciones generales, que incluían al Partido Comunista de Venezuela (PCV); 2) el llamado a un pacto Interinstitucional (entre Estado, Fuerzas Armadas e Iglesia, fundamentalmente); 3) el Pacto de Punto Fijo (llamado también de “la guanábana”, entre el partido blanco de AD, verde de COPEI, y en menor proporción el amarillo de URD, esto es, excluyendo al PCV) y 4) la redacción parlamentaria de una nueva Constitución en 1961.

De tal manera, Betancourt refundaba un pacto nacional entre actores “vivos”, en representación de un escenario electoral, en la que nuevos intermediadores entre petróleo y población concentrarían los accesos a las diferentes formas el poder social. Tal pacto, además, excluía notablemente a perezjimenistas y al importante movimiento comunista. Del Pacto de Punto Fijo se fundó la hoy llamada IV República.

Dado su carácter de administrador del petróleo, el gobierno, en representación del Estado, se creaba un escenario político excluyente a partir del cual podía operar la complejidad de las iniciativas económicas y sociales del país. Un escenario de representaciones que sustituiría las relaciones orgánicas, y que se mantendría gracias a monopolio del recurso petrolero.

El problema de este escenario, no es solamente que excluyó a sectores políticos adversos al plan de gobernabilidad, sino que se vendió como un sucedáneo de realidad política, entendiendo *política* en su acepción de espacio público, centrada en el conflicto (Mouffe, 1999), para terminar funcionando como puente casi exclusivo para la obtención de créditos, legislaciones, prestigios académicos, políticos, proyección profesional, construcción de tuberías en los barrios, carreteras, acometidas eléctricas, licitaciones, importaciones, condonación de deudas.... El gobierno financió, con dineros del petróleo, un escenario que monopolizaba, en un solo tablero, las prácticas políticas, sociales y económicas de toda la sociedad.

“Tanto las ideologías de izquierda y derecha fueron asimiladas a un sistema de partidos centristas (...) Luego de 1974, ex-guerrilleros empezaron a aparecer como miembros del Congreso e incluso en los gabinetes ministeriales. Sin tomar en cuenta lealtades partidistas, los venezolanos pudieron decir, verazmente o no, ‘Ahora todos somos adecos’” (Hellinger, 2002)

El sistema de pactos entre las entonces llamadas “fuerzas vivas” (una selección determinada de partidos y élites políticas, a veces respaldadas por grupos de “notables”, y otras instituciones de prestigio...) acompañó el aparato de gobierno por 40 años, esto es, hasta la votación popular por la constitución bolivariana, aprobada en el 2000.

Los objetivos logrados en política internacional fueron reflejo también de esta nueva capacidad de los venezolanos en reagrupar, por la vía del poder persuasivo del petróleo, nuevos pactos de actores emergentes, y dirigir políticas innovadoras y defensivas de estos actores en el sistema.

La IV República, esto es, la democracia venezolana entre 1958 y 1999, repetiría las estrategias pactistas durante esos 40 años. En otras palabras, se habría optado por establecer estrategias de gobierno, todas sub-variantes del Pacto de Punto Fijo, macro-pacto de la política venezolana de ese período de la democracia: el Pacto Interinstitucional durante Betancourt y Leoni, hay aspectos de esta estrategia en La *Pacificación* del primer gobierno de Caldera, en el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez se llamaría la *Gran Venezuela*, en el gobierno de Jaime Lusinchi *El Pacto Social*, durante el segundo gobierno de Pérez la *Concertación* y en el segundo gobierno de Caldera la sub-variante pactista se llamaría la *Convergencia*.

La estrategia pactista hizo conocer a Rómulo Betancourt como el artífice político de la democracia venezolana de 1958 hasta el 2000.

Gráfico 3. Pactos de gobernabilidad. 1958-1999

<i>Pacto de gobernabilidad</i>	<i>Modelo político</i>	<i>Presidentes</i>	<i>Fechas</i>	<i>Partido</i>
<i>Pacto de Punto Fijo</i>	Desarrollismo. Democracia social. Anti-dictadura, anticomunista.	Rómulo Betancourt-Raúl Leoni.	1958-1969	AD
<i>Pacto Inter-institucional</i>	Desarrollismo. Democracia social. Anti-dictadura, anticomunista.	Rómulo Betancourt-Raúl Leoni.	1958-1969	AD
<i>La Pacificación</i>	Desarrollismo. Democracia social. Anti-dictadura, anti-lucha armada.	Rafael Caldera.	1969-1974	Copei
<i>La Gran Venezuela</i>	Desarrollismo. Democracia social.	Carlos Andrés Pérez.	1974-1979	AD
<i>El Pacto Social</i>	Desarrollismo. Democracia social.	Jaime Lusinchi.	1984-1989	AD
<i>La Concertación</i>	Neoliberalismo.	Carlos Andrés Pérez.	1989-1993	AD
<i>La Convergencia</i>	Neoliberalismo.	Rafael Caldera.	1994-1999	Convergencia MAS

Su modelo, lejos del estilo confrontacional que le caracterizó en el *trienio*, era simple: la votación popular y los precios del petróleo tenían la capacidad de alimentar acuerdos renovables, si se sumaban algunos cambios suscitados entre los agentes operadores del subsistema. Era un modelo de sostenibilidad a corto, mediano y largo plazo de escenarios políticos, pero no del subsistema económico ni del social.

El pactismo conllevó a que Betancourt y los dirigentes que le siguieron primaran los acuerdos de gobernabilidad sobre una estrategia real de impulso de las fuerzas endógenas de la economía y de los emprendimientos sociales.

Fue entonces propiamente, sobre este modelo, que se instaló un sistema de depredación de los ingentes recursos económicos por encima de la posibilidad de regenerarlos. De tal modo que el bienestar producido en la sociedad también era el resultado de esta ilusión y, una vez agotado el modelo (por una simple caída de los precios petroleros, por ejemplo), se desplomarían todos los otros cimientos sociales, como lúcidamente ocurrió en 1989 (masacre de febrero de 1989, convulsión política del segundo gobierno de Pérez), 1994 (intento de golpe de Estado) y a partir de 1998 (victoria electoral de Chávez).

El sistema de pactos hacía imposible la existencia de tejidos sociales y económicos sanos, entendidos como interdependientes, pues estaban siempre amenazados por el poder fundamentalmente financiero del escenario político dominante.

Las coerciones del FMI a partir de los años 80 y las recetas neoliberales jugaron el mismo papel en Venezuela que en el resto de la periferia global, en depredar, por vía del sistema financiero mundial, la industrialización latinoamericana y su bienestar social. Pero la incapacidad del modelo político venezolano en remontar los problemas de producción, inseguridad alimentaria, impago de la deuda y legitimidad política, también correspondía a la estrategia inaugurada por Betancourt y emulada por gobiernos sucesivos durante los primeros 40 años de democracia, en la cual primó la “fortaleza” del gobierno sobre la relacionalidad del Estado.

En el marco de la nacionalización de la industria petrolera, en 1976, Betancourt dio un discurso ante el Congreso venezolano que apuntaba a la naturaleza del modelo pactista, esto es, a su lado más oscuro, aquel que entendía el consenso como un espacio muerto y al Congreso como el sitio de un teatro vaciado de política. Allí Betancourt refirió a la

práctica de los chinos de montarse en los techos de sus casas para gritar los más horrendos improperios, “todos los horrores imaginables” [sic] que no pueden decirse en lo cotidiano. Era llamada la práctica de ‘limpiar la chimenea’”. Entonces Betancourt pidió a los congresistas: “ya pasó el tiempo de limpiar las chimeneas, se impone un tiempo de responsabilidad ante el reto asumido como nación” (Betancourt, 1976:39).

Esta imagen, de algún modo ofensiva, de que para los dirigentes políticos las diferencias no eran sustanciales, sino impulsos al margen de la razón, casi infantiles, revela una idea demagógica de la política e indica el papel político del pacto. Esta percepción fue compartida crecientemente por la sociedad venezolana hasta la llegada de Chávez. Fue conocida con muchos nombres en el medio académico, entre ellos, la “despolitización de la sociedad venezolana”:

“Los ciudadanos sólo reconocen a quienes arbitrariamente los reconocen, en este caso, los partidos políticos. Sin embargo, la falta de reconocimiento de los partidos a los ciudadanos, llevó a estos últimos a revelarse contra los partidos, haciéndose de esto una especial sanción que recae específicamente sobre unos actores que desconocen lo específico del origen de lo político” (Madueño, 2008:116).

De tal modo que, en términos políticos, el sistema de pactos, desde el Pacto de Punto Fijo en 1959 hasta la Convergencia en 1994-1998, depredó las posibilidades de interdependencia del sistema político venezolano, y debilitó al Estado como institución relacional. Al debilitar los emprendimientos sociales y económicos de la sociedad, sentó las bases para un sistema incapaz de confrontar cambios y de generar fortalezas reales y estables.

En octubre de 1973 estalló la guerra del Yom Quipur y en Febrero del 74, cuando Carlos Andrés Pérez llegó a la presidencia de Venezuela, los precios del barril petrolero habían ascendido de 3 a 5,11 US\$, y luego a 11,65 US\$, como consecuencia del recorte productivo impulsado por los países árabes y musulmanes de la OPEP en contra del apoyo estadounidense a Israel, la interrupción en Siria del oleoducto trans-arábigo y la reducción de 653.600 barriles impuesta por Libia en 1974 (Vallenilla, 1998:85).

Este capítulo de la economía venezolana signó la sostenibilidad económica del pactismo como modelo de estabilización ficticia de lo político y, al mismo tiempo, inauguró con toda claridad el papel

depredador de la renta petrolera en los tejidos económicos del subsistema venezolano.

4.9. La Gran Venezuela (1974-1979) y Pérez Alfonzo.

Carlos Andrés Pérez recibe un gobierno con ingresos petroleros sin precedentes y una longevidad relativa de la industria venezolana, para seguir el camino exitoso de su par mexicano, Lázaro Cárdenas, hacia la nacionalización del petróleo. Con el petróleo nacionalizado y bajo el efecto de la bonanza, el país se llena de augurios de desarrollo y las luces de un claro liderazgo internacional en la periferia.

Sin embargo, Juan Pablo Pérez Alfonzo, fundador de Acción Democrática, ministro de Fomento durante el *trienio*, Ministro de Petróleo de Betancourt en el 59, y además artífice e impulsor mismo del proyecto colectivo de la OPEP, se baja solitariamente del vehículo del optimismo.

Pérez Alfonzo estudia lo que cierta academia noruega denomina el Efecto Venezuela (a conocerse mayormente luego como The Dutch Disease)⁴, y asegura que “en diez, veinte años, el petróleo será la ruina de Venezuela” (Pérez Alfonzo, 1976). Lo llama “el excremento del Diablo” (en relación a la manera como eran denominados despectivamente por los españoles los yacimientos superficiales de hidrocarburos, generalmente asfaltos y betún en Venezuela). Finalmente abandona el gobierno de Carlos Andrés Pérez, así como al partido Acción Democrática, cuando no percibe voluntad política en reconvertir el modelo desarrollista a la escala adecuada.

⁴ El economista Carlos Mendoza Potellá da seguimiento a las teorías venezolanas y noruegas anteriores a la Dutch Disease y a la “Paradoja de la Abundancia” de Karl. Alberto Adriani ya describe los efectos del petróleo en los años 30: “... por su índole y por la estructura particular que ofrece en Venezuela, esa industria es, desde el punto de vista económico, una provincia extranjera enclavada en nuestro territorio...En cambio, la producción de artículos de exportación vernáculos, los que verdaderamente aumentan la riqueza del país, ha permanecido estacionaria” (Adriani, 1930: 138). El periodista Ernesto Peltzer supone que: “... el autor del término haya sido el economista noruego Erling Eide, quien ha especulado acerca de los efectos inflacionarios de la súbita riqueza de ese país escandinavo...Podría hablarse de un “efecto Potosí” para describir lo que le sucedió a la economía española en los siglos XVI y XVII” (Peltzer en Mendoza Potellá, 1994: 138).

Su hijo, el economista Juan Pablo Pérez Castillo actualiza su visión del llamado Efecto Venezuela:

...“Nuestra industria petrolera utiliza muy pocos recursos nacionales como insumos para la inversión, producción y comercialización del petróleo, como lo comprueba la escasa matriz insumo/producto (muy bajos coeficientes netos de importaciones que reflejan las relaciones de compraventa entre los sectores de la economía nacional), los bajos componentes nacionales de las inversiones y de los insumos utilizados por el sector y el bajo multiplicador del sector neto de importaciones.”

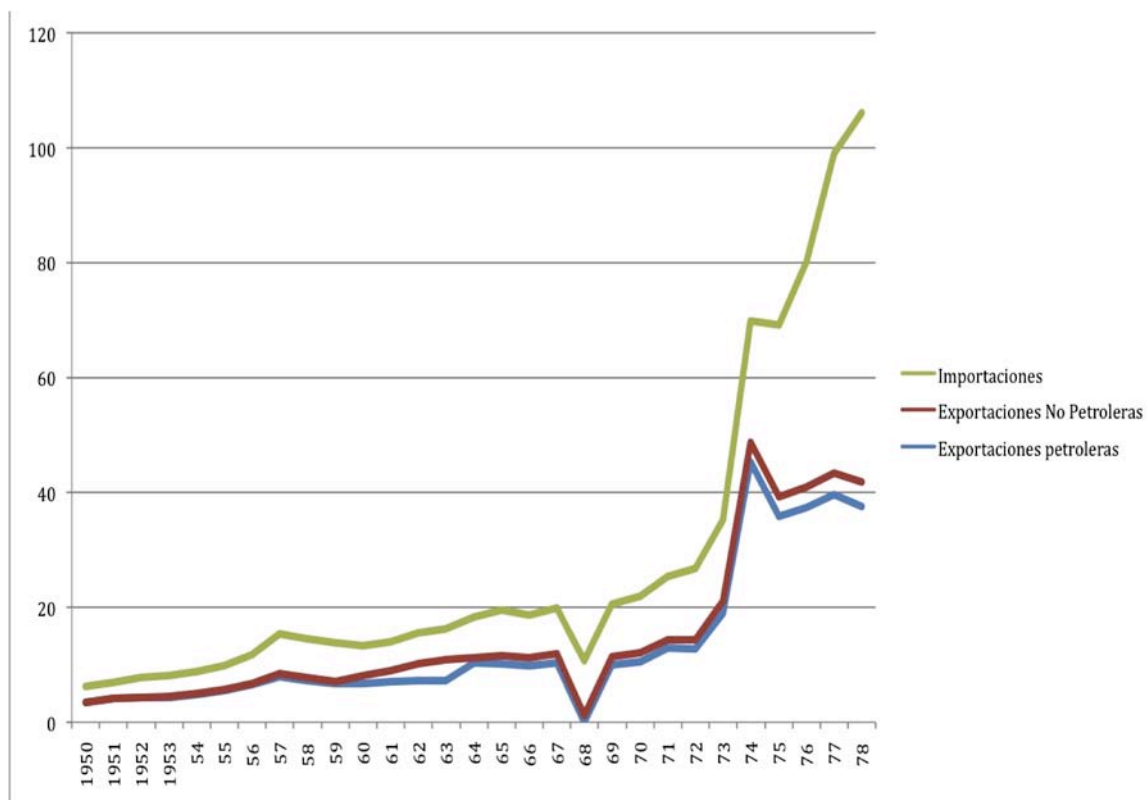
“Estos indicadores (entre otros) comprueban que los ingresos fiscales provenientes de las divisas petroleras no tienen contrapartida nacional significativa, siendo ínfima la cuantía que podría considerarse orgánica por derivarse del propio crecimiento de la economía” (Pérez Castillo, 2006).

Pérez Castillo reafirma la inquietante idea de su padre al incorporar el sistema económico en el problema venezolano, y no solo adosando responsabilidades a los agentes productivos.

“...cuando al sistema económico se le inyectan más recursos líquidos de origen externo de los que puede absorber productivamente, el excedente presiona sobre los precios por insuficiencia de oferta interna para satisfacer la inflada demanda monetaria. Las divisas acumuladas permiten aliviar la presión inflacionaria con importaciones, preferiblemente de bienes y servicios finales, contribuyendo a descapitalizar al país” (Pérez Castillo, 2006).

A continuación se expone el comportamiento del PIB petrolero en relación a la Agricultura y la Manufactura. En el gráfico 4 puede notarse cómo en 1973 las importaciones crecen de manera desproporcionada a los niveles relativamente estables que presentaban desde 1950. El efecto de los precios petroleros provocó un descentramiento de la importancia de las exportaciones no petroleras en relación a la nueva capacidad de consumo que experimentaba la sociedad.

Gráfico 4. Relación entre Exportaciones petroleras, no petroleras e Importaciones a precios corrientes en Miles de Millones de bolívares. 1950-1978. A partir de Antivero-BCV, 1994.



Los efectos estructurales del shock económico vivido desde el 73, tal como lo describió Pérez Alfonzo, no tuvo el impacto necesario en el discurso político de su época ni en las épocas por venir. El shock fue interpretado fundamentalmente como un problema de despilfarro y corrupción, y escasas veces desde la perspectiva del subsistema económico mismo. El discurso político venezolano rescató la imagen del pensador, sin embargo, paradójicamente, no se referían a sus ideas ni mucho menos le proveían de un marco interpretativo para la acción política. Pérez Alfonzo fue asimilado a la dinámica de la contienda político-electoral, donde ideas como “contener el gasto” o “recortar la producción para reducir la renta”, no eran atractivas para conseguir votantes. A continuación se ofrecen ejemplos del discurso político y académico que dominó el diagnóstico sobre el efecto de la renta petrolera en la sociedad.

“Poco significaba un superávit –como aquel ocasionado por la renta adicional proveniente de la realización petrolera- si no se instruían pautas de inversión fiscal que evitaran su desperdicio. No son pocas las evidencias que confirman la orientación estéril de muchas erogaciones públicas ordinarias. Basta señalar al respecto la proliferación del gasto burocrático, el incremento de los desembolsos gubernamentales en obras de insolvencia económica, la aplicación de los mismos recursos en infraestructuras suntuarias” (Malavé Mata, 1980: 263)

Nótese en estos discursos cómo se indican problemas de desorden, despilfarro y corrupción, como si provinieran de una maldad original en alma corrompida o emborrachada de los venezolanos, o bien en un tema de cultura ciudadana, sin explorar las perversiones en un marco mayor, de tipo estructural. Esta tendencia del discurso reubica a Pérez Alfonzo dentro de la imagen de un profeta contra el despilfarro, pero no como un economista que sugiere la contención del gasto o la renta por problemas de absorción que son estructurales al país:

“Frente al estilo relativamente dispendioso de los gobiernos que se sucedieron en el ejercicio del poder en aquellos años de inusitada prosperidad, el elevado e incontrolado endeudamiento, las donaciones a terceros países, las inversiones poco acertadas y la inquebrantable fe de que los precios del petróleo se incrementarían *ad infinitum*, surgieron sensatas observaciones (...) se les calificó ‘profetas del desastre’ (...) Pérez Alfonzo (...) pronosticó sin saciedad el fin al cual nos acercábamos (...) Se otorgaban generosas dádivas mientras se desatendía la solución de perentorias necesidades nacionales” (Crazut, 2006: 265).

El discurso de esa época hizo eco en los análisis hechos desde fuera de Venezuela, esto es, desdibujando los problemas de absorción y recalentamiento hacia un diagnóstico centralmente administrativo:

“El programa se ceñía a los patrones entonces en boga del desarrollismo a ultranza y ponía el acento en el sector secundario, ignorando los criterios liberales sobre el manejo cuidadoso de los recursos financieros, los cuales, a tenor de la coyuntura petrolera, el Gobierno y muchos fuera de él estimaban inagotables” (CIDOB, 2010).

Los textos reproducidos arriba son una muestra argumental clásica, de modo que es posible reconocer sus inflexiones a lo largo del discurso político de la IV República. La incapacidad de ver el problema como un problema subsistémico, esto es, no como un recambio de relaciones en la política, en virtudes y actores políticos, ni como un problema del gran sistema histórico capitalista, como se destacará en cierta izquierda y que continuará durante el período bolivariano (Mieres, 2010; Malavé Mata, 1980), sino como una enfermedad económica que es independiente de la ideología capitalista del gobierno o de las virtudes del liderazgo político, parece ser la señal característica del discurso desde la Gran Venezuela hasta la V República.

Se trata de un discurso cuyas inflexiones van a acompañar a la democracia venezolana desde entonces (Coronil, 1997). Carlos Andrés Pérez, el gran *artífice* del despilfarro lucía mágico, extraordinario y por tanto, innatural, opacando la respuesta económica de la industria y el sector agrícola del análisis. Pocos parecían atender con detalle los problemas propios a una oferta local que no podía crecer al ritmo de la nueva y galopante demanda.

“Pero entonces llegó el otro Pérez, Carlos Andrés Pérez, y encontramos la frase que nos definía. Estábamos construyendo la Gran Venezuela. Carlos Andrés Pérez no fue un presidente. Fue un mago, un mago capaz de propulsarnos hasta una alucinación que hacía palidecer por comparación el exhibicionismo de Pérez Jiménez ” (Cabrujas en Coronil, 1997).

El relato hacía difícil poner en contexto lo que señalaba Pérez Alfonzo acerca de la *imposibilidad* de sembrar del petróleo, traduciéndolo otra vez a simples problemas de política y escenario. Incluso fue corriente encontrar en autores de referencia sobre el pensamiento petrolero la idea de que Pérez Alfonzo abogaba por la siembra del petróleo, como su antecesor Uslar Pietri (Crazut, 2006:265).

Con ese caudal de dinero el gobierno compraba la ilusión de fortaleza política, cuando realmente se estaban empobreciendo los tejidos del emprendimiento social y económico, tanto por los problemas de absorción de divisas que experimentaba el país (creando sectores sociales económicamente más dependientes), como por la depredación que hacía el pactismo de sus espacios políticos y sociales naturales de desarrollo.

No es casual que Fernando Coronil encuentre precisamente en tres episodios de la historia venezolana, el Gomecismo, el Perezjimenismo y la Gran Venezuela, las fuentes primordiales de discursos que evidencian lo que él denomina “el Estado Mágico”, un Estado con el deber y los dones de proveer a los pisatarios de una geografía exuberante, de los interminables beneficios que les corresponden por naturaleza. Pero solo es en la Gran Venezuela, que Coronil detecta el comienzo de la conciencia de que todo el país estaba dominado por un gigantesco entramado de corrupción políticamente constituido alrededor del Estado (Coronil, 1997: 352).

En cualquier caso, se estaba gestando un proceso de profunda vulnerabilidad del subsistema ante la crisis por venir, que el modelo de pactos no podría controlar, aunque entonces luciese imbatible. Un proceso que permearía toda la estructura institucional y moral, producto del deterioro de los tejidos que el pactismo y las importaciones sustituyen falsamente.

Durante el *boom* petrolero que duró de 1973 a 1983 la renta petrolera excedió largamente la habilidad del país en absorber capital. La fortaleza del gobierno pronto se convirtió en debilidad estructural del Estado. Luego del llamado “Viernes Negro”, el 28 de Febrero de 1983, con la devaluación del bolívar, la capacidad distributiva del aparato de gobierno declinó.

Paradójicamente entonces, el modelo de pactos e importaciones que mantenía ilusoriamente la estabilidad política del subsistema, se prolongó, esta vez, para seguir manteniendo la ilusión sobre la creciente crisis social. Este proceso aceleró la depredación de los tejidos producidos por los emprendimientos sociales y económicos del país, los empobreció a una velocidad aún mayor, y los marginalizó de manera peligrosa del ámbito de acción del Estado.

4.10. El *pacto social* (1984-1989). La prolongación del modelo depredador sobre la crisis.

Carlos Andrés Pérez había sido el delfín de Betancourt e incluso su Ministro de Interiores. Pero Betancourt se opone a lo que él percibe como señales de voracidad y caudillismo personalista durante la presidencia de Pérez. Promueve la candidatura contraria de Luis Piñerúa Ordaz a la presidencia, pero AD pierde las elecciones ante Copei y el candidato de éste, Luis Herrera Campins, gana por segunda

vez para su partido las elecciones nacionales (González Medina, 2007). Betancourt dice, originalmente en inglés, la célebre frase “We Will Come Back”.

El período de Herrera Campins coincidió con la caída de los precios del crudo y con ello, la histórica fecha de la primera gran devaluación del signo monetario, el “Viernes Negro”. Los medios de comunicación se desmarcan como una fuerza de enorme beligerancia política en contra del Ejecutivo. Se desarrolla la crisis llamada de “sobre-dimensionamiento del Estado” (las divisas no permiten mantener la burocracia ni sus presupuestos, y se habla de reducir sus dimensiones, aun no realmente de reestructurarlo). El resultado es la aparición de un déficit creciente en la fuerza de los partidos políticos del pacto como intermediadores fundamentales entre sociedad civil y política. El déficit se traslada al sistema financiero cuando se reprime el aumento de las tasas de interés y se produce la primera gran fuga de divisas de la democracia.

Entonces Betancourt ve las condiciones de rediseñar un nuevo pacto, a dos tramos, a llamarse “el Pacto Social”:

“Se establece un pacto entre el buró sindical y Jaime Lusinchi, por el cual, se promovería a éste como siguiente candidato presidencial y en lo inmediato se conquistaría la dirección de AD en todo el país, colocando en la secretaría general a un miembro del buró sindical, además de garantizarle a los sindicalistas una altísima cuota en las listas de candidatos a cuerpos deliberantes. Adicionalmente, al ganar Lusinchi las elecciones se designaría como gobernadores de los estados a los secretarios generales regionales [de AD], quienes ocuparían los dos cargos simultáneamente, fusionándose de hecho la responsabilidad política y la oficial por primera vez, necesaria para producir lo que en esos momentos se planteaba como un intento de voltear a AD hacia sus perdidos orígenes” (González Medina, 2007).

En 1984, al final del período de Luis Herrera Campins, Lusinchi gana las elecciones (AD y Betancourt “came back”) y ha logrado incluir en el pacto político a los sindicatos, esto es, fundamentalmente, la CTV (La Confederación de Trabajadores de Venezuela, sindicato principal durante la IV República, dominado por AD). Entonces comienza el

segundo tramo: convocar a la burguesía a un pacto tripartito. Estado, burguesía y sindicatos⁵:

“[El Pacto Social]...plantea la factibilidad de alianza entre los trabajadores y empresarios que por naturaleza sean medianos y pequeños, sumados, en un esfuerzo sincrético de estratos sociales, tales como grupos universitarios, vecinales, etc. En su trasfondo político puede leerse el postulado de reunificación de fuerzas políticas progresistas en torno a los fines redistributivos que desde hace mucho tiempo se espera del Estado” (González Medina, 2007).

Los postulados del Pacto Social no ocultan que se trata de un pacto anticrisis basado en la creación de nuevas instancias de poder y su repartición: regenerar legitimidad política promoviendo la participación de nuevas “fuerzas vivas” (operadores políticos escenaristas) como recurso contra la crisis económica.

Además del Pacto Social, se creó la COPRE, o Comisión para la Reforma del Estado, en la que se convocaron sectores diversos de la vida pública, incluyendo la izquierda, los universitarios y el sector cultura, para orientar y promover la reforma del Estado. Está bien debatido que este intento movió más los discursos que las transformaciones sugeridas, tal como se estableció en el reporte sobre el tema “El Tejido de Penélope” (Gómez Calcaño y López Maya, 1990).

Sin embargo la COPRE promovió la idea de que las regiones podían elegir a sus representantes del Ejecutivo regional y que era posible “la descentralización”, o la remisión de administraciones y presupuestos a las regiones.

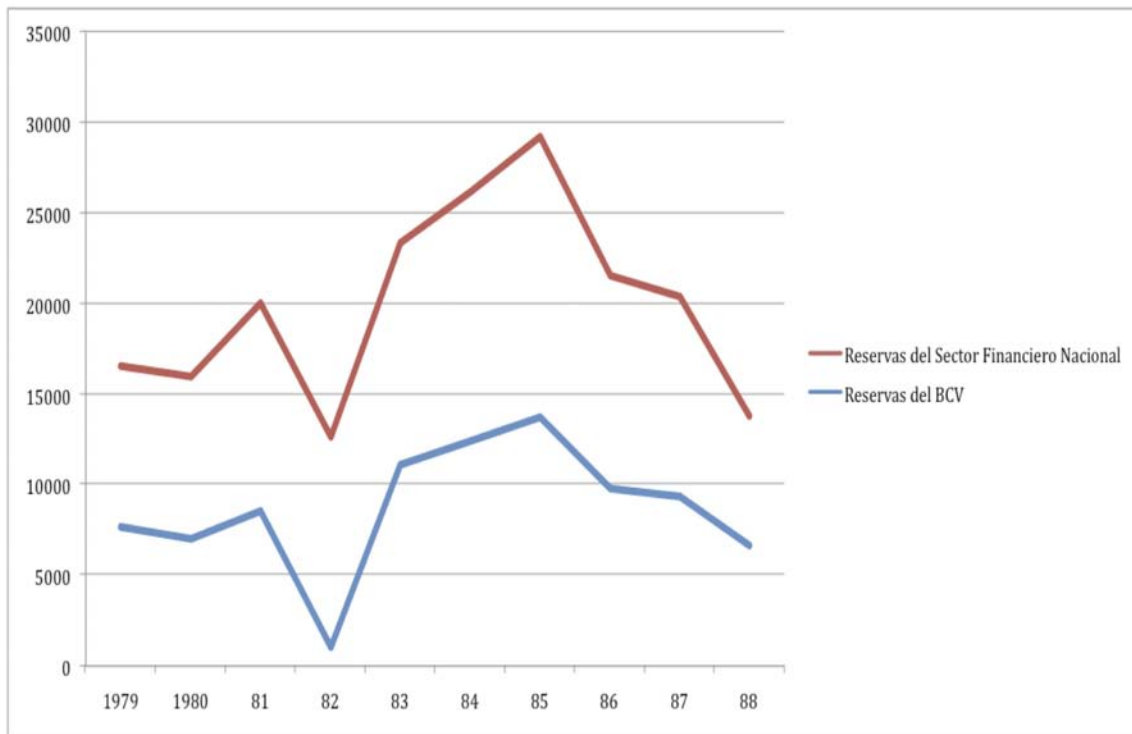
La articulación de un reformado mapa político, nuevamente, no se hizo acompañar de cambios sustanciales en lo macroeconómico, ni de políticas conscientes del nivel subsistémico del problema ni, menos aún, de políticas de participación directa de la población organizada. El modelo solo bloqueaba, ya “en enfermedad” la posibilidad de cambios sociopolíticos, por la vía de remitir cuotas de poder a instituciones que, a fin de cuentas, ya formaban parte, desde los inicios de la IV República, de la misma AD, o de la Guanábana (el Pacto de Punto Fijo).

⁵ En los planes del nuevo planificador egresado de Massachussets, Matos Azócar, encargado de diseñar el Pacto Social, se subrayaba la importancia de ingresar a las Pequeñas y Medianas Industrias, cosa que no sucede (González Medina, 2007).

“A finales de los 80, el Gobierno de Lusinchi alcanzó una ilusión de crecimiento que se basó en un nivel de gastos que superaba los recursos de los que disponía y logró contener las distorsiones, por algún tiempo, a través de los controles de precios y del tipo de cambio. El esquema colapsó en enero de 1989. Sobrevino una maxidevaluación, la inflación se disparó hasta 81% y la economía se contrajo 10% (Bottome, 2008).

En el gráfico 5 se aprecia el derrumbe de las reservas internacionales alcanzadas por los gobiernos anteriores: se seguía importando, se seguían destruyendo los emprendimientos internos y los emprendimientos sociales y políticos sucumbían ante el cerrado tablero del Pacto Social. Nótese en el gráfico que las reservas descienden de 1981 a 1982 por efectos de la caída de los precios del petróleo. Con la devaluación en febrero del 83, el gobierno de Herrera Campins captura reservas para el país, al cual se suma un breve repunte en los precios del hidrocarburo. En el 84 Lusinchi gana las elecciones y se activa el Pacto Social. Nótese que a partir del 85 las reservas son reducidas por debajo de los niveles pre-devaluación, hasta el final de su período en 1988. El Estado procura mantener el pacto de gobernabilidad financiándolo con el dinero ahorrado por la devaluación, arriesgando al país a una nueva devaluación y a una mayor contracción de la economía.

Gráfico 5. Reservas internacionales del sector financiero nacional y del Banco Central de Venezuela. 1979-1988 . A partir de Antivero-BCV, 1994.



El resultado fue más que visible en 1989, con la salida de Lusinchí y la entrada del nuevo gobierno de Carlos Andrés Pérez.

“Aunque todos ellos funcionaron, más o menos, por un tiempo, los controles del Gobierno de Lusinchí fracasaron a principios de 1989, desencadenándose una profunda recesión (la economía no petrolera cayó 9,6%), una devaluación masiva (de Bs.7,50:\$ y Bs.14,50:\$ a Bs.43:\$) y una inflación galopante (81%). Es más, el Banco Central no pudo honrar el grueso de las cartas de crédito por un monto de \$6,9 millardos que estaban pendientes para ese momento, viéndose muchos negocios forzados a la quiebra” (Bottome, 2008).

Dilapidadas las reservas internacionales, el FMI quedó a la cabeza de la política económica nacional.

4.11. La *Concertación* (1989-1993)

Carlos Andrés Pérez, como se ha señalado, volvió a ganar las elecciones en diciembre de 1988. La historia siguiente es muy conocida en el ambiente político venezolano actual. Semanas después de la toma de posesión en febrero de 1989 el Presidente anuncia un nuevo pacto, la *Concertación*, el cual se va a acompañar de un crudo paquete de medidas neoliberales basadas en la ilusión de paz que producía el escenario pactista. Tales medidas no lograrían aplicarse explícitamente hasta la Agenda Venezuela en la mitad del segundo mandato de Caldera, en 1995, por causa del inicio de un nuevo ciclo de convulsiones sociales. El solo anuncio de “el paquete” y el aumento del precio de la gasolina en 1989, provocó violentas reacciones y manifestaciones en Caracas. La fractura entre sociedad política y civil, antes solapada por los pactos y los ingresos petroleros pasó a protagonizar la escena política. Allí sucedió lo que se repetiría casi modélicamente a lo largo de muchos otros países latinoamericanos como Bolivia, Argentina o Brasil, en respuesta al “paquete neoliberal” (Programa de Ajustes Estructurales) del FMI: movilizaciones, saqueos y represión policial (Kozloff, 2008: 5).

El 28 de febrero de 1989, el ejército venezolano es sacado a la calle para reprimir las revueltas y asesina ese día, y durante los días siguientes por desobediencia al “toque de queda” a un número alto y aún hoy indeterminado de personas. El número de muertos varía dependiendo de la fuente, entre el número oficial de 600 y el de 3000 ciudadanos en el comentario popular (COFAVIC, 2012)⁶.

El paquete neoliberal es congelado, pero cesa en buena medida la inversión estatal y el país va a la deriva. En el hasta entonces último pacto, la *Concertación*, previsto para el “irremediable” contexto neoliberal, el Programa de Ajustes Estructurales no encontraba maneras de cristalizarse.

En Febrero de 1992 se produce el levantamiento militar que intentó derrocar al presidente de la *Concertación*. Entonces Hugo Chávez, un teniente coronel junto a otros cuadros medios de las Fuerzas Armadas

⁶ COFAVIC, el Comité de Familiares Víctimas de Sucesos de Febrero y Marzo de 1989, que jugó un papel referencial entonces, reza al respecto en su página: “Sin embargo, el número oficial de víctimas quedó desvirtuado por la posterior aparición de fosas comunes como La Peste, donde aparecieron otros 68 cuerpos sin identificar, fuera de la lista oficial. Nunca pudo conocerse la cifra exacta de civiles muertos en estos sucesos” (COFAVIC, 2012).

intentaban representarse en la escena política como portadores de un discurso nodalmente diferente de los diagnósticos y las alternativas políticas dominantes (Monedero, 2009 a: 9). La revuelta militar se convierte, en manos de los actores institucionales, como el entonces senador Caldera, en una válvula de escape al descontento.

“López Maya (1999) mostró que el período siguiente estuvo marcado por diversas protestas que manifestaban que “los partidos políticos y los sindicatos habían estado perdiendo su dinamismo y capacidad para la representación y la mediación popular, desgastados por la manera en que ejercieron el poder en el contexto de abundante dinero y recursos del Petro-Estado de los 70” (1999: 212). Habiéndoles dicho por 50 años que el país era rico y ahora completamente soberano sobre su petróleo, ¿Cómo los venezolanos podían no concluir que su empobrecimiento fue culpa de los políticos y la élite que se había vinculado tan de cerca de ellos? Durante la tormentosa sesión parlamentaria que siguió al levantamiento militar del 4 de Febrero, el expresidente y senador vitalicio Caldera osó decir que el emperador estaba desnudo. Entre los crecientes discursos condenando el golpe, él reveló que el pueblo no se había echado a las calles en defensa de la Democracia, un contraste notable con los eventos de la Europa del Este, el cono sur sudamericano, Filipinas, y la Plaza de Tiananmen (ver su discurso reproducido en el Universal, 4 de Febrero, 2001). El Congreso finalmente removió a Pérez de su cargo, pero los cargos relativamente inconsecuentes de delito desnudaron finamente la acción como un intento de remover a un presidente altamente impopular de su cargo, antes del colapso en conjunto del puntofijismo (Hellinger, 2002).

4.12. La *Convergencia*. El último pacto.

Las elecciones de 1993 hicieron latente la cosecha de la crisis macroeconómica, el derrumbe de los partidos tradicionales, la masacre de 1989, el levantamiento militar conducido por el teniente Chávez en el 92, la crisis de los servicios y la pobreza creciente. Era eso y más. De los sindicatos rebeldes anti-CTV, con inspiración revolucionaria, surge un partido que lucía haber ganado las elecciones, Causa R.

“Actas enteras fueron anuladas debido a ‘irregularidades’ en áreas donde Causa R se fortalecía. Urnas que contenían resultados favorables a Causa R fueron encontradas entre la basura, Julia Buxton, quien estudió esas elecciones de cerca, concluyó: ‘Esta marginación no fue debida a falle de parte del electorado, es debida a la politización de los miembros de mesa quienes evitaron que la tarea normal de contar votos fuera realizada de manera justa y neutral’(2001: 89)”. (Hellinger, 2002).

Simultáneamente Caldera gana formalmente las elecciones apoyado por el *chiripero*, un numeroso grupo de pequeños partidos, del PCV al perezjimenismo, salpicado de liderazgos regionales, incluido el partido que el mismo Caldera regentaba, Convergencia, una división de Copei que se ha llevado a su fundador y líder histórico. Entre los pequeños partidos está el MAS, la división del PCV en el que había participado Pérez Alfonzo en sus últimos años, y que tenía derecho, por proporción electoral, a un miembro de mesa de votaciones (a diferencia de Causa R), lo que garantizaba acuerdos en la repartición de votos escrutados pero no asentados en las actas electorales.

La Convergencia, más que un partido político, era el nuevo proyecto de pacificación de Caldera, el pacto articulador de numerosas nuevas fuerzas políticas que parecían representar mejor la sociedad que en los experimentos pasados del Pacto Social y la *Concertación*. Numerosos analistas opinan que el paso específico del líder y el marco de la *Convergencia* sí lograron calmar la crisis política, durante el tiempo que duró su período. Sin embargo, la situación empeoró.

“...las previsiones electorales de Caldera no se cumplieron, en lo político-institucional, si bien se alcanzó una cierta paz, tampoco fue remediada la situación de deterioro de las instituciones fundamentales del Estado y de deslegitimación del sistema político...”

Sin embargo, el drama no solo anidaba el ámbito político y ya se había convertido, socialmente, en una bomba de tiempo. Los problemas de inseguridad alimentaria estaban mostrando su peor rostro:

“...Con una inflación acumulada de más de 800%, que ha sido la más alta de periodo constitucional alguno, los principales indicadores sociales del gobierno de Caldera continuaron su tendencia al deterioro. Para junio de 1997, del total de

4.740.250 hogares, 2.122.016 se encontraban en situación de pobreza; de ellos, 895.542 en situación de pobreza extrema (Revista Sic, 1997). O sea, el 44,76% de los hogares venezolanos no cuenta con ingresos para satisfacer sus necesidades básicas, y el 18,89% no llega a cubrir sus necesidades alimentarias. El Programa Venezolano de Acción Educación en Derechos Humanos (Provea) calcula que para 1998 el 15% de los venezolanos se encuentra en condición de pobreza atroz, entendiéndolo por ello a quienes viven a la intemperie y están excluidos de cualquier política social. En lo relativo al mercado laboral, el desempleo abierto se ubicó por encima del 10% como promedio anual a lo largo del periodo, con cerca de la mitad de la población económicamente activa trabajando en el sector informal de la economía (IESA 1998). Por otra parte, según indicadores sociales proporcionados por Provea, entre 1993 y 1997 la mortalidad por desnutrición se duplicó para ubicarse en el último año en 993 por cada 100.000 habitantes. En términos del deterioro de los servicios públicos como educación y salud, el 70% de los estudiantes que ingresan a la educación primaria no llegan a concluir el noveno grado, y 8 de cada 10 alumnos que ingresan a la universidad provienen de la educación privada. En las zonas donde se ubica la población más pobre, la tasa de mortalidad infantil es 2,5 veces más alta que las tasas nacionales; la esperanza de vida al nacer del estrato V, el más pobre, es 12 años menor que el de los estratos I y II; el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social estima que el 30% de la población no tiene acceso a los servicios de salud” (Lander y López Maya, 1999).

Luego de agotar la búsqueda de nuevos caminos en dos años, evitando restaurar la agenda económica recetada por el FMI y que había sentenciado la muerte de la *Concertación*, el gobierno da un viraje hacia el neoliberalismo *fondomonetarista* y crea la Agenda Venezuela en 1995, dirigida por su ministro de planificación Teodoro Petkoff (paradójicamente, exguerrillero comunista y dirigente emblemático del MAS, el mismo partido socialista escindido del PCV y que ahora apoyaba a Convergencia).

No muy diferente de El Gran Viraje de la *Concertación* de Pérez, el líder nacionalista y el líder socialista comienzan un programa de

privatizaciones con el fin de estimular la inversión privada transnacional (Petkoff, 1997). También prepararon, aunque estaba formalmente fuera de la Agenda Venezuela, la llamada *apertura petrolera* junto a Luis Giusti, entonces presidente de PDVSA. La apertura consistía en seguir la línea de Sosa Pietri, el presidente de PDVSA de la *Concertación*: traicionar los acuerdos de la OPEP para bajar precios al mercado mundial y preparar un plan de venta de activos de la principal empresa petrolera a mediano plazo (Mendoza Potellá, 1995).

En términos de las políticas alimentarias sociales y productivas, ya se identificaron algunos de sus resultados en el capítulo 2, y se hará mayor precisión en el contexto de las políticas públicas la IV República en el epígrafe 4.16.

4.13. El Estado Mágico.

No es posible entender el debilitamiento del Estado venezolano sin comprender qué tipos de quiebras se produjeron en las percepciones culturales de sus ciudadanos y cómo la imposibilidad de superar el pactismo por la vía de la participación fue creando un ambiente cada vez más desesperanzador. La relación entre sociedad civil y Estado tiene su base en los juegos simbólicos entre Estado, riqueza, modernidad y generalidad ilusoria.

Fernando Coronil explica que en los estudios sociales sobre Venezuela la historia ha predominado sobre la geografía. Y el tiempo sobre el espacio. Esto impide tener una idea de conjunto. El petróleo, por el contrario, hace posible comprender la relación entre naturaleza y sociedad para el caso venezolano.

Durante el período de Juan Vicente Gómez (1908-1935) se produjeron hechos sin precedentes no sólo en Venezuela sino en América Latina: una política petrolera liberal, una producción sin precedentes encauzada de manera casi absoluta por el Estado, dos empresas, la Standard Oil y la Shell controlando el 85% de las extracciones y la consecuente promesa por parte de ese Estado en procurar paz social.

Ello permitió la aparición de un Estado con una enorme capacidad inédita de afectar a la sociedad:

“En la medida en que el petróleo se expandía, el centro de gravedad de la economía se trasladó del suelo cultivado al subsuelo existente naturalmente, de productores agrícolas privados al Estado como amo y señor” (Coronil, 1997:83)

La imagen de Gómez formó parte de este nuevo paisaje:

“Su figura y el Estado que representaba fue elevado por encima de la sociedad como un agente trascendental, y su sacralización fue proyectada como la fuente original de estos poderes y única expresión de la voluntad nacional.” (Coronil, 1997:84).

De lo cual se desprende toda una definición del Estado venezolano:

“En la medida en que nuevos sectores sociales procuraron cambiar el Estado, no solo cambiar sus líderes, las luchas políticas se hicieron más propiamente luchas sobre política”... “El petróleo fue el centro de estas visiones. Mientras los negocios petroleros se convirtieron en negocios de Estado, las políticas petroleras se convirtieron en negocios de política.” (Coronil, 1997:84).

Entonces se produce la composición de una realidad mitificada. Venezuela se muestra a sí misma con dos cuerpos: uno natural (correspondiente a la fuente natural de sus riquezas) y el cuerpo político (su ciudadanía). Los problemas de soberanía frente a colonizadores, imperios y la ambición extranjera en general corresponden a la violación del cuerpo de riquezas, lo que a su vez empobrece al cuerpo de los ciudadanos, el pueblo.

Coronil se reúne a través de este diagnóstico con Jessop: la objetivación del Estado no solo simboliza relaciones sociales “sino que es el medio a través del cual estas relaciones fueron constituidas” (Coronil, 1997:116).

La idea de Democracia ancló tempranamente en la imaginación nacional, y el motor que la impulsó fue la promesa de que el pueblo participaría de esa riqueza. La democracia cumpliría la promesa de reunir del cuerpo político con el físico-natural. La tensión de los dos cuerpos dio a lugar a un prolongado “sainete”, sobre el que los sectores políticos del país juegan cada quien su papel (Coronil, 1997:165).

De ahí que la imagen de la persona que ocupa el centro del poder estatal tendría la *magia* de convertir el líquido de la riqueza en la imagen de la civilización (la cual no es más que la copia del modelo de países que ya llegaron al futuro). Esto es el Estado Mágico: la percepción determinante de que el Estado es el todopoderoso mediador entre la riqueza (la naturaleza abundante) y los ciudadanos (Coronil, 1997:229).

Esta posibilidad única que brinda la riqueza geográfica permitiría superar el destino de otros países latinoamericanos a repetir de su propia mano las estructuras de dominación.

Sin embargo, durante el primer mandato de Carlos Andrés Pérez (1974-1979) sucede un caso impactante de corrupción, y para la sociedad de entonces fue la primera marca que reveló el funcionamiento interno del mito: el caso Carmona.

Para Coronil este hecho es fuente de nuevas categorías y le permite descender su análisis de los cuerpos generales del discurso histórico antropológico, a la dimensión situacional.

Pero hay una pieza que falta. Es interpretable que para que todo esto se produzca en una democracia, es necesario una identidad de la población con el deseo de formar parte tributaria del mito de la riqueza. Esto es, el deseo del cuerpo ciudadano en reunirse con el cuerpo natural, porque le corresponde cosmogónicamente. Este es el momento en que el Estado y la Nación se construyen mutuamente como una unidad, pero no alrededor del mito liberal de Estado, sino alrededor del mito del Estado Mágico, esto es, la metáfora de un Estado que sería capaz de sacar de su chistera los conejos que alimentan los estómagos y los sueños de todos un país. Es entonces que el modelo pactista, descrito en capítulos anteriores, se articula:

“Las relaciones de poder existentes no fueron transformadas sino constantemente reproducidas y realineadas. Estos cambios eran presentados a menudo como una transformación fundamental aunque su verdadero significado aún se mantenía oculto... las excepciones de la regla fueron regla. El ejercicio del poder, basado en este fluido modo de construcción social de la realidad, hizo estructurado al contingente” (Coronil, 1997: 359).

El pactismo no se cimentaría solamente en el poder del petróleo, sino su función cohesionadora a través de los negocios que derivan directa e indirectamente del petróleo y concretamente, de la corrupción. De tal modo que los negocios dan cuerpo y estructura a la clase dominante venezolana a través de complicidades comunes; la competencia es tendencialmente desplazada por la importancia del clivaje entre los hombres de negocio y los políticos. Dado que la idea de competencia siempre supone “una alianza fundamental para preservar las condiciones que hicieron posible la competencia” (Coronil, 1997: 358). Tal alianza alrededor de los beneficios del petróleo, obtenidos por medios políticos, reduce las diferencias entre sus miembros en competencia. Son, a la larga, amistades o compañerismos lo que permite resolver las diferencias internas. El dinero del petróleo sirve como cemento de esas relaciones y como disolvente de cualquier intento de minarlas.

Durante el boom petrolero de la Gran Venezuela un acontecimiento policial, la “muerte del abogado Carmona”, habría impulsado un giro perceptivo en la sociedad revelando por primera vez el funcionamiento los “anillos de poder”, una aproximación categorial a la manera cómo se articulan las cadenas de protección del delito de corrupción, en diferentes niveles, desde la policía hasta el mismo presidente Pérez, desde la burguesía, las familias italianas *nuevorricas*, la burocracia, los dos grandes partidos, hasta los medios de comunicación. El caso Carmona indicó al público hasta qué medida el mito del Estado como fuente mágica de riquezas predominaba sobre su funcionamiento explícito y formal.

La visión que privaba anteriormente de una Venezuela *normal y decente*...

“...fue presentada como mera apariencia, una fachada que conciliaba un vasto inframundo de corrupción. Este inframundo no estaba restringido a un círculo pequeño. Más bien el caso Carmona fue definido como un microcosmos de la nación entera... La definición de Estado como locus de corrupción condujo a una proyección en toda la sociedad de las cualidades que se le atribuían.” (Coronil, 1997: 349).

Años después, con el auge del neoliberalismo y la crisis económica que amanece en Venezuela con el Viernes Negro (febrero de 1983), el

proceso de modernización continuó más allá, pero solo produjo más desigualdad.

En vez de disolver el mito del progreso, la desmitificación del progreso nacional llevó al comienzo de la mitificación del progreso individual (léase, el fetiche del poder del individualismo frente a la masa). Esto intensificó una creciente polarización nacional, y separó a la sociedad culturalmente en dos partes. Al tiempo que las élites internacionalizadas se mueven fácilmente hacia los centros metropolitanos, la mayoría está restringida a un creciente empobrecimiento social, marcado por el abandono y la negligencia.

Finalmente Coronil se distancia del tema venezolano y abre su diagnóstico al problema del Estado periférico:

“La tragedia de la modernidad es que su promesa de progreso universal no puede ser completada en los términos en que ha sido acuñada” (Coronil, 1997: 385).

La generalidad ilusoria generada por el Estado Mágico indica problemas de democracia y sus quiebras en el mundo de lo simbólico. De este proceso, como de los otros descritos a lo largo de este capítulo, se desprende la medida de la importancia de la participación como práctica regeneradora de los tejidos debilitados por el petróleo y el pactismo.

4.14. ¿Se puede sembrar el petróleo? La *siembra petrolera*, el *excremento del diablo* y las *oligarquías*.

El despilfarro general se tiende a atribuir a vicios o defectos de los responsables en el gobierno, o en el sector privado aprovechador del petróleo. Así se mantienen las ilusorias esperanzas de continuar tras una siembra del petróleo.

Juan Pablo Pérez Alfonzo en
Hundiéndonos en el Excremento del Diablo

La política alimentaria bolivariana es también el resultado de una larga y profusa discusión sobre cómo resolver la dependencia petrolera, y sobre cómo convertirla en prosperidad económico-productiva entre sus habitantes.

Los orígenes de esta discusión datan de los escritos de Alberto Adriani, ministro de los gobiernos gomecistas, sobre los problemas de Venezuela como cónclave de un sistema productivo internacional que no lograba transferir las riquezas a los tejidos del resto del país (Adriani, 1990 [1938]).

Sin embargo, como se muestra en otros capítulos de esta misma tesis, el problema de la absorción de recursos y la generación de desarrollo aún no había mostrado todos sus efectos adversos. Desde la Ley de Hidrocarburos de los años 20 hasta 1973 la relación entre los ingresos petroleros y el resto de la economía no era una relación depredadora y, como hemos visto, algunos estudios sostienen que el PIB no petrolero lograba crecer cuando crecía el petrolero (Adriani, 1990 [1938]: 32; Mommer, 1990; García Larralde, 2005:121).

Sin embargo, a partir del salto en los precios de 1973, contextualizado por el embargo de la Guerra del Yom Kipur, la interrupción siria del oleoducto trans-arábigo en 1970 y el recorte de producción de Libia en 1974 (Vallenilla, 1998:85), se acumuló un importante ingreso fiscal de petrodólares que no solamente no pudo ser absorbido sino que impactó negativamente la continuidad de la agricultura y la manufactura no petrolera (ver gráfico 4). Dada la presencia y luego propiedad estatal en la industria petrolera, este ingreso se produjo por la vía del gasto público.

A partir del *trienio*, en el discurso de Betancourt la siembra petrolera se orientó hacia los problemas de “hambre” y “miseria”, dada la naturaleza estratégica y su impacto en el bienestar social mínimo de la población. La *renta petrolera* adquirió, entonces, además de obligaciones con el aparato productivo, un carácter redistributivo .

A lo largo del pensamiento académico, político y empresarial sobre la relación entre el petróleo, la economía, la sociedad y la cultura venezolana surge y se consolida la idea de “sembrar el petróleo” como moneda de cambio desde los años 40 del siglo XX (Baptista y Mommer, 1992) hasta, al menos, el 2011 (Giordani, 2011).

Esta metáfora originalmente fue concebida por el Ministro Uslar Pietri a principios de los años 40 para ilustrar la necesidad de convertir la producción petrolera en agrícola (Úslar Pietri, 1936). Los principios ya

habían sido desarrollados y destacados por el mismo Adriani y en ellos la obligación de sembrar petróleo se sostiene en la extinguibilidad del recurso:

“Adriani y Uslar Pietri dicen que solo la industria es reproductiva... por eso ‘sembrar el petróleo’, porque es un depósito que se acaba” (Mendoza Potellá, 2010).

Luego, el uso de la metáfora se extendió a los demás sectores de la economía. La importancia de “sembrar el petróleo” es constatada en el espíritu y la letra en cada uno de los planes gubernamentales desde los años 40 (Crazut, 2005).

De hecho, en la V República dos ejemplos son el Plan de Desarrollo productivo impulsado por PDVSA en el 2007 el cual se llamó “Siembra Petrolera” (PDVSA SA. y sus Filiales, 2008), y el Proyecto de Ley de Endeudamiento del Ministerio de Planificación para el 2011 que se llama “Abono a la Siembra Petrolera” (Giordani, 2011).

Pero a pesar del aparente consenso la idea de “Sembrar el Petróleo” tuvo varias vertientes:

1. La vertiente optimista de los primeros años de la industrialización, el desarrollismo Perezjimenista y el desarrollismo en tiempos de la Democracia de la IV República (Vilda, 2004). Numerosos estudios se han hecho sobre esta vertiente, por cuanto forma parte de los discursos más relevantes de los gobiernos venezolanos durante al menos 60 años (Baptista y Mommer, 1992; Cartay, 1998; Vallenilla, 1998; Crazut, 2006).

Esta primera vertiente intenta interpretar los problemas de absorción como la consecuencia de una actitud política displicente, despilfarradora e implícitamente interesada en mantener la dependencia los procesos de enriquecimiento establecidos en el subsistema. De este modo, los problemas de absorción reposan en problemas de la estructura económica, tal como fue entendida por el desarrollismo cepalino y en la carencia de una cultura política y ciudadana con la habilidad de integrar a la sociedad civil con el Estado (España, 1989; Landier y López Maya, 1999; Arenas, 2001; Molina y Álvarez Díaz, 2002; Molina y Pérez, 2004; Vilda, 2004).

2. La vertiente de cierta izquierda desde los años 30 del siglo XX hasta el 2011 la cual acusa a las oligarquías nacionales e internacionales de impedir la distribución de la renta petrolera que produciría el desarrollo (Betancourt, 1937; Mieres, 2010 [1976]; Malavé Mata, 1980; Mendoza Potellá, 1995; Muller Rojas y Rodríguez Araque, 2009). La discusión se desplazó al área de la antropología y la cultura donde tuvo representantes (Quintero, 1972; 1985) y una sub-vertiente que interpreta la imposibilidad de crecimiento como un problema propio del proyecto modernista (Coronil, 2008; Miranda, 2011).

La evolución de la vertiente “anti-oligarquía” también se alimenta de este discurso, pero fue consolidándose hacia una importante generación de autores de orientación marxista como Ramón Rivero (Rivero, 1979), Francisco Mieres (Mieres, 2010) y la primera época de Carlos Mendoza Potellá (Mendoza Potellá, 1995). Ellos fueron, de algún modo, herederos del diagnóstico más radical de Pérez Alfonso acerca de las imposibilidades estructurales de sembrar el petróleo, pero, a diferencia de él, no encontraban la solución en la reducción del ingreso petrolero, sino en la redirección del ingreso hacia el desarrollo social y económico de las clases más excluidas del país, así como en la lucha contra el rol “entreguista” de los gobiernos productores del Tercer Mundo ante los intereses de los consumidores centrales de hidrocarburos.

En otras palabras, encontraban la solución en la toma del poder en el Estado, con el fin de dirigir políticas hacia el socialismo anti-monopólico, antiimperialista y democrático: solo una transformación profunda en las estructuras de intereses podría permitir “la siembra petrolera”.

Las banderas de la izquierda electoral y académica incluían para sí esta renovación del pensamiento petrolero (Mieres, 1976) antes del primer triunfo de Chávez. Estas ideas, por muchos años fuera del juego político gubernamental, encontraron eco en el consistente fracaso de las políticas de los gobiernos democráticos de la IV República y su esquema pactista en provocar desarrollo y mayor bienestar social. El triunfo de Hugo Chávez en las elecciones de Diciembre de 1998, y la convocatoria de una Asamblea Constituyente (1999-2000), permitieron hacer eco de esas ideas y finalmente encontraron cuerpo en políticas públicas como el SSSA.

Con el objetivo de reconocer la vertiente “anti-oligarquía” de la Siembra Petrolera en el pensamiento bolivariano, destacamos el análisis de Alí Rodríguez, ex-presidente de PDVSA y ex Ministro de Petróleo durante la V República, junto a Muller Rojas (fallecido), ex-presidente del MBR200, el Movimiento V República y el Partido Socialista Unido de Venezuela, los partidos abanderados por el presidente Chávez en su carrera política.

En “Ideas socioeconómicas y políticas para debatir el socialismo venezolano” (2009) Rodríguez Araque y Muller Rojas describen la relación entre “la herencia rentista” y la revolución bolivariana. Los planteamientos se enfocan en objetivos de largo plazo, tal como la transformación del modelo de acumulación a escala nacional y regional⁷.

“De manera que, con toda propiedad, se puede hablar de un capitalismo rentístico, lo que resulta muy peculiar dentro de los procesos de acumulación capitalista en el mundo. Este mecanismo de acumulación dio lugar a una burguesía parasitaria...” (Rodríguez Araque y Müller Rojas, 2009:22).

Tal capitalismo gira con los demás países de la región hacia el neoliberalismo. En ese proceso los activos y los derechos obtenidos bajo el capitalismo rentístico fueron sistemáticamente despojados a la ciudadanía⁸ : primero se produjo la “apertura” para los productos agropecuarios, luego la creación de las condiciones políticas para la ofensiva neoliberal, luego la privatización de la industria y la internacionalización, luego la ofensiva jurídica dentro del Parlamento y finalmente, PDVSA empezó a reducir su liquidez desde adentro con el fin de venderse al capital extranjero...

“Pero todo cambió a partir (...) de 1998 con Hugo Chávez Frías, quien llegó al poder para abrir una nueva etapa en la historia política del país, la del establecimiento de la soberanía nacional en todos los

⁷ La editora y compiladora del análisis, Margarita López Maya, escribe sobre ese artículo: “apenas se esbozan principios y enunciados para algunas cuestiones medulares” (López Maya, 2009:19).

⁸ Mommer (1990) y España (1989) denominaron a este período “post-rentístico”.

ámbitos de la nación y sus relaciones” (Rodríguez Araque y Müller Rojas, 2009:24).

De tal modo que los problemas de desarrollo estarían vinculados a un plan de enriquecimiento a corto y mediano plazo por parte de oligarquías nacionales e internacionales que habrían utilizado el aparato rentístico para su provecho. El modelo pactista sería la estrategia de la sociedad política para permitir el enriquecimiento de estas oligarquías.

Rodríguez Araque y Müller Rojas explican cómo el rentismo produjo una “burocracia parasitaria” en la IV República. La explicación consiste en reconocer los mecanismos que, según ellos, hicieron posible una oligarquía a la sombra del rentismo. Estos mecanismos son fundamentalmente políticos, y son producidos por el Estado de la IV República voluntaria y progresivamente.

La perspectiva de Rodríguez Araque y Müller Rojas coincide con la postura de Betancourt en los años 30. Los autores reconocen que las nuevas y viejas oligarquías se convirtieron en nuevos actores económicos “parasitarios”, dependientes del Gasto Público, y luego dieron forma política al modelo de Estado:

“Ese mecanismo de acumulación [el rentismo] dio lugar a la formación de una burguesía parasitaria, conjuntamente con el enriquecimiento de castas propietarias y comerciantes, en conjunto agregadas en una estructura corporativa *sui generis*, cuya acumulación se nutrió principalmente de esa renta por parte del Estado, privatizada a través de los mecanismos ya antes comentados, como la sobrevaluación de la moneda, la capitalización de la casi totalidad de las ganancias debido a la bajísima nula [posible error del original] presión tributaria, el otorgamiento de créditos a bajo interés así como distintas políticas de subsidios a la producción, la protección de su producción estableciendo virtualmente un mercado cautivo, distintos mecanismos de corrupción y el favoritismo político, junto a muchos otros (...) De manera creciente, una vez alcanzado cierto nivel de desarrollo, sectores favorecidos de esa burguesía fueron participando directamente, o a través de sus agentes, muy

notablemente del sector financiero, en la conducción económica y política del Estado con lo cual tomaban no solamente el control de la economía, sino también de la política” (Rodríguez Araque y Muller Rojas, 2009: 22-23).

3. La tercera y última vertiente consideró la imposibilidad absoluta de “sembrar el petróleo” pues el impacto de los altos ingresos petroleros siempre paralizaría el esfuerzo productivo (Pérez Alfonso, 1976; Pérez Castillo, 2006; Mendoza Potellá, 2010).

Pérez Alfonso no parecía estar en contra de las ideas anti-oligarquía, pero acentuaba el problema no en el papel de sectores políticos, sino en el efecto mismo del gasto en la sociedad. Esta simpatía teórica también era mutua, por lo que la izquierda anti-oligarquía procura reinterpretar a Pérez Alfonso a su favor.

Así lo hace Mieres en su introducción al libro “Hundiéndonos en el Excremento del Diablo” de Pérez Alfonso:

“...si el lector se toma el trabajo de interrelacionar los diagnósticos y las soluciones que ofrece el Dr. Pérez Alfonso (...) no le será demasiado difícil descubrir que el hilo conductor apunta inequívocamente hacia el socialismo”.

De tal modo que el pensamiento de Pérez Alfonso es:

“...una evolución perfectamente natural en un humanista que ha conocido y enfrentado en primera persona (...) la irracionalidad antihumana de este reino de los monopolios”.

Y termina finalmente de manera lapidaria:

“[la verdadera causa del rentismo]...es la mentalidad colonialista” y la “acelerada concentración de poder económico y político que intoxica con delirios de grandeza y avidez desaforada de riqueza a las oligarquías, así como el centralismo ejecutivista, apoplético”

Pérez Alfonso, en el mismo libro, lo expresa de otro modo:

“La única medida eficaz contra el despilfarro de esa riqueza se concentra en reducir drásticamente su liquidación [liquidez] para poner un techo al ingreso fiscal proveniente de la liquidación [liquidez] de ese activo nacional” (Pérez Alfonzo, 1976:288).

A pesar de las evidencias de simpatía política que ofrecía Mieres en su introducción, Pérez Alfonzo observaba el comportamiento de la economía venezolana como un Estado periférico afectado por el juego económico más que por el geopolítico. Para él, los gobiernos caen por causa de la absorción económica, independientemente de los intereses en la política:

“...entre 1956 y 1957 la dictadura otorgó concesiones en la afamada ‘Gold Lane’ (...) los dos años sumaron 1760 millones de dólares contra un promedio anual del 512 millones de los 5 años anteriores. Se produce así el desbordamiento del despilfarro que terminó con la propia dictadura” (Pérez Alfonzo, 1976:23-24).

De hecho, cuando el gasto público declinó en 1958,

“...se vivieron tiempos difíciles que debieron haber servido a la enseñanza. La contracción económica ocasionó ajustes bastante firmes y el despilfarro Perezjimenista parecía haber sido superado. Se observó también la capacidad de ajuste de las actividades económicas del país porque para 1963 se constataba una clara y sana recuperación.”

De tal modo que las oligarquías, o élites en el poder, eran en el peor de los casos un escollo importante, pero no eran propiamente la causa del problema. Por ello, cuando una de las medidas adoptadas fue la devaluación del bolívar en 1964, esto

“...produjo una reserva fiscal que en vez de servir de garantía contra nuevas dificultades petroleras, fue inyectada de una vez al gasto público (...) produciendo (...) indigestión económica (...) se cubre la crisis petrolera post-Perez Jiménez aumentando la producción e integrando más dinero al fisco” (Pérez Alfonzo, 1976:26).

El gasto público indigerido fue entonces la causa de la crisis política. Él percibe a la oligarquía como un resultado del

rentismo, por lo que sustituirla no garantiza la desaparición del rentismo.

“El despilfarro general se tiende a atribuir a vicios o defectos de los responsables en el gobierno, o en el sector privado aprovechador del petróleo. Así se mantienen las ilusorias esperanzas de continuar tras una siembra del petróleo. Para seguir nadando en divisas se pretexta aprovecharlas mejor. Cambios en las instalaciones y en los hombres, nuevos programas o instrumentos de ejecución harían el *milagro* de atender a las múltiples necesidades nacionales, encaminando el país hacia un programa firme y acelerado.

La verdad no se quiere comprender en toda su profundidad, no obstante las repetidas demostraciones de que el despilfarro es un efecto o manifestación causado por los excesos de divisas generados en cierta forma fuera de la actividad económica, propia del país” (Pérez Alfonzo, 1976:144).

4.15. Análisis de algunas políticas agroalimentarias implementadas y su relación con la seguridad alimentaria (1958-1999).

Los epígrafes anteriores hacen posible observar el contexto de algunas políticas agroalimentarias de relieve y su relación con el aumento de la inseguridad alimentaria antes de la victoria electoral de Chávez. Tal contexto revela el proceso mediante el cual se debilitaron los tejidos sociales que daban cuerpo al Estado venezolano, su relación con los modelos vertical y pactista de Estado, su relación con los ingresos petroleros, las desproporciones del gasto (medibles a partir de los problemas de absorción económica en el tejido productivo), el papel atribuido al Estado de proveedor mágico de una riqueza “interminable”, el papel de las oligarquías en la depredación del subsistema, el resultado de las estrategias pactistas que se implementaron durante el auge de las reformas neoliberales y los problemas enfrentados por la participación en la regeneración de nuevos tejidos sociales.

Sobre este contexto es posible una lectura más precisa sobre políticas agroalimentarias concretas. La primera política agroalimentaria de importancia de la democracia fue la Reforma Agraria de 1960. Se trató de un sistema de adjudicación de tierras productivas y créditos agrícolas con los objetivos de

- a) impulsar la producción agrícola mejorando la relación entre el trabajador y la tierra,
- b) mejorar la concentración población con miras de simplificar políticas sociales como educación o salud,
- c) saldar deuda social con los sectores excluidos del campo (quienes constituían una base social importante del partido Acción Democrática) y
- d) regularizar la situación entre los productores de campo y las tierras ocupadas informal o ilegalmente (Ministerio de Agricultura y Cría, Instituto Agrario Nacional, Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, Organización de Estados Americanos, 1995).

Junto a la reforma agraria se creó en Instituto Agrario Nacional (IAN) y el Ministerio de Agricultura y Cría (MAC).

El organismo financiero utilizado fue el mismo creado en 1928 junto a la Ley de Hidrocarburos para abonar la siembra petrolera, el Banco Agrícola y Pecuario. Luego en 1969 se creó Bandagro, y se mantuvieron los dos organismos.

La comisión presidencial de evaluación de la Reforma Agraria de 1994 presentó un informe ante el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y la Organización de Estados Americanos (OEA) en la que se destaca el carácter central de la reforma y que no varió durante 34 años. La reforma se hizo fundamentalmente sobre tierras baldías del Estado en base a la regularización de ocupantes en el entorno de otros productores o el mismo Estado (García, 1985):

“...se habían entregado casi 12 millones de has. de tierras a más de 180 000 familias, de los cuales más de 2 millones eran de origen privado” (Alegrett, 2003).

Se entregó el 27% de títulos de propiedad (el 73% restante recibió en su lugar cartas agrarias, una suerte de concesiones provisionales). De todas las adjudicaciones 4,86% fueron títulos colectivos. Se estima, en base a la ausencia de riego tecnificado y 40% que no utiliza fertilizantes, que el 82% de los cultivos es extensivo y por tanto, no

están capacitados para la producción capitalista intensiva o de exportación. Sin embargo casi la totalidad de la producción entra al mercado monetario de la demanda interna (Ministerio de Agricultura y Cría, Instituto Agrario Nacional, Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, Organización de Estados Americanos, 1995).

Tal como sucedió en Chile en el 68, se trató de reformas importantes logradas por la vía del consenso (Alegrett, 2003). El carácter estatal de las tierras habría facilitado este proceso, convirtiéndolo fundamentalmente en una operación de transferencias.

La reforma agraria nace en el primer contexto nacional en el que una caída de los precios del petróleo impacta el aparato productivo haciéndolo inestable. La respuesta del gobierno fue suponer que, a mayor gasto, correspondería una mayor producción; de esta fórmula surgió Bandagro en 1968, el primer banco con objetivos desarrollistas de vocación agrícola. Esta relación formó parte de la cultura oficial hasta 1975 cuando, si bien no sobrevino una contracción, las importaciones dominaron una demanda asistida por los altos precios petroleros, y 1984 cuando, entonces por vez primera, el aumento del gasto se tradujo en una masiva fuga de capital (Rodríguez, 2004).

De tal modo que la creación de Bandagro fue la primera de un conjunto de políticas crediticias en la democracia destinadas a repetir un esquema infructuoso de inversiones.

En el 74 se creó también el Fondo de Crédito Agropecuario (FCA) con el objetivo de salvar a las empresas alimentarias quebradas por causa de políticas anteriores. En 1975 se sustituye el Banco Agrícola y Pecuario (BAP) por el Instituto de Crédito Agrícola y Pecuario (ICAP) cuyos intereses sobre la deuda no podían pasar del 3%. En el 91 desaparece Bandagro. En los años 90 el FCA se transforma en FONDAPFA y en el 99 desaparece el ICAP. En todo ese período (1970-1999) por cada millón de bolívares invertidos el Producto Interno Bruto Agrícola aumentaba solo 254 bolívares, por cada incremento en un millón de bolívares el Producto Interno Bruto Alimentario (PIBA) aumentaba solo 1,24% y, finalmente, si la inversión se duplicaba (100% de aumento) el crecimiento del PIBA resultaba en un 4,36% (Anido 2002; Fuentes Méndez y Anido Rivas, 2007).

Sin embargo, a pesar de esta correlación precaria o negativa, el crédito agrícola no se replantea como instrumento, ni siquiera durante el período de las reformas neoliberales. Al contrario, en la evaluación de

la reforma agraria realizada en 1994, un 54% de los productores beneficiados con las tierras reconocían que habían refinanciado los créditos anteriores para poderlos pagar con mercados futuros durante el estancamiento agrícola de esa década (Ministerio de Agricultura y Cría, Instituto Agrario Nacional, Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, Organización de Estados Americanos, 1995).

De tal modo que los créditos agrícolas centraron la evolución del sub-sector. Sin considerar las políticas crediticias de las corporaciones regionales de desarrollo y la acción de los gobiernos locales y regionales, hubo 3 excepciones notorias: Corpomercadeo, un sistema estatal de mercados fundado bajo el gobierno de Luis Herrera que buscaba bajar los precios al consumidor interviniendo y subsidiando las cadenas de intermediación. CASA, un sistema de importaciones a precios preferenciales y de acopio de suministros estratégicos creado bajo la Gran Venezuela. Finalmente, Proal, un sistema de distribución directa de alimentos subsidiados para los sectores de mayor vulnerabilidad social, creado bajo la *Convergencia*.

Finalmente, luego de los resultados de las políticas de siembra petrolera en el agro y la producción de alimentos, es relevante comprender como el contexto neoliberal de los últimos 20 años del siglo XX afectaron el sistema alimentario nacional.

Las reformas en América Latina se habían convertido en representación de un modelo basado en la protección y el gasto que, en líneas generales, no había tenido éxito (Kay, 1998). Las razones de la pérdida de impulso y eficacia de las reformas son localmente complejas y muchas de ellas solo pueden explicarse en ese plano. Sin embargo, algunos autores destacan otras razones generales: a) la falta de organización y participación de los sectores sociales en la transformación y modernización del sub-sector (García, 1985; Alegrett, 2003), lo que indicaría la pertinencia de temas tratados en esta tesis, b) la capacidad propia del gran sector agrario-capitalista en aprovechar la evolución de los mercados (monetario, crediticio, aseguradoras, información, tecnología...) y c) mostrar más flexibilidad a los cambios (Schejtman, 1999), y finalmente, desde la perspectiva que adelantó el neoliberalismo, la incapacidad del gasto en convertirse en un factor de desarrollo en un subsistema “excesivamente” protegido (Rodríguez, 2004).

Sin embargo las principales medidas neoliberales que se estudiaron aplicar en la Venezuela de los años 80 y 90 no fueron aplicadas

plenamente sobre las tierras, la agricultura, ni sobre la producción de alimentos manufacturados.

En comparación con otros países de la región, se mantuvieron líneas de crédito agrícola, no se revirtieron expresamente los efectos de la reforma agraria, no hubo importantes ventas de tierras al capital transnacional, ni siquiera se puede hablar de la introducción de transgénicos. Sin embargo la evidencia indica que el sector de alimentos fue impactado, al menos, por tres vías:

En primer lugar, la conducción de una devaluación del signo monetario por bandas, sin la correspondiente respuesta del aparato productivo exportador, generaba un crecimiento desproporcionado de la capacidad de compra del sector público frente al privado, dependiente de importaciones. La devaluación hizo más cara las importaciones y a la vez, a los costos de la producción nacional, generando en su conjunto la inflación más abrupta en la historia de la Democracia venezolana (Lander y López Maya, 1999; BCV, 2011). Tal situación deterioró el poder de compra de los trabajadores e hizo las políticas compensatorias insuficientes, como fue el caso de Proal bajo la *Convergencia* (Baptista, 2001). Las reformas neoliberales, a decir del ministro Petkoff, tenían por objetivo crear condiciones para una reactivación del aparato productivo por la vía de la inversión extranjera (Petkoff, 1997). En tal sentido el bajo precio del trabajo, la desinversión y las incapacidades del aparato productivo alimentario local en dar respuestas a la devaluación generarían condiciones atractivas para tal inversión. Sin embargo la contracción del sector y la inflación coadyuvaban al aumento de la inseguridad alimentaria (FAO y CAF, 2006) y no se produjo una inversión transformadora (Antivero y BCV, 1998).

A pesar de que el gasto público fue reorientado por causa de la deudas y las sucesivas bajas de los precios del petróleo, la devaluación no atrajo las inversiones deseadas para reimpulsar el aparato productivo, por lo que la variación interanual del producto interior bruto descendió al final de la *Convergencia* en cerca de un 200%. Se trata del descenso más profundo del PIB en Venezuela desde 1950.

Gráfico 6. PIB Venezuela 1950-2000. A partir de BCV, 2011.

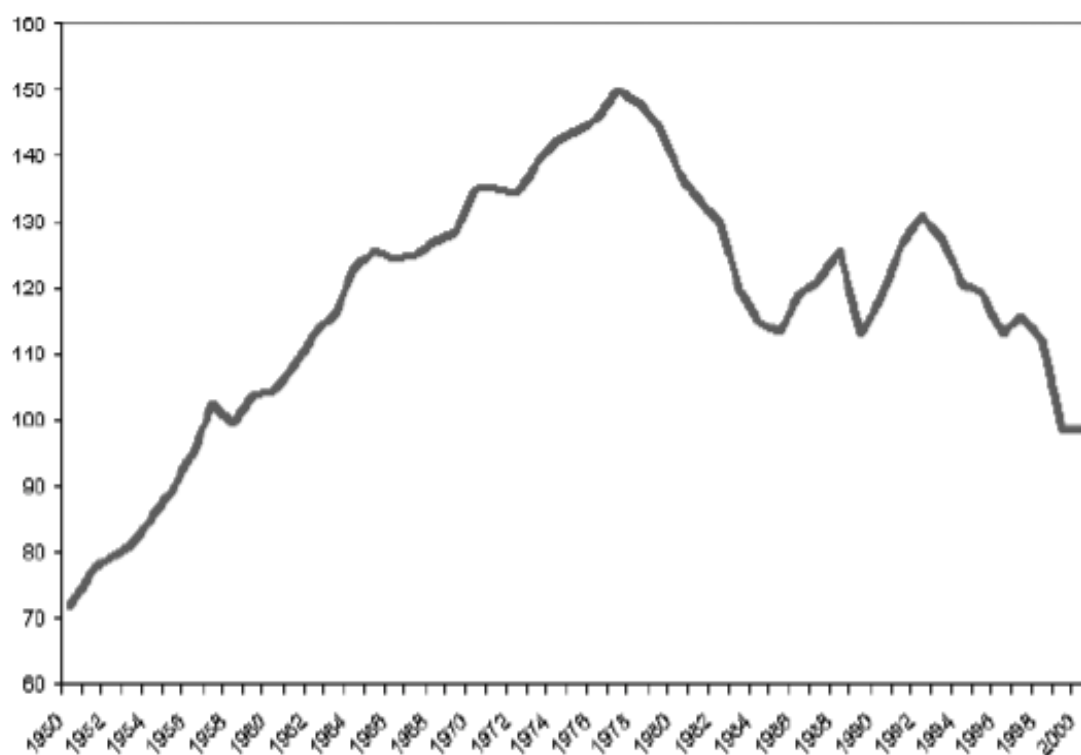
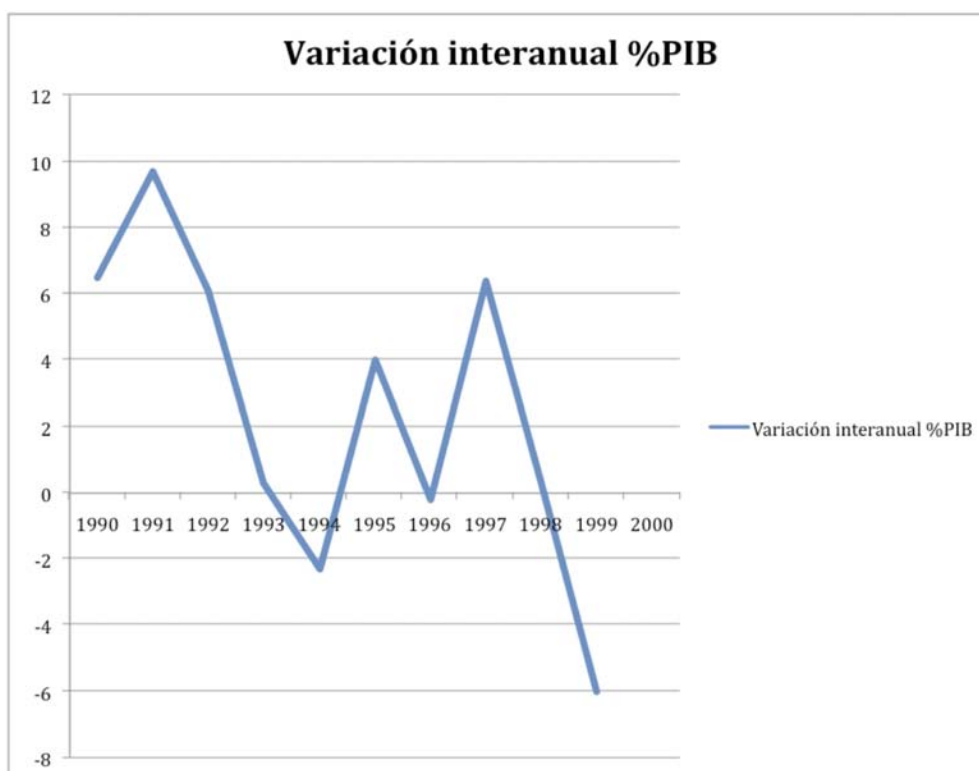


Gráfico 6a. Variación interanual del PIB, 1990-1999. A partir de Antivero y BCV, 1998 y FMI, 2012.



En segundo lugar, es posible decir que el sector primario de producción de alimentos no formaba parte de las prioridades del “paquete” de Pérez en la *Concertación*, o de la Agenda Venezuela en la *Convergencia*. Las medidas neoliberales más bien estuvieron orientadas a generar productividad, eficiencia y competitividad en el sector secundario, así como las privatizaciones y la reforma del Estado (Petkoff, 1997; Rodríguez, 2004).

El equipo de Carlos Andrés Pérez abogó por la liberación de precios y de toda forma de subsidio al agro, por cuanto se argumentaba que el sector estaba presentando una muy baja productividad en relación a los créditos recibidos. El objetivo era eliminar las formas de subsidio y crear un sistema de bandas arancelarias a la producción y comercio agrícolas para apoyar la colocación de la producción en la demanda interna y en el sector externo. Mientras tanto:

“Para el caso del sector agrícola, también se iba a mantener un sistema de tasas de interés preferenciales durante un tiempo, y los bancos de desarrollo del sector iban a continuar prestando asistencia relativamente importante convertidos en bancos de segundo piso (Rodríguez, 2004:159)”.

Se hablaba explícitamente de un rezago de las medidas sobre el agro en relación a la industria y el Estado (Rodríguez, 2004: 159). Sin embargo, como se refirió anteriormente, la crisis política hizo errática y tardía la aplicación de todas las medidas (Anido, 2002). En cualquier caso la relación entre crédito y productividad no mejoró durante este período (Fuentes Méndez y Anido Rivas, 2007).

El gobierno de la *Convergencia* retomó las políticas de financiamiento y los controles de precios mínimos, tal como sucedía en los tiempos anteriores al neoliberalismo y, luego de la crisis bancaria de 1994, la devaluación se tradujo en inflación y aumento de los costos productivos nacionales. Adicionalmente la liberación de las importaciones hizo nuevamente poco competitivo el precio nacional frente al importado.

Todo ello aceleró la caída del poder internacional de compra (PCA) y los indicadores sociales. Ninguno de los dos gobiernos y, sobre todo, el de la *Convergencia*, parecían estar dispuestos a eliminar por el momento un sistema preferencial del créditos, entendido sobre la base

de créditos a fondo perdido (Fuentes Méndez y Anido Rivas, 2007) con fines compensatorios.

El subsector agricultura y la manufactura alimenticia crecieron muy moderadamente desde 1989 hasta 1998, 9,3% el primero y 6,4% el segundo, lo que resulta en un crecimiento interanual de 1,03% y 0,7% a precios del 1985 (Antivero y BCV, 1998). Visto tanto desde la perspectiva de la inversión crediticia, del aumento demográfico, en términos de seguridad alimentaria y en términos de la incidencia de los sectores en el mercado nacional, es posible hablar de estancamiento.

Este estancamiento producido por las reformas neoliberales se acompañó de un aumento de más de un millón de personas sub-nutridas, esto es, sin la condición “acceso”, una de las más importantes del concepto de seguridad alimentaria.

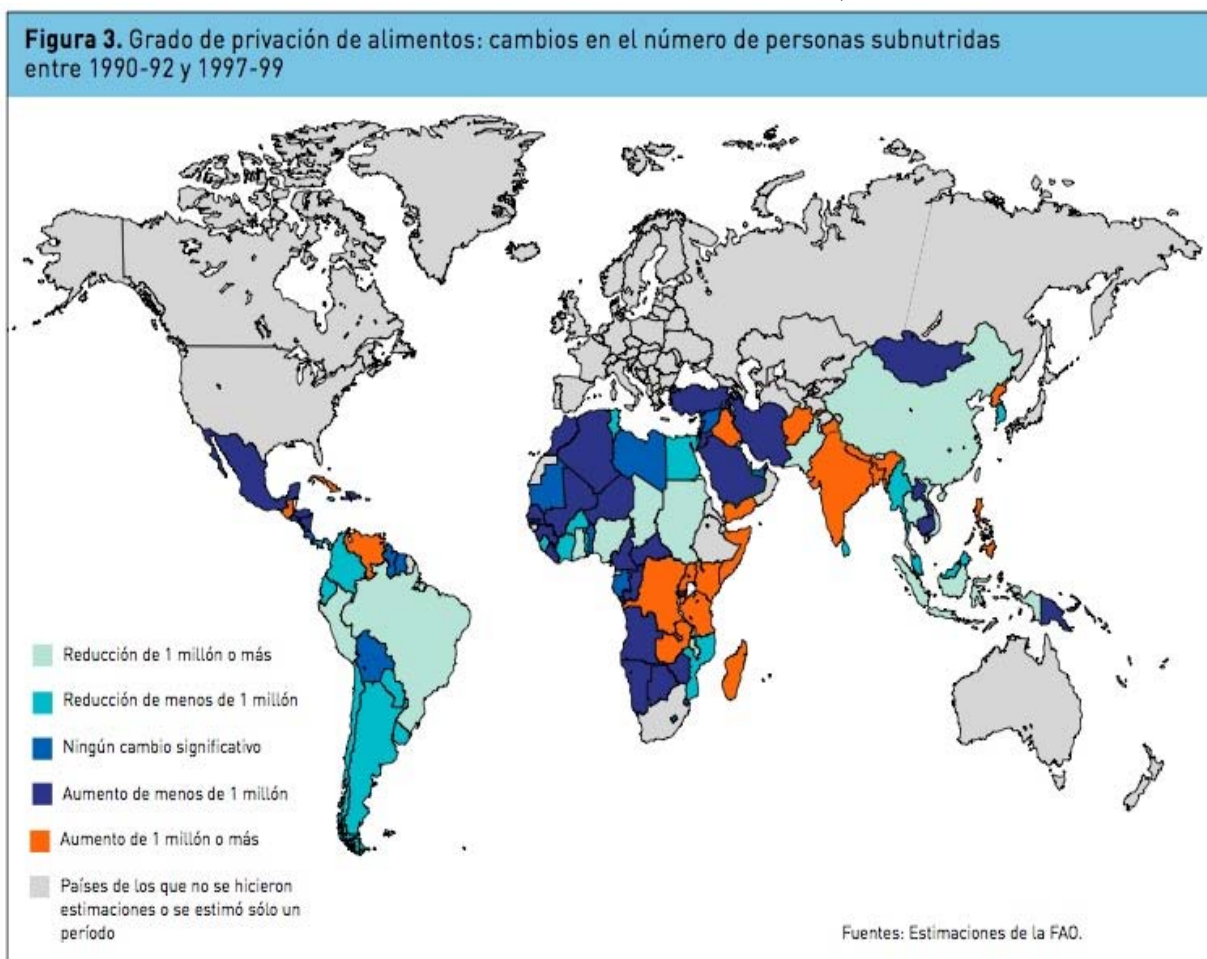
Sobre este tema, según la FAO, Venezuela ya tenía un 10% de su población desnutrida en los datos de la *Concertación* entre 1990 y 1992, luego esa cifra aumentó a un 14% en los datos de la *Convergencia* entre 1995 y 1997, y solo descendió un punto porcentual hasta el 2002, aunque, por proporción demográfica, implicó un número mayor de desnutridos.

Es decir, durante las reformas neoliberales hubo un aumento en un millón de personas sub-nutridas, desde las 2.100.000 durante la *Concertación* a las 3.100.000 personas sub-nutridas durante la *Convergencia*, cifra que siguió aumentando en 200.000 personas más (FAO, 2012 a) durante el último año de la Agenda Venezuela, el año del golpe, y el primer año del paro petrolero, esto es, antes de la creación de Mercal.

De tal forma que al período de las reformas neoliberales corresponde una aumento abrupto de más de un millón de desnutridos, corresponde los niveles de inflación más abruptos de la democracia y, al mismo tiempo, un estancamiento del sector agrícola y de fabricación de alimentos.

La caída calórica es, además, una de las más abruptas en el planeta, como se ve en el gráfico 7.

Gráfico 7. Evolución de la subnutrición 1990-1999. Color naranja: “aumento en un millón o más”. FAO, 2001.



En tercer lugar, el Estado desinvierte en sus empresas, incluyendo los sistemas de distribución de alimentos, como en los casos de CASA y Corpomercadeo (Rodríguez, 2010; Fuentes Méndez y Anido Rivas, 2007). Dado que las políticas de crédito agrícola no levantan la producción y además ésta no llega a la población, en el período de la *Convergencia* se crea Proal, esta vez, con un explícito objetivo de compensación social en sectores más vulnerables (Anido, 2002). La FAO evalúa estas políticas de compensación como insuficientes para detener el aumento de la pobreza y la inseguridad alimentaria (FAO-CAF, 2006) y las cifras de nutrición levantadas para ese período lo confirman (FAO, 2012 a).

En breve, el sector agrícola no evoluciona, sigue siendo dependiente de créditos a fondo perdido y responde negativamente a la creciente inseguridad alimentaria de la última década del siglo XX.

4.16. El extremo debilitamiento del Estado antes de Chávez.

En el mundo académico venezolano era corriente encontrar conceptos como “crisis de institucionalidad” (Lander y López Maya, 1999; Molina y Pérez, 2004), “divorcio entre sociedad civil y sociedad política” (Arenas, 2001), invocaciones al “desencanto de la democracia” de Lechner (Arenas, 2001; Molina y Álvarez Díaz, 2002), crisis del “Estado como servidor público” (Molina y Álvarez Díaz, 2002). Incluso la empresa “Consultores 21” había medido respuestas estadísticas en las que el público cada vez más apoyaba “cambios radicales” ante las “reformas parciales” (Molina y Pérez, 2004).

Realmente los hechos posteriores durante los gobiernos de Chávez revelaron una dimensión mucho más profunda que no formaba parte de las expectativas modélicas y usuales de entonces. La radicalidad de la transformación por venir fue prevista por pocos analistas a nivel local.

Una tesis de grado de la Universidad del Zulia se encargó de describirlo echando mano de Marx. Dos jóvenes investigadores agregaron lo que entonces parecía un simple matiz: no se trata de una crisis en la *generalidad*, sino propiamente una crisis de la *generalidad ilusoria* (Garrido y Montilla, 1999). En tiempos en que los organismos internacionales hablaban de *problemas de gobernabilidad* estas tesis no eran fácilmente visibles⁹.

Para Marx la *generalidad ilusoria* era el resultado de un equilibrio entre fuerzas históricas que aun no habían revelado la realidad del proceso de acumulación y explotación. La *generalidad ilusoria* entra en crisis cuando se ha producido una fractura rotunda, no solo en el funcionamiento o legitimidad de las instituciones, sino en los fundamentos del orden social. Si bien la fuente de esa quiebra es

⁹ “La hegemonía neoliberal impulsó, por su parte, una explicación del deterioro económico y político alcanzado en el último cuarto de siglo. En vez de atacar las causas estructurales se intentó encontrar responsables en sitios inverosímiles (la televisión, los inmigrantes, el intervencionismo estatal, el exceso de participación, etc.). En esa discusión empezaron a dejarse de lado las preguntas clásicas sobre la legitimidad de la democracia o la superación del capitalismo, para dar entrada a conceptos como buen gobierno, gobernabilidad democrática, gobernanza y buena gobernanza, que sitúan en un segundo plano la cuestión del poder, los desmanes cometidos bajo el paraguas ideológico liberal y la ruptura del consenso social de posguerra” (Monedero, 2009).

económica, su verdadero y más poderoso resultado se produce en la quiebra de la ilusión construida de orden social, anunciando una transformación histórica, tal como se le denomina en el paradigma marxiano. Foucault había explicado este proceso a través de la idea de un “cambio de episteme”, esto es, un proceso ubicable en una cierta arqueología histórica del discurso y que es el producto del desfase entre *conocimiento* y el *lenguaje* (Foucault, 2005: 56). En otras palabras, cuando el lenguaje de una sociedad indica un mundo que no corresponde a su conocimiento, se produce una transformación en la estructura del conocimiento que difícilmente puede ser abarcado con categorías como “apoyo a *cambios* radicales” o “desencanto de la democracia”. El nuevo conocimiento se hace de un nuevo lenguaje y entonces ambos definen desde un piso histórico, determinado económicamente, las bases de la construcción de una nueva realidad.

De tal modo que la *revolución* por venir tenía más de quiebre de la *generalidad ilusoria*, que de un desencanto fraccionado con instituciones, modalidades y actores, por importantes que fueran.

Esta noción de cambio social se ha estudiado por diferentes vías que van desde Lenin o Gramsci, hasta autores contemporáneos. En Venezuela se develaba una crisis de Estado, pero éste, en tanto Estado democrático, era un espacio vacío por definición, sin propiedad y en movimiento, y por ello se transformaba en un campo de lucha entre élites políticas y la sociedad *in extenso* (Panizza, 2009: 48; Laclau, 2009: 57; García Linera, Prada, Vega Camacho, 2010:14-16).

Con el caudal del dinero petrolero los gobiernos venezolanos, sobre todo desde 1973, compraban la ilusión de fortaleza estatal cuando realmente se estaban empobreciendo los tejidos de los emprendimientos que constituían el cuerpo del mismo Estado, tanto por los problemas de absorción de divisas que experimentaba el país (creando sectores sociales económicamente más dependientes y menos capaces de desarrollo), como por la depredación que hacía el pactismo de los espacios técnicos, políticos y sociales naturales de desarrollo. Tal debilidad conspiraba haciendo opaca y susceptible la industria petrolera y sus políticas a un mayor control de las transnacionales. La ilusión de fortaleza estatal ha sido indicada como una característica no solo venezolana sino de otros Estados latinoamericanos. Como resultado de esta debilidad solapada detrás de la ilusión, los gobiernos se han encontrado recurrentemente con la realidad de no poder coaccionar física ni políticamente a la sociedad en función de sus objetivos (Waldmann, 2003: 26-33).

El resultado de estos empobrecimientos relacionales en Venezuela no tardaron en convertirse en empobrecimientos de la efectividad y vinculación de la participación política, técnica y social, y en consiguiente, en imposibilidades materiales de superar la creciente inseguridad alimentaria.

Tal situación puso en contexto una convulsión social sin precedentes en la historia democrática de ese país. Tal como se entiende de la descripción de los ciclos de participación y cambio social (Ibarra, 2005: 321), la incapacidad de la élites en responder por fuera de su propia dinámica de acumulación política y económica, preparó a la sociedad civil para una transformación de los fundamentos políticos de la sociedad nacional que conocían. Tales tejidos encontraron cauce entre 1998 y el 2000 a través de nuevas formas políticas como la Constitución Bolivariana. El tema alimentario, incluyendo las nuevas discusiones sobre seguridad alimentaria se alimentaron del nuevo modelo de Estado que surgió de este proceso y, por tanto, se inspiró de su contexto.

Por ello, la convulsión social durante la *Concertación* y la modificación del escenario de “fuerzas vivas” durante la *Convergencia* no hicieron más que advertir la llegada, para bien o para mal, de un importante movimiento de participación civil y transformación del Estado cuyos efectos sobre el tema alimentario son trabajados en esta tesis.

Por todo lo visto, el nuevo contexto político también era proclive a la aparición de una lectura populista que reivindicase el papel de las mayorías empobrecidas, con niveles crecientes de desnutrición, regularmente desplazadas de los modelos y pactos de gobernabilidad exhibidos en esos 40 años.

5. La Asamblea Constituyente y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: el papel de la participación.

“La actividad de producción de alimentos queda establecida como esencial para el país, consagrándose el principio de la seguridad alimentaria en función del acceso oportuno y permanente de alimentos por parte de los consumidores.”

CRBV. Exposición de motivos.

Cuando Hugo Chávez y su proyecto constituyente ganan las elecciones en Venezuela en Diciembre de 1998, casi todos los gobiernos de la región estaban asediados por la deuda externa y habían recibido instrucciones de política económica, directa o indirectamente, del Fondo Monetario Internacional. Prevalecía la idea de que la excelencia era un atributo de sectores con ciertos privilegios que debían crear las condiciones para que la inversión extranjera reimpulsara las economías. El déficit era atribuido al excesivo proteccionismo económico y social que había dominado la política en América Latina hasta los años 80 (Sottoli, 2000). A pesar de que la desigualdad se había extremado, se proponía que ideas como seguridad alimentaria, bienestar social e incluso participación política fueran “pospuestas” a la espera de que el mercado se enriqueciera nuevamente y fuera capaz de sentar las bases de un posible y futuro acuerdo social más justo. Esto no solo sucedía en América Latina sino en casi todo el contexto periférico. Así lo explican Jean Drèze y Amartya Sen en 1994:

“Es necesario que compartir el poder político no sea pospuesto hasta que el poder económico esté ampliamente generado y equitativamente compartido (...) [pues se corre el riesgo de] los efectos adversos de desigualdad económica en la participación política efectiva” (Drèze y Sen, 2011 [1994]:9-10).

Por cuanto el proyecto constituyente proponía la regeneración de los tejidos políticos económicos y sociales mediante la ampliación de la participación y del espacio público venezolano, y con ello apostaba por el papel regenerador de lo político sobre el del mercado, la constituyente bolivariana de 1999 lucía solitaria en el contexto global. Se trataba de un giro ambicioso en el diseño de las políticas de

entonces.

“(...)despertó en los venezolanos su espíritu protagónico por participar en la construcción de un Estado moderno, de equidad social e igualdad ante las instituciones (...) [El decreto consultivo para convocar una Asamblea Constituyente en 1999] “generó un intenso debate en todas las esferas de la sociedad. Se discutió acerca de las diversas implicaciones de su formulación y su futura aplicación. Voces a favor y en contra se pusieron de manifiesto...” (Flores, 2009:237)

La Corte Suprema de Justicia estableció las bases jurídicas sobre las que se elegiría la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) por votación universal y candidatos nominales en 1999. En estas bases, la Corte reconoció a la ANC como “poder originario que recoge la soberanía popular”. El Ejecutivo, en base a aquella sentencia, otorgó a la naciente ANC el objetivo de “transformar el Estado y crear un nuevo ordenamiento jurídico que permita el funcionamiento efectivo de una Democracia Social y Participativa” (Gaceta Oficial de la República de Venezuela, 1999 en Flores 2009:238).

Esta orientación facultó a la ANC su conversión en un poder especial sobre los demás poderes de la nación con el objetivo explícito de ampliar el espacio público y los marcos de la participación social, incluso antes de la redacción del texto constitucional en sí.

En otras palabras, el proyecto constituyente apostaba por el papel regenerador de la participación antes de su propia definición en el texto. La Democracia era entendida como un fin pero también como medio para transformar el subsistema. La participación era el pivote democrático de esta transformación.

Sen y Drèze habían diagnosticado para el caso hindú que hay dos tipos de libertades, las libertades como fines y las libertades como medios. Ellas deben inter-regularse para hacer consistente una nación. Ello pasa por la reducción y eliminación de la desigualdad. A diferencia de la obra del primer Dahl (Dahl, 1974) para estos autores la participación no solo es un asunto político relativo a presiones y grupos de interés, sino una manera de generar nuevas posibilidades a la sociedad mediante la superación de la desigualdad material entre ricos y pobres. Así, pobreza y participación son en sí las dos caras de

una misma moneda del desarrollo:

“Participación e igualdad son en extremo importantes para hacer accesibles el uso de facilidades económicas y sociales que una nación puede ofrecer” (Drèze y Sen, 2011 [1994]:10).

El primer Dahl incorpora el problema de la desigualdad estructural de una sociedad, tan importante para la explicación del caso latinoamericano y venezolano, solo como un problema de sub-representación en la escena pública:

“En las cámaras legislativas actuales la clase media y las profesiones liberales están súper-representadas numéricamente, mientras que los obreros están sub-representados (incluso entre los diputados de los partidos socialistas, laboristas y comunistas), lo mismo ocurre con otras categorías: campesinos y amas de casa, por ejemplo [en Venezuela, los así denominados “excluidos”, incluyendo sectores pobres, marginales y de extrema pobreza]. Pero aún cuando la “clase política” no sea nunca una muestra representativa de las categorías sociales y económicas de un país –y muchos defensores de la democracia representativa sostienen que no necesitan ni deben serlo- el sufragio universal junto a la rivalidad política dan a lugar a parlamentos cuyos miembros en el sentido puramente estadístico, son en general más representativos, individual y políticamente, que en ningún otro sistema” (Dahl, 1974: 32-33)

De tal modo que el pluralismo Dahliano de 1974 reconoce la sub-representatividad parlamentaria y puede incluso reconocer la sub-representatividad socio-económica y cultural de sectores importantes de la población. En este libro Dahl de algún modo justifica la existencia de sub-representaciones sociales en la poca capacidad de superación que tiene de por sí el modelo representativo.

El proceso bolivariano había llegado a conclusiones similares a partir de la experiencia democrática venezolana y se proponía un proceso de redemocratización del subsistema por la vía de la transformación de sus fundamentos (Biardeau, 2009; Pisarello, 2009). A diferencia del primer Dahl, la Asamblea Nacional Constituyente no proponía modificar la representación en la escena parlamentaria sino generar

una nueva perspectiva modernista (esto es, una relectura del proyecto de la modernidad) que tocaba aspectos importantes de los principios civilizatorios del saber político tal como eran comprendidos en el subsistema. Además intuía que la participación canalizada mediante el procedimiento democrático, pacífico e institucional tendría la capacidad de generar la energía necesaria para el nuevo sistema.

Tanto un Dahl posterior (2002) como Putnam tenderán a defender en sus obras lo que para ellos luce más fundamental que el tipo de democracia: el rol de la participación en el tejido político. Del libro *La Poliarquía* (Dahl, 1974) a la *Democracia Económica* (Dahl, 2002), el tema de las sub-representaciones dentro y fuera del parlamento irá progresivamente indicando la existencia de problemas estructurales fuera del cuadro de análisis. En otras palabras, cuando el papel de la participación parece ser más importante en la creación de nuevas relaciones sociales, el cuadro del análisis (el modelo de Estado, el tipo de democracia, el sistema económico...) parece ser más vulnerable o más susceptible de ser trascendido.

De allí la importancia de pensar en la participación como un alimentador del tejido social en su conjunto.

Putnam en “Para que la democracia funcione. Las tradiciones cívicas en la Italia moderna” (Putnam, 2011) presenta a la ausencia de capital social como el resultado de un contexto que no hace fértil el florecimiento de relaciones más cooperativas con la esfera pública. La ausencia de capital social (entendido como normas y otros recursos de cooperación y confianza con la esfera pública) en el Sur de Italia, sería el resultado de un modelo de prácticas políticas que producen autoridad, pero carecen de la posibilidad de integración con otros modelos condicionados positivamente hacia una idea de cultura cívica. De tal modo que el esquema administrativo luce capacitado para la integración nacional pero es el cuerpo, sus *tejidos*, los que no lo están.

Como en la metáfora biológica, Putnam describe las relaciones del paisaje y su evolución, pero no responde por qué se produjo esta ausencia de capital social, esto es, por qué se escogió una racionalidad y no otra (Maldonado Trujillo, 2000), de modo que solo se remite a hacer una explicación de dos suertes de ecologías comparando el Norte y el Sur de Italia, para concluir con su célebre frase: “el contexto social y la historia condicionan profundamente la eficacia de las instituciones” (Putnam, 2011: 259).

La Constitución bolivariana también propició un cambio de contexto

sobre el cual se produjeron a su vez las transformaciones sociales protagonizadas por el Estado, la sociedad civil y el sector externo en ese país, al menos, durante los 12 años siguientes. La ANC no procuró solamente cambiar el marco jurídico-normativo de la nación, sino crear un nuevo contexto para poder actuar sobre sus cimientos

Este contexto impactaba severamente sobre los fundamentos neoliberales algunos de los cuales han sido explicados en capítulos anteriores de esta tesis. Al hacer esto no solo buscaba crear un nuevo paradigma (Sottoli, 2000) sino que procuraba desbordarlo.

“[La Constitución es] el sistema de derechos más exhaustivo e inédito del derecho comparado. Nunca algún Texto Constitucional había asumido textualmente un cuadro de derechos fundamentales tan amplio y exhaustivo. Un cuadro que recoge las cuatro generaciones de derechos humanos jurídicamente teorizadas...” (Gutiérrez Alvarado, 2009:16).

Pero para desbordar los fundamentos sociales había que abrir sus espacios públicos no solo jurídicamente, sino también en lo económico. De modo que el desbordamiento de estos fundamentos tenía que estar íntimamente ligado al desbordamiento de los concomitantes económicos y productivos de la sociedad: desbordar el capitalismo y, junto a él, afectar las limitaciones simbólicas del proyecto civilizatorio. En otras palabras, desbordar también la modernidad. La alimentación, tal como resulta evidente en el articulado constitucional, es un componente fundamental de inter-regulación de medios y fines para esta transformación.

Esta discusión ya había tenido lugar de muchas maneras. El segundo Dahl, por ejemplo, se identificaba con las ideas de Jefferson y el juez Story quienes sostenían que para mantener la República era necesario que las fuentes de enriquecimiento que produce la propiedad privada se mantengan en el mayor número de manos posible. Cosa que según el mismo Dahl, no sucedió.

La producción agrícola fue pasando a manos de las grandes corporaciones. Dahl cita a John Blum: “el hombre pasó a ser el hombre económico, la democracia se identificó con el capitalismo, la libertad con la propiedad y su uso, la igualdad con la oportunidad de lucro, y el progreso con la transformación económica y la acumulación del capital” (Dahl, 2002: 67).

Dahl propone para los EEUU una redimensión en la escala de la estructura económica capitalista: empresas autogobernadas por sus trabajadores. Este nuevo fenómeno propendería a reestablecer las relaciones republicanas y poliárquicas.

“La complejidad y el gigantismo han creado una distancia tan grande entre nuestras acciones y sus consecuencias, que nuestra capacidad de acción moral se ha empobrecido peligrosamente” (Dahl, 2002: 90).

Dahl está indicando que, al no mantener las condiciones económicas que hacen posible que el poder siga siendo difuso, el equilibrio político poliárquico fracasaría, mas no solamente porque el Estado que lo representa se debilita, sino porque otro actor, el mercado, consumiría para sí toda la energía política.

Dahl cree que la crisis política debe superarse por la vía de fortalecer la participación de la sociedad civil en la economía. A pesar de provenir de matrices teóricas diferentes (básicamente, dada la diferencia entre el objeto sistémico o societario de la emancipación), Juan Carlos Monedero, siguiendo a Boaventura de Sosa Santos, sostiene que la crisis de desigualdad socioeconómica y sociocultural, provocada por el sistema mundial de dominación económica, puede superarse por la vía de fortalecer la participación de la sociedad civil en lo político con el fin de “desbordar el Estado” y “desbordar el capitalismo”:

“Hace falta pensar mejor para desbordar la modernidad; hace falta organizarse mejor para desbordar al Estado. Hace falta producir mejor para desbordar el capitalismo. El hombre nuevo es, como la Ítaca del poema de Kavafis, no una meta, sino una razón para ponerse en camino” (Monedero, 2009:72).

Ambas perspectivas, independientemente de sus diferencias, coinciden sobre todo en lo que respecta al rol emancipador de la participación.

La Constitución bolivariana procura resolver esa distancia entre pobreza y abundancia así como entre ausencia de libertades y democracia por la vía de la participación. Ella supone que es posible conmovier y derrumbar el orden establecido por la vía de más y mejor democracia:

“Si de lo que se trata es de ‘establecer una sociedad democrática’ y no simplemente de profundizar o avanzar en la democracia, será porque, a juicio del constituyente, esa

sociedad democrática no existía antes de la Constitución Bolivariana o, cuanto menos, no existía en los términos en que concibe la democracia el texto constitucional. Por tanto, no se trata de *sancionar* el orden existente para protegerlo, sino de reaccionar frente a ese orden y de *transformarlo*... asumiendo un papel democratizador que actúe como coadyuvante de las dinámicas sociales del cambio” (Criado de Diego, 2009:47)

La participación es el fantasma que recorre todo texto constitucional y que anima el carácter normativo y, lo más importante, utópico de todos sus articulados.

Por todo ello, el tema de la participación en la Constitución merece ser tratado integralmente y no solo en su relación explícita con la alimentación. La alimentación debe entenderse como una parte de los beneficios de la participación en los fundamentos normativos y utopistas de la Constitución.

El mismo preámbulo pone en la agenda para todo el texto constitucional la relación entre participación protagónica, justicia social y poder originario constituyente:

“El pueblo de Venezuela, en ejercicio de sus poderes creadores (...) con el fin supremo de refundar la República para establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica”...”asegure el derecho a la vida, al trabajo, a la cultura, a la educación, a la justicia social y a la igualdad sin discriminación ni subordinación alguna (...) en ejercicio de su poder originario representado por la Asamblea Nacional Constituyente mediante el voto libre y en referendo democrático, decreta la siguiente (...) ” (Asamblea Nacional Constituyente, 1999).

La participación aparece indicada explícitamente para el logro de 6 objetivos de la nación, en los siguientes artículos:

a. Participación en instituciones del Estado: la disposición general de artículo 62, las referidos a la participación en la seguridad social (86 y 141), educación (102), justicia (253 y 255), el Poder Electoral (294) y Poder Municipal (168, 171 y 173).

b. Los mecanismos revocatorios de los cargos públicos de elección popular (6, 70, 72, 197, 198, 233) y todos los relativos a las distintas modalidades y condiciones del referendun.

c. El reconocimiento de los derechos colectivos indígenas a partir de la participación comunitaria basada en los principios de ancestralidad (del 119 al 126).

d. Los mecanismos consultivos de la Constitución del 61 se multiplican por 10 supuestos y modalidades (70 y 71). Los diferentes tipos de referéndums son tributarios de estos nuevos derechos.

En relación a la lucha contra la pobreza la desigualdad socio-económica así como la creación de tejidos productivos auto-sustentables y soberanos, es importante subrayar dos objetivos nacionales:

e. La creación de instancias paralelas al Estado de administración y decisión política, con el fin de empoderar a la sociedad civil por la vía demo-representativa como por la demo-participativa y con fines cogestionarios y autogestionarios (184). De este objetivo se desprende la creación de lo que luego se llamará *poder popular*.

f. La generación de una economía alternativa y popular a partir de la cogestión, la autogestión, la empresa comunitaria, cooperativas y las cajas de ahorro (70 y 118). De éstos instrumentos se desprenderían después las empresas de producción socialista y la cogestión alimentaria en el SSSA (Gutiérrez Alvarado, 2009: 17-18), esto es, la formación de la llamada *economía popular* que empezó a consolidarse a partir del 2003:

“Artículo 70. Son medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía, en lo político: la elección de cargos públicos, el referendo, la consulta popular, la revocatoria del mandato, las iniciativas legislativa, constitucional y constituyente, el cabildo abierto y la asamblea de ciudadanos y ciudadanas cuyas decisiones serán de carácter vinculante, entre otros; y en lo social y económico, las instancias de atención ciudadana, la autogestión, la cogestión, las cooperativas en todas sus formas incluyendo las de carácter financiero, las cajas de ahorro, la empresa comunitaria y demás formas asociativas guiadas por los valores de la mutua cooperación y la solidaridad” (Asamblea Nacional Constituyente, 1999).

g. Específicamente en relación a la alimentación, la participación adquiere carácter “estratégico” a la luz de los artículos 299, 306, 307 y muy especialmente el 305.

El concepto de la Constitución no es el de “soberanía” sino el de “seguridad alimentaria”. El concepto “soberanía alimentaria” proviene de una interpretación del artículo 299 y se asienta por vez primera en el preámbulo de la Ley de Tierras de finales del 2001. Se convierte en objetivo nacional luego del impulso del Proyecto de Reforma Constitucional sometido a referendun a finales del 2007 y la promulgación de la Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Alimentaria ese mismo año.

Acerca de los artículos mencionados de la Constitución Bolivariana, en el 299¹⁰ la Constitución define el régimen económico en términos de equilibrios sociales, políticos y distributivos y, al mismo tiempo, de eficiencia, libre competencia, productividad, sustentabilidad y crecimiento económico. Este artículo añade como fin último “la soberanía económica del país”. El mismo presidente Chávez se referirá luego a este artículo como la referencia base del concepto “soberanía alimentaria” (Chávez, 2007 a).

En el 305 el Estado se compromete con la Agricultura Sustentable y con la Seguridad Alimentaria¹¹. El concepto de Seguridad es similar al

¹⁰ “Artículo 299. El régimen socioeconómico de la República Bolivariana de Venezuela se fundamenta en los principios de **justicia social**, democracia, eficiencia, libre competencia, protección del ambiente, **productividad y solidaridad, a los fines de asegurar el desarrollo humano integral y una existencia digna y provechosa para la colectividad**. El Estado conjuntamente con la iniciativa privada promoverá el desarrollo armónico de la economía nacional con el fin de generar fuentes de trabajo, alto valor agregado nacional, **eleva el nivel de vida de la población y fortalecer la soberanía económica del país**, garantizando la seguridad jurídica, solidez, dinamismo, sustentabilidad, permanencia y equidad del crecimiento de la economía, **para lograr una justa distribución de la riqueza mediante una planificación estratégica democrática participativa y de consulta abierta**” [resaltados propios].

¹¹ “Artículo 305. **El Estado promoverá la agricultura sustentable** como base estratégica del desarrollo rural integral, **y en consecuencia garantiza la seguridad alimentaria de la población**; entendida como la disponibilidad suficiente y estable de alimentos en el ámbito nacional y el acceso oportuno y permanente a éstos por parte del público consumidor. **La seguridad alimentaria** deberá alcanzarse **desarrollando y privilegiando la producción agropecuaria interna**, entendiéndose como tal la proveniente de las actividades agrícola, pecuaria, pesquera y acuícola. La producción de alimentos es de interés nacional y fundamental al desarrollo económico y social de la Nación. A tales fines, **el Estado dictará las medidas** de orden financiera, comercial, transferencia tecnológica, tenencia de la tierra, infraestructura, capacitación de mano de obra y otras que

que promueve la FAO, pero la idea de sustentabilidad integra ideas que serán definidas de manera más clara con la declaración del objetivo de soberanía alimentaria: establecer la agricultura como parte del desarrollo económico nacional y lograr niveles estratégicos de autoabastecimiento.

En el 306 se habla del papel del Estado, sobre todo en lo referido al Gasto Público, con el fin de integrar a la población campesina al desarrollo¹².

En el 307 la Constitución se posiciona en contra del latifundismo y establece el “derecho” a la propiedad de la tierra de los campesinos. Luego vuelve a la idea “estratégica” de economía al referirse puntualmente a la competitividad y la productividad del sector agrícola¹³.

fueran necesarias para alcanzar **niveles estratégicos de autoabastecimiento. Además, promoverá las acciones en el marco de la economía nacional e internacional para compensar las desventajas propias de la actividad agrícola.**

El Estado protegerá los asentamientos y comunidades de pescadores o pescadoras artesanales, así como sus caladeros de pesca en aguas continentales y los próximos a la línea de costa definidos en la ley” (Asamblea Nacional Constituyente, 1999) [resaltados propios].

¹² “Artículo 306. El Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina **un nivel adecuado de bienestar**, así como su **incorporación al desarrollo nacional**. Igualmente **fomentará la actividad agrícola** y el uso óptimo de la tierra mediante la dotación de las obras de infraestructuras, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica” (Asamblea Nacional Constituyente, 1999)[resaltados propios].

¹³ “Artículo 307. **El régimen latifundista es contrario al interés social**. La ley dispondrá lo conducente en materia tributaria para gravar las tierras ociosas y establecerá las medidas necesarias para su transformación en unidades económicas productivas, rescatando igualmente las tierras de vocación agrícola. **Los campesinos o campesinas y demás productores o productoras agropecuarios tienen derecho a la propiedad de la tierra**, en los casos y formas especificados por la ley respectiva. **El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y particulares de propiedad para garantizar la producción**

En conclusión, los conceptos de soberanía aplicadas a la economía, el concepto de seguridad alimentaria y el concepto de que la producción agroalimentaria es estratégica para el desarrollo en Venezuela, están ya definidos desde la Constitución bolivariana.

En todos estos conceptos se reitera que el Estado tiene el papel de impulsor de la economía, en concordancia con la empresa tanto privada, cooperativa, pública y social, en concordancia con las fuerzas participativas y protagónicas de la sociedad civil y con el fin explícito de producir “justicia social”, “soberanía económica”, “seguridad alimentaria”, “agricultura sustentable”, “autoabastecimiento”, así como también “productividad” y “competitividad”.

La Constitución, como todo producto social, y sobre todo, porque fue redactada y discutida ampliamente en el seno de la sociedad, ratificada en la elección popular de la ANC, en sus debates del año 1999 y su aprobación por mayoría el 15 de diciembre de ese año, es producto de su *saber social* (Santos, 2011). Es el resultado de las luchas por la democracia, así como de su experiencia como nación democrática desde 1958.

“Ningún arquitecto puede diseñar un edificio desconociendo los materiales que se usan en la construcción. Los ladrillos de la arquitectura social son las personas” (Monedero, 2009: 14).

Pero por ello mismo, cabrían las preguntas ¿Qué garantiza que la sociedad venezolana acierte en el uso del espacio público como medio hacia su desarrollo? ¿Por qué la participación de la sociedad civil en el área económica permitiría la recuperación soberana de la economía y la generación de seguridad alimentaria?

agrícola. El Estado velará por la ordenación sustentable de las tierras de vocación agrícola para asegurar su potencial agroalimentario.

Excepcionalmente se crearán contribuciones parafiscales con el fin de facilitar fondos para financiamiento, investigación, asistencia técnica, transferencia tecnológica y otras actividades que promuevan la productividad y la competitividad del sector agrícola. La ley regulará lo conducente a esta materia” (Asamblea Nacional Constituyente, 1999).

De hecho, algunos autores han explorado las limitaciones de la participación como medio de transformación. Algunos apuntan a la importancia de dosificar e incluso, replantear la importancia de la participación.

A diferencia del imperativo en la Constitución de ampliar el espacio público, Domenico Majone sostiene que lo deseable es *monopolizar la agenda* (Majone, 2008:228).

Majone deriva esta conclusión del resultado de una investigación que indica que la participación, ausente de canales conducidos políticamente, no puede producir resultados homogéneos. Se trata del “teorema del caos” de Mc Kelvey-Shofield.

Según este estudio, se demuestra que en ausencia de un equilibrio dado por una mayoría dominante virtualmente cualquier producto político es posible. De tal modo que “aquellos que controlan la agenda se pueden terminar comprometiendo con toda suerte de manipulaciones” (Mc Kelvey-Shofield en Majone, 2008:230).

Lo contrario correspondería a monopolizar la agenda, puesto que una asamblea con canales políticos, fuerzas políticas dominantes, internas o externas, tomarían decisiones en acuerdo con esas fuerzas, generando así integración, continuidad y pertinencia del debate, entre otras cosas.

En relación al monopolio mismo, se argumenta que el poder de una élite no solo reside en su capacidad de afectar las decisiones finales de un gobierno, sino de colocar para su decisión opciones casi indistinguibles (Bacharach y Baratz en Majone, 2008:232).

Incluso se argumenta que para el éxito de una democracia parlamentaria, esto es, un “gobierno por discusión”, es necesario que cada parte tenga sus propios órganos decisorios, diferenciados unos de otros, siempre que todos formen parte de una unidad y que tal unidad se deba principalmente a valores comunes y una “cultura política común” (Banker en Majone, 2008:233).

Un gobierno “controlado por oficiales electos no solo es nuestra idea normativa sino nuestra imagen dominante de lo que debe ser la realidad empírica” (Majone, 2008:234).

De tal modo que la misma representatividad democrática constituye un interjuego que permite el monopolio de la agenda. La pregunta

¿monopolio por quién? Es posiblemente respondida por Bacharach y Baratz (1962): por la élite.

Tal como lo describe O'Donnell (1997) a este tipo de poliarquía le corresponderían rendiciones de cuentas más de tipo horizontal que vertical, esto es, los controles democráticos pueden ser muchos y correspondientes a diversos intereses, pero deben estar insertos o previstos por la misma sociedad política, no por la civil.

Ideas como ésta permiten pensar en un modelo de democracia muy diferente al venezolano, uno en el que la participación permanente de la sociedad civil en instancias intra-estatales y paralelas al Estado, harían difusa la sociedad política y, por tanto, harían incontrollable a la sociedad, o la harían solo controlable por la vía de la manipulación, lo que no sería más que otro retorno a la monopolización de la agenda política.

De ahí la importancia del ejemplo venezolano. El éxito absoluto o relativo de sus políticas públicas serían también una indicación de éxito del modelo de democracia “por desbordamiento”, como apuntaba Monedero, o de un posible camino hacia el Estado Experimental (Santos, 2011), esto es, un Estado capaz de responder mejor y alternativamente a la crisis neoliberal (Pisarello, 2009) y post-contractual la cual pone actualmente en peligro los cimientos civilizatorios de la sociedad.

La apuesta a favor de la participación puede incluso ser una apuesta filosófica que intuye que la evolución es el resultado de imperativos de igualdad.

Para Monedero el plano biológico es otro plano que permite pensar “como totalidad” (entendida como el mundo por conocer, como suele usarse en la filosofía) o como subraya en otros momentos (Monedero, 2009:64) “por fuera de la totalidad” (entendida ahora como la totalidad del mundo inmediatamente conocido):

“(…) los seres humanos estamos dotados de neuronas espejo, conocidas como el ‘ADN del comportamiento’, que son las responsables de construir sobre la base de la imitación la posibilidad de adaptación y supervivencia del homo sapiens (...) La democracia tiene la tarea de construir una organización social acorde con esa condición más evolucionada que significa al ser humano, definiendo la

evolución desde indicadores dialogados. Al tiempo esta organización está signada (...) por un profundo sentido de la empatía que habrá de traducirse en un amplio compromiso con lo público y con el establecimiento de un sistema social donde se garanticen las capacidades de participar de todas y cada una de las ventajas de la vida social” (Monedero, 2009: 65).

Tal como se observa, la participación, entendida como acceso, diálogo y transformación, en Monedero corresponde a un mandato biológico. La participación no es el elemento que regenera el debate y con éste el tejido social, como en Dahl y Putnam, es más bien el instrumento político de una naturaleza solidaria con el cual construir un sistema dialógico, relacional y justo. Este esfuerzo político procura que la imitación no sea un dispositivo para la destrucción mutua, sino para la evolución, tal como ha significado para el hombre en todo su tiempo como especie y más allá de ésta. Participar, confrontar, transformar no es más que la práctica que permite que la “relación” entre en juego dentro del sistema.

Monedero utiliza la idea de relación similar a la que desarrolla Jessop.

“Es necesario armar una suerte de teoría relacional de la política, que devuelva a la sociedad –y por tanto, a los conflictos que hay en sus seno- la comprensión de lo político. La compartimentaciones típicas del saber universitario han fragmentado de tal manera el conocimiento que con frecuencia se convierten en juegos tautológicos (...) enmascarados en una petición de rigor que, con frecuencia, solo dan cuenta del rigor mortis” (Monedero, 2009: 15).

A pesar de que los pluralistas y Monedero perciben el rol de la participación desde matrices teóricas diferentes, es importante ponerlos juntos pues ambos coinciden en que la participación no solo es un elemento constitutivo de la democracia sino que le atribuyen un valor importante en regenerar el sistema y transformarlo. Para los pluralistas, permite el funcionamiento integrado del sistema en una sociedad; para Monedero es más que un mejor modelo sistémico ya que permite reconstruir el futuro de un sistema que luce agotarse y, al mismo tiempo, autodestruirse.

Por todo ello, la seguridad alimentaria venezolana, sus posibilidades de éxito o fracaso a través del SSSA, en consonancia con sus tradiciones zamoranas, las luchas por la alimentación en la reforma y la revolución

agraria de la región, la lucha por la expansión de los derechos democráticos, la lucha por sustituir el orden neoliberal, la lucha en contra de la dependencia periférica y monoprodutiva y, finalmente, en consonancia con el horizonte normativo y utópico de la Constitución bolivariana, es fundamental para que otros subsistemas identifiquen algunas posibilidades de superar el drama de la pobreza, la dependencia, la falta de democracia y el agotamiento del capitalismo en los inicios del siglo XXI.

6. El Sistema Socialista de Soberanía Alimentaria (SSSA).

Hemos explicado el SSSA como el conjunto de políticas dirigidas por el Estado realizadas con el objetivo explícito de generar seguridad y/o soberanía alimentarias que se extienden desde febrero de 1999 hasta febrero del 2012. Estas políticas tienen un marco jurídico (Constitución Bolivariana, Ley de Tierras, Ley del Poder Popular...) y se despliegan con diferentes instrumentos: instancias administrativas (CADIVI, Ministerio de la Alimentación...), productivas estatales (CVA, CVAL, Agropatria...), productivas cogestionadas o gestionadas por el Poder Popular (Cooperativas, Empresas de Producción Socialista, Consejos Comunales agrarios...), comercialización y abastecimiento (Casa de Alimentación, CASA, Mercal, CVAL, PDVAL...).

También y como se ha explicado anteriormente, no es posible comprender las políticas alimentarias venezolanas sin integrarlas en: a) el proceso y la coyuntura histórica en que se idearon y produjeron (cap. 6.1), b) la estrategia en el área de la participación que dominaba la escena política cuando fueron ideados e implementados (cap. 6.3), c) su relación con las demás políticas en el contexto de las situaciones comunitarias (caps. 6.3 y 6.5) y d) su papel explícito en las estrategias productivas y de abastecimiento nacionales (caps. 6.2 y 6.4).

En términos más generales, el SSSA debe ser puesto en contexto con la polarización política (paro petrolero-alimentario, sabotaje...) (caps. 6.1 y 6.5), la tensión negativa entre ineficiencia y rentismo (cap. 6.4 y 6.5) y a los replanteamientos que se hace el Estado venezolano en relación al papel que debe jugar el mercado (cap. 6.4).

6.1. Hitos del proceso bolivariano y su relación con “la siembra del petróleo”

Hugo Chávez Frías ganó las elecciones presidenciales de Diciembre de 1998 al frente de un llamado “Polo Patriótico”, que reunía varios partidos de izquierda, independientes, alternativos y otros resabios del pasado como los perezjimenistas. El MAS, una escisión del PCV en los años 70 y que se había deslindado de su fundador y entonces ministro de Cordiplan de la *Convergencia*, Teodoro Petkoff, le sirvió para acceder a las mesas de votación, pues sólo con miembros de mesa electorales autorizados podrían garantizarse que otros grupos no derivasen ilegalmente los votos a otras agrupaciones, en vistas de resultados relativamente cerrados.

Del otro lado se aglutinan los partidos tradicionales del puntofijismo y algunos otros partidos en el llamado “Polo Democrático”. De tal modo que su figura ya provocaba controversias cerradas y tendencias a la polarización. Sin embargo entonces tal polarización no tenía el sesgo de clase social que le caracterizó después: Chávez ganó también con los votos de la clase media y alta, motivada por remover a una “élite corrupta” (Wilpert, 2007:15).

Su figura había sido impulsada por su participación, como parte de un equipo, en un intento de golpe de Estado en Febrero del 1994 contra la *Concertación*. Si bien no había programa ni declaratoria política alguna en ese entonces, la idea de derrocar al primer Presidente de los ajustes neoliberales era visto con buenos ojos por la población. Luego de su encarcelamiento, amnistía durante la *Convergencia* y aceptación de las reglas electorales, Chávez se presentaba como figura comprometida con el cambio para las elecciones del 98: un candidato antisistema en un sistema leído como corrupto.

Luego de la victoria del bolivarianismo, se impulsó el proceso constituyente prometido. Durante este proceso, la polarización de las clases sociales aún no era evidente. Entonces la participación era entendida como un movimiento transversal de la sociedad en contra del orden puntofjista. Sin embargo, no tardaría en aparecer el realineamiento simbólico por clases sociales característico de la polarización venezolana.

La legitimidad política del bolivarianismo fue lograda tras sucesivas elecciones post-constitucionales. Una de ellas, las llamadas Megaelecciones del 30 de Julio del 2000, luego de la aprobación de la nueva Constitución, colocó a 33000 candidatos a luchar por 6000

puestos de gobierno en todo el país, incluyendo el puesto de Presidente de la República.

A finales de ese mismo año, el recién relegitimado presidente Chávez apostó por dirigir el cambio hacia los cimientos socioeconómicos de la nación. Chávez obtuvo del Parlamento una Ley Habilitante el 11 de Octubre de 1999 y dictó 49 leyes, entre las que destacaban las popularmente llamadas Ley de Tierras (que buscó determinar el carácter ocioso o improductivo de tierras, conllevando su expropiación pagada y posterior entrega a los campesinos organizados solicitantes), la Ley de Pesca (que prohibió la pesca de arrastre a favor de la “pesca artesanal”), el Reglamento de Radio y TV comunitaria (que busca fundar medios cuyas programaciones sean realizadas por sus usuarios organizados) y la Ley de Hidrocarburos (que impidió la venta de activos de la empresa petrolera y reguló la participación del capital foráneo en la exploración y la producción)¹⁴. La respuesta de Fedecámaras, el sindicato patronal, y luego de la CTV, el sindicato obrero, fue la convocatoria a un paro nacional, el cual, si bien no logró detener las leyes, creó un primer marco político sobre el que se construiría luego la respuesta opositora en la forma de partidos, gobernantes locales y medios de comunicación, convocada con criterios de clase social.

Las leyes eran presentadas por la oposición como radicales, opuestas a la propiedad privada por sí misma y servían por tanto como justificativo para protestar mediante una huelga patronal. Se trató del primer paro patronal o *lockout* de la historia de Venezuela.

Se trató de un hito social e ideológico sin precedentes a pesar de la tradición populista de los últimos 70 años de vida institucional. Como el paro y el apoyo gubernamental a las leyes derivadas de la Ley Habilitante hacían casi imposible escenarios de acuerdo, empezó a cristalizarse una dinámica de guerra en la escena de las clases sociales, conocida como polarización (Martín-Baró, 2003).

En ese período el presidente Chávez perdió popularidad entre Junio del 2001 a Enero del 2002; se trató de un descenso desde el 60-70% de apoyo, al 30-40% quizás producto de su mismo discurso “inflamable”, de los persistentes ataques de los medios privados en contra de su

¹⁴ Los contenidos de estas 49 leyes llamadas “habilitantes” y de las 26 siguientes están en: [www.http://www.asambleanacional.gob.ve](http://www.asambleanacional.gob.ve) y <http://www.mpd.gob.ve/prog-gob/resuley.htm> .

gestión y de la incapacidad del gobierno en articular los instrumentos estatales heredados (Wilpert, 2007: 24). Es posible decir que la polarización como dinámica de clases no parecía aún anclar a favor de la popularidad del presidente.

El 11 de Abril del 2002 la oposición, en la forma de la Coordinadora Democrática, convocó a una gran marcha de manifestación en Caracas convocada fundamentalmente por lo que ellos denominaban el “fin de la meritocracia” en PDVSA. Tal fin sería el resultado de una intervención del Estado en su junta directiva. Si bien se trataba de una empresa totalmente estatal, era tradición que PDVSA se dirigiese a sí misma, en correspondencia a los valores “meritocráticos” que habían heredado de las prácticas empresariales transnacionales.

Lo que parecía ser una manifestación en contra de las políticas del gobierno en PDVSA pronto se convirtió en una manifestación para derrocar el gobierno bolivariano. La marcha fue desviada de su destino original y fue llevada hacia el Palacio de Miraflores, edificio de la Presidencia del Gobierno, donde se apostaba un grupo importante de bolivarianos como barrera humana para proteger al Presidente. La Guardia Nacional (bajo órdenes del Gobierno Nacional), la policía metropolitana (dirigida por la alcaldía entonces opositora de Caracas) y francotiradores apostados en los edificios laterales, chocaron con ambas manifestaciones y se produjeron muertes en los dos bandos. En el sitio llamado “Puente Llaguno” fueron emboscados manifestantes bolivarianos entre el fuego de la policía opositora y el de francotiradores profesionales, cuya identidad y origen nunca se reveló. En toda la emboscada hubo un saldo de 11 muertos, incluyendo bolivarianos y opositores. La situación se desencadenó en un Golpe de Estado¹⁵, que incluyó una declaración de Chávez en boca de su entonces Ministro de la Defensa, la cual estableció que el Presidente habría aceptado su renuncia. Sin embargo, una carta enviada de puño y letra del Presidente desde el sitio donde fue recluido contra su voluntad en la noche de ese mismo día, diciendo que no había renunciado, provocó la salida a la calle de los defensores de Chávez pidiendo la restitución del hilo constitucional. Simultáneamente, un movimiento de las Fuerzas Armadas aliadas a la Constitución

¹⁵ Investigaciones hechas por el entonces periodista de CNN, Otto Neustadl, y el videasta alternativo Angel Palacios, apuntarían a que la declaración de los generales rebeldes reclamando una masacre estaba grabada antes de la misma masacre (<http://www.youtube.com/watch?v=GVH6xMDTQg0> y <http://video.google.com/videoplay?docid=-7579731842748892532#>).

rescataron al presidente y lo llevaron de nuevo al Palacio (Presidencial) de Miraflores en la madrugada de 13 de Abril. Durante ese breve período entre el 11 y la madrugada del 13 de Abril, la oposición se hizo del Ejecutivo y designó anticonstitucionalmente y unilateralmente al presidente del sindicato patronal, Fedecámaras, Pedro Carmona Estanga, al frente del gobierno (López Vigil, 2006; Villegas Poljak, 2009), quien pasaría a destituir a la práctica totalidad de los cargos institucionales fundamentales del gobierno y a su sustitución por personas ligadas a los intereses privados.

El presidente Chávez y el entonces futuro presidente de facto Carmona Estanga, habían tenido una conversación privada antes del golpe, cuyo único tema fue precisamente la siembra petrolera y alimentación.

La conversación es conocida, pues Chávez había decidido ventilarla, también antes del golpe, motivado por una declaración en contra de la Ley Habilitante hecha por Carmona Estanga, entonces todavía presidente de la patronal:

“¿Vas a defender el latifundio, Carmona? En un país como Venezuela con tanta tierra fértil (...) Muchos, Carmona, y te puedo dar pruebas, no tienen títulos. Al sur del Lago de Maracaibo casi nadie tiene títulos. Son tierras del Estado (...) son tierras clases 1 y 2, la Ley Betancourt decía que no podía haber propiedades mayores a 150 hectáreas. Todos los que al sur del Lago en tierras de primera categoría, tuvieron más de 150 hectáreas violaron la ley durante 40 años. Tienen 10 mil hectáreas y las usan sólo para ganadería, destrozando la tierra cuando deberían utilizarla para sembrar plátano, caco-porcelana o muchos otros productos para suelos clase 1. Se trata de lograr justicia para asegurarnos la paz a todos, incluyéndote a ti, Carmona, a los ganaderos y a sus hijos (...)” (Chávez en Villegas Poljak, 2010:36-37).

La declaración indicaba la importancia que tenía el tema agroalimentario en la simbolización del desarrollo y de la justicia social en un momento crucial para el país. Como en todo el texto constitucional, en los discursos presidenciales y en la planificación pública, la redistribución de la tierra fue sinónimo de justicia social, conceptos asociables a la seguridad alimentaria, al desarrollo y a la soberanía.

Sin embargo, tiempo después, durante el corto gobierno de facto de Carmona Estanga éste designó como Ministro de Agricultura y Tierras

a Raúl de Armas, “empresario ganadero, Director del Sector Pecuario y Directivo de Fedecámaras” (Asamblea Nacional, 2002:7). Se trataba de un empresario relacionado con la industria forestal de la madera.

Este ministro era uno de los únicos 6 funcionarios sentados en la mesa durante el tiempo en que Carmona Estanga intentaba generar legitimidad para su gobierno. Del otro lado de la mesa se encontraban los directivos de los 7 medios de comunicación privados más importantes del país (Villegas Poljak, 2010:181-182).

En esa mesa y con estos representantes se decidió el *blackout* informativo con el fin de minimizar mediáticamente la capacidad de respuesta del bolivarianismo y que duró hasta el momento de la recuperación del mando por parte de las fuerzas armadas y la presión social en la calle, horas después (López Vigil, 2006; Villegas Poljak, 2010:175-217).

Este tipo de evidencias indica la importancia del tema alimentario junto a la industria petrolera en las diferencias entre oposición y gobierno que motivaron el golpe de Estado del 2002. Pero también permite entender el papel político jugado por la agricultura en el mantenimiento del orden socio-económico, tal como se había identificado en los primeros capítulos de esta tesis para toda la región latinoamericana y para el sistema de acumulación periférico (Amin, 1974; SIC, 1976; Purroy, 1980; Kay, 1989; Malinowitz, 2008). El breve ministro de agricultura representaba, como el propio presidente Carmona Estanga, al sindicato patronal, sector social denunciado por Chávez en el testimonio anterior como interesado en imposibilitar el desarrollo agroalimentario. A la vez, formaba parte del cuadro en el que los dueños de los medios de comunicación restringieron libertades civiles en el 2002.

Sin embargo la impronta política del tema alimentario es mucho más explícita, sobre todo en términos de la seguridad, durante el paro petrolero-alimentario del 2002 y el 2003.

El paro nacional, como lo denominaban los partidos de la oposición, la patronal y el sindicato obrero, fue el abrupto resultado de un clima de confrontación aguda durante todo el 2002 en las Mesas de Negociación y Diálogo auspiciadas por la OEA y el Centro Carter, las cuales, paradójicamente, ya habían producido resultados concluyentes para el reestablecimiento de un clima democrático y pacificado.

El paro nacional del 2002 se extendió desde Diciembre de ese año hasta Febrero del 2003. Su componente más explosivo fue el llamado paro petrolero, en el que PDVSA cerró su producción, afectando tanto al suministro interno de combustible como a la exportación de crudos y refinados al resto del mundo. Sin embargo, el paro no fue iniciado por los trabajadores de la industria petrolera sino por el sindicato patronal y el sindicato obrero: era la repetición de la estrategia llevada a cabo durante finales del 2001 con el fin de pedir la derogación de la Ley Habilitante y de las leyes que habían salido de su seno, tales como las dos leyes agroalimentarias, la Ley de Tierras y la Ley de Pesca.

De tal modo que el paro del 2001, como el del 2002, fueron paros sobre la producción de bienes y servicios básicos y, en ambos casos, su agente más importante fueron los medios de comunicación y Fedecamaras, el sindicato patronal. Este paro había sido entonces un paro alimentario antes de que fuese un paro petrolero. Fue, además, un paro alimentario y petrolero dirigido a remover un presidente que decretaba leyes para la transformación del sistema agroalimentario y petrolero. Esta fórmula ya había tenido éxito en el golpe de Estado contra el Presidente Allende en 1973, en Chile. En este caso la radicalización del movimiento campesino y las expropiaciones que habían profundizado la reforma agraria durante el período de Allende fueron un objetivo político explícito contra el cual se activó un paro general de transportes el cual restringió fuertemente los suministros alimenticios en la población. Luego del golpe contra Allende, el movimiento campesino fue objeto de represión y desarticulación (Kay, 1998).

Una vez activado el paro en Venezuela, los medios de comunicación y las manifestaciones en la plaza Altamira (en las inmediaciones de las zonas de clase media alta en Caracas) crearon el clima para el paro petrolero-alimentario en base a la misma estrategia y relato político del golpe: las nóminas mayores de la industria denunciaban el fin de la “meritocracia” y el inicio de la politización de PDVSA por cuanto la única manera de revertirlo era la *renuncia del Presidente de la República*.

Cuando la industria petrolera se sumó al paro contaban con el apoyo nuevamente de los cuadros directivos y medios de PDVSA (las llamadas *nóminas mayores*) y por ello pudieron paralizar parcial y totalmente 11 plantas petroleras, el 90% de las estaciones de servicio, el transporte de 12 tanqueros petroleros que llevaban petróleo y derivados a clientes en altamar y paralizar total o parcialmente 6

refinerías (PDVSA, 2012). Las paralizaciones parciales se debieron a la resistencia de algunos trabajadores a abandonar sus sitios de trabajo, la mayor parte de ellos de las *nóminas menores*.

Adicionalmente, los tanqueros petroleros de terceros se negaban a atracar en los puertos petroleros venezolanos aduciendo falta de personal capacitado para dirigir el proceso.

El impacto de esta operación en el clima político nacional consistió en la paralización del transporte público y privado y, con éste, la paralización del resto del aparato productivo: los mercados vendían solo sus existencias, las grandes empresas de alimentos cerraban sus depósitos por solidaridad a la patronal, así como muchos centros comerciales no abrían por la decisión del propietario del inmueble de sumarse al paro o por la imposibilidad de sus trabajadores de transportarse hasta el sitio.

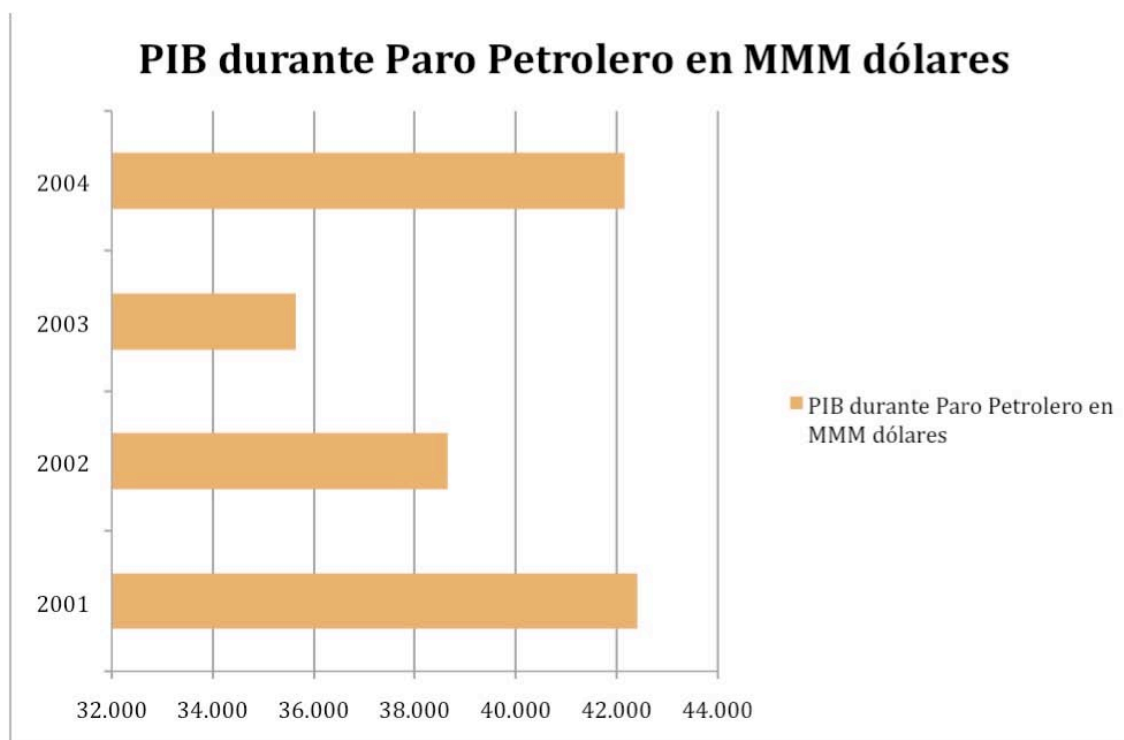
El precio de los alimentos, cuando éstos se conseguían, subió significativamente. Durante esos casi tres meses se produjo un desabastecimiento generalizado que impactó mayormente a las clases sociales más pobres.

Dado que el paro tenía por único objetivo la renuncia del Presidente Chávez al frente del Ejecutivo y el consiguiente llamado a nuevas elecciones, la imagen de un país paralizado mientras los grandes medios privados nacionales de comunicación auspiciaban incesantemente las movilizaciones opositoras, producían la sensación de un país que rechazaba a su presidente.

A pesar de esta sensación, el hecho del que el paro fue fundamentalmente el producto de un sector en específico que impedía el suministro de energía y el cierre de algunas grandes empresas fundamentales, hizo que algunos analistas prefirieron denominarlo un simple *lock-out* (Página 12, 2003). En virtud del riesgo que significó para la estabilidad de la producción petrolera así como la integridad de las personas y los equipos industriales de los que dependió la vida económica del país, el gobierno prefirió denominarlo el “sabotaje petrolero”.

El paro provocó una caída en el PIB “de 15,8 % durante el cuarto trimestre de 2002, y de 24, 9%, durante el primer trimestre de 2003” (PDVSA, 2011) lo que corresponde a una caída de cerca de una 3a. parte para ese indicador:

Gráfico 8. PIB petrolero durante el paro petrolero. MMM Dólares. BCV, 2011 a.



Resumiendo, el medio escogido por la alianza entre la oposición, reunida bajo la forma de la *Coordinadora Democrática*, los medios privados de comunicación y el sindicato patronal, consistió en reducir peligrosamente la seguridad alimentaria, las posibilidades de la población en acceder a la salud y aumentar la pobreza de la población para inculpar al gobierno bolivariano y facilitar así la renuncia, un golpe cívico o uno militar en contra del hilo constitucional.

Lo que durante el golpe del 2002 lucían ser solo algunas indicaciones sobre el papel político de la alimentación, durante el paro petrolero-alimentario esto se hizo lúcidamente palpable en las acciones y en los discursos asociados:

Juan Fernández, directivo de PDVSA y líder del paro, declara en Diciembre del 2002 que el desabastecimiento de combustible, gas doméstico, algunos alimentos de la cesta básica (fundamentalmente harina de maíz, cárnicos, lácteos...) y medicinas, "es responsabilidad del Gobierno que está llevando al país a un caos" (EFE, 2002).

Cuando las Fuerzas Armadas y el Instituto de Protección al Consumidor (INDECUI) allanaron la empresa Panamco de distribución de productos como la Coca-Cola durante el paro, en enero del 2003, el embajador de los EEUU en Venezuela declaró de seguido que “se han afectado los intereses norteamericanos” con la empresa Coca-Cola y añadió que ello “estorba las relaciones bilaterales” (Vinogradoff, 2003).

A finales de febrero del 2003 cesó el paro petrolero-alimentario sin lograr su objetivo fundamental: la renuncia del Presidente. Ello abrió una nueva etapa en las políticas públicas sociales y productivas así como en las estrategias de legitimidad del gobierno bolivariano. Si entendemos las políticas como una relación entre implementación y resultados, es posible decir que el SSSA realmente comienza luego del paro petrolero-alimentario con la creación de la misión Mercal. Las misiones Mercal, Barrio Adentro y Robinson I fueron tributarias de los problemas experimentados por los venezolanos en ese período y sirvieron al gobierno para su relegitimación en el referendun revocatorio que iba a realizarse en agosto de ese mismo año.

Quizás el hecho más importante del paro no consistió en los resultados en términos de la estabilidad del Poder Ejecutivo, sino que la industria petrolera fue “recuperada” como un instrumento del Estado venezolano: una importante pero marginal tradición de especialistas petroleros universitarios acusaban a PDVSA de apuntar a intereses “antinacionales” bajo el discurso de la tecnocracia antes de Chávez. Entre otros, resaltaron los nombres de economistas como Francisco Mieres (quien fuera Embajador venezolano ante Rusia), Carlos Mendoza Potellá (ex-embajador venezolano ante Arabia Saudí) y Gastón Parra Luzardo (Vicerrector de la Universidad del Zulia, luego Presidente de PDVSA durante el Golpe de Estado y Presidente del Banco Central de Venezuela hasta el 2009). En esta “tecnocracia antinacional” que dirigía PDVSA residiría la razón por la que el control de la industria fue el centro de las confrontaciones del golpe del 2002 y el paro petrolero-alimentario que culminó en el 2003.

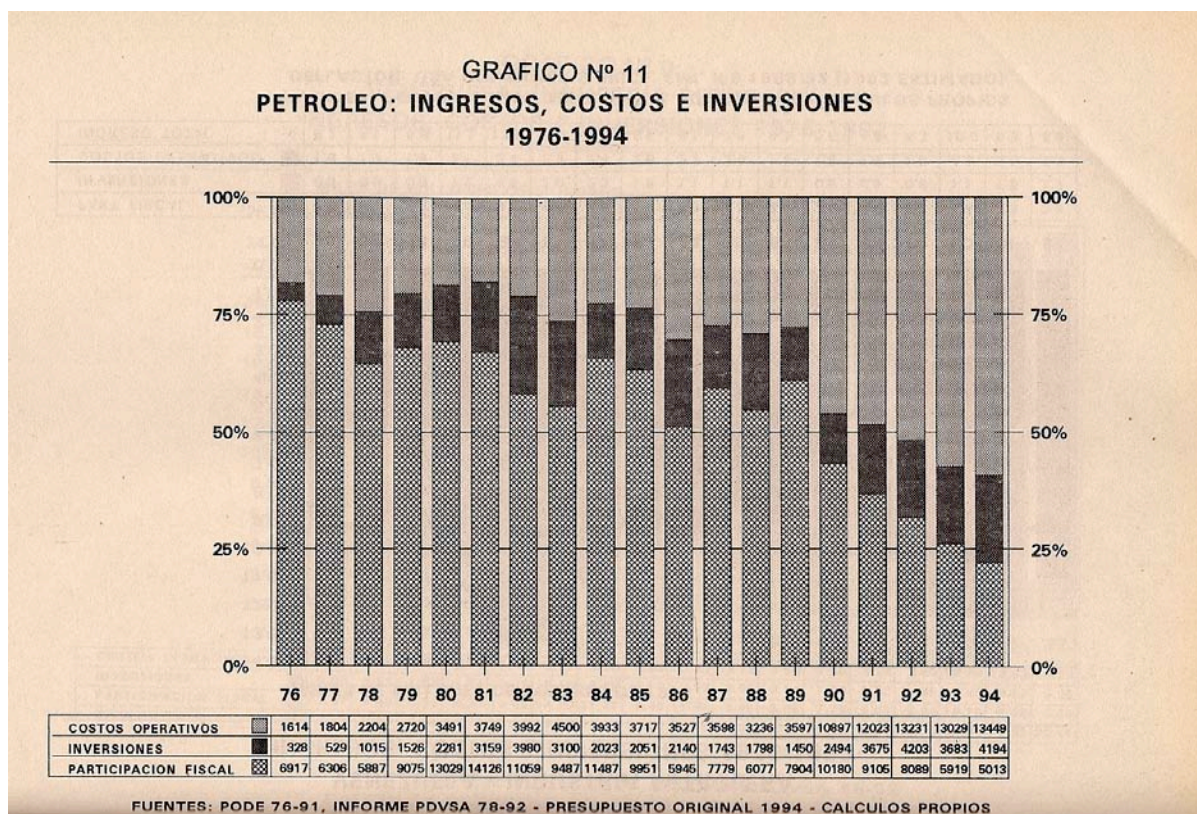
Para ilustrar esto, el gráfico 9 indica cómo las acciones operativas de PDVSA cada vez se hacían más costosas al Estado venezolano desde 1982 hasta 1994. La postura de Miguel Rodríguez presidente de Cordiplán¹⁶ durante la *Concertación* (Rodríguez, 2004), así como Sosa Pietri y luego Luis Giusti, ambos presidentes de PDVSA durante esos

¹⁶ Instancia adjunta a la presidencia de la República antes de Chávez, encargada de los Planes Nacionales realizados por el Estado.

períodos, sugerían la venta de activos de la empresa, su desincorporación del cartel de la OPEP, la subida de la producción para bajar los precios y su “internacionalización” (Mendoza Potella, 1995; Mendoza Potellá, 2000; Mieres, 2010).

Gráfico 9. Ingresos costos e inversiones de PDVSA. 1976-1994.

Fuente: Mendoza Potellá, 1995:156.



La Ley de Hidrocarburos introducida mediante Ley Habilitante en el 2001 tenía el mismo objetivo que la Ley de Tierras: frenar la privatización del aparato productivo y explorar otras formas más soberanas de mercado.

En abril del 2003, luego de la victoria contra el paro petrolero y de cara al referendum revocatorio a celebrarse en Agosto, Chávez recupera parte del control de la operatividad del gobierno y, luego de una conversación con el presidente Castro de Cuba, opta por impulsar más medidas de compensación social que las propiamente de orden productivo. Entonces activó las primeras y algunas de las más importantes misiones sociales, Barrio Adentro (un sistema de médicos cubanos y luego venezolanos integrados en los barrios pobres de más difícil acceso, organizado cogestionadamente con las comunidades), la Misión Robinson (alfabetización y educación primaria en el sitio de los

barrios, también organizado cogestionadamente con las comunidades) y Misión Mercal (un sistema de producción y comercialización de alimentos paralelo al formal “capitalista” a organizarse con las comunidades pero no de manera cogestionaria). Así lo relató el presidente en el 2008:

“Entonces empezamos a trabajar con las misiones, diseñamos aquí la primera y empecé a pedirle apoyo a Fidel. Le dije: ‘Mira, tengo esta idea, atacar por debajo con toda la fuerza’, y me dijo: ‘Si algo sé yo es de eso, cuenta con todo mi apoyo’. Y empezaron a llegar los médicos por centenares... todo el equipo de PDVSA, el Frente Francisco de Miranda, formamos el comando político...” (Chávez, Noviembre del 2004 en D’Elia y Cabezas, 2008: 4)

Estas misiones posicionaron al gobierno frente a las elecciones referendarias solicitadas por la oposición en el 2003. En agosto de ese año Chávez volvió a ganar con cerca de 20 puntos de diferencia.

La polarización continuó, el bolivarianismo ganó mayormente las elecciones regionales del 2004, con la excepción más llamativa del Zulia, el principal estado productivo del país. Aunque durante el 2004 había acariciado la idea en Montevideo, no fue hasta enero del 2005 que el Presidente Chávez declaró por primera vez sus simpatías con el socialismo, uno de tipo específico (Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, 2012).

En el 2005 se consolidaron las misiones como instancias de operación del ejecutivo junto a la sociedad civil. Continuó el proceso de expropiación de tierras determinadas como ociosas, improductivas y latifundios a partir de la Ley de Tierras del 2001. Ello provocó la reacción violenta de un sicariato selectivo sobre casi dos centenares de dirigentes campesinos, detrás del cual pareció esconderse un segmento del sector ganadero del país (Provea, 2011).

Ese mismo año se produjeron las elecciones parlamentarias. El bolivarianismo ganó la totalidad de los escaños puesto que los principales partidos de la oposición se retiraron de la contienda electoral¹⁷.

¹⁷ La sorpresa de esta decisión se extendió a España y la OEA: “En una rueda de prensa realizada en el Congreso español (Cámara Baja), miembros del gobernante Partido Socialista (PSOE), el conservador Partido Popular (PP) y de otros grupos minoritarios lamentaron que la oposición venezolana haya decidido no concurrir a los

En el 2006, en vísperas de nuevas elecciones presidenciales, Chávez llamó a la desaparición de su partido el MVR (Movimiento V República) por uno nuevo, el PSUV (Partido Socialista Unido de Venezuela), una herramienta unitaria del “chavismo” para la construcción del socialismo.

PDVSA ha aprovechado su capacidad de recapitalización para lanzar su propio Plan Siembra Petrolera (el Ministerio de Planificación tendrá otro en el 2010 con el mismo nombre) en el que hizo importantes inversiones en las áreas propias de la industria como en las áreas de alimentación y agricultura. El 3 de diciembre del 2006 se celebraron las elecciones del fin del mandato del Presidente, las cuales volvió a ganar.

En el 2006 se le dio cuerpo a los “5 motores”, a ser implementados desde el 2007, en el que se destacó el 5to. motor o “explosión del poder popular”. En esta declaración de grandes principios estratégicos se solicitaba el trasvase del modelo endogenista por el socialista. Esta estrategia se profundizó aún más en el referendun del proyecto de Reforma Constitucional (el 2do. motor) cuya redacción comenzó en el 2006 y terminó un mes antes de la convocatoria a su votación, el 2 de Diciembre del 2007. A pesar de la derrota sufrida por el bolivarianismo en este escrutinio (la primera desde la llegada de Chávez al poder) allí se sentaron algunos principios categoriales y programáticos fundamentales del socialismo bolivariano, incluyendo la llamada Nueva Geometría del Poder.

En el gráfico 10 se describen los 5 motores que anuncian el recorrido hacia el socialismo:

comicios venezolanos y en consecuencia quedara fuera del Parlamento, señaló Efe” (El Universal, 2005)

Gráfico 10. Los 5 Motores. Chávez, 2007.



6.1.1. Del “endogenismo” al socialismo: una transición en proceso.

Desde febrero del 2003 hasta el 2008 se diseñaron e implementaron la mayor parte de las misiones sociales, tal como puede apreciarse en el gráfico 10 a:

Gráfico 10 a. Cronología e hitos de las misiones sociales en Venezuela. Fuente: D'Elia y Cabezas, 2008.

Cronología de las Misiones

2002		2003	2004	2005	2006	2007	2008
Abr-02							
Intento Golpe de Estado	Nov-02	Ago-03			Dic-06	Ago-07	
	Solicitud Referendo Consultivo	Solicitud Referendo Revocatorio	Ago-04		Elecciones Presidenciales	Propuesta Reforma Constitucional	
Dic-02	Feb-02	Nov-03			Ene-06	Dic-07	
Paro Nacional y Petrolero	Firmazo	Reafirmazo			Plan Hacia el Socialismo	Referendo Reforma Constitucional	
		Abr-03	Ago-04		Ene-06	Mar-07	Mar-08
		Misión Barrio Adentro I	Misión Vivienda-Hábitat		Misión Negra Hipólita	Misión Villanueva	Misión José Gregorio Hernández
		Jul-03	Oct-04	Ene-05	Feb-06	May-07	Abr-08
		Misión Robinson I	Misión Guatupuro	Misión Zamora	Misión Ciencia	Misión Alma Mater	Misión 13 de abril
		Misión Sucre	Misión Piar	Misión Barrio Adentro II	Mar-06	Ago-07	
		Oct-03	Feb-04	Jul-05	Misión Madres del Barrio	Misión Che Guevara	
		Misión Robinson II	Misión Identidad	Misión Cultura	Oct-06		
		Misión Miranda	Mar-04	Ago-05	Misión Barrio Adentro IV		
		Nov-03	Misión Vuelvan Caras	Misión Barrio Adentro III	Nov-06		
		Misión Ribas		Oct-05	Misión Revolución Energética		
				Misión Robinson III			
				Misión Rivas Técnica y Social			

Las misiones son políticas públicas que tienen objetivos fundamentalmente sociales, compensatorios y productivos, conjugan el esfuerzo de ministerios, institutos y otros organismos públicos, fuerzas armadas, sociedad civil, sociedad civil organizada en Poder Popular, empresa privada y beneficiarios de manera heterogénea. Ellas se produjeron con el objetivo de crear líneas de acción gubernativa con niveles de independencia al cuadro heredado de instituciones y ministerios estatales. Así por ejemplo, las misiones pueden estar administrativamente adscritas a un ministerio pero responder a lineamientos de coordinaciones transversales. También pueden ser asignadas a nuevos ministerios, mudadas de un ministerio a otro o transferidas permanente o provisionalmente a la Presidencia o a la Vicepresidencia de la República.

Dada su importancia en relación a los procesos de participación así como su incidencia en los objetivos de soberanía alimentaria, se identificarán con más detalle las misiones pertinentes a esta tesis en el capítulo 6.3.

Las misiones hasta el 2006 tuvieron por objetivo el desarrollo llamado “endógeno”, inspirado en la propuesta de Sunkel (Chávez, 2003; Treviño, 2006) y referenciado en el epígrafe 2.1. Pero a partir de este año tendrían por objetivo el socialismo: la compensación de la deuda social debía acompañarse no solo de un reimpulso de las fuerzas productivas endógenas sino de una transformación de la relación entre trabajo y capital. Este “salto adelante”, como fue denominado por el propio presidente, constituye una periodización visible en varios autores y en la propia planificación de Estado. En lo concreto, transformó las incipientes Empresas de Producción Social y Núcleos de Desarrollo Endógeno en Empresas de Producción Socialista y Núcleos de Desarrollo Socialista, los cuales se analizarán en los epígrafes 6.2.16, 6.3.3 y 7.1.4.

El período socialista definió todas las políticas posteriores y comportaron varios saltos interiores. Por ejemplo, en el espíritu del 4to motor (Moral y Luces), durante el 2006 se había sugerido la práctica de las “3 erres”: *rectificación, renovación y reimpulso*, con el fin de acelerar la construcción del socialismo desde las posibilidades de la “conciencia social”. La explosión del poder popular o 5to motor, indicaba la necesidad de entregar al *poder popular* el control de la política y de la economía.

En el 2008 se reactivó el referendun para uno solo de los objetivos perdidos en las elecciones del 2007, la reelección presidencial. Sin

embargo, la discusión generada en torno a la reforma constitucional del 2007 obtuvo mas atención del gobierno y la sociedad luego de la derrota, y se cristalizó en acciones concretas promovidas por el ejecutivo durante el 2008, relativas a la “Nueva Geometría del Poder”.

La Nueva Geometría del Poder fue el plan maestro del socialismo. Mucho más contundente y específico que el Primer Plan Socialista (PPS), tenía además la forma del articulado legal con el que había sido propuesto a la sociedad durante la reforma constitucional fallida del 2007. La propuesta consistía, en grandes rasgos, en que los Consejos Comunales se integrasen en nuevas instancias de coordinación a llamarse “Comunas” y que éstas a su vez se integrasen en nuevas instancias a llamarse “Consejos Territoriales de Gobierno”. Los Consejos Territoriales eran entendidos esta vez no como una suma de instancias del poder representativo y el participativo, como eran los Consejos Federales anunciados por la Constitución de 1999, sino como poder directo de las comunidades sobre su territorio. Las comunas organizadas no solo tendrían el poder de organizar el poder socialista en su región, sino que sus áreas geográficas de acción serían modificadas según sus propias necesidades territoriales, esto es, históricas, culturales y socio-productivas. La transformación del orden territorial permitiría la transformación definitiva de las reglas del juego en manos del poder popular. Por su carácter de transformación en los territorios sociales, esto será analizado en los sujetos observados en el epígrafe 6.3.5 y el 7.1.4.

En el 2009 sobrevino una crisis de precios petroleros que obligó al gobierno a ralentizar sus compromisos políticos con el socialismo. Sin embargo no es posible decir que se redujo el gasto público social ni el destinado a desarrollo social (Aponte Blank, 2010). Los recursos faltantes fueron extraídos de un aumento de la deuda pública y de las reservas internacionales, fundamentalmente.

En cualquier caso, el 2009 reveló debilidades estructurales de los procesos de desarrollo y absorción económica en los que se inscribieron las políticas del SSSA. Estos aspectos serán tratados con más detalle en el capítulo 6.4. La crisis del 2009 impuso una lectura diferente del optimismo del 2007 y del 2008 en torno a la Nueva Geometría del Poder y a las posibilidades del subsistema en provocar la transformación socialista en breve plazo, por cuanto evidenciaba problemas característicos de la estructura económica venezolana desde los años 70 y la Gran Venezuela. Por su parte las organizaciones de la sociedad civil empezaron a presentar problemas de eficiencia,

productividad y de estructura de costos, por razón de la inflación, la ineficiencia burocrática, la regulación de precios, la persistente devaluación abierta o solapada y la persistencia del control cambiario que coordinaba CADIVI.

En el 2010 los precios del petróleo volvieron a subir a los niveles anteriores al 2009 y el Ministerio de Planificación respondió a los problemas identificados en el 2009 con una inyección mucho más importante y definida hacia el área de la producción agroalimentaria. El año Bicentenario de la Independencia de Caracas y su celebración fue utilizada para simbolizar las acciones del gobierno bolivariano en su conjunto. Todas las políticas sociales y económicas del Estado creadas para ese año apuntaron a mayor gasto público, más expropiaciones, más compras del Estado, más créditos, la creación y obtención de más sistemas públicos de producción, insumos, transportes y comercialización, a diferentes escalas del SSSA.

La alimentación, el socialismo y la idea de soberanía alimentaria fueron muy publicitadas como medios para una nueva independencia.

En el 2011 los precios del petróleo subieron moderadamente y se dirigió nuevo e importante gasto público, esta vez a una nueva gran cruzada productiva agrícola-crediticia llamada Gran Misión Agro-Venezuela. Con el fin de reactivar la industria de la construcción se impulsó la Misión Vivienda destinada a mejorar la oferta inmobiliaria residencial para la población. Algunos aspectos relacionados con los problemas de absorción de estas inversiones estatales serán tratados en el epígrafe 6.4.

En el 2012 se impulsaron dos misiones más de tipo compensatorio dirigidas al sector infantil y la 3a edad, y concretamente, en febrero de ese año, tal como se había prometido en el 2011, se impulsó la segunda etapa de la Gran Misión Agro-Venezuela, esta vez a través de la creación de un fondo mixto público-privado de la banca para financiarla. En términos operativos, esta tesis finaliza su estudio en febrero del 2012, con el anuncio de este nuevo fondo de desarrollo agrícola, el Fondo Zamorano.

6.1.2. Las olas de participación

Esta tesis parte de la premisa de que no es posible entender el papel de la participación social en la descripción de los hitos del bolivarianismo ni en los componentes del SSSA si no se cuenta con instrumentos

conceptuales que organicen y definan la naturaleza de la participación desde la propia experiencia de la sociedad civil.

En el mismo espíritu de la teoría de las políticas públicas que establece que la política no está definida por la intención explícita del Estado que la promueve, sino por su práctica, evaluada desde fuera de los objetivos del Estado (Laws y Hajer, 2008; De Kostka Fernández, 2009; Howlett, Ramesh y Perl, 2009) resulta necesario incluir la comprensión de los procesos de participación en un marco de análisis propio. Para ello, esta tesis recurre a la idea de “olas de participación”:

Las situaciones observadas que sirven de evidencia al carácter participativo de la política serán periodizadas por los diferentes momentos en que fue definida la participación tanto por el modelo inferido desde el Estado como por las circunstancias que hicieron posible, limitaron o transformaron estas inferencias.

Estas periodizaciones están marcadas por cambios o re-articulaciones de los objetivos y los medios de la participación, incluso terminológicamente. Para denotar la idea de que estos momentos se superponen unos a otros, desaparecen pero van dejando improntas en la organización de la sociedad civil, esta tesis los denomina “olas de participación” u “olas de participación social” utilizando la acepción de “ola” que se usa en los movimientos culturales (como “la nueva ola”).

La idea de “ola” u otras ideas cercanas al “ciclo” en la literatura política también han sido objeto de varios tratamientos. Hirschman sugiere que la decepción es intrínseca al deseo humano, por lo que a momentos de gran intensidad de la acción pública pueden suceder respuestas pendulares a favor del interés privado, siguiendo la polaridad entre espacio público y privado de la cultura occidental (Hirschman, 1986). Lyotard plantea que los cambios de “era” corresponden a la expansión de *l'ennui* [fastidio, aburrimiento] del objeto significativo que da sentido al momento histórico (Lyotard, 1979). Siguiendo esta idea, Shweder sostiene que la difusión de las identidades socio-culturales también responde a ciclos propios, tal como sucede con la moda (Shweder, 1989). En su manual de sociedad civil y movimientos sociales, Ibarra sugiere que los ciclos de movilización dependen de desequilibrios producidos entre fuerzas socio-políticas antagónicas, y que estos desequilibrios desaparecen cuando se canalizan (Ibarra, 2005: 319). En relación a la economía, la idea de ciclos económicos de crisis y anti-crisis ha sido más frecuente entre interpretaciones de origen marxista. Particularmente, se han

realizado estudios a profundidad de la mano de Giovanni Arrighi e Immanuel Wallerstein, entre otros, a partir del economista ruso Nikolai Kondratiev, según las cuales el capitalismo responde a ciclos largos basados en la naturaleza exigua del modelo de acumulación (Arrighi, 2002: 86-148; Wallerstein, 1999). Todas estas lecturas se separan de la idea de que los ciclos políticos forman parte de un relato lineal, unidireccional, evolutivo, o incluso coyuntural, tal como se reconoce en la tradición de las ciencias políticas y sociológicas.

Para el caso que se estudia, la idea de olas de participación sugiere que éstas forman diferentes relatos de significación y acción sobre una marea que les sirve de base. Esta marea no es más que una metáfora de una gran iniciativa de participación recanalizada por el nuevo modelo de Estado en Venezuela a partir de 1999, la cual reaccionó contra su debilitamiento político y económico, provocado por los pactos de gobernabilidad, la incapacidad absorbtiva de la renta petrolera y la condición periférica de un Estado estructuralmente dependiente de su rol geopolítico durante el puntofijismo.

El proceso constituyente iniciado en 1999 dibujó una suerte de horizonte que permitió a la sociedad una nueva imaginación de sus fundamentos. Como contraparte a la experiencia puntofijista y neoliberal, la participación, entendida como los recursos de la acción civil, se convirtió en protagonista activa de esta nueva imaginación.

Dado el carácter abstracto del horizonte constitucional y dado el papel jugado por el presidente Chávez en la generación de nuevos imaginarios y experimentos políticos durante los 12 años siguientes, fue necesario que la sociedad civil y el Estado hicieran diferentes lecturas concretas acerca de la significación y alcances de su relación común. Las “olas” conjugan estas lecturas sociales, por lo cual, no sustituyen otras periodizaciones hechas sobre el bolivarianismo (El Troudi y Monedero, 2006; Machado, 2008; Alvarado Chacín, 2010; Machado de Acemy, 2011). De tal modo que las olas de participación:

- a) anclaron las representaciones generales dispuestas por el discurso ideológico y jurídico preeminente en las diferentes experiencias políticas,
- b) dieron consistencia histórica a la práctica de los ciudadanos durante tales experiencias y
- c) se refieren a la dinámica interna de procesos de políticas públicas que son tradicionalmente evaluadas solamente desde la perspectiva de la agenda del Estado. Metodológicamente, tal

dinámica interna facilita la comprensión de la idea de *articulación* entre Estado, política y sociedad civil.

Se establecen 5 olas de participación desde el inicio del bolivarianismo hasta el lanzamiento del Fondo Zamorano, en febrero del 2012:

Gráfico 10 b. Las olas de participación social en Venezuela.

	Período aproximado. Instrumento resaltante.	Contexto.	Intensidad relativa de la dimensión pública de la participación.
1a. ola	1999-feb 2003 Asociaciones civiles. Comité de tierras.	Se inicia el proceso constituyente. Se promulgan la CRBV y las 49 leyes habilitantes. Se inicia el Plan Bolívar 2000. La sociedad civil percibe la intención democratizante del Estado pero no encuentra instrumentos de articulación. Preeminencia de la agenda civil.	creciente
2a ola	Mar. 2003-2005 Comités de misiones sociales. NUDE. Cooperativas.	El Estado sobrevive al golpe y al paro. Surgen instrumentos concretos para articular la agenda civil con la pública.	creciente
3a. ola	2006-nov. 2007 Consejos comunales. NUDES. EPS.	Los instrumentos de la 2a ola se convierten en instancias de poder social y territorial. Se desarrollan las agendas civil y pública.	creciente
4a. ola	Dic. 2007-2009 Comuna/Nueva Geometría del Poder.	La reforma constitucional fallida sigue cambiando el carácter del Estado. La agenda pública se sobre-dimensiona en relación a la agenda civil. El subsistema revela profundas dependencias de los ingresos petroleros.	estable-decreciente
5a. ola	2010-feb.2012 Políticas bicentenarias. Las "Gran Misiones".	La agenda pública abunda en instrumentos y recursos. La agenda civil ha perdido perfil propio y recursos interdependientes.	decreciente

Con el análisis de las situaciones observadas, correspondiente al epígrafe 6.3, se brindará una comprensión más contextualizada de estas olas.

6.2. Componentes del SSSA.

El primer componente del SSSA es la **Constitución de la República Bolivariana de Venezuela** la cual sirvió de fundamento al resto de las políticas. Dada su importancia se dedicó el capítulo 5 a su proceso de cristalización, sus aportes al SSSA y sus aportes en parte de la discusión contemporánea sobre participación.

Con el fin de mostrar ordenadamente los organismos e instituciones fundamentales del Sistema Socialista de Soberanía Alimentaria, después de la Constitución, se realizaron los gráficos 11a y 11b, los cuales describen y periodizan a los componentes del SSSA ente el pre y el post paro petrolero-alimentario. Estos gráficos se utilizan para ilustrar otros aspectos, por lo que se encuentran más adelante en este mismo capítulo. Como se verá en el epígrafe 6.3, la transversalidad de la participación a través de las políticas será la norma de estos dos períodos, por lo que habrían otras políticas o acciones dirigidas indirectamente hacia el logro de la seguridad alimentaria que por motivos operativos serán apenas descritas o no serán mencionadas.

Tal como se nota en esos gráficos, los componentes fundamentales de la política alimentaria pasan al menos por dos etapas.

La primera etapa (1998-2003) corresponde a la que se denominará en esta tesis 1a. ola de participación, cuyos actores centrales son el presidente, un sector del Ejecutivo, las Fuerzas Armadas y los círculos bolivarianos. La segunda etapa será algo más detallada luego del literal “f” de este capítulo, las restantes olas de participación y cierra su estudio en Febrero del 2012.

La primera etapa es reconocida por otros autores que estudian las políticas sociales bolivarianas (D’Elia y Cabezas, 2008:1-3; Alvarado Chacín, 2010:346). En este período la eficiencia y alcance de las primeras políticas de SSSA dependen de los problemas de cohesión política y legitimación de los primeros años del bolivarianismo, la energía consumida por la nación en el proceso constituyente (que incluyó las elecciones de la ANC, la redacción del texto, la formación de un “congresillo” para suplir las faltas de un parlamento ordinario, la puesta en referendum del texto constitucional y las mega-elecciones

conducentes a relegitimar todo el sistema político), el deslave mortal en el Estado Vargas, los conflictos derivados de las leyes surgidas de la Ley Habilitante de finales del 2001, un paro general convocado por la patronal, la sindical, los partidos opositores y los medios de comunicación privados, un golpe de Estado que puso al presidente de la principal patronal al frente del ejecutivo por un día y que produjo 11 muertos en las calles de Caracas, y un segundo paro convocado en idénticos términos que el anterior pero que duró casi tres meses y sumó por vez primera un paro de la industria petrolera, con las consecuencias explicadas en el capítulo 6.1.

Es posible decir que en ese período el gobierno no precisó sus estrategias de implementación con claridad y luce carecer de instrumentos de Estado para agendar suficientes políticas al respecto de la alimentación. Los problemas identificados para este período son visibles en tres aspectos:

- a. Una oposición radical, renuente a salidas electorales, que mantiene la capacidad de definir la agenda política nacional luego de diciembre del 2001.
- b. La imposibilidad declarada regularmente por el Ejecutivo de controlar un aparato gubernamental cuyos sujetos respondían a intereses previos al bolivarianismo.
- c. La poca audacia de las políticas implementadas entonces para lograr concentrar objetivos y resultados eficientemente, tal como también reconoció el propio Presidente (Chávez en D’Elia y Cabezas, 2009:4).

Estos factores, incluidos aspectos del tipo de discurso “inflamable” del propio presidente, condicionaron un descenso de su popularidad (Wilpert, 2007:24).

Sin embargo, el gobierno produjo, además de la propia Constitución (cap. 5), cuatro importantes políticas para el sector alimentos y el problema de la pobreza. Éstas son las siguientes:

6.2.1. El Plan Bolívar 2000

Dadas las dificultades de movilizar el aparato gubernamental para los objetivos de alimentación y pobreza, el gobierno utilizó la infraestructura y los recursos humanos de las Fuerzas Armadas para comprar, transportar, repartir y crear centros de distribución de

alimentos y medicinas en asentamientos urbanos y rurales pobres del país.

Dada la importancia de las fuerzas armadas como herramienta central de esta política, el Plan Bolívar 2000 fue diseñado en 1999 como un plan cívico-militar. La imagen militar del propio Presidente, la movilización de contingentes militares y la iconografía nacionalista signaba el carácter de esta política y, con ello, se producía una impronta simbólica militar y nacionalista en el perfil del propio gobierno.

En la medida en que su cobertura crecía, se amplió a diferentes tipos de servicios compensatorios: asistencia jurídica, asistencia médica, saneamiento ambiental (recolección de basura urbana, destape de cañadas obstruidas por las lluvias y los desperdicios...), reparación de escuelas, además de empleo y servicios puntuales de alfabetización. El plan era coordinado por la propia Presidencia de la República y el Ministerio de la Defensa, además de recibir apoyo de otros ministerios. Concretamente, el bolivarianismo había transformado el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social en Ministerio de Sanidad y Desarrollo Social, y su nuevo Viceministerio de Desarrollo Social se había puesto al frente de las políticas compensatorias implementadas.

La comunidad, generalmente en la forma de asociaciones de vecinos e independientes, interactuaba con el Plan Bolívar 2000, personificados en los militares que llegaban a los barrios, y coordinaban necesidades conjuntamente.

La solución de las necesidades pasaba por la ausencia de presupuestos para el funcionamiento del Plan, razón por la que la opción preferente eran las soluciones que requerían de las personas y el equipamiento que ya disponían las Fuerzas Armadas. A modo de ejemplo, *la comunidad conseguía la pintura y los soldados pintaban las escuelas*.

Lamentablemente, la compulsividad del plan y la ausencia de coordinaciones estables regionales, hicieron difícil medir el impacto de esta política desde los propios organismos.

El Plan duró formalmente hasta el fin del paro petrolero-alimentario en el 2003, cuando las Misiones ocuparon su lugar.

6.2.2. La Ley de Tierras y Desarrollo Agrario (LTDA).

La Ley de Tierras y Desarrollo Agrario fue un Decreto Presidencial con Fuerza de Ley dictada en el 2001 que procuró, entre otras cosas, detectar la existencia de tierras ociosas, improductivas y latifundios entregarlas bajo forma de propiedad a comunidades campesinas organizadas que las soliciten.

Hubo varios esfuerzos realizados durante períodos anteriores a la V República para redistribuir tierras. El esfuerzo más significativo fue el realizado por la socialdemocracia venezolana en los años 60, llamada la Reforma Agraria, la cual distribuyó tierras del Estado a pequeños productores a lo largo de todo el territorio (ver epígrafe 4.15).

Sin embargo para el censo agrícola de 1997, esto es, un año antes de la llegada de Chávez al poder, la tenencia de tierras en Venezuela presentaba cifras similares que en los años de la Reforma Agraria de los 60: un 5% de tenientes controlaban el 75% de las tierras, y el 75% de los más pequeños tenientes controlaban solo el 6% de la tierras (Wilpert, 2005)¹⁸. El presidente Chávez había denunciado el incumplimiento de la reforma agraria o “Ley Betancourt” (Chávez en Villegas Poljak, 2010: 36-37). Los mismos informes estatales presentados durante la IV República a la FAO indicaban avances muy moderados en relación a los objetivos planteados originalmente por la reforma (Ministerio de Agricultura y Cría, Instituto Agrario Nacional, Instituto Interamericano de Cooperación Agraria y Organización de Estados Americanos, 1995).

De tal modo que el gobierno, una vez superados el proceso constituyente y las mega-elecciones del 2000 impulsó la nueva ley con contenidos relativamente novedosos para la historia agraria venezolana.

La LTDA o comúnmente llamada “Ley de Tierras”, reconoció la posibilidad de adjudicar tierras a todo trabajador del campo. Insistió

¹⁸ Igualmente habría que reconocer, a efectos de estas cifras, que los censos agrarios han sido insuficientes no solo para estimar la propiedad sino para estimar la verdadera capacidad productiva del país, al menos hasta el 2011, por lo que las cifras pueden distar entre el gobierno y asociaciones de productores e incluso entre organismos del mismo gobierno (Provea, 2011:57).

en reconocer el trabajo rural como objeto de la Ley Orgánica del Trabajo y a su derecho de formar parte de asentamientos estables. Integró los beneficios económicos y sociales a dos categorías de la tradición: el folclore y el *conuco* (pequeñas unidades territoriales agrícolas de subsistencia familiar) como fuentes de diversidad cultural y biológica. Insistió en el uso racional del agua como un asunto de interés nacional y reconoció subsidios alimentarios a las mujeres del campo en situación pre y post natal.

La ley, hasta el momento que se escribe esta tesis, evalúa las tierras en función de su potencial productivo y las grava si son subutilizadas. La ley creó el Instituto Nacional de Tierras (INTI), un nuevo organismo en sustitución del antiguo Instituto Agrario Nacional (IAN) con el fin de que evaluase, a solicitud de las comunidades vecinas, el carácter latifundista, ocioso o contexto improductivo de las tierras para luego determinar su adjudicación a estas comunidades. El INTI también debía decidir sobre cualquier reconsideración interpuesta por el propietario tradicional.

La ley entregó al INTI y al Instituto Nacional de Desarrollo Rural (INDER) la coordinación del desarrollo agrario, en coordinación al Banco Agrícola de Venezuela, el Ministerio de Agricultura y Tierras y otros agentes públicos.

La ley no reconocía aún con claridad a los sujetos del poder popular, por cuanto fue redactada antes de la 2a ola de participación. Pero estipuló la preponderancia del uso social de la tierra, en su contexto cultural y político, sobre el uso privado y fuera de marcos mínimos de responsabilidad con el desarrollo. Se trató de una ley que redefinió el porqué y el para qué de la propiedad privada a favor de redes sociales tradicionales del mundo del trabajo.

Su “exposición de motivos” hablaba, por vez primera en los discursos del bolivarianismo, de la *soberanía alimentaria* como objetivo. También se presentó como un instrumento para la Seguridad Alimentaria, la productividad, la competitividad y como estrategia para una agricultura sustentable.

Desde el triunfo electoral de Chávez en 1998 hasta la presentación de los decretos-ley en Noviembre del 2001, y a pesar de la importancia dada al tema de las tierras durante las elecciones, la Ley de Tierras fue

la primera acción directa del gobierno de Chávez para una nueva política sobre el tema agroalimentario.

Los decretos-ley, desde que se anunciaron, provocaron una enorme controversia en el país y la Ley de Tierras fue un emblema significativo de este conflicto. Puede decirse que esta ley fue el inicio de la polarización en Venezuela con criterio de clase social. Tal como se describió en el epígrafe 6.1, en diciembre del 2001 la oposición liderada entonces por la sindical patronal convocó a una huelga general. Los medios privados alertaron sobre una amenaza comunista e incluso circularon por sus propios portales versiones falsas de la ley, con el objetivo de atemorizar a la opinión pública. En la población de San José de Perijá –Las Piedras uno de los primeros líderes campesinos en solicitar tierras por esta vía, el abogado Pedro Doria, fue asesinado por sicarios durante el paro petrolero-alimentario en el 2003 (ver sujeto 7 del epígrafe 6.3.3). A partir de entonces comenzó una ola de campesinos sicariados que llegó a más de 250 en el 2011, según las denuncias de la coalición progubernamental “Frente Nacional Campesino Ezequiel Zamora” (Alvarez, 2008). Una importante organización de Derechos Humanos no identificada con el gobierno, Provea, documenta la masacre y destaca que, a diferencia de los tiempos previos a Chávez, la mayor parte de estos asesinatos no fueron perpetrados por la seguridad del Estado (Wilpert, 2008; Provea, 2011), indicando con ello el papel de los terratenientes en el conflicto.

6.2.3. El Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007.

El proceso bolivariano ha pasado, al menos teóricamente, por dos grandes estrategias socio-productivas, el desarrollo endógeno y el socialismo. La primera, la estrategia endogenista, corresponde a los modelos de desarrollo descritos en los capítulos 2 y 3 de esta tesis que tienen como objetivo promover modelos a escala situacional de desarrollo dentro del propio juego del capitalismo periférico, con miras a superar progresivamente el *décalage* global industrial.

Para el proceso bolivariano, el Plan 2001-2007 y la Constitución fueron plataformas útiles al Estado para promover la desaparición de los actores del elitismo político y económico predominantes en la IV República que, según la versión de la siembra petrolera anti-oligarquía predominante en el gobierno (epígrafe 4.14), fueron el resultado del capitalismo rentístico del *puntofijismo* e impedirían la distribución de

los recursos nacionales con fines de solidaridad y desarrollo productivo real.

A los objetivos de la planificación de Estado, este período es denominado “endogenista”. Neritza Alvarado (Alvarado Chacín, 2010: 346-348) incluso lo separa en dos subperíodos, el “tercerista” (por las referencias del presidente en relación a la Tercera Vía de Tony Blair) y el propiamente endogenista entre el 2003 y el 2005.

El Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007 está estructurado por equilibrios. Éstos son: 1. Económico, 2. Social, 3. Político, 4. Territorial y 5. Internacional (Ministerio del poder popular para la Planificación y el Desarrollo, 2001).

El equilibrio social se distanciaba claramente del paradigma neoliberal en relación al diagnóstico de la pobreza y de la calidad de vida. Sostenía que la desigualdad es el resultado de causas estructurales y no solo un problema que portan los sujetos en condición de vulnerabilidad social. En consonancia con la Constitución bolivariana propone incidir en las causas de los problemas y, por tal razón, incluir como parte de la solución el empoderamiento de las comunidades.

El equilibrio económico, también crucial en la comprensión que aquí se adelanta sobre la naturaleza periférica del subsistema venezolano, se soporta en 6 logros:

- a) La diversificación de la economía -considerada la más importante de los 6-,
- b) La integración de las cadenas productivas,
- c) La Seguridad y Soberanía Alimentarias,
- d) La adopción de nuevas tecnologías,
- e) Fortalecer pequeñas y medianas Empresas, y
- f) Racionalizar las finanzas del sector público (Ministerio del poder popular para la Planificación y el Desarrollo, 2001).

El Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007 fue aún un plan consensual. Propuso la reconversión de sectores poderosos de la economía hacia objetivos comunes con el desarrollo y como el resultado del diálogo social. Aún no se habían establecido los factores de la polarización política y de clase que primaron en el siguiente plan, el Primer Plan Socialista del 2006 para el período 2007-2013 (PPS).

6.2.4. Los Consejos Locales de Planificación Pública (CLPP).

En el año 2002 se promulgó la Ley de Consejos Locales de Planificación Pública (llamados también los CLPP, o simplemente, Consejos Locales de Planificación).

Se trató de una ley inspirada en los presupuestos participativos de Porto Alegre, comunidad entonces controlada por el Partido de los Trabajadores de Brasil, antes de que éstos ganaran el Poder Ejecutivo de ese país. El ejemplo brasileño había sido destacado en el Foro de Porto Alegre y promocionado para diferentes partes del mundo (Carrillo Cano y Francés García, 2008) y por el premio internacional de Dubai de Buenas Prácticas patrocinado por las Naciones Unidas (UN-Habitat, 2012).

En Venezuela se diseñó esta ley con el objetivo de que las instancias del poder ejecutivo local (alcaldías y gobernaciones) convocaran asambleas comunitarias y promovieran la conformación de comisiones para reflexionar y establecer prioridades y usos de los presupuestos no burocráticos asignados por el Fondo de Descentralización.

La idea era que el poder representativo estimulara la aparición de formas del poder llamado entonces *participativo* u *originario* para definir el uso de los presupuestos. Esta ley indicó por primera vez el adjetivo “popular” para referirse a estas formas de poder.

El proceso no funcionó en ninguna parte del territorio nacional. No fue convocado el poder participativo, ni participó éste cuando llegó a ser convocado. La única excepción fue el Municipio Torres del Estado Lara, gobernado por el Partido Comunista de Venezuela, donde los Consejos Locales de Planificación Pública dirigieron la acción municipal junto a su gobierno, al menos, hasta el 2005.

Este esfuerzo, sin embargo, fue un antecedente importante de los Consejos Comunes y de lo que se llamó posteriormente, el Poder Popular, e indicó la importancia de la polarización y de las subsiguientes olas de participación en la relativamente mayor efectividad de las políticas participadas tanto en el área de la seguridad alimentaria, como en las demás áreas.

La renuencia silenciosa del poder representativo a promover efectivamente los CLPP conllevó a que en la reforma de la Ley del FIDES (ley de presupuestos descentralizados del fondo designado para este fin, el Fondo Interinstitucional de Desarrollo Social), se obligara a alcaldías y gobernaciones a ceder un porcentaje de su presupuesto no

burocrático a las comunidades que lo solicitasen para proyectos de desarrollo, luego de haberse sucedido un tiempo de silencio administrativo mínimo. Este aspecto de la reforma tampoco tuvo mayor impacto en la creación de nuevos actores en la sociedad civil.

6.2.5. Otros esfuerzos antes del 2003.

Dentro de las leyes-decretos presentadas en el 2001 se incorporó la llamada Ley de Pesca la cual prohibía la pesca de arrastre y establecía el modelo de la pesca artesanal como el modelo de producción pesquero nacional. Esto ya era así en la práctica, pero permitió un recurso legal en contra del avance de formas de pesca más depredadoras sobre el territorio marítimo de Venezuela, el cual alcanza cerca de la mitad de las aguas territoriales de todo el Mar Caribe.

Se creó el Reglamento de Medios Comunitarios en Radio y TV que proponía la entrega de concesiones del espectro radioléctrico a medios que mantuviesen entre un 60 y un 80% de su programación totalmente realizadas por comunidades empoderadas.

Se creó el Plan Estratégico Social 2001-2007, el cual luego se incorporó bajo la forma de “equilibrio social” en el Plan de Desarrollo. Se creó el Fondo Único Social, con el fin de concentrar recursos para alimentación, salud y educación. Además se crearon, en el marco del Plan Bolívar 2000, el Proyecto de Alimentación Comunitaria junto al Programa de Alimentación Escolar.

Estos últimos componentes sirvieron como extensión de programas compensatorios similares de los gobiernos anteriores a la Constitución del 99, pero se agregaron a un nuevo e importante factor: la creación de las Escuelas Bolivarianas en el 2001.

Las Escuelas Bolivarianas fueron una extensión nacional de los proyectos sectorizados y experimentales de *escuela activa* realizados en los Estados Zulia, Aragua y Bolívar, dominados a principios de los 90 por partidos de izquierda.

Las Escuelas Bolivarianas extendieron las horas de asistencia a los estudiantes e incluían planes de alimentación balanceada apoyados por el Programa de Alimentación Escolar. Esto coadyuvó a un importante aumento de 20% en la matrícula para la educación inicial formal en el sector público de la educación entre 1998 y el 2000 (D’Elia

y Maingon, 2010:374) y un consecuente mayor consumo de alimentos balanceados para los infantes en todo el territorio nacional.

6.2.6. Mercal.

La segunda etapa (2003-2006) correspondió a la aparición de la Misión Mercal, una institución que en su fundación tenía el doble propósito de estimular la producción fuera de los mercados dominantes y de colocar productos a bajo precio en puntos de venta dentro de las comunidades más pobres del país. El comienzo de esta etapa es exitoso en términos generales: la producción del país crece, Venezuela encabeza las medidas mundiales de emprendimiento (ver epígrafe 6.4) y el Estado ha recuperado el control político sobre sus instituciones luego de las amenazas del golpe y el paro, además de presupuestos crecientes por razón del aumento de los precios petroleros.

Mercal ha sido una cadena pública de mercados, sistemas de acopio, transporte y producción con el objetivo de vender a precios más bajos productos alimenticios de la cesta básica, entre comunidades estimadas de más bajos recursos.

Según su “misión”, Mercal fue creada para producir “Seguridad Alimentaria”:

“Efectuar el mercadeo y comercialización, permanente, al mayor y detal de productos alimenticios y otros productos de primera necesidad, manteniendo la calidad, bajos precios y fácil acceso, para mantener abastecida a la población venezolana y muy especialmente la de escasos recursos económicos, incorporando al grupo familiar, a las pequeñas empresas y a las cooperativas organizadas, mediante puntos de comercio fijos y móviles (...) para garantizar la seguridad alimentaría” (Mercal, 2011).

Mercal surgió como una respuesta a la polarización política en Venezuela. Nació en abril del 2003, luego del paro petrolero-alimentario del 2002-2003 el cual había contado con el apoyo de grandes distribuidoras y productoras de alimentos como Cargill y Polar, impidiendo el acceso casi absoluto de las poblaciones a la dieta diaria, tal como se describió en el epígrafe 6.2. Estas empresas además

controlaban también muchas de las redes de importación de insumos y alimentos. El paro alimentario se produjo entonces sobre la infraestructura productiva, distribuidora, comercializadora y de importación.

De tal modo que, para el proyecto bolivariano, Mercal fue visto como un “logro”, no solo por la importante afluencia de personas en sus redes de abastecimiento¹⁹ sino porque fue una política de Estado que enfrentó con relativa efectividad a los agentes económicos monopólicos vinculados a la oposición que entonces controlaban holgadamente el subsistema alimentario.

A partir del 2006, se convirtió en un instrumento importante del “socialismo” y la “soberanía alimentaria”. Su importancia residía en que:

a) Durante el 2005 Mercal benefició a 12.082.600 personas, lo que correspondía a casi la mitad de la población venezolana para ese año (Giordani, 2006:15).

b) Produjo seguridad alimentaria, entendida ésta como el acceso a una alimentación constante y diversa para sectores crecientes de la población, con niveles de cobertura competitivos y satisfacción en la

¹⁹ El 30 de Julio del 2005, Datanálisis, una encuestadora frecuentemente asociada con la oposición venezolana, afirmaba que la población aprobaba la gestión de Mercal: “El 92% de los encuestados por la firma Datanálisis calificó como satisfactoria la Misión Mercal, según lo aseguró su director, Luis Vicente León” (Vheadline, 2005)

El 4 de Mayo del 2006 la misma encuestadora afirmó que era el sitio preferido de compras de alimentos en los venezolanos, con una asiduidad del 47,3% de los encuestados, esto es, un ascenso de la tercera posición de las preferencias a la primera en el ramo: “...Desde entonces Mercal ha ganado un importante porcentaje del mercado, pues para marzo de este año escaló hasta la primera posición con 47,3% de visitas, casi diez puntos porcentuales más que las de los supermercados de cadena (37,7%), los cuales ocupan el segundo lugar en la lista” (Vheadline, 2006). Resultados similares arroja el BCV en la III Encuesta Nacional de Presupuestos Familiares (BCV, 2007)

El 7 de Mayo del 2009 asciende la preferencia: “La penetración de las redes de distribución de alimentos del Estado han aumentado significativamente. Cerca de 40% de la población manifiesta haber comprado aunque sea una vez productos en Pdval, mientras que 51% lo hace en Mercal... desde el punto de vista de la compra principal, Mercal es el canal mencionado por 25% de los consultados, un cuarto de la población, y 18% lo es Pdval”. (León, 2009).

población, y a precios aceptados por los sectores de menores recursos (Eljuri, 2006: 143-144).

c) Fue una política alternativa, en alguna medida participada y fuera de los canales regulados por la lógica del mercado, lo que generó mayor confianza al Estado en relación al uso político-instrumental de la alimentación por parte de sectores económicos.

d) En virtud de la creciente inflación desde al 2003 hasta el 2006, Mercal generó un ahorro que fue de 13,8 a 44% del presupuesto familiar (Eljuri, 2006:164).

Esta percepción de política exitosa estimuló su integración a un plan más ambicioso, llamado socialista, en el que la red Mercal debía ser la instancia comercializadora de una economía con sentido social, de producción nacional y controlada por el “poder popular”, esto es, pequeños productores y otras formas socializadas de propiedad como cooperativas, empresas públicas, cogestionadas y socialistas (Mercal, 2011). Es posible decir que buena parte del SSSA que se diseñó a partir del 2005-2006 está inspirado en el éxito de esta misión.

Mercal es la red pionera y, aún para el 2012, fundamental de la política alimentaria del Estado. Su ejemplo se reprodujo en la creación de la Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos (PDVAL) en el 2008 y la Corporación Venezolana de Alimentos (CVAL) en el 2009. Recibió la producción alimenticia de los Núcleos de Desarrollo (los NUD Endógenos y NUDE Socialistas), las Empresas de Producción Socialista (antes “Empresas de Producción Social”), las formas cooperativistas y otras instancias de producción pública y social. Finalmente todas estas instituciones se integraron todas entre sí en una red pública, a la cual se agregaron las pioneras Corporación Venezolana Agraria (CVA) y la Corporación de Abastecimientos y Servicios Agrícolas (CASA), además de las nuevas Comersso, Abastos Bicentenario, etc., llamadas en su conjunto Red de Alimentación del Estado, además de las Agro Tiendas Socialistas y Agropatria, cuyas pertinencias se explicarán más adelante.

En un primer momento, el proyecto Mercal se proyectó con el fin de sostener económicamente a pequeños productores de alimentos básicos y de lograr nuevos espacios en un mercado dominado por transnacionales, grandes productoras-distribuidoras y grandes comercializadoras de alimentos que tenían el control casi absoluto del suministro. Se trataba de un proyecto para generar un nuevo tipo de economía sustentable (Rodríguez, 2010).

Sin embargo, ya para el 2006 Mercal no reflejaba una economía socialista o alguna forma alternativa de organización sistémica. Se posicionó como una instancia para redistribuir insumos alimenticios a bajos precios con el fin de reducir factores de pobreza, por la vía del subsidio.

De hecho, desde su fundación en el 2003 hasta finales del 2010 ha aumentado su oferta de productos importados, de un 50% (Rodríguez, 2010) hasta el 78% según reporte en la Memoria y Cuenta del 2011, no solo de Mercal, sino también de todo el resto del sistema socialista de compras de alimentos, el cual sí debía ser, al menos conceptualmente, autosustentable (Minppal, 2011:18).

Se trata de un 78,1% de importación sobre 3.947.561 toneladas solo del año 2010 (Minppal, 2011:18), en contraste al 50% de productos importados sobre un estimado de 36.500 toneladas en el 2003 (Rodríguez, 2010).

De tal modo que Mercal, siendo el único sistema de comercialización “socialista” o endógeno del 2003 ofrece importantes datos sobre la importación nacional de alimentos y su evolución hasta el 2010.

Eso no excluye que Mercal :

- a) sea la red territorial de comercios alimentarios más importante del país (Minppal, 2011),
- b) a diferencia de sus pares privados, desde sus inicios colocó con éxito mercados en zonas pobres y de relativo difícil acceso (Puente y López, 2008) e
- c) impulsó tanto mayor consumo de dietas relativamente variadas (Eljuri, 2006) como mayor ahorro en el presupuesto alimentario de las familias venezolanas desde el 2003 hasta, al menos, el 2010 (Minppal, 2011; Jaua, 2010 b).

La importancia global de Mercal, junto a todo el entramado del SSSA en la generación de seguridad alimentaria, entendida como acceso a fuentes calóricas en la población, será abordado en próximos capítulos.

6.2.7. Comisión de Administración de Divisas (CADIVI).

También como una medida para revertir los efectos adversos del paro petrolero-alimentario del 2002-2003, el gobierno bolivariano aplicó en

febrero del 2003 una medida de control de cambio de divisas con el objetivo de impedir que los capitales privados huyesen del país luego del impacto provocado por el desplome de la producción y exportación petrolera por motivos políticos. CADIVI fue la institución encargada de esta medida. Sin embargo esta política se extendió hasta, al menos, el cierre de esta tesis, en febrero del 2012 con el lanzamiento del Fondo Zamorano.

Aún en el 2012 puede leerse en su página acerca del origen provisional de este control de cambio establecido en el 2003:

“La economía venezolana fue golpeada duramente y estaba al borde de un colapso comenzando el 2003, año en el que precisamente de acuerdo con las proyecciones macro-económicas, se lograría la consolidación de programas sociales destinados a mejorar la calidad de vida de toda la población.

Ante esta situación, el Gobierno Nacional decidió tomar una medida económica, que se mantendrá hasta que los efectos perniciosos causados a la economía nacional, desaparezcan y se de paso al crecimiento sostenido que se intentó frustrar” (CADIVI, 2012).

CADIVI controló la asignación de cupos de divisas extranjeras para todas las operaciones de exportación e importación. La asignación de recursos toma tiempo burocrático, depende de autorizaciones evaluadas, al menos, en términos de política alimentaria y responde por tanto a las necesidades de importación de alimentos que evalúe el gobierno nacional en ese sentido.

La pertinencia de la política entonces residía en su capacidad de impedir o disminuir el flujo importador y en el hecho de que se establecieron con mayor claridad los importes de divisas que salían e ingresaban al país por este concepto.

CADIVI ha autorizado 4 devaluaciones luego del paro petrolero alimentario en relación a 1 dólar estadounidense:

- a) De 1600 Bs que marcaba la demanda, a su regulación en 1920 Bs.
- b) De 1920 a 2150 Bs. en el 2004
- c) En el 2008 el BCV decretó una reconversión monetaria, lo que convirtió el cambio de 2150 Bs. a 2,15 Bs fuertes (Bsf). La reconversión no supuso ninguna devaluación.

d) En el 2010 se crearon dos tipos de cambio, uno para consumo prioritario llamado “dólar petrolero” a 2,60 Bsf y otro para los demás productos a casi 4,30 Bsf.

e) También en el 2010 se creó el SITME, un sistema simultáneo a CADIVI, adscrito al BCV, que transa títulos por moneda extranjera a 5,30 Bsf el dólar.

e) En el comienzo del 2011 se eliminó el “dólar petrolero”. Todas las operaciones, menos las del SITME y las “paralelas” se han calculado desde entonces a 4,30 Bsf.

En la práctica, CADIVI ha competido con el mercado cambiario llamado “paralelo”, de tipo ilícito y con pena de prisión, pero que se realiza de manera relativamente abierta en el país. Incluso el Estado ha utilizado el precio “paralelo” como referencia de las devaluaciones implementadas con el fin de reducir la distancia entre el cambio oficial el mercado negro. El cambio paralelo ha fluctuado de muchas maneras, sin embargo, ha mantenido tendencialmente una distancia cercana o mayor al doble del precio de la divisa establecido por el Estado.

Dada la importancia de las importaciones en el sistema alimentario venezolano, estas devaluaciones tienen un efecto contundente en el esquema de precios no regulados.

6.2.8. Superintendencia Nacional de Silos, Almacenes y Depósitos Agrícolas (SADA).

También por efecto del paro petrolero-alimentario se promulgó en el 2003 la Ley de Silos, de la cual es tributaria la Superintendencia Nacional de Silos, Almacenes y Depósitos Agrícolas (SADA).

La superintendencia tuvo por objetivo coordinar los volúmenes producidos e importados y su movilización por el territorio. El paro había revelado la necesidad de reconocer los volúmenes realmente disponibles de comida en el sistema privado, si eran dirigidos a la demanda interna y si esta distribución podía favorecer a los territorios de menor atractivo para los grandes mercados. El gobierno había diagnosticado que los volúmenes de producción antes y después del paro eran dirigidos a las grandes ciudades donde los precios eran mejores, haciendo doblemente vulnerables las zonas rurales tanto por la dificultad de alcanzar los precios como por el relativo desabastecimiento que resultaba de estas estrategias comerciales. Esta

situación se hizo particularmente dramática durante el paro del 2002-2003.

Dado que el desabastecimiento siguió siendo un problema durante los años siguientes al paro, Chávez pidió al oficial Carlos Osorio que levantara el capital público de almacenaje. Este proceso se hizo por la vía de compra y construcción de nuevos silos así como por la expropiación de silos a las grandes empresas alimentaria nacionales. Con estas medidas el Estado levantó su capacidad de almacenaje de 0% a entre el 49 y el 51% de los 279 silos que existen en el país (Osorio, 2010).

El proceso de recuperación de capacidad de almacenaje público determinó, junto a otros factores, la expropiación de Agroisleña y su conversión en Agropatria, por cuanto, a pesar de que habrían negociado durante 4 años con el Estado esta situación, habrían estado dando empréstitos a los productores cobrando el 75% de la primera cosecha y generando un excedente almacenado que podía amenazar la seguridad alimentaria en tiempos de conflicto político o fluctuación de los precios del mercado (Osorio, 2010).

6.2.9. La regulación de precios.

Luego del paro petrolero-alimentario se sucedieron aumentos sostenidos de los precios del petróleo como consecuencia de los conflictos en el Medio Oriente, la política de recortes de producción de la OPEP, el aumento de la demanda y la incertidumbre de nuevos y mejores yacimientos. Esto ha permitido que la economía venezolana haya sido objeto de un importante y creciente gasto público proveniente de los excedentes petroleros. Como se verá en el capítulo 6.4, por lo menos el factor liquidez generado por ese gasto ha debido participar en niveles de inflación persistentes entre el 18 y el 30% anual, desde el 2003 hasta el 2012.

Para frenar estos efectos y, sobre todo, los efectos del comportamiento acusado de desleal en la burguesía venezolana (acaparamiento, especulación, uso de divisas Cadivi y venta por divisas paralelas, entre otras), el Estado comenzó a colocar precios máximos de venta al público en los alimentos de la canasta normativa, esto es, azúcar, arroz, granos, harina de maíz, pollo, sardinas, cerdo, carne de res, salsas, leche, leche de soja, aceites, fórmulas para lactantes, etc.

La primera regulación tuvo lugar el 8 de noviembre del 2004 y se han venido actualizando hasta, al menos, febrero del 2012 (Indepabis, 2012). Originalmente la regulación solo afectaba a los precios, pero en el 2007, con la Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Alimentaria estos rubros fueron incluidos en una categoría estratégica como “alimentos de la dieta básica” y se prohibió su exportación hasta tanto no satisficieran la demanda interna (Art. 20, numeral 9). De tal modo que la exportación debía esperar la autorización del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, quien es el organismo encargado de determinar su condición de estratégicos o básicos y publicar las listas de rubros demandados por la economía interna a través de un “certificado de demanda interna satisfecha”. Esto afectó a algunos productos que cumplían papeles importantes en las demandas interna y externa simultáneamente, como el plátano de freír o banano, y redirigió políticas productivas de exportación hacia la demanda interna, cuando la misma regulación de precios permitía la inversión (Izarra, 2010). El resultado fue una contracción de la exportación y las ganancias en estas áreas.

En el caso del banano, un rubro de consumo nacional y que en algunas regiones compite con la arepa como rubro más importante del consumo diario, la exportación cayó un 20.000 % desde el 2004 al 2006, tal como se aprecia en el gráfico 11:

Gráfico 11. Exportación de banano en Miles de Kgs. Bancoex, 2010.



Desde la perspectiva del consumidor la regulación de precios está asociada a medidas del gobierno para disminuir el desabastecimiento,

elevar la seguridad alimentaria pero, sobretodo, a un importante aumento del ahorro familiar (Trabajadores Indepabis, 2012). Sin embargo, la regulación de precios pesa significativamente sobre la estructura de ganancias privadas, públicas y socialistas, tanto en relación al sector externo como interno del mercado, como se verá en las observaciones del epígrafe 6.3.

6.2.10. De la 3a. a la 5a. ola. de participación. La etapa socialista de las políticas del SSSA

Los gráficos 12 y 12a muestran la primera y la segunda etapa de los componentes del SSSA que se describen aquí, periodizados según los objetivos del Estado y en relación a la coyuntura del país. En relación a las olas de participación, la etapa socialista corresponde a las olas 3a, 4a. y 5a.

La periodización tradicional en las definiciones del gobierno consiste en dos etapas, la endogenista y la socialista. La segunda etapa, correspondiente al socialismo, comienza en el 2006 y terminaría operativamente para los efectos de la planificación pública, en el 2013 (Ministerio del Poder Popular para la Planificación y el Desarrollo, 2001).

Ésta es en parte el resultado de la conciencia en el Estado de que el circulante introducido produce cierto apoyo electoral pero también una contracción de la actividad productiva básica por un crecimiento del sector terciario (las importaciones, el sistema financiero, el mercado de divisas paralelo, las empresas de seguridad, las empresas aseguradoras, y hasta de algún modo la delincuencia...). Adicionalmente, tal como había indicado el exministro Víctor Álvarez, en una sociedad que había asumido el socialismo como desiderátum, el capital crecía y se fortalecía más que el trabajo, tal crecimiento estaba basado en el mismo gasto público y en el progresivo impacto de la inflación sobre los salarios. Esto produce un contrasentido en la idea defendida de socialismo (Álvarez, 2009).

Como parte de este diagnóstico, el gobierno interpretó la reacción de la burguesía, esto es, su improductividad y su incapacidad de generar desarrollo, como un problema de lealtad e identificó las formas de ilegalidad o “juego sucio” que practicaba este sector social como metáforas de un sistema que había mostrado sus intenciones regulares en usar la alimentación como arma política y oligopólica.

Para contrarrestar esta reacción, el Estado multiplicó el gasto público y con éste, los componentes del Sistema Socialista de Soberanía Alimentaria. La solución tendría que pasar no solo por suplantarse a los depredadores dentro del subsistema, sino la propia lógica de acumulación del subsistema. Por tal motivo, Manuel López, presidente de Mercal para el 2011, declaró que el objetivo del Estado debía ser "...abarcarse 50% del suministro de alimentos para este año. El sector público cubre ahora 33%" (López, 2011:18).

Los canales de participación de la sociedad civil en el SSSA, por consecuencia, también se multiplicaron, tal como se evidencia en los gráficos 12 y 12a.

Gráfico 12. Componentes del SSSA.
Cronología y coyuntura, 1998-2006. Datos propios.

Eventos y Puntos de Giro	Proyecto de Estado y de Alimentación	Plan	Agentes del Estado en el SSSA.	Agentes de la Sociedad Civil.	Agentes Jurídicos	Agentes Financieros del Estado (Se excluyen fondos de compensación, gasto público directo y pequeños bancos)
Elecciones 1998/Constitución 2000. (1998-2000)	Constituyente	-	-	Asamblea Constituyente	CRBV	BIV, FUS.
Dos Huelgas Generales Obrero-Patronales y un Golpe de Estado. (2001-2003)	Endogenista - Seguridad Alimentaria	Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación. I Parte: "Decenio de Plata"	CVA, INTI	Comités de Tierra. Asociaciones civiles.	Ley Habilitante: Ley de Tierras. Ley de Pesca. Ley de CLPP. LOP.	BIV, FUS. Bancoex.
Período Post-Paro/ 1er Referendum Presidencial. (2003)	Endogenista - Seguridad Alimentaria	"Decenio de Plata"	Mercal, CASA, Fundaproal, CVA, INTI, CADIVI	-	-	BIV, BANDES, Bancoex.
Crecimiento PIB/Alza Precios del Petróleo. (2004-2006)	Endogenista - Seguridad Alimentaria	"Decenio de Plata"	Mercal, INTI, CASA, CVA, Fundaproal, Vuelvan Caras, EPS	Cooperativas, Núcleos de Desarrollo Endógeno, Empresas Recuperadas, Empresas en Cogestión.	-	BIV, BANDES, Banfoandes, Banco del Tesoro, BAV, Bancoex.

Gráfico 12a. Componentes del SSSA.
Cronología y coyuntura, 2006-2012. Datos propios.

Eventos y Puntos de Giro	Proyecto de Estado y Alimentación	Plan	Agentes del Estado y cogestionarios: el núcleo del SSSA	Agentes de la Sociedad Civil	Agentes Jurídicos	Agentes Financieros del Estado (Se excluyen fondos de compensación, gasto público directo y pequeños bancos)
<p>PIB no petrolero se ralentiza o retrocede.</p> <p>Altos precios del petróleo aunque fluctúan (2006- feb 2012)</p>	<p>Socialista</p> <p>Soberanía Alimentaria</p>	<p>Primer Plan Socialista (hasta el 2013).</p> <p>5 motores.</p> <p>Proyecto de Reforma Constitucional</p>	<p>Mercal, PDVAL, CVA (15 empresas para el 2010), CASA, Fundaprol</p> <p>CVAL, INTI, CADIVI, Minppal, Vuelvan Caras (Misión Ché Guevara), EPS, SICA, SADA, CIARA, Indepabis, CTPS Florentino, Agroflora, Empresas de Producción Socialista, INSAL, Comersso, Abastos Bicentenario, Arepera Venezuela, Café Venezuela, Abastos Venezuela, Agrotiendas Socialistas, Agropatria, Panadería Venezuela, Gran Misión Agro Venezuela...</p>	<p>EP Socialistas, UP Socialistas, NUDE Socialistas, Cooperativas, Consejos Comunales Rurales, Consejos comunales productivos, Fundos Zamoranos-saraos, Cooperativas, Empresas Recuperadas, Consejos Territoriales, Productores censados en Agro-Venezuela.</p>	<p>CRBVA, Ley de Pesca, LTDA, Ley Anti-monopolio. Proyecto de Ley de Participación Ciudadana y Poder Popular, Ley Especial de Consejos Comunales, Reforma de la Ley de los CLPP. Ley contra Especulación y Acaparamiento (2007). LOSSA (2007) Ley Habilitante (2008). Ley de Costos y Precios Justos (2011). Ley Abono Siembra petrolera.</p>	<p>BIV, BANDES, Banfoandes, Banco Bicentenario, Banco del Tesoro, BAV, Bancoex. Banco de Venezuela, Fondas, FONDEN, Fondo Chino, Fondo de Eficiencia Socialista, Fondo Zamorano.</p>

El presidente Chávez lo explica de este modo en una de sus numerosas intervenciones sobre este tema:

“Estas transformaciones tienen lugar en medio de una guerra económica declarada al pueblo por parte de Fedecámaras, Consecomercio y otros grupos oligopólicos. Actores políticos que quieren desestabilizar el país a través de la especulación y el desabastecimiento. Recurren a las mismas fórmulas utilizadas en la intentona golpista de Abril del 2002 y meses después en el paro petrolero a fines del 2002 y principios del 2003” (Chávez, 2010 c: 4).

Es posible decir que la idea de “burguesía desleal al país” queda marcada cuando el discurso característico del bolivarianismo contra “la oligarquía” u “oligarquía puntofijista” (enfocando la participación leal de otros actores productivos privados de peso en la economía), pasó a un discurso contra “la burguesía” simplemente, en Agosto del 2009 (Chávez, 2009).

Esto se explica mejor comparando cómo se mudaron los conceptos: el 24 de Agosto del 2008, un año antes, el bolivarianismo mantenía un discurso hasta entonces característico. Se identificaba el enemigo al sector depredador de la burguesía, la oligarquía, y se propuso “romper su hegemonía”:

“La Ley de Economía Comunal y de Unidades de Producción Social y Propiedad Social, ¿es para qué?, para incorporar a los consejos comunales en la producción económica y quitarle la hegemonía económica que todavía ejerce la burguesía criolla, la oligarquía, hay que romper esa hegemonía económica, los monopolios” (Chávez, 2008).

Este paso terminológico (del binomio *Pueblo vs Oligarquía* al binomio *Pueblo vs Burguesía*) estableció una representación oficial de la sociedad llamada “socialista”: una en que la burguesía, entendida como todo el sector que cuenta con propiedad privada, no colectiva, pública ni social sobre los medios de producción, es un factor reducible y negativizable de las prácticas económicas.

La tensión terminológica ya era visible en el discurso del Presidente Chávez desde el 2006 hasta el 2008, aunque aun de manera difusa. Desde aquel discurso era posible pensar en la burguesía como un enemigo no declarado pero con el que había que convivir:

“...Bueno, y en las demás el Estado debe participar hasta donde sea posible, pero no el Estado capitalista, no el Estado burgués, sino el Estado trabajador, el Estado obrero, el Estado campesino, el Estado juventud, el Estado pueblo, el Estado —dice la Constitución— social. Participar en que la producción agrícola, ésa es un área fundamental, eso no se le puede dejar sólo al sector privado...”

E, inmediatamente, agregaba el matiz característico del primer período hasta el 2009, desaparecido desde el 2010 hasta, al menos, finales del 2011.

“... pero llamamos al sector privado a que convenga con nosotros para elevar la producción agrícola, para disminuir los niveles de dependencia que tenemos y para ello todos debemos colocar nuestro aporte. El Gobierno está dispuesto a apoyar todos los esfuerzos de los sectores nacionales para incrementar la producción nacional y por tanto la soberanía alimentaria en este caso particular” (Chávez, 2007a).

Luego, un año después, ataca a la clase económica por entero, sin el matiz de la “oligarquía” por el que era solo posible culpar a un sector depredador en particular:

“El diablo es el imperio, el diablo es la burguesía pitiyanqui de aquí y sus aliados en el continente, ese es el diablo”... “Es bueno tener conciencia de esto, porque todos estos recursos salen como producto de la recuperación del manejo soberano de los recursos del país. Ya las reservas internacionales no están controladas por el imperio, ni por la burguesía venezolana. Por eso es que me odian tanto a mí los burgueses de aquí. Ódienme burgueses, no me importa, prefiero que disparen, lo he dicho, contra mí, todos los dardos venenosos de su odio aquí contra mí, ¡Pero más nunca contra el pueblo venezolano, más nunca!” (Chávez, 2009).

Los efectos desestabilizadores de los precios del petróleo en el 2009 y este proceso de redefiniciones políticas tuvieron un reflejo en las políticas alimentarias, tal como se refleja en el discurso del presidente y los funcionarios desde entonces, y tal como se refleja en los gráficos

12 y 12a: se multiplicaron por 7 las instituciones alimentarias, multiplicando con ello sus presupuestos y la movilización de funcionarios y de la sociedad civil.

Esta tesis procura poner en contexto la idea de que los problemas de abastecimiento y acceso de alimentos a la población están relacionados también con la confrontación socio-política además de las políticas económicas o el uso desmedido del gasto (Cap. 6.3). El sabotaje por efecto de la polarización en el proceso de producción y comercialización de alimentos y otros rubros ha sido un hecho contrastable desde las observaciones de campo (Matiuzze, miembros del Comité de Tierras y demás pobladores de Mene Grande, 2003-2005; Trabajadores Central Azucarero Venezuela, 2005-2008; Coopedor, campesinos y pobladores de San José de Perijá-Las Piedras, 2004-2007; *Compañero Simón*, en Demeester, 2007; Sayago, Ganlush, Sabbad y demás Trabajadores-Presidentes, 2010; Coop. Socialistas Sabana de Parra, 2010; Trabajadores-socios Siventub, 2005-2012).

Por cuanto el objetivo fue sustituir el aparato productivo “capitalista” por el “socialista”, el Sistema Socialista de Soberanía Alimentaria, esto es, la herramienta alimentaria del proyecto socialista, dejó de ser una política compensatoria (como lo fue el Mercal de la Seguridad Alimentaria, por ejemplo) intentó convertirse en el sistema alimentario más importante del mercado venezolano. En otras palabras, el sentido del Sistema Socialista de Soberanía Alimentaria luego del 2006 fue abandonar cierta vocación compensatoria o de “deuda social” que aun prevalecía en el endogenismo, por un esfuerzo de mayores proporciones para sustituir el entramado productivo alimentario controlado por “el capitalismo”.

Pero tal esfuerzo por lograr la Soberanía Alimentaria también fue motivado por una demanda de alimentos disparada por el mismo gasto público y por el crecimiento económico de las dos primeras etapas del gráfico 11 a y 11b, la del 2003 y la del 2004-2006, que superaron largamente las capacidades del país de proveer sus productos básicos alimenticios. La evaluación de esta incapacidad, aún en el 2007, era pública. En palabras del propio presidente Chávez:

“...¡Frijol! 22,5 por ciento, raspaos [suspendidos] en frijol; algodón 16,4 por ciento, raspaos en algodón; soya [soja] 19,3 por ciento, raspaos en soya; caña de azúcar 74,7 por ciento, no estamos raspaos, pero no logramos la meta. La meta era de once millones y medios de toneladas, llegamos a

8,6 millones menos por ciento. Girasol 15 por ciento, maní 15 por ciento; no son rubros estratégicos. El maní, por ejemplo, o el ajo, pero la caraota [frijol], es un rubro estratégico para nosotros, es parte del plato nacional pues, y además vaya qué producto tan nutritivo la caraota, tan sano un plato de caraota pues, dígame si le echamos suero picante de ese que hacen aquí, ¡ay compadre! [risas]...”

“...Pero si no producimos ¿cómo vamos a comer caraotas?”...
“Tenemos que importarla, estamos importando caraota, por barco y el barco viene de Argentina, de Brasil. ¡Vamos! Vamos a producir todo esto, pero ahí es donde tenemos que ser eficientes señores ministros, gobernadores, los productores, eficiencia, el Che Guevara lo dijo muy claro: ‘La Revolución no puede estar reñida con la eficiencia’ si algún proceso sociopolítico exige eficiencia es una Revolución, eficiencia en la planificación, porque a veces las fallas están en la planificación y lo que mal comienza mal termina. A veces hay un buen plan, pero luego no le damos viabilidad por incapacidades, porque no vemos los obstáculos, no los conocemos, no estudiamos a fondo, las causas no las atacamos...”

“...También hay intereses que atacan nuestros proyectos.”
(Chávez, 2007 a)

Así, satisfacer la demanda creciente se convirtió en un problema de soberanía dada la importancia también creciente de las importaciones.

En consecuencia, la etapa socialista resemantizó también la lógica de los componentes de la política alimentaria hacia el socialismo. En esta nueva lógica la burguesía como sector económico ya no era la punta de lanza del desarrollo. El giro socialista apostó por la transversalidad del Estado y el papel otorgado a la participación:

“Y aquí es necesario, imprescindible trabajar juntos todos, el Ministerio de Alimentación, el Ministerio de Agricultura y Tierras, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Ministerio de la Economía Popular, ¡todos! A la participación popular, los gobernadores, los alcaldes, las comunidades, los consejos comunales, ¡todos! Sólo uniendo esfuerzos podremos lograr estas metas y superar metas mayores en el futuro...”

(Chávez, 2007a)

Las políticas descritas anteriormente como las que se describirán a continuación deben entenderse en este nuevo contexto.

6.2.11. Corporación Venezolana Agraria (CVA), Corporación de Abastecimientos y Servicios Agrícolas (CASA), Empresa de Producción Socialista Florentino, Fundación Programa de Alimentos Estratégicos (FUNDAPROAL) y Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos (PDVAL).

Tres instituciones fueron las instancias fundamentales de la política pública alimentaria en una segunda etapa del proceso que comenzó Mercal: La nueva CASA (Centro de Acopio, Importación y Distribución), la CVA (Subsistema de Empresas estatales de alimentación) y PDVAL (Subsistema de importación, distribución y comercialización). Adicionalmente, fue posible agregar en este contexto, en el 2005, el Centro Técnico Productivo Socialista Florentino, luego convertido en EPS (Empresa de Producción Socialista), de alcance mucho más modesto en la economía y con objetivos de innovación tecnológica agro y pecuaria, también con funciones productivas y objetivos rentables (CVA, 2011 a).

Mercal no lograba estimular nuevas redes productivas para abaratar los precios sin subsidios, como se pretendía de su primera etapa del 2003 al 2005 (Rodríguez, 2010). Sin embargo se percibe como un espacio de comercialización que puede controlar precios de una producción alternativa a la del mercado conocido.

Además, la generación de un mercado alternativo, impulsado por el Estado, era un opción importante. El Estado estimaba la vulnerabilidad política que le produjo el control de la alimentación por parte de intereses geopolíticos y por los intereses políticos internos. Al mismo tiempo, había tomado la decisión de regular los precios de los alimentos de la dieta básica con el propósito de frenar el descontento que genera la inflación.

El control de precios dictado por el Estado no era regularmente acatado por el sector comerciante y productivo privado, producto de la naturaleza inflacionaria de la economía venezolana, afectada por la

elevación de los precios petroleros, el consiguiente aumento de la demanda interna y por la cultura de rentabilidad a corto plazo que provoca la percepción de inestabilidad de la economía y la política. El Estado también acusó a este sector en utilizar la alimentación como arma política. Precisamente por todo ello, los precios regulados, los precios subsidiados y la inflación hacían cada vez más atractiva a Mercal para los consumidores y los potenciales electores.

El Estado había definido a Mercal como parte de una estrategia productiva, pero la demanda signó su carácter de proveedor de crecientes bienes importados. El Estado creó entonces nuevos actores que supliesen los productos en Mercal e incluso compitiesen en algunas áreas, así como nuevas redes de distribución y comercialización. La fórmula consistió en mantener una provisión con regulación de precios y subsidios entre los consumidores de menores recursos y, al tiempo, aprovechar el éxito de Mercal para colocar los productos de nuevos actores productivos y nuevos sistemas de comercialización.

6.2.11.1. Corporación Venezolana Agraria (CVA).

La primera en ser establecida por el bolivarianismo fue la Corporación Venezolana Agraria o CVA, en el 2001. Fue creada bajo mandato de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario con el objetivo de impulsar procesos empresariales estatales que protegiesen la economía a surgir de las nuevas tenencias de tierra. En algunas de sus empresas se contó con participación de la sociedad civil, pero su perfil característico es la de una red de empresas estatales o cogestionarias de producción alimentaria²⁰.

Las nuevas cooperativas, los consejos agrarios, las empresas agrícolas, primero llamadas sociales y luego socialistas, debían conseguir en la CVA una institución estatal que comprase sus productos (básicamente materias primas agrícolas, pecuarias y pesqueras, como caña de

²⁰ La CVA para el 2011 tiene 12 empresas: CVA Lácteos, CVA Azúcar, CVA Café, CVA Cereales y Oleaginosas, la Corporación Socialista Florentino, la Corporación Azucarera Ezequiel Zamora, Cacao Oderí, CVA Leander Carnes y Pescados, Café Venezuela, Avícola del Alba, Empresa Mixta Socialista Leguminosas del Alba y CVA Cultivos Varios (CVA, 2011).

azúcar, maíz o leche) y los manufacturase para colocarlos primero en la red Mercal (desde el 2003), luego en PDVAL (desde principios del 2008) y finalmente en las otras redes socialistas de comercialización (desde el 2009) como Abastos Bicentenario o Comersso.

6.2.11.2. Corporación de Abastecimientos y Servicios Agrícolas (CASA).

A pesar de que esta institución fue fundada durante la *Concertación* en 1989, esto es, 10 años antes de la llegada de Chávez a la presidencia, el papel que juega CASA es totalmente diferente durante la V República. Se trató de un proyecto recuperado de políticas alimenticias olvidadas por gobiernos anteriores, y que mantenía una existencia marginal en las estrategias de Estado antes del 2003, fecha en que adquirió nuevamente protagonismo (Minppal, 2011).

CASA ha tenido por objeto almacenar, comprar e importar producción alimentaria generada por el sector privado, por importaciones directas, y para el naciente sistema endógeno y luego llamado “socialista de producción”, a fin de que Mercal pudiese colocarla en los barrios más pobres.

En otras palabras, Mercal tenía por objetivo proveer a la población de bajos recursos de un stock “suficiente” y “variable” (Minppal, 2011; BCV, 2008) de productos de la dieta básica y cultural venezolana pero esto no era posible en lo inmediato con los recursos nacionales y menos aún con los estatales o endógenos. CASA entonces proveyó de la infraestructura para obtener los productos requeridos, con independencia de su origen, esto es, importadores privados, productores nacionales privados o importación directa, y así satisfacer la demanda y reducir el “histórico” y “precario acceso a la alimentación de los venezolanos” (Puente y López, 2008).

Por cuanto CASA no tenía la posibilidad de suplir la totalidad de la oferta con marca propia, su función fue la de servir de puente a las diferentes estrategias estatales de provisión. Esta posición, aunada con el hecho de que la estrategia de comercialización de Mercal consistía en la colocación de puntos de venta dentro de asentamientos con pocos recursos, hizo que en una primera etapa CASA no solo no se convirtiese en competencia con las grandes firmas privadas de alimentos, sino que se convirtió en un apoyo de estas firmas para la

colocación de sus productos en otros circuitos, tal como declaró la Asociación de Supermercados y Afines en el 2005 (Puente y López, 2008: 3) .

CASA tuvo un sistema de empaques para varios de sus productos que, además de otorgar un sitio preferente a la iconografía de la marca, coloca imágenes de participación y movilización social, junto a artículos de la Constitución casi siempre relativos a temas de participación.

De tal modo que los productos se vendían como parte del proyecto público y ciudadano de seguridad alimentaria, y no solo por su clásica relación precio-calidad.

6.2.11.3. Fundación Programa de Alimentos Estratégicos (FUNDAPROAL)

Al igual que CASA, PROAL (Programa de Alimentos) fue un producto de la IV República. Fue creado en 1996 como una política alimentaria compensatoria para poblaciones vulnerables durante la *Convergencia* (Machado de Acevedo, 2011: 333). Sus objetivos eran similares al Mercal del bolivarianismo: poner en funcionamiento puntos comerciales con productos al 40% de descuento sobre el precio del mercado, por lo que algunos autores lo consideran el antecedente de Mercal (Puente y López, 2008: 2²¹). Durante la *Convergencia* estuvo coordinado por Francisco Arias Cárdenas, compañero de armas de Hugo Chávez y amnistiado durante ese gobierno. Durante el bolivarianismo fue reimpulsado y transformado bajo el nombre de Fundarproal como centro de acopio y distribución de alimentos hacia las Casas de Alimentación o Cocinas Comunitarias. Éstas fueron restaurantes dirigidos a población con problemas de desnutrición, ancianos o dolientes de enfermedades que requerían apoyar su cuadro nutricional.

El número de las Casas de Alimentación no es de dominio público ni sus ubicaciones, pero según el primer director de Mercal fueron 4 mil casas en el 2005 y cerca de 6000 en el 2010 por todo el territorio; las casas están distribuidas tanto en grandes ciudades como en sectores

²¹ Incluso estos autores lo consideran una política fundada bajo el gobierno de la Concertación de Carlos Andrés Pérez.

rurales. La red cubrió el 66% de la protección calórica de las personas atendidas (Rodríguez, 2010). La red se ha concentrado en S.U.C.R.E. (Sistema Unificado de Casas y Refugios para la gestión alimentaria), una red que desde el 2004 perteneció a los programas Mercal Protección y Mercal Máxima protección del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación (Fundaproal, 2012). En el 2004, del millón de personas atendidas por Mercal, 400.000 estaban bajo el programa de Mercal Protección (Rodríguez, 2010).

Sus actividades, más que el número de establecimientos, han seguido en crecimiento desde entonces. Para el 2007 su presidencia declaró estar atendiendo directamente a 1.200.000 personas (Fundaproal, 2012), lo que correspondía a un 4,28% de la población nacional. Si se cruza esta cifra con el 9 % de pobreza extrema (entendida como un ingreso inferior a la canasta básica) que declara el INE para el 2012 (INE, 2012), y si se parte de la idea, corroborable en las observaciones de la tesis, de que la población objeto de la política es efectivamente atendida, es posible inferir que las Casas de la Alimentación atendieron para el 2007 a un número análogo a la mitad de la población nacional en pobreza extrema.

Han sido una política cruzada entre:

- a) la Misión Barrio Adentro, que proveía de médicos para analizar el cuadro nutricional de las poblaciones donde hubiese consultorios;
- b) los Comités de Salud que surgieron de los consultorios de Barrio Adentro para movilizar la comunidad en función de los programas sanitarios, alimentarios y políticos;
- c) las Fuerzas Armadas que sirvieron de canal de corretaje entre los centros del Fundaproal y los asentamientos;
- d) el Frente Francisco de Miranda (que luego se transformó en el Ministerio del Poder Popular) que suplieron las labores de las Fuerzas Armadas al menos desde el 2005 y
- e) la propia Fundaproal que coordinó y ejecutó todas las acciones.

Las Casas de Alimentación son casas privadas que los miembros de una comunidad ceden total o parcialmente para fines de provisión de alimentación recién elaborada. La Misión Barrio Adentro determinó las personas que requerían del servicio, su ubicación y el tiempo del tratamiento. Transmitían luego la información al Comité de Salud o ya

directamente al Consejo Comunal el cual, junto a la 3a ola de participación, suplió las funciones de los comités integrándolos.

El comité o el consejo, en representación de la comunidad, transportaban o vigilaban que la persona atendida pudiese llegar durante el tiempo indicado al servicio o, solo en casos especiales, transportaban la comida hasta la residencia de esa persona. Allí se le suministró alimentación balanceada y se llevó un registro de su alimentación así como de cambios en su peso, estatura (sobre todo en caso de los niños), densidad adiposa y otros signos de recuperación nutricional. Una vez que los médicos considerasen que el tratamiento era suficiente, se suspendía el servicio para esa persona, se le recomendaban alternativas y se le mantenía en observación.

Fundaproal suministró alimentos, los refrigeradores, la cocina, el gas, otros recursos de cocina y algunos sueldos para los trabajadores de la cocina, según la afluencia de comensales. También suministró becas y pensiones. Como muchas otras instancias de Estado, también dio seguimiento a proyectos socio-productivos a escala local. Normalmente los líderes de la Casa y la comunidad colocaban de sus propios ingresos los recursos para suplir faltas, retrasos, publicidad, implementos, y otros factores contingentes. Tal como se indicará en los sujetos observados, Fundaproal fue un recurso fundamental para la disminución de la inseguridad alimentaria que refleja los tiempos de mística de la 2a y 3a ola de participación.

6.2.11.4. Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos (PDVAL).

Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos o PDVAL es un producto de PDVSA, la empresa petrolera estatal que por orden del presidente Chávez adquirió activos en el 2007 para impulsar procesos productivos alimentarios, incluida su comercialización.

PDVAL se activó al público a principios del 2008 con el fin de emular el éxito de Mercal, con algunas variantes y en un contexto económico y político diferente: Las reacciones especulativas de la empresa privada habían sido identificadas por el gobierno como desleales al país. Tal como se explicó en apartes anteriores, en la medida en que los precios petroleros siguieron ascendiendo y el aparato productivo de Venezuela no podía absorberlos, tanto la tendencia a la inflación como la

elevación de las importaciones hacían más inestable la relación entre los precios inflados por la demanda y las regulaciones estatales de precios. Esta creciente inestabilidad, sumada al control cambiario, se expresó en formas racionales de la economía como el desplazamiento del consumo hacia productos de valor menos perecedero, negocios de rápida rentabilidad o convertir la moneda venezolana en otras formas de riqueza fuera de subsistema o fuera del sistema monetario, pero también incluyó formas ilegales como el acaparamiento, la especulación o el simple desacato de los precios regulados. Las reacciones ilegales fueron asociables al uso de la alimentación como instrumento político y pronto tomaron cuerpo en el discurso anti-burguesía del presidente (Chávez, 2008).

De tal modo que los problemas suscitados por la demanda y la reacción de los productores contribuyó a polarizar la economía entre la llamada “capitalista” (o privada) y la “socialista” (aquella que supone que la propiedad sobre los medios depende de su “sentido social” en función al proyecto nacional). A finales del 2007 ya estaba preparada PDVAL y fue activada en enero del 2008 (PDVAL, 2011).

PDVAL fue la primera cadena de comercialización explícitamente creada para “el socialismo” que procuró el objetivo principal de la política alimentaria socialista: la “soberanía alimentaria”.

De algún modo, PDVAL consolidó la etapa socialista de las políticas alimentarias venezolanas. Según se declaró, su objetivo fue reducir la dependencia tanto del petróleo como del “capitalismo” entendido como una cultura económica privada, percibida como individualista, permeada por intereses geopolíticos y poco responsable socialmente (PDVAL, 2011; Chávez, 2008).

Fue instalada en todo el país con la tarea puntual de establecer una cadena de comercialización con rubros que respetasen la regulación de precios. El principio era que si la cadena marcaba una tendencia competitiva en el mercado, se esperaba una reacción de la comercialización privada de alimentos a favor de la regulación.

A dos años de su gestión PDVSA no publicó los resultados de esta última apuesta. Los problemas por acatar los precios regulados por parte de la comercialización privada persistieron hasta, al menos, febrero del 2012 (Trabajadores de Indepabis, 2012).

En los informes de auditoría de PDVSA del primer año se refleja que los precios de venta de los productos eran idénticos a los de compra, por lo que se presume un subsidio indirecto en nómina, infraestructura y/o servicios por parte de la propia PDVSA (PDVSA, 2008).

También tuvo objetivos productivos cuyos planes y resultados no aparecen en sus informes (PDVAL, 2008; 2012).

En el 2010, PDVAL salió de manos de PDVSA, pasó a manos de la Vicepresidencia de la República y pasó luego a manos del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, el mismo ministerio que coordinó a Mercal.

Para el 2011 la red sumó 132 centros de comercialización, llamados también “Pdevales” (PDVAL, 2011). Sin embargo, entre Pdevalitos (a nivel de barrios, similares a lo que en Venezuela se llaman “bodegas”), Pdevales e hiperpdevales (supermercados), la red sumaría 2.572 puntos de venta en todo el país (Chávez, 2010 a).

6.2.12. “La banca social”: El Fondo Único Social (FUS), El Banco del Pueblo, El Banco de la Mujer, el Banco Agrario de Venezuela (BAV), el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (BANDES), el Fondo Agrario Socialista (FONDAS), el Banco de Industrial de Venezuela (BIV), el Banco del Tesoro, Banco Bicentenario, el Fondo de Eficiencia Socialista, el Banco de Venezuela, el Fondo de Desarrollo Nacional (FONDEN), el Fondo Conjunto Chino y el Fondo Zamorano.

El gobierno ha tenido una política explícita de acumular tejidos financieros para el desarrollo. Toda esta red de bancos y fondos estatales fueron llamados, al menos a partir del 2010, “la banca social”.

En Venezuela es característico que la banca privada, en parte por los efectos desestabilizantes de las tasas, la inflación, la devaluación y en parte por una acusada “cultura” del rentismo monetario, no arriesga a bajar los precios de los créditos ni las condiciones para inversiones en manufactura y agricultura, así como desvía recursos al sistema monetario y especulativo (Giordani, 2011 b). La banca social fue creada con el fin de responder a este diagnóstico y posteriormente, a la necesidad de crear instrumentos para la territorialización del creciente

gasto público en el poder popular y en los proyectos públicos y cogestionados.

Antes del paro petrolero-alimentario, el ministerio de Salud y Desarrollo Social y concretamente su vicepresidencia de Desarrollo Social, coordinó el Fondo Único Social ó FUS con el fin de unificar las partidas sociales dispersas en el presupuesto del ejecutivo. El Plan Bolívar 2000 se alimentó de este fondo, aunque se ha documentado que en la práctica las política sociales reposaban sobre los presupuestos corrientes de los Ministerios de Salud, Educación, Ciencia y Tecnología, y Trabajo (Mujica Chirinos en Alvarado Chacín, 2010:329).

Esta tendencia de cruzar presupuestos y consolidar esfuerzos conjuntos de manera transversal para el impulso de las políticas sociales ha sido desde entonces una característica del SSSA y de otros sistemas de políticas (Aponte Blank, 2010). Ello ofreció ventajas en cuanto a la potenciación conjunta de esfuerzos y a la demostración de unidad en el gobierno, así como de la sociedad civil que lo apoya por cuanto son sus organizaciones muchas veces las que sirvieron de correa de transmisión de los presupuestos transversales a través de sus planificaciones locales o “desconcentradas”. Sin embargo ofreció desventajas relativas a la opacidad del gasto por políticas y sectores de acción.

En 1999 se creó el Banco del Pueblo para ofrecer microcréditos a familias y personas. El banco habría creado desde su fundación hasta el 2002 11.455 empleos directos y más de 22.000 indirectos (Alvarado Chacín, 2010:328).

En el año 2001 se creó una institución micro-crediticia destinada al desarrollo económico de la mujer: Banmujer (Banco de Desarrollo de la Mujer) y comúnmente llamada Banco de la Mujer.

Tanto el Banco del Pueblo como Banmujer correspondieron al acercamiento endogenista a la alimentación y fueron reflejo de las exitosas referencias de Mohammed Yunnus en la India y Bangladesh. Ambas instituciones fueron evoluciones de las políticas compensatorias del período neoliberal hacia modelos de productividad más autónomos en los sectores más pobres. Para ello se apostó por la creación de emprendimientos productivos dentro de las reglas del

mercado sin afectar la dinámica de la propiedad sobre los medios ya en producción.

También en el 2001 el Fondo de Inversiones de Venezuela (FIV) con vocación de fondo de compensación, fue convertido en BANDES, Banco de Desarrollo Económico Social de Venezuela. Fue el primer banco que identificó el proyecto de *desconcentración*, luego a identificarse con conceptos como *democracia participativa y poder popular*:

“...proyectos orientados hacia la desconcentración económica, estimulando la inversión privada en zonas deprimidas y de bajo rendimiento, apoyando financieramente proyectos especiales de desarrollo regional” (BANDES, 2012).

El Banco de Desarrollo Económico y Social estuvo a cargo del presidente del ejecutivo hasta el 2005, fecha en que pasó al Ministerio de Finanzas. Fue recapitalizado en el 2010 con el objeto de impulsar proyectos productivos.

Luego del Paro petrolero-alimentario del 2002-2003 y en lo específico para la inversión agroalimentaria, se crearon fondos agrícolas nacionales, entre los cuales los más destacados fueron El Banco Agrícola de Venezuela²² o simplemente “Banco Agrícola” (fundado el 2006) y el Fondo de Desarrollo Agrario Socialista o FONDAS (fundado el 2008 y llamado anteriormente FONDAFA). Ambos son dependientes del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras y son tributarios jurídicos de la Ley de Tierras.

Se completó la nacionalización de Banfoandes, un banco fundado en 1957 por iniciativa de la Corporación Andina de Fomento, y se le reimpulsó financieramente con el fin de disponer de una banca pública más extendida sobre el territorio y evitar la dependencia al sistema financiero privado. Banfoandes reveló la necesidad de trascender la idea de Bancos solo con capacidad crediticia o de compensación financiera. Las importantes operaciones de gasto público dependían de las redes privadas y las pocas redes públicas no tenían la cobertura adecuada al proceso de desconcentración. En la medida en que el gasto

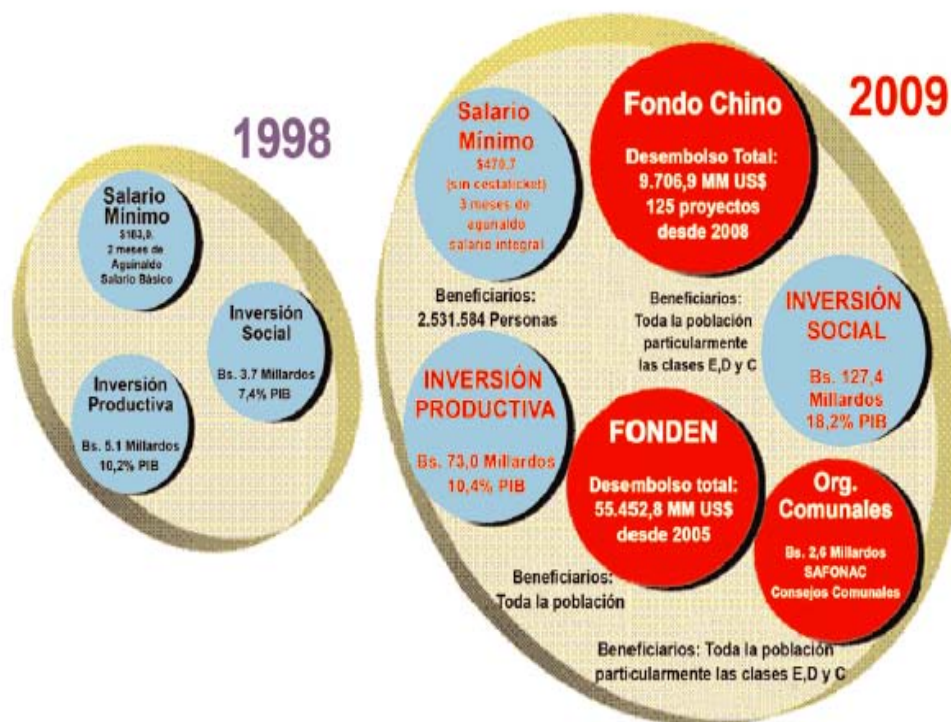
²² A inicios del 2011 el BAV declara haber invertido más de 4.400.000 de bolívars (Ministerio del poder popular para la Comunicación y la Información, 2011).

se incrementó y que los proyectos de desarrollo económico y social aumentaban, incluyendo los Bancos Comunales insertos en los Consejos comunales, se hizo más necesario un sistema financiero que diera cuenta de la expansión del gasto y prestara nuevos servicios con alcance local. Además se instruyó desde el gobierno bolivariano que todo ese nuevo circulante debía reposar en instituciones objeto de instrucciones de Estado para sus políticas crediticia, permitiendo así la armonización del sistema financiero con el desarrollo socialista. Banfoandes fue el primer banco totalmente público con esta triple orientación: taquilla del gasto público, ahorro del poder popular a escala territorial y capacidad crediticia dirigida a políticas de estado y poder popular. En el 2010 Banfoandes se convirtió en Banco Bicentenario y se le prestó un nuevo impulso financiero. En la 5a. ola de participación se habló de la creación de un Fondo Bicentenario que acumulase 5 carteras, 5 bancas públicas y 5 bancos privados o de tipo privado (Rodríguez, 2010).

Igualmente, con el objetivo de viabilizar la asignación de recursos estatales, se crearon dos reservas con capacidad de desembolso para el gastos públicos de gran importe, como el FONDEN (fundado en el 2005, fue tributario directo de las Reservas Internacionales del BCV) y el Fondo Conjunto Chino-Venezolano (fundado el 2007). Este último es realmente es un Fondo de inversiones venezolano, pues todo su comité se ha designado por el presidente del Ejecutivo venezolano y fue conformado por representantes de PDVSA, dos ministerios y el Banco público BANDES. China ingresó en este Fondo recursos obtenidos en el contexto de los negocios firmados entre ambos países, con el fin de que el Estado Venezolano los dirigiese a proyectos de desarrollo.

El Ministerio de Planificación apuntó en su Proyecto de Ley de Endeudamiento para el 2011 (Giordani, 2011 b), la especial importancia de estos dos últimos fondos para el desarrollo productivo en general y la “inversión social”. Es ilustrativo de esto gráfico 13:

Gráfico 13. Fuente: Giordani, 2011 b.
Nueva Redistribución del Sistema de Ingresos⁹



De acuerdo a este cálculo del Ministerio de Planificación, el sistema “banca social” y los fondos del Tesoro, habrían hecho en el 2009 un gasto público (inversión social+gasto social) mayor a 483.186.710.000 Bs., ya reconvertidos y cambiado al precio de la divisa estadounidense a 4,28 Bs./dólar.

Para dar una idea de la significación de este importe, corresponde al 422% de todas las reservas internacionales venezolanas más lo dispuesto en el Fondo de Estabilización Macroeconómica (FEM) que ha tenido el país en uno de sus mejores momentos de ahorro, el 15 de Mayo del 2011. La deuda en Venezuela ha sido creciente y opaca, producto de la variedad de instrumentos que ha utilizado. Sin embargo, la deuda externa pública no ha trascendido del 20% de las Reservas Internacionales en Venezuela (BCV, 2011). Aunque quedaría aún por contabilizar la deuda vía bonos y letras del Estado y otras formas de endeudamiento, los números hacen suponer que entre la

banca social y el ahorro público, el Estado podría disponer ya para el 2012 de importantes recursos financieros para el desarrollo.

En abril del 2010 se creó el Fondo de Eficiencia Socialista, a cargo de la Vicepresidencia de la República y cuyos financiamientos (no se habla de “créditos”, sino de “retiro de recursos”), a partir de Julio de ese año, los decide el propio Presidente de la República vía carta sustentada y dirigida a él. Este fondo es importante para el SSSA pues debería constituirse solamente de los excedentes de las empresas estatales y socialistas. La existencia de estos excedentes provenientes del sector agroalimentario podría revelar, a los efectos de esta investigación, un funcionamiento adecuado del mercado en esta área, por cuanto indicarían la relación entre inversión y ganancias en un contexto donde estas cifras han sido opacas, inexistentes o poco confiables. Del SSSA, para el 2010, el único organismo del SSSA que demostraba rentabilidad suficiente para colaborar en el fondo eran las Agro-tiendas Socialistas. En el 2011 aportaron también las empresas de producción socialista nacionalizadas Café Venezuela, Lácteos los Andes y Aceites Diana, representada esta última por la CVA (BAV, 2011 a).

En el 2011 se adquiere el Banco de Venezuela (comprado al Banco Santander, de capital privado español y anteriormente de capital venezolano) que entonces era una de las tres entidades más importantes en términos de capital y cobertura del país. Con esta compra el Estado adquiere una importante cartera de clientes, experiencias en instrumentos financieros e instrumentos de banca electrónica. Con este banco la presencia del gasto se extiende con más eficiencia por todo el territorio.

Finalmente en Febrero del 2012, como parte de la 2a etapa de la Gran Misión Agro-Venezuela, el presidente Chávez anunció la creación del Fondo Zamorano, de vocación agrícola, en el que debían coincidir fondos públicos y fondos obligatorios de la banca privada. En virtud del mismo diagnóstico que el Ministro Giordani ha defendido incluso antes de la llegada al Ejecutivo en el cual indica que la banca privada tiene una cultura rentista-monetarista (Giordani, 2011b), el presidente Chávez amenazó a los otros dos grandes bancos privados con su expropiación si no participaban en este fondo (Chávez, 2012).

6.2.13. El Sistema Integral de Control Agroalimentario (SICA), Fundación de Capacitación e Innovación para Apoyar la Revolución Agraria (CIARA), Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral (INSAI), Comercios Socialistas (Comersso), Corporación Venezolana de Alimentos (Cval), Abastos Bicentenario y la marca “Venezuela”.

A pesar de que se han creado nuevos actores productivos, a pesar de que el Estado ha intervenido la cadena productiva (como en el caso de las expropiaciones de la Superintendencia de Silos o la expropiación de tierras), y a pesar de que aumentaron las superficies sembradas y la producción en ciertos rubros, para el 2009 el sistema reveló que los logros son sensibles al gasto público pero sus resultados no son persistentes, que no responden adecuadamente a la demanda, ni integran todos los rubros esenciales. La dependencia a las importaciones regresaba en rubros que se creían superados, la inflación aumentaba, la nueva y pujante demanda empezaba a perder poder adquisitivo nuevamente. Entonces, buscando soluciones definitivas, se crearon nuevas instituciones para intervenir nuevamente el sector y afectar otras partes de la cadena (Rodríguez, 2010).

De manera formal el Ministerio del Poder Popular para la Alimentación ya había creado el llamado “Sistema Integral de Control Agroalimentario” ó SICA en el 2008, con el fin de planificar acciones coordinadas en materia alimentaria (Minppal, 2008:13). Se trató de la única instancia gubernativa que dio cuerpo unitario a las políticas anteriores que, según el mismo presidente Chávez, lucían dispersas (Chávez, 2007 a). Sin embargo, en la practica, las políticas alimentarias fueron coordinadas por la Vicepresidencia productiva (constituída informalmente por vice-ministros de diferentes ministerios del área productiva) y el propio Presidente de la República.

Desde el mismo 2009, y sobre todo en el año 2010, por las razones antes expuestas, el Estado revisó las políticas de soberanía alimentaria e impulsó nuevos programas e instituciones. Los 200 años de la Independencia de Venezuela de España connotaron mediáticamente este nuevo esfuerzo.

Estas nuevas instituciones fueron dos centros de investigación con funciones políticas y productivas, CIARA (Capacitación e Innovación para Apoyar la Revolución Agraria) y el INSAI (Instituto Nacional de

Salud Agrícola Integral). Dos centros de comercialización mayorista-minorista: Comersso y CVAL. Una red de supermercados urbanos: Abastos Bicentenario, comprados a la empresa Cativen, con 41 establecimientos al momento de su fundación en el 2010. Y una red de pequeños y medianos comercios de abastos y restauración: Areperas Socialistas, Café Venezuela y Panadería Socialista. A continuación se detallarán sus funciones un poco más.

En el 2009 se creó la Fundación estatal CIARA (Capacitación e Innovación para Apoyar la Revolución Agraria) responsable de la coordinación de los 84 fundos zamoranos del país. Además de sus funciones productivas, CIARA fue el segundo centro de innovación luego del Centro Técnico Productivo Florentino, sin contar los adscritos a Universidades y otros organismos del tipo.

Ya en el 2010, con el fin de intervenir el sector mayorista se reimpulsó en ese año COMERSSO, o Comercios Socialistas. El objetivo consistió en un sistema de mercados que garantizase que los precios finales no fuesen alterados por la inflación y, concretamente, por el comportamiento desleal del sector privado de mayoristas acusado de especulación y acaparamiento. Se preveía vender allí desde el mayoreo manufacturado para hacer competencia a los comercios privados, hasta automóviles, los cuales habían subido de precio esos años en parte por algún efecto de la necesidad de inversión no perezcedera y la especulación.

Abastos Bicentenario fue el producto de una compra del Estado de la que alguna vez fue la cadena de supermercados privada más importante del país, CADA, así como de la expropiación por utilidad pública de la cadena “Éxito” de la empresa colombo-francesa CATIVEN, SA (Asamblea Nacional, 2010). La compra y expropiación de esta red le permitió al Estado contar con establecimientos comerciales, redes de transporte y hábitos de mercado, ya constituidos en zonas importantes del país, fundamentalmente dirigidos a clases medias y trabajadoras.

El éxito político de Mercal y PDVAL produjo la creación de una cuarta red de comercialización en sitios donde los primeros aun no habían accedido, o en sitios donde las cadenas de supermercados CADA no cubrían a los consumidores y, por tanto, no era posible fundar los llamados Supermercados o Abastos Bicentenario. Esta nueva red de comercialización fue **CVAL** la cual, como Mercal y PDVAL, colocaría productos a “precios socialistas”, esto es, apoyada por el gasto público

desde la producción, la distribución, empleos y obras de infraestructura. CVAL colocó productos tanto a precios regulados como subsidiados.

Junto a CVAL aparecieron empresas más pequeñas pero de mayor impacto en la cotidianidad urbana, fundamentalmente en Caracas, como Café Venezuela y Areperas Socialistas, a llamarse éstas en el 2011 Areperas Venezuela. Estas últimas empresas fueron una red de cafeterías-restaurantes que promovieron las marcas estatales cogestionarias de café y cacao impulsadas por el Plan Café del 2005, así como una red de ventas de arepas, un alimento que ocupa el 60,9% de los desayunos y cenas de los venezolanos (BCV, 2011). Adicionalmente Café Venezuela fue una marca pública de café producto del “Plan Café” del 2004-2005, que tuvo por objetivo aumentar la producción del rubro para luego apuntar a su exportación. El plan también incluyó el cacao a través de la marca ODERÍ. La marca de café, sin embargo, quedó rezagada frente a las otras marcas privadas y solo se conseguía en Mercal y otras redes del SSSA. Su reimpulso durante la 5a. ola de participación y el reimpulso bicentenario que llegó hasta el 2012 incluyó como parte de la estrategia la red de cafeterías-restaurantes a precios “socialistas”. A finales del 2011 se sumarían los abastos Venezuela y otros establecimientos del tipo. Según el Servicio Autónomo Fondo Nacional para los Consejos Comunales a principios del 2012 habrían 200 Areperas Venezuela, 19 Abastos Venezuela, 28 Panaderías Socialistas y 10 Carnicerías Venezuela a lo largo del territorio nacional (SAFONACC, 2012).

La intención expresada por el gobierno (Chávez, 2010 c) es que estas nuevas instituciones, a diferencia de Mercal, serían autogestionarias, esto es, que pudiesen sostenerse sin más que la primera inversión del Estado. El procedimiento consistía en que la comunidad identificaba el punto de venta y pedía al Ministerio del Poder Popular para el Comercio el apoyo financiero inicial. La necesidad de rentabilidad ofrecía en su primera etapa razones para el optimismo: “Las Arepas Socialistas no tienen subsidio. Incluso ya generamos modestos dividendos” (Chávez, 2010 a)

Para lograr su competitividad frente al sistema privado, el Sistema Socialista de Soberanía Alimentaria promovió la idea de que los precios serían más bajos si se sacaba la ganancia del propietario del medio (que en algunos medios del Estado se le llama “plusvalía”) y los beneficios contribuyesen a mejores salarios de sus trabajadores.

En las fotos indicadas en esta tesis como gráficos 14 y 15 se ilustra con detalle este proceso. El ejemplo es la taza grande de café con leche. El costo del trabajo por una taza grande de café con leche es 0,67 Bsf, el pago por servicios de agua y luz 0,27 Bsf, el vaso grande es de 0,04 Bsf, el pitillo [pajita] removedor es de 0,01 bsf y 0,55 Bsf los alimentos que componen el café con leche. El costo total son 1,94 Bsf la unidad. El precio socialista entonces es 2,50 la unidad, incorporando 56 céntimos de ganancia por cada taza de café con leche. El precio “capitalista” es el precio normal en el mercado, 5,30 Bsf la unidad.

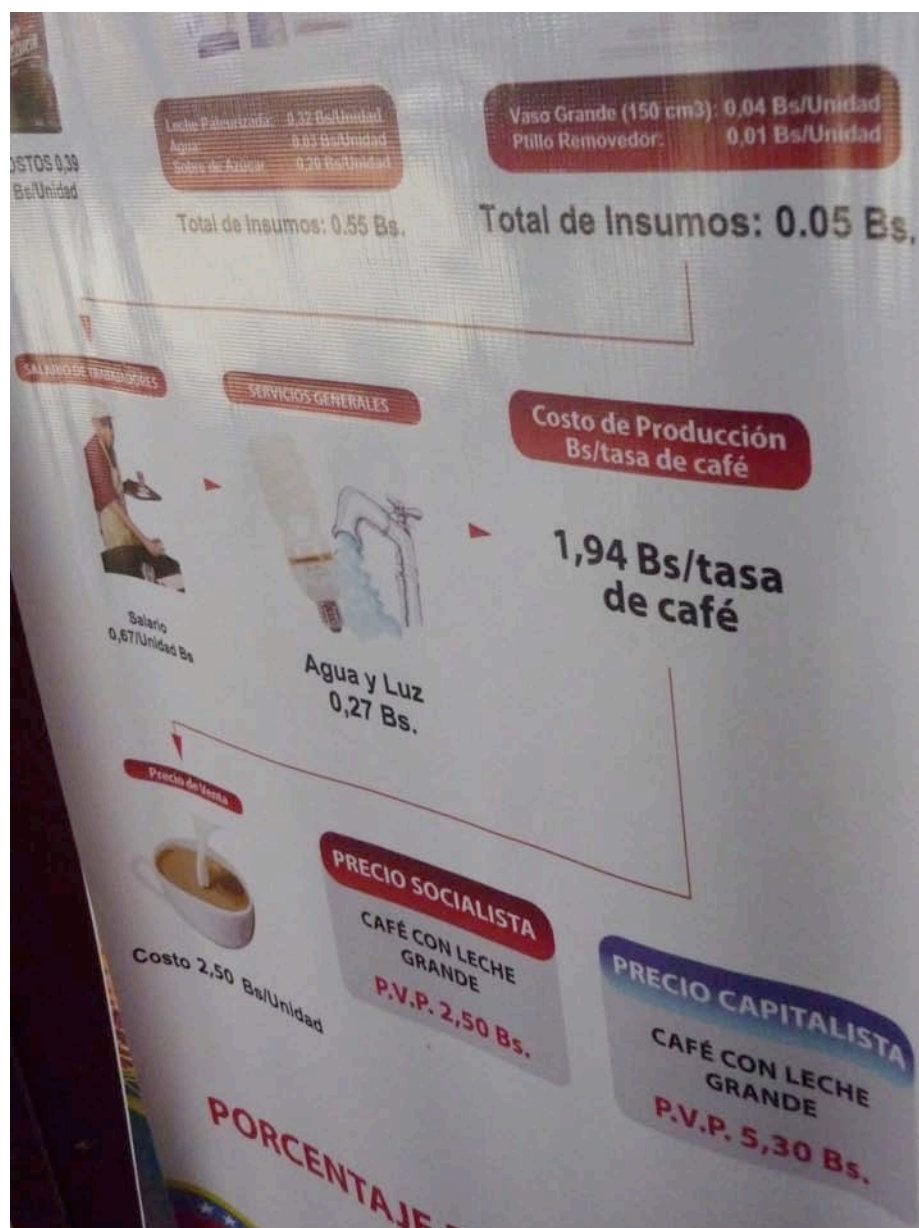
La diferencia entre el primero y el segundo precio es la ambición del capitalista, análogo con la plusvalía, que buscaba enriquecerse vendiendo alimentos, mientras en la Arepera Socialista la inversión permitía mantener el negocio, tener una ganancia y al mismo tiempo, pagar bien a sus trabajadores.

Por cuanto de manera implícita la Arepera Socialista tenía por objetivo frenar la inflación por la vía de moderar las ganancias y competir mejor, el precio socialista no reconocía el 30% de inflación anual y algunos otros costos como posibles robos, desabastecimiento de productos, etc.

**Gráfico 14. La arepa socialista contra la arepa capitalista.
Foto DCA.**



Gráfico 15. ¿Cómo se calcula el precio socialista de una taza de café?. Foto DCA.



Aunque el discurso oficial los homologaba, el “precio socialista” que se produjo en CVAL, Abastos Bicentenario, Café Venezuela y las Areperas Socialistas, debiera ser el producto de una estrategia de sustentabilidad diferente a los “precios socialistas” de Mercal o PDVAL, los cuales, desde sus creaciones, fueron formalmente más dependientes de los subsidios estatales directos o indirectos. Los segundos “precios socialistas” eran realmente “precios solidarios” como a veces también se les llamaba.

A finales del 2011 las Areperas Socialistas pasaron a manos del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, sus empleados no habían podido constituirse en empresas auto-sustentables y seguían dependiendo del gasto estatal. Las Areperas Socialistas cambiaron entonces de nombre a Areperas Venezuela, consolidando la nueva marca “Venezuela”. Los precios se hicieron similares a los del mercado “capitalista” y muchos de los insumos de producción dejaron de provenir de las empresas socialistas o públicas de producción alimentaria, esto es, del mismo SSSA. Sin embargo, como estrategia de marketing, la marca de Café Venezuela sí logró posicionarse en el imaginario del mercado interno (Rodríguez, 2010; Trabajadores de Areperas Socialistas, 2010; Trabajadores de Indepabis, 2011).

A continuación se muestra el alto consumo de café, en un 81%, y de arepa, en un 60,9%, entre en la población con el objetivo de indicar la importancia de las 200 nuevas Areperas Venezuela y el impulso del café de la misma marca:

Gráfico 16. Consumo de café por densidad, tamaño del hogar, región, edad, sexo y cuartil de ingresos. BCV, 2011.

**Consumo de café durante la última semana
según dominios, cuartiles de ingresos, edad, sexo,
región administrativa y tamaño del hogar**

(%)

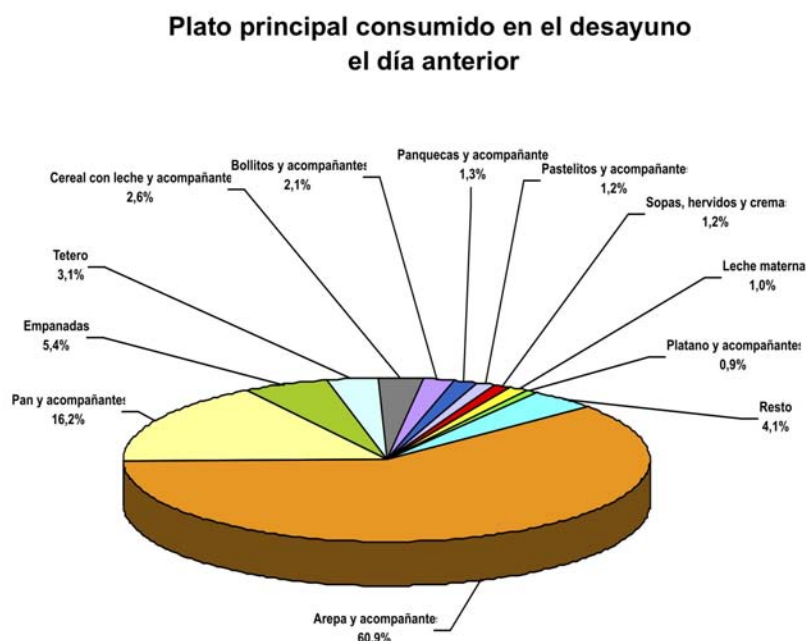
	Dominio					Cuartil				Nacional
	AMC	Ciudades Grandes	Ciudades Medianas	Ciudades Pequeñas	Área Rural	1	2	3	4	
Sí consumen	75,4	79,8	84,1	84,8	85,6	80,6	81,4	81,8	80,1	81,0
No consumen	24,6	20,2	15,9	15,2	14,4	19,4	18,6	18,2	19,9	19,0
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

	Edad						Sexo		Nacional
	0 a 5	5 a 10	10 a 18	18 a 30	30 a 40	40 y más	Masculino	Femenino	
Sí consumen	39,5	68,4	78,6	84,9	92,0	92,9	80,0	81,9	81,0
No consumen	60,5	31,6	21,4	15,1	8,0	7,1	20,0	18,1	19,0
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

	Región									Nacional
	Capital	Central	Occidental	Zuliana	Los Llanos	Andina	Oriental	Sur	Insular	
Sí consumen	77,8	74,6	76,7	82,0	85,8	85,3	86,8	81,7	82,8	81,0
No consumen	22,2	25,4	23,3	18,0	14,2	14,7	13,2	18,3	17,2	19,0
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

	Tamaño del hogar					Nacional
	1	2	3	4	5 y más	
Sí consumen	89,9	86,8	81,4	79,8	80,5	81,0
No consumen	10,1	13,2	18,6	20,2	19,5	19,0
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Gráfico 17. Consumo de arepa en el desayuno. BCV, 2011.



6.2.14. Ley Orgánica de Soberanía y Seguridad Alimentaria (LOSSA).

En el 2008 el presidente Chávez dictó mediante Ley Habilitante un Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica que tuvo por objetivo proteger el campo como lugar de las relaciones sociales y económicas estratégicas para la soberanía y la seguridad alimentarias.

El Estado diagnosticó en esa ley que el aislamiento vivido por el campo determina la inexistencia simbólica y política del sujeto rural en el espacio público, lo que impacta a sus políticas agrícolas en precios poco justos, acaparamiento, especulación y en una lógica que, en términos generales, pone la ganancia por encima de la necesidad de crear un piso estratégico para una agricultura económica y políticamente sustentable. Por tanto este diagnóstico también se presenta como una causa de la inflación.

La ley advertía no tener por objeto “la simple supresión del libre mercado”, como mecanismo de generación de riquezas, fuentes de empleo, comercialización de bienes y otras funciones.

La ley definió seguridad agroalimentaria así:

Art.5: (...) "la capacidad efectiva que tiene el Estado, en corresponsabilidad con el sector agroalimentario nacional, para garantizar a toda la población, la disponibilidad, acceso, intercambio y distribución equitativa de los alimentos de manera estable, que aseguren las condiciones físicas y emocionales adecuadas para el desarrollo humano integral y sustentable, considerando el intercambio, la complementariedad y la integración económica entre los pueblos y naciones como elemento esencial que garantiza el derecho a la alimentación" (Chávez, 2008 a).

Este artículo implicó que la definición de seguridad alimentaria para el Estado venezolano se ciñó a su objetivo central, el de la suficiencia (medido por el mínimo y el medio kilocalórico) y el acceso (medido por los porcentajes de suficiencia en la población), dejando por fuera objetivos como autonomía (medido por la relación entre alimentos importados y nacionales).

Más adelante la ley se refirió a otros objetivos de importancia de la seguridad alimentaria como la *inocuidad* (medida por la FAO por los índices de morbilidad asociados a la alimentación) y la seguridad estratégica, medidas en la ley por la capacidad de reservas alimentarias para responder a las fluctuaciones del mercado (Art.6 Num. 11) y por la existencia de reservas que suplan los casos de excepción de manera estable, suficiente y con cobertura nacional (Art. 6 Num. 12).

En base a la experiencia del paro petrolero-alimentario y las acusaciones de deslealtad de la burguesía alimentaria, la ley previó la posibilidad de ataques y sabotaje al sistema socialista alimentario y estableció penas que van de multa a prisión para estos casos (Arts. 119, 120 y 170).

En relación a los problemas de estructura económico-productiva que enfrentó el país para esos años, la ley determinó la imposibilidad de obtener divisas por concepto de la exportación de alimentos que aún no hayan suplido la demanda interna. En tal sentido, el Ejecutivo debe autorizar tanto las exportaciones como las importaciones cuando la insuficiencia interna así lo ameritase (Art. 20 Num. 8 y 9).

En relación a la soberanía alimentaria, la ley no incidió en la propiedad sobre los medios de producción sino solamente sobre sus productos, en caso de contingencia. Sin embargo convocó a tres formas de poder popular para la articulación de las políticas agrarias en general, en la

escala local: las milicias bolivarianas para el resguardo de las reservas estratégicas, los Consejos Comunales para identificar y supervisar problemas de suministro, distribución o algún otro aspecto de la coordinación de la política agraria del Estado y la conformación de Asambleas Agrarias, como sucedáneo participativo de la nueva geometría del poder.

Las Asambleas Agrarias estarían constituidas por los trabajadores y productores del campo, sin preponderancia del tipo de productor o su peso económico. Tenían la función de definir la política agraria junto al Estado en la dimensión local (Arts. 44 y 54). Al no definir la localidad mediante las fronteras establecidas en la constitución del 99, se supone que las Asambleas también podrían coincidir con la comuna y la geometría del poder que fue propuesta en la reforma constitucional del 2007.

Esta relación entre Poder Popular y territorialización de la estrategia agraria es coincidente con las propuestas de Schejtman (1999) y la FAO (1992) sobre participación y seguridad alimentaria desde el desarrollo territorial.

6.2.15. Agrotiendas Socialistas y Agropatria.

Con el fin de intervenir en las partes de almacenamiento, transporte, e insumos como agroquímicos y herramientas, y apoyado en algunos éxitos de investigación, el Estado desarrolló en el 2009 las Agro-Tiendas Socialistas a través de la empresa estatal CVA-ECISA, con 34 tiendas y 4 centros de acopio.

Las Agro-Tiendas socialistas vendieron a los productores de su localidad suministros tecnológicos de diferente tipo a mejores precios que sus competidores oligopólicos privados como Agro-Isleña y, entre otras funciones, incorporan al mercado sustitutos menos invasivos a los agrotóxicos fertilizantes y pesticidas que amenazan la inocuidad de los alimentos. Estos sustitutos, al momento que se escribe esta tesis, están siendo experimentados en varias cooperativas agrícolas del país con asesoramiento del INSAI.

El INSAI es un reflejo del instituto de investigación SASA de la IV República y es el segundo centro de investigaciones estatales en esta área, al lado del Centro Técnico Productivo Socialista Florentino, sin contar los adscritos a programas generales como el centro de

investigaciones de la USR y el IVIC. Ya para el 2010, el INSAI ha probado con éxito relativo insumos biológicos para ahuyentar plagas de ciertos cultivos como el maíz y ha comenzado a promover su utilización en los sembradíos socialistas (ver sujetos 11 y 12 de la 5a. ola en el cap 6.3.5.). Para apoyar estos éxitos, el Estado creó el INIA, el cuarto centro de investigaciones agrícolas.

Según entrevistas (CVA-ECISA, 2010), el Estado evaluó el éxito comercial de las Agro-Tiendas y decidió expropiar en el 2010 algunas empresas, entre la que destacó la empresa competidora de capital español “Agroisleña” perteneciente a la sucesión Fraga, con 8 unidades productivas y 64 Agrotiendas. Agroisleña cubrió el 60% del mercado de insumos agrícolas del país, contó con sistemas de silos, transporte y tres fábricas de agroquímicos en base a concentrados importados de grandes empresas matrices fundamentalmente europeas.

Luego de la expropiación el Estado la incorporó al SSSA con el nombre de Agropatria²³.

Con esta intervención el Estado controla buena parte del mercado de insumos agrícolas (fertilizantes, pesticidas, semillas, instrumentos, etc).

A pesar de que uno de los problemas de evaluar la política pública alimentaria venezolana consiste en la opacidad de los procesos de

²³ Según Gaceta oficial 379.889 decreto 7700, el gobierno llama a esta expropiación “INJERTACIÓN SOCIALISTA DEL ESTADO EN LA CADENA DE DISTRIBUCIÓN DE INSUMOS PARA LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA”:

“La adquisición forzosa de los bienes muebles, inmuebles y bienhechurías presuntamente propiedad del GRUPO AGROISLEÑA C.A SUCESORA DE ENRIQUE FRAGA AFONSO”... ”sus filiales, sucursales, agencias y puestos de recepción, acondicionamiento, almacenaje, distribución, comercialización, industrialización, y así como cualquier otro bien que constituya o sirva al funcionamiento del referido grupo para la ejecución de la obra “INJERTACIÓN SOCIALISTA DEL ESTADO EN LA CADENA DE DISTRIBUCIÓN DE INSUMOS PARA LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA”, la cual tendrá un uso y aprovechamiento social, y consistirá en la puesta en operatividad y la explotación para la producción, industrialización, procesamiento, transporte, almacenamiento, y venta de productos y sub-productos derivados de la actividad agrícola de producción de cereales, así como la distribución y comercialización de insumos para la producción agropecuaria que permita la promoción del desarrollo endógeno del país; así como la protección y generación de fuentes de empleo” (Agropatria, 2011).

inversión y retorno que el Estado hace de sus fondos en casi todas las partes de la cadena agroalimentaria, existen indicadores que, si se comparan densamente con otras descripciones a diferentes niveles de evidencia y recurrencia, pueden indicar el estado de la cuestión.

Esta evaluación es fundamental porque permitiría indicar si la seguridad alimentaria es, en términos de la FAO, autónoma, esto es, dependiente o no de otras fuentes como los precios del petróleo, las reservas internacionales o la deuda externa. Tal evaluación aportaría indicaciones acerca de la evolución relativa del SSSA como medio estable para proveer de seguridad alimentaria.

Un indicador a favor de la transparencia de las inversiones en estas políticas es el Fondo de Eficiencia Socialista, cuando se tienen datos de él. Éste es un fondo creado con el fin de poner a disposición del Estado los beneficios netos logrados por las diferentes empresas estatales y socialistas, no solo en el sector alimentario. De tal modo que, aunque no se conozcan las cuentas de las diferentes instituciones, es posible estimar la importancia de sus ganancias si tales instituciones han logrado depositar sus excedentes en el Fondo de Eficiencia Socialista.

En el 2010, en el año de su creación, las únicas dos empresas socialistas que aportaron al Fondo de Eficiencia Socialista fueron CANTV (la empresa con mayoría accionaria estatal de telefonía fija y móvil) y Agrotiendas Socialistas (CVA-ECISA, 2010)²⁴.

La rentabilidad de las Agrotiendas Socialistas advirtió al Estado sobre la posibilidad de éxito en esta parte de la cadena. Según las entrevistas de campo, esto sirvió de argumento al Estado para que ese mismo año expropiase a la Empresa española Agroisleña, SA y sus empresas filiales.

A la expropiación de Agroisleña y su transformación en Agropatria, se sumó la expropiación de 11 fincas de la empresa de capital inglés bajo el nombre de Agroflora ese mismo año. Luego de esta expropiación, a diferencia de las otras instituciones, mantuvo su nombre como Unidad de Producción Socialista Agroflora. Las expropiaciones en general de ese año condujeron a dos ataques con bombas químicas por parte de

²⁴ En el 2011 depositaron también Diana CA (sujeto 10 del cap 6.3.4) y la EPS Enlandes conocida también como “Lácteos los Andes”.

los trabajadores de las filiales de Agroisleña a funcionarios del Estado y al canal estatal de TV ViVe que intentaba entrevistar a sus trabajadores. La Guardia Nacional intervino en núcleo industrial en Cagua y sofocó la revuelta. No hay reportes de pagos a ninguna de estas expropiaciones desde el 2010 hasta febrero del 2012.

En relación al sub-objetivo *inocuidad* de la seguridad alimentaria, la creación de Agropatria demostró que Agroisleña vendía semillas transgénicas y producía poderosos agrotóxicos a partir de suministros europeos, cuyas diluciones y compuestos patentados ya habían sido prohibidos en la misma Europa por causa de su toxicidad (Trabajadores Agroisleña Cagua, 2010). La inocuidad, aunque no es objetivo de esta tesis, es un subobjetivo de la seguridad alimentaria según la FAO y fue incluido en la Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Alimentaria (art. 6, num. 11) que se había aprobado 3 años antes de la expropiación de Agroisleña.

En relación a la seguridad estratégica, otros de los objetivos de la ley, la expropiación también fue motivada por el hecho de que Agroisleña cobraba sus empréstitos a los campesinos con producción, reforzando notablemente su capacidad de almacenaje en relación al almacenaje nacional de todo el sistema de silos, una capacidad que era considerada una amenaza si se utilizaba como arma política (Osorio, 2010).

Agroisleña indicaba la persistente falta de regulación de los procedimientos de contraloría del Estado en el ámbito agrario desde, al menos, la reforma agraria de los años 60. Algunos trabajadores y productores la hacen responsable, junto a empresas agroindustriales locales, de la destrucción del otrora fértil Valle de Quíbor y del deterioro de varias tierras andinas por el efecto de sus agroquímicos. En el contexto de estas denuncias algunos trabajadores indicaban que una fuga en una planta química similar a la de Cagua habría enfermado crónicamente a un área rural de Quíbor. Otra denuncia, soportada por los mismos extrabajadores de Agroisleña indicaba que se vendieron por varios años productos “banda roja” y “banda amarilla” los cuales, como se indicó más arriba, ya habían sido prohibidos en Europa donde residían sus casa matrices (Trabajadores Agroisleña Cagua, 2010; CVA-ECISA, 2010). Sin embargo, luego de la expropiación, Agropatria vendió a mejores precios todos los productos que quedaban en stock, y jamás hubo una declaratoria estatal de este problema (Coop. Socialistas Sabana de Parra, 2010; Directivo INSAI, 2010). En la fecha que se escribe esta tesis no se reconoce de dónde proceden los nuevos

agrotóxicos ni la manera cómo afectan la condición de inocuidad de la seguridad alimentaria venezolana.

Sin embargo, a un año de la expropiación, el Ministerio del Poder Popular para Agricultura y Tierras indicaba que la población objeto de las ventas y créditos ha cambiado a favor de un perfil más diverso y a escala social: “Pequeños y medianos productores, campesinos, pescadores, acuicultores, productores independientes, productores financiados por la banca pública, asociaciones de productores, RPLAS, UPPS [Unidades productivas socialistas] y entes del estado” (ViVe, 2011). Las hectáreas atendidas habrían ascendido de 360.000 a 1.159.000 y el propio ministro de Agricultura y Tierras, Juan Carlos Loyo, señaló que:

“...el promedio mensual de atención de Agroisleña era de 12 mil 83 productores en 2009, en el primer semestre de 2010 fue de 11 mil 340 personas y en lo que va de año la cifra subió a 52 mil 860 productores al mes, 366,17% más en un año” (ViVe, 2011).

Provea confirma estos datos pero agrega también voces discrepantes:

“Por su parte, voceros del sector privado agrupados en Fedegro han señalado que Agropatria sólo cubre 35% de la demanda, que no se obtienen todos los insumos como anteriormente, que no se está brindando asesoría técnica, que los créditos son irregulares y que privan criterios partidistas para el otorgamiento de los créditos” (Provea, 2011: 60).

6.2.16. Empresas de Producción Socialista (EPS), recuperadas y cooperativistas.

Durante el endogenismo, la idea de comunidad parecía formar parte de una colección de ideas más o menos indistintas como pueblo, barrio, la calle, la patria... Pero luego del relativo éxito de la figura del Consejo Comunal, la explosión del Poder Popular en el 2005 y el proyecto de Reforma Constitucional de finales del 2007, correspondientes a la 3a y 4a. olas de participación, el concepto de comunidad fue re-entendido bajo las categorías de mayor profundidad política como la Nueva Geometría del Poder, la propiedad social y procesos de socialización

por la vía de comunas. No se puede decir, por ello, que el consejo comunal se entiende de la misma manera en el 2005 que en el 2007.

Estos cambios de semántica supusieron una transferencia conceptual de grandes proporciones en los objetivos del proyecto nacional bolivariano. La comunidad durante las definiciones del endogenismo es un espacio ya existente, objeto del desarrollo. Lo comunitario es el destino de una acción conjunta del Estado, del mercado y de la sociedad civil. Es el sitio donde se dejaría una impronta de calidad de vida.

Pero en la idea socialista la comunidad pasa de ser de objeto a sujeto. La comunidad pasa a ser el sitio donde se debe producir una nueva economía, una nueva manera de interconectar los territorios, una nueva semántica del territorio mismo y el experimento societario que debe retar la predominancia del mercado, local y global e incluso del mismo Estado, por la vía de la eficiencia, la solidaridad, la comunicación y de principios más racionales, sustentables y compasivos que la lógica del capitalismo.

Por lo tanto, nada del SSSA podría haber tenido sentido si sus unidades productivas, de servicios, políticas, financieras, etc., no se transforman en socialistas.

“Tanto las empresas estatales como las EPS en cualquiera de las modalidades que más adelante definiremos, poseen en el socialismo un papel cualitativamente diferente del que es propio en la dinámica capitalista (y aún más en su actual fase neoliberal). La apuesta es que no se sometan a la lógica de una economía de mercado, pero que al mismo tiempo logren ser productivas y eficientes” (El Troudi y Monedero, 2006: 78).

Visto desde la perspectiva de la seguridad alimentaria, no era posible delegar en la lógica capitalista la responsabilidad de la alimentación pues ella tendría por fin incrementar sus ganancias y hacer más eficiente sus procesos de acumulación, no generar menos pobreza. De tal modo que confiar en la ética del capital, en su sentido de la responsabilidad, luce ser, tanto por la propia experiencia venezolana, como en la global, inconveniente para el logro de metas estables de seguridad alimentaria.

Esta transformación semántica se extendió por todos los instrumentos civiles, privados o públicos del SSSA.

Ejemplos de ello son la transformación de las Empresas de Producción Social a las Empresas de Producción Socialista (siempre bajo las siglas EPS). La transformación de los Núcleos de Desarrollo Endógeno (piezas de una cadena de desarrollos a escala territorial que va de *núcleo* a *polo*) en los Núcleos de Desarrollo Socialista o NUDES. Las cooperativas agrícolas sugeridas por la Ley de Tierras se convirtieron en los Saraos o Fundos Zamoranos que trascendieron la idea de simple comunidad de campesinos hacia formas socialistas de producción y organización del entorno. La transformación de los Consejos Comunales campesinos en los Consejos Agrarios (primeras formas de Asambleas Agrarias) y las comunas, ahora con la posibilidad de redefinir las fronteras históricas y las propias prácticas políticas del poder representativo. Otro ejemplo son las Empresas Recuperadas (en base a la experiencia de “toma de empresas” en países como Argentina, Uruguay y Brasil, fueron empresas rescatadas por el Estado de la quiebra en manos de intereses neoliberales) quienes se transformaron en cooperativas o EPS, procurando garantizar la política de *punto y círculo*: un punto, por ejemplo, una empresa, aprovecha las potencialidades locales de las misiones y otros apoyos para generar núcleos, bienestar, desarrollo y más empoderamientos en su entorno.

Como se verá en la evolución de las olas de participación, este período fue uno particularmente intenso: se propone extraer la democracia del Estado y la economía del mercado capitalista y depositarlas autogestionariamente en la sociedad civil organizada. Estado y mercado se convertirían en una suerte de apoyos a estos experimentos.

En el caso concreto del endogenismo y la Ley de Tierras del 2001, los emprendimientos recuperadores de tierras ociosas debían estar organizados fundamentalmente por cooperativas, para lo cual se instó a las comunidades campesinas a asumir el modelo cooperativista de producción, aun si no tenían tal experiencia. Las cooperativas agrícolas, como las manufactureras, representaban una instancia de socialización de la propiedad aun muy restringida. No se esperaba necesariamente de ellas la transformación del sistema, ni siquiera se esperaba que experimentaran con lógicas diferentes a las del capitalismo.

Luego del giro socialista las organizaciones campesinas evolucionaron hacia los llamados Saraos, los Fundos Zamoranos, los Consejos Comunales agrarios, la idea de Asamblea Agraria, las comunas y otras empresas del modelo productivo socialista. Las cooperativas y los frentes políticos siguieron siendo considerados parte del paisaje socialista, pero se esperaba más de ellos (El Troudi y Monedero, 2006:153-158).

De tal modo que los emprendimientos socialistas debían generar “Poder Popular”, esto es, instancias en las que las comunidades tuviesen poder vinculante en las decisiones tanto de la empresa, del territorio y de la nación, por la vía de la asamblea, y en el caso del sector agroalimentario, debían producir “soberanía alimentaria”, esto es, que su producción no tuviese por objetivo primordial el “lucro” sino también satisfacer las necesidades de la población en relación a su calidad de vida y sus posibilidades de desarrollo conjunto.

“Si la riqueza es una construcción social, los beneficios de una empresa con compromiso social tienen que trascender el espacio de la empresa y redundar en un beneficio del colectivo que vaya más allá de la creación de empleo o de la oferta de un producto o un servicio” (El Troudi y Monedero, 2006: 98)

Para comprender este fenómeno con mayor precisión es importante reconocer que:

- a) si bien casi todos los emprendimientos tenían capital público al menos semilla, no significaba por ello que eran empresas estatales,
- b) muchas de estas empresas fueron formal y efectivamente empresas cogestionadas (Estado/Sociedad civil organizada), pero solamente observando su funcionamiento real es posible determinar cuáles de ellas son realmente estatales y nominalmente cogestionarias, cuáles son cogestionarias en tránsito al socialismo y cuáles son nominalmente cogestionarias y en la práctica sí son autogestionarias o, más aún, socialistas,
- c) algunas eran empresas estatales, pero su organización política y sus criterios de inversión y desarrollo les permitió ser conceptualmente socialistas, por ello la idea de EPS debió ser ampliada en la práctica y conceptualmente en el concepto de “Modelo Productivo Socialista”,
- d) es totalmente apropiado evaluarlas en términos de eficiencia (Obuchi, Abadi y Lira, 2011) pero es necesario que, en virtud de los objetivos de una empresa socialista, los criterios de eficiencia también

deban readecuarse sin perder su razón de ser. En este sentido, se explica:

“La mejor EPS no es la más generosa con su entorno, sino la que satisface su razón económica productiva y, desde ahí, cubre sus compromisos sociales. Como planteó Aristóteles, la buena voluntad no nos hace buenos zapateros” (El Troudi y Monedero, 2006: 118)

En resumen las organizaciones productivas surgidas del sistema “socialista” de alimentación son:

- a) las cooperativas (propiedad colectiva sin necesariamente responsabilidad con un tejido societario o sistémico),
- b) Los fundos zamoranos, llamados ahora Espacios Socialistas Zamoranos (propiedad entre colectiva y social).
- c) los consejos comunales rurales o agrarios (instancias de control productivo y comunitario),
- d) las Empresas de Producción Socialista y NUDES (propiedad social, a veces en coordinación con la propiedad Estatal o también llamada Pública),
- e) Las Empresas Recuperadas (propiedad Estatal o en coordinación con otras formas de propiedad colectiva o social) y
- f) las Empresas Estatales, como las que forman la CVA, las que impulsa el gasto de PDVSA, Empresas Estratégicas o Empresas formalmente Socialistas pero aún “en transición” en manos del Estado o bajo la forma de cogestión estatal.

6.2.17. Proyecto de Ley de Endeudamiento “Abono Siembra Petrolera” y la Gran Misión Agro Venezuela.

En el 2011 se revalúaron las políticas agroalimentarias y se lanzó una misión de gran espectro llamada “Gran Misión Agro-Venezuela”. Se trata de un esfuerzo similar al de la reforma agraria de los años 60, consistente en entrega de tierras (propiedad o tenencia), otorgación de créditos productivos y evaluación de las condiciones de productividad.

De manera específica esta política se diferenció de las de la IV República en varios hechos resaltantes:

- a) los importes asignados a la producción son mucho mayores,

- b) las condiciones de productividad se establecieron por la vía de detectar potencialidades específicas junto a trabajadores e incluso nuevos trabajadores del campo y no solo sobre el escenario tradicional,
- c) la Misión produjo un nuevo censo agrícola, colaborando con las estadísticas del censo agrícola del Ministerio del poder popular para la Agricultura y la Tierra, y el anterior Ministerio de Agricultura y Cría (Provea, 2011).

También se diferenció de las políticas de la misma V República en dos hechos resaltantes: los importes asignados a la producción también fueron mayores al de otras misiones productivas (Loyo, 2011) y por primera vez, se hizo una convocatoria explícita y abierta “a todos los sectores productivos, sin importar cómo estén organizados”, esto es, sin importar si son propiedad colectiva, social, privada, grandes productores, sin tierras, con poca experiencia, etc. En la teoría, los créditos agrícolas y públicos de la V República también han estado dirigidos a todo tipo de propiedad (que no haya sido declarada latifundio), pero en la práctica esto no resultaba claro. Al especificar esto en la convocatoria se generaron nuevos sobreentendidos que permitieron que no se prejuzgase la misión como una fuente de créditos para sectores económicos ligados de algún modo al bolivarianismo o sectores sociales y políticos ideológicamente comprometidos como socialistas.

El proyecto de ley de presupuesto que acompañó a esta inversión está justificado en el marco del Primer Plan Socialista y se llamó “Abono a la Siembra Petrolera”, como una clara referencia a la lucha contra el rentismo.

¿En qué contexto se produjo la Gran Misión Agro-Venezuela?

Durante las políticas “Bicentenarias” del 2010 el ejecutivo había evaluado sus políticas productivas. Según los diagnósticos de la nueva Vicepresidencia productiva (que reunía a los viceministros del gabinete productivo), el despunte de la agricultura no se había producido por efecto de las inversiones anteriores, la inflación y la importación habían crecido de manera incontrolada y la burguesía aún no mostraba señales de lealtad al nuevo proyecto económico, acelerando la fuga de recursos fuera del subsistema. Por tanto las nuevas políticas del 2011 se inspiraron en las premisas establecidas en el 2010 y que luego fueron publicadas junto al Proyecto de Ley de

Endeudamiento “Abono a la siembra petrolera”, las cuales suponían que, a falta de un despunte de la inversión privada, el Estado debía asumir la inyección de esos recursos para reactivar el aparato productivo no petrolero (Rodríguez, 2010; Giordani, 2011).

El Ministro del Poder Popular para la Planificación, Jorge Giordani encabezó este nuevo Proyecto de Ley ²⁵ en Enero del 2011. Usando nuevamente la clásica consigna contra el rentismo, Giordani anunció un crecimiento moderado del PIB para el 2011 y un nuevo esquema de obtención de recursos públicos en el que el petróleo pasaba a ser una tercera fuente: en primer lugar el sistema fiscal, en segundo lugar la deuda externa y en tercer lugar el petróleo, estimado en más de 60 dólares el barril, esto es, por debajo del precio de referencia en el mercado.

Al colocar los impuestos en primer lugar se reveló una importante confianza en la capacidad de este pequeño crecimiento del PIB en producir los ingresos nacionales. El aumento de la deuda fue una decisión que viene afectando a las importantes reservas internacionales desde el 2008 y supuso aun mayor confianza en un crecimiento económico no petrolero del país para los próximos años, por encima del efecto reciente de los precios petroleros.

El Plan se mostró como la demostración de la *superación de la dependencia al petróleo* a pesar del crecimiento negativo del año anterior y del efecto de precios petroleros muy altos sobre la economía. La estrategia fue explícita: el aparato productivo era insuficiente pero el aún creciente gasto público (obtenido de los ingresos petroleros, de las reservas y de la creciente deuda externa) producirían crecimiento en el sector no petrolero, incluyendo la alimentación:

²⁵ En la práctica se trata de un sub-Plan o Programa de la República. En la misma justificación de Proyecto se establece que esta modalidad es una articulación menor del Primer Plan Socialista y del Proyecto Nacional Simón Bolívar o también llamado recientemente el “El Plan de Mediano Plazo”: “Tres instrumentos de gobierno que requieren de una estrecha coherencia y coordinación. El Plan de Mediano Plazo 2007-2013 con sus lineamientos estratégicos para el período de gobierno, el POAN como un enlace entre las directrices del Plan y las prioridades en la asignación de recursos para ser implementados en un año calendario, y finalmente, el Presupuesto como el último eslabón de la cadena donde se asignan los recursos bien por programas o por proyectos como ha sido la modalidad recientemente empleada” (Giordani, 2011).

“El carro de la inversión pública, con el Fonden y el Fondo Chino a la cabeza, empujará al carro de la inversión privada. Una cosa son los especuladores y otra muy distinta los empresarios e inversionistas privados que le apuestan al país y aspiran a obtener niveles de ganancia razonable” (Giordani, 2011)

Se trataba de una estrategia a la que el sector productivo había sido sensible pero siempre de manera breve y perentoria, según se mostrará en capítulos posteriores.

Así que ese mismo mes, el presidente Chávez y el Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, anunciaron la Misión Agro-Venezuela, a llamarse luego la Gran Misión Agro-Venezuela.

La viceministra de Ministerio del poder popular para la Agricultura y Tierras, Danixce Aponte la definió así:

“Con asistencia técnica, dotación de insumos y con un financiamiento que superará los mil millones de bolívares, la puesta en marcha de la Misión Agro Venezuela creará las condiciones para que nuestro país alcance la soberanía alimentaria” (Ministerio del poder popular para la Comunicación y la Información, 2011).

El objetivo es impulsar la producción en todos los renglones alimentarios: “los cereales, las hortalizas, leguminosas y todo lo relacionado con productos pecuarios” con el objetivo de...

“...dejar a un lado la dependencia del petróleo. Podemos nosotros volver a sembrar en cualquier cantera, en cualquier huerto. Que volvamos al campo y que se dignifique tajantemente la labor del productor bajo la premisa de que consigamos la soberanía de producir nuestros propios alimentos” (Ministerio del poder popular para la Comunicación y la Información, 2011).

Para mayo del 2011 el gobierno anunció haber entregado 1.402 millones de bolívares en financiamientos a productores a través de esta Misión (Ministerio del poder popular para Agricultura y Tierras, 2011). Loyo, el Ministro del poder popular para Agricultura y Tierras,

declaró que el monto total presupuestado para el financiamiento de esta Misión y el resto del sector agrícola sería de 43.6 millardos de bolívares (formalmente, a un 13% de retorno), solo para el 2011 (Loyo, 2011).

Para tener una proporción de esta inversión, ella correspondió a casi un 40% (38,1%) del total de la reservas internacionales venezolanas para el 15 de mayo del 2011 (BCV, 2011) y casi el 10% de la totalidad del gasto público, no presupuestado, sino efectivamente cancelado en el 2009 para inversión productiva y social, con todos sus créditos adicionales, sumando las erogaciones del FONDEN y el Fondo Conjunto Chino (Giordani, 2011 a).

También correspondió a casi 13 millardos más de lo que perdió Venezuela en el PIB por causa del Paro Petrolero del 2003, calculado a 4,28 bolívares el dólar.

Pero este cálculo supone un problema ya detectado en otras políticas. De manera optimista, esto es, sin considerar créditos adicionales, si se sigue el ritmo de la primera entrega (Ministerio del poder popular para Agricultura y Tierras, 2011) y puesto que el presupuesto solo es para el 2011, suponiendo que no se entregasen más recursos en el 2012, sobrarían 32.4 millardos de bolívares por financiar o justificar. Si se entregasen créditos adicionales y se presupuestase la Misión para el 2012, que son dos escenarios altamente probables (puesto que la Misión es bienal), el importe sobrante sería aún muy superior.

De hecho, el Fondo Zamorano, anunciado en febrero del 2012, es en la práctica, la segunda parte de la Misión Agro-Venezuela, con la diferencia de que esta vez se obliga a la banca privada a formar parte de él.

En palabras simples, hay mucho más dinero que actores productivos. Remontar esta diferencia significaría movilizar un importante contingente de población urbana y rural o que bien no existe, o que no estaría interesado en producir la tierra.

En general y con sus matices, se trata del mismo tipo de política que se implementó durante la Reforma Agraria de finales de los años 60 en Venezuela, que se siguió implementando a través de otros programas en la IV República, y que se implementó a través de las asignaciones crediticias de la banca estatal durante el bolivarianismo (como se ha

visto, ahora llamada en su conjunto, banca social) y su red de créditos agrícolas, ahora además de la banca privada, agregada por disposición del propio Presidente para formar parte del Fondo Zamorano en el 2012. El Estado además pone a disposición tierras estatales, expropiaciones, confiscaciones y supervisión técnica.

Con un 79% de gasto superior al del año 2010 solo para financiar el 2011, esto es, si no hubiese nuevos importes en el 2012, se prevé un aumento de la producción agroalimentaria de 30%, al cabo de esos dos años con un 13% de retorno ²⁶(Loyo, 2011). Los resultados de la producción agrícola y la manufactura de alimentos al final del 2011, con los que es posible evaluar la efectividad de toda esta inversión, se analizan en los epígrafes 6.5, 6.5.1. y 6.5.2.

A favor de esta política es importante decir que los problemas que enfrentó el Estado para levantar la producción responden a un aumento de la demanda de alimentos favorecida por el mismo gasto público y en parte por el control cambiario (BCV, 2011). Pero esta relación podría funcionar a favor del reestímulo productivo si, al menos, no existiesen condiciones de inflación tan pronunciadas, conllevando un desplazamiento de la inversión y de la fuerza de trabajo fuera de los rubros estratégicos de producción.

La Gran Misión Agro-Venezuela, como se verá en el análisis, tampoco logró detener la dependencia del subsistema al Gasto Público. Por el contrario, cifras del BCV (2011 b), del INE (Provea, 2011), del Ministerio de Agricultura (Ministerio del poder popular para la Agricultura y Tierras, 2011 a) y de la federación patronal agrícola,

²⁶ Es importante apuntar que en Venezuela hay una pobre cultura del retorno del crédito agrícola según constatan varias fuentes. Parece ser una impresión común entre entrevistados de esta tesis las bajas utilidades de la banca pública de desarrollo, producto de un retorno altamente deficiente del crédito y sus intereses, tanto en la IV como en V República. Evidencia de ello sería la quiebra de organismos de IV República del Instituto de Crédito Agrícola y Pecuario en 1999, o las sucesivas quiebras del Banco Industrial de Venezuela durante la IV y V República. Aunque las cifras precisas a este respecto son opacas, es posible encontrar en investigaciones académicas (Anido y Fuentes, 2007) y en reportes de organismos multinacionales como el FMI (Reuters, 2011) o el informe conjunto de la Organización Mundial para la Alimentación y la Corporación Andina de Fomento (2006) indicaciones concretas sobre este problema. En este último informe se recomienda explícitamente mejorar las utilidades bancarias, con el objetivo de hacer sostenibles las políticas alimentarias.

Fedeagro (Fedeagro, 2011), indican a diferentes niveles y de diferentes formas una disminución de la producción de alimentos en los sectores primario y secundario para finales del 2011. Puesto que la inversión no logró depender de las propias fuerzas productivas donde se realizó, se generó más incertidumbre en las posibilidades productivas del subsistema, se reforzó una mayor tendencia al ahorro fuera del sistema productivo o a favor de la inversión especulativa. La demanda siguió creciendo y, en el mejor de los casos, el crecimiento de la oferta fue menor a la desproporción de esa demanda.

A continuación se colocan los gráficos 18 y 19, los cuales ilustran esquemáticamente mucho de lo que se ha descrito aquí.

El gráfico 18 ordena todos los componentes del SSSA según sus funciones principales en la cadena financiamiento-producción-transporte-insumos-comercialización. En el centro, a manera de una secuencia de olas que motorizaron el SSSA, se encuentran los principales programas normativos y utopistas que dieron vida al SSSA en la sociedad civil y en el mercado.

En el gráfico 19 se ilustra la relación entre los organismos puramente estatales del SSSA, aquellos que comparten a diferentes niveles la presencia de la sociedad civil organizada y aquellos que pertenecen políticamente a la sociedad civil. Aquí se dibuja un “área de planificada de participación”, donde en la teoría y en la práctica han participado los ciudadanos en el diseño y ejecución del SSSA a diferentes niveles. El gráfico 19 también reconoce la dependencia del SSSA a la exportación de hidrocarburos y al sistema alimentario privado para su funcionamiento. Reconocer todos estos componentes y sus relaciones constituyen el mapa fundamental sobre el cual puede entenderse la generación de seguridad alimentaria.

Gráfico 18. El SSSA. La cadena económica socialista.

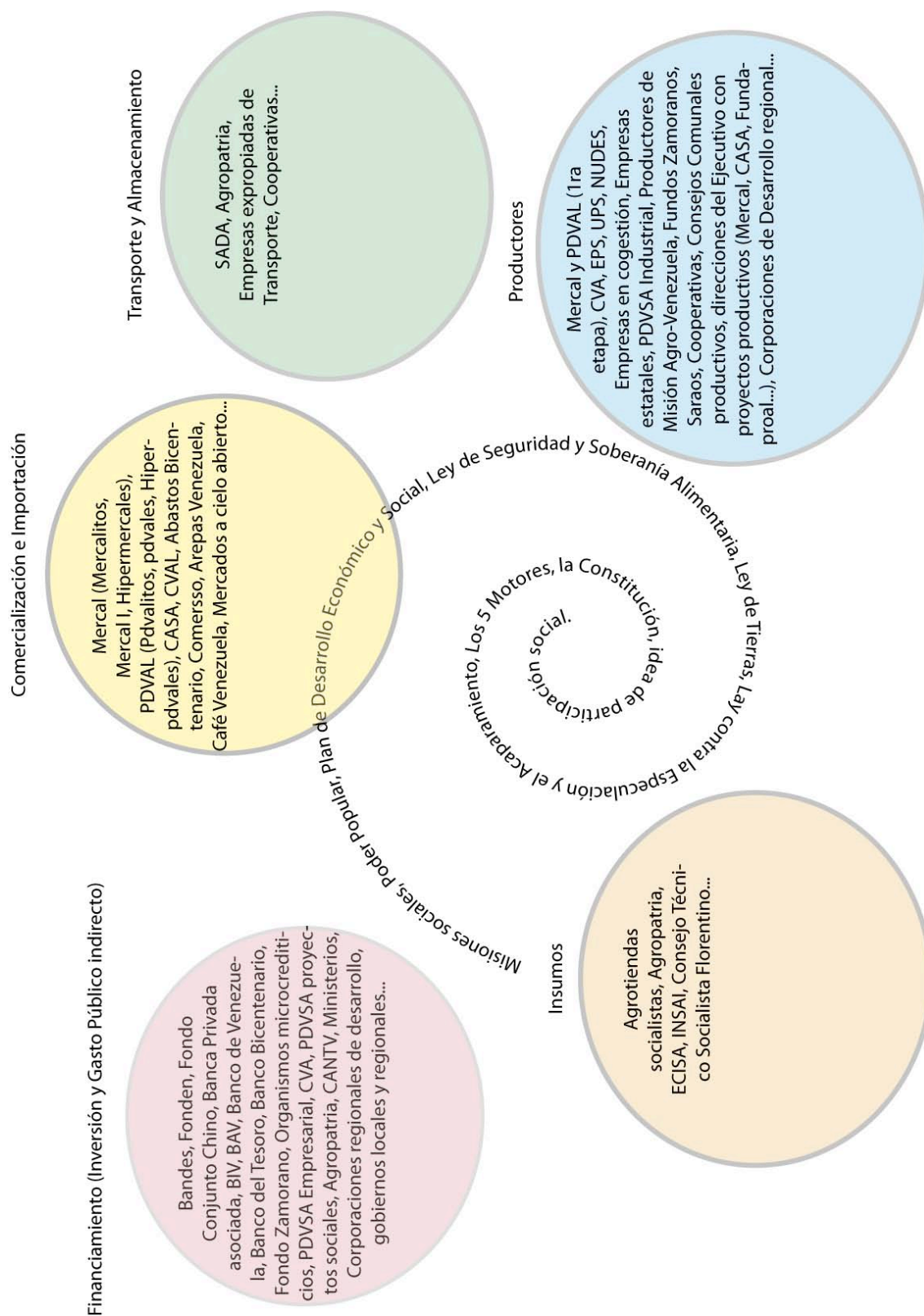
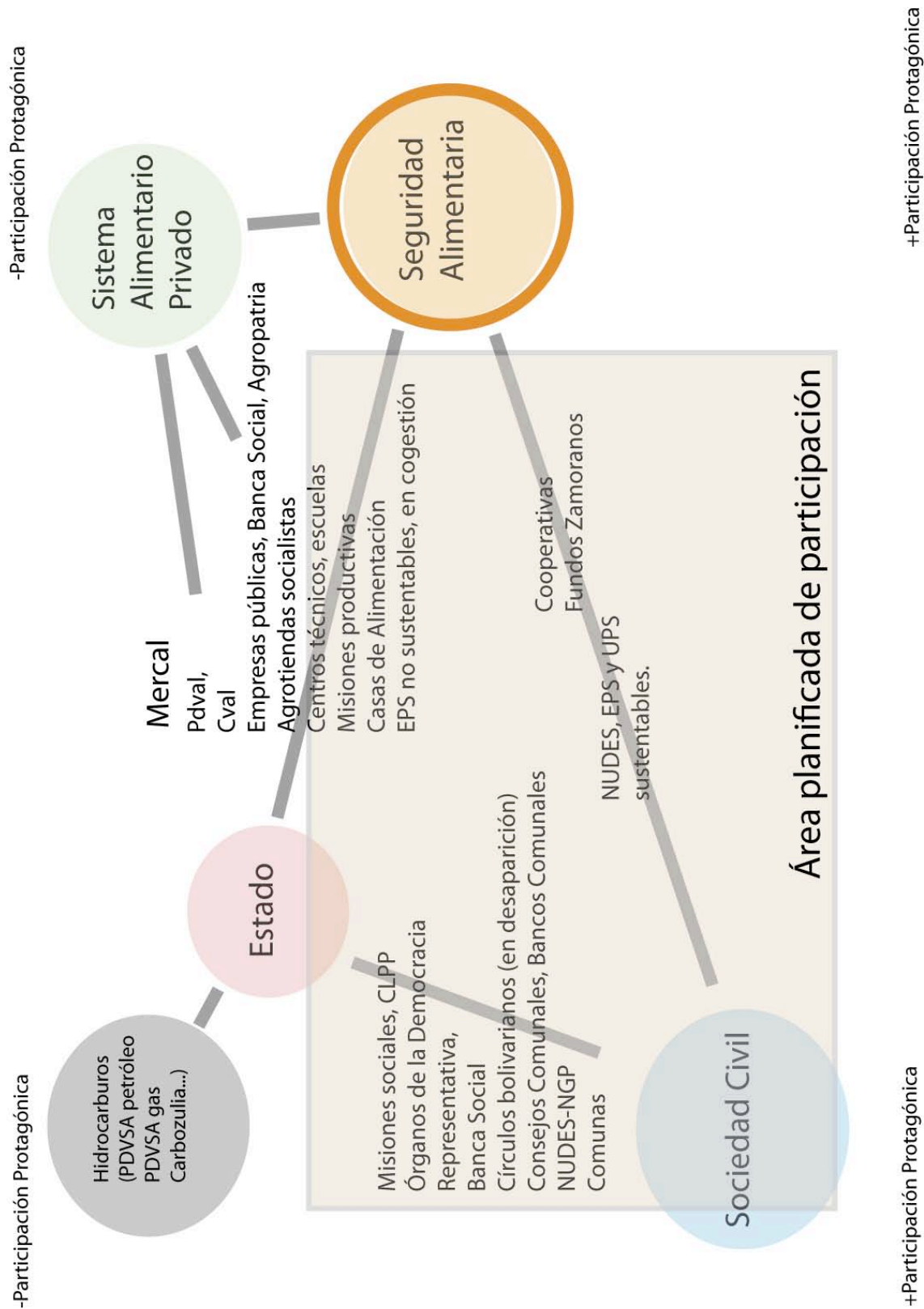


Gráfico 19. El sistema alimentario venezolano según sus objetivos de seguridad y participación.



6.3. El rol de la participación en el SSSA. Descripción del proceso y situaciones observadas

Numerosas análisis y escritos, simpatizantes del proceso bolivariano o no, parecen coincidir en la idea de que la participación en Venezuela solo es impulsada por el Estado y luego sostenida de tal modo por el gasto público que la calidad de la participación termina reduciéndose al aplauso político del líder y a la tutela política y económica de la participación (Biardeau, 2009; Monedero, 2009b; Harnecker, 2010; Cadenas, 2011).

Si bien este diagnóstico está producido por hechos y datos corroborables a todo lo largo del subsistema, la observación arroja matices muy importantes para comprender el papel regenerador del tejido social que ha desempeñado la participación en el nuevo Estado.

Esto es, surge un diagnóstico diferente si la participación no es solo vista desde la perspectiva de la política pública estudiada, donde hace parte de un componente del cuadrinomio *gobierno-agenda-implementación-población* (Wildawsky en Aguilar, 2007b:70; Howlett, Ramaesh y Perl, 2009:4; Majone, 2008:228), sino que se observa desde la perspectiva del sujeto que participa en el contexto de su situación. Esto permite arrojar otro tipo de conclusiones.

Dado que se trata de procesos de participación, los resultados de estas políticas deben ser observables en el mundo de los sujetos participantes donde se producen los tejidos sociales concretos y se supera el divorcio entre sociedad y Estado.

Si bien la seguridad alimentaria en una nación, convencionalmente, debe ser identificada con medidas en el marco societario, la manera como ella se produjo o se procura producir es el resultado de esfuerzos concretos de participación que han hecho efectivas las políticas en cuestión, muchas veces más allá de la operatividad y alcance de la acción del propio gobierno. Las medidas de la FAO han tenido siempre presente esta dimensión del análisis (FAO, 1992; Schejtman, 1999).

En el entendido de que la naturaleza de las políticas públicas son comprensibles desde sus prácticas concretas y no solo desde sus intenciones expresadas (Howlett, Ramaesh y Perl, 2009: 9; Kustka Fernández, 2009), luce importante no solo analizar los discursos y

objetivos de las políticas, o sus efectos de las políticas en la macroeconomía, sino detectar la dinámica de los discursos e interjuegos del SSSA en los sitios donde se produce. Esto es, desde las diferentes instancias directivas hasta la práctica productiva, comercializadora y distributiva con fines de seguridad alimentaria, donde las políticas son recibidas, interpretadas y convertidas en acción social.

De esto se desprende la importancia de las observaciones situacionales para poner en contexto las políticas.

“La variedad cultural es importante para las políticas públicas; hay una tendencia crónica a negarle la atención que deberían tener y tal negación priva a algunas opciones políticas y a procesos políticos alternativos de un nivel del campo de juego” (Bobrow, 2008:582).

Los métodos situacionales son apropiados para evaluar impactos de políticas públicas porque en ellos los conceptos obtenidos de las grandes disciplinas y teorías adquieren sustancia. Lo general se hace particular y viceversa.

Cuando se entiende al Estado como el resultado de relaciones y éstas se entienden como compuestas de significaciones y éstas a su vez se presentan como materiales susceptibles de observación y conocimiento directo, el concepto de Estado relacional de Jessop (Jessop, 2008; 2008a) podría convertirse en un marco propicio para describir situaciones, esto es, situaciones que revelen la naturaleza del Estado.

“Lo importante de las conclusiones del antropólogo es su carácter específico y circunstanciado. Esta clase de material producido en largos plazos y en estudios principalmente (aunque no exclusivamente) cualitativos, con amplia participación del estudioso y realizados en contextos confinados y con criterios casi obsesivamente microscópicos, es lo que puede dar a los megaconceptos con los que se debaten las ciencias sociales contemporáneas – legitimidad, modernización, integración, conflicto, carisma, estructura, significación- esa clase de actualidad sensata que hace posible concebirlos no solo de manera realista y concreta sino, lo que es más importante, pensar creativa e imaginativamente con ellos” (Geertz, 1992: 34).

Esta tesis entiende de este modo a las situaciones observadas. Ellas constituyen la realidad de las políticas que definen la naturaleza del Estado y, al mismo tiempo, es un lugar fundamental del análisis donde es posible concluir sobre el impacto de la participación en la generación de seguridad alimentaria.

A continuación se describirán las situaciones que sirvieron de referencia para estas conclusiones. Estas descripciones tienen por objetivo poner en contexto la naturaleza y capacidad de la participación en regenerar tejidos sociales que fueron fundamentales para los objetivos de seguridad alimentaria. De ellas se derivan algunas reflexiones sobre la relación entre población, Estado y territorio, a desarrollarse con más detenimiento en el cap. 7.1.

Las situaciones fueron observadas mayormente desde atalayas de TV comunitaria como Canal Z, de TV proto-comunitarias como ViVe TV y de TV pública como VTV. Estas atalayas generalmente consistían en observaciones de largo tiempo para la realización de documentales con el método etnográfico y en observaciones coyunturales de uno o dos días como parte del proceso de preproducción y producción de programas de TV donde las comunidades fueron los sujetos centrales. Muchas de las comunidades observadas integraron sus experiencias convirtiéndose ellas mismas en productoras de TV, lo que hizo más dialógica la relación entre el investigador y el sujeto de la situación observada.

Tal como se indicó en el epígrafe 6.1.2, las situaciones son la materia con la que se construye en esta tesis el concepto de “ola de participación”. Tales olas tienen por objetivo poner en contexto las experiencias populares, de modo que se pueda trasladar la situación estudiada a su condicionamiento coyuntural. Las olas deben reflejar cambios fundamentales en la significación de la participación en el paso del tiempo y con ello, revelar el contexto que condicionó tanto a la participación como a la evolución de las políticas públicas y su efectividad.

En todos los escenarios, en todas las entrevistas y en todas las observaciones se protegió la identidad de los informantes, salvo que se haya especificado lo contrario.

6.3.1. La 1a. ola de participación: los círculos bolivarianos y el ejemplo de la Ley Habilitante (1999-Febrero 2003)

La primera ola de participación de la sociedad civil corresponde a la primera de las periodizaciones hechas por varios autores y por esta misma tesis, que observan un antes y un después del ciclo golpe de Estado/Paro petrolero-alimentario, en virtud del carácter de las políticas y la orientación del proyecto nacional (D'Elia y Cabezas, 2008:1-3; Alvarado Chacín, 2010:346).

Se trata de un período en el que se tratan de organizar las instituciones, las referencias programáticas e incluso se trata de ordenar una generalidad nacional por otra con consecuencias en las ideas de pertenencia, lo político y hasta en lo psicológico.

Durante este período el Presidente llama a la consolidación fundamentalmente de círculos bolivarianos, comités sociales del Plan Bolívar 2000, comités de Tierras y medios comunitarios. Los dos primeros son el resultado de convocatorias políticas directas y los segundos de las leyes tributarias de la Ley Habilitante del 2001.

Los círculos bolivarianos fueron unidades de apoyo al gobierno de 7 a 11 personas, en la práctica de tipo vecinal, que tenían por objetivo principal movilizar a las comunidades en razón del nuevo proyecto nacional, así como discutir e interpretar la Constitución.

Cada círculo tendría una casa o localidad cedida por la propia sociedad civil para competir en el radio de influencia de otros partidos políticos. Sin embargo, el círculo no respondía al partido Movimiento 5a. República (MVR) sino directamente al proyecto bolivariano personificado en el Presidente y cristalizado en la Constitución Bolivariana (CRBV). El Presidente era formalmente el presidente de todos los círculos bolivarianos. De hecho, muchos de ellos también competían con las casas del MVR por incidir en la comunidades.

Esto les colocó en posición de ser más flexibles en cuanto a tareas sociales. A diferencia de las seccionales y casas de los partidos, los círculos no estaban constituidos por estructuras basadas en la organización interna (por ejemplo, secretario, eventos, vocería, electoral, etc.) sino por objetivos sociales (comités de niñez, salud, educación, etc.) según las necesidades de percibidas en las

comunidades. No ha sido posible disponer de cifras confiables de círculos o de su población de apoyo.

Los círculos sirvieron de base al Plan Bolívar 2000 e incluso permitieron la convocatoria de los cinturones sociales que protegieron al presidente durante el golpe y los dos paros.

Definían sus propias políticas, los medios para ejecutarlas, y no siempre disponían de apoyo financiero del Estado o de los aliados del bolivarianismo. Eran organizaciones con una relativamente mayor capacidad de convocatoria que el propio partido, dada la figura emblemática del Presidente, sobre todo en las clases más bajas. Pero carecían, como todo el bolivarianismo de aquella época, de programas y procedimientos unificados, por lo que tendían, incluso en sus discursos más explícitos, al Estado paralelo.

El Plan Bolívar 2000 debió apoyarse en ellos y en comités sociales, que tendrían como objetivos impulsar políticas para saldar la deuda social. Los comités sociales del Plan Bolívar 2000 en realidad no funcionaron o funcionaron de manera muy precaria. En la práctica grupos más articulados hicieron el trabajo, muy fundamentalmente, las asociaciones de vecinos que se habían impulsado en Venezuela desde los años 80.

Por cuanto muchas asociaciones de vecinos se habían constituido con el fin de recibir apoyo de las estructuras del puntofijismo, la relación entre el Plan y estas organizaciones no era homogénea ni estructurada. La relación y la posibilidad de generar políticas efectivas dependía enormemente de la tradición organizativa de cada unidad residencial o educativa y de otros factores de gran ubicuidad.

Durante el primer paro-*lockout* patronal y obrero del año 2001, las leyes propuestas y luego promulgadas por el presidente tomaron protagonismo en el debate público. Ellas eran interpretadas como parte de un proyecto mayor, independientemente de su valoración por los dos bandos.

Las leyes ayudaron a que el gobierno convocase la creación de comités de tierras y de medios comunitarios, pero su cristalización fue muy precaria y lenta, sobre todo, en relación a la velocidad que se produciría la participación de la sociedad civil luego de la 2a ola.

Antes del 11 de Abril del 2002 las experiencias de democracia protagónica según la orientación constitucional fueron muy débiles en la realidad de las organizaciones sociales y sobre todo, en relación a lo que vendría después. Sin embargo, las organizaciones sembradas entre el paro-*lockout* patronal del 2001 y esa fecha tendrán un peso fundamental en los ejemplos y los liderazgos gestionados luego de febrero del 2003, pues canalizarían de algún modo el cambio de olas.

Sujeto 1: “La Casa del Pueblo”. Parroquia Francisco Eugenio Bustamante, Maracaibo. Sociedad civil organizada, educación, alimentación y producción primaria.

Situación: Varias familias de un barrio indígena y mestizo del Norte de Maracaibo suman sus habilidades para conformar un centro de alimentación, educación y producción agrícola autosustentable con los niños de la zona.

Coyuntura: El presidente Chávez apenas ha anunciado las leyes de la Habilitante lo que para este sujeto es una demostración del compromiso “sincero” del Presidente con la revolución y los pobres. Ellos deciden empezar la “revolución” sin esperar al gobierno, inspirados en la nueva Constitución .

Atalaya: Miembros de proyectos de medios comunitarios que aún no se habían constituido como tales se agrupan en redes nacionales para aprender de TV y radio, mientras acompañaban el proceso de varias comunidades. Han decidido que la TV comunitaria debía convivir con “el pueblo” y que debía ser el “el pueblo” el que estaba llamado a controlar todas las tecnologías del medio. Un componente de esta red se va a vivir varias semanas en “La Casa del pueblo” para hacer un documental etnográfico (Familia Hernández, Fernández y demás miembros de “La Casa del Pueblo”, 2000-2003).

Descripción:

En algún momento del final del 2001, varias familias vecinas de un barrio de la parroquia mencionada creen que no deben esperar al gobierno sino que deben ser ellos mismos quienes deben hacer cumplir la Constitución. El barrio es una localidad de grandes espacios en las fronteras exteriores de una gran ciudad. Hay muchos elementos rurales de tipo doméstico, por lo que no se puede decir que es

propiamente un barrio rural. El patrón de asentamiento es criollo.

Los impulsores de la “Casa del pueblo” son tres parejas con hijos de varias edades. Algunos miembros de esas parejas han sido maestros.

La pareja que muestra mayor liderazgo abre su casa para todas las personas que quieran alimentarse gratuitamente. Se establecen turnos de cocina, de compra de alimentos, utensilios, se colocan horas y se da preferencia a los niños.

Muchos niños, incluso sin la presencia de sus padres, se acercan a esta casa para comer gratis y para jugar en su patio. Entonces las familias deciden hacer contacto con los padres y pedirles que les dejen en su casa en un horario preciso para comenzar algunas clases.

Algunos padres no aceptan, pero la nueva escuela es vista por los niños como parte de su vida en las calles del barrio. Así que el grupo de niños, amigos entre sí, se mantiene más o menos consolidado para comer y continuar con las clases. Las clases se realizan debajo de los árboles del patio. Se sientan en la tierra a veces. Los niños dicen que son “divertidas”. En efecto, las personas que tratan de llevar las clases se esfuerzan por hacer cosas que puedan serles atractivas.

Con el objetivo de hacer las clases más atractivas, al cabo de unos meses los niños empiezan a sembrar un pequeño huerto en un compostero y a los meses, ya está sembrado en el patio de la casa.

La gente del barrio les llama “la Casa”. Básicamente porque aun no identifican de quién realmente es la casa. Los impulsores de la idea empiezan a llamarse a sí mismos “la Casa del pueblo”.

En las conversaciones con los niños es posible ver con mucha rapidez cambios en sus sueños como adultos. Ven que es posible imaginarse a sí mismos de otros modos.

Muchas veces algunos niños llegaban a pasar la noche en “La Casa” y regresar al hogar con el cantar de los gallos.

Los impulsores tratan de conseguir apoyo financiero de organismos vinculados al gobierno nacional de la región como Corpozulia, pero no consiguen nada. La conflictividad política se hace más aguda y en algún momento del proceso entienden que deben continuar solos y apoyar al

gobierno “sin el gobierno”.

“La Casa” es un ejemplo pionero de “agenda civil”, en este sentido. Vinculó, como sucederá desde el 2003, educación, alimentación y participación a la escala de sus propias posibilidades.

Cuando llegan las misiones, en la primera mitad del 2003, “La Casa” desaparece. Ya no podían mantener por sí mismos el proyecto y las misiones podrían sustituirles. De algún modo, también parecen estar agotados o con menos esperanzas. De manera individual, diferentes miembros de las familias se incorporan a la Misión alfabetizadora y de educación primaria “Robinson”, la cual ofrece becas muy modestas a los facilitadores. Esta misión tendrá una importante población objeto adulta, a diferencia de “la Casa”.

En el barrio ya han cultivado un liderazgo propio que servirá para las futuras organizaciones.

Sujeto 2. “Letra Zurda-Canal Z”

Situación: Una red de jóvenes se expandió por el Nor-occidente de Venezuela buscando crear reporteros y opinadores para una revista sobre socialismo. Luego de un encuentro de “movimientos bolivarianos” en Barquisimeto, la red se transformó y se expandió para crear ECPAIs, Equipos Comunitarios de Producción Audiovisual Independientes, para una canal comunitario de TV. Algunas de las comunidades implicadas desarrollaron acciones sobre el tema alimentario. El medio fortaleció y expandió las redes de participación y propulsó la experiencia de éstas hacia objetivos mejor definidos.

Coyuntura: La Constitución inspiró en algunos grupos la creación de círculos de estudio y propaganda para el socialismo en todo el país que no fueron impulsados por el Presidente. Luego de la confrontación de finales del 2001, los círculos se suman y crean nuevos proyectos de apoyo a la “revolución bolivariana” mientras apostaban por la radicalización de la participación y el protagonismo popular.

Atalaya: Desde la dirección del proyecto editorial en el 2000, la coordinación del proyecto audiovisual en el 2001 y la coordinación de la fundación del canal en el 2002. Se hicieron reuniones siempre en sitios diferentes pues no había sedes estables por dos años. En el 2002

la coordinación se transformó y se trasladó a un barrio de Cacique Mara, Maracaibo. Esa coordinación servirá como nueva atalaya (Comunicadores Comunitarios de Canal Z, 2000-2011).

Descripción:

Un grupo de jóvenes universitarios, inspirados por la discusión que contextualizó a la CRBV, creen que debe promoverse el socialismo en las comunidades y los círculos de influencia política. Para tal objetivo se creó en el 2000 una revista, Letra Zurda, que buscó unificar discusiones más radicales sobre revolución y la nueva identidad de la izquierda en Venezuela.

Solo salió un número. La revista tenía una propuesta gráfica no tradicional, estéticamente renovadora en su medio. Según sus usuarios, el impacto de la gráfica era mayor que el de los textos y no pierde por ello su vocación política.

Esta primera reflexión acompaña a sus impulsores a un encuentro con otras experiencias llamadas “bolivarianas” en Septiembre del 2001. En ese encuentro identificaron el éxito relativo de dos TV comunitarias incipientes en Maracay y Caracas y decidieron convertirse al nuevo medio aprendiendo todo lo relativo a la tecnología en el nuevo contexto político.

El nuevo medio les permitió incorporar a las comunidades: edición, montaje, manejo de cámara, creación de guiones, programación y transmisión son funciones que las comunidades pueden aprender para producir TV ellos mismos. Cada comunidad podía encargarse de un segmento de la programación. Se bajarían costos para no depender de grandes financistas y se promovería la economía popular.

Se sumaron a la propuesta de llevar a su consideración al Presidente, por medio de la Ley Habilitante, un proyecto de reglamento para permitir nuevas televisoras de este tipo .

Al regresar al Zulia empezaron a contactar comunidades. En su momento se trató de asociaciones de vecinos, proyectos independientes como “La Casa” o “hidrobarrio”, actores populares, maestros, centros de hidratación infantil en barrios pobres, periodistas independientes, invasiones como la “Hugo Chávez”, círculos bolivarianos como el “Luis Hómez”, diseñadores, estudiantes,

periodistas de la red alfabetizadora de la iglesia, editores independientes, videastas independientes, etc. A todos se les explicó el proyecto y los alcances que podría tener.

Se creó una primera junta directiva con pocas comunidades pobres, esto es, “del pueblo”. Al proyecto se le denominó entonces “Canal Z. Ventana de Nuestro Pueblo”. Mantiene ese nombre al momento que se escribe esta tesis. Con este equipo se promovieron talleres de TV comunitaria entre militantes bolivarianos y personas de los barrios más pobres. La convocatoria era fácil entre las personas con experiencia en proyectos de participación pero lucía muy lenta en los barrios considerados “excluidos”. Sin embargo, varios puentes con las comunidades populares permitieron mejorar progresivamente la capacidad de convocatoria en este sector al cabo de un año.

El golpe de Estado en Abril del 2002 sacudió positivamente la participación del lado de la oposición pero fundamentalmente del lado del bolivarianismo. La TV dominante había jugado un papel desleal a la democracia y ahora se le veía claramente asociada a grandes poderes económicos nacionales e internacionales. Desde ese momento la curiosidad por la TV comunitaria se despertó. Canal Z capitalizó parte del descontento social en el Estado Zulia contra los medios y los grandes poderes económicos. Simultáneamente, capitalizó parte del rechazo de los factores de la oposición y de varios medios de comunicación dominantes que operaban en la región.

La TV comunitaria (esto es, la proyección de videos en comunidades de todo el país, aún sin transmisión eléctrico-magnética) hizo visible lo que antes eran rumores del mundo político e hizo visible capacidades de la sociedad civil organizada para reconquistar la seguridad alimentaria o reducir la pobreza: la manera como fueron asesinados en Puente Llaguno los bolivarianos bajo la complicidad de la policía opositora, los primeros esfuerzos de la economía popular, la primera persona sicariada por solicitar tierras para su colectivo por medio de la Ley de Tierras, los primeros antecedentes de las casas de la alimentación auspiciadas por el ahorro de los trabajadores de las mismas comunidades, la manera como las distribuidoras de alimentos los escondían los alimentos o los desechaban masivamente durante el paro petrolero-alimentario, entre otros.

Canal Z, después de haber canalizado intereses que lucían dispersos y luego de haber estimulado su utilidad en los barrios excluidos, fue una

de las pocas instancias de la sociedad civil del Occidente preparada y dispuesta para impulsar la ola de las misiones en marzo del 2003.

Es identificable por los discursos y por las acciones consecuentes de la sociedad civil articulada que la participación de Canal Z en los demás proyectos de participación, incluyendo el área alimentaria, generó una mayor efectividad de la organización popular.

El proceso más recurrente que explica esto consiste en que la TV comunitaria produjo sujetos visibles para el espacio público. Cuando el esfuerzo de una comunidad está aislado (porque el Estado no le da respuesta o seguimiento, o porque está rodeada de ciudadanos adversos al proyecto bolivariano, o porque geográfica y socialmente es de muy difícil acceso, por ejemplo...) el ECPAI lo traslada a la TV en tanto sitio del espacio público y de los *imago*s nacionales. El simple hecho de que una comunidad se reconozca en la TV, un lugar social vedado a la imagen cotidiana de los barrios pobres, generó en aquellas un impulso emocional importante del proyecto de participación y una relación más estructurada con el proyecto de Nación.

En palabras de esta tesis, la TV comunitaria regeneraba tejidos sociales por la vía de reconstruir la generalidad en crisis antes del bolivarianismo. Aquí se describen algunos ejemplos vinculados a seguridad aliementaria:

En el caso de “la Casa”, el documental produjo mucho más confianza de la comunidad en la iniciativa de las familias que conducían el proyecto. Aunque esto no es medible, es posible percibir empáticamente que generó incluso más *orgullo* en la comunidad.

En el caso del abogado Pedro Doria, primer dirigente campesino sicariado en Venezuela por la Ley de Tierras, el documental hizo trascender el caso a nivel nacional, movilizó organizaciones de derechos humanos y motivó a otros grupos campesinos a seguir el camino que había iniciado Pedro Doria a pesar del contexto de terror que empezó a vivirse desde el 2003. Luego de este año, el tema de la recuperación colectiva de tierras ociosas se convirtió una meta percibida como necesaria para activar la soberanía y la seguridad alimentaria en los sectores simpatizantes del bolivarianismo. El emprendimiento social de Doria y los videos realizados sobre su caso motivaron directamente más participación agraria y otras formas de participación como la creación de la radio comunitaria Parroquiana de

San José de Perijá. Indirectamente, también contribuyó al discurso a favor de la Ley de Tierras y a favor de la seguridad y soberanía alimentarias.

En el caso del Centro de hidratación oral del Instituto Nacional de Nutrición, el proceso fue inverso. Los productos audiovisuales no impulsaron esta política en la comunidad, sino que la familia que atendía en centro decidió asumir en sus espacios el establecimiento del Canal y convertirse en productores audiovisuales. La familia que vivía en la casa y que atendía el centro de hidratación oral entendía que para convertir la hidratación oral en alimentación y menor pobreza, habría que transformar los cimientos de toda la sociedad. Dada la inconexión de los dramas en los sectores pobres, la TV comunitaria Canal Z brindaba un excelente recurso para reunir las luchas sociales.

En el 2002 la familia que atendía el centro de rehidratación del INN estaba sumada como un Equipo Comunitario de Producción Audiovisual Independiente a Canal Z. En el 2003 aceptaron entregar su medio doméstico a sede central del Canal para toda Maracaibo. Ese año intervinieron activamente en relanzamiento del comedor escolar del barrio que estaba al lado del canal. En el 2004 ya habían suspendido el servicio del Instituto Nacional de Nutrición y se dispusieron a construir, en una esquina de la casa, un pequeño pero muy asistido consultorio de la Misión Barrio Adentro, dedicado a la atención primaria en Salud. Finalmente, desde el 2006 hasta el 2008 construyeron una planta superior donde se instaló un pequeño estudio, un transmisor, una antena y un modesto sistema de luces y sonido. En momentos que se escribe esta tesis tienen un lugar en el dial televisivo de la ciudad y una programación de 8 horas diarias elaborada por más de 15 barrios de Maracaibo y otras productoras independientes o comunitarias.

La economía popular, sobre todo los temas relativos a los mercados de alimentos (Maracaibo tiene un importante conjunto de mercados populares masivos) está entre sus temas más abordados.

Sujeto 3: Círculo Bolivariano Luis Hómez

Situación: En el sector “Patrulleros” de la parroquia Francisco Eugenio Bustamante se creó un círculo bolivariano que impulsa diversos tipos de iniciativas, entre ellas, un corredor comercial-

artesanal en una carretera con potencial turístico.

Coyuntura: Durante el conflicto de las leyes tributarias de la Ley Habilitante del 2001 los círculos bolivarianos se extendieron por el país con el objetivo de dar respuestas flexibles a los ataques que dirige la oposición, los medios y las grandes empresas al gobierno bolivariano.

Atalaya: El círculo Bolivariano Luis Hómez no constituyó un ECPAI pero apoya las convocatorias de Canal Z y éste cubría sus actividades. Hay una observación persistente y dialógica por más de 10 años de las actividades de este círculo por parte de del canal comunitario (Círculo Bolivariano “Luis Hómez”, 2000-2008).

Descripción:

El proceso bolivariano, a través de las discusiones generadas por la nueva Constitución, ha despertado banderas políticas que lucían apagadas en la escena política para el 2000. Una de ellas es la imagen de Luis Hómez, un líder de izquierdas que pudo haber ganado las elecciones a la gobernación de El Zulia en 1989 pero que, a pocos meses antes de las elecciones cae en cama por un cáncer. Este líder se había destacado por su valor en destapar casos de corrupción y asesinatos selectivos de la policía del Estado Zulia, al servicio de sus gobernantes del puntofijismo.

El círculo se creó en el 2001 alrededor de uno de los lugartenientes de Luis Hómez, el diputado Rodrigo Cabezas quien varios años después será Ministro de Economía y Finanzas en el bolivarianismo.

Al principio el círculo activó procesos electorales e impulsó la discusión de la Constitución esperando procesos de empoderamiento y participación autogestionaria.

En algún momento entre el 2001 y el 2002, el círculo presta apoyo a un conjunto de artesanos que elaboraban elementos utilitarios, ornamentales y comida que se extendían de manera heterogénea en la parroquia. La idea es que la Vía a los Bucares podía aumentar su atractivo turístico local si se colocaban varios puestos de fabricación artesanal en el recorrido.

Realmente el círculo está identificando parte del diagnóstico que dará

a lugar a Mercal en el 2003: los pequeños productores de alimentos y otros rubros han sobrevivido a las sucesivas crisis económicas desde los años 80 y 90 gracias a las pequeñas redes de abastos y kioscos (alimentaciones) en los barrios.

De hecho, en una entrevista realizada a Sergio Facchi, ex-gerente de calidad de alimentos de la empresa Polar durante el paro del 2002, reconoció que la fortaleza de esa empresa dependía de su capacidad distribuidora en abastos y kioscos de todo el país. Polar se impuso como empresa de alimentos nacional, además de la calidad en su elaboración, porque acercaba sus productos a redes donde otras empresas no llegaban y a cambio, exigía a los pequeños puntos de venta no adquirir productos de la competencia (Facchi, 2002).

El diagnóstico de los productores que acompañaban al círculo bolivariano Luis Hómez es similar: si era posible agrupar a los pequeños productores a lo largo de la carretera, se generaría una suerte de mercado popular centralizado y a la vez estratégicamente extendido para sus productos. La idea de mercados populares (esto es, en la frontera de la informalidad), incluso de productos importados de Colombia, es un concepto muy importante en el consumo diario de los habitantes del Zulia.

El papel del círculo era completar la idea, redactar el proyecto, promocionarlo por varias vías, sumar nuevos artesanos, hacer prospecciones económicas y presentarlo ante organismos estatales de financiamiento. El Plan Bolívar 2000 mostró interés en el proyecto pero nunca se recibieron respuestas. Los productores y el círculo también dudaban de su capacidad de ofrecer respuestas en el Zulia. Igual sucedía con Corpozulia la corporación de desarrollo del Estado dependiente del Ministerio de planificación.

El proyecto no logró cristalizarse pero la base de datos y el piso de relaciones que han acumulado los sujetos de la sociedad civil será útil para el diseño de políticas alimentarias y para las prácticas de liderazgo posteriores a febrero del 2003.

6.3.2. La 2a. ola: las misiones y los comités. El endogenismo (Marzo 2003-2005)

Luego de la victoria del gobierno sobre el paro petrolero-alimentario fue perceptible que el país había pasado por un trance y estaba dispuesto a sacar aprendizajes de ello.

Algunos de estos aprendizajes consolidaban la idea de que era necesario avanzar sobre los problemas sociales con mayor energía y disposición.

El gobierno propuso las misiones sociales, entre ellas Mercal, con la idea de acercar alimentos a bajo coste en la población. El presidente convocó a productores nacionales de todos los tamaños a sumarse a la nueva red Mercal a través de CASA (Chávez, 2003) ayudando a estimular y a canalizar con ello los emprendimientos sociales y económicos que se dispararon por todo el país en esa época (GEM, 2004). Ya desde ese momento empezó a hablarse de desabastecimiento en el país como una consecuencia de la presión política que mantenían sectores económicos luego del paro (Chávez, 2003).

De algún modo las otras grandes misiones también resultaron de aprendizajes, no siempre relacionados exclusivamente al paro, como el caso de la relación entre el desastre de Vargas en el 2000 (un deslave de laderas montañosas que sepultaron un número aún hoy indeterminado de pobladores) y la Misión Barrio Adentro (Díaz Polanco, 2008), o la relación entre el éxito de las campañas alfabetizadoras en Cuba y Nicaragua y la Misión Robinson (Chávez en D'Elia y Cabezas, 2008). Adicionalmente, el gobierno participaba en un referendun revocatorio presidencial para relegitimar nuevamente sus poderes en agosto de ese año.

La aplicación de las leyes tributarias de la Ley Habilitante del 2001 se convirtieron en herramientas que buscaban la transformación del aparato productivo en un sentido endogenista. Pero todos ellos, leyes y misiones, preveían y planificaban canales de participación importantes. La sociedad civil interesada en constituir emprendimientos sociales y económicos se incorporó a esta nueva etapa.

Entre los canales de participación más visibles estuvieron los comités de tierras, los frentes de facilitadores educativos, los comités de salud, las empresas recuperadas, el primer reimpulso de la cooperativa+Pyme y los medios comunitarios. Biardeau identifica este

momento como un auge del relato re-democratizador de la Nación (Biardeau, 2009).

Sujeto 4: La invasión “Hugo Chávez Frías”.

Situación: Un terreno privado y sin construcciones en la Carretera de Palito Blanco fue “invadido” por una organización que representaba a varios pobladores con el fin de establecer un nuevo barrio. A diferencia del patrón de las invasiones anteriores, los nuevos pobladores no se organizaron en torno a los abastos y la carretera, sino también a la venta de productos de la red Mercal y centros educativos de la Misión Robinson que centraban la vida de los niños y de las familias invasoras. La invasión se convirtió en un nuevo tipo de asentamiento centrado en actividades educacionales y proyectos de modernidad nacional. Mercal cimentó, quizás indirectamente, este nuevo proceso.

Coyuntura: La invasión de terrenos es el patrón de creación y asentamiento del 70% de los barrios urbanos en Venezuela (Lacho, 2012). La invasión Hugo Chávez Frías reflejó que los dispositivos que motivaban a los pobladores han cambiado de algún modo a favor del proyecto endogenista.

Atalaya: Miembros de la TV comunitaria decidieron convivir con la nueva comunidad del Hugo Chávez Frías con el objetivo de realizar un documental etnográfico (Angela y demás pobladores, 2002-2005).

Descripción:

A lo largo de la carretera a Palito Blanco, en la parroquia Ydelfonso Vásquez, pero aún en las fronteras norte de la ciudad de Maracaibo, se producen simultáneamente varias invasiones con el fin de fundar nuevos barrios.

El patrón de invasión es fundamental en el paisaje urbanístico de las ciudades venezolanas. Fundamental para el crecimiento de la ciudad, tanto por el hecho de que cerca de un 70% de las ciudades fueron el producto de invasiones, como por el hecho de que su procedimiento está estandarizado y dominado por algunas compañías informales que se encargan de ocupar el territorio, fragmentarlo en lotes, levantar viviendas precarias, confrontar la policía e incluso conseguir apoyo de la municipalidad por un precio; se trata de actores sociales estables y reconocibles que motorizan una industria informal de la construcción en permanente movimiento (Lacho, 2012).

Dado que los procedimientos son de algún modo regulares, no se espera que estas compañías informales sean receptivas a políticas sociales de largo aliento.

Sin embargo, la idea de reagrupar a la comunidad para crear un nuevo barrio siempre supone la movilización de personas con un sentido nacionalista, indigenista o regionalista que cimenta el relato fundador de una comunidad que se extenderá a fin de cuentas por muchas generaciones más.

Luego del bolivarianismo muchas invasiones se hicieron receptivas de las misiones sociales con el fin de consolidar una pertenencia a la nueva tierra y al sentido nacional de esa comunidad a través de proyectos de desarrollo comunitario endogenistas, la educación y la salud.

Luego de su fundación en el 2000 los pobladores contaban que pasó por la carretera el propio presidente Chávez. La poblada salió a verle y le regalaron un “rabipelao”, un tipo de marsupial. El presidente devolvió el animal, el cual vivió como mascota de la comunidad un tiempo más.

Esa visita motivó el cambio del nombre de la invasión a “Hugo Chávez Frías”. La invasión en el 2003 aún no tenía servicio de aguas, salud, escuela formal, vías asfaltadas o brocales, por dar unos ejemplos. Pero tenían un servicio ilegal de luz, una toma informal de agua cogida de la tubería de Tulé que pasaba detrás del barrio, un círculo de estudios de la Constitución que luego se convirtió en una Misión Robinson, y un abastos que compraba productos de Mercal y que luego se revendían más caros en el nuevo barrio.

A pesar de que las misiones no habían llegado con toda su fuerza a la comunidad, como sí lo habían hecho en otras comunidades vecinas, el Hugo Chávez Frías se sentía asistida por la revolución.

Era posible identificar en los niños cambios en sus expectativas de futuro luego de la Misión Robinson. Por ejemplo, los niños pensaban en vender en la carretera las guayabas que sembraban en sus terrenos para ganar un dinero, pero ahora también pensaban que, si ahorran, podrían establecer una tienda de frutas cultivadas en el mismo barrio al borde de la misma carretera. Una niña notaba que ahora ella podría leer y escribir como no lo hacía su mamá.

La Misión Robinson fue legitimando la presencia del bolivarianismo crecientemente. Algunos de ellos, siendo vendedores informales en el

centro de la ciudad, habían visto como las clases bajas no aceptaron el paro petrolero-alimentario: los informales habían sido más leales con el Estado que los negocios formales, dependientes de los inmuebles comerciales. Este grupo hizo contactos para llevar al barrio otras misiones.

En el 2004 el abasto que revendía productos de Mercal se convirtió formalmente en un mercalito y recibía directamente de la red los productos que antes vendía mucho más caros. En ese año, la Misión Robinson hizo un lugar a la misión Robinson II (primaria completa) y los estudiantes esperaban la llegada de la Misión Ribas (educación secundaria). Los estudiantes de las misiones y los facilitadores se convirtieron a su vez en correas de transmisión para discusiones políticas nacionales.

En el 2005 la comunidad ofrecía a la carretera algunos negocios pequeños como nuevos abastos y otras pequeñas inversiones que demostraban que había habido una evolución económica del barrio. Los círculos de estudio de la Constitución se habían convertido en misiones educativas, habían promovido el mercalito del barrio, y con estas misiones habían dado centralidad a la vida de la comunidad. Ya en aquel año estaban preparados para transformarse en una nueva organización, más articulada, en los albores de la tercera ola.

En el 2005 ya no era posible llamar a la comunidad “invasión” sino “barrio”, y las misiones, incluyendo Mercal, habían permitido centrar económica y culturalmente la vida de ese barrio así como darle objetivos en el proyecto nacional. En retrospectiva, según declaran representantes del hoy Consejo Comunal del Hugo Chávez Frías, fue visible que la articulación comunitaria fue mucho más rápida y efectiva desde el 2003 al 2005, que del 2000 al 2002.

Sujeto 5: Trabajadores de la Central Azucarera Venezuela.

Situación: Los trabajadores de la Central Azucarera Venezuela (CAV) han comenzado una huelga escalonada a finales del 2004 y durante parte del 2005 para denunciar una prolongada situación de explotación extrema, abusos laborales y la participación de sus propietarios en el “plan de desabastecimiento” con “fines desestabilizadores”. Además de solicitar beneficios, los trabajadores querían levantar la producción por la vía del empoderamiento. En el 2009 lograron el primer paso para su empoderamiento

Coyuntura: Los problemas de desabastecimiento de rubros fundamentales no habían cesado desde el 2003, entre ellos el azúcar. Los productos “iban y venían” de los anaqueles y los suministros eran irregulares según la región del país, generando incertidumbre en los consumidores. Este problema se extendió al menos hasta febrero del 2012. El gobierno ha denunciado un plan desestabilizador por parte de los productores. Los productores han aquejado problemas en la obtención de divisas y por la desactualización de la lista de precios regulados que les ha hecho incierta la colocación de productos en un contexto altamente inflacionario. La CAV fue fundada en los años 30 con esquema productivo que pasó de ser muy moderno para su época a un sistema semi-feudal, basado en la contratación de mano de obra colombiana casi esclava para la zafra.

En el sector campesino se ha creado un ambiente propicio para la creación de Comités de Tierras con el fin de solicitar latifundios, tierras ociosas o improductivas desde el 2002. Igualmente, se ha publicitado la recuperación de empresas quebradas por parte de los trabajadores y del Estado asistidos por capital estatal. Desde las cifras publicitadas del Estado algunas recuperaciones parecían mostrar resultados exitosos. Se hablaba de empresas cogestionarias y en algunos casos se hablaba de NUDES, los cuales publicitaban modelos endogenistas y totalmente autogestionarias.

Atalaya: Preproducción y producción de un programa especial de la TV pública ViVe. La investigación duró una semana para preparar el programa durante en el 4to trimestre del 2005, pero se extendió por al menos año y medio con objetivos de seguimiento (Solarte y Solarte y demás trabajadores, 2005-2009).

Descripción:

La CAV estaba ubicada en el Sur del Lago de Maracaibo, en la población de El Batey. Se trata de una zona de tierras de calidad 1 y 2, esto es, óptimas para el cultivo agrícola intensivo. Las llanuras de El Batey constituyen un espacio agrícola importante desde tiempos de la colonia no solo por la calidad de sus tierras sino porque estaban conectadas con los puertos de Bobures, Gibraltar y en menor medida, Palmarito. Se trata de puertos relativamente protegidos del pirataje y que, por la vía lacustre, tenían salida casi directa con las metrópolis. El auge económico de esta zona y su relativa dispersión de la supervisión española también les convirtieron en centros de recepción de contrabando esclavo desde las islas holandesas, por lo que presentan un componente afrodescendiente muy marcado en su población.

La arquitectura y el patrón de asentamiento de El Batey confirman los testimonios de los trabajadores de la CAV en relación a que la población fue fundada alrededor de la empresa a principios de siglo. De hecho, fue fundada en 1912 bajo el nombre de Central Azucarero Zulia, según cuentan los pobladores (Casal, 2005). Ello implica que para el 2005 más de 3 generaciones y media del pueblo han trabajado para la CAV, directa o indirectamente. De la prosperidad de esta empresa ha dependido en muy buena medida la prosperidad de ciudades cercanas como Caja Seca y Nueva Bolivia.

También la arquitectura y el urbanismo confirman los testimonios de que la población gozaba de beneficios similares a la de los campos petroleros en cuanto a salud, bonificaciones alimentarias y servicios instalados entre los años 50 y 60, auspiciados por la misma empresa. Sin embargo, la caída de los precios del azúcar en los 60, la inflación, los altos precios de la moneda y el aumento de los costos laborales fueron generando en el esquema de ganancias de la CAV un deterioro de los servicios, de los salarios, de las condiciones laborales y de la calidad del producto. Desde los años 70 el estrato laboral más bajo que se encargaba de la zafra empezó a ser sustituido por mano de obra colombiana contratada estacionalmente, fuera de toda normativa laboral y en condiciones de vida infrahumana las cuales, según atestiguó la pre-producción del programa de TV, se mantenían similares para el 2005.

La huelga de la CAV del 2004-2005 no fue promovida por este último sector, quizás por su particular condición de inestabilidad legal y social (muchos de ellos son refugiados del conflicto colombiano y prefieren por tanto el anonimato), sino por el sector venezolano propiamente de la industria procesadora.

Denunciaban las malas condiciones de los pollos del comedor obrero, la muerte de un trabajador porque las protecciones de altura estaban vencidas, los bajos salarios, el descenso de la calidad del azúcar (mezclada con azúcar “lavada”, lo que iba en perjuicio de la salud de los consumidores), la desaparición en la práctica de todos los beneficios comunales y un sistema de contratación por “rotación de empresas” que daba de alta y despedía a los trabajadores cada 3 meses con el objetivo de no reconocer antigüedad, utilidades y jubilación.

Además, el contexto político ha hecho visible el conflicto en el 2005 por varias razones:

- a. Los trabajadores denunciaban que la familia propietaria de la CAV, los Brillembourg, son la misma familia que firmó el decreto de apoyo a Carmona Estanga durante el golpe.
- b. los trabajadores reconocían que la capacidad productiva de la empresa estaba al máximo y que, en ese contexto, los Brillembourg no podrían ayudar a la seguridad alimentaria amenazada por el desabastecimiento. Pero, al mismo tiempo, creían que si se mejoraban las condiciones laborales e, incluso, si se explorase la posibilidad de cogestión laboral con el Estado, la productividad podía ser “mucho mayor”.
- c. En otras palabras, aseguraban que si el Estado les permitía controlar el medio de producción, podrían impulsar la reactivación de la empresa, de la misma población de El Batey y de los niveles de producción. Querían pasar del plano reivindicativo a asumirse como sujetos productivos y políticos de su comunidad.

Con el tiempo, esta investigación detectó que los Brillembourg de la CAV no eran los mismos que habían apoyado el golpe. Sin embargo la desinversión fue un hecho evidente durante esos y los siguientes años. Los propietarios aducían que la regulación de precios hacía imposible cancelar los costos considerando la inflación, los problemas de obtención de divisas y las formas de devaluación. La propuesta de empoderamiento de los trabajadores no compartía el diagnóstico de los Brillembourg. Sin embargo, la propuesta ingresó a los ministerios y fue acompañada por el propio alcalde del municipio Sucre para ese año, municipio al cual pertenece El Batey, pero no recibió ninguna respuesta del Estado.

Si bien los problemas persistían desde hacía más de una década, los trabajadores declaran que fue la actuación de los sectores económicos y del Estado durante el paro petrolero-alimentario lo que motivó la organización de los trabajadores y la convocatoria a huelga. Durante las observaciones fue muy evidente que los trabajadores estaban particularmente temerosos en perder sus empleos.

Luego de un largo silencio administrativo y la reincorporación de los trabajadores a la empresa sin haber logrado ninguna de sus reivindicaciones, comienza una etapa de represalias que coincide con que el alcalde bolivariano de Sucre pierde las elecciones frente a la oposición: destrucción de vehículos, retrasos en los pagos, dirigentes amenazados, etc., hasta los despidos masivos ya en el 2009.

A finales del 2005, varios meses después de las denuncias y de las represalias acudió a la CAV el Instituto de Prevención, Salud y Seguridad Labolares (Inpsasel), un instituto estatal de inspección de la seguridad laboral, el cual relevó en campo la veracidad de los reclamos e impuso a la empresa contratar a todos los trabajadores por medio de una sola empresa, así como mejorar las condiciones laborales demandadas y otras observadas en el sitio.

Durante esta 2a. ola de participación el problema laboral fue tratado por el Estado como un problema de violación de las normativas laborales. En el discurso de los mismos trabajadores se esperaba que la empresa tomara conciencia de su responsabilidad social y productiva con el país. Según se percibe de esta acción y de estos discursos, tanto la seguridad laboral como la alimentaria dependían fundamentalmente de la rearticulación de las fuerzas productivas ya fundadas. Esta idea era también compartida por funcionarios de Inpsasel y el propio alcalde (Franca, 2005).

En aquel momento la imposición de Inpsasel fue entendida como un importante logro de los trabajadores. Sin embargo, se había creado una imaginación más estable acerca de la posibilidad de que fueran los mismos trabajadores, con el apoyo del Estado, quienes gerenciaran la empresa.

Con el paso de nuevas situaciones, este último proyecto tomó forma. Durante la 3a. ola de participación, en el 2009, los propietarios de la CAV declararon la quiebra. La producción cesó completamente y fueron despedidos los más de 600 trabajadores.

A los meses los trabajadores tomaron la empresa para llamar la atención del Estado. Ya entonces estaban organizados en un comité obrero. Según la ley venezolana el cierre de la empresa debe ser autorizado por el Ministerio del Trabajo. Sin embargo el cierre se produjo después de la declaratoria de quiebra y antes de la autorización del cierre. Con este argumento, el Estado “recuperó” la empresa, lo que significó una intervención de la mano del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis) y su consecuente expropiación con la intención de hacerla reflotar.

El proyecto de empoderamiento entonces sí tuvo lugar: fue declarada Empresa de Producción Socialista y se “entregó en cogestión” a los trabajadores el 2 de octubre del 2009. La Central Azucarera Venezuela

cambió de nombre a Complejo Agroindustrial Venezuela, Empresa de Producción Socialista.

Como la producción había cesado completamente, la recuperación de la empresa tuvo por objetivo solventar parte de la situación laboral (fue reenganchado el 30% del personal) y, fundamentalmente, problemas derivados de seguridad alimentaria.

Según declaraciones de los trabajadores, la empresa se reactivó a un 56% de su capacidad operativa y empezó a recuperar la siembra de azúcar en la zona, la cual también había decaído por la desinversión así como la consecuente disminución y luego cese de la producción.

“De 390.000 toneladas producidas en 2005, pasó a 170.000 toneladas en 2009, y 120.000 para 2010. Hubo una reducción de más de 100%”... “hoy existe un déficit de producción de caña de un 50%” (Osal, 2010).

A pesar de que la empresa no contrató a un 70% de la planta laboral original ni tampoco pudieron levantar niveles de producción previos al 2005, la intervención demostró que tiene por objetivo principal abastecer a la creciente demanda nacional, y por tanto redunda en los objetivos principales de seguridad alimentaria:

“Ocupamos esta central con el Indepabis y todos los organismos del gobierno bolivariano y de inmediato reactivamos la producción con 6 mil 539 toneladas por mes que están produciendo los trabajadores y trabajadoras de El Batey” (Jaua, 2010 c).

En este ejemplo es visible que hay una sólida diferencia entre el comportamiento del Estado y los niveles de organización de los trabajadores entre lo que en esta tesis se divide como 2ª y 3ª. ola de participación. En la 2ª ola los trabajadores esperan una reacción “mas responsable” de los patronos, sin embargo proponen que podrían levantar la producción si ellos mismos llevaran la empresa. En la 3ª. ola de participación el contexto se precipita: luego de la quiebra de la empresa se condujo un proceso de empoderamiento entre Estado y trabajadores con objetivos explícitos de seguridad alimentaria.

La observación arroja que las respuestas de los trabajadores de la CAV en la 3ª. ola de participación no hubieran sido posibles sin la conformación de imaginarios políticos y de comportamientos económicos que tuvieron lugar en la 2ª

Sujeto 6: La Casa de la Alimentación de San Benito

Situación: La Sra. Arelis, miembro del Comité de Salud del Barrio Adentro que se fundó en el Barrio San Benito del Sector Sabaneta de Maracaibo, decidió por iniciativa propia abrir una Casa de la Alimentación en su casa. Para este fin puso de sus propios recursos y de su propia capacidad de convocatoria para fortalecer el centro mucho antes de que se consolidara el programa de Fundaproal. Alrededor de su liderazgo, presentó resultados satisfactorios ya en el 2005.

Coyuntura: El impacto en la seguridad alimentaria que ha generado el Paro petrolero-alimentario fue mucho más evidente en los barrios más vulnerables. Para Arelis, en el barrio San Benito ya era evidente que la instalación de un primer módulo de Barrio Adentro no podía resolver problemas que derivaban de la malnutrición que se habría acelerado en el 2003.

Atalaya: Arelis fue visitada varias veces por Canal Z y por ViVe Tv como un ejemplo de las potencialidades de la organización popular en contraste a los problemas de eficiencia que enfrentó el Estado en esos años. Estas visitas se apoyaron de investigación en campo por varias semanas a lo largo de 3 años (Arelis y demás pobladores, 2002-2007).

Descripción:

En el 2003 se activó en el Barrio San Benito de Maracaibo un módulo de Barrio Adentro, el cual generalmente es solicitado al gobierno por parte de miembros organizados de comunidades vecinales. Al momento de la fundación, Arelis se incorporó en el Comité de Salud, el cual tenía por objetivo fortalecer los lazos entre el módulo y los pobladores, así como motivar la aparición de nuevas políticas adaptadas a las necesidades percibidas por sus miembros en nombre del barrio.

Arelis es enfermera del sistema público de salud y declara haber comprendido desde hace mucho tiempo que los problemas que recibía en los hospitales tenía su origen en problemas sociales. Cuando percibió la transformación del Proal de la *Convergencia* en Fundaproal, Arelis precipitó las políticas ejemplarizadas por el Estado en su propia casa. Ella dijo haber sido “convocada por mi presidente”, que participaba “por cuenta propia” y decía “contar con Chávez”.

Para Arelis el paro petrolero-alimentario se presentaba en varios casos puntuales (niños, ancianos, dependientes...), los cuales indicaban una dimensión de la inseguridad alimentaria que no parecía ser identificada en los altos discursos hasta la llegada de Chávez. No era la primera vez que había movilizado recursos de la propia comunidad para asistir a personas con algún déficit alimentario en años anteriores.

Buscó el apoyo de Fundaproal el cual reconoció el sitio y prometió el suministro de alimentos, siempre que se estableciera un protocolo de atención definido por el Barrio Adentro. Fundaproal entonces no otorgaba salarios, implementos, cocinas, refrigeradores o papelería. Solo daba lo que podía disponer de la maquinaria burocrática heredada: alimentos no perecederos.

La capacidad de distribución de alimentos de Fundaproal-Zulia también estaba mermada, en parte por la desinversión de los primeros años del chavismo y en muy buena medida por el hecho de que sus objetivos estaban sobredimensionados para sus capacidades: pasó de ser un organismo que repartía alimentos a bajo precio en mercados improvisados apoyados por otros operativos de seguridad social, a un organismo que debía proveer de las fuentes calóricas demandadas por los módulos de Barrio Adentro que se habían reproducido rápidamente por todo el país.

La cobertura del Zulia para los datos del 2005 fue de un 30, 90% de la población y los módulos estarían instalados “en función de la pobreza, medida por el parámetro del ingreso familiar medio” (Díaz Polanco, 2008:75,77)²⁷

Arelis y las cocineras también señalan que los funcionarios de Fundaproal, heredados de administraciones anteriores y colocados allí por razones políticas, no tenían la vocación de cumplir eficientemente con los nuevos objetivos.

En el 2003 Arelis reúne a varias trabajadoras y madres del barrio en situación de necesidad económica pero con capacidades organizativas y culinarias para movilizar a la población, atenderla en la entrada de la casa, cocinar y servir. De tal modo que cuando, luego de agosto de ese

²⁷ Hay que resaltar que el autor citado publica evidencias de que en la práctica, en el criterio utilizado privó más el tamaño de la población que el tamaño de la población pobre.

año, la Casa de la Alimentación empezó a funcionar, las mortadelas y los enlatados que disponía Fundaproal, podían acompañarse de arroz, plátano (banano), caraotas (frijoles) y papas (patatas) recién cocinados. Esto les creó de un dispositivo apropiado para recibir paulatinamente alimentos perecederos y cocinarlos antes de que se estropearan.

Desde su apertura Fundaproal distribuía irregularmente los alimentos, poniendo en riesgo las dietas diarias prometidas. Arelis y sus cocineras también trataban con otros aliados, a veces civiles y a veces militares, para complementar el transporte de alimentos desde los centros de acopio hasta la Casa de la Alimentación.

A principios del 2004 se incorpora un eje transversal de participación, el Frente Francisco de Miranda el cual se encarga de suplir los problemas logísticos de todas las Casas de la Alimentación registrados, supervisarlos y evitar la fuga de alimentos al sistema comercial, tal como había sucedido en otras Casas de la Alimentación como la de la Av. Padilla de la misma ciudad²⁸. El FFM permitió a la Casa de la Alimentación la obtención de refrigeradores y una distribución más eficiente y regular de alimentos.

En el 2004 Arelis era la líder visible de un grupo importante de mujeres y hombres que trabajaban a veces voluntariamente y otras veces con salarios de Fundaproal. Todos permitían el funcionamiento estable de la Casa.

La Casa de la Alimentación era su casa privada, tal como eran otras Casa de la Alimentación en Venezuela. Había logrado conciliar su familia con el emprendimiento. La sala funcionaba de oficina. El comedor era la entrada de un garage. La cocina comunitaria era un corredor posterior de la casa al que se le había hecho otra salida (se

²⁸ El Frente Francisco de Miranda (FFM) fueron jóvenes de todo el país con vocación política que habían sido enviados a un retiro político en Cuba durante varias semanas. Allí recibieron formación política, discutieron valores revolucionarios y aprendieron de la Constitución. Al llegar se organizaron por “camadas” u “olas” según la fecha de sus retiros y luego se asignaron a distintos organismos para fortalecer el aparato de Estado y las misiones en todo el territorio. Durante el 2004 el FFM fue un modelo de participación inducido que sirvió de cemento fundamental entre el Estado y la sociedad civil. En la 3ª. ola se presentan problemas internos y se convierten en el Ministerio del Poder Popular. En marzo del 2009, durante la 4a. ola, sus dirigentes reciben la instrucción de convertirse en Ministerio del Poder Popular para las Comunas.

había tumbado el muro) para poder ingresar los suministros. La cocina de la casa pertenecía al dominio privado pero se usaba corrientemente para hacer café para el público, con cierto criterio discrecional (ofrecer “café colao” en Venezuela es gesto de cortesía muy aceptado en las relaciones inter-personales y es, de hecho, un signo de domesticación de la persona que lo recibe). En la sala-oficina se guardaban los expedientes de los pacientes y se fijaban las rotaciones del servicio. El pequeño espacio del frente de la casa, entre las plantas, servía como una suerte de sala de espera mientras una ronda de comensales terminaba su comida. Allí se colocaban a ciertas horas los médicos cubanos del Barrio Adentro para medir tensión, pliegue cutáneo y otras pruebas de la evolución del programa de nutrición en los pacientes.

Asistían ancianos, niños con problemas y muchas personas adultas en un promedio de 100 personas diarias, entre desayunos y almuerzos (comidas).

Los reportes estadísticos del módulo del Barrio Adentro hablaban de una recuperación de más un 80% de la población objeto ya para el 2005 desde la fundación de la Casa.

Pero también hubo indicadores visibles en los mundos de vida de los sujetos. El Barrio San Benito tenía un grupo infantil de “futbolito” (fútbol de salón que se juega al aire libre) el cual nunca tenía mayores aspiraciones de ganar los torneos interbarriales, según cuentan los pobladores. Pero en el 2005 el equipo de fútbol llegó al segundo lugar del torneo y, para sorpresa de la comunidad, empujado por su delantero, un niño que sufría de lupus. La característica deficiencia de hierro que conlleva el lupus había complicado su cuadro médico en el 2003, dada la insuficiencia de este mineral en su dieta diaria. El tratamiento dispensado por el módulo y la dieta proporcionada por la Casa de la Alimentación lo convirtió en el goleador de su equipo para el 2005, a pesar de sus malformaciones óseas.

A partir de la 3a. ola de participación el emprendimiento sembrado por Arelis y sus aliados fue impugnado por los Consejos Comunales que se establecieron en el Barrio San Benito desde el 2006. Se le acusaba de no llevar una contabilidad clara de su emprendimiento y que no se ceñía a la creciente organización popular del barrio. Finalmente un reporte del Ministerio de Salud concluyó que la Casa de la Alimentación que funcionaba en la propia casa de Arelis debía pasar a otras manos. Fundaproal cambió la coordinación de la Casa.

Arelis declaró en el 2007 que la raíz de su remoción consistía en conflictos de intereses por los nuevos presupuestos que ahora disponía el sistema S.U.C.R.E. y en los conflictos de liderazgo con el Consejo Comunal.

El trabajo sembrado por Arelis en la 2a ola con el objetivo de derrotar la inseguridad alimentaria fue fundamental para su evolución en la 3a ola, pero el cambio de ola sacrificó el emprendimiento personal que le había dado forma y concreción. Como sucedió con el sujeto 1, “la Casa”, el cambio de ola anunciaba formas cada vez más estructuradas y menos individuales de participación.

6.3.3. La 3a. ola: los consejos comunales, los consejos agrarios y el fin de los Consejos Locales de Planificación Pública (CLPP). Las Empresas de Producción Socialista (EPS) y los Núcleos de Desarrollo Endógeno Socialista (NUDES) (2006- Noviembre 2007)

Tal como se había explicado en capítulos anteriores, los Consejos Locales de Planificación Pública, inspirados en los presupuestos participativos de Porto Alegre, no habían avanzado en Venezuela. En virtud de que el poder representativo, encargado de constituirlos, no asumía la iniciativa, se modificó la Ley de las asignaciones presupuestarias a los gobiernos descentralizados, la llamada Ley del Fondo Intergubernamental para la Descentralización (FIDES) para acelerar su formación.

Los Consejos Locales de Planificación Pública (CLPP) no habían sido creados, éstos tampoco podían crear a los Consejos Comunales. A diferencia de lo sucedido con otras políticas sociales hasta entonces, las comunidades no parecían entender la pertinencia de los CLPP ni de los Consejos Comunales, por lo que no los habían incorporado a la agenda civil (Morales, Rafael, miembros del Comité de Salud del Barrio Rafael Urdaneta y demás pobladores, 2000-2007).

Este es el texto de junio del 2005 en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal que sujeta la creación de los Consejos Comunales al poder representativo

“Art. 113. El alcalde o alcaldesa en su carácter de Presidente o presidenta del Consejo Local de Planificación Pública, promoverá la conformación de los consejos parroquiales y comunales...” (Asamblea Nacional, 2005)

En su alocución de principio de año, en enero del 2006 el presidente Chávez sentenció: “el poder representativo y el participativo son incompatibles”. En la Memoria y Cuenta del 2005, leída por el Presidente ante la Asamblea Nacional en febrero del 2006, éste solicitó al cuerpo legislativo que se realizase una ley para viabilizar la creación de “consejos comunales”, esto es, liberados del procedimiento representativo.

En abril del 2006 se promulgó la Ley de Consejos Comunales. Éstos se crearon a partir de entonces por iniciativa popular y bajo la coordinación de la propia presidencia de la República. Según esta ley se definen así:

“... instancias de participación, articulación e integración entre las diversas organizaciones comunitarias, grupos sociales y los ciudadanos y ciudadanas, que permiten al pueblo organizado ejercer directamente la gestión de las políticas públicas y proyectos orientados a responder a las necesidades y aspiraciones de las comunidades en la construcción de una sociedad de equidad y justicia social.” (Asamblea Nacional, 2006).

Dado que la razón de su vinculación con el poder representativo era compartir la partidas que se asignan a través de la Ley del FIDES, se crearon particularmente para los consejos comunales los “bancos comunales”, los cuales son tesoros que se reciben directamente del Estado según los importes requeridos para los proyectos que definen, diseñan y presupuestan las mismas comunidades.

Este proceso transformó la dinámica de la participación popular y marcó la aparición de lo que esta tesis denomina la 3a. ola de participación. Para Venezuela, los consejos comunales fueron importantes espacios vinculantes de participación civil y con el fin de proveer al sistema político de nuevas formas de legitimidad política y de descentralización administrativa, tal como se habrían de explorar en otros países latinoamericanos (Del Campo, 2009:8).

Los consejos comunales aprovecharon un proceso de maduración de la participación social durante la 2a. ola, tal como se evidencia de las observaciones vaciadas hasta el momento y por el hecho de que los consejos comunales se crearon a una enorme velocidad por todo el territorio nacional, sobre todo, en comparación con los casi inexistentes Consejos Locales de Planificación Pública del 2002:

“La ley de los consejos comunales se aprobó en abril del año 2006. Para el mes de marzo de 2008, estaban contabilizados 26.143 consejos comunales conformados y otros 10.669 en proceso de conformación, lo que totalizarían unos 36.812 consejos comunales” (Machado, 2008:5).

Como, según la norma, los consejos comunales urbanos debían constituirse con 400 familias y una comunidad de referencia, y los rurales con 20 familias, es posible inferir que los 36.812 consejos comunales del 2008 debieron agrupar a más de 1.200.000 familias, en solo dos años.

Con el giro hacia el “Decenio de Oro” (Ministerio para la Planificación y el Desarrollo, 2001), también llamado el PPS (Primer Plan Socialista) indicado también en los “5 Motores” (Chávez, 2007b) la idea de “socialismo” permeó el concepto de Consejos Comunales.

La 3a. ola se radicalizó rápidamente durante la 4a. ola, esto es, a partir de Noviembre-Diciembre del 2007, con el proyecto de Reforma Constitucional (Chávez y Asamblea Nacional, 2007) y con el objetivo de estructurar de manera más directa la participación social en la estructura socio-productiva de la nación. Pero, por el hecho de que se propone la preeminencia del poder popular sobre el representativo, la 3era ola fue también una ola socialista, la primera del bolivarianismo.

Durante esta ola, junto al primer auge de los Consejos Comunales, aparecieron las EPS, NUDESocialistas y otras formas tendientes a transformar el poder popular políticamente entendido, en uno que re-definiese la estructura socio-económica nacional.

A partir de esta ola las agendas civiles fueron relativamente más independientes, muchas acciones de la comunidad organizada en comités agrarios y consejos comunales no esperaban por programas o intervenciones estatales para implementar políticas y, consecuentemente, también fue mayor la capacidad de las comunidades en correr riesgos frente a los poderes tradicionales.

Por el contrario, también fue observable que las EPS aún reflejaban problemas de dependencia económica del Estado. El avance político de esta ola no parecía corresponder aún con el avance económico.

Sujeto 7: El Comité de Tierras Ezequiel Zamora y la Cooperativa “Pedro Doria” (Coopedor).

Situación: A partir de la promulgación de la Ley de Tierras en el 2001 el abogado Pedro Doria constituyó un comité de Tierras llamado Ezequiel Zamora para solicitar tierras ociosas de San José de Perijá-Las Piedras. Doria fue asesinado en el 2003 siendo el primero de 200 dirigentes campesinos sicariados por solicitar tierras ociosas y denunciar la existencia de latifundios hasta, al menos, el 2010 (Wilpert, 2008; Provea, 2011). El Sr. Pedro Doria, padre homónimo del dirigente asesinado gestionó las investigaciones y fue asesinado a su vez en el primer trimestre de 2004. Sin embargo, el comité se convirtió en cooperativa de producción y continuó con el proceso de solicitud hasta la obtención de una carta agraria en el 2005. A partir de entonces las tierras ociosas fueron objeto de crédito, de acciones productivas y se convirtieron en una quesera. La cooperativa empezó el diseño de una Empresa de Producción Socialista de mayor alcance tecnológico. Sin embargo, se presentaron las primeras formas de dependencia entre el nuevo medio productivo y el gasto del Estado.

Coyuntura: A través del Comité de Tierras Ezequiel Zamora y la Coopedor puede retratarse una parte del avance de los modelos de participación social activados por la Constitución, sus posibilidades para transformar el entorno político y luego sus intereses en transformar un entorno productivo que refleja importantes contradicciones en la sociedad venezolana, incluyendo la inseguridad alimentaria. Este retrato indica de algún modo la evolución, incluyendo algunos logros y fracasos de un emprendimiento político y económico en el contexto de las políticas por lograr seguridad alimentaria desde el 2002 hasta el 2007.

Atalaya: Preproducción y producción de programas de Canal Z, la RAI italiana y ViVe TV (Campesinos del Frente Agrario Ezequiel Zamora y demás pobladores de Las Piedras, 2003; Coopedor, campesinos y pobladores de San José de Perijá-Las Piedras, 2004-2007).

Descripción:

Luego de la promulgación de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario del 2001 y en el contexto del golpe de Estado del 2002 el abogado Pedro Doria organizó un Comité de Tierras con campesinos de su zona denominado Ezequiel Zamora y decidió dar un paso que, hasta el momento, no era prácticamente seguido por el movimiento campesino

venezolano: solicitar la propiedad sobre tierras ociosas. Estas tierras se encuentran al Este de Las Piedras en la fértil desembocadura de importantes ríos sobre el Lago de Maracaibo. Se trata de tierras de tipo 1 y 2.

La zona de Perijá y el Sur del Lago de Maracaibo son conocidas por la tradición del sicariato y otras formas de amedrentamiento por tierras. De hecho, ciudades importantes de la zona como la Villa del Rosario fueron arrebatadas a los indígenas luego de cruentas guerras que recomenzaron a fines del siglo XIX (durante la colonización ya había importantes testimonios de estas guerras) y que terminarían, al menos formalmente, el 1ro de enero de 1960 con la penetración criolla en la comunidad indígena barí de Saimadoyi.

La sociedad de la zona de Perijá está organizada por estratos sociales cerrados, una marcada desigualdad socio-económica, presencia de pobreza extrema, refugiados colombianos, 4 etnias, de discriminación racial y clasismo muy marcados en relación al resto del Occidente.

El impacto del paro petrolero alimentario del 2002-2003 fue muy alto fundamentalmente en lo relativo a los sectores socialmente más vulnerables de la población. Durante ese mismo paro fue asesinado el dirigente Pedro Doria antes de llegar a su casa, en una zona relativamente céntrica de la población de Las Piedras. Se trató de un asesinato público, esto es, frente a varias personas que pasaban por el sitio, lo que denotaba un mensaje de amedrentamiento.

A pesar de que el paro petrolero-alimentario impedía la rápida movilización de medios, investigadores, movimientos sociales o medios de comunicación, el caso fue reseñado rápidamente como el primer caso de asesinato como represalia a la Ley de Tierras. La misma Ley ya había provocado, junto a otras, el lock-out patronal del 2001. Adicionalmente, las Piedras favorecía electoralmente a los partidos tradicionales.

Sin embargo, el asesinato no contuvo al Comité Ezequiel Zamora el cual prosiguió solicitando una evaluación de las tierras ante el INTI con el objetivo de hacer productivas unas aproximadamente 60 hectáreas al Este de Las Piedras.

Luego del fin del paro y ya en la 2a ola de participación, el trabajo del Comité rápidamente se convirtió en un ejemplo de otros comités de

tierras. Las misiones empiezan a prosperar en los alrededores de Las Piedras y una pareja decide comenzar a consolidar una radio comunitaria llamada “Parroquiana FM”.

La pareja también era dueña de una pequeña panadería ubicada en una de las plazas centrales de Las Piedras. Otra radio con alguna vocación comunitaria, “Perijanera” empezó a transmitir en la ciudad de Machiques con objetivos electorales a favor del bolivarianismo. La polarización socio-política se extendió en Perijá. La confrontación iniciada contra el Comité de Tierras no se resolvió por la vía de reimpulsar la productividad de las tierras indicadas como ociosas, sino por mayores represalias. En el 2004 el Sr. Pedro Doria, padre del líder asesinado, estaba indagando acerca de los posibles responsables de la muerte de su hijo cuando también fue asesinado. El Comité definió sus objetivos productivos y se transformó en Coopedor o Cooperativa Pedro Doria.

La radio comunitaria, mucho más afecta a los lentos procesos de organización del poder popular fue balaceada y destruida en el 2004. La panadería, de ser una de las dos panaderías más prósperas del pueblo fue abandonada por los clientes amedrentados hasta llevarla a la quiebra. Para finales del 2004 el gobierno aún no había respondido judicialmente por la autoría de los asesinatos, por el ataque a la radio ni por la evaluación y asignación de las tierras ociosas solicitadas.

En el primer trimestre del 2005 se entregaron las tierras, ya evaluadas, a Coopedor quienes representaban a varios integrantes del Comité Ezequiel Zamora y a la última esposa del líder asesinado. También se ha entregado el crédito de manos de Fondafa, luego de una largo proceso de presiones, y se han identificado los autores de los asesinatos.

La cooperativa comenzó a producir quesos para la red Mercal y los pequeños abastos de las poblaciones vecinas a precios solidarios. Ese mismo año declararon la necesidad de convertirse en una Empresa de Producción Social para refinar tecnológicamente la producción y aprovechar la alta calidad de sus tierras. Tenían un diseño de la nueva EPS y desean comenzar una nueva cruzada de financiamientos.

Entre el 2005 y el 2006 problemas de tipo administrativo aquejaron a la cooperativa. Los agremiados se dividen bajo acusaciones de malversación y problemas relativos a deudas laborales. La SUNACOOOP

(Superintendencia Nacional de Cooperativas) prepara una intervención administrativa.

La cruzada política de los Doria y el movimiento campesino que representaron se convirtió en un ejemplo político para otros emprendimientos productivos con el objetivo de liberar las tierras e impulsar la seguridad alimentaria por la vía del trabajo y la organización de la sociedad.

El éxito político de esta cruzada consistió en una victoria de las formas de la participación de la sociedad civil en el ámbito político y luego en el económico.

Sin embargo, este éxito no redundó en el éxito económico. Tanto la Coopedor como su proyecto de EPS fracasaron en menos de dos años ante el problema de manejo adecuado de financiamientos estatales.

Coopedor anunciaba problemas en la transferencia de las victorias políticas de la 2a y 3era ola a las victorias económicas esperadas para la 3era y sobre todo la 4a. ola de participación. El tamaño y características de los nuevos problemas relativos a lo económico presentaban también una complejidad inédita para el movimiento popular.

Sujeto 8: Cooperativa de Producción Agrícola (COPROA) y la Cooperativa “de Los Tres Ríos”.

Situación: Campesinos de diferentes ámbitos campesinos de Mene Grande, Costa Oriental del Lago, constituyeron un Comité de Tierras en el 2001 para solicitar la propiedad sobre tierras ociosas correspondientes a la mitad del fundo La Morena Siboney. Uno de sus representantes fue atacado por sicarios en el 2004 pero siendo aquel profesor de tiro, logró repeler el ataque y dar muerte a dos atacantes, luego identificados como miembros la policía del Municipio vecino controlado por la oposición. La dueña de Morena Siboney recurrió la carta agraria dada por el INTI aduciendo que las tierras no eran ociosas y 10 años después los tribunales desestimaron el recurso de la antigua dueña.

Coyuntura: La solicitud de asignación de tierras ociosas fue hecha durante el año de promulgación de la Ley de Tierras en el 2001. El

INTI reconoció la ociosidad de la tierra y entregó una Carta Agraria a favor del Comité de Tierras de COPROA en Diciembre del 2003, es decir cuando ya se había superado la crisis política de ese año y las primeras misiones estaban en pleno funcionamiento. Sin embargo, la ex-propietaria recurrió en el 2008, el caso pasó al menos a un nuevo tribunal el 2009 y recibió sentencia en el 2011. Durante todo ese período la cooperativa no pudo dar un salto en sus funciones productivas, producto de la inestabilidad del título recibido. Pero las condiciones de los nuevos imaginarios políticos y de presión social sobre la burocracia habían cambiado favorablemente para COPROA de la 3a. a la 5a. ola, quienes finalmente superaron la demanda interpuesta contra el INTI en virtud de las prerrogativas socialistas que apuntalaban las nuevas decisiones judiciales.

Atalaya: Preproducción y producción de tres programas televisivos sobre el problema de las tierras en Mene Grande, Municipio Baralt (Matiuzze, miembros del Comité de Tierras y demás pobladores de Mene Grande, 2003-2005; Juzgado Superior Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia con Competencia en el Estado Falcón, 2011)

Descripción:

Durante el 2001 varios trabajadores del campo y de la zona rural de Mene Grande, luego de haber discutido los pormenores de la Ley de Tierras autónomamente, identificaron como tierras ociosas unas 214 has., la mitad de la extensión de un fundo denominado Morena Siboney que funcionaba para la cooperativa “La Leña 549”. Ese mismo año es solicitada ante el INTI.

En esta oportunidad, a diferencia del caso de Coopedor, el INTI solo tardó dos años para el reconocimiento y la asignación de una carta agraria, en diciembre del 2003. En términos de las olas de participación, ha debido superarse la primera ola de participación por una más estable alrededor del proyecto endogenista representado por el Estado y las misiones sociales, para poder hacer efectiva y más legítima la entrega de estas cartas.

Sin embargo, los problemas de legitimidad que se derivaban de la polarización afectaron no solo el procedimiento administrativo sino todo el funcionamiento político, jurídico y económico del subsistema.

Gilberto Matiuzze, quien trabajó durante desde el 2004 hasta el 2006 con su cooperativa “Los Tres Ríos” en las tierras permisadas por el INTI, es objeto de un atentado en su propia casa en abril del 2006. El mismo Matiuzze refiere que esos primeros años el crecimiento de las siembras era un hecho evidente y celebrado por los consejos comunales agrarios que se establecían en la zona. Su propia cooperativa ya había sembrado “26 mil matas de plátano, 40 hectáreas de maíz y 40 hectáreas de yuca”.

En abril de ese año fue atacado por tres sicarios, pero siendo Matiuzze profesor de tiro a título personal, logró disparar contra dos de sus atacantes. En el hospital los atacantes fueron reconocidos como policías de Lagunillas, un municipio vecino gobernado por un alcalde del puntofijismo. Luego, ese mismo año toda la siembra de plátano, maíz y yuca fue destruida por intrusos desconocidos.

Luego del ataque, Matiuzze recibió varias amenazas de muerte que se extendieron hasta el 2007. Sus hijos también fueron amenazados y debieron salir del municipio por miedo a represalias.

La comunidad de Mene Grande y sobre todo, sus consejos comunales prestaron ayuda a la familia de Matiuzze. Este período es fundamental pues mantuvo el espíritu vivo del emprendimiento, no solo entre los cooperativistas sino en toda la población de apoyo. Este período de auge de las organizaciones comunales, correspondiente a la 3a y 4a. ola, fue fundamental pues, tal como se recoge entre los pobladores, animaron al emprendimiento a no decaer pues su fracaso hubiera impactado las posibilidades simbólicas de éxito en otros emprendimientos similares y posteriores. Sin embargo, este espíritu de apoyo también fue producto de que la comunidad se percibía a sí misma clamar por justicia y las autoridades judiciales, policiales e institucionales de los gobiernos locales y nacionales hacían caso omiso. El bolivarianismo seguía pareciendo un asunto entre el Presidente y las comunidades.

La productividad de COPROA decayó y sobre todo, los planes de ampliación tecnológica del proceso productivo desaparecieron. No hay declaraciones formales de las razones de esto por parte de los nuevos productores. Ya en el 2007 los productores de COPROA lucían “descabezados” políticamente por la producción de los programas de TV.

En el 2008 la ex-propietaria de Morena Siboney comenzó una cadena de recursos contra el INTI ante los juzgados regionales. Según información indirecta, la COPROA habría suspendido todo nuevo plan de financiamiento por cuanto la validez de su carta agraria estaba siendo impugnada. El juicio se extendió hasta el 2011, año de la 5a. ola de participación.

En este año las posiciones políticas del Estado a favor del socialismo y de la prevalencia de la productividad popular por razones de seguridad y soberanía alimentarias habían permeado muchas instituciones fundamentales como el sistema judicial. Indicación de ello es la misma sentencia del tribunal, impensable en el 2006, durante la 3a ola.

La decisión judicial parecía colocar como condición, al principio del texto, la indagación acerca del carácter ocioso de las tierras expropiadas en el 2001-2002. Sin embargo, al final del texto, la decisión se tomó sin esta indagación “a favor” del INTI y de COPROA, en base al “PRINCIPIO SOCIALISTA SEGÚN EL CUAL LA TIERRA ES PARA QUIEN LA TRABAJA” (las mayúsculas y el subrayado son de la cita), el artículo 13 de la Ley de Tierras²⁹ y el hecho de que el ataque a Matiuzze y a su familia les ha convertido en desplazados, con el perjuicio legal que ello acarrearía (Juzgado Superior Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia con Competencia en el Estado Falcón, 2011)

En otras palabras, el juzgado interpretó el recurso interpuesto por la ex-propietaria en contra de la carta agraria otorgada como parte de un problema más grande que atañía a la seguridad de los campesinos como representación del pueblo, así como a temas de seguridad y soberanía alimentaria. Apesar de que no se había probado aún la responsabilidad de la ex-propietaria en los ataques, el juzgado puso en relieve que la víctima debía ser resarcida de algún modo. Desestimó el recurso de la ex-propietaria contra el INTI y ordenó a éste que brindase a Matiuzze y a su familia un sitio donde vivir y producir, no solo fuera del municipio, sino fuera del Estado Zulia. Todo en virtud de la protección al campesinado como principio socialista y principio

²⁹ “Artículo 13: Son sujetos beneficiarios del régimen establecido en esta Ley, todos los venezolanos y venezolanas que hayan optado por el trabajo rural, especialmente para la producción agrícola y el desarrollo agrario, como oficio u ocupación principal”

fundamental del sistema legal para la protección de la seguridad y la soberanía alimentarias. Al respecto el juzgado dice textualmente:

“...exaltando así la importancia que reviste la mencionada figura objeto del Recurso [la carta agraria], donde la distribución de las tierras se hace con la finalidad de ejercer una verdadera función social de las tierras, ya que los administrados beneficiarios de la misma, se constriñen a trabajar la tierra en Pro de la Soberanía Agroalimentaria, la justa distribución de las Tierras, la seguridad agroalimentaria y por supuesto para el logro del Desarrollo Rural sustentable...” (Juzgado Superior Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia con Competencia en el Estado Falcón, 2011).

El caso de COPROA, la cooperativa de los Tres Ríos y Gilberto Matiuzze reflejó de algún modo la evolución de las olas de participación desde la 1a hasta la 5a. La tímida aparición de estas cooperativas en la escena pública en el 2001, su reconocimiento por la Misión Zamora en el 2003, su consolidación en las bases de la sociedad a través de los consejos comunales y agrarios en el 2006, su rearticulación a través de las cruzadas socialistas desde la Presidencia (momentos sin los cuales hubiera seguramente desaparecido totalmente el emprendimiento) y, finalmente, su posicionamiento casi incondicional en las instituciones de Estado, incluyendo las judiciales, en el 2011.

El éxito político de la participación dirigida a la seguridad alimentaria a través de los modelos endogenista y luego socialista, pertinente o no, se muestra de algún modo en este caso.

El éxito económico de la participación como instrumento para actuar sobre el mercado, aun no es visible aquí.

Sujeto 9: EPS Rafael Urdaneta y la leche “Familia”.

Situación: En un punto intermedio entre la Villa del Rosario y la Cañada de Urdaneta los consejos comunales agrarios y la CVA han impulsado un proyecto colectivo para construir una planta procesadora de leche. El INCES (Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista) y una empresa iraní llamada *South Machina* les

brinda formación a través de la Misión Vuelvan Caras. Se instaló en el lugar una Empresa de Producción Socialista para fabricar leche pasteurizada, un tipo de queso blanco de bajo precio (llamado “llanero” o “popular”), crema de leche y yogurt. Los trabajadores fueron nominados por los mismos Consejos Comunales y por la Misión Vuelvan Caras en articulación con el INCES, de modo que todo su personal provino de la comunidad, sectores indígenas incluyendo pequeños productores lácteos de la zona. La planta articuló una estrategia inédita en esa zona para la colocación de productos primarios lácteos en manufacturas del Estado y redes de comercialización alternativas a las tradicionales, todas pertenecientes al SSSA.

Coyuntura: En el 2006 el presidente Chávez ha declarado por TV la necesidad de acelerar los acuerdos productivos con Irán dentro de los cuales destacaron la fábrica de tractores y varias fábricas de productos lácteos. En el 2007 se firmó con la República Islámica un acuerdo de intención. La zona láctea de La Cañada correspondió a la misma estructura social que se describió en Perijá (ver sujeto 7), esto es, marcada por una profunda desigualdad de clases asociada con el control oligopólico de medios de producción, fundamentalmente pecuarios. La 3a ola de participación permitió un nivel de articulación entre las comunidades y el proyecto productivo que no era posible antes. La necesidad de responder al control de la industria láctea por parte de los oligopolios de la zona motiva en buena medida el proceso de organización.

Atalaya: Preproducción y producción de programa de TV en ViVe, además de compras independientes de productos para la organización de comunidades en Maracaibo (Trabajadores de la EPS Rafael Urdaneta, 2007). Reportaje de investigación del Ministerio del poder popular para la Comunicación y la Información (Chacón, 2007).

Descripción:

Varias comunidades del sector Andrés Bello, en la zona rural entre La Cañada de Urdaneta y La Villa del Rosario para el 2006 estaban organizadas en consejos comunales. Éstos promovieron varios proyectos para ese año, entre ellos, programas de viviendas para sustituir las casa improvisadas y rurales que son características en las zonas más deprimidas de ese sector y la propuesta de crear enfriadoras de leche para que los productores puedan “arrimar” su

producto.

Es importante indicar que la mayor parte de los proyectos impulsados por los consejos comunales en Venezuela han consistido en mejoras en infraestructura o servicios. Los proyectos productivos fueron relativamente escasos pues, entre otras razones, requerían de una atención administrativa mucho más compleja. Sin embargo, en los consejos comunales rurales, por cuanto las residencias rurales correspondían la más de las veces al entorno productivo, se observaron proyectos de mejora que incluían o compartían aspectos productivos.

Chucho Boscán, un productor de la zona que impulsó junto a su comunidad el proyecto de la empresa láctea, defendía su necesidad mediante un diagnóstico económico y a la vez político. Para Boscán, la zona contaba con importantes procesadoras privadas de leche para el consumo nacional que tendrían el 50% de los animales, por tanto cubrían el 50% de la producción; sin embargo estas procesadoras solo reunían el 10% de los trabajadores de la zona. El 90% restante de los trabajadores eran pequeños y medianos productores que arrimaban su leche a las grandes procesadoras para así completar el 50% restante de la producción. Cuando había fluctuación de precios porque, por ejemplo, llegaba el verano o cerraba el período escolar, la producción de las grandes procesadoras de leche disminuía y sobraba la leche primaria. Esta situación conllevó a que las grandes procesadoras podían definir los precios a la baja, precios que los demás productores debían aceptar para no perder su producción.

Un escenario así parecería responder a una oferta nacional que supera la demanda, pero paradójicamente esto no era así. En el 2006, año del diagnóstico, y en el 2007, año en que empezó el funcionamiento de la EPS Rafael Urdaneta, la disponibilidad de leche nacional fue de un 55,5 y un 50% respectivamente, en contraposición de la leche y los quesos importados que sumaban un 44,5 y un 45% del consumo, según datos de la Cámara Venezolana de Industrias Lácteas a partir de datos propios, del INE y el Minppal (Cavilac , 2008).

¿Por qué bajó el precio de la leche que vendían los productores pequeños y medianos si la demanda nacional, impulsada en parte por el gasto público, duplicaba la oferta? ¿Por qué los medianos y pequeños productores, en medio de una demanda tan elevada, temían perder la leche que producían?

El diagnóstico del Estado fue que las empresas lácteas privadas, como otras empresas alimentarias privadas, estaban interesadas en el negocio de la importación, de tal modo que compartieron ganancias por los dos negocios (Rodríguez, 2010). De hecho, el mismo reporte de Cavilac, aunque no ofrece cifras, reconoce una importante participación de la industria privada en la importación de leche en ese período. Por estas declaraciones, fue posible concluir que en el 2008, año en que el consumo de quesos y leche por sí solo aumentó en un 54,24%, esta oferta fue suplida por un aumento muy similar de cerca de 54,04% de las importaciones; del total de este aumento de las importaciones, Cavilac reconoció una participación de sus asociados en un 37,48%.

Es decir, los niveles de importación de leche aumentaron significativamente en el sector público (el cual hasta el 2007 no tenía una importante participación en la industria) como por parte del sector privado, el cual, según declaraciones de aquellos pequeños y medianos productores de La Cañada, sí disponían de más leche primaria para aumentar su producción.

El diagnóstico original, a escala de los productores asociados en los consejos comunales agrarios, fue colocar enfriadores de leche para que los productores pudiesen “arrimar” sus productos por más tiempo a los centros de procesamiento. Pero el diagnóstico del Estado, a escala de una política que permitiese suplir autónomamente los alimentos del país, fue crear nuevas procesadoras de leche que atendiesen el superávit de leche primaria y permitiesen disminuir la importación.

Para los trabajadores, los enfriadores y una nueva empresa de procesamiento, les garantizaría subir la producción, mejorar sus ganancias y participar de manera más activa en la oferta nacional, esto es, no conminada por el oligopolio. Para el Estado, se cubriría más satisfactoriamente la demanda y se democratizarían las ganancias en un número mayor de productores.

Por esto motivo, en el 2007 se instaló la EPS Rafael Urdaneta para producción de derivados lácteos. Fue una empresa cogestionaria. El Estado, a través del INCES, dominó la directiva aunque sus directivos declaraban que estaban a la espera de que en algún momento los trabajadores se empoderasen totalmente en la empresa.

Como la EPS fue un producto también de los consejos comunales de la zona, contó con un espacio para asambleas comunales (no productivas), un pequeño anfiteatro para eventos culturales, salas de asambleas obreras y discusión de estrategias, y una posición estratégica al lado de la carretera, de modo que podía comunicar más fácilmente a las comunidades que llegaban allí en transporte público.

En el 2007 produjeron un solo tipo de quesos, el blanco “popular” o “llanero”, característicamente de bajo costo, y lo vendieron exclusivamente en sus bodegas (de muy bajo movimiento) y en los Megamercales en todo el país. Produjeron una leche y yogurt envasados en bolsitas de plástico. La leche envasada tuvo por destino los comedores escolares fundamentalmente de las Escuelas Bolivarianas.

Según el Ministerio del poder popular para la Comunicación y la Información (Chacón, 2007) esta EPS era hermana de cuatro otras empresas, también de tecnología iraní, que se encuentran distribuidas en otras partes del territorio nacional. Se preveía desde el 2006 que las 5 empresas debían aumentar la oferta de productos lácteos nacionales en un 10%.

Los trabajadores declararon en el 2007 que confiaban en la dirección del Estado y que aun no se sentían preparados para asumir la empresa por sí solos. De hecho, la posibilidad de la autogestión no era un tema prioritario para ellos.

También declararon que contra la apertura de la empresa hubo un boicot de las grandes procesadoras de leche en la zona, pues éstas amenazaban a los pequeños productores en no comprarles la leche si vendían a la EPS. A algunos extrabajadores de las grandes procesadoras que habían sido contratados por la EPS se les amenazó con no volver nunca a las empresas privadas de seguir como trabajadores “socialistas”. En relación a todas estas amenazas la directiva y algunos trabajadores entrevistados declararon que no temían la acción de las otras empresas pues ya contaban con un nivel creciente y satisfactorio de provisión de leche primaria y estaban mejorando, junto a su médico veterinario Henry Duque, la calidad de los pastos, el ordeño y la salud de los animales en éstos y nuevos productores. Creían que en poco tiempo las provisiones seguirían subiendo y la confianza de otros productores sería mayor.

Sin embargo, la situación empeoró para la producción lechera nacional. Ni la producción socialista ni la no socialista subió un 10% sino 4,7 del 98 al 2010 (ver gráfico 48). Con respecto al 2008 toda la producción nacional, privada y pública, se estancó. En su lugar se produjo el ya mencionado 54,24% de aumento de la disponibilidad de productos lácteos casi absolutamente por la vía de las importaciones. Cavilac incluso expuso sus preocupaciones por el desplazamiento del queso artesanal, igual al manufacturado por la EPS Rafael Urdaneta, por el queso semi-industrial importado (Cavilac, 2008). La importación, un negocio en el que también participó Cavilac, y que a partir de ese año es conducido por la importación pública en cerca de un 63%, parece haber inundado el mercado con el objetivo de evitar el desabastecimiento aunque, al mismo tiempo, ha condicionado negativamente la posibilidad de la industria láctea en aumentar su producción.

La velocidad con la que creció la demanda reveló problemas de absorción en el aparato industrial. Pero estas explicaciones, relativas al éxito económico de esta empresa, son insuficientes a este nivel y podrían asistirse por otras evidencias de tipo macroeconómico (ver caps. 6.4 y 6.5) y otras investigaciones (Baptista, 1997; Obuchi, Abadi y Lira, 2011).

Por lo pronto, la EPS Rafael Urdaneta demostró importantes éxitos políticos relativos a la 3a ola de participación por cuanto el Estado logró dirigir con la comunidad la construcción de una empresa de procesamiento de leche y que durante el año de su creación resultó ser efectiva. Sus productos fueron totalmente vendidos en los aparatos comercializadores del SSSA y generaron, por esa vía, seguridad alimentaria. En la nueva articulación de las políticas estatales los consejos comunales habían participado activamente en la generación de desarrollo social y económico en territorios productivos no urbanos, permitiendo a su vez el encadenamiento de estrategias productivas de mayor nivel. Se trató de estrategias recomendadas por la FAO para el logro de la seguridad alimentaria a partir de la participación (FAO, 1992; Schejtman, 1999).

6.3.4. La 4a. ola: La nueva geometría del poder y la comuna (Diciembre 2007-2009).

Esta ola correspondió a la intención explícita en el proyecto de reforma constitucional de profundizar el socialismo bolivariano (Chávez y la

Asamblea Nacional, 2007). Tal profundización consistió fundamentalmente en:

- a) Definir con más claridad la estrategia de desarrollo entre poder popular y Estado. Tal claridad consistió en otorgar formalmente a la participación, en forma del poder popular, recursos políticos del Estado.
- b) Asumir de manera más radical la construcción del nuevo modelo de socialista de producción por parte del Estado. Tal radicalización buscaba trascender la escala compensatoria de las políticas anteriores por temas como el control popular sobre los medios de producción, la nueva territorialización del poder popular y la superación el carácter periférico de la economía.

Sin embargo, en la práctica, esta ola no se resolvió en la consolidación definitiva del nuevo sistema. Al igual que en la 5a. ola se hizo posible para esta tesis identificar importantes retrocesos del proyecto anunciado y comenzado en esta ola.

En la 4a. ola se definió el socialismo a través de la ya descrita Nueva Geometría del Poder. Se instó a los consejos comunales a que se organizaran en comunas y que éstas definiesen la creación de nuevos territorios administrativos en base a la reevaluación de las unidades económicas, histórica y culturales del país. Los nuevos territorios debían tener la capacidad de reordenar la estructura residencial, productiva administrativa y por tanto, política del país.

La reforma constitucional impulsada a finales del 2007 tenía entonces por objetivo suplantarlo el orden constituido por el orden constituyente, mediante la generación y aplicación directa del poder popular. Para ello los consejos comunales, que habían demostrado importantes éxitos en la escala de la organización de la sociedad civil, debía transformarse en comunas, redes de consejos comunales con capacidad de emanar poder ahora territorialmente.

Esta ola enfrentó, al menos, tres impedimentos importantes:

- a. El gobierno bolivariano perdió el referéndum de la reforma constitucional en noviembre del 2007, impidiendo avanzar el proyecto socialista por la vía de la emulación de la constituyente de 1999. Hubo razones tácticas y programáticas para este fracaso.
- b. El gobierno apostó a la precipitación de los cambios porque observaba un apoyo social importante, pero ese apoyo no podía ser

fácilmente trasvasado a la transformación socialista. El desfase entre el objetivo socialista y el nivel de maduración de la organización popular ha sido analizado por varios académicos (Viciano Pastor y Martínez Dalmau, 2007). El consejo comunal apenas comenzaba a dar frutos, cuando los daba, en el momento en el que se le sugirió a la sociedad sustituir las bases de la democracia representativa por el desarrollo proyectado de estas herramientas. El “salto adelante” como se le llamaba, suponía además, que las organizaciones sociales que no se sintiesen representadas por los consejos comunales, por costumbre, por solidaridad organizacional con la oposición o porque no se sentían identificadas con que el bolivarianismo marcara toda la estructura democrática (o no democrática), por dar algunos ejemplos de la diversidad de opiniones, se ponían en la posición de ceder sus representaciones políticas de democracia y libertad.

El hecho observable fue que, a diferencia de las otras olas, la Nueva Geometría del Poder no fue asumida plenamente en la agenda civil. De hecho continuó la carencia de formas transversales del Poder Popular.

c. En el 2009 se produjo una caída de los precios petroleros que desnudó el funcionamiento real de la economía venezolana en pleno proceso de transformación. El subsistema era aún muy vulnerable al gasto público, tanto a sus fluctuaciones como a su impacto en las capacidades de absorción de la economía, como para poner todas las piezas en la misma apuesta. El viejo fantasma de lo que en Venezuela se arroja con el término “rentismo”, si bien nadie pensaba que había desaparecido, volvió a aflorar desde entonces lenta y progresivamente en el discurso político de ambos bandos polarizados hasta la 5a. ola.

En términos de la política alimentaria, el Estado empezó a entender que sin un gasto vigoroso, el SSSA no podía aún mantenerse solo, aumentando el riesgo de la dimensión “autonomía” de la seguridad alimentaria.

Sujeto 10: El Mercal de los Modines.

Situación: El Mercal del Barrio los Modines I ha sido acusado por varios años de favorecer negocios corruptos, entre los que destaca la evasión de los productos del SSSA para su comercialización ilegal en Colombia, con el consecuente desabastecimiento de sus anaqueles. Denuncias similares son hechas por otros consejos comunales del estado fronterizo del Zulia. El problema parece revelar la connivencia entre las Fuerzas Armadas, los gerentes que actúan como

franquiciantes de los mercales fronterizos, el sistema de transporte y una estructura burocrática impermeable a los reclamos de las comunidades que asciende, al menos, hasta el Ministerio del Poder Popular para la Alimentación. El consejo comunal de los Modines tomó la decisión de intervenir por cuenta propia y con la asistencia de las *milicias bolivarianas* el Mercal de su sector en el 2007. La comunidad no destituyó al gerente, solo “se le puso al lado”. A las pocas semanas, el abastecimiento volvió al mercado. Sin embargo, los casos de corrupción en este y otros mercales no fueron investigados ni sancionados.

Coyuntura: Las quejas a este respecto databan al menos desde el 2005 (también habían quejas similares durante el Plan Bolívar 2000), según constaba a los medios de comunicación que hacen atalaya de estas observaciones. Las quejas correspondían a Casas de Alimentación (asistidas por Fundaproal a través de la misma Mercal-Protección) como a diferentes Mercales de varios barrios del estado fronterizo. Los productos, con sus respectivos envases promocionando la Constitución y el socialismo, eran fáciles de encontrar en las poblaciones colombianas fronterizas y de la costa atlántica. Un clásico dirigente de izquierdas de la zona, Pepe Bermúdez, quien había sido director regional de Mercal, renunció por este mismo problema en el 2006 declarando en una entrevista: “temo por mi vida”.

Atalaya: Preproducción y producción de programa de ViVe TV (Consejo comunal Los Modines I, 2007). Entrevista a Pepe Bermúdez (Bermúdez, 2006).

Descripción:

Los mercales tipo I se instalaron en Venezuela fundamentalmente entre los años 2003 y 2004. Uno de ellos se construyó en una comunidad llamada Los Modines para atender a los barrios del sector. Durante la 3a ola se fundaron los consejos comunales de la zona y el consejo comunal que coincidió con el punto de venta empezó a hacer denuncias sobre su funcionamiento en esas fechas.

Fundamentalmente los vecinos acusaban a la administración de este Mercal de mantener los mercados semi-desabastecidos pues vendían los productos que recibían en otras redes de comercialización. El desabastecimiento regular de leche, aceite, harina de maíz precocida y pollo, entre otros, en todo el mercado nacional, permitía la venta paralela de estos insumos a altos precios cuando los disponía el SSSA a sus centros de comercialización.

Esto traía como consecuencia que a los desabastecimientos en los anaqueles privados, asociables a la regulación de precios, la inflación, la devaluación solapada, los problemas de obtención de divisas, el uso del comercio como arma política y la venta paralela de productos, se le sumaba el desabastecimiento en los anaqueles públicos, producto de una venta paralela que también se aprovechaba de las debilidades del suministro.

En el caso del Zulia, estado fronterizo, el problema se agravaba porque la producción del SSSA era colocada ilegalmente en los mercados colombianos con la complicidad de los agentes fronterizos de las Fuerzas Armadas. Era común encontrar desde el 2003 y sobre todo desde el 2005, productos del SSSA con los mismos envases promocionando la Constitución y el socialismo, o mostrando las marcas de las EPS en la costa atlántica colombiana y sobre todo las poblaciones fronterizas de El Cesar, La Goajira, Bucaramanga, Bolívar y El Magdalena.

En el 2005, Pepe Bermúdez, un líder tradicional de la izquierda venezolana en El Zulia tuvo a su cargo la dirección regional de Mercal. Su expediente de honestidad era importante, al menos en las percepciones de sus allegados. A la mitad del año Bermúdez hablaba de haber visto “maletines llenos de dinero”, negocios que involucraban cuerpos de seguridad del Estado y altos líderes políticos del entonces partido bolivariano, el MVR. Declaró “temo por mi vida” y por ello renunció (Bermúdez, 2005).

Desde el 2003 los Mercales funcionaron como franquicias. Esto es, algún organismo del Estado asignaba las gerencias del Mercal a una persona para su administración de manera autónoma. Eran asignados como funcionarios pero actuaban como empresarios sin cartera propia. Esto creó pirámides de favores y poder, cuyos vértices no siempre eran fácilmente identificables por los ciudadanos. Tales pirámides contaban con la participación visible de las Fuerzas Armadas Nacionales, sin las cuales no era posible la distribución, la importación u otras formas de comercio, como el evidente contrabando más allá de la frontera con Colombia.

En el 2007 el consejo comunal de Los Modines I, diagnosticando que el Estado no hacía caso a sus denuncias repetidas en los medios de comunicación contactados y en reportes presentados a diferentes instancias competentes, decide “intervenir” por su propia cuenta el Mercal de su parroquia. Para hacerlo logró consolidar una importante

presión social de los pobladores, conducidos en tomas y protestas, y convocaron el apoyo de las *milicias bolivarianas*.

Este último es un contingente militar de reserva adscrito al Ministerio del poder popular para la Defensa constituido por voluntarios que se preparan para defender la revolución de cualquier agresión. Dicho de otro modo, las milicias bolivarianas son cuerpos armados de la sociedad civil que introducen formas de participación en un área controvertida de la acción del Estado: la seguridad y la defensa. En sus “funciones” se establece que están destinadas a “la defensa integral de la nación” pero que, en lo concreto, deben :

“... 6. Orientar, coordinar y apoyar en las áreas de su competencia a los consejos comunales a fin de coadyuvar en el cumplimiento de las políticas públicas;

7. Contribuir y asesorar en la conformación y consolidación de los comités de defensa Integral de los Consejos comunales, a fin de fortalecer la unión cívico-militar...”(Presidencia de la República, 2009).

En virtud de estas atribuciones, la milicias bolivarianas, en ausencia de la participación directa de la Guardia Nacional de las Fuerzas Armadas o de la policía (ambas posiblemente involucradas de algún modo en el contrabando y venta ilícita de alimentos) prestaron asistencia al consejo comunal de los Modines I para intervenir por la fuerza el Mercal.

El objetivo de la comunidad no era destituir al gerente de ese Mercal, sino colocar una presencia contralora permanente de sus funciones.

Las acusaciones de opacidad y corrupción por parte de los consejos comunales se habían extendido, al menos, hasta el Mercal de La Rinconada, al de San Isidro, de El Marite y del Ipasme, todos en la circunferencia urbana de los municipios Maracaibo y Jesús Enrique Lossada.

Sin embargo, el único punto donde se ejecutó esta acción interventora comunitaria fue en el Mercal de los Modines.

La intervención fue eventualmente un éxito por cuanto los anaqueles se llenaron proporcionalmente mejor, aunque seguían sin tener una oferta plena. La intervención habría demostrado a la comunidad organizada que la solución de la intervención sí era viable y que los

problemas de desabastecimiento sí estaban relacionados de algún modo con las gerencias regionales de los Mercados, al menos los tipo I.

Luego las presiones de las autoridades del Ministerio de la Alimentación recién fundado se hicieron sentir sobre la comunidad de los Modines y el gerente de ese Mercado acusó a los dirigentes sociales de corrupción y de tener intereses “ocultos”, complicando todo el proceso al final de ese año.

Las denuncias continuaron pero no avanzaron hasta la 5a. ola de participación, en el 2011, cuando todos los Mercados indicados arriba fueron cerrados e intervenidos desde órdenes superiores cuya línea de mando es desconocida para los informantes de esta tesis. Fueron finalmente abiertos a principios del 2012 mostrando un estado importante de abandono de sus infra-estructuras e impactando o, al menos, incomodando, el consumo de alimentos subsidiados en las zonas de cobertura durante todo ese tiempo.

Es un hecho que desde el 2008 en todo el país las estrategias de cobertura se sostienen tanto en los Mercados localizados, como el tipo I y II, pero también y fundamentalmente en los Mercados o Mercados a cielo abierto organizados por el ejército nacional y de vocación transitoria (Minppal, 2009).

La participación a favor de la seguridad alimentaria siguió activa en la 4a. ola, pero enfrentó problemas de proporciones diferentes a los enfrentados, por ejemplo, en la 2a ola.

En esta ola de participación, el caso de los Modines refleja varios problemas simultáneamente. Por un lado, se trata de los mismos años en que el Presidente llama a la creación de comunas, una suerte de organización macro-transversal de consejos comunales con el objetivo de hacerse de la administración del poder político en nuevos territorios. Sin embargo, los consejos comunales ni siquiera atinan a articular salidas transversales para problemas puntuales como éste. Todos los mercados mencionados forman parte de una misma área geográfica y sus posibilidades juntar fuerzas, si bien no eran aún jurídicas, contaban con un posible respaldo de la presidencia. En el caso de los Mercados, las políticas inducidas no se convirtieron en agenda civil. Las razones esgrimidas (presencia del poder representativo de la oposición, el poder de las fuerzas policiales, los alcances de la trama de corrupción...) distan mucho del arrojo de las olas de participación 2a y 3a.

Por otro lado, el problema se solapa con las evidencias de la estructura económica del subsistema, agravada por políticas de generación de seguridad alimentaria que no están arrojando los mismos resultados que en años pasados. La inflación, que ha aumentado entre un 20 y un 35% anual desde el 2003, hace que los productos de Mercal sean más cotizados por cuanto suponen un ahorro muy grande a la población. Por ello, junto a la persistencia del sistema de políticas, los alimentos se han convertido en la pieza de otro juego más, uno en el que es posible obtener divisas a través de su contrabando a Colombia o es posible maximizar ganancias ilícitas sobre productos subsidiados en un mercado desabastecido. Esto es, un negocio paralelo en el que participa una parte del sector público y otra parte del sector privado, cimentado por el estamento militar.

En términos de la estructura del negocio, a pesar de que las cifras siguen siendo opacas, es posible suponer que la fuga de productos del SSSA y su venta ilegal en otras redes comerciales terminó convirtiéndose en mayor gasto público, por cuanto

- a) hubo que saldar la deuda de las nóminas del personal de los mercales y los transportistas por causa de un flujo de caja que ya no entraba, porque se vendieron menos productos,
- b) hubo que pagar a las EPS y las empresas del Estado la ganancia que no hubo por causa de la fuga de alimentos,
- c) dada la desconfianza con el sistema instalado, hubo que acelerar la disposición de más y más grandes mercados a cielo abierto para pasar por encima de los Mercales tipo I y II,
- d) tratándose de ventas ilegales, hubo que asumir las pérdidas que implicaban que el Estado no percibió impuestos de exportación o comercio nacional, etc.

Todo esto formaría parte de un bolsa de gastos opacos que deterioraron el tesoro público y que colocarían más circulante distribuido desigualmente en la sociedad.

Sujeto 11: Industrias Diana C.A.

Situación: A punto de declararse en quiebra por problemas financieros, la empresa privada Industrias Diana C.A. fue comprada por el Estado con el objetivo de colocar productos aceiteros (mayonesa, margarina, aceite de freír, jabones...) para compensar el

acaparamiento, la especulación y el desabastecimiento en el 2008. El proceso de venta de la empresa no solo no fue conflictivo sino que permitió a los mismos trabajadores, con sus propias jerarquías y tradiciones empresariales mantenerse en la empresa y hacerse de su dirección ejecutiva. Diana en 2010 fue una de las empresas emblemáticas del eslogan “Hecho en Socialismo” que representaba el SSSA. Han visto subir su producción y ventas en más de un 100% del 2008 al 2011. Del total de sus ventas un 40% fueron dirigidas al sector privado y un 60% al sector público, con intenciones de llegar al 70% para el 2011. Enviaban sus superávits al Fondo de Eficiencia Socialista y tenían políticas desarrolladas de “punto y círculo” que emulaban el papel de la comuna.

Coyuntura: En el 2008 se ha dado un nuevo impulso al SSSA a través de la creación de empresas estatales y socialistas que respondiesen a los problemas de acaparamiento y desabastecimiento en el sistema privado de alimentos. Parte de estas acciones fueron planificadas en el 2007 e implementadas por PDVSA en el 2008. En ese año PDVSA creó PDVAL y ésta a su vez adquirió a Industrias Diana CA. A diferencia del clima confrontacional vivido entre el sector público y el privado para ese año, la venta se produjo con el consenso de los antiguos accionistas, los trabajadores y el Estado. Los trabajadores, empoderados desde el 2008 en la dirección de la empresa, planificaron e implementaron políticas socialistas en sus plantas y en el entorno social del estado Carabobo, acorde a la 4a. ola de participación.

Atalaya: Pre-producción y Producción de un Programa de ViVe TV (Trabajadores-Directores de Diana, 2010).

Descripción:

En la zona industrial de Valencia, estado Carabobo, se encuentra la planta más importante de Industrias Diana CA EPS.

Originalmente comenzó en 1898 como una fábrica de textiles que luego pasó a usufructar el aceite del algodón. Para 1946, la empresa antecesora Grasas de Valencia extraía aceites de ajonjolí, coco, girasol y soya [soja]; además del proceso de refinación, se envasaba el Aceite Diana, la Margarina La Estancia, además de manteca y jabón de barra para lavar. De modo que Diana produjo aceites, al menos desde los años 40, en relación a la explotación agrícola.

En los años 60 aceites Diana era una empresa muy bien posicionada en el mercado

La empresa tuvo problemas de competitividad hacia los años 80 con grupos económicos con mayor presencia en el mercado nacional como Cargill y Polar, los cuales producen los aceites de freír Vatel y Mazeite respectivamente.

Cuando PDVSA a través de PDVAL la adquirió, su estrategia consistió en comprar una marca reconocida por los venezolanos pero no un complejo industrial que pudiese competir al mismo nivel con los fabricantes de alimentos más posicionados.

Quizás por esa razón las tres partes convinieron en una transacción no conflictiva. Para los accionistas era una manera de resolver las debilidades financieras que aquejaban entre el 2007 y el 2008; para el Estado era una manera de colocar y controlar nuevos productos en la estrategia desacatada de precios regulados; y para los trabajadores se produjo el efecto de una empresa recuperada: podían continuar en sus puestos sin el trauma de los despidos masivos. El acuerdo solapaba la necesidad de las partes en sobreponerse al control oligopólico de las otras empresas.

En tanto la empresa reactivó su capacidad productiva, tal como sucedió en los otros centros productivos del SSSA observados, los trabajadores planificaron e implementaron acciones audaces para subir la producción.

El desabastecimiento era tal que la colocación de una marca reconocida en el mercado en los anaqueles rápidamente entraba en competencia y se vendía. Diana multiplicó sus ventas en el SSSA y superó los niveles de producción que tenía durante la conducción privada en cerca de un 100% para el 2010. Durante el 2008 y el 2009 mantuvo los precios regulados, mantuvo su antigua cartera de clientes del sector privado y en el 2010 aumentó la cartera y aumentó sus ventas al sector público en la medida en que el SSSA expandía sus puntos de venta. En el 2010 entre el 60 y el 70% de su producción es comprada por el sector público.

Diana no publica sus cuentas. Sin embargo, en las entrevistas del 2010 fueron abiertos en mostrar sus resultados económicos: indicaron que la compra que hizo PDVAL a los antiguos accionistas fue convertida en deuda pero que la empresa pudo cancelarla en el 2009. También mostraron que tenían un plan de crecimiento sostenido hasta el 2012 con el objetivo de abastecer de aceites la demanda nacional a niveles competitivos con los grandes grupos económicos. PDVAL la transfirió a

la CVA en el 2009 y ésta la transfirió al Ministerio del poder popular para la Alimentación (Minppal) en el 2010.

La autoridad moral de los trabajadores-directivos de Diana se puso a prueba cuando en el 2010 el Ministro del poder popular para la Alimentación, Félix Osorio, declaró para el diario Correos del Orinoco que el gobierno tenía intenciones de expropiar Cargill y Polar. La declaración fue muy mal recibida por los medios de la oposición, los directivos de esas empresas y, discretamente, por el propio gobierno.

Los trabajadores-directivos de Diana se apresuraron a utilizar sus propios medios y los medios del Estado para dirigirse a los trabajadores de Cargill y Polar y pedirles que no temieran, pues la experiencia socialista se había traducido en bienestar para ellos. En la recién expropiada Agroisleña los trabajadores comentaban que solo Aceites Diana podía tener la autoridad moral de una declaración así. De hecho, este tipo de declaraciones, autónomas y rápidas, no son corrientes en otros trabajadores del SSSA.

En un sistema como el SSSA, donde la opacidad de las cifras son características, Aceites Diana no solo mostró sus cifras en las entrevistas sino que declararon lo que para esta tesis es un indicador de salud financiera: contribuyeron a través de la CVA en el Fondo de Eficiencia Socialista (Correo del Orinoco, 2011). La cifra exacta del importe no pudo ser obtenida para esta tesis, pues la CVA las puso como propias, esto es, sin discriminar entre sus otras empresas. Esta tesis, así como los trabajadores de Diana, no tienen datos ni indicios de otras empresas de la CVA que hayan participado en el fondo durante ese año, por lo que los trabajadores asumen para sí este éxito.

Aceites Diana creó una nueva página web, sostuvo para el 2012 un periódico impreso y una FM empresarial, impulsó para el 2010 actividades y proyectos culturales, ha acogido en sus instalaciones las reuniones de los consejos comunales más cercanos, estableció políticas de apoyo financiero con éstos, mantuvo para el 2012 un comedor en su planta principal, para los trabajadores, además de los cesta-tickets de alimentación, mantuvo un PDVAL para la comunidad dentro de la planta principal y en la puerta de esa planta era aún corriente ver colas de trabajadores presentando sus credenciales para trabajar en la fábrica. Todo esto, según declararon, correspondía a la política de “punto y círculo” indicada por el presidente Chávez desde la TV: desde un punto, por ejemplo, una EPS o un organismo público, debe trazarse un círculo de influencia y solidaridad con su entorno social inmediato y actuar en consecuencia. La idea de “punto y círculo” es una idea similar

a la de Núcleo de Desarrollo y a la idea de comuna en la Nueva geometría del Poder, que suponían que la relación entre economía y sociedad debía ser una relación política y territorial.

Desde que Diana era una empresa privada el proceso de obtención y refinación de aceites había cambiado. La EPS Diana importó para el 2011 casi la totalidad de su materia prima de Brasil, un concentrado a partir del cual se obtuvieron los productos mercadeados. Fue la primera empresa en utilizar el SITME y el SUCRE como referencia de intercambio en vez de CADIVI y el dólar, sin embargo su producción dependió muy fundamentalmente de la estabilidad de la adquisición de divisas y no de la agricultura o la agroindustria local.

A pesar de esto, Diana es un ejemplo como pocos, de un componente en el SSSA que se constituyó y se puso en marcha según el espíritu de la 4a. ola de participación social con relativo éxito.

El otro ejemplo que también logró participar en el 2011 en el fondo de eficiencia socialista fue la EPS Enlandes. Su compra fue inspirada por el éxito de Diana.

Enlandes, conocida popularmente como Lácteos los Andes fue comprada enteramente en el 2008 a sus propietarios con el fin de emular el éxito obtenido con Diana: una marca ya reconocida, una tradición en las fuerzas laborales que sabían conducir la empresa con éxito y una posición debilitada por la competencia de productores más grandes. Se mantuvo la plantilla completa del personal y para el 2009 la empresa había multiplicado en 900% su producción (Obuchi, Abadi y Lira, 2011: 148-153).

6.3.5. La 5a. ola (2010-Febrero 2012): El reimpulso Bicentenario. La Gran Misión Agro-Venezuela.

En abril del 2010 se celebraron en Venezuela los 8 años de la victoria bolivariana sobre el golpe de Estado y los 200 años de la declaratoria de independencia por la asamblea patriótica de Caracas.

En el 2009 el sub-sistema había evidenciado su debilidad estructural ante las fluctuaciones a la baja de los precios petroleros por lo que el tema de la dependencia petrolera había reflatado en los discursos. La inflación no desaparecía, el desabastecimiento ya se había convertido en un problema persistente desde el 2003, la fuga de capitales seguía siendo un problema, la devaluación ya era un hecho regular y los

niveles de producción no petrolera y sus ventas seguían siendo insuficientes e incluso negativos. Entonces, a pesar de los signos de recalentamiento, el 2010 fue el año designado para el reimpulso de la productividad nacional por la vía del aumento gasto público. Este reimpulso se le llamó “Bicentenario”. En el 2011 y hasta la creación del Fondo Zamorano en febrero del 2012 continuó la orientación gubernamental de aumentar progresivamente el gasto.

El plan definido en este sentido por el Ministerio de Planificación era llamado “Abono a la Siembra Petrolera” (similarmente a como se llamó el plan productivo de PDVSA en el 2008) y su nuevo instrumento en el área de las políticas de seguridad alimentaria consistió fundamentalmente en el aceleramiento de la expropiación y compras del Estado de más y más importantes eslabones de la cadena productiva alimentaria, incluyendo, en el 2011-2012, la creación de la Gran Misión Agro-Venezuela.

En el 2010 se incorporó al discurso de la propaganda política bolivariana el slogan “Hecho en Socialismo” y se promocionó el sistema agroalimentario socialista como un todo capaz de sustituir al sistema alimentario privado (López, 2011).

En términos de la participación social no se crearon ni se indujeron nuevos instrumentos organizacionales. Fueron desacelerados los mecanismos de participación relativos a la 4a. ola. Se continuó identificando discursivamente a la burguesía como enemiga de la seguridad alimentaria pero en la Gran Misión Agro-Venezuela se produjo un giro: la convocatoria fue hecha a todas las personas que “quisieran” participar, lo que fue interpretado por la población como “todas las personas sin distinciones políticas u origen socio-productivo”.

El Estado dejaba claro que el socialismo necesitaba más manos para levantar el aparato alimentario y estaba dispuesto a financiar este gigantesco esfuerzo. No se habló para esta misión de comités, consejos, cooperativas o EPS, sino de “venezolanos”, “trabajadores”, “productores” o “vuelta al campo”.

A pesar de esta convocatoria, las cifras al final del 2011 mostraron una contracción productiva de la alimentación primaria y de la manufactura de alimentos al menos de un 9 y un 12% (BCV, 2011 b), la cual fue suplida con más importaciones para mantener el flujo en los nuevos eslabones de comercialización socialista.

Como el sub-sistema lucía vulnerable, había indicaciones de que la productividad no era la esperada y, además, se aproximaban unas

elecciones presidenciales en octubre del 2012, el SSSA entró en una etapa en la que se buscó más eficiencia y cobertura en menor tiempo, por lo cual se optó por trasvasar más recursos productivos del sector privado al sector público, a través de expropiaciones, decomisos, compras del Estado y regulaciones.

Por ello, en estos años fue observable al menos: un debilitamiento de la participación como mecanismo auto-impulsado de la seguridad alimentaria, un replanteamiento del socialismo territorial a favor de la multiplicación de empresas estatales por la vía de mayor gasto público y, en consecuencia, un crecimiento de la importancia política-electoral de las poblaciones urbanas ligadas al sector terciario y al consumo.

La Gran Misión Agro-Venezuela delimitó el final de esta tesis cuando, en todo este mismo contexto, el presidente Chávez exige a la banca privada sumarse al Estado en un fondo común, llamado Fondo Zamorano, para aumentar aún más la cartera crediticia agrícola en febrero del 2012.

Sujeto 11: Cooperativas agrícolas de Sabana de Parra.

Situación: Las cooperativas agrícolas de la zona de Sabana de Parra en el Estado Yaracuy recibieron en el 2008 por vía de la Ley de Tierras varias parcelas correspondientes a latifundios de la zona. La tierras son de tipo 1 y 2. En el 2009 habían producido maíz a niveles récord. Ese año el Estado habilitó un silo de CVAL en el sitio para comprar y almacenar toda la producción y distribuirla de ahí al resto del SSSA de manera exclusiva. Las cooperativas tuvieron toda su producción comprometida con el Estado, pero el Estado no había pagado el maíz cosechado y almacenado durante dos años, esto es, hasta finales del 2010. Cuando los pagos llegaron pesaron sobre ellos casi un 60% de inflación. Necesitan otro crédito para no bajar la producción, revelando que, a pesar de su capacidad productiva, los trabajadores se mantenían diariamente con el importe de los créditos y no con las ganancias.

Junto al INSAI, estuvieron experimentando con alternativas a los “agrotóxicos”; en este punto se han estado destacando experimentos declarados exitosos por los campesinos. En lugar de pesticidas y fertilizantes estándares, han estado usando “aliados biológicos”.

Coyuntura: Desde el 2003 el Estado acusó al sector privado de las cadenas agroalimentarias de no acatar el control de precios por motivaciones políticas. Éste sector adujo que el retorno era

insuficiente para impulsar nuevas inversiones, enfrentar el control de precios, la adquisición de divisas y la inflación. Simultáneamente las cooperativas de Sabana de Parra estarían demostrando desde el 2008 que el SSSA sí podía ser eficiente, dada la alta productividad de los trabajadores empoderados ese año y sus niveles productivos en el 2009 y 2010. El silo de la CVAL que atiende a las cooperativas se encontraba a 500 mts. del silo de Agroisleña. Esta última empresa tenía su propia política de créditos y controlaba con mayor eficiencia el mercado, pero era acusado por el gobierno de generar desabastecimiento por algunas de las razones expuestas. La polarización de los dos sectores en ese escenario finalizó con la expropiación de Agroisleña en septiembre del 2010. Las cooperativas se convirtieron entonces en actores clave del desarrollo de ese territorio.

Atalaya: Investigación y Entrevistas para producción televisiva (Coop. Socialistas Sabana de Parra, 2010; Trabajadores de Agroisleña, 2010).

Descripción:

Luego del Paro petrolero-alimentario se produjo en Venezuela una explosión de emprendedores económicos (GEM, 2004; 2005). Tal como se ha descrito en anteriores capítulos, el paro había despertado la necesidad en la sociedad civil y en el presidente Chávez de reimpulsar la economía y democratizar la producción. El Estado se ofreció como puente para ese impulso a partir del período endogenista de la 2a. ola de participación. Muchas nuevas organizaciones de la sociedad civil agraria solicitaron la desafectación de tierras por la vía de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario y muchas, luego de largos procesos (como los descritos en los sujetos 8 y 9) recibirían sus tierras tiempo después, no en forma de propiedad, sino por medio de cartas agrarias y con procesos de asignación de créditos percibidos como demasiado lentos por los campesinos. A la lentitud del gobierno se sumaba la peligrosidad de estas acciones políticas dada la amenaza creciente de sicariatos que se había extendido por el país.

Sin embargo, en consonancia con las olas de participación 3a y 4a., las organizaciones ya con nuevas tierras y créditos impulsaron rápidamente la producción, al menos en todos los sujetos observados por esta tesis. Los colectivos mostraban, y explícitamente así querían hacerlo, que la situación de subalternidad en la que se habían encontrado no era producto de ellos, sino de la estructura política y económica del país.

Las Cooperativas asociadas en Sabana de Parra hicieron lo suyo cuando aumentaron hasta 35 millones de kilos la producción, cifra record para esa zona. El efecto del empoderamiento mejoraba los objetivos de la organización social y era común encontrar discursos significativamente esperanzadores acerca de que la nueva relación de producción instituida había generado transformaciones importantes en la valoración que tenían del país y del rol que debían jugar dentro de esta valoración. En Sabana de Parra, dijeron los campesinos (como decía Zapata de aquellos campesinos empoderados del Sur de México), nunca se había producido tanto.

En las cooperativas de Sabana de Parra, como en las organizaciones del Valle de Tucutunemo, Las Piedras, La Cañada de Urdaneta, Mene Grande, y empresas socialistas como Diana, Lácteos Machiques, Lácteos Los Andes, Oderí o la Central Venezuela, no solo se había impactado a favor de una relación del trabajador con la producción, sino con el territorio, esto es, incluyendo tanto el territorio propio del emprendimiento como el de la Nación.

Por lo tanto, los aciertos o problemas que cada uno de estos emprendimientos debió enfrentar afectarían de igual modo no solo la relación con la producción sino su relación con el territorio. Con la expropiación de Agroisleña, la zona ya logró depender en un 75% de formas de producción llamadas “socialistas”.

Por la misma lógica, cuando los campesinos de Sabana de Parra recibieron los pagos de su cosechas ya entregadas al silo de la CVAL dos años después, pagos devaluados por casi un 60% de inflación, se encontraron con una racionalidad diferente a la del mercado tradicional. Sus ganancias eran “socialistas”, según la tabulación del Ministerio del poder popular para la Agricultura y Tierras, por lo cual, deberían ser suficientes para mantener el impulso productivo, pero solo en un escenario de inflación cero, sin contar otras formas de deterioro de la economía.

En términos colectivos, para compensar estos problemas eran necesarios nuevos créditos sobre los anteriores. La llegada de la gran misión Agro-Venezuela en el 2011 fue en ese sentido oportuna. Estos refinanciamientos, que en Venezuela han sido tradicionalmente de poca obligatoriedad, se convirtieron nuevamente en la fuente real de los ingresos familiares. En base a los nuevos créditos esperaron subir la producción a 90 mil toneladas de maíz a cosecharse el 2012, sumando toda la red productiva de Yaracuy.

En términos individuales fue posible observar que la tendencia a la emigración a las ciudades no pareció ceder. El nuevo escenario político también estaba asociado a nuevas redes políticas y de amistad que podían ofrecer cargos fuera del entorno rural. Concretamente, en Sabana de Parra fue visible que uno de los líderes campesinos entró como diputado a la Asamblea Nacional, en Caracas. En ausencia, por ejemplo, de las Asambleas Agrarias que ya habían sido dictadas por la Ley de Seguridad y Soberanía Alimentaria, o de otros canales de participación a escala, el canal político tradicional generó un nuevo polo de atracción política y económica a varios trabajadores por fuera del entorno productivo original.

Entendido en su contexto, el desplazamiento de talentos del campo a la ciudad consiste en una movilidad social y económica allí donde mayormente se centra la inversión y el gasto público y, por lo tanto, donde la incertidumbre económica puede ser menor.

Todo ello impacta el desarrollo territorial autónomo, por cuanto que los emprendimientos económicos que deberían financiar y apuntalar el liderazgo socialista (a través por ejemplo de la comuna, el “punto y círculo”, el Núcleo de Desarrollo o alguna forma de Nueva Geometría del Poder...) son tanto o más dependientes del gasto público y, por tanto de formas verticales poco interdependientes y a veces intempestivas de poder.

Es importante destacar que la relación de los campesinos autónomos con Agroisleña era similar en la zona antes de la expropiación. Según declararon los encargados tanto de la antigua compañía como los funcionarios interventores de ECISA, la incertidumbre la generaban las obligaciones de pago de las deudas contraídas con esta empresa privada.

Al no poder los campesinos pagar a tiempo la deuda, Agroisleña cobraba con más producción, la cual depositaba en sus propios silos. De tal modo que su verdadero negocio no estribaba solamente en el crédito o en las ventas de insumos, sino en su rol de intermediario en la colocación de alimentos en los mercados con mayor capacidad de compra. Para evitar la volatilidad monetaria, Agroisleña cobraba con valores. Por ello, también allí el campesino autónomo vivió de los refinanciamientos y no enteramente de sus ganancias.

Adicionalmente, en virtud del comportamiento de la banca pública agrícola y su incapacidad en generar retorno e incluso en aumentar el PIB agrícola antes del bolivarianismo (Anido, 2002; Anido y Fuentes,

2007), también es posible inferir que fue similar la relación entre la producción y la banca pública antes de la victoria electoral de Chávez.

De algún modo, la 5a. ola recoge problemas que son susceptibles de análisis a otra escala, por ejemplo, desde la *path dependence* o el rentismo.

La 5a. ola de participación, vista desde la experiencia de Sabana de Parra, indica diferencias con las olas anteriores relativas a la profundización de los determinantes estructurales del subsistema así como la naturaleza económica y política del gasto público venezolano.

Como se verá en el epígrafe 6.3., tanto en el discurso oficial como del poder popular, si bien se ha reconocido vivamente la inconveniencia de los retrasos, no se ha subrayado la inconveniencia de los precios en relación al mercado. En su lugar, el desbalance de las cuentas se justifica en el rol responsable del poder popular en proveer de seguridad alimentaria a las mayorías a pesar de las bajas ganancias. De algún modo el discurso dominante del bolivarianismo ha identificado las ganancias “elevadas”, esto es, por encima de la inflación, con las ganancias del sector privado, en tanto sector adversario o enemigo. Para evitar acusaciones políticas y mientras el gasto público pueda seguir compensando este desbalance, el discurso a favor de un mercado claro no luce tener necesidad (o es reprimido, en el peor de los casos) y deja paso a la idea de *responsabilidad socialista*. Por tal razón, en estas situaciones observadas, se hace más patente lo que esta tesis denomina *desdibujamiento del mercado dentro del mercado* en el nivel del discurso (cap. 6.4.1.).

Sujeto 12: Cooperativas del Valle de Tucutunemo-Unidad de Producción Socialista Pedro Camejo.

Situación: Los campesinos del Valle del río Tucutunemo en el Estado Aragua han vivido por años como trabajadores dentro de latifundios. El valle es irrigado por un trasvase artificial que realizó el gobierno bolivariano en la laguna de Taiguayguay en el 2009. Luego de la Ley de Tierras se convirtieron en usuarios colectivos de las tierras. Han sido productores de maíz, el cereal más importante de la dieta de los venezolanos, y de caraota [frijoles]. Venden toda su producción a los silos del Estado del SSSA. A diferencia de las cooperativas de Sabana de Parra, no han denunciado retrasos en los pagos de sus cosechas en el 2010 y solo aquejaron de falta de redes de apoyo eficientes en el transporte de las cosechas. Han sido impulsados como una comuna agraria.

Junto al INSAI, estaban experimentando con alternativas a los agrotóxicos en el 2010. Declararon que los resultados fueron exitosos. El INIA y el CIARA desarrollan junto a la UPS Alejandro Zamora semillas artesanales que se pondrían a prueba en sus tierras. También experimentaron con políticas culturales. Sin embargo, la agenda civil y las estrategias de sustentabilidad dependen de las diferentes intervenciones del Estado.

Coyuntura: Las cooperativas de Tucutunemo dependían de la intermediación de Agroisleña en la zona, por cuanto ésta cubría más del 50% de la venta de los insumos agrícolas, además de servicios de acopio, crédito, transporte y compras mayoristas. La expropiación de Agroisleña en el 2010 y la fundación, en su lugar, de Agropatria, una empresa de características similares y de propiedad estatal, coloca al SSSA y a las cooperativas de Tucutunemo como actores protagónicos del desarrollo territorial y de la producción alimentaria en la zona .

Atalaya: Producción de programa de TV y entrevistas (Frente Socialista Campesino Pedro Camejo, 2010; Trabajadores de Agroisleña, 2010).

Descripción:

Los campesinos del valle de Tucutunemo fueron beneficiados por una obra de infraestructura que comunicó, mediante un túnel artificial, el agua de la laguna de Taiguayguay sobre el valle, haciéndolo nuevamente fértil. Se trata de un área históricamente importante en la agricultura venezolana porque cuenta con tierras de tipo 1 y 2 y porque es parte del paisaje de la épica agrarista de Ezequiel Zamora. El valle es vecino a la población de Villa de Cura donde Zamora hizo sus primeras intervenciones políticas junto al partido liberal venezolano en la década de los 60 del siglo XIX. De hecho, la Unidad de Producción Socialista Pedro Camejo guarda como parte del anterior latifundio las ruinas de una casa rural del siglo XIX donde habría pernoctado el propio Ezequiel Zamora y habría apostado su ejército.

Dada la importancia de las tierras, su ubicación estratégica a dos horas de Caracas, una hora de Maracay, una hora de Valencia, menos de una hora de la zona industrial de Cagua, y la apuesta en el trasvase hídrico realizado el 2009, el gobierno agrupó ese mismo año a los campesinos de la zona, les entregó importante maquinaria, expulsó a los anteriores productores argumentando que se trataba de tierras ejidas y les concedió a las nuevas cooperativas y consejos rurales la posibilidad de convertirse en comuna sobre unas 360 hectáreas. A pesar de que no

son en la práctica una comuna, fueron anunciados por el Ministerio de Información como tales en el 2009 (Pérez, 2009). Internamente se declararon como una comuna en formación. De hecho, algunos de los campesinos estaban organizados en forma de Consejos Comunales rurales antes de la UPS, pero no desarrollaron alguna forma de gobierno territorial.

Simultáneamente, el gobierno asignó 5 hectáreas a CIARA para una Unidad de Propiedad Social (para diferenciarla de las de “producción socialista”) que desarrollase semillas artesanales con el objetivo de combatir la dependencia a la semilla importada y transgénica en los rubros pimentón [pimientos], pepino, tomate, quimbombó, cilantro y lechuga. A mediano plazo se esperaba que las semillas pudiesen permitir la siembra de productos más “soberanos” en el centro del país.

El Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral (INSAI), a su vez, promovió en la UPS Josefa Camejo los aliados biológicos que sustituirían a los pesticidas y fertilizantes químicos.

Las tierras de Tucutunemo y los alrededores han sido rociadas por décadas con los agroquímicos vendidos por la empresa Agroisleña, quien no solo controlaba más de la mitad de las ventas de este tipo de insumos en la zona sino que tenía sus propias fábricas de agroquímicos (en base a concentrados europeos) en la vecina población de Cagua.

Los campesinos de este valle declararon haber visto mejorar sus condiciones de vida desde la transformación del paisaje en el 2008 y haber aumentado su producción significativamente del 2009 al 2010.

En virtud de los problemas que reflejaron las cooperativas de Sabana de Parra en relación a los problemas de la estructura económica, hubiera sido importante evaluar el desempeño de la UPS durante el 2011. Si bien no hay razones para suponer que no enfrentaron problemas similares, también es cierto que no se obtuvo información directa de campo.

Al finalizar las entrevistas en Octubre del 2010, solo habían tenido una primera gran cosecha y estaban preparando “arrimar” la segunda, por lo que no era posible evaluar el impacto de la economía venezolana sobre las condiciones de mercado en el SSSA.

El control del Estado sobre la antigua Agroisleña era percibido como un valor agregado de importancia al SSSA en la zona, puesto que

garantizaría la reducción de los precios de los insumos, incluyendo los agroquímicos.

En el momento de la entrevista solicitaban al poder representativo del estado Aragua que les facilitasen transitoriamente transporte para arrimar la cosecha.

No presentaron ningún proyecto de organización transversal del poder popular en el ámbito productivo más allá del valle. El Estado para ese momento definió, a través de los funcionarios de CIARA, INSAI y otros, las estrategias fundamentales de acción productiva, incluyendo los planes de financiamiento. Incluso, ni la casa histórica recuperada ni el vehículo para el “arrime” eran proyectados autónomamente, sino a través de solicitudes externas de financiamiento a través del gasto público centralizado.

En relación a la 5a. ola de participación fue notable el intento del Estado en realizar una comuna agraria productiva en la región, en tanto evolución de las propuestas de la 4a. ola. Sin embargo, en la práctica, toda la planificación constatada era vertical. Incluso, durante la grabación del programa de TV no aprovecharon el momento para expresar necesidad de apoyo para el transporte de la cosecha, argumentando algunos, tras bastidores, que era mejor aparecer como un bloque solidario que como uno que “pide”.

Acerca de la provisionalidad de la comuna, dicen considerarlo parte del carácter transitorio de esta etapa rumbo al socialismo. Sin embargo y a pesar del marcado carácter “revolucionario” de sus formas discursivas, no mostraron particular interés en desarrollar ideas concretas de empoderamiento político para los tiempos siguientes.

En Tucutunemo la agenda civil luce difusa y parece dispuesta a ceder al funcionariado la implementación de una agenda instruida verticalmente.

Sujeto 13: Mercal. Gerencia de Mercal Producción.

Situación: La red de distribución y comercialización de alimentos más grande de Venezuela, bandera del SSSA, posee una Vicepresidencia de Nuevos Proyectos para impulsar producción alimentaria propia, así como para relacionar la participación de los *Mercalitos* en áreas productivas y la solidaridad social. En el 2010 trabajaron en el

estímulo de fórmulas organizativas rentables junto al campesinado a través de la Gerencia de Mercal Producción.

Coyuntura: Se anuncia el segundo reimpulso agro-productivo para recuperar la Soberanía Alimentaria. Mercal es parte fundamental del “Sistema Integral de Control Alimentario (SICA)”, bajo dirección del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, el cual tiene por objetivo encargarse de coordinar este impulso desde el 2008. Se trata de un proyecto de integrar funciones productivas a Mercal que pervive desde la Misión original en el 2003.

Atalaya: Entrevistas para Tesis Doctoral (*Directivo Mercal, 2010*).

Descripción:

Sobre tierras expropiadas o decomisadas judicialmente en varias partes del país, Mercal ha participado en un proyecto de estímulo a la producción agrícola rentable. Otorgó créditos, maquinaria y exploró así, por su parte, maneras de incrementar la producción.

Mercal y el SICA están conscientes de que han presentado cada año niveles más altos de importación de alimentos (Minppal, 2009; 2011), por lo que los importantes esfuerzos e inversiones en impulsar la soberanía productiva alimentaria se estarían debilitando en alguna parte del proceso. Esto es, a una mayor demanda provocada por el mismo gasto público, no se correspondía un aumento de la oferta productiva nacional sino, incluso, un decrecimiento absoluto. Estas cifras serán tratadas en los capítulos 6 y 7. En todo caso, para el 2011, la importación rondó el 70% de los productos ofrecidos por todo el SICA, cuando, entre el 2003 y el 2004, rondaba el 50%, solo en Mercal. Las observaciones hasta el momento muestran, además, que el gasto público también ha estado compensando déficits importantes en las cuentas de la oferta productiva nacional (bajo retorno crediticio, expropiaciones, nóminas estatales, ineficiencia, corrupción, etc).

Para resolver estos problemas era necesario reimpulsar la producción, pero no esto no parecía dar resultados. En consonancia con el discurso oficial, la entrevista con el directivo de Mercal diagnosticaba el problema como uno de “cultura rentística” que haría que los trabajadores esperasen más del gobierno de lo que podían dar de sí mismos.

Por tal motivo, en Mercal Gerencia Productiva se organizaron talleres de socialismo y soberanía alimentaria para las unidades productivas que han tenido a su cargo y apostaron mayormente a la solución de los

problemas de rentabilidad y productividad a partir de las fuerzas organizativas que pudiesen desprenderse de estos talleres.

A pesar de que Mercal ha sido testigo de excepción de los problemas asociados a la absorción económica del gasto público, no se cuestionó el origen macroeconómico del problema en las políticas públicas económicas, sino en la posibilidad de resolver los problemas desde las bases productivas. En otras palabras, en consonancia con el discurso estatal, según la entrevista, la fuga de capitales, la inflación y otros problemas de la estructura han sido el resultado de la “cultura rentística petrolera” o de problemas de lealtad a la nación.

Según la entrevista, los trabajadores, organizados o no, no tendrían “todavía” la capacidad política (la “conciencia”) ni la capacidad administrativa (la “eficiencia”) suficiente para levantar la producción en los niveles requeridos. Preferirían, simplemente, recibir “todo del Estado”. Pero, al mismo tiempo son los sujetos de la transformación socialista.

En relación a la 5a. ola de participación y según los criterios de esta entrevista, las políticas productivas de Mercal lucen emboscadas entre el deseo de generar suficiencia alimentaria autónoma o soberana y las fuerzas de la participación que empezaron a agotarse. En términos económicos, tal emboscada revela problemas de gasto público relacionados a derivación de recursos de la sociedad por fuera de juego productivo. Por cuanto los trabajadores no se redirigen al proyecto soberanista, se les atribuye incapacidades ideológicas.

Sujeto 14: Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos (PDVAL) - Costa Oriental del Lago (COL).

Situación: La PDVAL de la COL está económicamente muy debilitada y su personal directivo se debate sobre las razones de la quiebra virtual de la empresa. Por otro lado, buscan reconstituir el tejido que antes les unía con los Consejos Comunales, pero los líderes de éstos han sido absorbidos por los organismos públicos. La Costa Oriental del Lago es la zona tradicional de producción petrolera en Venezuela desde los años 20.

Coyuntura: PDVAL fue creada en el 2008 a partir del éxito de la cobertura de Mercal. Dada su relación con los presupuestos y personal de PDVSA, se crearon centros de comercialización de PDVAL en las zonas de producción petrolera como parte de una plan para saldar la

“deuda social” con las poblaciones aledañas. PDVAL logró durante sus primeros dos años mantener los precios regulados por el gobierno con el objetivo de competir con la comercialización privada que no los acataba, y que estaría acaparando y generando desabastecimiento masivamente por razones políticas. Pero desde el 2010, ahora en manos del Ministerio del poder popular para la Alimentación (Minppal), presentan ellos mismos graves problemas de abastecimiento en la COL y a nivel nacional.

Atalaya: Entrevistas de investigación (Directivo PDVAL-COL, 2010).

Descripción:

Al frente de la oficina de atención al ciudadano de PDVAL-COL se encontraba un profesor de la Misión Sucre que se había dedicado a tratar de investigar y comprender los problemas de PDVAL en relación a su capacidad de convertirse en un instrumento de la participación ciudadana y el socialismo.

En esta entrevista se sugirió que los problemas de abastecimiento que enfrentó PDVAL fueron producto de una tensión política con Mercal durante el proceso en que ambas instituciones quedaron integradas al Ministerio de Alimentación. En la entrevista, en la que participaron otras personas, se opinó que el interés de desabastecer a PDVAL era desaparecerla y fundirla en Mercal. Esto finalmente no fue así, al menos hasta febrero del 2012, por cuanto PDVAL siguió existiendo y fue reabastecida.

La entrevista sugiere que el problema fundamental que enfrentaron las organizaciones del poder popular fue que, al no poder lograr emprendimientos económicamente auto-sustentables, fueron optando por empleos en la administración pública y en organismos directa o indirectamente vinculados a ella.

La entrevista relata que las organizaciones sociales que dieron apoyo al bolivarianismo durante el paro petrolero-alimentario del 2002-2003 en la ciudad de Cabimas y otras de la COL, tuvieron que confrontar en aquel entonces procesos de sabotaje en la industria petrolera y en el suministro de alimentos. En algunas de las plantas petroleras se había des-sincronizado adrede medidores de temperatura de las máquinas para provocar con ello el estallido de la planta entera. En el caso de la alimentación, los pobladores de Cabimas habían presenciado como se echaba gran cantidad de comida al lago de Maracaibo con la intención de que no llegase a los centros de acopio y mantener así la presión política.

Las organizaciones sociales que se mantuvieron activas luego del paro se sumaron a la reconstrucción de PDVSA y muchos trataron de impulsar emprendimientos económicos alimentarios.

Cuando estas organizaciones se convirtieron en consejos comunales [durante la 3a ola], PDVSA las reunió para generar políticas productivas y de comercialización rentables. Un resultado de estas iniciativas habría sido creación de la propia PDVAL.

Sin embargo, como se ha indicado, ya en el 2009 PDVAL no había podido demostrar ser rentable con los precios regulados y con las facilidades de importación propias a la empresa para surtir de los productos desabastecidos en el mercado privado. Tampoco los proyectos productivos de la productora habían culminado satisfactoriamente en las zonas rurales adyacentes a sus instalaciones.

La idea central de esta entrevista es corroborable en el Informe de Gestión Anual correspondiente (PDVSA y sus empresas filiales, 2008). Allí PDVSA muestra que sus cifras por compra de alimentos para PDVAL son casi idénticas a las de venta de alimentos, dejando por fuera todos los importes relativos a transporte, infraestructura, personal etc., los cuales fueron absorbidos en partidas de funcionamiento propias de la empresa. PDVSA entrega PDVAL a la Vicepresidencia del República en el 2009 y la Vicepresidencia se la entrega al Ministerio del poder popular para la Alimentación en el 2010.

Este proceso no resultó en que los líderes sociales fueron absorbidos por la empresa o por el Estado, sino que los consejos comunales que sostuvieron a PDVAL quedaron “descabezados” y en el 2010 casi totalmente disueltos. En palabras de la entrevista, lo que pudo haber sido un emprendimiento colectivo alimentario importante perdió su canal y se dispersó, atraídos por otros focos de atracción política y económica.

La entrevista traduce los problemas de rentabilidad en PDVAL y la dispersión de los otros emprendimientos en problemas de la corrupción y la ineficiencia que serían característicos al Estado venezolano, aún víctima de “los vicios de siempre de capitalismo”.

Otros sujetos.

Finalmente, esta tesis pudo incluir algunas entrevistas y algunas observaciones menos densas que serán tratadas en el capítulo siguiente.

Las entrevistas son: dos entrevistas de directivos del **INSAI**, Instituto Nacional de Salud Agraria Integral (Godoy, 2010; Directivo INSAI, 2010); una entrevista al Director del Mercado Mayorista más importante del país, **Inmerca**, conocido también como el **Mercado de Coche** (Inmerca, 2010; Manrique, 2010); dos entrevistas a cuadros medios de **ECISA**, Empresa Comercializadora de Insumos y Servicios Agrícolas, de la Corporación Venezolana de Alimentos (**CVA**) (Alvarado, 2010; Reyes, 2010) y, finalmente, una entrevista al **Ministro del Poder Popular para la Alimentación**, Carlos Osorio (Osorio, 2010).

Otras observaciones, también menos densas, correspondieron a EPS no alimentarias, puesto que compartían ciertas lógicas en relación con el empoderamiento social y el crecimiento económico soberano. Éstas son: **Alcasa** y **Venalum**, dos empresas socialistas de procesamiento de aluminio y **Ferrominera del Orinoco** una empresa socialista de extracción de hierro (Sayago, Ganlush, Sabbad y demás Trabajadores-Presidentes, 2010); **Venirauto** una empresa de fabricación de automóviles bajo el convenio de apoyo tecnológico con Irán; **Venepal** una empresa socialista de procesamiento de pulpa de papel (Investigador Venepal-Venirauto, 2010) y **Siventub** una empresa recuperada de fabricación de tuberías (Trabajadores-Directores de la Coop. Siventub, 2010).

6.3.6. Conclusiones preliminares sobre las observaciones y las entrevistas.

A continuación se describen aquí algunas conclusiones que se han desprendido de las observaciones acerca de :

- a) aspectos operativos de ciertas categorías,
- b) la participación en el SSSA y
- c) el papel del SSSA en la generación de seguridad alimentaria.

Acerca de algunos aspectos operativos en las categorías:

- a) La organización del bolivarianismo a través de 5 olas de participación social.

- b) Problemas de eficiencia declarados en cuanto a productividad de los emprendimientos jóvenes, esto es, de 1 a 2 años de creación y, sobre todo, cuando corresponden a la 2a y 3a ola.
- c) La importancia de la agenda civil en los emprendimientos, fundamentalmente en la 2a y la 3a ola.
- d) Los problemas vinculados al *desdibujamiento del mercado dentro del mercado* en el discurso económico del SSSA, una idea que se profundizará en el siguiente subcapítulo, y
- e) el impacto creciente de los problemas de absorción económica del gasto sobre todo en las últimas dos olas.

Acerca de la participación en el SSSA:

1. La mayor parte de las políticas del SSSA, así como otras con fuerte componente participativo, no son impulsadas originalmente por el Estado, si entendemos a éste como un aparato gubernamental que genera acciones públicas, sino por la relación directa entre Presidente, las comunidades y los sujetos específicos dentro de ellas, con independencia del aparato del gubernamental, los poderes públicos, los poderes descentralizados y sus instituciones.

Así, en las políticas públicas participadas del bolivarianismo el cuádrinomio *gobierno-agenda-implementación-población* es diferente. Más bien es así:

- a. El presidente elabora la idea o política por TV, la cual declara ser el resultado de reuniones de gobierno y luego, instruye por TV a sus agentes gubernamentales y exhorta a la población a ponerla en práctica.
- b. La política no se ha puesto aún en práctica por el gobierno cuando sujetos y grupos de sujetos de la sociedad civil la incorporan en sus propias agendas comunitarias y le dan cuerpo junto a otros sujetos, convirtiéndola entonces en *agenda civil*.
- c. Este proceso de poner la política en *agenda civil* a través de la TV produce múltiples interpretaciones de la política, muchas de las cuales finalmente adquieren forma diversa en cada comunidad. Cuando la política no es una idea sino un cuerpo legal (decretos, reglamentos, leyes, la misma Constitución...) el sujeto o grupo de sujetos adquieren una copia de la ley y la discuten en entornos más amplios y de mayor

incidencia: comunidades residenciales, laborales, productivas, estudiantiles... de tal modo que su interpretación e implementación también diverge en cada ámbito de aplicación.

d. Las agendas civiles y sus modos de aplicación se homogeneizan ante alguna autoridad: la inscripción en el jefatura civil para los Consejos Comunales, en el padrón de cooperativas de PDVSA o de algún Ministerio, en los padrones de recaudación de firmas, en los organismos financieros, etc. Para estos procesos suele haber una convocatoria concreta y se infieren en la población algunos marcos interpretativos comunes. Este último proceso se viabiliza dentro de un plazo (en cual, desde la percepción de los agentes de la sociedad civil, es generalmente muy largo) la respuesta del Estado y con ella la articulación “real” o nacional de la política. Las estadísticas finales dan una imagen de homogeneidad de la política, pero en la práctica éstas se han producido de manera diferente: todo lo que no es necesario de ser homogeneizado es diferente en cada comunidad, porque fue agendado e impulsado por las mismas comunidades o por sujetos dentro de ellas.

De tal manera que éste puede ser el nuevo cuadrinomio:

Idea o ley impulsadas por el Presidente - Agenda civil - Reinterpretación colectiva e implementación - Homogenización frente al Estado.

En la mayor parte de las situaciones observadas, los ministerios y otros agentes asociables al poder ejecutivo son receptores y re-impulsores de las políticas que ya habían sido impulsadas por las comunidades, de tal modo que su rol de liderazgo llega con posterioridad, y como se entiende de la apreciación general, con “demasiada” posterioridad. Este liderazgo consistirá en su habilidad en dar cuerpo ideológico nacional a las políticas participadas locales a través de directrices ideológicas y procedimentales tal como fueron interpretadas en el campo cultural oficial (soberanía alimentaria, seguridad alimentaria, el Plan Nacional de Desarrollo Social –o Primer Plan Socialista-, el socialismo, la defensa de la revolución, los 5 motores, etc.) y en dar continuidad material a las políticas (a través de créditos, compras del Estado, creación de bancos comunales, formalización de títulos, expropiaciones, reconocimiento del rango organizacional, etc.).

Además de la diferencia característica entre la experticia científica y administrativa del gobierno y la no especializada de los gobernados, el liderazgo del aparato de gobierno se sostiene en dos carencias del

poder popular: la escasa transversalidad política (el poder popular pocas veces define políticas entre ellos mismos, esto es, transversalmente) y escasos medios de financiamiento propio.

Por tanto, es solo sobre esta cuarta etapa del cuadrinomio, la homogenización de la iniciativa popular ante el Estado, que se hacen los diagnósticos relativos al Estado tutelar y al rol pasivo de la comunidad.

Sin embargo, como se ha visto, sobre todo en el transcurso de la 4a. y la 5a. ola de participación, la pérdida de alcance de las políticas del SSSA es asociable a la tendencia al debilitamiento de la agenda civil y a una tendencia a re-verticalizar las políticas por parte del Estado. En estas olas, el protagonismo de la agenda civil junto a la figura del Presidente cede y da paso a un mayor protagonismo de la agenda del Estado, incluyendo al propio Presidente.

2. Las políticas participadas del bolivarianismo no corresponden a compartimientos estancos de población. Por el contrario, se sostienen en la capacidad de un número importante de sujetos en participar simultáneamente en varias políticas generando con ello integración de los diferentes objetivos.

Es común interpretar en algunos estudios que las políticas del SSSA y sus componentes son esfuerzos paralelos e incluso inconexos (D'Elia, 2006; Obuchi, Abadi y Lira, 2011; D'Elia y Maingon, 2011)

Sin embargo, las situaciones estudiadas muestran que esto no es así. Los mismos agentes de la sociedad civil que impulsaron una política integran muchas de las nuevas políticas en sus ámbitos de acción. Esto produce, por ejemplo, que en el Barrio San Benito de Sabaneta, Maracaibo, una mujer del Comité de Salud de Barrio Adentro es la impulsora fundamental de las políticas alimentarias a través de la Casa de la Alimentación que allí funciona e, incluso, trabaja con cierta independencia de los consejos comunales. En el sector Los Manglares del Capitán del Barrio Santa Rosa de Agua de Maracaibo la cooperativa turística es el resultado de la capacidad de convocatoria generada por la Casa de Alimentación que también allí funciona y sus impulsores son miembros de la misma familia. En el Consejo Comunal del Barrio los Modines II en Raúl Leoni, intervino el Mercal de su sector por la vía de la presión social e incluso la fuerza, creó un Comité de Alimentación y, apoyado por las Milicias bolivarianas (un contingente de reserva

militar organizado por la sociedad civil) se constituyeron en la verdadera gerencia de ese mercado en detrimento de la gerencia designada por el Ministerio de Alimentación. Así, de algún modo, todos los sujetos observados reproducen el mismo comportamiento.

Cada situación refleja necesidades diferentes y lecturas diferentes de esas necesidades. Pero todas juntas también reflejan el *modus operandi* recurrente de las políticas. Por ello, mucho de la naturaleza de la política no solo reposa en la relación tutelada entre Estado y población sino también en la agenda civil que la hace específica en el contexto del poder popular.

El solapamiento de unas políticas públicas sobre otras en manos de los agentes de la sociedad civil permite reintegrar objetivos a las necesidades y las lecturas específicas de los problemas, generando en los actores una idea más general de gobierno: a mayores políticas, mayores recursos, y a mayores recursos, las posibilidades creativas de nuevas agendas civiles son también mayores.

Igualmente es cierto que no siempre la integración de objetivos produce más capacidades al poder popular. En algunos casos el manejo simultáneo de políticas y objetivos de Estado a nivel local hace difícil la democratización del proceso, pues no todos pueden disponer del tiempo y las capacidades para articular tantas funciones, incluyendo las relaciones interpersonales necesarias para el liderazgo. Esto, por un lado, pone al margen la participación de los que disponen de menos tiempo o capacidades, y por el otro, genera dependencias de la comunidad en los actores que coordinan simultáneamente todas las políticas, convirtiéndolos en una suerte de instancias personales de coordinación a expensas de las organizaciones del poder popular creadas para ese fin. Por ello, cuando estas personas o grupo de personas deciden incorporarse en otros niveles de la función pública, se puede desplomar el trabajo comunitario.

Por ejemplo, muchos miembros de los consejos comunales de la ciudad de Cabimas que auspiciaron y defendieron las políticas alimentarias del gobierno, se convirtieron luego en empleados del PDVAL de la ciudad, debilitando e incluso haciendo desaparecer a sus organizaciones originarias (ver sujeto 14 del cap 6.3.5 o ver el tema de desplazamientos de campesinos a la ciudad en el sujeto 11).

3. La participación dentro de las políticas públicas del

bolivarianismo está marcada por la necesidad de los actores de existir como sujetos de la historia y del espacio público.

Las clases autopercebidas como *populares* sustancian la acción del bolivarianismo en tanto se consideran su medio y su fin. Esta percepción del sí mismo popular tiene su punto de partida en la Constitución del 99, la cual ofreció a la sociedad una imagen en la que los sectores y clases sociales subalternas, como las amas de casa o los indígenas, formaban sujetos jurídicos explícitos y activos en la construcción de la nación (De Cabo de la Vega, 2012). Sin embargo, en la práctica, esta idea de *popular* es el resultado de una imaginación de la exclusión del pueblo y de la cultura popular, no siempre de la posición del sujeto en la estructura económica. No refleja necesariamente el mundo del trabajo frente a la propiedad del capital sino el campo cultural popular empobrecido y, sobre todo, excluido, del campo cultural elitesco³⁰. Esto es así claramente, al menos hasta la transformación del discurso anti-oligarquía al discurso anti-burguesía.

En el caso de la oposición, este acercamiento a la participación es el lado opuesto de la moneda. La oposición no niega sus vínculos con el campo cultural popular pero identifica el origen de muchas de las perversiones del contrario en este mismo campo. De tal modo que un lado se explica por contraposición al otro y se sirven simbólicamente uno al otro en la construcción de un imaginario nacional escindido en dos partes (Cadenas, 2011:142-149).

Este fenómeno es característico del período bolivariano y se denomina comúnmente *polarización*. La participación y la energía que motiva la participación en las situaciones observadas se derivan en muy buena medida de este fenómeno (Martín-Baró, 2003; Chumaceiro Arreaza, 2011; Maringoni, 2011:177-181).

Gregory Wilpert sostiene que una de las diferencias más importantes entre Chávez y los otros procesos de la izquierda latinoamericana llegados *a posteriori*, consiste en la vehemencia del discurso del Presidente (“de algún modo *inflamable* –se podría decir populista”) y la vehemencia reactiva de la oposición venezolana:

“En primer lugar, Chávez encaró de lejos una oposición más vehemente e incluso violenta a su presidencia que los otros,

³⁰ Para profundizar este fenómeno, ver los epígrafes 4.5, 4.6 y 4.13 de esta tesis.

incluso a pesar de que inicialmente sus políticas concretas no fueron tan diferentes de aquellas del Brasil de Lula da Silva o del Chile de Michelle Bachelet. En segundo lugar, la confrontación de Chávez con la oposición le llevó eventualmente a convertirse de lejos en un político de izquierda más radical que como comenzó” (Wilpert, 2007: 6).

¿Por qué la clase media ha sido relativamente más violenta? Wilpert identifica tres tipos de razones por las cuales actúa así:

a) articuladas pero mayormente fabricadas: esto es, como el resultado de un equilibrio inestable entre asociaciones inconscientes y campañas de desinformación. Ejemplos prototípicos en el discurso son: “*Chávez se robó el referendun revocatorio*”, “*Chávez apoya el terrorismo*”...

b) articuladas y reales: aquellas que afectarían de manera más contundente las posibilidades de avanzar tanto al proyecto bolivariano. Ejemplos prototípicos en el discurso son: *Corrupción, abuso de poder, culto a la personalidad, rentismo*...

c) inarticuladas e inconscientes: Dispositivos profundos de racismo y clasismo en la cultura venezolana que han emergido en el contexto confrontacional y que tienen derivaciones en la acción de la oposición (Wilpert, 2007; Cadenas, 2011).

Tales dispositivos surgen de una identificación de ciertas clases sociales con la imagen del desarrollo estadounidense y de la percepción de una cierta condición de inferioridad nacional de la cual el orden centro-periferia no sería más que su consecuencia (Bracho, 1998; Rodríguez Araque, 2002; Malavé Mata, 2005).

En cualquier caso, el bolivarianismo y la participación se enmarcan en un vulnerable equilibrio de alteridades culturales en que los sujetos reconocidos como subalternos y hegemónicos en Venezuela se desconocen mutuamente o se reconocen como un enemigo a vencer, a diferentes niveles ideológicos de confrontación.

De ahí que sea tan importante la idea de “participación” en el socialismo bolivariano. La participación busca recomponer por la vía de la práctica política el cosmos incompleto con el que se ha negado o

negativizado la existencia social del otro que, en el caso del “chavismo”, es el sujeto subalterno³¹ reconocido bajo el nombre de “el pueblo”.

Por ello la participación permite recomponer la escisión entre sociedad y Estado, por la vía de la relación entre sujeto/sujeto colectivo y su Presidente. La participación da sentido a procesos de inclusión que revitalizan la pertenencia a la nación en los mundos de vida de los sujetos.

4. La experimentalidad o experimentalismo del Estado es una condición de todo el SSSA, incluyendo la práctica de las comunidades. Esta es provocada, al menos, por la percepción de urgencia social motivada por la pobreza, la desigualdad, el deterioro de la calidad de vida, la noción de soberanía y la polarización. Esta urgencia es un propulsor emocional recurrente que ha servido para explorar una y otra vez formas políticas consecuentes.

“Guiada por el principio robinsoniano de *Inventamos o erramos*, el gobierno revolucionario se asentó sobre sus referencias precursoras (Bolívar, Zamora, Rodríguez, Sucre, Miranda, entre otros próceres de la independencia suramericana) para ir, poco a poco, enriqueciendo el discurso bolivariano con elementos propios del socialismo, pero despojados de los errores o callejones sin salida del siglo XX. Este viaje no estuvo en ningún momento predeterminado, ni formaba parte de un plan maestro que debiera ejecutarse bajo cualquier circunstancia (recuérdese que en los inicios, el Presidente Chávez valoró la posibilidad de asumir los principios de la tercera vía)” (El Troudi y Monedero, 2006: 84).

De tal modo que es posible entender la experimentalidad del Estado como el resultado de una relación emocional entre Presidente,

³¹ Martín-Baró, acerca del fenómeno de la polarización: “la persona polarizada reduce su percepción acerca del grupo rival a categorías simplistas y muy rígidas, que apenas contienen una mínima identificación grupal y una fuerte caracterización negativa de orden moral. La polarización social es por esencia un fenómeno grupal que ocurre sobre el trasfondo de una sociedad escindida en clases y que involucra la elaboración de intereses sociales” (Martín-Baró, 2003).

Sociedad Civil y gobierno por responder a la percepción de urgencia. La correspondencia entre todas estas partes es en muy buena medida, el papel jugado por la participación y la inclusión en el subsistema.

Es importante acotar que esta relación no significa necesariamente la pertinencia del proceso de participación o de la representatividad sectorial, o de la propia política, pero explica en parte el comportamiento que ha tenido la participación con miras a reconstruir el nexo entre la sociedad y un Estado cuyos tejidos se habían debilitado peligrosamente durante la IV República.

Dado que la validez del proceso de participación está dada por la relación con el Estado y el proyecto nacional a través de la figura articuladora del presidente, éste también predetermina la manera como se definen la participación, su codificación, los marcos de análisis y las expectativas, por ofrecer algunos ejemplos. A través de esta predeterminancia la participación se presenta homogénea y simplifica, para bien y para mal, lo que se deriva de ella.

Cuando el presidente Chávez anunció en el 2003 las misiones educativas y alimentarias, dos de las comunidades observadas en esta tesis ya tenían sus propias políticas educativas y alimentarias autogestionadas. Una de ellas, en la Parroquia Francisco Eugenio Bustamante del Zulia, a partir del ejemplo de las leyes impulsadas por la Habilitante del 2001, recogía recursos entre varias familias, se agrupaban en una casa, hacían comidas y daban clases de educación primaria a niños y adultos debajo de los árboles de los patios de sus propias casas. Otra comunidad en la parroquia Ydelfoso Vásquez del Zulia, bajo el ya tradicional procedimiento de “invasión” de un terreno privado para repartir lotes de terrenos y construir casas, hacían sopas colectivas y daban clases de primaria a los niños del nuevo asentamiento. Estos últimos se habían inspirado en la simple declaratoria de las misiones en febrero-marzo del 2003. Ambas comunidades innovaban sus propias políticas alimentarias y educativas, e incluso, los programas educativos incluyendo, por ejemplo, temas relativos a huertos y autoconstrucción. A posteriori, algunos de sus activadores pasaron al sistema de misiones y otros tuvieron que ceder la experiencia, pero pasaron a integrar nuevos experimentos sociales.

A diferentes niveles, desde el gobierno hasta las comunidades, la experimentalidad o experimentalismo es una constante de todas las

observaciones.

En la medida en que “la urgencia” del experimento se desplazó del endogenismo al socialismo, los diagnósticos y las propuestas también se desplazaron de una salida dentro del mercado a una que desempodera al mercado frente a otras instancias sociales. Es particularmente en ese sentido que la experimentalidad del Estado o el *experimentalismo* (El Troudi y Monedero, 2006: 147) pudiera ser el camino hacia el Estado experimental (Santos, 2011).

En relación a conclusiones más particulares referidas al papel del SSSA en la seguridad alimentaria se puede subrayar:

1. Desde la 1a. a la 2a. ola de participación los problemas por generar seguridad alimentaria están fundamentalmente condicionados por un Estado cuyos aparatos eran insuficientes e ineficientes para impactar por sí solos el subsistema. Estas carencias fueron simbólicamente reemplazadas por una relación directa entre el presidente del Ejecutivo y la sociedad civil en vías de organizarse, fenómeno que se extendió hasta la 5a. ola. Una herramienta permanente, experimentalista y heterogénea de esa relación fue lo que esta tesis ha denominado “la agenda civil”. La agenda civil tuvo un papel cada vez más importante de la 1a a la 3a ola y se mantuvo de algún modo en la 4a. ola. En muchos casos la agenda civil resolvió y definió soluciones que incrementaron la generación de seguridad alimentaria en ausencia del Estado.
2. Los problemas de generación de seguridad alimentaria fueron identificados básicamente con la ineficiencia (Arelis, La Casa, COPROA, Coopedor, Modines, Angela, Luis Hómez), los conflictos internos (Arelis, Coopedor), la polarización (Coopedor, COPROA, Familia), la corrupción (Modines) y a los problemas de absorción del gasto público (Canal Z, Coopedor, Familia, Modines, Tucutunemo, PDVAL COL, Sabana de Parra, Gerencia productiva de Mercal). Sin embargo, organizados por olas, la ineficiencia y los problemas internos son más frecuentes de la 1a a la 2a ola, la polarización es más frecuente de la 1a a la 4a. y los problemas derivado de los problemas de absorción del gasto público son mayores y más graves de la 3a a la 5a. ola.

En los más de 11 años analizados, los problemas de eficiencia y sobre todo de absorción del gasto público parecieron ser los que más pesaron en la cristalización y despunte de las políticas.

Además, si se piensa que las políticas productivas son más sensibles a los problemas de estructura económica que las asistenciales, puede identificarse una mayor persistencia de los problemas de gasto y de estructura económica en todos los sujetos productivos del SSSA desde la 3a. y sobre todo en las olas 4a. y 5a. En estas olas, precisamente, la inyección de gasto y los controles verticales de la derivación de recursos, han sido más intensos y son crecientes.

Por ejemplo, entre los trabajadores y trabajadores-presidentes de las tres empresas básicas del Estado entrevistados en Guayana fue mucho más sonoro el discurso de que la empresa no funcionaba plenamente por causa de la desinversión del período neoliberal (que planificaba privatizar estas empresas a mejor precio), el sabotaje interno de los antiguos trabajadores del bipartidismo y por causa de que el Estado aún no había comenzado a comprar los insumos fabricados por ellos (en el 2010). Sin embargo, en el contexto de conversaciones y observaciones descritas a mayor densidad (Geertz, 1992) se encuentra la conciencia bien compartida de que los precios de las empresas artesanales de hierro brasileños, de las otras empresas que compiten en la fabricación de aluminio primario fuera de Venezuela y de las siderúrgicas han bajado de tal modo en el mercado mundial que es imposible mantener la nómina venezolana sin el apoyo del Estado (Sayago, Ganlush, Sabbad y demás Trabajadores-Presidentes, 2010). El discurso que motiva la organización del poder popular se sostiene en la polarización y en la urgencia de vencer al adversario en todos sus frentes, pero desestima las debilidades provenientes de otros frentes de tipo estructural en la economía.

Este fenómeno forma parte de lo que más adelante de describiré como “el desdibujamiento del mercado dentro del mercado”, en el cap. 6.5.

Por el contrario, los casos que pareciesen encajar menos en los problemas de eficiencia productiva y absorción del gasto público son Diana, Agrotiendas Socialistas y Enlandes (los datos de esta última EPS están indicados como parte del éxito de Diana en la redacción del sujeto 11).

Ello se explica en parte porque

a) los tres emprendimientos no dependen totalmente de la regulación de precios pues tienen un porcentaje de productos no regulados en el mercado o por fuera de la comercialización llamada “socialista” que les permiten un margen de maniobra,

b) declaran que, además, sus productos no dejan de ser medianamente rentables en su estructura de ganancias incluso bajo la regulación y la inflación hasta el 2011, y

c) al menos los dos primeros emprendimientos solapan una importante importación de productos que consiguen a un cambio regulado más estable que la inflación o el cambio paralelo, los cuales sostienen su oferta.

A diferencia de los otros emprendimientos, Diana, Agrotiendas socialistas y Enlandes demostrarían que, en condiciones propicias, algunos componentes del SSSA podrían ser sostenibles en el tiempo.

3. Todos los emprendimientos productivos que lograron arrancar fueron parcial o totalmente exitosos en proveer de más alimentación a redes más accesibles y por lo tanto, presentaron éxitos en la generación de soberanía alimentaria entendida por su objetivo definitorio de “acceso”. En otras palabras, casi todos generaron mayor producción la cual se colocó por vía de la asistencia o del mercado en el consumo alimentario. Las observaciones no indican que la participación social en el SSSA fue un fracaso; muchas veces indican lo contrario. Incluso algunos procesos de participación han llegado a integrar el territorio en la generación de seguridad alimentaria multiplicando con ello formas de participación social, económica y política.

Entonces, el problema no residiría en la incapacidad de los emprendimientos en colocar más alimentos y hacerlos accesibles, sino en aspectos relativos a la sostenibilidad de esos emprendimientos en el mercado y por consiguiente, en la “autonomía” y la “estabilidad” como objetivos secundarios de la seguridad alimentaria.

El impulso socio-político de los emprendimientos del 2003 y 2004, durante la 2a. ola de participación, se estaría agotando en la 4a y 5a ola mostrando un deterioro de la mística en la organización popular y en el Estado, a la manera de un ciclo que se cierra y se aleja de su interés por desarrollar soluciones desde la acción pública (Hirschman, 1986). Por un lado, el proyecto “socialista” impulsado por el Estado impulsa iniciativas no acatadas plenamente por las

organizaciones populares, no escucha el tiempo de su entorno social y marca aisladamente sus propias políticas por la vía del aumento del gasto en detrimento de los emprendimientos. Las organizaciones populares, si bien no se desentienden de las iniciativas estatales, se refugian en proyectos particulares y simultáneos, derivando recursos de diferente tipo por fuera de la dimensión productiva que exige el Estado.

A lo largo de todos esos sujetos y a lo largo de, sobre todo, las olas 3a, 4a. y 5a., el gasto intervino de manera determinante en:

- a) la cartera crediticia agrícola,
- b) en los refinanciamientos sobre fondos perdidos,
- c) en las expropiaciones y confiscaciones,
- d) en los subsidios directos,
- e) en cubrir los déficits generados por la corrupción o la ineficiencia,
- f) en la transformación de proyectos productivos en proyectos asistencialistas,
- g) en la compensación que supuso sacrificar exportaciones agrícolas,
- h) en los problemas recaudatorios provocados por la derivación de recursos fuera del sistema formal,
- i) en compensar los efectos de la inflación reprimiéndola de sus esquemas de precios y pagos
- j) en los gastos causados por la opacidad estadística y contable, etc.

Todo ello hizo al SSSA observado muy dependiente del gasto en las últimas olas, no solo en el nivel macroeconómico, aspecto que se explorará en los dos siguientes capítulos, sino en el nivel concreto de la implementación de las políticas sobre el propio mercado de alimentos.

Pero también todo ello indica la presión del Estado por mantener los niveles de suficiencia alimentaria a pesar de la progresiva desarticulación de la participación como recurso efectivo del SSSA.

6.4. Los problemas de *desdibujamiento del mercado dentro del mercado* en el discurso explícito y tras bastidores.

A lo largo de las observaciones y entrevistas, tanto en las declaraciones ante cámaras de TV o públicas, como las recogidas en privado, tras bastidores o bien sea bajo códigos sociales de confidencia, fue posible detectar la consolidación progresiva de un discurso que tiende a desestimar la importancia del mercado en la generación de seguridad alimentaria.

Este capítulo versa sobre ese aspecto puntual del discurso observado. A pesar de que es explícita la intención del Estado en impulsar un nuevo mercado interno que sirva desde sus estructuras organizativas e ideológicas a la generación de seguridad alimentaria, la presencia del gasto es también muy determinante en la práctica de las políticas. La prologada convivencia de ambas formas de asumir y comprender las políticas ha ido provocando justificaciones cada vez más estables en el discurso de la 3a. a la 5a. ola en las que el carácter socialista del nuevo mercado es sustituido por el carácter “socialista” del gasto.

Este solapamiento del discurso no solo se produce en las bases de la participación sino también de manera explícita en los cuadros dirigentes que definen las mismas políticas del SSSA. Para identificarlo, esta tesis lo denomina el *desdibujamiento del mercado dentro del mercado*.

Así, las políticas derivadas de las presiones electorales, las tácticas contra el otro bando polarizado, los primeros impulsos financieros, la condonación de deudas y otros ejemplos del orden de lo táctico o de lo perentorio, son reinterpretados como permanentes, necesarios y estratégicos. El procedimiento semántico consiste en extraer argumentos propios de una sociedad post-capitalista proyectada y aplicarlos sobre un contexto establemente capitalista.

En el caso de la alimentación, muchos de los discursos del *desdibujamiento del mercado dentro del mercado* son extraídos de concepciones más radicales de soberanía alimentaria que suponen que solo ésta es posible cuando desaparezca el mercado capitalista (Declaración de Nyéléni, 2007). Al no decodificar las concepciones post-capitalistas al contexto real del mercado en Venezuela, ni de los objetivos de Estado, se produce un tipo de política que solo puede mantenerse por el efecto del gasto y de los altos precios petroleros.

Esta tesis sostiene que es por causa de este trasvase conceptual que por ejemplo, el pago de la deuda social se confunde con el

empoderamiento, la asistencia se confunde con emancipación y el gasto público inabsorbido se confunde con un derecho social. Una de las ideas que parece ser común a este discurso es el *derecho a la riqueza petrolera*, la cual puede anclarse a manera de ejemplo en palabras del Viceministro productivo Sergio Rodríguez:

“Eso que nos hicieron creer a nosotros que no podíamos gastarnos el dinero del petróleo, eso no es así. El petróleo es nuestro y tenemos derecho a gastarlo” (Rodríguez, 2010).

En sí, este fenómeno no es totalmente nuevo y tiene ecos importantes en la literatura sobre cultura del petróleo (Malavé Mata, 2005), Estado Mágico (Coronil, 1997) y rentismo (Mommer, 1990; Baptista, 2001; García Larralde, 2005; Crazut, 2006, etc.). Sin embargo, al menos desde la perspectiva histórica explorada en el cap. 4, es posible pensar que en Venezuela no se habían conocido políticas de Estado que trasvasaran tan explícitamente la idea de incrementar el gasto como un recurso transitorio para el desarrollo basado en el mercado, a la idea de incrementar el gasto como un derecho permanente de la población.

6.4.1. El discurso del *desdibujamiento del mercado dentro del mercado*.

La información de las situaciones fue recogida en el contexto de interjuegos. Esto es, los informantes, aunque son testigos inexcusables de sus propios procesos, perciben sus problemas a través de diferentes dimensiones de su realidad y estas dimensiones dependen de los roles que deciden jugar explícita, implícita, consciente o inconscientemente en relación a sus situaciones, coyunturas y sus dinámicas de vida (tensiones, expectativas, esperanzas, identidades...) (Geertz, 1995; Bobrow, 2008).

Cuando la información colocada en el juego se puede contrastar con información objetiva que se produce en el mismo escenario discursivo se produce la posibilidad de dos discursos, uno que reconoce y valoriza la realidad a través de la información disponible, y otro que la niega. Esto es lo que en etnografía se denomina un *desdoblamiento del discurso* y ha sido estudiado por, entre otros, Marvin Harris como la tensión entre *etic* y *emic*. La percepción “nativa” o discurso *emic* se contradice con la interpretación del “juez” o discurso *etic*, pero, en la práctica del discurso ningún informante está dispuesto a reconocer, al menos cómodamente, tal contradicción (Harris, 2001 [1979]).

La información suministrada en los interjuegos del SSSA y del SSS no alimentario observados pueden contrastarse con los objetivos económicos de las políticas, información disponible en todos los escenarios. Estos objetivos consisten en generar soberanía económica dentro del mercado y, a partir de ésta, generar soberanía política y autodeterminación de la sociedad civil sobre los mercados tradicionales. Por tanto, la supervivencia del SSSA depende de su éxito sobre el mercado, con reglas del mercado.

Por ello resulta destacable que en las entrevistas de sujetos durante la 4a. y 5a. ola de participación el uso de ciertas expresiones fundamentales para pensar en problemas de mercado resultaban incómodos. En otras palabras, estas expresiones no “encajaban” en los interjuegos. Este es el caso de los discursos tales como:

- a) denominar a la producción “mercancía”,
- b) indagar sobre la estrategia para conseguir “divisas”,
- c) comprender cómo se planifica trascender el consumo nacional hacia la “exportación”,
- d) reconocer las estrategias para “subir la competitividad”,
- e) identificar las vías para aumentar la “rentabilidad”,
- f) preguntar por las “ganancias” de la empresa, etc...

Esta ausencia de “encaje”, o encaje precario de este tipo de discursos puede producirse por el hecho de que éstos amenazan una práctica y un conocimiento del entorno en la idea construida de socialismo, generando incertidumbre. No forman parte del esquema de conocimiento aceptado, pero, precisamente por ello, su silencio revela su importancia (Ducrot, 1998; Pucinelli Orlandi, 1992)³².

El hecho de que estos discursos fueron “no-encajables” a lo largo de todas las observaciones y entrevistas produce una recurrencia cualitativa de información que suele llamarse en etnografía

³² En el caso de la misma entrevista al Viceministro Rodríguez que sirvió de referencia al inicio de este capítulo, este informante declaró con complacencia los logros en Mercal en términos de rentabilidad mientras fue su director general en la 2a. ola, desde su fundación en el 2003 al 2004: “Con el flujo de caja se lograba pagar todo: CASA, transporte, personal, seguridad, local: los volúmenes eran muy altos”. Luego declara: “en aquel momento hablábamos de mercado. En este momento estamos hablando de abastecimiento” (Rodríguez, 2010).

“saturación” (Martínez, 1992). Ellos constituyen en el cuerpo de las recurrencias a lo largo de situaciones diversas y no conectadas directamente entre sí, un hecho social, incluso, un hecho cultural.

Estos discursos “no-encajables” son discursos *a la sombra* de los discursos (Ducrot, 1998; Pucinelli Orlandi, 1992) que ordenan el sentido de los discursos más explícitos y, al mismo tiempo, delimitan la naturaleza de las representaciones que los informantes tienen del SSSA y su experiencia de ellos.

La incomodidad del término “mercancía” responde a la incomodidad de reconocer, por ejemplo, que el usuario de los productos debe comprarlos a precios adecuados para garantizar el sostenimiento del emprendimiento y que, por tanto, éste no tiene por finalidad *solamente* la generación de seguridad alimentaria.

La incomodidad de las ideas de “divisas”, “exportación”, “competitividad” responde, por ejemplo, a la incomodidad de reconocer que la épica socialista nacional depende de reglas de juego globalizadas muy diferentes a las que se fundaron con el SSSA. Participar en estas reglas del juego requeriría una actitud a favor de la competencia por mayores y mejores ganancias en el mercado externo, necesarias objetivamente para el sub-sistema, pero que no luce estar en concordancia con el espíritu socialista.

“Rentabilidad” y “ganancia” son incómodas porque incómoda es la idea de que, por ejemplo, en ausencia de ganancias propias, quien mantiene básicamente el SSSA es el mercado petrolero a través del Estado, lo que supone un debilitamiento estructural de la idea de “soberanía” al nivel de la participación social. En su lugar se habla de los beneficios sociales que generan los emprendimientos y no de la manera como se sostienen.

En la medida en que los discursos de las bases de la participación hasta los cuadros dirigentes plantean las políticas en estos términos, se produce una derivación de la idea socialista de poder popular como aquel que se sostiene sin el gran capital, a aquel que se sostiene gracias a un Estado proveedor. Así el mercado se desdibuja de la política a pesar de que los informantes saben que el Estado es el propietario no participado del medio de producción más importante del sub-sistema que actúa en el mercado global.

Resumiendo a los efectos de esta investigación, se detecta una idea *en silencio* o *a la sombra*, una idea objetiva pero ocultada en todos los discursos que puede resumirse en esta frase:

“La seguridad alimentaria solo depende del Estado”.

Esta idea tiene dos comportamientos. Uno en los cuadros directivos y otro en los cuadros trabajadores. En ambos se producen el mismo tipo de desdoblamientos.

La idea de que *la seguridad alimentaria solo depende del Estado* es de algún modo reconocida en las entrevistas a Sergio Rodríguez miembro de la Vicepresidencia Productiva de la República, Carlos Osorio, Ministro de Alimentación y otros sectores directivos, pero también es cierto que está sometida permanentemente a un tratamiento de ambigüedad. Tal tratamiento utiliza la idea de que *los ingresos del Estado permiten la superación de la concepción capitalista tradicional que antes ponía siempre en primer orden la ganancia sobre la seguridad alimentaria*.

La idea supone que el orden de las prioridades está invertido en el capitalismo. Pero luego, al desinvertirlas, no se sugiere como la seguridad alimentaria permitirá la generación de ganancias.

Sergio Rodríguez, miembro activo de la Vicepresidencia Productiva para el 2011, por ejemplo, lo explica así en su entrevista.

Cuando se le comenta acerca de los efectos que ha producido el gasto público en el fortalecimiento de la renta de capital sobre la renta del trabajo, en el aumento de la dependencia económica y en el sobre-dimensionamiento del sector terciario, según la investigación del ex-ministro Víctor Álvarez (Álvarez, 2009), Rodríguez responde de nuevo negando la posibilidad de construir el socialismo venezolano utilizando el mercado interno:

“Eso es una verdad a medias” ... “Nosotros nunca hemos sido una economía manufacturera, real, sólida. Cuando te digo es que la mayoría de los bienes de capital, maquinaria, todo eso, una gran parte de ello ha provenido de la renta petrolera, a través de las instituciones crediticias que ha tenido el Estado todo el tiempo. Una gran parte de las zonas industriales las ha hecho el Estado. También ha montado los sistemas de servicio. No se puede entonces decir que el capital gana frente al Estado, porque nosotros siempre hemos vivido del petróleo” (Rodríguez, 2010).

En otras palabras, el capital privado es, a fin de cuentas, también un resultado del gasto público, de la deuda externa y de la renta petrolera. Álvarez subrayaba que el aumento de la renta privada e inorgánica es creciente y que esto conllevaría a mayor dependencia económica externa y al capital privado terciario durante el chavismo. Pero, según Rodríguez, este hecho, aunque es deseable superarlo, es “de siempre” y por tanto, normal. El rentismo no sería el efecto del gasto público sobre la economía, sino una parte heredada del paisaje.

De algún modo, no poder reimpulsar el mercado orgánico, soberanista, forma parte estructural de ese paisaje y hay que convivir con eso:

“Si. Fíjate. Nosotros venimos de una cultura, más que socialista, comunista. Una cultura originaria. Se puede decir que era una economía que vivía del entorno. Ni siquiera se puede decir que vivían del intercambio, de algún mercado de otros tipo. De ahí pasamos a la economía agroexportadora, en los tiempos de la colonia, y no fue hasta principios del siglo pasado que comenzamos lo que se llama una economía de la renta. Básicamente de la renta petrolera” (Rodríguez, 2010).

En la entrevista a Franco Manrique, Director de Inmerca, también llamado el “Mercado de Coche”, el mercado mayorista de alimentos más importante del país, se repite el mismo desdoblamiento.

Es muy importante indicar que desde las observaciones de campo se ha entendido que Franco Manrique es una figura que produce mucho respeto entre los conocedores del tema agrícola en Venezuela. Es conocido como un estudioso del agro venezolano y sus opiniones suelen tener algún peso tanto en el movimiento campesino como en la esfera del Gobierno Nacional. Sus discursos se ven reflejados recurrentemente en otros discursos en diferentes sujetos y situaciones.

Se vacía aquí parte de una entrevista realizada ante cámaras de TV nacional. Con el fin de mostrar cómo el discurso se desplaza de un momento a otro y cómo se contrasta con las situaciones observadas en el campo, se coloca el cuerpo de la entrevista en interjuego con el moderador.

F.M.- “Si entendemos la alimentación, no como mercancía, sino como un derecho, el Estado está en la obligación de colocar los productos a precios justos en la calle. En estos momentos estamos haciendo un plan para poner el producto a precio justo, pues los intermediarios son los que elevan el

precio un 120% del precio del productor al consumidor, todo pensando en la ganancia”

Moderador.-“Pero eso se ha intentado en otras oportunidades, incluso en la IV República, y siempre todo se vuelve a recolocar...”

F.M.- “... si, pero ahora nosotros vamos hacia la nacionalización del transporte...”

Moderador.- “¿Y eso no es una forma de subsidio?”

F.M.- “...entendido como parte del derecho a la alimentación y no como un subsidio” (Manrique, 2010).

Manrique reconoce la importancia de que el Poder Popular sea autosustentable pero al mismo tiempo indica la necesidad de colocar precios “justos”, entendidos como precios justos para el consumo y la producción. Para lograr esto, se propone más gasto público (nacionalizar la red de transporte) con el objetivo de *regular* los precios en ambas partes de la cadena. Pero las dos partes están muy lejos de pesar lo mismo política y económicamente: los consumidores representan el sector terciario sobredimensionado de las ciudades, demográficamente mucho mayor, y los productores corren el riesgo de depender más del Estado si el sistema de transporte nacionalizado llegase a ser subsidiado. La idea de precio “justo” se desarrolla a continuación.

Moderador.- “¿No sería preferible ver el problema en la otra parte de la estructura económica, en el hecho de que hay un grueso de la población en ciudades, que viven de la importación, el comercio, las oficinas, y que empujan una demanda interna tremenda, detrás de la cual andan corriendo los productores, y se aprovechan los intermediarios?”

F.M. “Bueno si, eso también”... “Pero fíjate en los EEUU y los países del 1er Mundo: ellos subsidian a su agricultura y luego la OMC nos pide que liberemos la nuestra ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que liberarlo? Si pensáramos en el mercado, tendríamos que traer la cebolla del Perú y Ecuador, que es más barata allá” (Manrique, 2010).

Aquí se revela la primera ambigüedad. Son necesarios precios justos para los campesinos pero, para lograr esto, es necesario subsidiar. De tal modo que un precio justo no está determinado por la producción y su colocación, sino por lo que el Estado considera justo que el campesino debe recibir y el consumidor pagar. Esto protegería al campesino del imperialismo. Pero el ejemplo es claro: la liberación de precios pasa de ser una trampa de los países post-industriales (“el 1er. Mundo”) a una protección frente a los productores ecuatorianos y peruanos, además aliados en la Comunidad Andina de Naciones y uno de ellos miembro del ALBA.

En palabras más sencillas, para Manrique los “precios justos” no pueden estar definidos por el mercado sino por la protección estatal, incluso en contra de otros países pobres y aliados, con mayor competitividad en la producción de alimentos.

En las observaciones del Mercado de Coche, regido por el mismo Inmerca, se hizo patente que el ejemplo de Manrique es, en la práctica, un gran problema.

Hasta finales del 2010 el SSSA no había podido levantar la producción de cebolla y ajo, e incluso, ésta se había contraído radicalmente. Las cifras del BCV indican que siguió contrayéndose la agricultura en el 2011 (BCV, 2011 b). Si bien no se consiguen estadísticas, el Mercado de Coche mostró que al menos para todo el segundo semestre de ese año, *la totalidad* de la cebolla y el ajo provinieron de Ecuador y Perú, por demás, sin permisos de importación. Este fenómeno se repitió para todo el país. Esto fue ratificado por entrevistas a funcionarios del Mercado (Trabajadores del Mercado de Coche, 2010).

En otras palabras, el mercado (esto es, la presión de la demanda nacional a expensas de las regulaciones) repuso el ajo y la cebolla en el Mercado de Coche a pesar de las regulaciones, las compras del Estado, la distribución de tierras, los créditos agrícolas, otras estrategias del SSSA con el fin de garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria, además de las restricciones aduaneras de la Guardia Nacional en la frontera. La demanda, como sucede igualmente con el mercado de divisas o la inflación, deriva hacia fuera del subsistema sus recursos para adquirir lo que necesita o no empobrecerse. La merma de la producción en esos rubros junto a las regulaciones, el control cambiario y la inflación, hizo que la demanda encontrara otros canales que finalmente descapitalizaron el subsistema, a pesar de la inversión del SSSA. En ese entonces no habían habido inundaciones por lluvias

en el campo venezolano, por lo que no puede argumentarse este factor en el descenso de la producción.

Según el Director de Inmerca la protección que debe brindar el Estado al “precio justo” debe tomar la forma de subsidios, regulaciones de precios, más inversión agrícola o el control de divisas para minimizar la incidencia del mercado. Sin embargo el subsistema, incluyendo al Estado, depende de él. El mercado, en este caso, se impuso a la protección y utilizó agentes del mismo SSSA (Cadivi, Guardia fronteriza y el mismo Mercado de Coche) para satisfacer la presión de la demanda.

“Moderador.- Necesitamos divisas ¿No sería mejor exportar cebollas para liberarnos de la dependencia del petróleo?

F.M.- ...No podríamos competir con ellos. Ve, ¡Incluso hay países que bajan sus precios para poder competir!!

Manrique se refiere a países y empresas que bajan provisionalmente los precios de sus productos por debajo de los costos para derrotar a la competencia. Es cierto que el mercado tiene su propia lógica cuyo fin es la ganancia y que en la lógica del Estado venezolano se propone que la ganancia sea el motor de una distribución más justa de la alimentación en la población. Pero para el Director el problema no sería la estrategia sino la lógica misma de la competencia por cuanto sería mejor no exportar para no competir.

“Moderador.- Pero, ¿y en el caso del plátano [plátano macho] y la piña? Ellos [el “Primer Mundo”] no producen eso. Y ahora tenemos una restricción de exportación de esos rubros para satisfacer solo la demanda interna”.

F.M.- ¿No se puede exportar el banano?

Moderador.- No. El Zulia tenía una importante exportación, y se cayó.

F.M.- Bueno, eso es un problema ... Yo creo que Chávez va hacia el subsidio del agro, porque es un derecho.

Moderador.- ¿Y eso no hará más dependiente al poder campesino?

F.M. La producción debe ser sustentable ecológicamente, políticamente, en el poder popular. Debe sostenerse en lo

económico, pero debe ser sustentable en lo demás” (Manrique, 2010).

Cuando Manrique indica la necesidad, por un lado, de subsidios, protección del agro frente al mercado exterior, protección de los precios en el consumidor, esto es, de la gran demanda impulsada en las ciudades y, por el otro, de poder popular y sostenibilidad política, solo está hablando de gasto público. El gasto público debería poder sostener las tres cosas: la demanda, la producción y la soberanía política.

Según Manrique, el Estado puede y debe (es un “derecho”) sustituir al mercado al menos, suficientemente, como para que luego predomine una economía autosustentable. Tal economía no ha sido alcanzada, e incluso, ha retrocedido, como se verá en el capítulo 6.5.

El *desdibujamiento del mercado dentro del mercado* tiene también fuentes en la propia planificación de Estado. En el Proyecto del Primer Plan Socialista 2007-2012 se establecieron 6 directrices: Nueva Ética Socialista, La Suprema Felicidad Social, Democracia Protagónica Revolucionaria, Modelo Productivo Socialista y Nueva Geopolítica Nacional. De estas directrices solo la 4a. apuntaba al tema económico. Sin embargo su descripción tampoco explicaba como serán las condiciones en las que surgirá el mercado, solo se habla de sus efectos perversos en la sociedad. La descripción del nuevo modelo socialista en el plan de la república se limitaba a esta frase:

“Con el fin de lograr trabajo con significado, se buscará la eliminación de la división social, de la estructura jerárquica y de la disyuntiva entre la satisfacción de las necesidades humanas y la producción de riqueza subordinada a la reproducción del capital” (Ministerio del Poder Popular para la Planificación y el Desarrollo, 2001).

¿Puede producirse riqueza sin la reproducción del capital? o ¿puede el trabajo tener significado sin estrategias que permitan la reproducción del capital sobre el cual reposa?

El proyecto del Primer Plan Socialista (PPS) circuló en el país como si fuera el propio PPS por varios años y, en la práctica, inspiró parte de la agenda civil durante la fundación de los consejos comunales y otros movimientos de participación de la 3a. ola. Sin embargo, ya con la

definición final del PPS esta redacción cambió:

“El modelo productivo responderá primordialmente a las necesidades humanas y estará menos subordinado a la reproducción del capital” (Ministerio del Poder Popular para la Planificación y el Desarrollo, 2011).

En los casos del Director de Inmerca, del Primer Plan Socialista o bien en el caso de otros programas de Estado como los 5 Motores, el discurso presenta importantes coincidencias con el discurso expresado sobre soberanía alimentaria del Foro Social Mundial de Mali, ya descrito en el capítulo 3.4, con sus implicaciones en la proyección en una sociedad post-capitalista.

Finalmente, ya en el nivel de las bases de la participación, el discurso observado es similar.

Las Cooperativas de Sabana de Parra observadas y entrevistadas lucían orgullosas de haber levantado la producción de maíz a niveles récord desde que el Estado las apoyó. Pero, tal como se mostró en el sujeto 11 del cap 6.3.5., se han quejado de retrasos de más de dos años en los pagos de las compras que el Estado hizo de toda la producción del maíz, problemas de transporte, que sus ingresos no compensaban la inflación y que no podían acceder a los suministros importados fácilmente. El pago de las cosechas finalmente se hizo con casi el 60% de devaluación por efectos de la inflación. Para compensar esto los miembros de las cooperativas exigieron más gasto público: más expropiaciones, más fiscalización de la especulación (lo que, según puede desprenderse de las percepciones, es vista como la principal causa de la inflación), más créditos y más subsidios.

“Si el gobierno no le pone coto a esos especuladores, y a los escuálidos, porque los escuálidos [oposicionistas] están metidos hasta en la sopa, no sé qué vamos a hacer.” (Coop. Socialista Sabana de Parra, 2010).

Cuando se coloca en el interjuego la idea de que es el mismo gasto público el que genera la demanda, y con ésta se genera la inflación, tal idea se percibe como algo abstracto, algo que no vale la pena hacer concreto.

La inflación sigue luciendo, a pesar de las explicaciones, como un asunto inasible y como naturalmente endémico a la sociedad. Además no resulta sencillo superar la contradicción de que el gasto público, el

mismo que les liberó de las dependencias al capital privado, pueda ser el mismo causante de los problemas que hoy empiezan a vivir.

No podría ser de otra forma: ellos han cumplido con las cuotas de producción y sienten haber cumplido gracias a las políticas del Estado ¿Por qué habrían de ser esas mismas políticas las que generaron el problema?

Entonces la lógica se reordena y niega la posibilidad de considerar los efectos del gasto público en el subsistema (Coop. Sabana de Parra, 2010; Frente Socialista Pedro Camejo, 2010).

Para ejemplificar estos discursos se harán algunas referencias a los interjuegos.

En las entrevistas, con el fin de detectar estos desdoblamientos se introdujo frecuentemente la siguiente idea:

“Chávez dijo en Enero de este año [2010] que era imperioso exportar. Que todos teníamos que abocarnos a la exportación, a conquistar mercados para hacernos más fuertes. ¿Qué se han planteado ustedes en este respecto?”.

De este modo se redirige el discurso, por la vía de las mismas declaraciones del gobierno (fuente estimada de legitimidad discursiva) hacia una producción que genere divisas y reduzca la dependencia al petróleo.

Se recogieron respuestas como esta:

“Eso de la exportación está bien. Pero todavía no. Eso es un asunto mediático [esto es, una estrategia mediática del Presidente Chávez]. Aquí lo único en que estamos pensando es en poner en el mercado interno” (Frente Socialista Pedro Camejo, 2010; Godoy, 2010).

O bien,

“Es necesario que pongamos este proceso en el contexto de clase, por lo cual tenemos que sustituir la idea de producción y ganancia por organización popular... sin la organización popular no podemos construir la soberanía alimentaria” (Frente Socialista Campesino Pedro Camejo, 2010; Godoy, 2010).

O bien,

“‘Exportar’ dijo Chávez. Claro, pero es importante que entendamos que seguridad alimentaria es solamente poner los productos en el mercado, no importa de dónde vengan. Soberanía alimentaria es que somos nosotros quienes los producimos. Y colocamos los productos sin esa dominación de mercado. Solo así es que es que podemos exportar” (Frente Socialista Pedro Camejo, 2010; Godoy, 2010).

De tal manera que el compromiso ideológico no se plantea como un asunto de salud del subsistema venezolano sino como la ética revolucionaria en la empresa y su solidaridad con la demanda: producir más (aunque los pagos del Estado incluso no lleguen a los productores, o lleguen devaluados, entre otros sacrificios) con el objetivo de satisfacer la demanda nacional o, desde una perspectiva fuera del mercado, las mínimas necesidades alimentarias nacionales.

La opacidad de las cifras contables también está asociada al *desdibujamiento del mercado dentro del mercado*. A lo largo de todas las situaciones estudiadas ningún informante, con excepción de los Trabajadores Directores de Aceites Diana (Trabajadores-Directores de Aceites Diana, 2010) presentó estadísticas detalladas sobre logros, fallas y prospecciones del mercado. Las cifras se remitían básicamente a récords de producción por rubro, metas y a importes de inversión. No se presentaron estudios en el poder popular ni en los funcionarios sobre, por ejemplo, deudas de expropiación, estimaciones de costos e inflación, planes de mercadeo, estrategias a mediano y largo plazo, créditos, planes de exportación y hasta prever escenarios de impago. Ni siquiera en las Memoria y Cuenta del Ministerio de Alimentación (Minppal, 2009; Osorio, 2010; Minppal, 2011). Tampoco se encontró a lo largo de las observaciones alguna expresión de preocupación o inquietud por la inexistencia de esas cifras.

Por el contrario, las declaraciones del Ministro de Planificación, el INE y el BCV describen una situación estructural que no es considerada ni analizada a profundidad en las prácticas cotidianas del poder popular y el resto del SSSA.

Para finalizar, a pesar de todos los argumentos y discursos que sostienen aquí la existencia de un *desdibujamiento del mercado dentro del mercado* en el discurso de las situaciones del SSSA, tampoco es cierto que el discurso a favor del mercado ha desaparecido totalmente a favor del abastecimiento simple, como podría sugerirse.

La rentabilidad propia del SSSA se exige como fundamental tanto para el mantenimiento de las empresas como para alimentar los Fondos Socialistas de Desarrollo.

El mismo presidente Chávez definió soberanía alimentaria nuevamente en el 2010 y afirmó:

“Las empresas deben ser sustentables, y en la medida en que vayamos levantando la escala de la producción, esos dividendos serán mayores, y parte de esos dividendos deben ir a un fondo social... El propósito es que la Empresa Socialista transforme, transforme su entorno y contribuya a transformar el país” (Chávez, 2010 c).

De allí que esta tesis hable de desdoblamiento del discurso entre la realidad disponible y la realidad negada.

6.5. Los problemas de gasto público y absorción económica.

En un primer momento este capítulo va mostrar, nuevamente en la dimensión del discurso, que los problemas de estructura económica periférica, la demanda de los trabajadores del sector terciario y los problemas de absorción económica asociados al gasto público son percibidas de algún modo por los agentes de las prácticas productivas del poder popular. De modo que, preguntados directamente, al margen del interjuego polarizado o de defensa de la revolución, el problema de la estructura económica es un hecho reconocido por los agentes sociales que afectaría la productividad.

En un segundo momento, en el cap. 6.5.2. y ya fuera de la dimensión del discurso, se explorarán las evidencias de la absorción del gasto a partir de los datos económicos obtenidos de diferentes fuentes con el fin de construir un retrato macroeconómico del problema que afecta al SSSA.

De igual modo este capítulo tiene por objetivo construir un argumento que identifique las debilidades de la seguridad alimentaria venezolana en sus sub-objetivos “estabilidad” y “autonomía”.

Nos referiremos como *problemas de absorción del gasto público* a la imposibilidad que presenta el aparato productivo nacional para convertir los ingresos petroleros derivados por el Estado hacia la sociedad en parte constitutiva de la economía. Al no poder convertir los nuevos recursos, por causa de la inmadurez de su aparato productivo y empresarial u otros factores, éstos se desplazan fuera del

subsistema en diferentes formas como la inflación, importaciones, devaluación, fuga de capital financiero, contrabando, etc. El proceso resulta en una descapitalización económica y social de la economía objeto de ese gasto. Entre sus múltiples nombres, se trata de un proceso que tiene sus antecedentes originales en el concepto de “recalentamiento” en la economía keynesiana y que se ha desarrollado bajo conceptos como “la enfermedad holandesa”, “el efecto Potosí” o “el efecto Venezuela” (Keynes, 1939; Dilliard, 1973; Pérez Alfonzo, 1976; Karl, 1997; Keynes [1936] 2010; Pérez Castillo, 2006; Mendoza Potellá, 2010).

En el caso venezolano se trata de un fenómeno que se mostró por primera vez con toda su dimensión durante la Gran Venezuela. Los *problemas de absorción del gasto público* suponen replantearse la manera como se ha ejercido lo político en la historia venezolana y la consecuente transformación de la relación entre democracia, abundancia (entendida como desproporción) y Estado. Pérez Alfonzo proponía que esta relación solo podía comenzar a resolverse haciendo conciencia de la desproporción de los ingresos:

“Para seguir nadando en divisas se pretexta aprovecharlas mejor. Cambios en las instalaciones y en los hombres, nuevos programas o instrumentos de ejecución harían el milagro de atender a las múltiples necesidades nacionales encaminando el país hacia un programa firme y acelerado...

....La verdad no se quiere comprender en toda su profundidad no obstante las repetidas demostraciones de que el despilfarro es un efecto o manifestación causado por los excesos de divisas generados en cierta forma fuera de la actividad económica, propia del país” (Pérez Alfonzo, 1976:144).

6.5.1 Problemas atribuidos a la estructura económica en las observaciones del SSSA.

En el transcurso de las observaciones, se preguntó regularmente y sobre todo a lo largo de las situaciones productivas del SSSA en la 4a. y 5a. ola, cuáles eran los problemas más importantes que amenazaban el éxito del emprendimiento.

De ahí se obtuvieron varias categorías ordenantes: los problemas atribuidos al Estado como administrador, los atribuidos al funcionamiento de la empresa como tal, los atribuidos a la estructura económica (mercado, perifereidad, fuga de recursos, etc.) y, por último, los atribuidos con el fin de sabotaje político y delincuencia. Luego, a manera de crear zonas de contraste, se preguntó lo mismo en las entrevistas a agentes del Sistema Socialista de Soberanía no Alimentaria (SSSnA).

Los resultados del SSSA fueron vaciados en los gráficos 20, 21, 22 y 23. Los del SSSnA en los gráficos 24, 25, 26 y 27.

En el análisis de los resultados relativos al SSSA, se destaca la recurrencia del problema de la estructura económica por encima de los demás problemas.

Gráfico 20. Problemas atribuidos al funcionamiento del Estado como administrador.

Problemas declarados.	Retraso y fallas en las compras del Estado	El Estado adeuda patrimonio	El Estado aún subsidia directamente la producción o servicio	El Estado impone directiva y burocracia
SSSA				
Diana (Aceites)	No	No	No	No
UPS Tucutunemo	Si	No disponible (N.d.)	N.d	No
Mercal	Si	N.d.	Si	Si
Cooperativas Agrarias Sabana de Parra	Si	N.d.	No	No
Mercado de Coche	No	No	No	Es estatal.
Agrotiendas Socialistas	No	No	No	Es estatal.
PDVAL (COL)	Si	Si	Si	Si
Agropatria	Si	Si	N.d.	Es estatal.

Gráfico 21. Problemas auto-atribuidos al funcionamiento de la empresa como tal.

Problemas Declarados	Problemas técnico-tecnológicos.	Problemas de administración y/o organización internos (incluyendo corrupción)	Falta de compromiso ideológico	No es rentable	Personal ineficiente
SSSA					
Diana	No	No	No	No	No
Mercal	Si	Si	Si	Si	Si
Coop. Sabana de Parra	No	No	No	No	No
Agrotiendas Socialistas	No	No	No	No	No
Agropatria	No	N.d.	N.d.	No	No
UPS Tucutunemo	Si	Si	No	No	No
PDVAL (COL)	Si	Si	Si	Si	Si
Mercado de Coche	Si	Si	No	No	No

Gráfico 22. Problemas atribuidos a la estructura económica.

Problemas declarados	La demanda sobrepasa la producción o el servicio.	Dependencia de la importación en más de un 50% de la inversión.	Fuga de mano de obra y cerebros al sector público u otro sector público.
SSSA			
Diana	Si	Si	Si
Mercal	Si	Si	Si
Agrotiendas Socialistas	Si	Si	Si
Mercado de Coche	Si	Si	N.d.
PDVAL (COL)	Si	Si	Si
Agropatria	Si	Si	Si
Coop. Sabana de Parra	Si	N.d.	Si
UPS Tucutunemo	Si	N.d.	Si

Gráfico 23. Problemas actuales atribuidos al sabotaje político y/o la delincuencia.

	Sabotaje Político	Delincuencia
Mercal	Si	Si
PDVAL (COL)	Si	Si
Agropatria	Si	No
Mercado de Coche	No	Si
Coop. Sabana de Parra	No	No
Agrotiendas Socialistas	No	No
UPS Tucutunemo	No	No
Diana	No	No

En los gráficos 20 y 21 es posible identificar que los emprendimientos observados que en su momento fueron coordinados por el poder popular aquejaron menos problemas que los coordinados por el Estado.

El gráfico 22 indica que los problemas que revelan una falla en la estructura económica del subsistema afectan claramente a todos los emprendimientos observados.

Sin embargo, el gráfico 23 también sugiere la importancia de la estructura económica del subsistema venezolano en la percepción de las políticas públicas, esta vez indirectamente. A pesar de que en las inflexiones (gestualidad, prioridad en las respuesta, posturas públicas, tono épico, etc.) los discursos a favor de la revolución tienen mucho más relieve y, a pesar de que el discurso sobre sabotaje político (esto es, sobre el rol desleal de los “escuálidos” u opositores radicales al chavismo) es un elemento permanente de la construcción del bolivarianismo, éstos no tuvieron tanta recurrencia en las observaciones y entrevistas como los problemas relativos a la estructura económica.

Dicho de otro modo, los interjuegos dominan la manera en la que se definen las conversaciones y se identifican las causas, por ello son más visibles a la observación las causas destacadas o “iluminadas” (Puccinelli Orlandi, 1992). Tal visibilidad viene dada por una mayor efusividad en el discurso, actitudes corporales contrastables a la norma y recursos expresivos dirigidos hacia lo emocional. Las causas más iluminadas o visibles son las relativas a la polarización, la eficiencia y los problemas ideológicos del mismo Estado. Sin embargo, los problemas declarados que son comunes a todas las situaciones son de otro tipo a los “más visibles”. Tal es el caso de los problemas relativos a la estructura económica del subsistema: la imposibilidad de la producción o servicio en alcanzar satisfactoriamente a la demanda en algún plazo, la dependencia del propio emprendimiento a las importaciones, así como la derivación de recursos importantes hacia fuera del emprendimiento e inclusive del territorio objeto de desarrollo dado los atractivos asociados al sector terciario, incluyendo gobierno.

Visto desde otro ángulo, si se analizan los gráficos 22 y 23 junto al código emocional-corporal de lo que aquí se denominan problemas “más visibles”(efusividad, recursos audaces de la lengua, corporeidad específica...), es posible percibir que los problemas atribuidos a la estructura económica son menos susceptibles para la movilización por el discurso político.

Estas entrevistas no incluyeron los problemas relativos al descontrol del gasto en relación al emprendimiento, puesto que la mayor de las veces es percibido como parte de la misión del Estado para evitar que sucumba el SSSA, y no una de las causas del problema. De hecho, por el contrario, los emprendimientos, inclusive los que demostraban buen nivel de rentabilidad, insistían en que el gasto debía siempre ser mayor (en forma de salarios, expropiaciones, divisas, compras, etc.).

Los siguientes gráficos relativos al SSSnA ayudarían a indicar la naturaleza estructural de las políticas públicas analizadas. Puesto que el SSSA forma parte de la misma estructura que otras cadenas productivas del subsistema venezolano, las observaciones deberían ser similares.

Sin embargo los gráficos 24, 25, 26 y 27 muestran que no es así. Aquí el sabotaje político sí es denunciado como causa más recurrente de problemas que los relativos a la estructura económica.

Esto hace pensar en la relación directa que tiene el gasto público recién inyectado y los escenarios.

Cuando se observaron las empresas alimentarias del 2010 éstas eran sujeto de importantes sumas de gasto, las cuales además se multiplicaron en el 2011 y luego hacia el 2012 con la Gran Misión Agro Venezuela (Loyo, 2011). Las empresas no alimentarias no habían sido beneficiadas en el 2010 por los financiamientos regulares que dispuso el Estado luego del 2003 para la producción alimentaria.

De hecho, a diferencia del 2011, en el 2010 las entrevistas y los informes de Estado recogidos entre las llamadas Empresas Básicas (aluminio, Hierro, siderúrgica...) se hablaba repetidamente de una desinversión que se extendía desde la IV República hasta el año mismo de la entrevista (Sayago, Ganlush, Sabbad y demás Trabajadores-Presidentes, 2010).

Esto habría producido en los trabajadores no alimentarios la percepción de que los problemas de la estructura económica no formaban parte de las amenazas de las EPS, sino el hecho de que apenas funcionaban. Con baja producción, pocas ventas, con graves problemas tecnológicos, los trabajadores percibían que los problemas no residían en la estructura económica sino mayormente en los individuos (burócratas, lobbies, agentes de corrupción, componentes sindicales, debilidad institucional...) que no solo hacían imposible arrancar a sus empresas, sino que además lo depredaban (robos, descrédito, amenazas de muerte...).

Corresponderá a una investigación diferente observar los cambios en las situaciones y su impacto en lo macroeconómico a la luz de las importantes inyecciones de gasto que se hicieron a partir de la Gran Misión Vivienda, la cual impulsó las ventas y la producción del aluminio, el hierro y la fabricación de tuberías en el 2011 por la vía de las compras del Estado.

Gráfico 24. Problemas atribuidos al funcionamiento del Estado como administrador (Sistema Socialista de Soberanía no Alimentaria)

Problemas declarados.	Retraso y Fallas en las Compras del Estado	El Estado adeuda patrimonio	El Estado aún subsidia directamente la producción o servicio.
SSSnA			
Ferrominera del Orinoco	Si	Si	Si
Venalum	Si	Si	Si
Alcasa	Si	Si	Si
Venirauto	N.d.	N.d.	Si
Siventub	Si	Si	Si

Gráfico 25. Problemas atribuidos al funcionamiento de la empresa no alimentaria como tal (Sistema Socialista de Soberanía no Alimentaria)

Problemas Declarados	Problemas técnicos	Problemas de administración y/o organización internos (incluyendo corrupción)	Falta de compromiso ideológico	No es rentable	Personal ineficiente.
SSSnA					
Ferrominera del Orinoco	Si	No	No	Si	No
Venalum	Si	Si	No	Si	No
Alcasa	Si	No	No	Si	No
Venirauto	Si	Si	N.d.	Si	N.d.
Siventub	Si	Si	N.d.	Si	N.d.

Gráfico 26. Problemas atribuidos a estructura económica (Sistema Socialista de Soberanía no Alimentaria)

Problemas Declarados	La demanda sobrepasa la producción.	Dependencia de la importación en más de un 50% de la inversión.	Fuga de mano de obra y cerebros al sector público u otro sector público.
SSSnA			
Ferrominera del Orinoco	2010: No	Si	N.d.
Venalum	2010: No	N.d.	N.d.
Alcasa	2010: No	N.d.	N.d.
Venirauto	Si	Si	N.d.
Siventub	No hay producción	Si	Si

Gráfico 27. Problemas atribuidos al sabotaje político y/o la delincuencia (Sistema Socialista de Soberanía no Alimentaria)

Problemas Declarados	Sabotaje Político	Delincuencia
SSSnA		
Ferrominera del Orinoco	Si	N.d.
Venalum	Si	Si
Alcasa	Si	Si
Venirauto	N.d.	N.d.
Siventub	Si	Si

6.5.2. Gasto público y absorción económica.

*Todo esto está dicho ya, pero como nadie escucha
es preciso empezar continuamente.*

Juan Pablo Pérez Alfonzo

El Estado venezolano experimentó dos cambios significativos entre la 4a. y 5a. ola de participación social. Uno básicamente de tipo político y otro básicamente de tipo económico.

Por un lado, el Estado asumió la transformación del modelo endogenista en modelo socialista. Esta primera situación supuso que el Estado debía acumular recursos políticos y económicos para comenzar a suplantarse entre el 2006-2007 los actores económicos tradicionales por actores económicos vinculados al cooperativismo, el socialismo y el sector público. Este proceso de acumulación y transformación de actores fue sostenido por importantes derivaciones de gasto público. Ya para el 2011 el presidente de Mercal declaraba como objetivo de Estado controlar el 50% del suministro nacional de alimentos (López, 2011:18).

El segundo cambio consistió en que el aumento del gasto público que supuso la conversión del modelo se encontró con una baja en los precios del petróleo en el 2008-2009, la cual evidenció la fragilidad del subsistema venezolano, en virtud de su carácter dependiente y periférico. En otras palabras, la inversión realizada no mostraba indicios de transformar el nuevo sistema productivo en ciernes a favor de la independencia económica. Por el contrario, para mantener la transformación del modelo se dependía más del gasto y, por tanto, más de los precios petroleros.

A pesar de que el Estado ha reconocido en sus discursos los problemas de la periferidad y la dependencia, este capítulo va a argumentar que los problemas de gasto público y absorción económica son fundamentales para explicar los problemas de autonomía y estabilidad de la seguridad alimentaria.

Para argumentar adecuadamente esto, se describirán 3 aspectos:

- a. El papel de los emprendimientos sociales y económicos en la Venezuela del 2003-2004, como señal de un renaciente proceso de diversificación económica.
- b. La disolución de estos emprendimientos en años posteriores, a la sombra de un gasto público creciente y excesivo que redirigió la economía y los emprendimientos sociales alrededor del Estado. Este proceso se continuó hasta la crisis de los precios petroleros del 2009 donde se evidenció con más claridad la falta de autonomía y la estabilidad precaria de las políticas.
- c. Luego de la recuperación de los precios del crudo, el gasto continuó multiplicándose hasta al menos febrero del 2012, al amparo de nuevos aumentos de los precios del petróleo, el aumento de la deuda pública, la venta de bonos y el consumo de las reservas internacionales. El resultado de estas políticas condujo a un crecimiento muy exiguo del SSSA y, luego, a un serio retroceso en el 2011. En otras palabras, a pesar de que el SSSA mejoró las condiciones de acceso a la alimentación en la población venezolana (con un incremento asociado del IDH) y que, en el terreno político, generó suficiente legitimidad al Estado para ayudar a proteger a la democracia venezolana de la intervención de los intereses petroleros y geopolíticos estadounidenses, no se sostuvo por sí solo, coadyuvó a una inflación que giró alrededor del 30% anual durante 10 años, debilitó la moneda y, finalmente, se contrajo junto al PIB alimentario (agrícola y manufacturero) a finales del 2011 (BCV, 2011b).

Para tratar de entender este fenómeno se invoca el análisis realizado por Pérez Alfonso durante el boom petrolero de 1973 acerca de los problemas de absorción económica de los ingresos considerados extraordinarios, y tal como se argumentó en esta tesis en un capítulo anterior, la incidencia de la desproporción de estos ingresos en el modelo político del Estado.

En otras palabras, la incapacidad estructural de absorber económicamente los nuevos ingresos definieron la desproporción del gasto público. Tal desproporción es un factor negativo fundamental para el proyecto de un desarrollo sostenido sobre la diversificación de los emprendimientos económicos y sociales.

6.5.2.1 Auge y declive de los emprendimientos sociales y económicos 2003-2009

En el informe del 2003, Venezuela era el segundo país con más jóvenes emprendimientos del mundo (GEM, 2004: 12). El Observador Global de Emprendimientos (GEM, en inglés) mide anualmente cuántas personas están dispuestas a emprender, combinando los *ratios* de emprendedores nacientes y emprendedores dueños de empresas nuevas, independientemente de la calidad del emprendimiento. También incluye los intra-emprendimientos, esto es, emprendimientos dentro de otros emprendimientos y empresas sociales o económicas.

La Actividad Emprendedora Total (TEA) de Venezuela fue de un 27,3% de emprendimientos tempranos en el 2003, en relación a la población ocupada en empresas (GEM, 2008:4). Ya en el 2003 el GEM había establecido que para alcanzar el rango de *país emprendedor* se debía alcanzar el 8,8% de emprendimientos o iniciativas empresariales del total de empresas (GEM, 2004: 12), de tal modo que Venezuela, al ser incluida por primera vez, estaba en una posición particularmente privilegiada en relación con esta medida.

El GEM no mide la calidad transformativa de estos emprendimientos, pero indica que algún tipo de transformación se estuvo produciendo en el 2003.

Según el GEM los emprendimientos venezolanos “por necesidad” fueron más frecuentes que los definibles “por oportunidad”, en relación a las medidas en otros países (GEM, 2004:16-19). Según las observaciones situacionales descritas en las tres primeras olas de participación y, sobre todo, la 2a. ola, los actores percibían la necesidad de participar en un sector comercial y productivo para salir del sector económico informal y de la presión oligopólica del sector privado. Los emprendimientos observados en diferentes atalayas buscaban establecer mercados más estables y formales, con miras a la exportación. Venezuela salía de una profunda crisis económica, pues el paro petrolero-alimentario del 2002-2003 había impactado duramente su economía. Luego de la victoria del gobierno sobre el paro, la sociedad asumió en su propia agenda el reimpulso del crecimiento económico y del emprendimiento social de manera diversa impactando positivamente la calidad de las participaciones y el valor interanual del PIB (BCV, 2011 a).

La sensación general era que se había superado una importante crisis política y que el crecimiento económico y social dejaba razones para ser optimistas. Las encuestas y varias elecciones sucesivas le daban al presidente Chávez una carta blanca para actuar. Al mismo tiempo, la percepción de haber superado las carencias y la inestabilidad económica y política hacía a la gente más valiente para emprender. El contexto a favor de lo social también fue propicio. Los emprendimientos económicos no tardaron en percibir un auge sorprendente de emprendimientos sociales. Ambos tipos de emprendimientos, sociales y económicos, se veían con alguna desconfianza, fundamentalmente ideológica, pero el discurso indicaba que el país estaba confiando en sus propias fuerzas ciudadanas.

En la publicación correspondiente a la realidad del 2003 (GEM, 2004), el GEM midió 31 países, en la correspondiente al 2007 (GEM, 2008), 42 países y en la correspondiente al 2009-2010 (GEM, 2011) las mediciones del GEM llegaron hasta 53 países. En la medición publicada en el 2008 Venezuela, había descendido al cuarto lugar, superado en América Latina por Colombia y Perú. Sus emprendimientos habían disminuido pero, además, no habían madurado: seguían siendo fundamentalmente “jóvenes” o “tempranos”. Sin embargo los emprendimientos por necesidad habían descendido a favor de los emprendimientos por oportunidad, quizás reflejando mejoras en las condiciones sociales de la población (GEM, 2008: 20). A pesar de haber disminuido y de mantenerse “jóvenes”, los emprendimientos autoconsiderados como “fracasados” solo llegaron a un 4% del total de emprendimientos. En otras palabras, en correspondencia con las observaciones en esos mismo períodos los aumentos de liquidez y las oportunidades que presentaron los nuevos proyectos del Estado, incluyendo los programas de asistencia, producirían una movilidad de los emprendimientos hacia escenarios vinculados al Estado, disminuyendo los emprendimientos iniciados, pero impidiendo considerarlos “fracasados”.

Los emprendedores cambiaban emprendimientos jóvenes propio por emprendimientos jóvenes asistidos por el gasto público o intra-emprendimientos estatales.

En el 2009-2010 Venezuela siguió bajando de 25% a 18,6% para emprendimientos nacientes, descendiendo a la 8a. posición mundial para ese informe. Pero lo más inquietante es que ese gran auge de proyectos emprendedores del 2003 se disolvieron aún más en el 2007-

2008: los indicadores de empresas establecidas bajaron de 8,6 a 6,5, y además la brecha entre empresas establecidas y emprendimientos nacientes se agrandó, correspondiendo para el 2010 menos emprendimientos por empresas consolidadas. El informe habla de una “alta mortalidad infantil” de los emprendimientos (GEM, 2011:28).

Con el objetivo de ilustrar el descenso de los emprendimientos nacientes, se coloca aquí el gráfico 28. Dado que el GEM no desagregaba la TEA para el año 2003, se coloca este valor para ese año y, para los años siguientes, se continúa con el valor “emprendimientos nacientes”, esto es, aquellos con menos de 2 años de fundarse.

Gráfico 28. Porcentaje de emprendimientos nacientes en 5 países latinoamericanos. 2003-2011. A partir de GEM, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011.



Nótese en el gráfico que Venezuela, de color naranja, ostenta la posición más alta medida para el 2003. La caída de los emprendimientos nacientes es consistente hasta el 2011, similar a como sucede con el caso brasileño, representado con el color verde. Perú, con el color burdeos, también desciende pero mantiene niveles muy superiores de nuevos emprendimientos y tiende regularmente a remontar. Es importante recordar que los emprendimientos nacientes,

si bien reflejan una actitud positiva de la sociedad para arrancar proyectos nuevos, no necesariamente miden la preeminencia de los emprendimientos en el tejido social, fundamentalmente, porque este indicador aún no refleja la estabilidad de los emprendimientos fundados en esos años. Por ello, se hace necesario desagregar el indicador. El GEM provee de este recurso a partir del año 2004 y suma a la medición dos nuevos ángulos, la *tasa de propiedad de nuevos proyectos*, para proyectos que han sobrevivido de 2 hasta 4 años y la *tasa de propiedad de proyectos establecidos* para los que han sobrevivido más de 4 años.

A continuación, se muestran los gráficos de estas dos sub-variantes del indicador, con el fin de subrayar el problema de la “mortalidad infantil” de los emprendimientos. En ninguno de los dos gráficos Venezuela logra mantener los nuevos emprendimientos en el tiempo. A pesar de que Perú también cae, se mantiene con un porcentaje mayor de emprendimientos estables que Venezuela. A pesar de que la poca efusión de los emprendimientos nacientes brasileños, aquí este país demuestra una estabilidad creciente para los proyectos que lograron anclarse.

Gráfico 28 a. Tasa de propiedad de nuevos proyectos en 5 países latinoamericanos. 2005-2011. A partir de GEM, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.

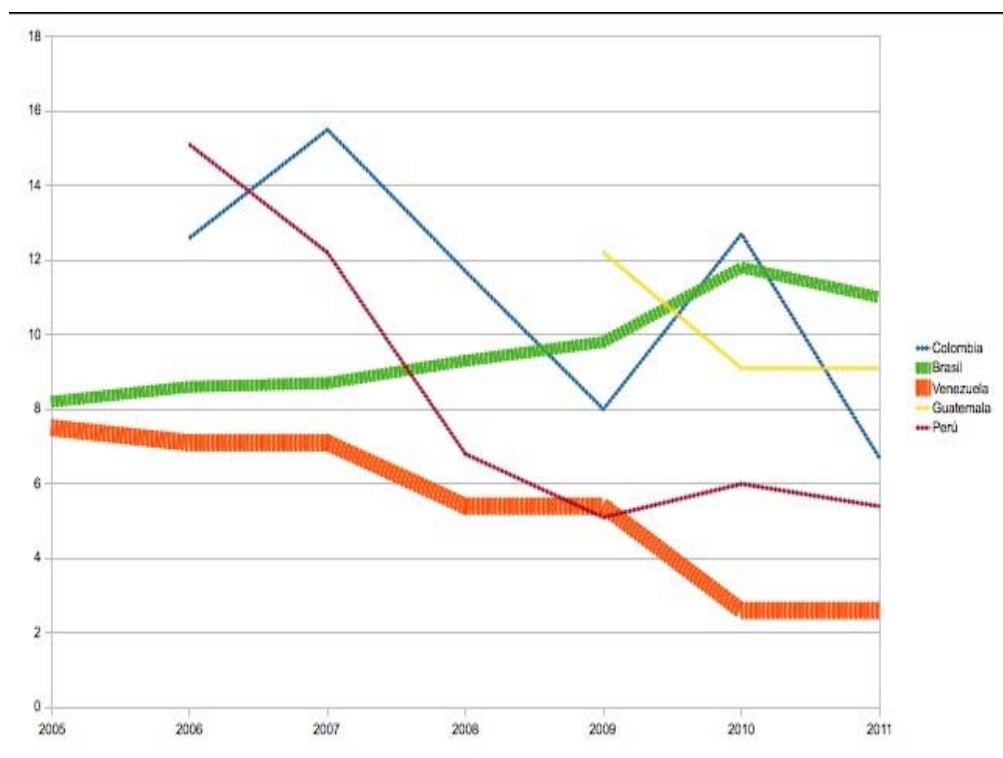
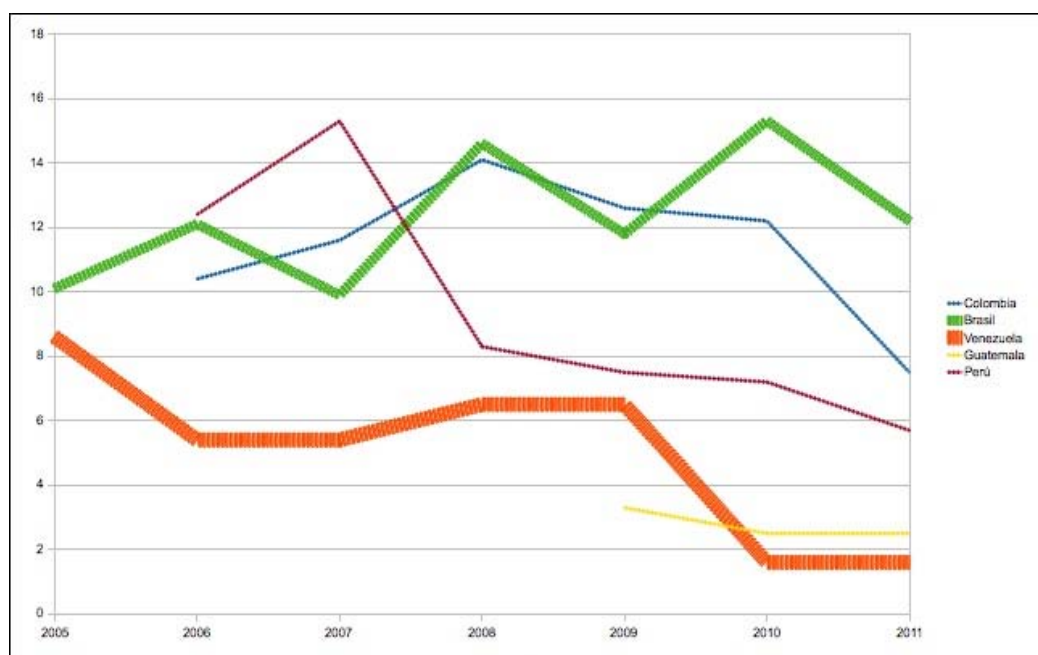


Gráfico 28 b. Tasa de propiedad de proyectos establecidos en 5 países latinoamericanos. 2005-2011. A partir de GEM, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.



El descenso en número (y en calidad, como se indica más adelante) de los emprendimientos refleja, por un lado, un debilitamiento de las fuerzas ciudadanas independientes que se habían disparado luego del paro petrolero-alimentario, pero también un probable reposicionamiento de estas fuerzas al lado de la iniciativa estatal o de otros proyectos privados establecidos con anterioridad. Los años correspondientes a la 5a. ola de participación son particularmente reveladores en este sentido y coinciden con las descripciones hechas por esta tesis.

Es quizás posible suponer que los emprendimientos desaparecieron porque el Estado estaba trasladando algunas de estas fuerzas hacia empresas públicas y que los informantes no las reconozcan como emprendimientos propios. Pero esto no fue así. Como demostró Víctor Álvarez, este traslado de fuerzas no disminuyó la preeminencia del sector privado, solo dispuso de más fuerza de trabajo alrededor del sector público a través de subsidios, créditos públicos, compras y contratación directa, esto es, alrededor del creciente gasto público, a la vez que el sector terciario privado creció y dominó la renta del país (Álvarez, 2009).

De hecho, el GEM indica que el 98,6% de los emprendimientos venezolanos están solo en el sector de servicios privados para los años 2009-2010 (GEM, 2011:33). Coincidiendo con Álvarez, el GEM no detecta un auge de emprendimientos del poder popular para esos años o los siguientes.

Estas conclusiones también coinciden con testimonios e investigaciones sobre el debilitamiento de la cooperativas de producción impulsadas por el Estado (Piñeiro Harnecker, 2008; Melcher, 2008). Entre ambas autoras se indica que de 776 cooperativas registradas en 1999 pasaron a ser más de 184 mil en marzo del 2007, de las cuales, solo estarían funcionando en entre 30 mil y 60 mil para esa última fecha. Según Piñeiro Harnecker, las cooperativas fueron “abandonadas” y muchas de las que sobrevivieron entonces presentaban característicamente problemas de ausentismo y poca motivación. Se habrían “(...) creado muchísimas cooperativas y consejos comunales en Venezuela en los últimos años y (...) muchos de ellos nunca se realizaron o funcionaron” (Melcher, 2008).

Finalmente, también es posible evaluar la evolución de los emprendimientos económicos en relación al Sistema Socialista de

Soberanía Alimentaria, desde el 2003 hasta el 2011, a partir de las estadísticas que ofrece el propio Estado.

Mercal, siendo el único sistema de comercialización endógeno-socialista del 2003, ofrece importantes datos sobre la importación de alimentos y su evolución, junto a las otras empresas del SSSA hasta el 2010.

Por su diseño, Mercal tenía por objetivo favorecer la colocación de producción artesanal, local y cooperativa para compensar la presencia de las grandes compañías de alimentación. A lo largo del período de su implementación los sistemas de distribución y colocación del SSSA se ofrecieron como garantía para la colocación de los productos generados por el poder popular (*Trabajadores-Directores de Diana, 2010; Coop. Sabana de Parra, 2010; Frente Socialista Campesino Josefa Camejo, 2010; Rodríguez, 2010; Inmerca, 2010; Directivo Mercal, 2010*). De hecho, de las observaciones resulta casi imposible conseguir productos del poder popular en el sistema de comercialización privado.

El Viceministro Rodríguez indicó que esta relación entre emprendimientos y el SSSA es real aunque subrayó que la participación del poder popular y los pequeños productores en el conjunto de la colocación de alimentos fue siempre muy pobre:

“Se creó un plan para comprar a pequeños productores en cada Estado. No se veía que los pequeños productores iban a suplantar la importación, pero teníamos que incorporarlos. Siempre fueron pocos en relación a lo que se vendía” (Rodríguez, 2010).

Cuando comenzó, Mercal colocaba en el mercado cerca de 18.250 toneladas de productos nacionales. En el 2004, solo un año después, colocaba cerca de 747.600 toneladas de alimentos nacionales, reflejando un impulso de los emprendimientos en los sectores de la economía, igual que como lo testifican los informes de Monitoreo Global (GEM, 2004; Rodríguez, 2010). En cifras, Mercal reflejó un aumento de 40,96 veces más de productos nacionales colocados en los anaqueles del 2003 al 2004. Tal aumento revelaba de algún modo el efecto de la victoria del gobierno sobre el paro a mediados del 2003, la nueva estabilidad y un clima favorable a nuevos horizontes económicos.

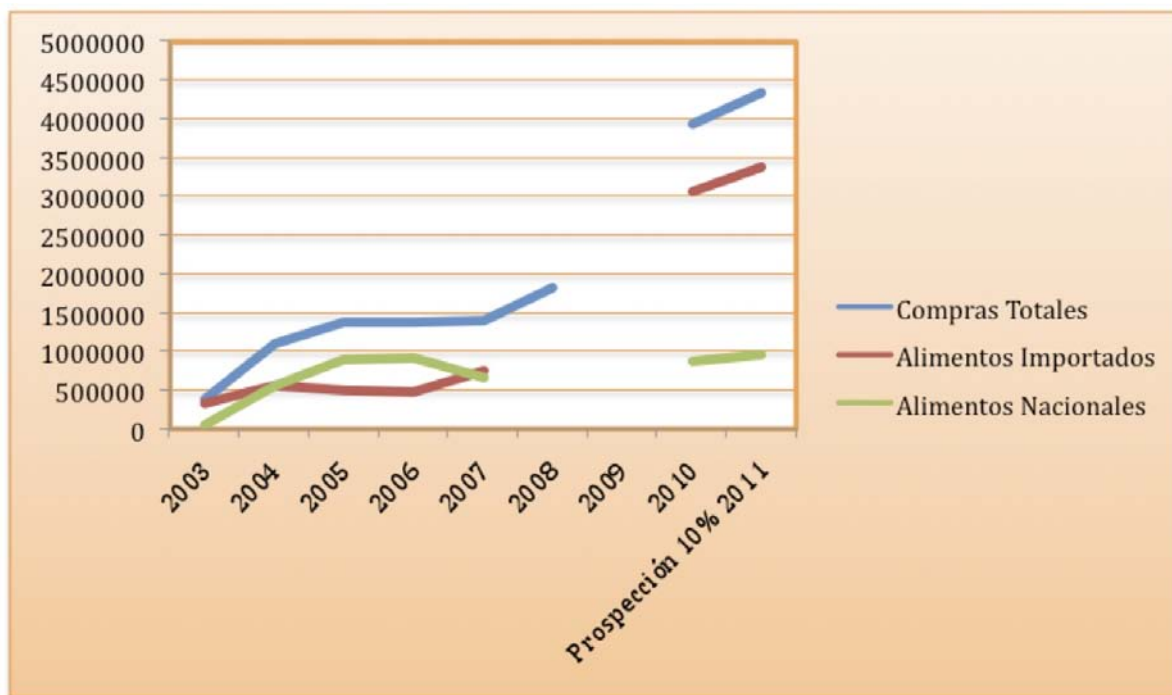
Sin embargo, en la Memoria y Cuenta del 2010, no solo Mercal, sino todo el SSSA de comercialización (esto es, incluyendo PDVAL, Fundaproal y algunas otras empresas nuevas en el sistema, como Bicentenario), ahora integrado todo bajo el Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, colocó una producción nacional de 871.934 toneladas anuales. Esto es, solo el 22,08% de 3.947.561 toneladas de alimentos colocados por todo el SSSA, provino de producción nacional (Minppal, 2011:18). Esta cifra no es más que un aumento del 16,63% de la producción nacional llamada “socialista” en relación al 2004.

En otras palabras, durante 6 años de inversiones en crédito, expropiaciones, inversión en infraestructura, control de divisas, facilidades burocráticas y arancelarias, convocatoria organizativa e importación de insumos hasta el 2010, el aumento de la producción nacional colocada en la comercialización del Sistema Socialista de Soberanía Alimentaria fue del 16,63%. Se trató de un aumento sobre la producción del 2004, pero contribuyó de manera precaria a la oferta total del SSSA, la cual creció en toneladas y cobertura en base a un importante incremento de las importaciones en el 2010: el 77,92%.

El siguiente gráfico explica la evolución de las importaciones por encima de los productores locales de alimentos en la oferta del SSSA. A pesar de la opacidad de en los balances de las instituciones, el gráfico fue posible gracias a las informaciones obtenidas por algunas Memoria y Cuenta del Minppal, entrevistas a altos funcionarios del mismo SSSA y una declaración del Presidente Chávez en Febrero del 2010 en la que anuncia un incremento del 10% en las colocaciones de alimentos para el 2011 (solo de Mercal). Por la naturaleza de las fuentes y porque algunas cifras son parciales, es posible presumir que el aumento de las importaciones pudo ser aún mayor.

Gráfico 29. Evolución de las compras del SSSA para su comercialización en toneladas métricas. 2003-2011. Ministerio de Alimentación 2008 y 2011; Chávez, 2010 d ; Rodríguez, 2010.

Nota: no se dispone de datos para 2008-2009.



El gráfico muestra cómo, ya en el 2010, la participación de productores nacionales se desdibujó radicalmente de la oferta total de alimentos en el SSSA, a pesar del importante gasto público y de un proporcionalmente muy breve aumento de su producción.

Esta información luce más inquietante si se le compara con la relación entre gasto público y PIB agrícola- Manufactura de Alimentos y Bebidas del 2011:

En el 2011, la cifra acumulada del gasto ha ascendido, tal como se desprende del aumento de la liquidez monetaria reflejado en el gráfico 40. Para el sistema alimentario, solo por concepto de la Gran Misión Agro-Venezuela se han inyectado 43,6 millardos de BsF., según los cálculos del Ministro de Agricultura (Loyo, 2011). Sin embargo, es posible estimar que la producción se contrajo gravemente en el mismo 2011, por cuanto los indicadores del sector alimentos en el PIB al final de ese año han sido negativos en un 9,1% para el subsector alimentario manufacturero y en un 11,1% para la agricultura (BCV,

2011 b), lo que debió afectar directamente a la producción nacional del SSSA.

Si se analizan estos datos desde la perspectiva de la soberanía alimentaria, los resultados suponen una mayor dependencia al carácter periférico del subsistema venezolano por la vía de la alimentación en el transcurso de la implementación de las mismas políticas soberanistas.

Si se analizan en términos de un aumento de las capacidades del poder popular junto al Estado en dirigir económicamente el cambio de modelo productivo, es posible indicar que revelan una caída muy pronunciada de la eficiencia los emprendimientos económicos orgánicos y de su incidencia sobre el aparato productivo.

El resultado es una inversión excesiva en relación al leve aumento de la producción de alimentos y luego un descenso definitivo de la producción nacional en el 2011, según las mismas cifras del Estado. Si esta información se cruza con los datos del GEM (2004, 2008 y 2011) y de las observaciones realizadas, es posible inferir que los emprendimientos se desplazaron a donde hubo inversión pública constante, independientemente de la productividad, y luego, fundamentalmente por causa de la debilidad estructural del subsistema económico, fueron reconociendo la irrentabilidad del aparato productivo alimentario en el 2011, acelerando la destrucción de emprendimientos.

Antes de examinar el comportamiento general del SSSA ante los problemas de absorción, es importante detenerse a observar la reacción del subsistema económico venezolano por causa de la caída de los precios del petróleo en el 2009. A continuación se exploran algunas señales del subsistema económico venezolano en ese año con el fin de observar comportamientos relacionados con la dependencia estructural periférica que genera el mercado petrolero.

6.5.2.2 Las evidencias de la crisis del 2009.

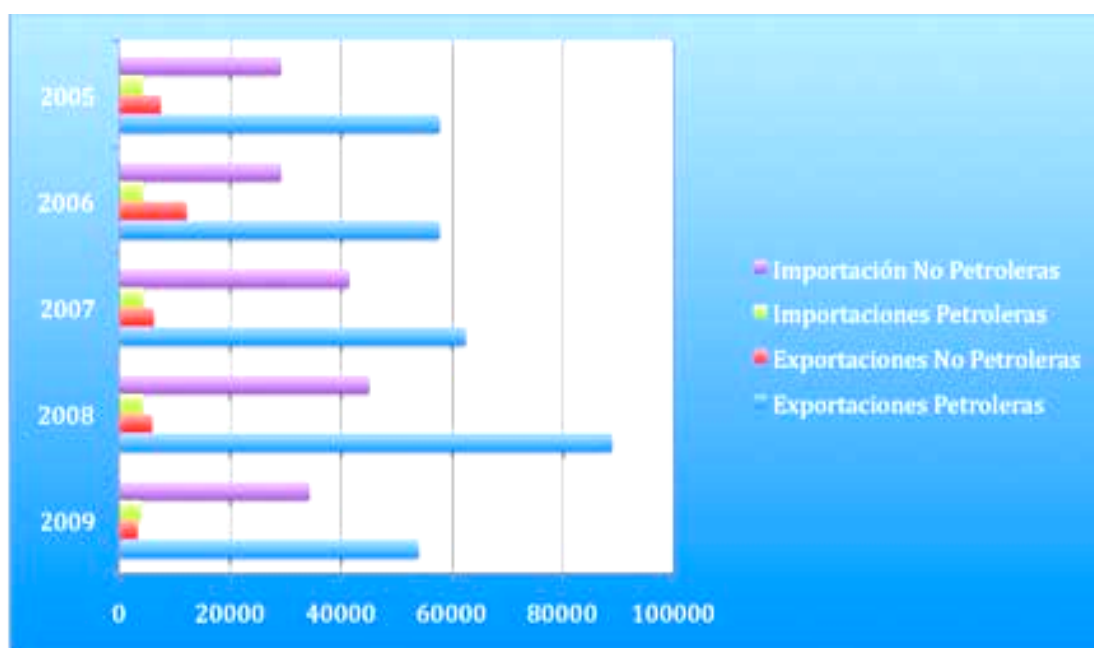
En el 2009, caída del precio del crudo fue del 35%, esto es, de 86,5 a principios del 2008, a 57 dólares el barril, como promedio de tal caída entre los años 2008 y 2009 (Giordani, 2011).

En el gráfico 30 se observa cómo las exportaciones petroleras venezolanas, medidas en millones de dólares, y que correspondieron enteramente al sector público, son mucho mayores que las exportaciones no petroleras, como referencia de las exportaciones privadas. También se observa cómo disminuyeron las exportaciones no petroleras luego del 2006.

El sector *importador no petrolero* también creció en el 2006, revelando el desarrollo de una demanda interna mayor pero insatisfecha por la producción de bienes y servicios nacionales. En otras palabras, ambos movimientos revelan una mayor dependencia a los productos importados.

Finalmente, vemos en el 2009 como todos los valores cayeron, incluyendo el de las exportaciones petroleras, por causa de la recesión mundial.

Gráfico 30. Importaciones y exportaciones 2005-2009.
BCV, 2011 a.



De tal modo que desde el 2006 las importaciones tendieron a subir, las exportaciones a bajar y la economía no petrolera perdió una importante capacidad en el sector externo. Por consecuencia, como se verá en los gráficos siguientes, la inflación subió tanto al consumidor

como para el sector manufacturero, así como bajó el volumen de producción manufacturera (BCV, 2010).

Gráfico 31. Índice de precios al consumidor (IPC) en porcentaje del 2008 al 2010. BCV, 2011 a.

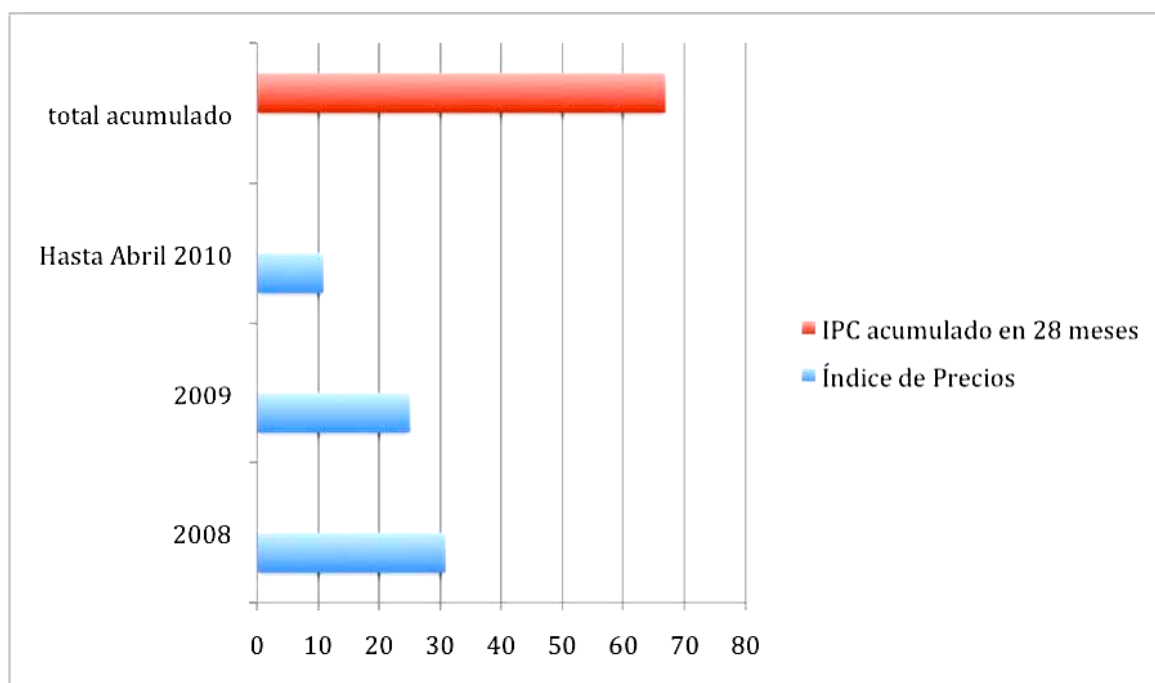


Gráfico 32. Índice de precios al productor manufacturero privado en porcentaje de 1997 al 2008. BCV, 2011 a.

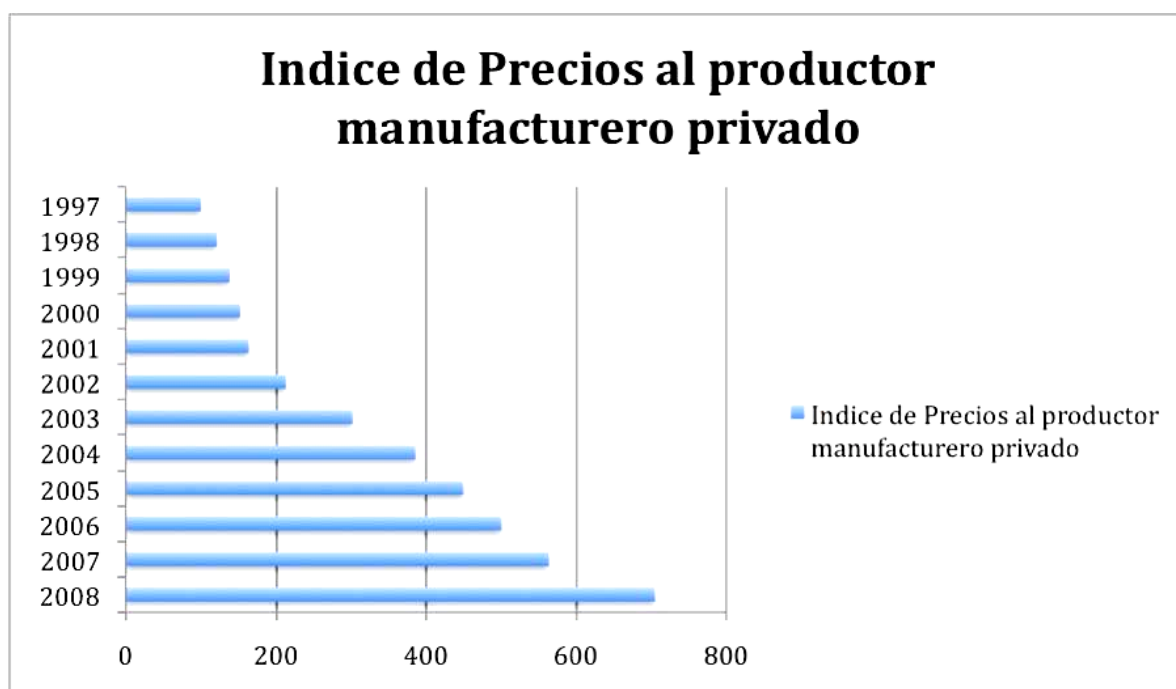
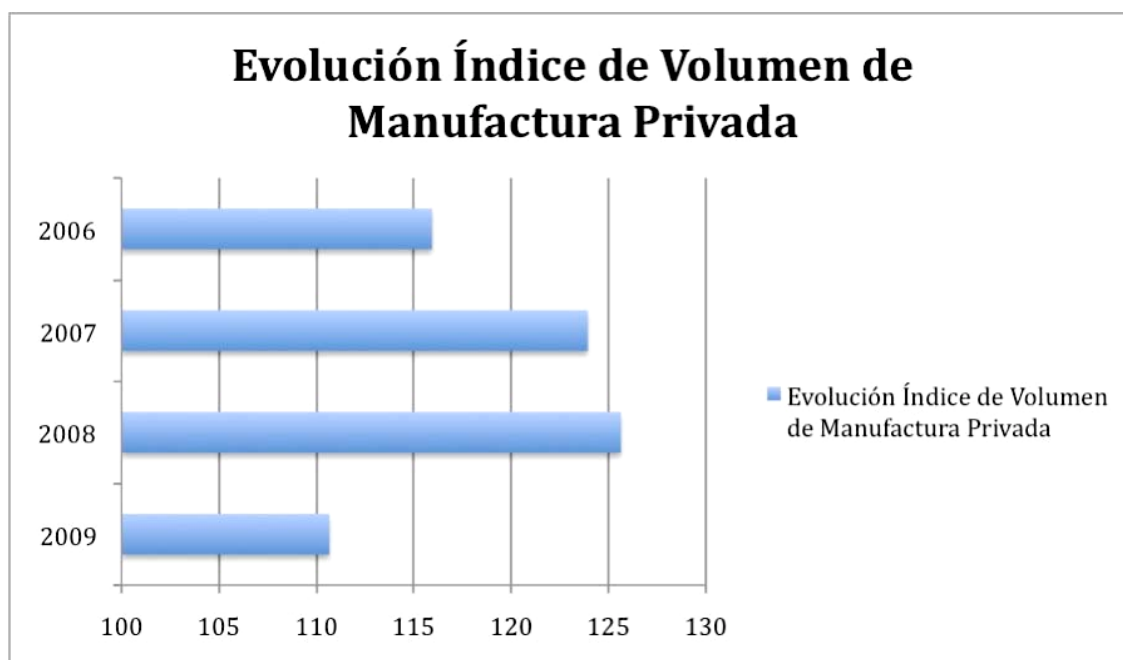
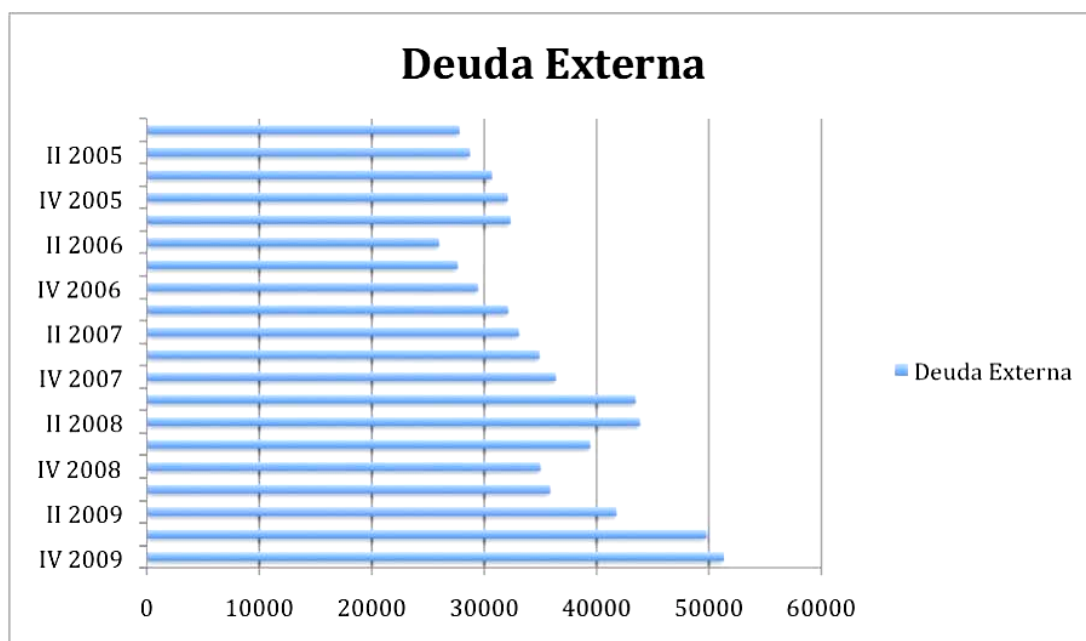


Gráfico 32a. Índice de volumen de producción de manufactura privada del 2006 al 2009. BCV, 2011a.



Finalmente, como se observa en el gráfico 33, sube la deuda externa, luego de que una parte había sido pagada al FMI y al BM precisamente en el 2006 y en el 2008. El importe pagado en el 2008 es casi el mismo importe de una nueva deuda contraída el segundo trimestre del 2009, deuda que luego se duplica para el tercer y cuarto trimestre de ese mismo año.

Gráfico 33. Deuda pública externa venezolana 2005-2009. Millones de US\$. BCV, 2011 a.



De tal modo que la crisis petrolera del 2009 hizo descender los ingresos por exportación petrolera y se agravó peligrosamente el escenario que se venía generando: descendieron abruptamente las exportaciones no petroleras, la inflación se disparó hasta completar un casi un 67% acumulado por tres años, los costos de la manufactura privada casi alcanzaron un aumento del 700% , se desplomó en 15 puntos el volumen producido de la manufactura privada y aumentó en más 15 mil millones de dólares la deuda externa, todo en solo un año.

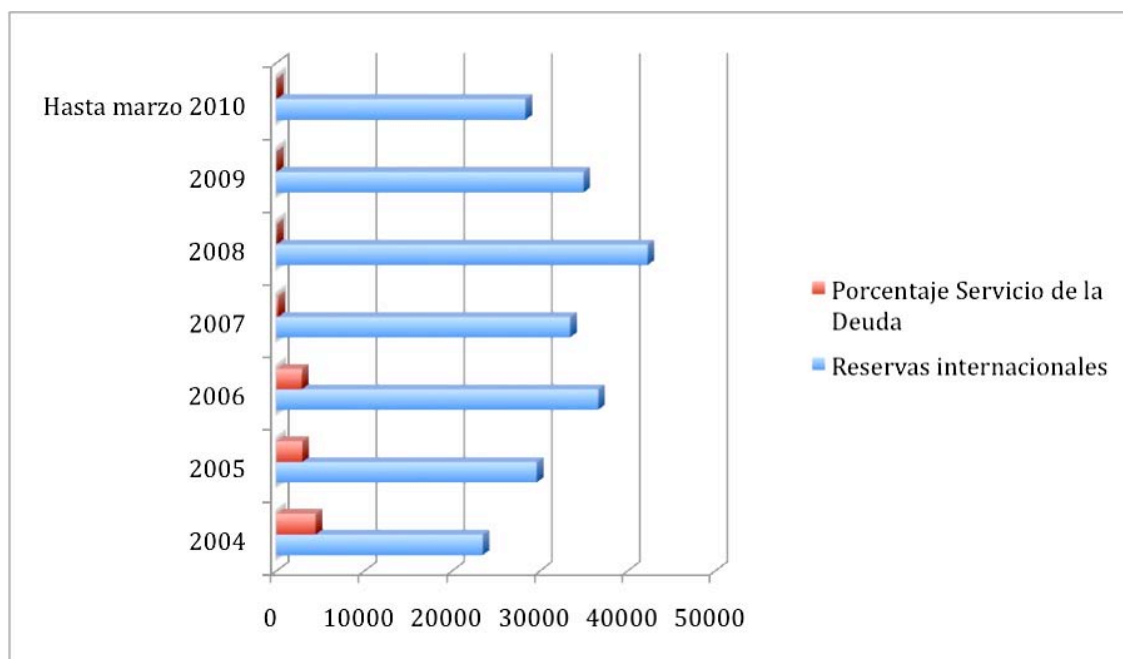
Otros ejemplos concretos del impacto en el subsistema de esta caída de los precios del crudo durante este año fueron:

- a) el decrecimiento de 4,8 a -3,3 % del PIB,
- b) la reducción en un 7,2 % del valor agregado de la propia empresa petrolera y
- c) la reducción del consumo final privado en un 3,2%, revelando una caída de los ingresos reales (ONAPRE, 2011).

Todo ello mostró cuan amenazada pudo estar la seguridad alimentaria por la vía de la poca autonomía del sistema económico y los consiguientes problemas de estabilidad de las provisiones.

A favor del país es importante reconocer que las reservas internacionales en Venezuela siguieron siendo altas. Si se les compara con el servicio de la deuda, no parecieron estar comprometidas en un solo año de crisis, tal como se observa en el gráfico 34.

Grafico 34. Porcentaje Servicio de la Deuda y evolución de las Reservas Internacionales (2004-2010). BCV, 2011 a.



Posteriormente, desde el 2010 hasta el 2011, los precios del petróleo siguieron subiendo y generaron una importante disposición de recursos para el gasto público, el cual se asumió nuevamente como motor del desarrollo (Giordani, 2011).

A pesar de eso, en la plena bonanza posterior al 2009, es posible ofrecer algunas evidencias de como el gasto público inyectado de manera desproporcionada sobre el aparato productivo, de la mano de regulaciones, control de divisas y una cadena inflacionaria muy agresiva arrastró al SSSA a desdibujarse en tanto componente del mercado interno, desde la 2a ola de participación hasta hacerse finalmente insostenible por sí mismo en la 5a.

6.5.2.3.La economía en Venezuela del 2003 hasta el 2011. Tejidos y dependencia.

El despilfarro general se tiende a atribuir a vicios o defectos de los responsables en el gobierno, o en el sector privado aprovechador del petróleo. Así se mantienen las ilusorias esperanzas de continuar tras una siembra del petróleo.

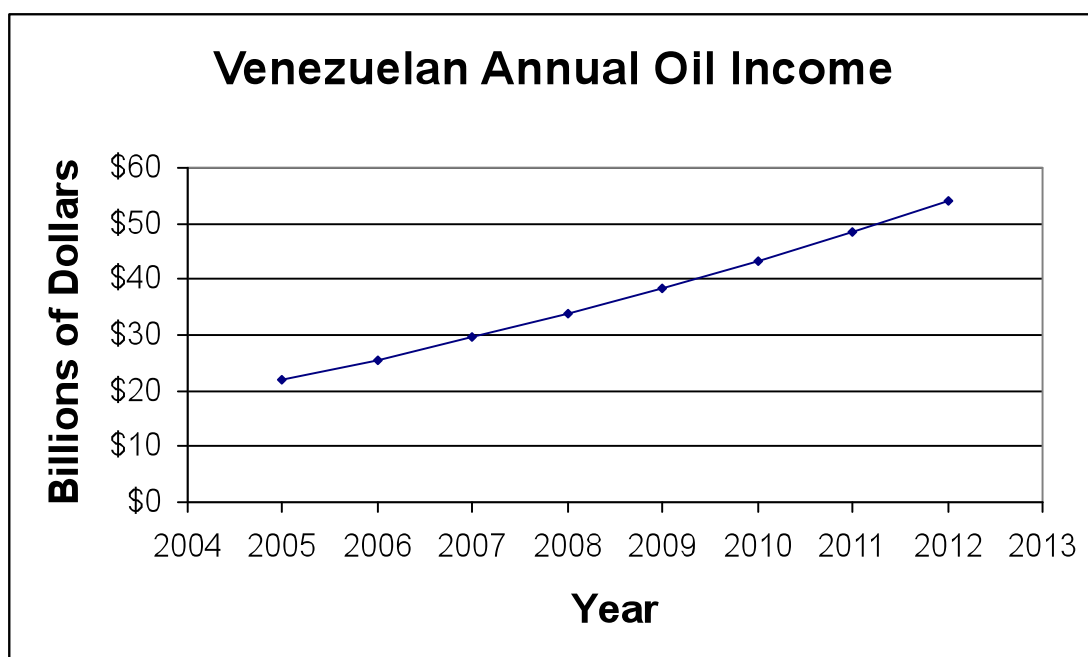
**Juan Pablo Pérez Alfonzo en
“Hundiéndonos en el Excremento del Diablo”**

El aumento de los precios del petróleo por causa de la especulación para-financiera, los conflictos entre las potencias postindustriales y parte del mundo islámico, así como el auge de nuevas industrias en el planeta, entre otras razones, han provocado una demanda mayor de recursos derivados de los hidrocarburos entre el 2003 y el 2012.

Aún más, una investigación publicada por la Universidad de Stanford (Álvarez y Fiorito, 2005) estimaba que esta demanda sería creciente para Venezuela en los próximos diez años, y que puede acompañarse de aumentos de producción sin afectar el aumento de los precios del barril.

En el gráfico 35 se muestra la tendencia de los ingresos en base al aumento de los precios petroleros para el crudo venezolano desde el 2005 hasta el 2012 según la investigación mencionada.

Gráfico 35. Ingreso petrolero venezolano por año en miles de M millones de dólares desde el 2004 a una proyección en el 2012.
Álvarez y Fiorito, 2005.



La investigación concluía que Venezuela podía acumular un total de 296.000 millones de dólares hasta el 2012 y propulsarse adicionalmente mediante un aumento de la producción anunciado por el presidente Chávez a partir del 2014 que no tendría por qué afectar el precio del crudo. Por todo esto, la situación sería positiva para Venezuela como para su papel en la consolidación de fuerzas políticas y económicas unitarias en América Latina (Álvarez y Fiorito, 2005).

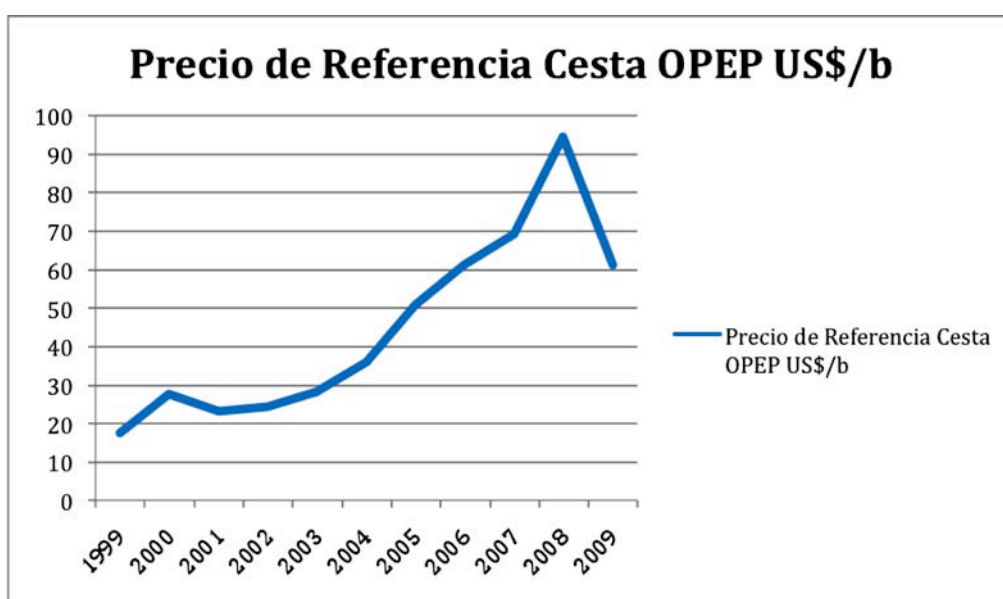
Desde la perspectiva de la periferia, sin embargo, esto supone un impacto negativo en las capacidades productivas soberanas del país, tal como sucedió con el impacto de los precios petroleros en 1973 sobre Venezuela luego de la Guerra del Yom Quipur (Karl, 1999; Pérez Alfonso, 1976) y el sobre-dimensionamiento del sistema de pactos políticos con la consecuente involución del desarrollo fuerzas interdependientes en el seno de la sociedad hasta la llegada de Chávez, tal como se explicó en el capítulo 4.

El eco de estos problemas es particularmente más inquietante si se considera que los precios del petróleo luego de Chávez son extraordinarios para la historia venezolana. El aumento emblemático de los precios nominales durante la Gran Venezuela, en específico, entre 1973 y 1974, fue de 3 a 11,65 dólares el barril de la cesta

venezolana (Vallenilla, 1998:85). El aumento abrupto durante el bolivarianismo fue de 26 a 95 dólares el barril en 6 años, y la tendencia siguió creciendo hasta 101,06 dólares en el 2011 (Ministerio de Energía y Petróleo, 2012) con la sola excepción de la crisis del 2009. Ajustando estos precios a la inflación, el referente Intermediate Texas ya habría superado desde el 2005 los máximos históricos de la guerra Iran-Irak (Tapia Maruri, 2009), por lo que su aumento hasta el 2012 confirman lo extraordinario de los ingresos venezolanos durante este período .

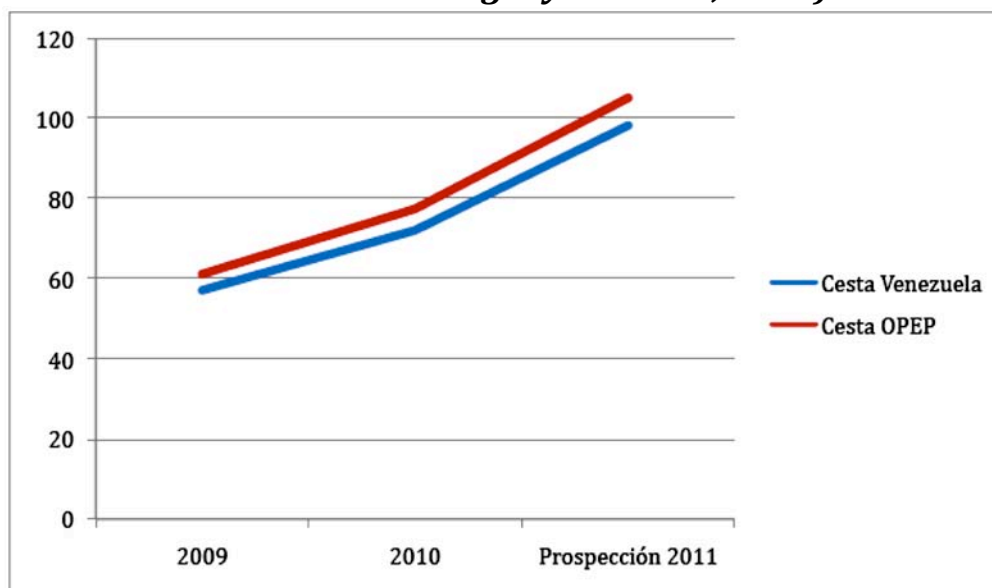
En términos de contrastar las políticas con los ingresos petroleros, el repunte más importante se produce luego del paro petrolero-alimentario desde el 2003 hasta el 2009, como se indica en el gráfico 36:

Gráfico 36. Precio de referencia de la cesta OPEP US\$/barril 1999-2009. OPEC, 2009.



Luego de la caída del 2009, el precio siguió aumentando hasta pasar la barrera de los 100 US\$ en abril del 2011, tal como se indica en el gráfico 37.

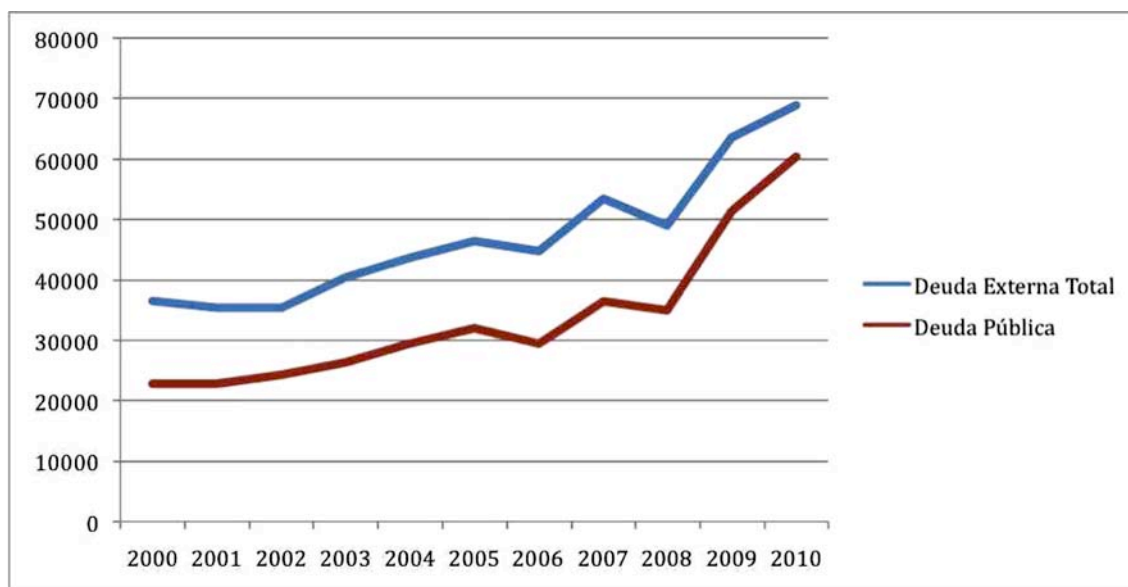
**Gráfico 37. Precio cestas OPEP y Venezuela 2009-2011 US\$/b.
Ministerio de Energía y Petróleo, 2012).**



Sin embargo, no fueron los ingresos petroleros los que constituyeron solamente los ingresos del país. Un creciente endeudamiento público externo sostenido en la disposición de importantes reservas internacionales permitieron al país desde el 2003 decidir un importante ingreso de divisas.

En tal sentido, se observa en el gráfico 38 que no solo asciende la deuda de manera progresiva sino que, luego de un desembolso importante al sistema financiero internacional en el 2006 y el 2008, los niveles de endeudamiento no bajaron de su piso previo al paro, sino que ascendieron en más de 25 millardos de dólares hasta el 2010.

Gráfico 38. Deuda externa total y deuda pública venezolana. MM US\$. 2000-2010. BCV, 2011 a.

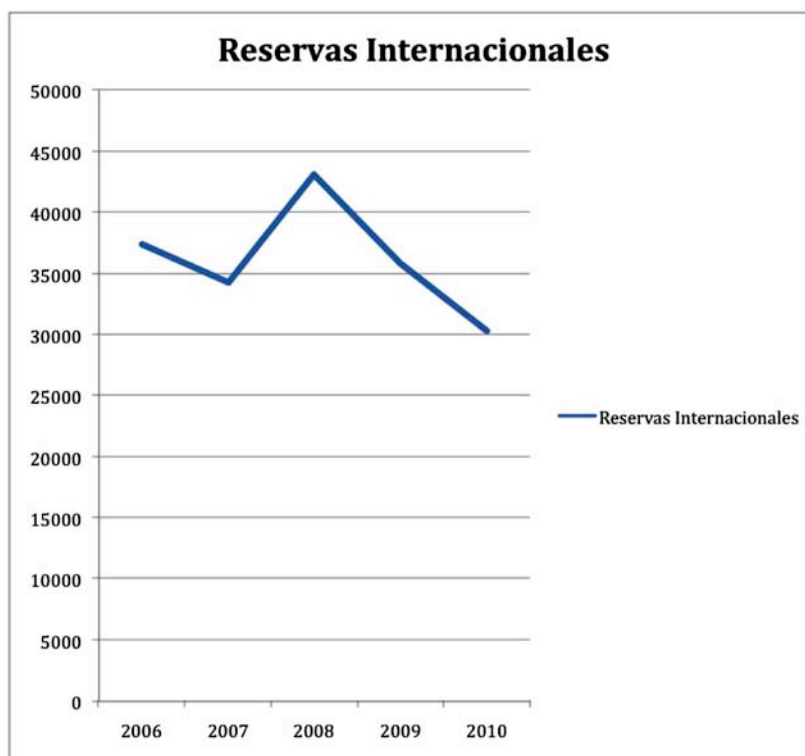


También en este gráfico puede apreciarse que el aumento de la deuda pública es más rápida que la deuda total del país (fundamentalmente, una suma del componente privado y del público) desde 2008 al 2010.

Esta tendencia no desaparece en el 2011 sino que, por el contrario, es asumida por el Estado como la estrategia fundamental para lograr el desarrollo de las fuerzas productivas nacionales. En el proyecto de Ley de Presupuesto y de Endeudamiento presentado por el Ministerio de Planificación ante la Asamblea Nacional para el año 2011, se propone lograr ingresos al Estado principalmente por la vía de los impuestos no petroleros (57,9% del presupuesto), deuda (26%) e ingresos petroleros calculados a 40 US\$ el barril (22%). Si bien el cálculo de 40 US\$ el barril resultó ser ampliamente conservador, como se calculaba para el 2011 en el gráfico 37 y que luego se confirmó a 101,06 (Ministerio de Energía y Petróleo, 2012), y el ingreso petrolero puede superar el recaudatorio, lo importante es indicar que la política económica otorga al endeudamiento un papel fundamental en la disposición de recursos para el 2011.

La clave del endeudamiento son los altos niveles de las reservas internacionales, si bien pareciera observarse una tendencia a su deterioro, como se percibe en el gráfico 39. Sin embargo no es posible decir que las reservas sean bajas o estén en riesgo aún.

Gráfico 39. Reservas internacionales venezolanas MM US\$. 2006-2010. BCV, 2011 a.



En relación al SSSA, el gasto del sector público (fundamentalmente erogado por el gobierno Central) dirigido a préstamos (Fondas, BAV, Bicentenario...), proyectos de inversión productiva (Misión Agro-Venezuela, expropiaciones...), y gasto-inversión social (Misiones, becas, medios de comunicación, salud, vivienda, nuevas universidades...), en los años posteriores al paro petrolero-alimentario, ha sido muy alto pues se le considera, además de una manera de compensar la deuda social, como el motor fundamental del resto del aparato económico (Giordani, 2010).

Calcular los importes exactos que componen el gasto público desde el 2003 al 2011, dada la complejidad administrativa y categorial de este fenómeno, requiere de una investigación en sí misma.

En general, la opacidad de las partes del gasto público y dentro de éste, del gasto social (entendido tanto como Seguridad Social como Desarrollo Socio-Económico y sus múltiples expresiones de política financiera) es la regla. El SSSA, concretamente, es un sistema de muchas manos y fases que incluso hace uso de recursos que se deciden de manera espontánea en el transcurso del año, transformando

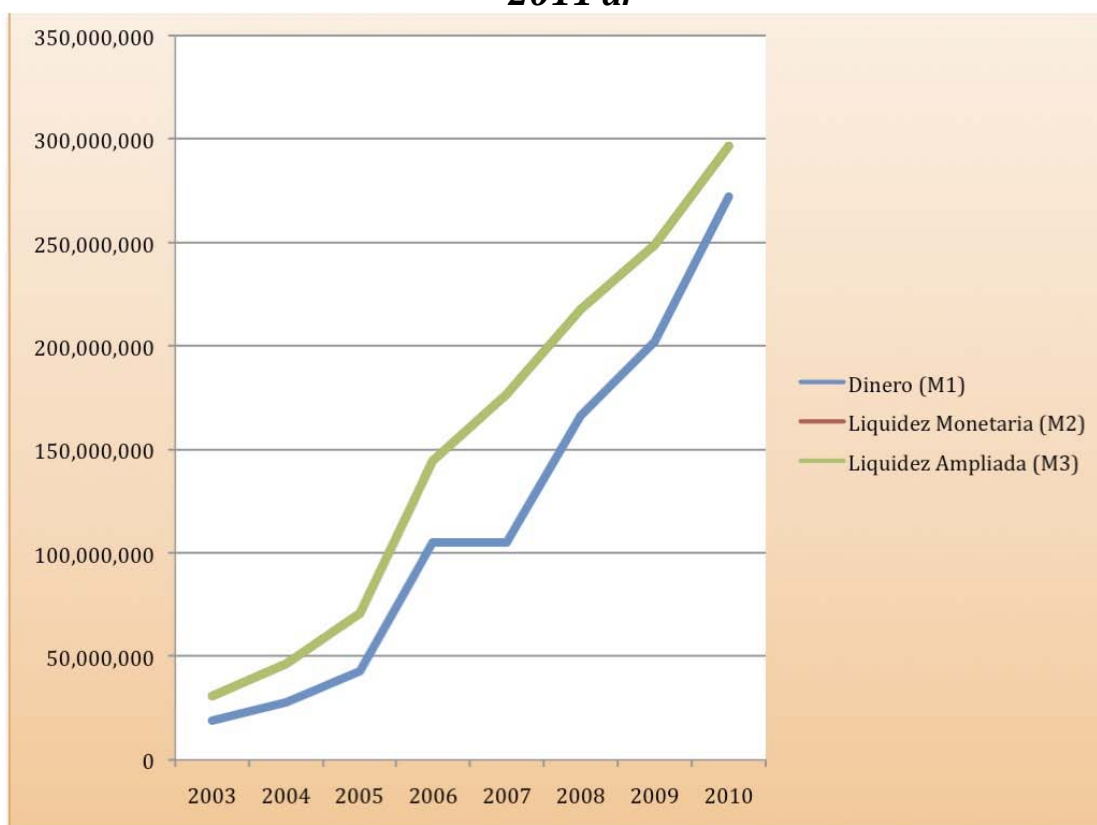
partidas o incluso generando nuevos ministerios. Por ello es muy difícil identificarlo como un todo presupuestario.

Con el objetivo de ilustrar estos problemas, Aponte Blank (2010) generó una metodología que le permitió inferir algunas estimaciones con el fin de corregir la diferencia entre el gasto presupuestado, que es de dominio público y el gasto extra-presupuestario que, en forma de créditos adicionales, Misiones, Fondos de Bancos, bonos, inyección directa de empresas sociales o estatales, como PDVSA, se expresa en formas altamente flexibles de reorientación de recursos. Aponte Blank estima esta diferencia a partir de cruzar información de las Leyes de Presupuesto, los reportes de la Oficina Nacional de Presupuestos con el Banco Central de Venezuela para varios años (Aponte Blank, 2010:64).

En cualquier caso, aplicando los incrementos declarados por el Ministro Giordani sobre los presupuestos del 2011 y del 2012, en 28 y 45,6% respectivamente (Giordani, 2011 a: 42; Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas, 2011), se puede establecer que la inyección del Estado del 2003 al 2009 es creciente y, si bien se separa la brecha entre el desarrollo social y otras formas de gasto, ni el incremento ni la brecha son tan agudos como desde el 2010. Los tres últimos años presupuestarios correspondientes a la 5a. ola de participación, suponen que el Estado no solo ha ratificado su política de reactivar el aparato productivo y reforzar las políticas de bienestar social por la vía directa del gasto, sino que ha incrementado radicalmente la disposición de recursos en estos sectores. Los efectos esperables parecen contradecirse con los problemas que evidenció el SSSA en hacerse autosostenible, en el débil crecimiento de los emprendimientos económicos que sostendrían el SSSA (GEM, 2004, 2008, 2011), medible también según las propias cifras del Estado (Rodríguez, 2010; Minppal, 2011), y, finalmente, la contracción del sector alimentario en casi 10 puntos para el 2011 (BCV, 2011 b).

Para corroborar el papel del gasto en el subsistema, es posible asociar su incremento con el del circulante en el sistema monetario. A continuación se muestra el siguiente gráfico sobre el aumento de la liquidez del 2003 al 2011, con el objetivo de mostrar de algún modo el impacto del gasto sobre el circulante (BCV, 2011 a):

Gráfico 40. Liquidez, en miles de Bsf. 2003-2010. A partir de BCV, 2011 a.



Los datos de liquidez monetaria (M2) están solapados detrás de los de liquidez ampliada (M3) por cuanto sus cifras son muy similares. El incremento de la liquidez es latente en todo este período y es asociable con los importes del gasto público y, en concreto, el gasto social.

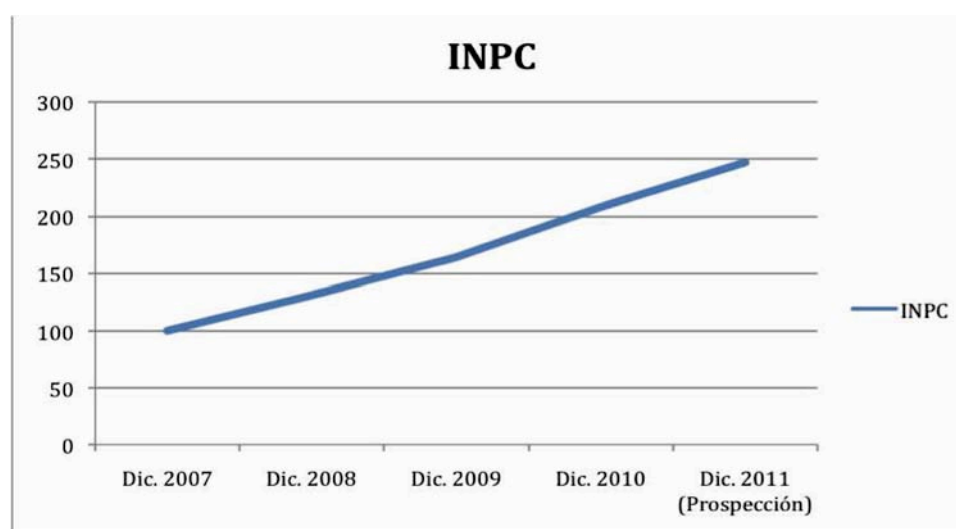
En resumen, los importantes ingresos por aumento de los precios del petróleo, las sucesivas devaluaciones, el aumento significativo de la deuda externa y la extracción de importantes recursos de las reservas internacionales fueron vertidos en el subsistema multiplicando doce veces la liquidez del post-paro. Todo esto se produjo en al menos 7 años. De tal modo que la enorme cantidad de recursos introducidos al país ha “recalentado el sistema”: la posesión de circulante supera la oferta y ésta debe suplir la demanda por la vía de importaciones que, a su vez, erosionan la posibilidad de la industria nacional en competir.

El primer efecto percibido de este “recalentamiento” en el bolsillo de los consumidores y los productores, es la inflación. En el gráfico 41 el Índice Nacional de Precios refleja que, en un índice base a 100 en el 2007, ha habido una inflación de 150% desde ese año hasta el 2011, esto es, a un ritmo cercano al 30% anual en 5 años. Además la inflación

es constante, esto es, no refleja los vaivenes de los precios petroleros. La inflación total desde 1999 hasta el 2011 fue de 287,9% (BCV, 2011 a).

Este comportamiento es asociable a que la inflación forma parte de una dinámica propia a toda economía, en el que el valor de bienes y servicios depende de otros factores culturales y sicológicos, como la incertidumbre o la imaginación del futuro, y no solo de la disposición de circulante y productos. Tal problema es el mismo que coadyuvó a las devaluaciones y la fuga de capitales después del llamado Viernes Negro de 1983 y a la intensa inflación durante la *Concertación* (261,8 % de 1988 a 1993) y la *Convergencia* (298,1%, de 1994 a 1998) tal como fue explicado desde el epígrafe 4.9 al 4.12.

Gráfico 41. Índice nacional de precios al consumidor 2007-2011. A partir de BCV, 2011 a.



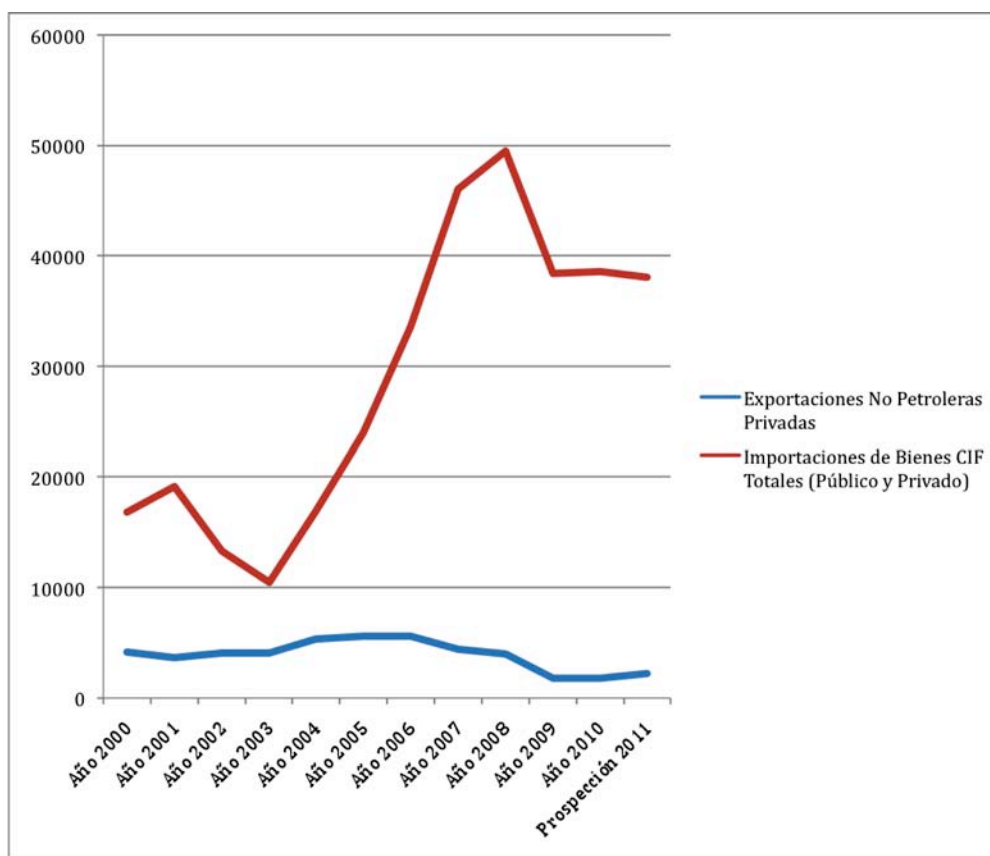
Tal como Keynes explicaba, invertir supone la existencia de un caudal de circulante que debe cumplir la condición de crear expectativas suficientemente estables de seguridad para la inversión (Dillard, 1973; Keynes, 2010). La inflación (sumada a la devaluación y el control de cambio) hace difícil una decisión racional para invertir esperando ganancias a mediano y largo plazo. De tal modo que la descapitalización de los emprendimientos es el resultado de la inflación y ésta es el resultado del recalentamiento. La inflación exige más recursos al sistema que éste no puede respaldar y, por tanto, empobrece a sus tejidos productivos y por consecuencia a sus trabajadores.

Otro indicador del recalentamiento consiste en el desplazamiento de la renta de capital al sector terciario, como el comercio, sistema financiero, las aseguradoras, la importación, gobierno o la especulación de valores. Víctor Álvarez, ex Ministro del gobierno bolivariano, ha estudiado este problema en su libro “¿A dónde va el modelo productivo?”:

“...la ponderación de la manufactura cayó de 17,36% en 1998 a 15,97 al cierre de 2008. Desde el año 2003 la construcción subió de 4,64% a 6,67%, mientras que el sector comercio y servicios subió de 7,92% a 11,03%; comunicaciones creció de 3,26% a 4,32%; los servicios de intermediación financiera crecieron de 2,34% en importancia relativa, a 4,89%, más del doble, en el período (209% de aumento); los otros impuestos netos sobre productos, que incluye impuestos de importación, pasaron de 7,10% a 11,52%, lo cual representa un crecimiento de 62,2%” (Álvarez, 2009: 238).

Con el fin de asegurar el valor de la inversión y hacerla rentable, los capitales se desplazaron al sector importador, generando pérdidas de divisas, de soberanía productiva y debilitamiento de la interdependencia en el tejido social. En el gráfico 42 es posible observar cómo las *exportaciones no petroleras* del sector privado generaron pocas divisas al país en comparación a la avalancha de productos importados que entraron precisamente desde el 2003.

Gráfico 42. Exportaciones no petroleras privadas e importaciones de bienes totales. FOB. 2000-2011. A partir de BCV, 2011 a.

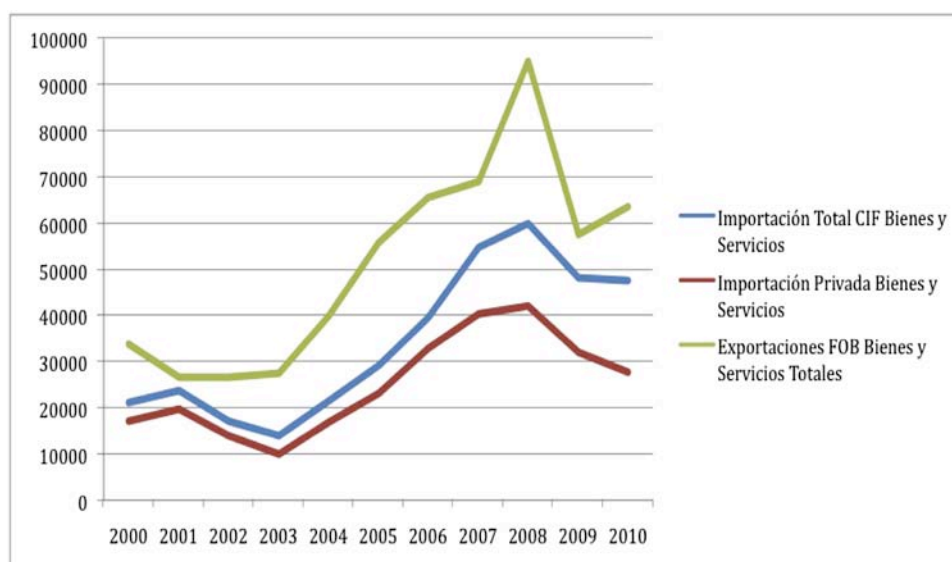


Nótese la desproporción existente entre la exportación no petrolera y las importaciones, impulsadas desde el 2003 fundamentalmente por el gasto público y nótese también cómo las importaciones, en la medida en que ascienden, son asociables a una declinación de las exportaciones no petroleras mostrando problemas en el aparato productivo local para exportar. Nótese finalmente que, a diferencia de la relación entre exportaciones petroleras e importación que se observará en el gráfico 43, la dinámica de las exportaciones no petroleras no parece proveer de divisas suficientes para afectar el comportamiento de las importaciones. En tanto parte del subsistema, la exportación privada no petrolera no afecta el mercado.

De tal modo que lo contrario sucede en el gráfico 43. Las exportaciones totales, que incluyen el petróleo, definen el ritmo de las importaciones. En la medida en que hay una recuperación del precio del barril desde el 2003, los ingresos en el país se traducen en un crecimiento casi mecánico de la importación privada y pública. Cuando se produjo la caída del precio del barril en el 2008-2009, las importaciones también

declinaron y, ante una nueva recuperación en el 2010, las importaciones volvieron a reaccionar.

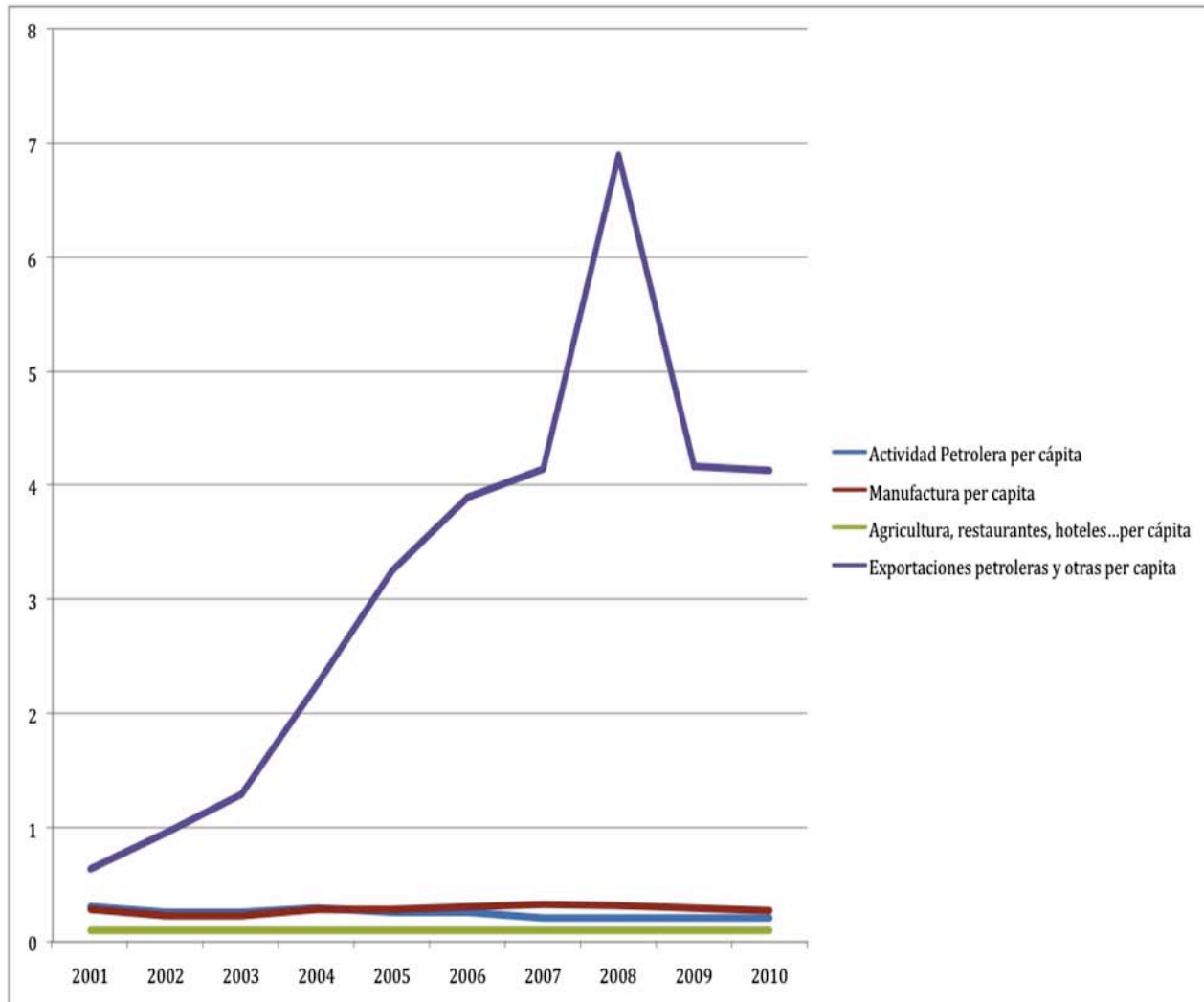
Gráfico 43. Ingresos por importación total CIF, importación privada y exportaciones FOB totales. 2000-2010. A partir de BCV, 2011 a.



Los ingresos por exportaciones, la línea verde, ascienden según también asciende el precio del petróleo. Las importaciones privadas y públicas siguen el mismo camino de las exportaciones: Venezuela no importa según las necesidades del aparato productivo. Solo se importa más si se exporta más.

El gráfico siguiente es quizás el más elocuente.

Gráfico 44. Ingresos de exportación petrolera en relación al valor de la manufactura, la agricultura y la misma producción petrolera, en el PIB, per capita desde el 2001 hasta el 2010. A partir de BCV, 2011 a; INE, 2012.



El color violeta que sobresale representa el Ingreso Nacional por exportaciones petroleras, legalmente monopolizadas por el sector público, en dólares convertidos a Bs. fuertes (en la escala de reconversión desde 1º. de Enero del 2008), a la tasa de cambio del año y dividido entre la población del país para ese mismo año. Los demás colores representan la participación de la manufactura, la agricultura y la misma actividad petrolera, en el PIB, en bolívares con base 1997, entre la población de cada año.

En este gráfico se compara la producción petrolera vendida en el extranjero con lo que ha producido la manufactura, la agricultura y el mismo sector petrolero dentro del país. Para no dejar por fuera el

factor demográfico y puesto que la población venezolana ha crecido en los últimos 10 años, las cifras se han dividido por la población de cada año.

La intención de este cuadro es mostrar lo que recibe el Estado por concepto de petróleo y que luego se dirige fundamentalmente al gasto en *Desarrollo Socio Económico y Participación*, tal como se categoriza en el Sistema Integrado de Indicadores Sociales de Venezuela, SISOV (SISOV, 2011), con el objetivo de “cebar la máquina”, junto a los sectores productivos que son “la máquina” objeto de este gasto. Ahí se encuentra la cifra opaca de inversión en seguridad alimentaria.

Este gráfico se presenta como una evidencia importante de la efectividad de la política económica del Estado en potenciar el crecimiento de los demás sectores productivos, incluyendo los del SSSA. A un mayor ingreso por la venta del petróleo debería corresponder una reacción positiva en los sectores productivos que definieron la soberanía alimentaria y otras formas de desarrollo económico soberano, como la agricultura y la manufactura. Y de hecho corresponde. Si las líneas verde de la agricultura y roja de la manufactura se observan con atención y, sobre todo, si se conocen las cifras que sirvieron para construir el gráfico, se evidencia algún crecimiento en estos sectores. Pero el efecto es muy pequeño para las proporciones del dinero recibido por la vía del gasto directo como por el papel pretendidamente estimulador de la demanda.

A diferencia de lo que sucede en la relación entre las importaciones y la exportaciones del gráfico 43, en el gráfico 44 las exportaciones petroleras no están sino muy levemente relacionadas con el resto del aparato productivo. No es posible decir que los ingresos petroleros derivados de esas exportaciones desarrollaron de algún modo el aparato productivo. El dinero de las exportaciones petroleras entra al país por la vía del gasto público, sosteniendo directamente acceso y disponibilidad de alimentos por la vía de las importaciones crecientes, pero luego no genera tejidos de mercado pues toda su dimensión productiva se disipa mayormente en la inflación, la devaluación, actividades rentables no orgánicas, fuga de recursos, aumento de las importaciones, entre otras.

El esfuerzo de las políticas públicas dirigidas a sistemas crediticios accesibles, expropiaciones, creación de nuevos sistemas financieros, formación, compras del Estado, venta de bonos, etc., tal como se han

venido realizando para impulsar el SSSA, puede tener éxito en la superación de la pobreza o en la elevación del Índice de Desarrollo Humano hasta el 2010 (PNUD, 2009; Giordani, 2010) pero no remontan la estructura dependiente ni periférica de la economía venezolana.

Ello compromete la estabilidad y los logros sociales en más de un sentido, y empobrece, por la vía de la inflación y la devaluación, a los trabajadores, los cuales, además, aún siguen desincorporados de la economía productiva de alimentos y manufactura, y dependen directa o indirectamente del gasto (Álvarez, 2009).

Todo esto muestra que, a pesar de la “siembra petrolera” y el imperativo soberanista, que incluye la alimentación, el subsistema depende crecientemente del carácter periférico de la venta de hidrocarburos y, a su vez, al interior del subsistema, se crean problemas de dependencia de los tejidos al gran mercado externo y sobre todo, al gasto público.

El Estado, consciente de los problemas de derivación de recursos fuera del subsistema, acusa a los agentes de ser responsables de las derivaciones y actúa sobre las puertas de salida de los recursos: control de cambio, regulación de precios, desmercantilización de los alimentos, etc.

Estas evidencias explican en buena medida los problemas del SSSA tal como son declarados en las observaciones de las diferentes olas post-paro: lentitud de los procesos por razones más políticas que económicas, desaparición y desplazamiento de aliados productivos a otros sectores de la economía, fuga de recursos a otras áreas menos soberanas de la economía, necesidad de tribus políticas para sobrevivir, desplazamiento de la competitividad económica por la política, rentabilidad insuficiente para enfrentar la estructura económica y, finalmente, debilitamiento de los emprendimientos originales: los negocios sociales se han desplazado a formas de intra-emprendimientos estatales (o al simple funcionariado) y los emprendimientos económicos han perdido su carácter social en términos de la creación de soberanía alimentaria a favor de emprendimientos económicos no soberanos, esto es, dependientes del gasto.

La pregunta, en términos de una sociedad interdependiente, esto es, basada en las posibilidades de emprendimientos independientes, es: ¿qué peso tiene la auto-organización social y económica de la sociedad civil en la generación de este bienestar, es decir, no conminada por el Estado o el mercado?.

Aún partiendo de la premisa (discutible desde la misma perspectiva de Víctor Álvarez) de que las formas del Poder Popular estimuladas desde el Ejecutivo son formas de poder interdependientes o incluso independientes, las cifras indican que el peso del Estado sigue siendo muy grande y el éxito económico del poder popular sigue siendo precario.

Según Wilpert, para el 2007 el gobierno esperaba que los nuevos activos de la Economía Socialista sumaran al final del decenio el 16% de la Fuerza de Trabajo, pero la economía socialista no alcanzó un 2% de la Fuerza de Trabajo, aún sin referencias sobre su rentabilidad. El gobierno, puertas adentro, reconoció que los mercados socavaban la llamada economía social (Wilpert, 2007:87). Ya los problemas estructurales al subsistema parecían confrontar el optimismo de esos años.

Para el 2009,

“...luego de 10 años de Revolución Bolivariana, el aporte de la economía social a la producción nacional apenas llega a 1,6%, mientras que el peso del sector privado ha aumentado de 64% en 1998 hasta el 70% en el 2008” (Álvarez, 2009:213).

La crisis del 2009 alertaba sobre la fragilidad del subsistema pero también llevó la idea de que el gasto para impulsar el SSSA era aún insuficiente. Por ello, para el 2011 se dirigió un nuevo e importante desembolso del Estado para reactivar la producción alimentaria soberana, bajo el concepto de “Gran Misión Agro-Venezuela”.

Para mayo del 2011 el gobierno anunció haber entregado 1.402 millones de bolívares en financiamientos a productores a través de esta Misión (Ministerio del poder popular para la Agricultura y Tierras, 2011). Loyo, el Ministro para Agricultura y Tierras, declaró que el importe total presupuestado para el financiamiento de esta Misión y el resto del sector agrícola fue de 43.6 millardos de bolívares

(formalmente, a un 13% de retorno), solo para el 2011 (Loyo, 2011). Se trataba de un plan bianual, de tal modo que se esperaban presupuestos adicionales para el 2012.

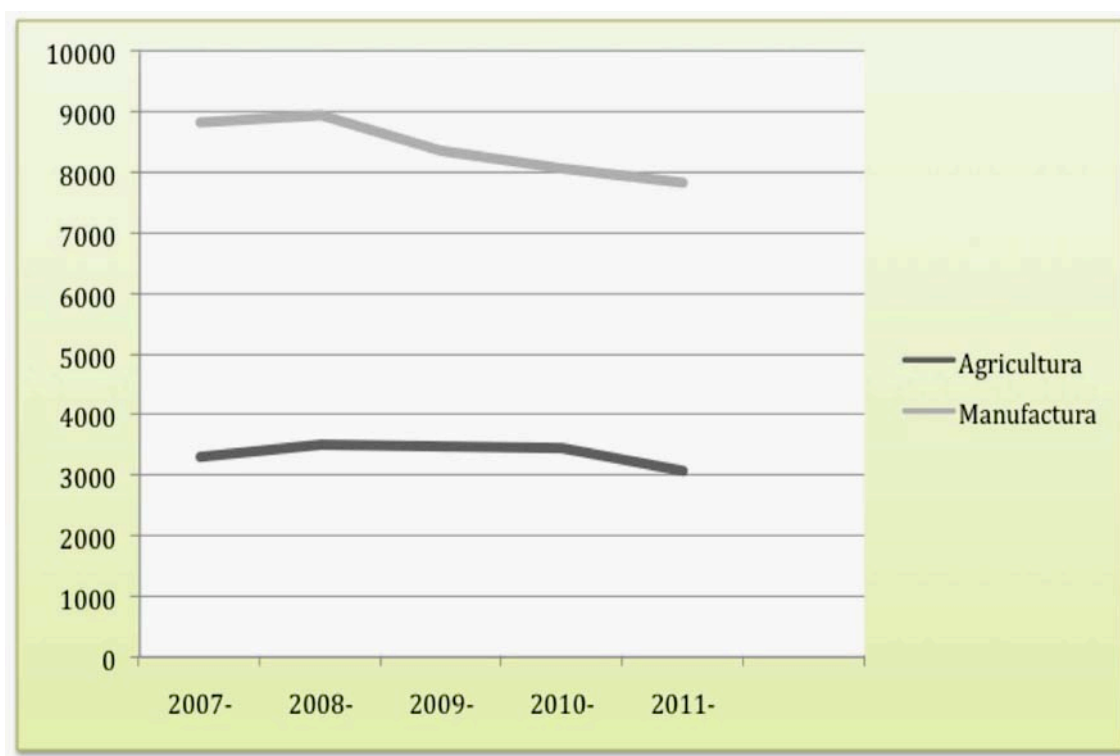
Para tener una proporción de esta importante inversión, el importe anunciado correspondió a casi un 40% (38,1%) del total de las reservas internacionales venezolanas para el 15 de mayo del 2011 (BCV, 2011) y casi el 10% de la totalidad del gasto público, no presupuestado, sino efectivamente cancelado en el 2009 para inversión productiva y social, sumando sus créditos adicionales y sumando las erogaciones del FONDEN y el Banco Conjunto Chino (Giordani, 2010).

También corresponde a casi 13 millardos más de bolívares de lo que perdió Venezuela en el PIB por causa del paro petrolero-alimentario del 2003, si se calcula a 4,28 bolívares el dólar (BCV, 2011).

Sin duda el gobierno para la 5a. ola de participación entendía que la supervivencia del subsistema dependía de reactivar la producción, fundamentalmente, en sectores de generación de soberanía.

Por ello, se convierte en una evidencia preocupante a los fines de las políticas en agenda, que esta gigantesca inversión ya arrojó datos negativos en el último trimestre del mismo año. Según el BCV, la caída de subsector alimentación y bebidas de la manufactura en el PIB, cayó desde el 2010 un 9,1%. Y en la producción primaria, la agricultura descendió un 11,1%, tal como se muestra del gráfico 45:

Gráfico 45. Producción Manufacturera del Sector Alimentos y Agricultura en el PIB 2007-2011. Precios de 1997. BCV, 2011 a; 2011 b.



Las razones atribuidas por el BCV acerca de la caída del subsector alimentación y bebidas fueron:

“...las fuertes precipitaciones, por problemas en la disponibilidad de insumos, por el rezago en los precios de venta y por la volatilidad de los precios de las materias primas importadas, que específicamente impactaron en la producción de lácteos, carne y derivados.” (BCV, 2011 b).

De tal modo que el BCV, en consonancia con el discurso oficial, además de no considerar la baja de la producción agrícola, tal como se documentará en el siguiente capítulo, no consideró los datos estructurales que explicarían los problemas de la producción soberanista de alimentos.

Por ejemplo, desde el discurso oficial los problemas de disponibilidad de insumos son resultado del comportamiento desleal de la burguesía, tal como se ilustró en el sujeto 9 de la situaciones observadas y que creó la amenaza renovada de la fuga de capitales, según se desprende

del diagnóstico que generó políticas como la de CADIVI y según se explica en el epígrafe 6.2.7.

Pero en el discurso económico general venezolano, como en el bolivarianista, se acepta, aunque de manera pobremente entendida, que el fenómeno “rentista” afecta persistentemente la estructura fundamental de la ganancia productiva, afectando el desarrollo sostenible de las industrias. El llamado “rentismo” no produce crisis sino que “colapsa” permanentemente al subsistema venezolano:

“No se trata, en efecto, de una mera suspensión temporal de la decisión de invertir, que siempre podría prolongarse por unos años. Aquí hay algo más de fondo, asociado con una ruptura irreparable de la condición rentística normal, y por la cual se pone de manifiesto la inviabilidad de una estructura económica históricamente localizada, valga decir, su incapacidad para seguir funcionando según sus propios y establecidos patrones” (Baptista, 1997: 155).

En la medida en que el diagnóstico sobre la salud del sector alimentación no atiende esta dimensión del problema y se vuelven a priorizar variables coyunturales sobre las estructurales, el colapso rentista seguirá generando efectos ya reconocidos, como el descenso de los volúmenes de producción en la relación capital/producto o el deterioro a mediano plazo de la inversión privada (Baptista, 1997: 147-155). Por ello es esperable que los problemas estructurales afecten la disponibilidad de insumos: por un lado, su importación supone engorrosos problemas administrativos por causa del control de cambio, los tiempos de la inversión se ven frecuentemente amenazados por los tiempos de la devaluación, explícita y solapada, como por los tiempos de la inflación y, si se agregan la dependencia al gasto y al crédito público, el juego productivo termina desplazándose al terreno de lo político, conllevando con ello más incertidumbre.

Por ejemplo, las regulaciones cambiarias venezolanas son el producto de la tendencia devaluacionista de la moneda, pero ésta a, a su vez, es un efecto del sobrecalentamiento de una economía que no ha logrado estabilizarse en 9 años. La acusación de “cultura rentista” a los sectores productivos, tanto tradicionales como el llamado “socialista”, tal como se revela en varias observaciones (ver, entre otros, el sujeto 13 del cap. 6.3.5) resulta desde esta óptica, un diagnóstico insuficiente por lo cual la fuga de capitales que se desea contener con el control de cambio

sigue erodando el subsistema a pesar de la política, por cuanto muchas de sus causas no han desaparecido.

El “rezago de los precios de las ventas”, tal como lo diagnostica la noticia del BCV, al margen de ser el resultado del acaparamiento y a especulación, también lo es de políticas de regulación de precios en las materias primas y alimentación básica, que tuvieron por objetivo contener artificialmente la tendencia inflacionista del subsistema venezolano, lo cual también es un efecto del sobrecalentamiento de la economía. Igualmente “la volatilidad de los precios de las materias primas” ya importadas es en parte consecuencia de la importancia que le da el sector privado a basar su inversión fuera del subsistema, pero también es consecuencia de la inestabilidad del poder adquisitivo de la moneda venezolana en el sector externo, lo cual sesga a favor del importador o productor secundario precios más altos para compensar tal inestabilidad.

A la postre, el aumento de la demanda, por ser inorgánica, esto es, que no sustituye importaciones sino que más bien las genera, da por resultado un subsistema más dependiente a las importaciones y al sistema capitalista mundial.

En términos de sustentabilidad del modelo y a pesar de los fuertes importes introducidos por la Gran Misión Agro-Venezuela para estimular la “Siembra Petrolera”, el retroceso de la producción alimentaria durante la 5a. ola de participación supuso también un retroceso de los objetivos soberanista y socialista del SSSA, entendidos éstos como el efecto político esperable de la independencia socio-económica de los trabajadores, a las puertas del 2012.

El subsistema, al margen de los problemas de eficiencia de los componentes del SSSA, de las acusaciones de deslealtad y sabotaje al sector privado o de la pertinencia de las políticas del Estado, presenta graves problemas de inabsorción económica del gasto, los cuales debilitan todo el tejido productivo y lo descapitalizan. Estos problemas de inabsorción ya se habían documentado desde el aumento de los precios de la guerra del Yom Quipur en 1973, algunos de cuyos estudios son citados a lo largo de esta tesis.

En los términos de la seguridad alimentaria, estos problemas impactan las posibilidades del SSSA en generar alimentos *autónomamente* y

amenaza la *estabilidad* de las provisiones, dos subobjetivos de relieve en la medición relevada por la FAO.

7. Los alcances del SSSA en términos de seguridad alimentaria y participación.

Este capítulo medirá la generación de seguridad alimentaria por parte del SSSA a través de los procedimientos convencionales establecidos por la FAO. Para abordar el sub-objetivo central de la seguridad alimentaria “suficiencia”, entendido como *la proporción en la cual, el abastecimiento de alimentos satisface los requerimientos energéticos y nutricionales de la población, en un período determinado*, se utilizará como referencia el binomio “disponibilidad y acceso” a los nutrientes. Para ello, se utilizará la ponderación del déficit nutricional en niños menores de 5 años en relación a la norma calórica, los porcentajes de la población y en el tiempo de estudio. Se adicionarán algunas otras medidas antropométricas (FAO, 2005). Por cuanto el precio de los alimentos e ingresos familiares son variables de pobreza y estos indicadores están relacionados con “acceso”, reforzaremos el cumplimiento de estos objetivos mediante las asociaciones explícitas hechas por la FAO entre seguridad alimentaria y pobreza. Es una preocupación en la FAO que las naciones procuren cumplir las metas del milenio relacionando explícitamente seguridad con pobreza (FAO, 2005).

Si bien la FAO no defiende una relación causal entre pobreza y seguridad alimentaria, defiende una asociación importante en virtud de que las situaciones de pobreza y su inequidad derivada ponen en contexto la inseguridad alimentaria. Por tal motivo, con el interés de dar continuidad a esta asociación, esta tesis procura ampliar el alcance de los objetivos “disponibilidad” y “acceso” a través de indicadores de pobreza, empleo, canasta alimentaria y la relación entre subsidios y ahorro familiar en el SSSA.

Finalmente, para poner en vigor el impacto de lo político en la lucha contra la pobreza y contra la inseguridad alimentaria, se explorarán los valores Índice de Desarrollo Humano del PNUD e Índice de Gini. Tanto el primero como el segundo permiten observar la seguridad como el resultado de diferentes políticas simultáneas de Estado en las áreas de salud, educación, empleo, participación, ingreso familiar y distribución de la renta nacional.

Se ha subrayado la importancia de las políticas de desarrollo territorial en la generación de seguridad alimentaria. Alexander Schejtman sugiere la creación de cadenas de mercado que integren la producción y el consumo dentro de un sistema a diferentes escalas interdependientes entre sí (Schejtman, 1999). Para explorar esta idea se vaciarán algunas indicaciones sobre la dimensión territorial de las políticas del SSSA con el fin de visibilizarlas en un escenario más completo.

Han habido otros análisis que procuraron centrar la idea de seguridad alimentaria en Venezuela por fuera del enfoque de la FAO. En uno de estos casos se dio importancia al sub-objetivo “autonomía” y a una lectura estructural del sub-objetivo “estabilidad” con el fin de afirmar que el alto nivel de importaciones y el desabastecimiento en los anaqueles son la evidencia de la inseguridad alimentaria. Esta perspectiva supedita el consumo efectivo de los alimentos a la ineficiencia de las empresas y del modelo socialista de producción (Obuchi, Abadi y Lira, 2011:173-175).

En otro caso se ha procurado centrar el problema de la suficiencia alimentaria supeditando el consumo efectivo de nutrientes a variables de la estructura económica como la inflación, salario mínimo y la canasta alimentaria. Según este análisis, la pobreza por la línea de ingreso estaría mal medida por el INE-BCV. Una medición diferente revelaría mayor pobreza, una canasta alimentaria más inaccesible y por consiguiente, mayor insuficiencia alimentaria. Esta perspectiva desestima el papel del SSSA, muy especialmente de sus componentes comercializadores, en la baja de los precios sobre el mercado tradicional por cuanto éste último ha seguido siendo el tipo mercado fundamental sobre el que reposa la economía nacional. De este modo, ese análisis desestima el ahorro producido por los precios regulados y los precios subsidiados del SSSA para centrar el análisis en la inflación y los ciclos de escasez en los anaqueles (CENDAS-FVM, 2011).

En un camino contrario, esta tesis se decanta por la alternativa ofrecida por la FAO la cual mide el impacto de la política pública en los nutrientes efectivamente consumidos por la población en un tiempo determinado. Es decir, se parte de la idea de que el SSSA genera seguridad alimentaria en la medida en que alimenta efectiva y adecuadamente a su población en el tiempo, con independencia de los problemas de eficiencia, volatilidad inflacionaria, autonomía y suficiencia productiva. Si bien la noción de seguridad alimentaria supone directa o indirectamente que ella debe ser el resultado de

políticas estables de producción y mercado que den consecuencia a la nutrición, también es cierto que la seguridad se produce cuando la nutrición mínima o media es efectivamente alcanzada. Esta perspectiva, tal como lo hace la FAO, pone en primer lugar la suficiencia alimentaria en el tiempo para medir la seguridad alimentaria.

No por esta razón esta tesis deja de reconocer que sub-objetivos muy importantes del concepto de seguridad alimentaria, tales como autonomía-autosuficiencia y estabilidad están peligrosamente comprometidos por razones de política pública y macroeconomía periférica, tal como se argumentó mucho más ampliamente en los capítulos 6.4 y 6.5.

7.1. Financiación, cobertura del sistema y el manejo del territorio.

7.1.1 El tamaño de la financiación.

El concepto de seguridad alimentaria hace posible destacar aspectos como el esfuerzo del Estado en hacer viable la política pública. Con el fin de identificar preliminarmente este esfuerzo, la FAO ha dado importancia al papel que juega el gasto estatal en agricultura y alimentación para lograr suficiencia alimentaria (FAO, 2010b). Una manera de medir este esfuerzo, quizás la mas simple, consiste en el tamaño de la financiación (Van Den Bosch y Cantillon, 2008: 305-306).

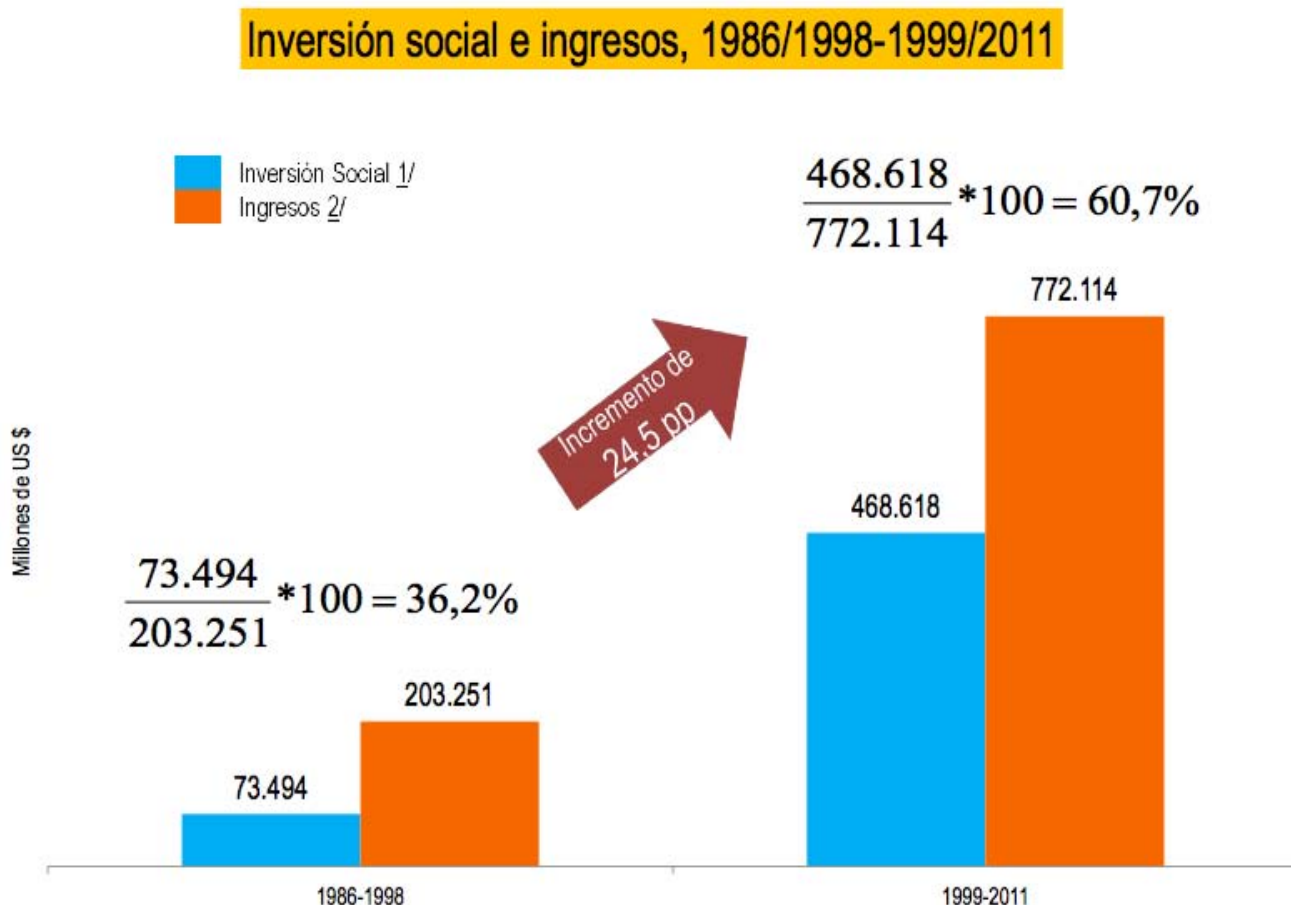
El Estado ha hecho una importante inyección de recursos sociales políticos y sobre todo, económicos, para el logro, no solo de seguridad sino también del objetivo “soberanía alimentaria”.

Esta inyección consistió fundamentalmente en tres tipos de componentes: teórico-jurídicos, institucionales y financieros.

Por cuanto, de esos tres componentes, la FAO ha hecho particular insistencia en que los Estados aumenten el gasto en agricultura y alimentación para lograr los Objetivos del Milenio (FAO, 2010b), esta tesis insistirá en un primer momento en la dimensión financiera y su relación con el binomio seguridad alimentaria/lucha contra la pobreza.

El Estado venezolano ha hecho un aumento muy significativo de su inversión o gasto social, el cual incluye parte del gasto en desarrollo económico y social. Esto se ilustra en el gráfico 46.

**Gráfico 46. Asociación entre Gasto Social e Ingresos familiares
1986-1998 y 1999-2011. INE, 2012 a.**



1/: Comprende administración central, gobernaciones, alcaldías, PDVSA y FONDEN 2/: Comprende los ingresos del sector público restringido consolidado

Fuente: - Oficina Central de Presupuesto, ONAPRE – Banco Central de Venezuela, BCV - Instituto Nacional de Estadística, INE. Cálculos propios
- Ministerio del Poder popular de Planificación y Finanzas, MPPPF. Cálculos propios. pp: Puntos Porcentuales

Tal como se ha visto de gráficos anteriores como el 13 o el 44, y de otros argumentos desarrollados en esta tesis, se entiende que el aumento de los importes en gasto social son el resultado de los aumentos de los ingresos nacionales por la vía de la exportación de hidrocarburos, aumento de la fiscalidad y diferentes instrumentos de deuda pública. Pero el gráfico 46 no solo revela un aumento de la disponibilidad de recursos del ejecutivo sino su efectiva inyección en la economía de manera permanente por una década, el cual, al menos, coadyuvó a un aumento considerable del ingreso familiar en relación a la década anterior.

Es pertinente matizar que el cálculo que hace el INE en este gráfico no utiliza la compensación por la vía del IPC sino en relación al dólar estadounidense, en una medida que suele denominarse “Poder de Compra Internacional” o PCA. Esta medida revelaría un mayor poder de compra de los consumidores en el mercado mundial. Sin embargo, el consumo fue delimitado en la práctica por un control de cambio de divisas el cual definió de manera artificial en la valor de la moneda. El PCA en el gráfico oculta así una inflación de un 287,9% entre 1999 y 2011 (BCV, 2011 a).

Esto no anula la pertinencia del cálculo: para la década del bolivarianismo hubo un aumento de los ingresos reales que correspondió a un aumento formidable del gasto social, en comparación a la década anterior.

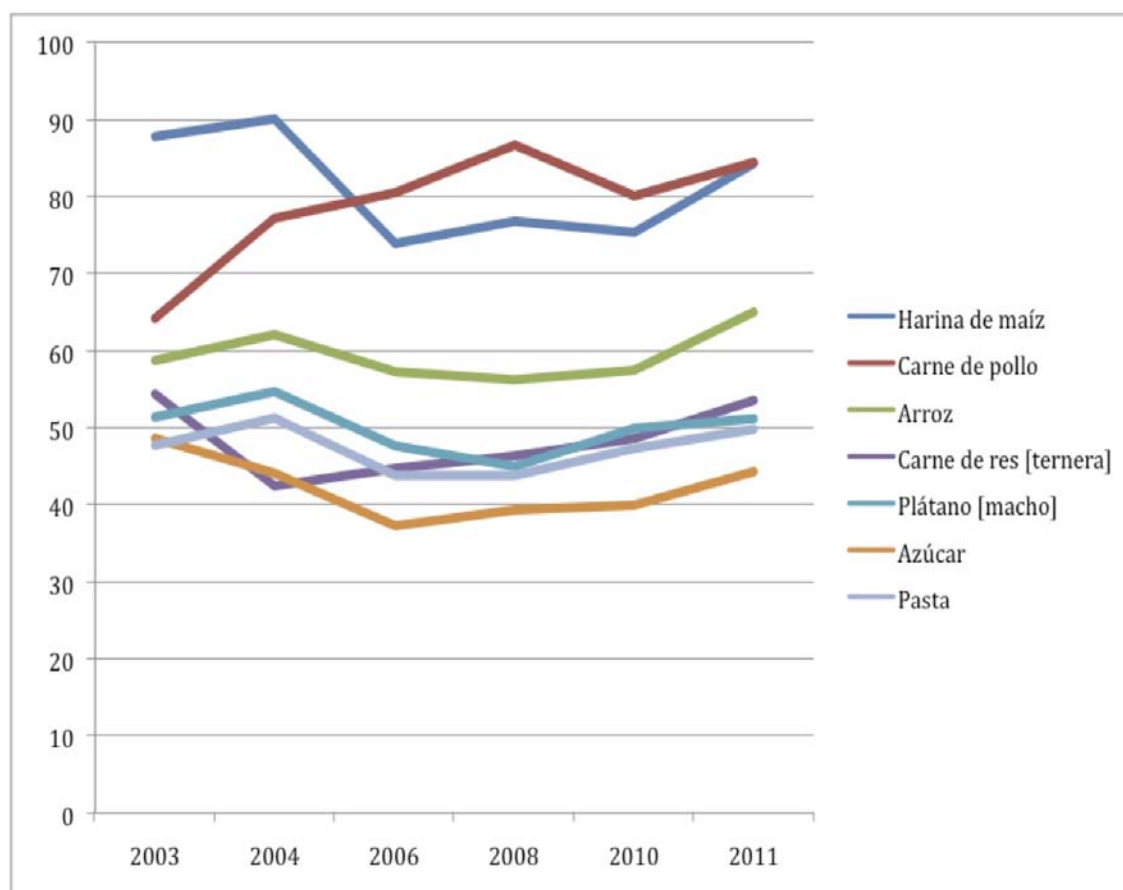
Este aumento del ingreso se tradujo en un mayor consumo de alimentos evidenciable desde el 2004, en la 2a ola de participación y que continuó su ascenso hasta el 2006, en la 3a ola.

“De acuerdo a cifras tanto del sector gubernamental como no gubernamental, los venezolanos están consumiendo más cantidad de alimentos (...) Según el INE (...) ha habido un incremento en casi todos los alimentos de mayor consumo a excepción de la harina de maíz y de la pasta alimenticia.

Por su parte, la encuestadora Datanálisis, reportó que en el primer trimestre de 2006 la demanda de alimentos creció 9% respecto del mismo período del año anterior, estimando que *‘Este crecimiento se podrá mantener estable hasta finales del año. Calculamos que el crecimiento del consumo de alimentos en 2006, será de 8% aproximadamente’*. Para Datanálisis este aumento se verifica tanto en el aumento de la compra de alimentos como en el aumento en la cantidad de comidas y de alimentos que contienen esas comidas” (Provea, 2006:62-63).

Al comparar las estimaciones de consumo por rubros para los cálculos del INE desde el segundo semestre del 2003, esto es, luego de la consolidación del SSSA y de los años 2009-2010, es posible observar que los aumentos del consumo indicados en la cita anterior se mantuvieron durante la segunda mitad de la década, tal como se desprende del gráfico 47.

Gráfico 47. Consumo de alimentos por rubros, gramos x día x persona en los 2dos. semestres 2003, 2004, 2006, 2008, 2010 y primer semestre del 2011. A partir de INE, 2012.



También es posible observar que el consumo de pollo es creciente en detrimento de los carbohidratos hasta el 2006 y que, desde ese año, todos los demás rubros en su conjunto siguieron ascendiendo progresivamente aunque de manera irregular. Visto desde esta perspectiva, la tesis de que el desabastecimiento en los anaqueles, característicamente irregular, en pequeñas temporadas y por regiones, habría impedido el consumo de los rubros básicos, no parece sostenerse.

En relación al aumento de la producción asociada entre 1999 y 2008, los resultados arrojados por el VII Censo Agrícola son optimistas:

pollos (106%), porcinos (91%), leche (68%), algodón (23%), maíz (26%), sorgo (10%) y cacao (13%) (Buitriago Arcia, 2011; MPPAT, 2012).

Los datos del VII Censo Agrícola fueron impugnados por diputados de la oposición y por la mesa técnica del programa electoral opositor argumentando que los datos son falsos y la producción inferior (Mesa de Unidad Democrática, 2012: 80-90). Los datos levantados y arrojados por el BCV tampoco corroboran esta tendencia al aumento de la producción desde el 2007 al 2011 (BCV, 2011 a). En espera de confirmar la veracidad del censo, restan los datos de consumo del INE, los cuales han sido confirmados en varias oportunidades por los protocolos de la FAO (FAO y CAF, 2006) y que han servido de referencia a organismos independientes como Provea (Provea, 2000;2006;2011).

En la primera parte de este capítulo se concluye que hubo una importante inyección de gasto público que coadyuvó un aumento de los ingresos familiares y que éstos debieron sostener un aumento del consumo alimentario. Pero aun ello no responde a otras preguntas: ¿tal aumento se produjo también en las poblaciones que presentaban desnutrición? ¿El aumento del consumo alimentario supuso la reducción la pobreza? ¿El aumento del consumo provocó un aumento de la producción nacional? Ya se estableció que la producción, haya aumentado o decrecido, no satisfizo a la demanda, que ésta requirió de niveles muy altos de importaciones, así como se estableció que si bien el aumento del gasto elevó la demanda y los ingresos familiares, también ha estado impactando negativamente las condiciones productivas ¿Todo ello produjo el abandono del campo y de las consiguientes políticas territoriales de producción y consumo?

A continuación se mostrarán los alcances del SSSA en seguridad alimentaria en relación al manejo del territorio, evolución de la producción alimentaria, indicadores de pobreza y nutrición, así como algunas otras mediciones colaterales que podrán ayudar a responder estas preguntas.

7.1.2. Cobertura por superficies cosechadas.

Una manera de financiar el SSSA consistió en la obtención tierras para hacerlas productivas por la vía de su “recuperación”, tanto por

expropiaciones de la Ley de Tierras, confiscaciones o recuperación de ejidos y latifundios.

40 años antes de 1998 la superficie cosechada por habitante ya se estaba reduciendo, esto es, en sentido inverso al crecimiento demográfico. Según el mismo ministro de Producción y Comercio de entonces, J.J. Montilla:

"...el área cosechada por habitante se reduce de 2.575 m² en 1950, a 2.089 m² en 1961; a 1.706 m² en 1970; a 1.177 m² en 1980; a 898 m² en 1990, y a 714 m² en 1998, lo cual ocurre sin haber logrado como contraparte, una sustancial mejora en el rendimiento por unidad, de superficie" (Provea, 2000).

Doce años después, en base a los datos ofrecidos por el VII Censo agrícola publicado el 2010, el Ministro Juan Carlos Loyo declaró que la superficie cultivada habría aumentado en un 49% desde 1998 (Buitriago Arcia, 2011). A las 2.433.943 hectáreas calculadas por el VII Censo Agrícola habrían correspondido 118.326 m² *per capita* para el 2010.

Sin embargo el Ministro Loyo hizo referencia a las hectáreas cultivadas en 1998 como 1.638.923 lo que resulta en 110.470 m² *per capita*. Lo que significa que estuvo utilizando en el 2011 una fuente diferente que su par en 1998. Hay muchas razones por la que esto puede ser así (superficies irrigadas, tipo de tenencia, "inferencialidad" del censo, criterios relacionados a los registros de tierras, etc).

Pero hay datos que se desprenden solamente de cruzar la información del propio Ministro Loyo con la de la población censada para 1998 y para el 2010 utilizando la fuente oficial del INE. Por cuanto se extrae que la superficie cosechada *per capita* de 1998 fueron 110.470 m², significa que la superficie cosechada solo aumentó algo menos de 8.000 m² *per capita*, esto es, un 7,2% en 12 años de SSSA

Esto demostraría que el aumento de la producción asociable a esas hectáreas está lejos de corresponder a una población que no solo es casi 9 millones de personas mayor sino con una mucho mayor capacidad de demanda. Salvo que las tecnologías de aprovechamiento de las tierras hubiesen cambiado radicalmente en todo el territorio, cosa que no fue así, la política de recuperación de tierras y créditos agrícolas del SSSA no logró aumentar la base territorial sobre la cual impulsar adecuadamente la agricultura en relación a la demografía y la demanda.

Sin embargo, la cifra, por pequeña que parezca, refleja que el crecimiento de la población no dejó atrás la correlación de las superficies cosechadas, como había sucedido en las 4 décadas anteriores.

En otras palabras, de corroborarse las cifras del VII Censo agrícola del 2010, sería la primera vez en 50 años que Venezuela mostró cifras que revirtieron la tendencia del abandono del campo, aunque esto no fuese mínimamente suficiente para sostener una política productiva autónoma.

Finalmente, en forma de confiscación, expropiaciones de la Ley de Tierras y recuperación de tierras ejidas, el Ministro Loyo declaró que el censo había arrojado la recuperación de 3,5 millones de hectáreas de tierras de latifundio y que éstas debían aumentar:

“El censo indica que existen 15 millones de hectáreas, concentradas en 2% de las unidades de producción. Lo que significa, que se debe mantener la lucha para que más personas tengan acceso a las tierras” (Buitriago Arcia, 2011).

En la última declaración del Ministro Loyo se desprende la intención del Estado de continuar la política de repartir los latifundios para incidir en la producción por la vía del aumento de las superficies cosechadas. Sin embargo según el contexto estudiado, aumentar la producción por esta vía requeriría de reformas importantes en lo macroeconómico y en la política alimentaria sin las cuales no parece posible obtener el efecto deseado.

De tal modo que es posible considerar que la estrategia de recuperación de tierras del SSSA revirtió la tendencia histórica de disminución de superficies cosechadas en relación al crecimiento demográfico. Sin embargo también se indica que este crecimiento sigue siendo tendencialmente muy insuficiente para satisfacer el crecimiento de la demanda expresada en el aumento de los ingresos familiares, el aumento consiguiente de la demanda y el crecimiento de la población. Esto es posible de afirmar, incluso, sin considerar variables fundamentales como eficiencia productiva y estabilidad de la producción en el mercado, variables que, por demás, no gozan de entera salud en la mayor parte de las observaciones vaciadas en esta tesis.

7.1.3. Cobertura por componentes de producción, comercialización y provisión directa

El SSSA ha ejecutado nacionalizaciones y recuperaciones de medios de producción con el objetivo de incorporarlos a una red de producción socialista que responda a la demanda nacional.

En relación a la recuperación de las tierras, el Ministro de Agricultura Juan Carlos Loyo declaró a principios del 2011 que la política de recuperación de tierras había afectado desde el 2002 hasta esa fecha un 10% de los espacios dedicados a la siembra. Este porcentaje correspondía a unos 3 millones de hectáreas sobre los “30 millones de hectáreas con vocación agrícola, pecuaria y forestal existentes en el país”, refiriéndose a “450 mil pequeñas, medianas y grandes fincas” con que cuenta toda la nación. Las tierras recuperadas estarían en un 72% “completamente productivas” e incrementarían para ese año “en 19% y 30% la ganadería y los productos vegetales, respectivamente” (Loyo, 2011a). Aun para la fecha de la declaración no se había lanzado la Gran Misión Agro-Venezuela, la cual prometería nuevas inversiones y aún mejores resultados.

Sin embargo, como se identificó en el gráfico 46 del capítulo 6.5.2. la producción agrícola cayó en su totalidad en 9% para finales de ese mismo año.

En el gráfico 48 se muestran los problemas de la producción por rubros y por períodos en base a datos del propio Ministerio del Poder Popular para Agricultura y Tierras, y Fedeaagro. Si bien en términos generales es posible decir que los rubros maíz, arroz, sorgo, caraota [frijol], palma aceitera, papa [patata], melón, café, caña de azúcar, aves, bovinos, huevos, leche y porcinos aumentaron su producción desde la victoria electoral del bolivarianismo, también es cierto que tal aumento tuvo un promedio del 2,5%, lo que difícilmente alcanzaría al 14% de crecimiento demográfico y el 329% de aumento del ingreso familiar que hubo entre esas fechas, según el gráfico 46 y sin contar la producción a la baja de los demás rubros.

Aún más, el gráfico 48 muestra la relación de las olas de participación en el SSSA y sus efectos en la producción global agrícola. En la 1a y 2a ola de participación, esto es, entre la Ley de Tierras y la consolidación de Mercal, representables en el período 1998-2003, todos los rubros alimenticios caen con la excepción de cuatro, los cuales, además, se elevan muy moderadamente. Estas caídas podrían explicarse por los efectos del paro petrolero-alimentario ya que para el período

siguiente, 2003-2008, es visible un aumento de la producción en todos los rubros menos cinco. Desde el 2003 al 2008, además, se ha producido un importante aumento de emprendimientos que el Estado deriva hacia el modelo endogenista-socialista, tal como se había destacado en el literal “a” del capítulo 6.5.2 de esta tesis. Sin embargo, los efectos de la macroeconomía y de las políticas públicas concretas (control de precios, de divisas, prohibición de exportaciones, inflación persistente...), tal como se ha evidenciado en las observaciones, parecerían hacer efecto en el período 2008-2010, correspondiente a la 4a y 5a ola de participación, por cuanto vuelven a caer todos los rubros alimenticios agrícolas con la excepción de siete.

Gráfico 48. Tasas medias de producción agrícola y pecuaria por rubros. Varios períodos. Provea, 2011.

Cuadro N° 5 Tasas medias de crecimiento de la producción (%)				
Rubro	1998-2010 (%)	1998-2003 (%)	2003-2008 (%)	2008-2010 (%)
Arroz	3,4	-0,6	13,3	-9,2
Maíz	8,2	13,2	10,5	-8,8
Sorgo	0,4	6,5	-1,3	-9,3
Caraota	5,8	-6,2	20,7	3
Palma aceitera	2,4	-4	4,8	13,3
Papa	2,3	-3,8	9,3	1,1
Yuca	-0,4	1	0,3	-5,2
Cambur	-5,5	-7,2	-0,2	-13,9
Plátano	-5,4	-6,5	-3	-8,4
Melón	2,8	11,5	1,5	-13,5
Mango	-7,6	-12,8	3	-18,8
Naranja	-1,4	-6,8	-7,4	-8,4
Ajo	-0,2	-3,8	6	-5,6
Cebolla	3,5	4,4	0,3	9,7
Tomate	0,5	-3,3	8,3	-8,6
Zanahoria	-1,7	-3,4	2,5	-7,5
Cacao	1,3	-3,1	4,9	3,5
Café	0,8	-0,8	2,9	-0,4
Caña de azúcar	1	4,2	-0,7	-2,9
Aves	0,1	-2,9	3,5	3,9
Bovinos	1,2	-0,03	3,1	-0,06
Huevos	0,8	0,3	1,4	SI
Leche	4,7	-3,6	8,8	16,8
Porcinos	4,2	0,1	5,5	11,9

Fuente: MAT. Cálculos propios de Fedegro [en línea] <<http://www.fedegro.org/Asamblea%202011/EvolucionSistemaAlimentario.pdf>>

Adicionalmente, en el gráfico 48 se observa que las caídas desde el 2008 al 2011, a diferencia de las caídas asociables al paro petrolero-alimentario del 2002-2003 son mucho más altas y solamente ellas promedian un 8%.

De tal modo que, en relación a la cobertura de superficies cosechadas, recuperación de tierras y producción agrícola del SSSA parecería posible afirmar que hubo un aumento del control por parte del poder popular de importantes medios de producción que sumaron un 10% del campo venezolano con una capacidad productiva relativamente mayor, la cual se demostró durante el período 2003-2008. Sin embargo, el poder popular no solamente no pudo alcanzar luego la dinámica de la demanda nacional, sino que contrajo su capacidad en los últimos dos años y medio del período estudiado, del 2009 al 2012, correspondiendo éstos a los efectos más contundentes del aumento del gasto asociado al mismo SSSA.

En relación a la producción manufacturera de alimentos, también se produjo una importante intervención del Estado que trasladó empresas privadas al poder popular y al mismo Estado, de lo cual son muestra los gráficos 49 y 50:

Gráfico 49. Empresas estatizadas entre el 2007 y 2008 por sector productivo. Procompetencia, 2012.

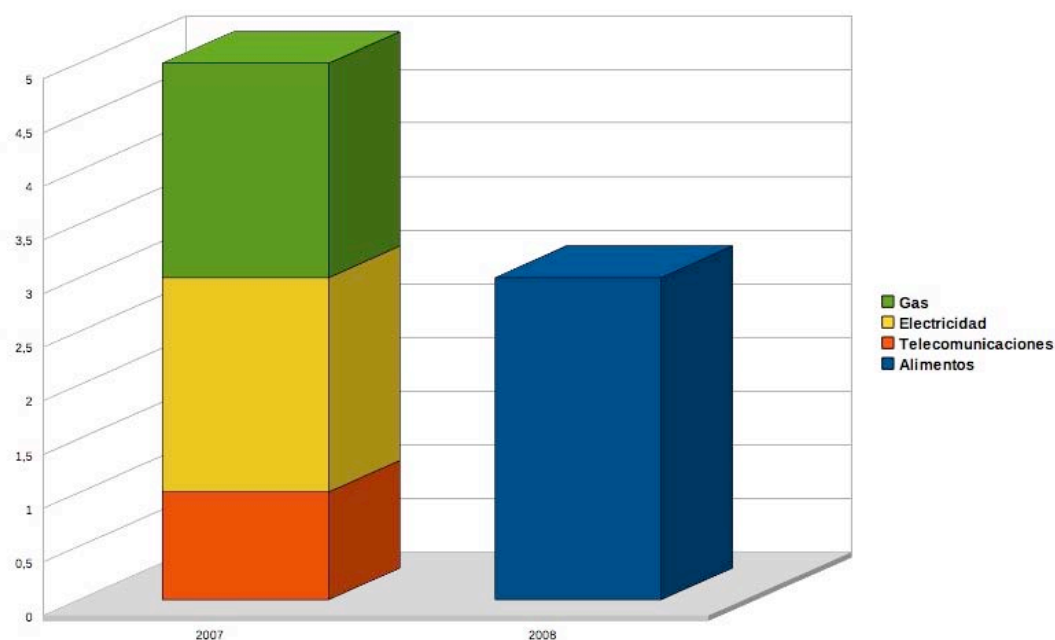
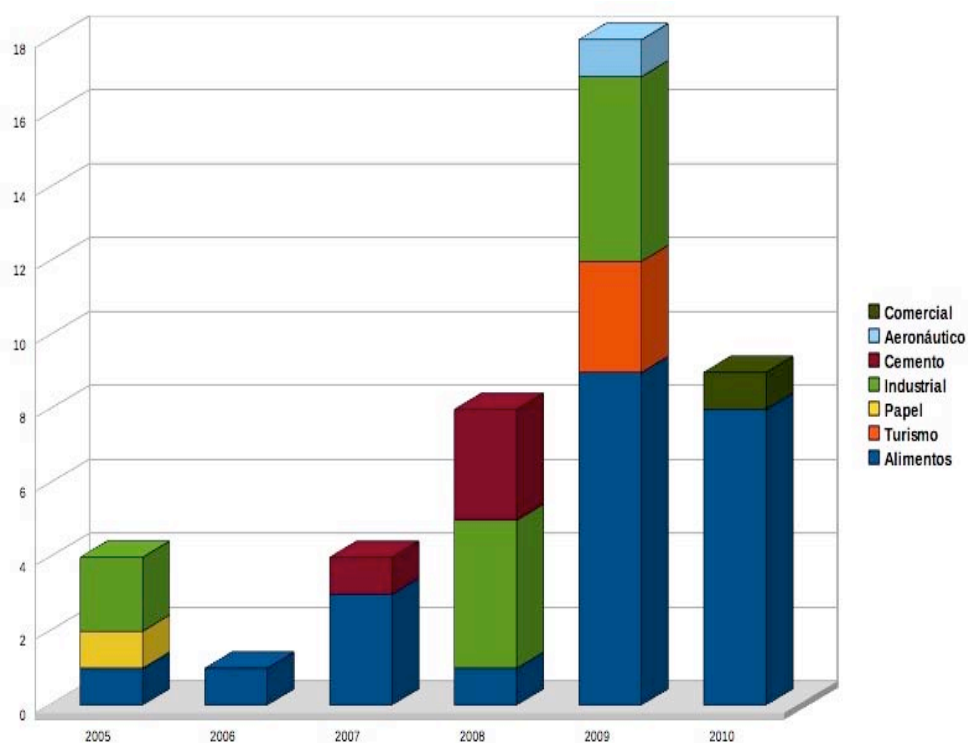


Gráfico 50. Empresas recuperadas por decreto de expropiación 2005-2010. Procompetencia, 2012.



El color azul oscuro de estos gráficos indica las empresas alimentarias adquiridas y expropiadas por el Estado para su inclusión en el SSSA. Como puede notarse, la actividad del Estado en este sentido es persistente entre el 2005 y el 2010 pero es particularmente más intensa entre el 2007 y el 2010. Los resultados de estas intervenciones en términos de su incidencia en la producción global de alimentos para el año 2011 también muestran una fuerte caída esta vez mayor, del 11%, en el gráfico 45.

Todas estas cifras indican que el SSSA logró ampliar su radio de cobertura productiva en superficies cosechadas, tierras recuperadas, empresas expropiadas y empresas adquiridas, generando con ello un importante control del aparato productivo nacional. Pero no logró generar una incidencia efectiva en la producción global de alimentos ni de manera absoluta (en relación a la productividad anterior) ni sobre todo de manera relativa (en relación al aumento demográfico y la demanda). Esta conclusión coincide con las cifras que ya se habían ofrecido sobre importación de alimentos del SSSA en el gráfico 28 del capítulo 6.5.2. y con las cifras estimadas de importación en esta tesis del 78% para el 2010 y por las calculadas por el propio Ministerio del Poder Popular para la Alimentación en 77,9% en su memoria y cuenta presentada en el 2011 (Minppal, 2011). En otras palabras, el SSSA, al no poder alcanzar sus metas productivas y, por tanto, soberanistas, utiliza los recursos petroleros para importar alimentos.

La FAO publica que la importación total de alimentos para el período bianual 2000-2002 es del 63.8% y para el 2006-2008 es del 62,7 % (FAO, 2012 a). El Instituto Nacional de Nutrición, organismo encargado de publicar y transmitir a la FAO esta información, deja de mostrar los totales de las kilocalorías importadas en las hojas de balance alimentario a partir del 2007 hasta el 2009, último año publicado (INN, 2012). Cadivi, la oficina encargada de aprobar las divisas de importación, publica que en el 2011 se aumentó la asignación de divisas al sector alimentario un 11,7%, esto es, de 4.182,9 millones de dólares aprobados en el 2010 a 5.023, 8 millones en el 2011. La empresas indicadas como beneficiarias de estas aprobaciones pertenecen todas al sector privado, de tal modo que aun no están reflejando el 78% de alimentos importados en la oferta socialista³³.

³³ Muchas razones pueden darse al respecto. La oferta socialista de alimentos puede simplemente no publicarse, como es el caso de la importación calórica del

La oferta socialista, por demás, tanto desde las diferentes encuestas de presupuestos familiares (que incluyen hábitos alimenticios) como por encuestadoras no filiadas al Estado, como Datanálisis, supera desde el 2006, al menos en 10 puntos, la oferta de todas las demás cadenas de supermercados privados, es el segundo tipo de estructura comercializadora luego de los pequeños abastos locales y suple cerca del 50% de la demanda (Vheadline, 2005; 2007; León, 2009; BCV, 2007; 2011).

En cualquier caso, los niveles de importación referidos son muy preocupantes. Desde la misma perspectiva del gobierno, implica un retroceso importante de toda la estrategia llamada socialista que no solo se prometió a la ciudadanía sino también a los organismos de cooperación internacional. Tal es el caso del Marco de Asistencia firmado por el PNUD y el Ministerio de Planificación, en el cual este Ministerio y organismos internacionales acordaron un financiamiento especial para el gobierno venezolano con el fin de impulsar su seguridad alimentaria. En este marco, firmado en el 2008, establecen:

“Para alcanzar la meta de reducir a la mitad el número de personas que padecen hambre, el gobierno se ha planteado un ambicioso plan nacional de nutrición orientado a la **producción** y el consumo de alimentos fuentes de calorías, de proteínas y de micronutrientes que presentan déficits, incentivando la **producción** de estos rubros **para alcanzar niveles de autosuficiencia alimentaria de un mínimo de 74%** para el año 2015” (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y Ministerio del Poder Popular para la Planificación y el Desarrollo, 2008)³⁴.

Por otra parte, en términos de mediciones de la FAO, se ha establecido que la autonomía se sostiene sobre la independencia energética y no tanto en la independencia económica. Esto es, la autonomía se calcula sin considerar las exportaciones totales de un país que, en el caso venezolano incluiría el petróleo. En su lugar se calcula como Importaciones de alimentos/Disponibilidad de alimentos x 100. Por los datos observados, Venezuela debe estar entre un 65 y un 80% de importaciones para este cálculo en el 2011. Sin embargo,

INN, o puede tener otras vías para la obtención de divisas como el SITME, el Sucre, partidas solapadas de la misma Cadivi o, incluso, compras directas de PDVSA.

³⁴ El subrayado es nuestro.

importaciones mayores del 30% son consideradas por este mismo cálculo como “Dependencia crítica” y este nivel consiste en el más crítico de toda la medición (Figueroa Pedraza, 2005). Todos los datos permiten afirmar que Venezuela sobrepasa ampliamente ese 30% de importaciones.

Juan de Jesús Montilla, Ministro de la Producción y Comercio para 1998 había declarado:

"Sustentar la precaria seguridad alimentaria en base a la dependencia, a masivas y costosas importaciones de productos agrícolas, alimentarios y de otra índole, le ha costado al país la enorme cantidad de 34.000 millones de dólares en los últimos 25 años" (Provea 2000).

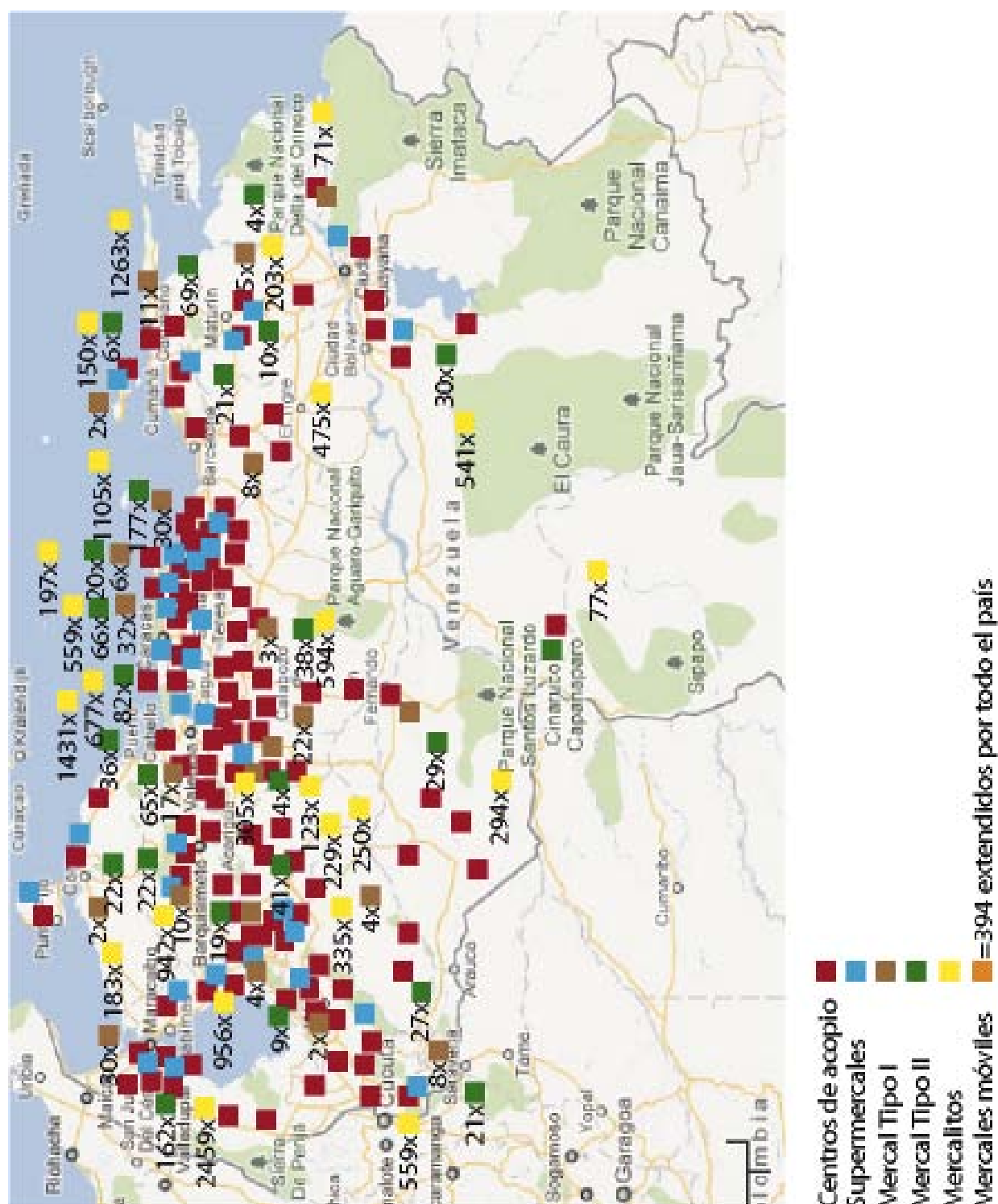
De tal modo que el problema de las importaciones en el sub-sistema no es nuevo. Ejemplos de ello se han revisado en capítulos anteriores y coinciden con un análisis, de escala mayor, en la que la debilidad estructural del Estado venezolano antes del bolivarianismo es el resultado de estrategias macroeconómicas basadas casi exclusivamente en el petróleo.

El cómputo del costo de los alimentos importados del SSSA, considerando demás erogaciones en línea con el esfuerzo productivo, comercializador, los transportes, los insumos, entre otros, es una tarea que ameritaría una investigación por sí misma. Sin embargo, por las nuevas proporciones con la que se expresa la economía y la demografía venezolana de los 12 años estudiados del bolivarianismo, el esfuerzo financiero que ha implicado el propio SSSA, así como la elevación de los precios de los alimentos acusados por la FAO producto de su derivación a los biocombustibles y a la especulación financiera (ver capítulo 3), no es difícil estimar que para la fecha de estudio el bolivarianismo produjo un importe mucho mayor al denunciado por el ex-ministro Montilla para los gobiernos anteriores al bolivarianismo.

La importación masiva de alimentos obliga a trasladar el análisis de la cobertura del SSSA de la producción a la comercialización, allí donde son colocados los productos importados para lograr suficiencia alimentaria.

Los componentes de la comercialización más importantes del SSSA son Mercal y Pdval. Por ello, en los gráficos 51 y 52 se ofrece un mapa de la presencia de los diferentes tipos de Mercales y Pdvaes a lo largo del territorio nacional.

Gráfico 51. Distribución de puntos de acopio y comercialización de Mercial sobre el territorio nacional. Mercial, 2012 y datos propios.



La red Mercal esto es, sin incluir aún Pdval y Cval suman un total de 22.306 puntos de acopio y comercialización que permiten acercar la recepción de producción local y colocar las mercancías en lugares de difícil acceso (Mercal, 2012; INE, 2012; SAFONACC, 2012).

Nótese que la red Mercal, como la Pdval, copia el éxito de las pequeñas “bodegas” privadas [alimentaciones]: la estrategia en la práctica consiste en que hay cerca de 20 Mercales II y 20 Mercalitos, identificados en el gráfico con los colores verde y amarillo, por cada uno de los Supermercados o Megamercados de cada Estado a lo largo del territorio. La bodega sigue siendo, luego de Mercal, la modalidad de venta de alimentos más importante del país (BCV, 2007). Incluso grandes firmas privadas de alimentos como Empresas Polar, utilizan su enorme capacidad de distribución para penetrar mercados a través de las bodegas (Facchi, 2002).

Los Mercados tipo I y II, identificados en la leyenda del gráfico con los colores marrón y verde, y que fueron los primeros en fundarse, concentran clientes o usuarios a nivel de barrios y parroquias. Por ello éstos sirven de huella emblemática del territorio comunal, tal como los territorios que organizan los propios consejos comunales. Son generalmente este tipo de Mercados los que ostentan una relación con la comunidad a través de los comités de alimentación. Los mercalitos, en cambio, como las “bodegas”, suelen encontrarse cerca de la calle y otros emblemas de lo doméstico y, por tanto, del mundo femenino e infantil. Si bien la participación de las mujeres en las formas de poder popular residencial es muy marcada, el mercalito atrae una relación con la alimentación más privada, en el dominio casi exclusivo de lo femenino y lo doméstico. De hecho, los mercalitos no son siempre visibles a los visitantes extraños y siempre forman parte del paisaje de la casa que los acoge, de modo que comprar allí se convierte en el equivalente a comprar en la casa del vecino e, incluso, dentro de la casa del vecino.

A diferencia de los componentes productivos del SSSA que están teóricamente y en la práctica orientados hacia la recolonización simbólica del espacio (Nueva Geometría del Poder, la comuna, el territorio federal, el punto y círculo, etc), los componentes de comercialización no transforman radicalmente el espacio. Más bien se adaptan a ellos y les sirven de hito.

Es por esta razón que las grandes firmas de alimentación privadas vieron con buenos ojos la posibilidad de colocar sus productos en Mercal (Puente y López, 2008). A diferencia de la tendencia dominante

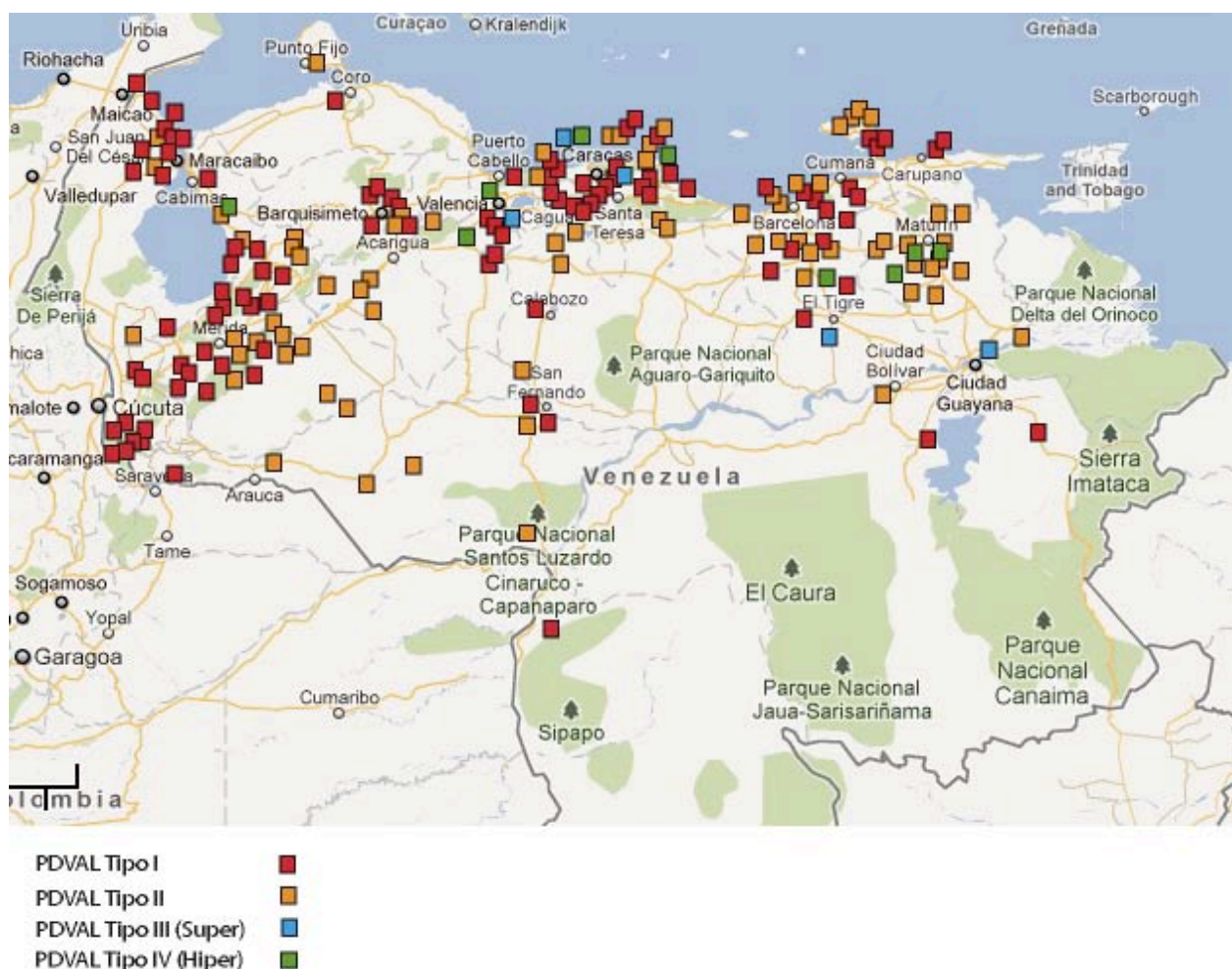
y global que ha sustituido al pequeño vendedor por grandes cadenas como supermarkets, malls o outlets, modalidades de tipo expansivas y recolonizadoras simbólicas del territorio, Mercal generó una relación con el consumidor geográficamente más cercana que también fue útil para la diversificación de las estrategias de mercadeo privadas.

Esta relación entre empresa privada y Mercal mermó cuando se extendió la regulación de precios y la polarización se intensificó en esta área, para permitir una mayor entrada de productos importados a partir de 4a ola de participación. Esto es observable en el decrecimiento de la oferta de productos del sector privado en los anaqueles, la cual, sin embargo, persistió en los Abastos Bicentenario desde el 2010.

Es fácilmente observable que la mayor parte de los Mercales, del tipo que sea, se encuentran cerca de sitios importantes de tránsito y transporte público, y, sobre todo, en vías céntricas de comunidades pobres. En otras palabras, la territorialización de los Mercales marca claramente que la política no está dirigida a las clases medias ni a sus comunidades, ni menos aún a las clases altas, aunque todas éstas también sean usuarias crecientes de la red (Minppal, 2011; Provea, 2011). En este sentido, la idea de cliente está claramente supeditada a la idea de suficiencia alimentaria y al ahorro del ingreso familiar en las clases pobres.

Para facilitar los problemas de acceso de la población de menores recursos y, al mismo tiempo, evitar los problemas internos de corrupción y contrabando de alimentos subsidiados al extranjero o hacia otras redes de comercialización interesadas en controlar la venta de productos escasos en los anaqueles, los 394 mercales móviles (que no son más que comandos que asocian a los centros de acopio, las Fuerzas Armadas y cierta institucionalidad) procuran cubrir transversalmente los territorios no alcanzados por los puntos de venta fijos. Desde el 2010, esto es, desde la 5a ola, se extrae de las observaciones que los mercales móviles y mercales a cielo abierto han aumentado su presencia como estrategias de consumo de la población.

Gráfico 52. Distribución de puntos de acopio y comercialización de Pdval sobre el territorio nacional. A partir de Pdval, 2012.



De manera similar a Mercal, Pdval se extiende sobre el territorio nacional repitiendo el patrón poblacional del país y multiplicándose en forma de Pdval tipo I y Pdvalitos (estos últimos no aparecen en la fuente), tal como se indica en el gráfico 52. Según declaración del propio presidente Chávez, para el 2010 esta red sumaba 2.257 puntos de venta, incluyendo a los Pdvalitos, vendiendo productos a “65% menos que el precio capitalista” (Chávez en Varela, 2010)

A diferencia de Mercal, Pdval fue fundado en el 2008 con el objetivo de vender a precios regulados y competir con el mercado tradicional. Por esta razón, en un principio la estrategia territorial no repitió el patrón de establecimientos por asentamientos pobres, sino que buscó

acercarse a centros de comercialización ya identificados por el mercado privado o en espacios con posibilidades de competencia. Quizás por la misma razón, en ese momento se establecieron menos Pdvalitos en el entorno doméstico de los barrios pobres. En la práctica, como los productos de Pdval sí terminaron siendo objeto de subsidio, los establecimientos fundados posteriormente al 2008 volvieron a dirigirse hacia los sectores pobres, complementando el *target* de Mercal; esta nueva etapa de Pdval coincide con su traspaso de PDVSA a la Vicepresidencia de la República y de ahí a su adscripción al Ministerio del Poder Popular de la Alimentación (PDVSA SA y sus filiales, 2008; Directivo PDVAL-COL, 2010).

Fundaproal (Mercal Protección), Mercal y Pdval han colocado juntas la mayor cantidad de alimentos del SSSA entre las poblaciones más pobres. De acuerdo al Minppal, en el 2010:

“...la Misión Alimentación ha distribuido un total de 9.458 toneladas de alimentos a nivel nacional: 4.295 t. de alimentos despachados a 13 centros penitenciarios en 10 estados del país, que beneficiaron en promedio a más de 12.000 reclusos; despacho de 3.131 t de alimentos a 425 Centros de Diagnóstico Integral (CDI) [Misión Barrio Adentro] distribuidos en 18 estados del país beneficiando en promedio a más de 16.700 personas; 179 t de alimentos a 12 hospitales en 7 estados del país beneficiando a 6.413 personas; así mismo, se beneficiaron más de 128.800 niños en edad escolar mediante el despacho de 1.821 t de alimentos a 301 escuelas pertenecientes al Programa de Alimentación Escolar (PAE), en 12 estados del país; y distribución de 423 t de alimentos en Anzoátegui, Carabobo, Distrito Capital, Guárico, Miranda, Táchira y Zulia, beneficiando a más de 40.000 personas del programa Cocinas Comunitarias que coordina el Instituto Nacional de Nutrición (INN)” (Minppal, 2011).

El gráfico 53 muestra como se benefició a casi la mitad de la fuerza de trabajo en el país y como este beneficio fue dirigido muy fundamentalmente a las clases más bajas. En este caso, el INE no entiende *beneficiario* al consumidor de alimentos sino al cliente de la red.

Gráfico 53. Beneficiarios de Pdval y Mercal por año y estrato social, 2008-2010. Provea, 2011 a partir del INE y el Ministerio del poder popular para la Alimentación, 2011.

Cuadro N° 8 Beneficiarios de las misiones alimentarias			
Beneficiario	2008	2009	2010
Mercal C.A.	11.895.824	10.769.298	10.176.919
Pdval	1.099.920	1.012.753	810.638
Total	12.995.744	11.782.051	10.987.557

Fuente: MINAL. Memoria y Cuenta 2010. Pág. 19.

Cuadro N° 9 Hogares que compran al menos un producto en la Red Mercal				
Estrato Social	Año 2009		Año 2010	
	N°	%	N°	%
Estrato I, II y III	854.528	12,66	927.880	13,34
Estrato IV	2.103.372	31,15	2.186.654	31,43
Estrato V	702.545	10,41	676.836	9,73

Fuente: INE.

La empresa privada reconoció la importancia de estos componentes del SSSA en el consumo de las clases bajas desde el 2005 al 2008 como un factor a favor de la misma (Puente y López, 2008) y, para el 2011, como un factor en contra. En este respecto el presidente de la Cámara Venezolana de Alimentos declaró:

“Los programas sociales alimentarios no deben estar dirigidos a 60% de la población, porque es sólo 18% el que está realmente en situación crítica (...) al depurar este segmento se impulsará la recuperación de la inversión y de la producción nacional de alimentos” (Provea 2011: 62).

La diferencia entre los dos períodos está estrechamente ligada a que estos componentes mantienen los productos alimenticios básicos fuera del alcance de la inflación. Por cuanto la inflación de estos años se expresa entre un 20 y un 30% anual, el impacto de los subsidios en Mercal y Pdval para el 2011 hace imposible a la empresa privada competir aunque, al mismo tiempo, mitiga el efecto de la inflación en las clases más bajas.

En relación a la estrategia territorial de la dimensión comercializadora del SSSA, ésta ha sido explicada junto a las descripciones de la cobertura.

A esta estrategia territorial habría que sumar la incorporación en el 2010 de 39 sucursales de la red Abastos Bicentenario, adquiridas de la empresa CADA y Éxito, propiedad de la firma franco-colombiana Cativen SA. Estas sucursales se encuentran en zonas de mayor ingreso que Mercal y Pdval, muestran una mejor relación de mercadeo con las clases medias, ofrecen mayor variedad de la producción privada nacional y no hay reportes de que vendan productos a precios subsidiados. La red Bicentenario compite con los supermercados privados en los centros urbanos más importantes del país (Red de Abastos Bicentenario, 2012).

En relación a los alimentos dispensados directamente a poblaciones que expresaron niveles calóricos deficitarios, la cobertura del SSSA debe trasladarse a las Casas de Alimentación o Cocinas Comunales.

El número de las Casas de Alimentación no es de dominio público ni sus ubicaciones, pero según el primer director de Mercal fueron 4 mil casas en el 2005 y cerca de 6000 en el 2010 por todo el territorio. Están distribuidas tanto en grandes ciudades como en sectores rurales.

Tal red cubre el 66% de la protección calórica de las personas atendidas (Rodríguez, 2010). La red se traduce en una estructura llamada S.U.C.R.E. (Sistema Unificado de Casas y Refugios para la gestión alimentaria) que desde el 2004 pertenece a los programas Mercal Protección y Mercal Máxima Protección del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación (Fundaproal, 2012). En el 2004, del millón de personas atendidas por Mercal, 400.000 estaban bajo los dos programas de Mercal Protección (Rodríguez, 2010).

Sus actividades, más que el número de establecimientos, han seguido en crecimiento desde entonces. Para el 2007 su presidenta declaró estar atendiendo directamente a 1.200.000 personas (Fundaproal, 2012), lo que corresponde a un 4,41% de la población nacional del 2011. Si se cruza esta cifra con el 7.5 % de pobreza extrema que declara el INE para el 2007 (INE, 2012), y si se parte de los datos publicados en febrero del 2012 sobre población total del censo del 2011 en 27.150.095 personas, es posible inferir que las Casas de la Alimentación atendieron a 2.036.257 personas, esto es, el 59% de la población nacional en pobreza extrema.

En relación a la estrategia territorial productiva se hará un aparte en la próxima sección, por cuanto se requiere poner en contexto las recomendaciones de la FAO para estos temas.

7.1.4. Manejo del territorio productivo

La FAO ha destacado en sus *líneas maestras* la importancia de la participación de la sociedad civil en las políticas públicas para el logro de desarrollo territorial dirigido a la seguridad alimentaria.

Los argumentos que sostienen la importancia de la participación pueden resumirse en cuatro: a) La participación imprime de tal modo dinamismo en las políticas públicas que hacen trascender los objetivos y las metas de los proyectos financiados por el Estado o por otro tipo de organismos. b) La participación produce ahorro al financiamiento pues, con la capacitación adecuada, se puede sustituir el traslado de profesionales y materiales, tanto en temas de infraestructura, organización como incluso seguridad. c) La participación adecúa los mercados a redes de solidaridad que, a fin de cuentas, son los que dan forma social a las políticas. d) La inclusión del conocimiento nativo (no solo del entorno ecológico, sino también de las prioridades culturales y materiales de las comunidades) garantiza la sustentabilidad de políticas que, de otro modo, fracasarían fácilmente, como lo habría demostrado la experiencia (FAO, 1992:15-17).

La FAO reconoce que la implementación “vertical” de políticas tiene más posibilidades de fallar que la “horizontal”, pero ello supondría una importante reforma de los proyectos de transformación territorial: ¿hasta que punto y de qué modo se debe esperar la participación?

Schejtman, desde la oficina de la FAO para América Latina, propone que la clave es el “encadenamiento de mercados”. Según el autor, en grandes rasgos, un territorio tiene mejores posibilidades de potenciarse si

a) no se aleja totalmente de los centros urbanos y más bien se nutre de ellos, de sus migraciones y de sus riquezas, y

b) si el territorio accede a mayores y mejores “cadenas de mercados”, esto es, si la producción agrícola se ve fortalecida con la presencia de mercados de seguros, de dinero, de servicios de telecomunicación, culturales, científicos, etc. Para Schejtman el emprendimiento agrícola exitoso no es el tradicional campesino o el familiar, sino aquel que está

preparado para inducir cambios en un mundo en movimiento. El sector agrícola es, por naturaleza, un sector que genera poco valor agregado a las economías nacionales en su conjunto, por lo que se requiere un desplazamiento de sus recursos hacia formas más variables y eficientes de mercados secundarios, y a la capacidad de objetivar el uso de la tierra y los recursos naturales con el fin de innovar nuevos valores al propio mercado primario (Schejtman, 1999; Berdegué y Schejtman, 2008).

Por su parte, la estrategia territorial del SSSA ha experimentado fundamentalmente con tres vías: el Núcleo de Desarrollo, el “punto y círculo” y la Nueva Geometría del Poder.

El primero es un producto de la 3a. ola de participación, cuando las misiones evidenciaron que era posible trasladar la estrategia asistencialista a la organización social. Por ello el núcleo de desarrollo pasó de su etapa endogenista (NUDE) a la etapa socialista (NUDES) como parte de una estrategia general de transformar la sociedad en su conjunto por la vía del desarrollo endogenista y soberanista.

El Núcleo de Desarrollo surge de la perspectiva que ofrece el Estado en la escala de necesidades estratégicas nacionales, lo cual hace posible pensar en aprovechar el éxito de una EPS para la generación de cadenas de participación política y económica en su entorno territorial. Para tal objetivo, y, a diferencia de la propuesta Schejtman, la iniciativa debe surgir del Estado en conjunto con la EPS y ser implementada por la vía de la convocatoria política.

De esa manera, las EPS contribuirían con el desarrollo de redes políticas de solidaridad y de desarrollo económico, tanto en su comunidad local como en la nacional. Este esfuerzo debería sustituir el mercado como centro de las relaciones territoriales por el ser humano como objetivo. Para ello es necesario una perspectiva...

“...que permita abrir nuevas líneas de acción, un Desarrollo a Escala Humana. Tal desarrollo se concentra y sustenta en la satisfacción de las necesidades humanas fundamentales, en la generación de niveles crecientes de autodependencia y en la articulación orgánica de los seres humanos con la naturaleza y la tecnología, de los procesos globales con los comportamientos locales, de lo personal con lo social, de la planificación con la autonomía y de la sociedad civil con el Estado (...) Lograr la transformación de la persona-objeto en persona-sujeto del desarrollo es, entre otras cosas, un

problema de escala; porque no hay protagonismo posible en sistemas gigantísticos organizados jerárquicamente desde arriba hacia abajo...” (Max Neef en El Troudi y Monedero, 2006:126-127).

La estrategia “punto y círculo” es similar. Fue originalmente propuesta por el presidente Chávez en TV como una estrategia electoral ante los comicios del 2006. Entonces se hablaba de la creación de “patrullas electorales” surgidas del seno de la sociedad civil (no de los partidos políticos) que convocasen y vigilasen el proceso electoral así como la afinación del aparato de las misiones para aumentar la capacidad de convocatoria. Dado que las patrullas se convirtieron en la fuerza motora más importante de esa victoria electoral, la idea se trasladó al aparato productivo. El “punto y círculo” es también un producto de la 3a ola de participación.

La idea es sencilla. Las formas del poder popular deben tomar un mapa, marcar un punto donde se encuentran y trazar alrededor de él un círculo. Para ello es necesario dialogar, reconocer e interpretar necesidades, demandas, problemas con el fin de incidir política y económicamente en el entorno. Las estrategias deben ser acordes a los instrumentos de participación emanados por la revolución pero deben ser aplicadas experimental y participadamente con el resto de las comunidades. La prevalencia de la organización popular en ese punto les obligaría a convertirse en líderes y coordinadores responsables de su área.

En último lugar la Nueva Geometría del Poder (NGP) como se explicó en capítulos anteriores, es también una idea similar pero correspondería a un nivel superior de la organización de la sociedad civil junto al Estado. Es un producto de la 4a ola de participación.

A diferencia de las anteriores, la NGP articularía de manera más horizontal las formas del poder popular. No se trata de una forma que incide en un territorio inalcanzado por el Estado o la revolución, sino de formas de poder popular que se estructuran entre sí y que generarían poder político territorial, tal cual lo hacían los municipios o las parroquias. Para acceder a este nivel, los consejos comunales deben comunicarse con otros consejos y constituirse juntos como comunas, políticas y/o productivas. Las comunas entre sí crearían la NGP sobre territorios cuyos límites y naturaleza deben ser redefinidos por ellas mismas.

En la práctica, la NGP no ha funcionado con todas sus capacidades a pesar de que se la siguió impulsando luego de la derrota del referendun a la reforma constitucional que la incluía en el 2007. Sin embargo, la idea de comuna, entendida como la aglutinación territorial de formas de poder popular fue ordenada mediante una ley orgánica en el 2010 y se creó un ministerio para tal fin, el Ministerio del poder popular para las Comunas (Asamblea Nacional, 2010 a).

También en la práctica, las tres estrategias territoriales no son reconocibles de manera taxativa ni aisladamente, por lo que no pueden ser objeto de análisis en lo específico. Por cuanto ya se explicó que las estrategias son similares, que los procesos de participación son experimentalistas, situacionales, la participación de los sujetos es simultánea en varias formas del poder popular y que suelen carecer de transversalidad horizontal entre ellos, las tres estrategias se encuentran implementadas de manera heterogénea y no son distinguibles como tales ni institucionalmente ni en sus resultados ni en sus tácticas. Es preferible, e incluso deseable, que se perciban como una práctica común inspirada por ideas similares de desarrollo y territorio.

En las observaciones estas estrategias territoriales fueron visibles en todas las olas de participación (esto es, también son anteriores a la formulación hecha por el propio presidente Chávez) y en los casos de La Casa del Pueblo, La Central Azucarera Venezuela, la EPS Rafael Urdaneta, Diana C.A., las cooperativas agrícolas de Sabana de Parra, la Unidad de Producción Socialista Pedro Camejo y Mercal Producción.

En todos estos casos las formas productivas del SSSA no solo colaboraron con su entorno u otras formas del Poder Popular, sino que se estructuraron firmemente con su territorio a través de proyectos conjuntos de desarrollo tanto en lo social como lo económico.

Solo por mencionar algunos ejemplos, la Central Azucarera Venezuela re-editó su relación de liderazgo con las zonas campesinas del entorno y la vida cotidiana de El Batey y Caja Seca a través de políticas sociales y económicas agendadas por la propia sociedad civil. La EPS Rafael Urdaneta fue tributaria de los consejos comunales rurales del entorno y le sirvió de centro estratégico y de financiamiento para proyectos conjuntos al Sur de la Cañada de Urdaneta. Diana CA aglutinó consejos comunales, financió parcialmente proyectos y mantuvo un relativamente importante liderazgo mediático en el sector de la Zona Industrial de Valencia y comunidades cercanas. Las cooperativas de Sabana de Parra se articularon con Agropatria y las comunidades del

entorno para la ejecución de proyectos conjuntos de desarrollo. La UPS Pedro Camejo reunió en su seno cooperativas y consejos rurales que planificaron y ejecutaron de la mano con el Estado proyectos conjuntos y con el objetivo de convertirse en una comuna agrícola. Mercal Producción consolidó espacios productivos junto a los campesinos que son vecinos de las tierras confiscadas, generando proyectos articulados con las demás unidades productivas del entorno.

En términos de la efectividad de la política territorial productiva del SSSA, es posible decir que se definieron estrategias, que éstas se implementaron dentro de la naturaleza de la participación social bolivariana, y que se lograron efectos palpables en la transformación del entorno social-territorial y en la generación consecuente de mayores instrumentos para el desarrollo y para combatir la pobreza.

En conclusión, la cobertura comercializadora del SSSA es mucho más importante que la productiva, lo cual se debe fundamentalmente al peso de las importaciones en el sistema. Si bien esto afecta negativamente al sub-objetivo “autonomía” de la seguridad alimentaria, no es posible decir que afecta a los sub-objetivos fundamentales de suficiencia como “disponibilidad” y “acceso”. Por el contrario, las cifras indicadas aquí mostrarían que la cobertura de la comercialización coloca los productos al alcance de sectores importantes de la población y sobre todo, de sectores de menores recursos.

Ello tampoco implica que la dimensión productiva no ha sido atendida. Es posible hablar de un aumento de las superficies cultivadas y de aumentos irregulares en la producción de alimentos en casi todos los rubros más importantes de la dieta venezolana, en contraposición a los resultados antes del bolivarianismo. Sin embargo, estos éxitos están muy lejos de remontar las necesidades de la demanda, la demografía, la superación de la elevada dependencia de las inyecciones del Estado o la generación de divisas. Se requieren reformas importantes en los niveles de las políticas públicas concretas de alimentación y en lo macroeconómico para redirigir todos estos objetivos.

En relación a los objetivos de las políticas territoriales de desarrollo, se crearon dispositivos para incluir el territorio físico y social como parte de la idea de desarrollo y la lucha contra la pobreza, los cuales fueron accionados por la sociedad civil participando junto al Estado. Los componentes fundamentales del Poder Popular en el SSSA se activaron por la vía de la participación y este esfuerzo en su conjunto sirvió de base para el diseño e implementación de las políticas de desarrollo

territorial relacionadas con la producción. Para ello se privilegió la convocatoria política sobre las motivaciones propias a la dinámica del mercado.

A continuación se evaluará el impacto del SSSA en la nutrición y en el contexto de la superación de la pobreza.

7.2. Evolución y análisis de los indicadores nutricionales y de pobreza.

Los indicadores que se analizan en este sub-capítulo corresponden a aquellos que el PNUD y el MANUD, en consenso y coordinación con el Ministerio del Poder Popular para la Planificación y el Desarrollo, establecieron como referencia para alcanzar los Objetivos del Milenio relacionados con seguridad alimentaria entre 1990 y el 2015. En base a este consenso se creó un “Marco de Asistencia” que sirvió para el financiamiento de los programas sociales.

El consenso alimentario para el caso venezolano consistió en:

- “1. Disminuir a la mitad, entre el año 1990 y 2015, la proporción de personas en Pobreza Extrema cuyo ingreso sea menor de un dólar (US\$) por día.
2. Disminuir a la mitad el número de personas que padecen hambre”.

Lo cual se ponderará mediante:

“% Población con < US \$ 1 diario. % Personas pobres por debajo de línea de pobreza nacional. Prevalencia de bajo peso en menores de 5 años. % Población por debajo mínimo de consumo energía en la dieta” (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y Ministerio del Poder Popular para la Planificación y el Desarrollo, 2008).

Adicionalmente, esta tesis asume que las evaluaciones sobre hambre y pobreza deben contextualizarse en las posibilidades del SSSA en generar riquezas dentro del mercado y en impulsarse desde la participación social. Así las evaluaciones de pobreza que sirvan para

indicar los alcances económicos y políticos del SSSA permitirán visibilizar una evolución más integral de las políticas públicas en su conjunto.

Por ello, de manera preliminar y con el fin de dar continuidad a los resultados arrojados sobre los componentes productivos del SSSA en el capítulo 7.1. se comenzará esta evaluación con las cifras ofrecidas por el mismo VII Censo Agrícola en relación a los niveles de pobreza de los productores agrícolas, medidos por necesidades básicas insatisfechas. La pobreza de los productores permitirá reconocer la eficiencia del componente productivo del Sistema Alimentario venezolano, incluyendo el SSSA, en este aspecto.

Según ese censo para el 2008 Venezuela presentó 81.064 productores pobres, 93.913 personas en pobreza extrema y 79.478 productores no pobres. En otras palabras, el microcosmos productivo agrícola ha sido profundamente desigual y expuso niveles de pobreza impensables en el resto del subsistema: del 100% de los productores, esto es, unas 254.455 personas, el 68,7% es pobre y dentro de este porcentaje un 36,9% vive en extrema pobreza (Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, 2012).

Esta situación indica que los problemas del escenario productivo agrícola trascienden la lógica simple de las inversiones públicas o privadas como medio de recuperación del agro. En otras palabras, la importante financiación bancaria, las expropiaciones, confiscaciones y otras formas de recuperación de tierras o de empresas agrícolas, la evidencia en las observaciones de los problemas de retorno crediticio, las inyecciones en forma de compras del Estado, la inversión en infraestructura agrícola, entre muchas otras formas de recuperar la potencialidad productiva del campo, indican un esfuerzo de inversión sostenido desde, al menos el 2002 hasta el 2008, que no resulta en el mejoramiento definitivo de las condiciones sociales del eslabón base del sistema alimentario. Se trata de un fenómeno perceptible también antes del bolivarianismo, tal como se indicó en capítulos anteriores.

Sin embargo, estas evidencias no se repiten en otras partes de la cadena, incluyendo el consumidor.

En líneas generales, como se indicará a continuación, la pobreza en Venezuela se ha reducido, se ha incrementado la nutrición, ha

descendido la desnutrición según los parámetros convencionales y han mejorado las condiciones de acceso a los alimentos.

Según el INE, el INN y el Sistema de Indicadores Sociales Venezolanos (SISVAN-SISOV) el déficit nutricional (medida antropométrica expresada en la relación peso/edad/sexo) y la prevalencia de la desnutrición (índice calculado en base a la disponibilidad energética, las kilocalorías mínimas y el coeficiente de variación) han descendido notablemente desde el comienzo del SSSA.

El gráfico 54 muestra que desde el año 1990 empeoramiento del déficit nutricional es persistente, correspondiendo a los años de la *Concertación*. Desde 1994 hasta 1998, años correspondientes a la *Convergencia* y la segunda etapa de las políticas neoliberales y a pesar de la creación de Proal, el déficit vuelve a crecer hasta 1998.

En 1999, primer año del bolivarianismo y año en que se impulsan las primeras políticas del SSSA como el Plan Bolívar 2000, se detiene el aumento del déficit. Los años siguientes hasta el 2003 constituyen la 1a ola de participación la cual, como se había descrito, depende mucho de la agenda de la oposición y no de las capacidades propias del gobierno. Esta ola sin embargo también se expresa en la aparición de una agenda civil aislada del apoyo estatal por parte de los sectores de pocos recursos, inspirada en las convocatorias del presidente. Son asociables entonces estas primeras formas de organización auto-agendadas, junto al Plan Bolívar 2000 y otros programas menores, a la contención del déficit nutricional.

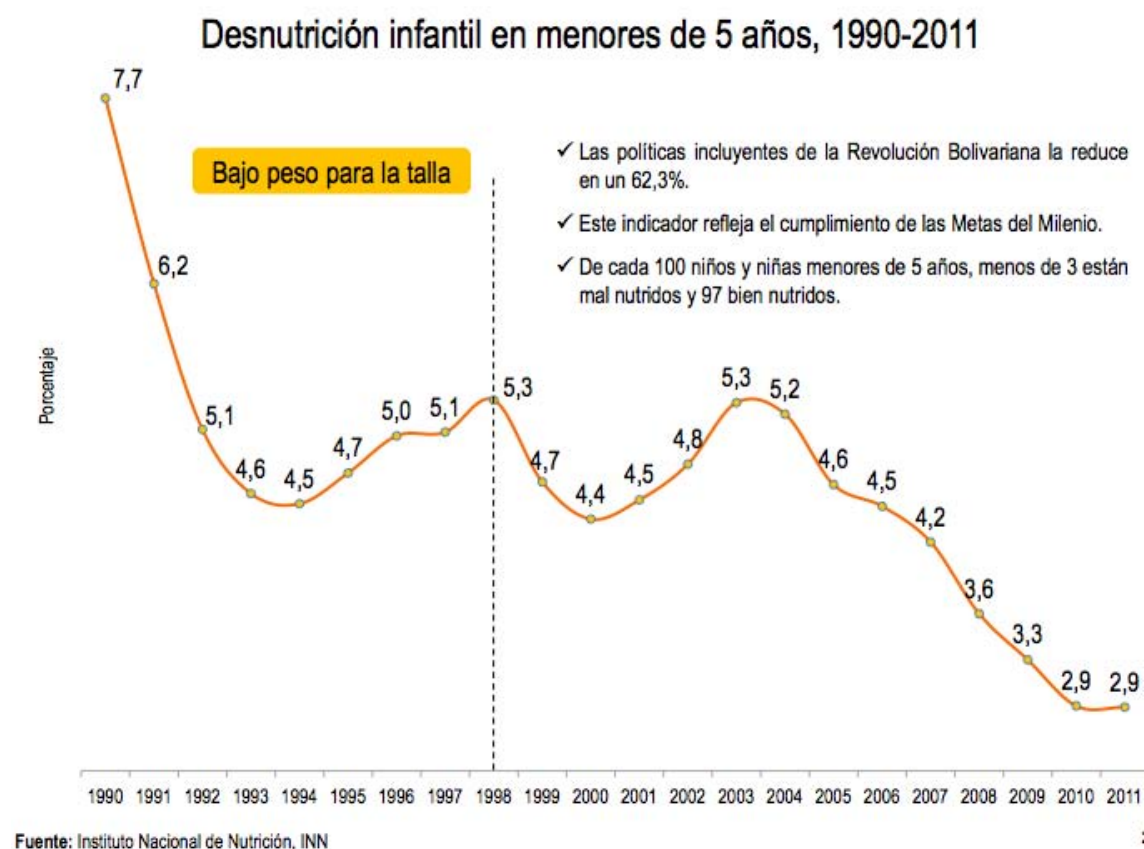
Del 2002 al 2003, hacia los años del golpe de Estado, la mesa de negociación y diálogo y, finalmente, el paro petrolero-alimentario, el déficit volvió a aumentar. Esto es asociable con el hecho de que el Estado aun no tenía control efectivo de sus políticas y con que entre los objetivos del paro estuvieron, precisamente, generar inseguridad alimentaria y derrumbar las exportaciones petroleras para presionar la salida del gobierno antes de las elecciones .

Una vez el Estado recuperó el control de las instituciones fundamentales y ganó márgenes de legitimidad, se inició la 2a ola de participación, se creó Mercal y se implementaron otras políticas del SSSA, lo cual se expresó con una caída persistente del déficit hasta el año 2010, en la 5a ola de participación.

Tal como se aprecia del gráfico, la caída del déficit nutricional es mayor que el 50%, por lo que puede decirse que, de mantenerse este nivel

para el 2015, se trataría de un sub-Objetivo del Milenio alcanzado, según el parámetro de la FAO y las Naciones Unidas.

Gráfico 54. Déficit nutricional global en menores de 5 años. 1990-2011. INE, 2012 c.



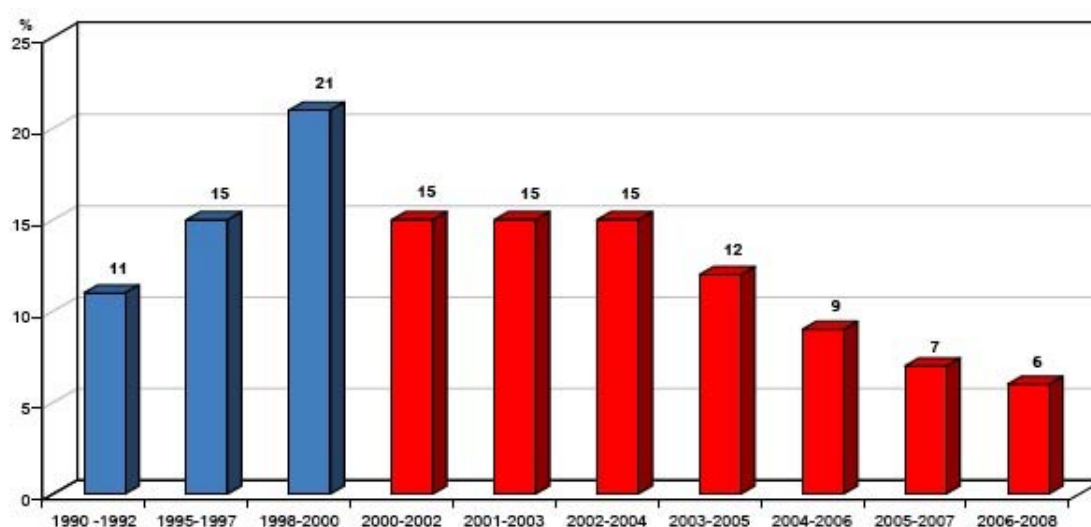
La misma periodización de los hechos puede observarse en el gráfico 55, correspondiente al Índice de Prevalencia de la Subnutrición.

Durante parte de la *Concertación* y durante la *Convergencia*, la aplicación de las medidas neoliberales (esto es, sumado al pago de la deuda, el desplome de los acuerdos de la OPEP y la incapacidad del aparato productivo nacional en reaccionar a la Agenda Venezuela) coadyuvaron a un aumento precipitado del Índice de Prevalencia de la

Sub-nutrición, el cual no pudo ser contenido por las políticas sociales compensatorias ni por el hecho de que la agricultura aun no había entrado en el juego más directo de las nuevas orientaciones económicas. El aumento de la inflación y la liberación de las importaciones ahogó al aparato productivo nacional generando consecuencias negativas en el poder adquisitivo de los estratos con menos ingresos. De 1990 al año 2000 este índice prácticamente se duplicó.

Del 2000 al 2004 se recuperó levemente la nutrición revelando el efecto de las nuevas políticas en la alimentación. Pero, tal como sucedió con el déficit nutricional, esta recuperación se estancó por efectos de la inoperatividad de la agenda del Estado, el conflicto político y finalmente el Paro petrolero-alimentario.

***Gráfico 55. Índice de prevalencia de la sub-nutrición. 1990-2008.
República Bolivariana de Venezuela, 2010.***



Fuente: Instituto Nacional de Nutrición, INN

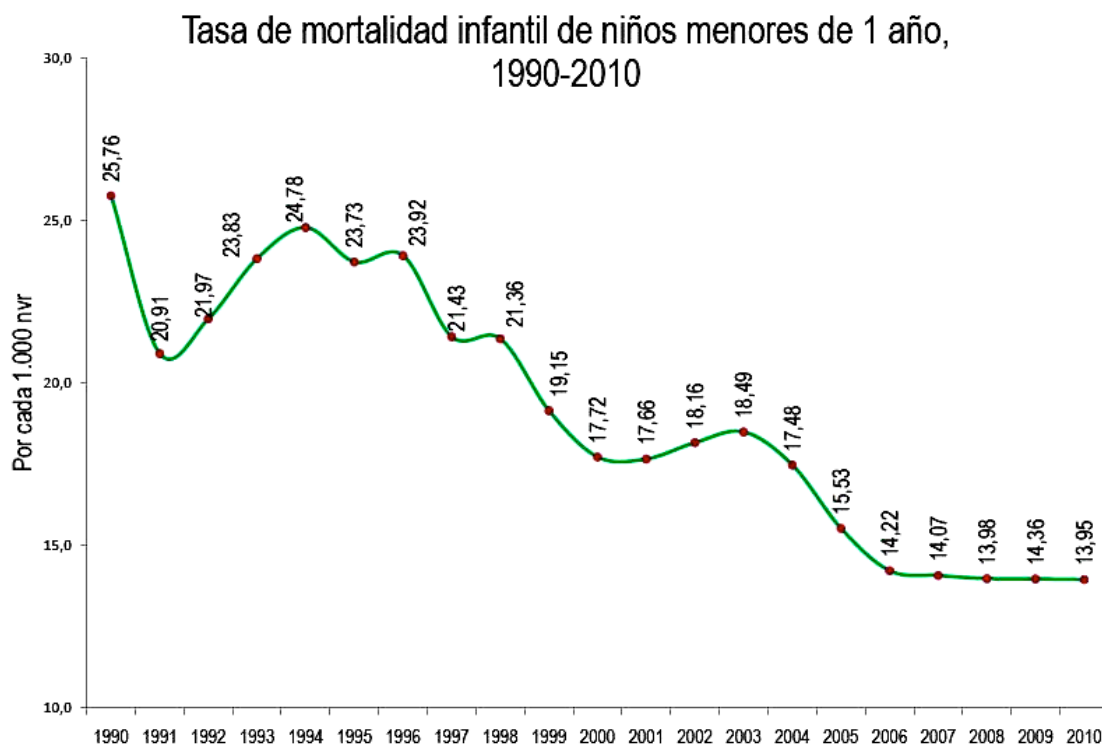
Posteriormente, con el comienzo de la 2a ola de participación social y el reimpulso del SSSA en Marzo del 2003 el índice desciende un 60% hasta el 2008 en la 4a ola de participación. De continuarse esta tendencia hacia el 2015 se habrá mostrado también en esta medida una disminución mayor al 50%, cumpliendo así los Objetivos del Milenio. Visto solamente desde 1998 hasta 2008, esto es, desde el principio del bolivarianismo hasta la 4a ola de participación, se trata de una evolución positiva de esta medida en un 78%.

Es importante hacer notar que las dos medidas de desnutrición son muy diferentes. La evolución del pliegue cutáneo, la estatura y el peso no tiene porqué coincidir con la evolución del consumo mínimo calórico y la disponibilidad de energías. Solo coinciden cuando lo que se analiza es la consecuencia de un aumento del consumo efectivo de nutrientes, sin otras consideraciones en la malnutrición o en la biología genética. Pero, además no solo coinciden sino que se comportan similarmente en la curva histórica.

Por ello es posible afirmar que las condiciones nutricionales de la población venezolana han mejorado y que tal mejoría corresponde al SSSA así como a la participación social que ayudó a hacerlo efectivo. Dado que se trata de períodos mayores a una década, no solo generan una tendencia positiva hacia el futuro sino que puede hablarse también del sub-objetivo “estabilidad” de la seguridad alimentaria.

La tasa de mortalidad infantil, en el gráfico 56, asocia los aspectos nutricionales con la pobreza y algunos efectos en la morbilidad asociada a la calidad de vida. Esta tasa repite el mismo comportamiento de los indicadores nutricionales, confirmando el efecto del SSSA en sus resultados.

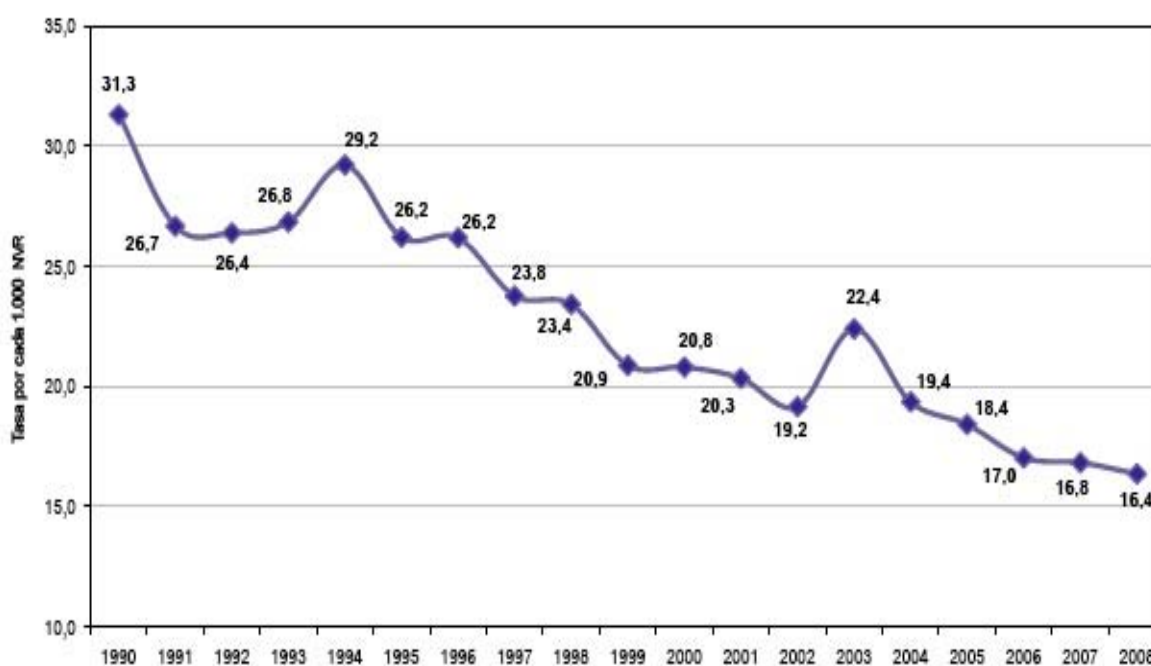
Gráfico 56. Tasa de Mortalidad Infantil para niños menores de 1 año. 1990-2010. INE, 2012 c.



Aún más, cuando la misma tasa diferencia a la población menor de 5 y 1 año lo que intenta es mostrar una mortalidad más expuesta a factores exógenos vinculables a la pobreza en los niños menores de 5 años. En este caso se asocia el indicador con entorno tóxico, insalubridad, problemas de inocuidad en los alimentos, déficits en las atención sanitaria, insuficiencia alimentaria provocada por la pobreza económica, etc. El gráfico 57 muestra la mortalidad infantil de niños menores de 5 años.

Este gráfico es particularmente elocuente en describir el efecto del paro petrolero-alimentario como variable exógena vinculada a necesidades básicas insatisfechas. Dado que las cifras del 2002 y del 2004 son muy similares, se desprende que el paro habría dado muerte a cerca de 3,2 niños por cada mil niños nacidos vivos registrados. Dado también que el censo más reciente fue solo dos años antes en el 2001 (INE, 2001) y que arrojó una población infantil menor de 5 años de 2.883.535 personas, es posible inferir que el Paro petrolero-alimentario fue la causa directa o indirecta de la muerte de 9.227 niños.

Gráfico 57. Tasa de Mortalidad Infantil de niños menores de 5 años. 1990-2010. Republica Bolivariana de Venezuela, 2010.



Fuente: Ministerio del Poder Popular para la Salud.

Es importante hacer notar que las mediciones de nutrición no tienen todas la misma suerte en la región de América Latina y el Caribe:

“...en su informe Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en América Latina y el Caribe, correspondiente a 2010, la FAO reconoce que esta región del mundo es la única que no ha logrado reducir la desnutrición en forma global, manteniéndose el número de personas subnutridas en torno a los 53 millones en toda la región. Las razones que encuentra la FAO son: la crisis económica que ha afectado a la economía mundial, el alza en los precios de los alimentos y las deficiencias propias de los gobiernos locales para hacer frente a esta situación” (Provea, 2011: 51).

Visto de ese modo y partiendo de la hipótesis de que los demás países vecinos también hayan crecido económicamente desde el 2003, cosa que fue cierta, y que las condiciones de la naturaleza no afectaron la autosuficiencia, solo quedarían dos factores que explicarían el éxito de Venezuela en relación a sus vecinos: los precios internacionales de los alimentos impulsados por la especulación para-financiera sobre todo en el año 2009 y las políticas de Estado.

Pero al observar esta información en términos más concretos, comparando algunos datos del sistema estadístico de la FAO, se detecta que la evolución por países similares a Venezuela (economías desiguales, grandes o medianas, mineras y de gran población) es similar y en muchos casos, mejor al desempeño nutricional de Venezuela.

Mientras entre 1990 y 1992 Venezuela tenía un Índice de Prevalencia de Sub-nutrición de un 10%, Brasil tenía un 11%, Colombia un 15%, Perú un 27%, Bolivia un 29%, Chile un 7% y Ecuador, también un país petrolero, un 23%. Todos esos países crecieron en su PIB durante los 8 años siguientes.

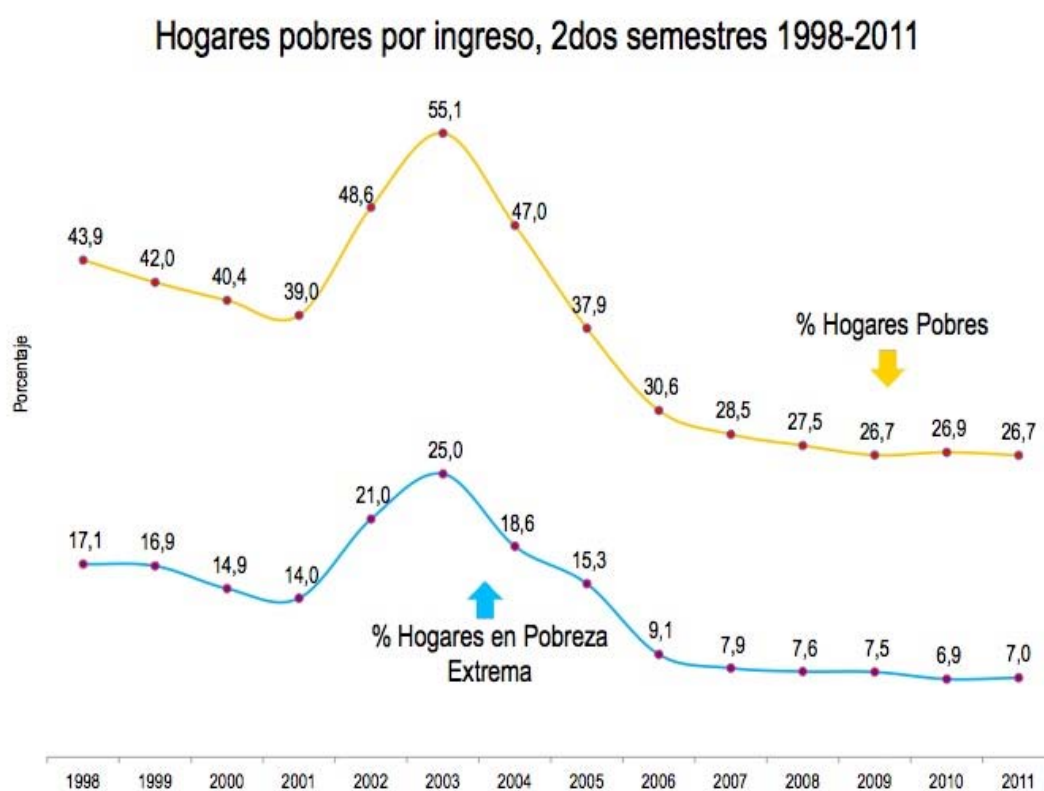
Luego, entre en 2006 y el 2008, cuando Venezuela obtuvo un 7% de su Índice de Prevalencia de la Sub-nutrición, Brasil tuvo un 6%, Colombia un 9%, Perú un 16%, Bolivia un 27%, Chile menos de un 5% y Ecuador un 9%. De todos estos países se destacan los éxitos de Brasil y sobre todo, Ecuador. Venezuela se encontraría en los éxitos medios junto a Colombia, Perú y Chile, aunque su prevalencia sea mucho menor que las de los dos primeros en términos absolutos. Muy por debajo quedarían Bolivia y otros países como República Dominicana,

Paraguay o Panamá. De tal modo que lo resulta significativo de la política nutricional venezolana es que, además de mejorar ostensiblemente sus indicadores durante el bolivarianismo, revirtió la pronunciada tendencia negativa durante el neoliberalismo, tal como se expresó en el gráfico 7 de esta tesis.

En relación a la pobreza y la pobreza extrema, el gráfico 58 muestra el retroceso de esta variable por la vía de la línea de ingreso. También allí se evidencia el impacto diferencial del Paro petrolero-alimentario, del SSSA y de las olas de participación.

La línea de ingreso mide la relación entre la canasta básica normativa y el ingreso familiar. Visto desde la fuente del INE la caída de la pobreza desde 1998 hasta el 2011 es de un 45% y la de la pobreza extrema es de un 66%. Dado que el compromiso ante el PNUD firmado por el gobierno en relación a los Objetivos del Milenio es la reducción en un 50% de la pobreza extrema, este objetivo ya luce haber sido logrado según estos datos.

Gráfico 58. Pobreza y pobreza extrema por línea de ingreso, 1998-2011. INE, 2012 c.



Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE

El descenso de la pobreza extrema desde el 2003 es muy pronunciado lo que permite resaltar el papel de componentes específicos dentro del SSSA como la inversión/gasto rural, las Casas de la Alimentación, el propio Mercal (basado en estrategias territoriales de comercialización cerca de las zonas pobladas más deprimidas), los Bancos comunales relacionados a sus Consejos Comunales y otros beneficios relacionados con misiones de corte asistencialista fuera del SSSA, como la Misión José Gregorio Hernández y la Misión Guaicaipuro.

La relación entre ambas curvas permiten suponer que responden al efecto de un conjunto de políticas articuladas entre sí.

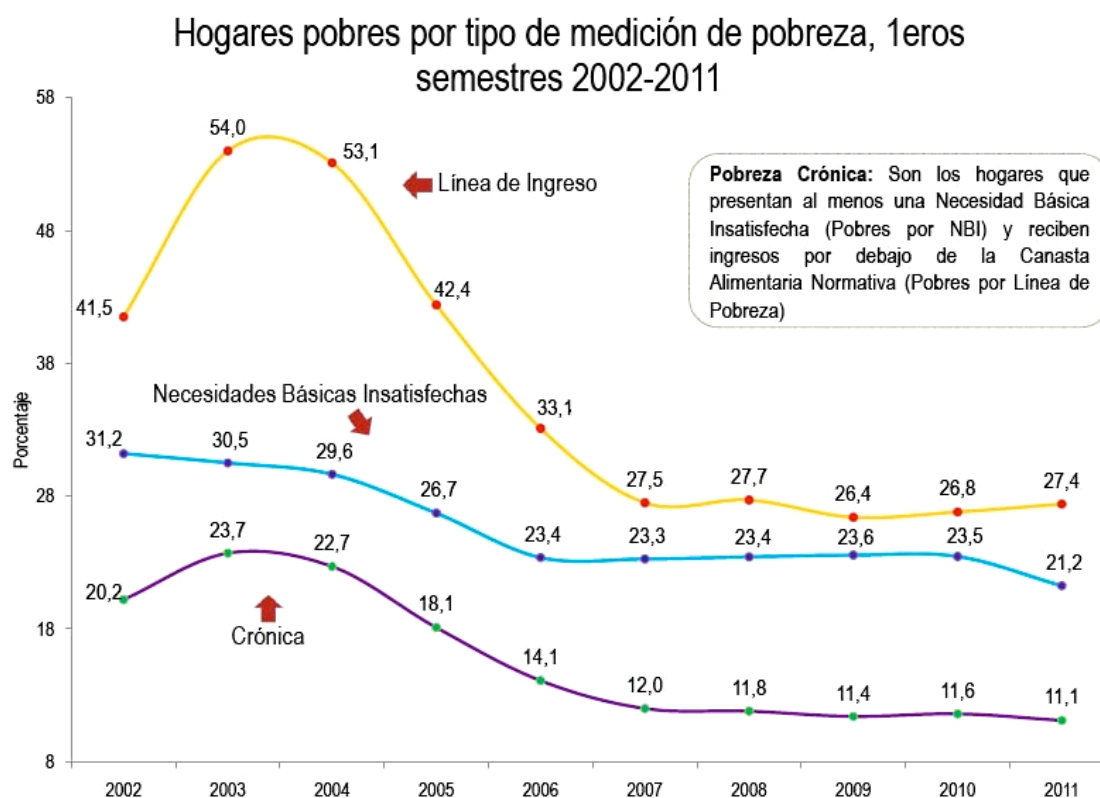
La caída post-paro indica no solamente un aceleramiento positivo de las condiciones socio-económicas de la población sino un reimpulso productivo y socio-político asociable con el auge de los emprendimientos económicos y sociales en esa época, tal como se describió en el capítulo 6.5.2. De tal modo que del 2003 al 2007 la caída de ambas pobreza no puede interpretarse solamente como el efecto del gasto, sino de la articulación de éste con políticas estructuradas de Estado y con el carácter fuertemente participativo de los emprendimientos en la 2a y 3a ola de participación, en comparación a las olas 4a y 5a, más verticales y resintiendo los problemas de exceso de gasto, o en comparación a la 1a ola, aun desarticulada de las políticas de Estado.

Con el objetivo de observar la pobreza no solo como un resultado del acceso al mercado sino como el resultado de haber accedido satisfactoriamente a bienes y servicios de consumo básico, el INE publica el indicador pobreza crónica, que es el resultado de la relación entre la línea de ingreso y la pobreza entendida como Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI).

La pobreza crónica, por su naturaleza, refleja mejor el contexto en que se produce la pobreza. Esto es importante para los objetivos de seguridad alimentaria, puesto que la FAO recomienda tratar de resolver los problemas de suficiencia alimentaria entendidos como un conjunto de factores tales como territorio, producción, participación, salud, educación, mercado, aprovechamiento de los recursos e incluso institucionalidad. Superar los problemas de pobreza crónica supone afectar positivamente el contexto en el que se desenvuelven los sujetos y por tanto mejora las condiciones de la seguridad alimentaria en el tiempo. Por ello, un contexto adverso a la generación de pobreza es asociable a favor del sub-objetivo “estabilidad” de la seguridad alimentaria

La pobreza crónica es observable entonces en el gráfico 59:

Gráfico 59. Pobreza crónica, 2002-2011. INE, 2011.



Por su naturaleza, la pobreza crónica resiente menos directamente el efecto de las políticas redistributivas y por lo tanto su comportamiento es más moderado en la curva. Sin embargo también indica con claridad una involución de la pobreza en un 50% desde el 2003 hasta el 2011.

En relación a la manera como el gobierno mide la pobreza por línea de ingreso, existen organizaciones de la sociedad civil, vinculadas a la oposición que impugnan el protocolo del INE.

Una de ellas es el CENDAS-FVM. Este centro adscrito a los sindicatos magisteriales calculan de modo diferente la canasta básica normativa. Para ellos el efecto de la inflación es mucho más contundente y no debe ser considerado el efecto amortiguador de la comercialización socialista, por cuanto el mercado sobre el que reposa en la práctica la canasta alimentaria sigue siendo el tradicional privado.

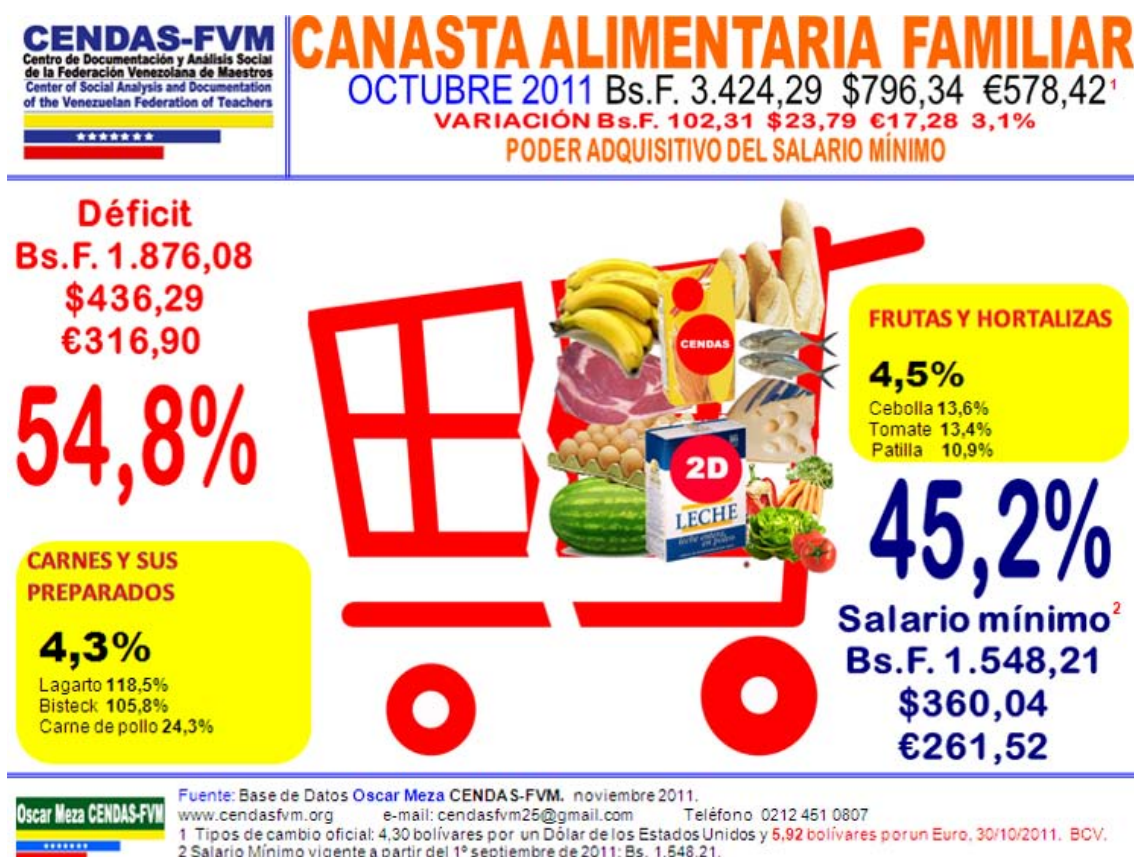
Como se desprende del siguiente gráfico, el 60, en efecto, el sector que más pesa sobre el INPC y que corresponde a la canasta de todos los ciudadanos, es el sector alimentación. Nótese que los aumentos de precio están calculados inter-mensualmente y no anualmente.

Gráfico 60. Índice nacional de precios al consumidor (INPC) intermensual, 2011. INE, 2011.



El CENDAS-FVM levanta sus propias cifras, excluye a la comercialización socialista, tal como Mercal o Pdval y concluye que para octubre del 2011 el poder adquisitivo del salario mínimo tiene un déficit del 54,8% para poder compensar el precio de la canasta. Un trabajador con salario mínimo por tanto solo podría adquirir el 45,2% de la canasta alimentaria.

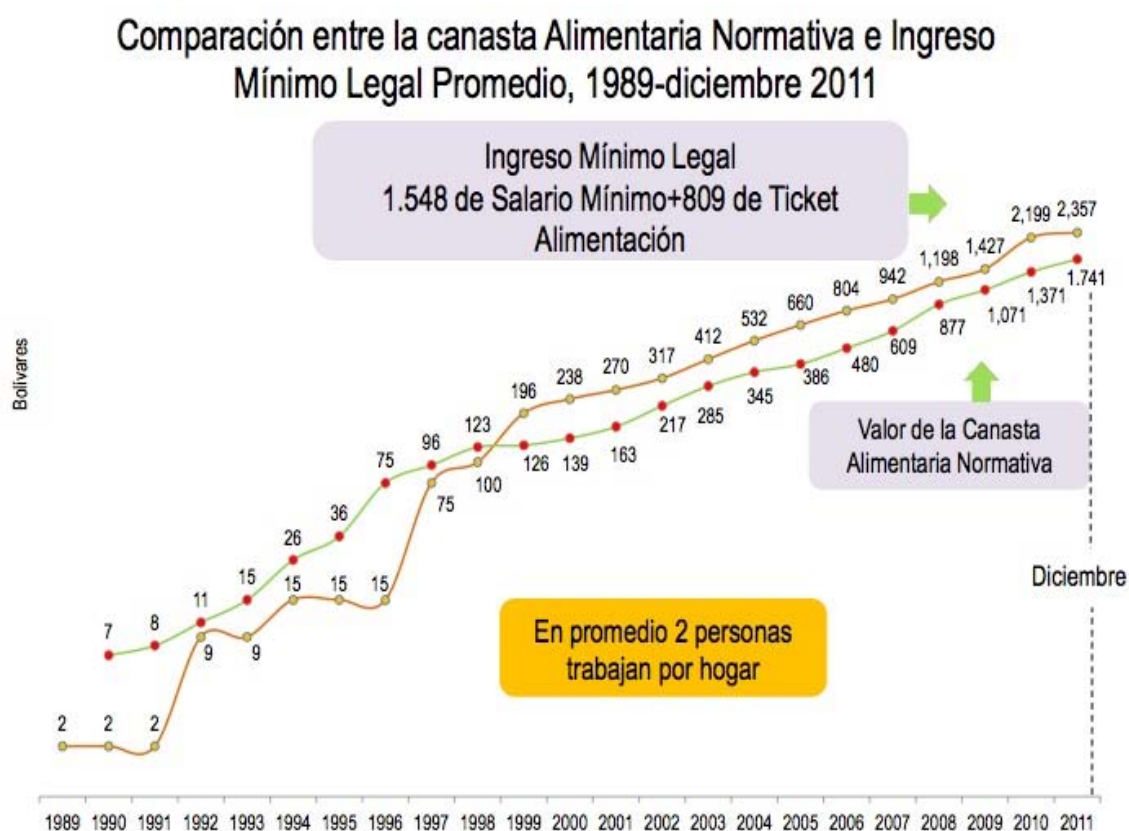
**Gráfico 61. Canasta alimentaria y salario mínimo, octubre 2011.
CENDAS-FVM, 2011.**



Como se observará en el gráfico 62, esta relación no ha sido medida del mismo modo por el gobierno a través del INE. Para este instituto, por el contrario, la canasta básica ya fue alcanzada por el salario mínimo en 1999, esto es, en el primer año del bolivarianismo y continúa así hasta el 2011.

En relación a la realidad observada, lo que sucede es que la inestabilidad de los suministros en los sistemas públicos y privados, la dificultad de la población acceder a productos que llegan a la comercialización socialista (largas colas, corrupción, etc), los problemas de inflación, devaluación, acaparamiento y especulación, también condiciona la volatilidad de los precios, regulados o no, haciendo ubícua la medición de la canasta básica.

Gráfico 62. Canasta Alimentaria Normativa y Salario Mínimo, 1999-2011. Eljuri, 2012.



La desestimación de la comercialización socialista en el cálculo del CENDAS-FVM contrasta con la importancia que le da el INE en el otro extremo. Esto pone en relieve el peso económico, pero también político, de Mercal y Pdval en el ahorro familiar de la canasta alimentaria en todo el país.

Tal ahorro ha sido calculado por el propio Ministerio de Alimentación, tal como se indica en el gráfico 63:

Gráfico 63. Ahorro familiar en Mercal, 2008-2010. Provea, 2011.

Cuadro N° 10 Ahorro promedio al comprar on la Red Mercal			
Estrato social	2008	2009	2010
Mercal vs. regulado	52,1	40	49,1
Mercal vs. Mercado	74,3	49,4	64,3

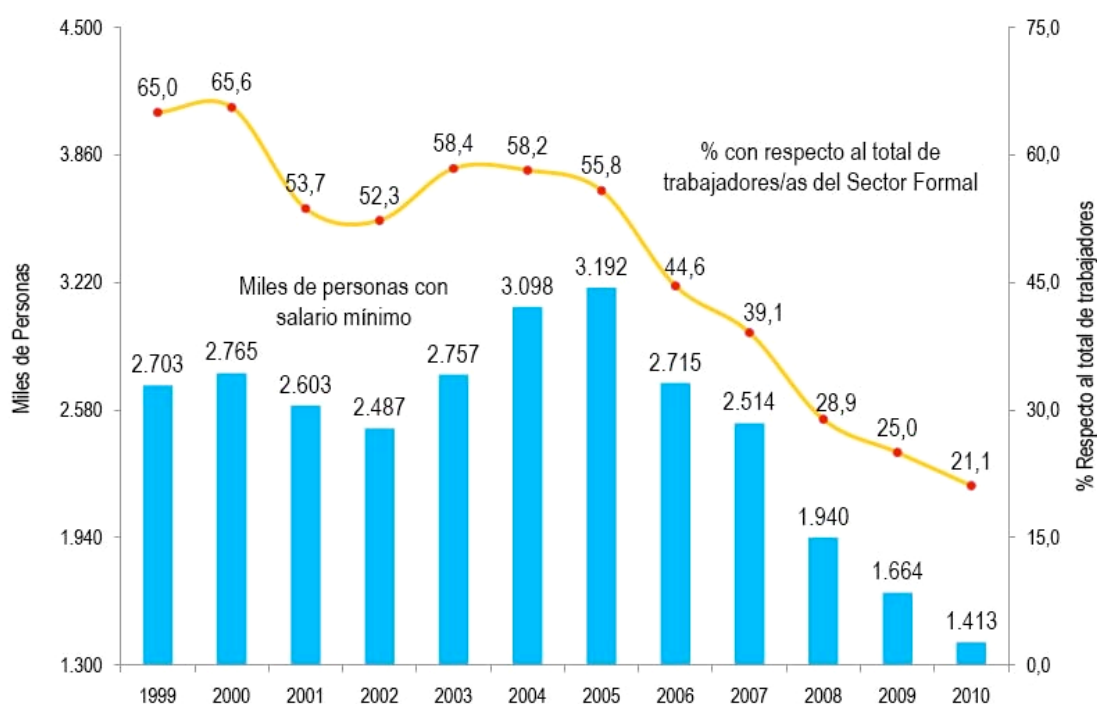
Fuente: Memoria y Cuenta Minal. 2010, Pág. 20.

Tal como se muestra en los años 2008 y 2010, el ahorro es persistente en este período y es causado por el hecho de que se mantienen niveles similares de subsidio a pesar del aumento del precio de los alimentos bajo el efecto de la inflación venezolana. En el cuadro se percibe irregularmente este ahorro dado que en el año 2009 se produjo la crisis de los precios petroleros simultáneamente al aumento de los precios de los alimentos a nivel mundial. Esta crisis fue analizada en el cap. 6.5.2. literal “b” de esta tesis.

También para el Estado los salarios mínimos han estado desapareciendo del mercado laboral, tal como se percibe en el gráfico 64:

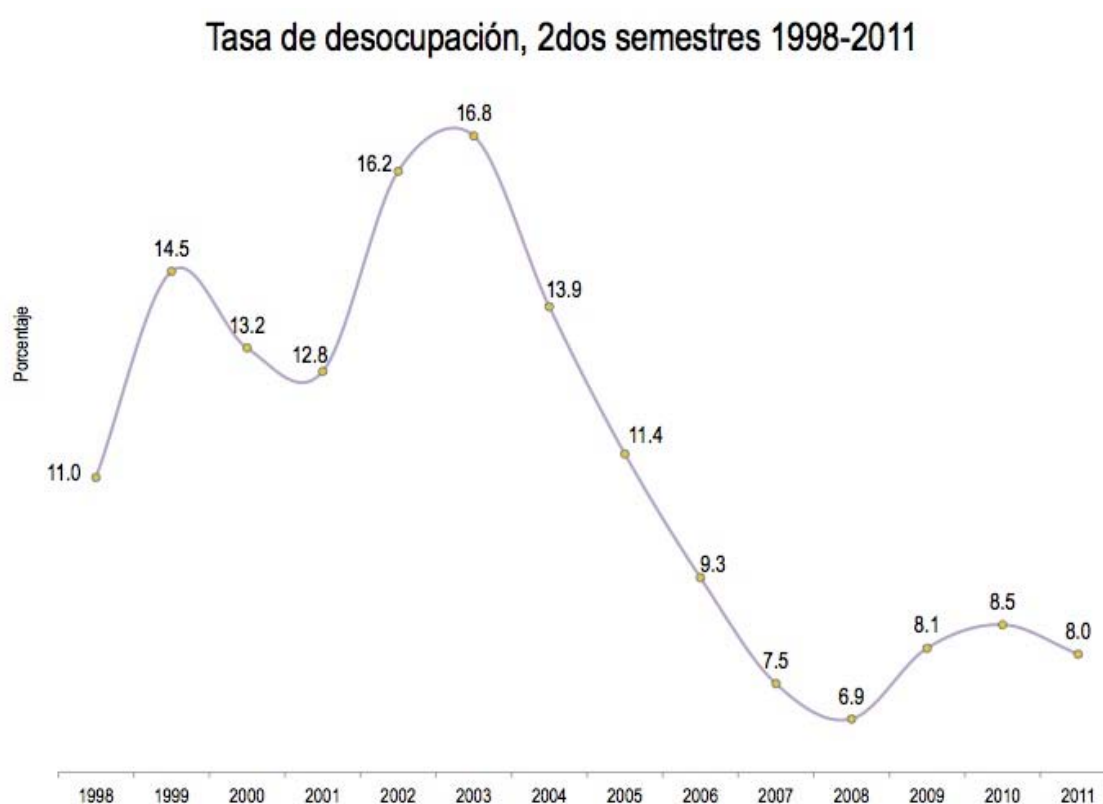
Gráfico 64. Porcentaje de trabajadores con salario mínimo en el sector formal de la economía, 1999-2010. INE, 2011.

Porcentaje y número de personas con salario mínimo en el sector formal, 2dos Semestres, 1999-2010



La progresiva desaparición del salario mínimo puede estar precisamente vinculada al hecho de que la inflación, sin el auxilio de la comercialización socialista y el control de precios, deteriora muy rápidamente el salario cada año, por lo que se hace necesario aumentarlo para hacerlo atractivo. Sin embargo, ello no resulta en niveles muy altos de desocupación, tal como se percibe en el gráfico 65. La tendencia entre el IV trimestre del 2011 y febrero del 2012 es un aumento en desocupación hasta un 9,2% (INE, 2012 b) pero con un aumento del Índice de Remuneraciones a los Asalariados en un 1,4% (BCV, 2012).

Gráfico 65. Tasa de desocupación, 1998-2011. Eljuri, 2012.



En cualquier caso, los valores analizados a lo largo de todo este subcapítulo y en base a las informaciones suministradas por varias fuentes, permiten afirmar que la disminución de la pobreza es un hecho en el subsistema venezolano, independientemente de la medición que se haga.

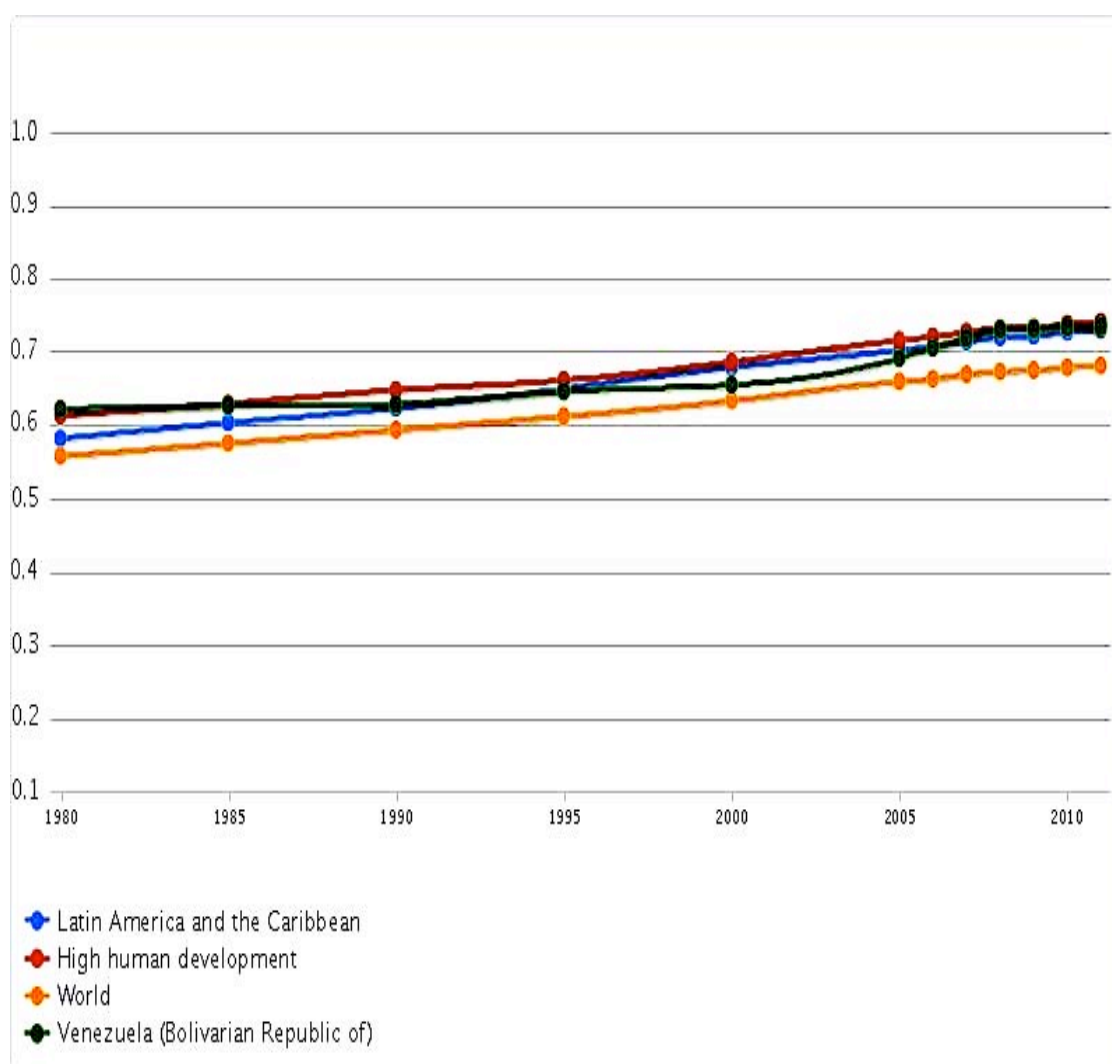
Las políticas de seguridad alimentaria, a pesar de sus problemas de dependencia de las importaciones y de los fuertes problemas para hacerse acompañar de un aparato productivo cónsono, alcanza efectivamente sus objetivos de suficiencia alimentaria y crea las

condiciones socioeconómicas para que desaparezca el contexto de la pobreza a la cual la inseguridad alimentaria está tan fuertemente asociada.

Las políticas públicas llamadas socialistas no solo actuaron sobre el contexto en el que se produce la pobreza y, dentro de ésta, la inseguridad alimentaria, sino que también actuaron sobre los capitales culturales y de servicios generales que permitieron a los sujetos mejorar su calidad de vida.

Por ello, este subcapítulo no puede concluir sin hacer referencia a los avances del subsistema en materia de desarrollo humano, cuyo índice se muestra en el gráfico 66.

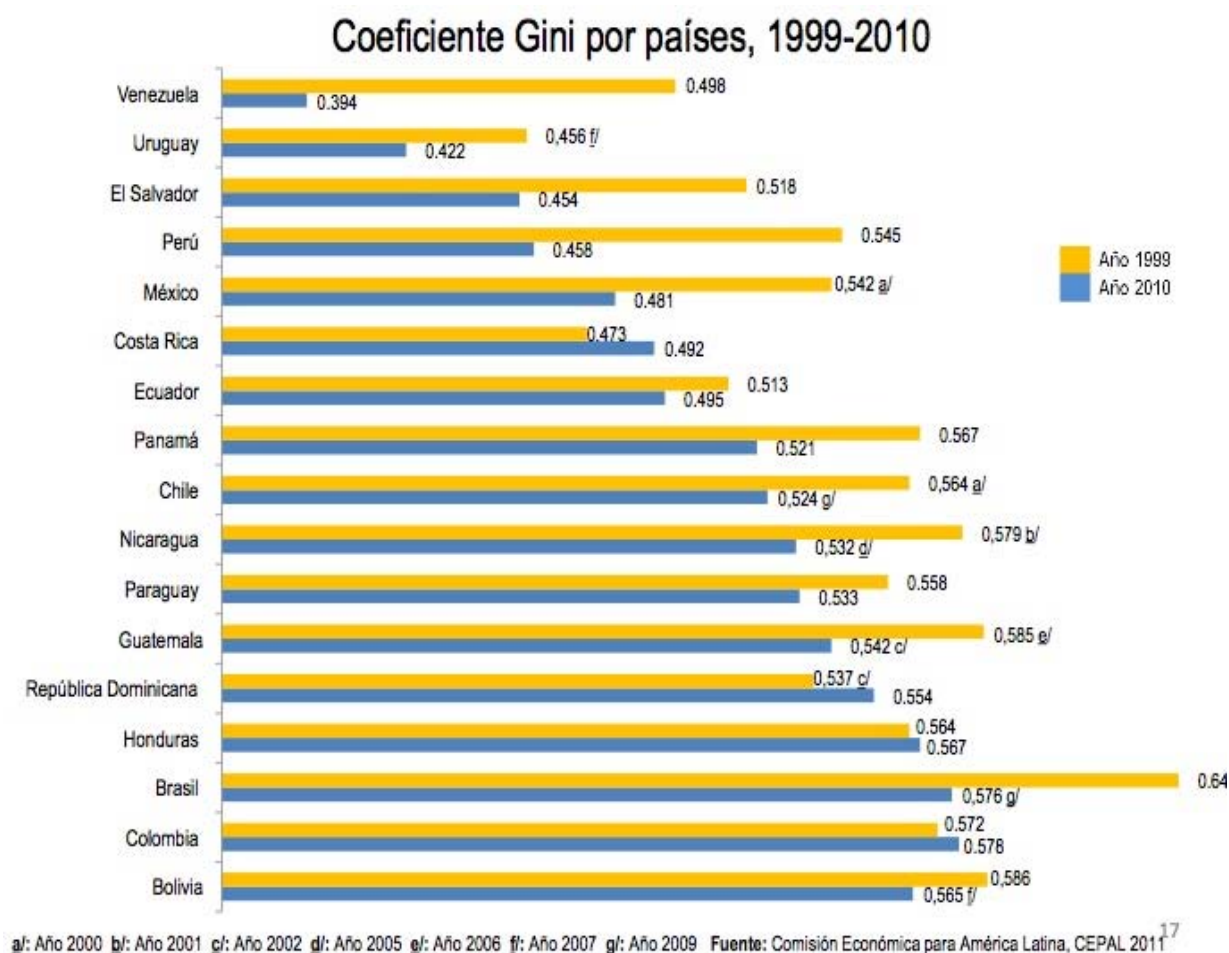
Gráfico 66. Índice de Desarrollo Humano del PNUD. Comparación entre Venezuela, el mundo, los países de alto desarrollo humano y Latinoamérica y el Caribe, 1980-2010. PNUD, 2011.



A pesar de que el Índice de Desarrollo Humano no incorpora ningún componente sobre alimentación en su diseño, refleja componentes asociados a la cantidad y calidad de los alimentos, como la mortalidad infantil, la morbilidad y la esperanza de vida. Nótese como a partir del 2000 este índice se acelera ostensiblemente hasta alcanzar los niveles de Desarrollo Humano “Alto” (entre los puestos 48 y 94) antes del 2010, en el puesto 73. El gráfico muestra una comparación entre Venezuela (negro), el mundo (naranja), los países de alto desarrollo humano (rojo) y Latinoamérica y el Caribe (azul). La aceleración luce mayor hacia el 2005, sobre todo si se le compara con las otras líneas, en el período posterior al paro petrolero-alimentario y que se identifica en esta tesis con la 2a y 3a ola de participación social.

Finalmente, esta reducción de la pobreza y aumento en la calidad de vida se tradujo en una disminución de la desigualdad socioeconómica por la vía de los ingresos, tal como lo mide el coeficiente de Gini y que se expresa en el gráfico 67. A nivel regional es el país que remonta más rápidamente la desigualdad:

Gráfico 67. Coeficiente Gini América Latina x países, 1998-2010.
Eljuri, 2012.



Sin embargo, el cálculo de desigualdad de Gini deja por fuera el cálculo de la desigualdad medido por la proporción de la renta del trabajo frente a la del capital, o bien medido por la distribución de las diferentes rentas nacionales.

Esto es percibido por el PNUD en la firma del Marco de Asistencia para los Objetivos del Milenio:

“A pesar de las políticas de inclusión, las disparidades en Venezuela siguen siendo importantes. Según el Instituto Nacional de Estadísticas, en 1997 el 20% más pobre recibió el 4,1% del ingreso per cápita de los hogares al tiempo que el 20% más rico recibió el 53,6%. Para el 2005 la situación mejoró ligeramente, pero lo que muestra aún más la brecha de la desigualdad es que el 80% de la población tiene un ingreso promedio por debajo del promedio nacional” (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y Ministerio del Poder Popular para la Planificación y el Desarrollo, 2008).

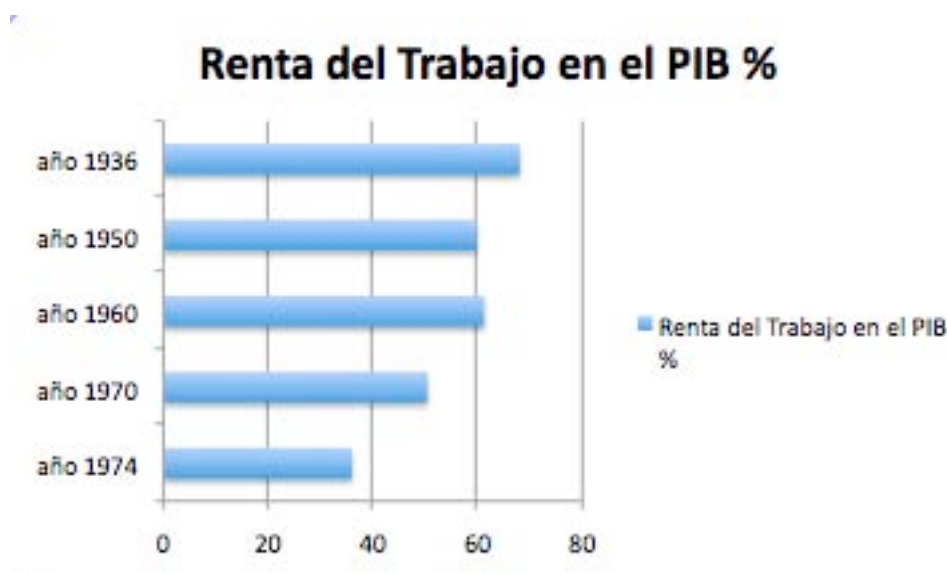
Esto es, el aumento de ingresos familiares en los 12 años de estudio no estarían indicando resultados satisfactorios en la distribución de la renta sino un mejoramiento absoluto del poder adquisitivo de las familias. Ha habido más recursos en el subsistema y aunque ellos han mejorado el poder adquisitivo de las mayorías sociales, se han dirigido mayormente hacia el sector más rico de la población.

El ex-ministro bolivariano Víctor Álvarez llega a conclusiones similares en el 2009 y en el 2011. Este autor sostiene que, según los porcentajes de participación en la renta nacional que ofrece el BCV, desde 1999 hasta el 2009 el sector mercantil-privado aumentó su participación en un 5,2%, el sector público cayó un 5% y el asalariado cayó un 8%. Estas cifras indicarían que el país habría reducido su pobreza pero no por ello se distribuyó mejor la renta nacional entre los trabajadores. El país sería durante el período bolivariano *más capitalista* (Álvarez, 2009; 2011).

Esta misma tendencia ya había sido identificada por Juan Pablo Pérez Alfonzo para el tiempo en que Venezuela presentó por vez primera problemas de absorción de la renta petrolera entre los inicios de la explotación hasta el *boom* del 73 en el siglo XX.

Este autor ya detectaba la asociación aparentemente paradójica entre aumento del gasto público y la declinación de la renta del Trabajo en Venezuela, tal como se muestra en el gráfico 68.

Gráfico 68. Renta del trabajo en la renta nacional, 1936-1974.
Pérez Alfonzo, 1976.



Para Pérez Alfonzo y Álvarez, la pérdida de poder económico de las clases trabajadoras se traduce en pérdida de poder político y en una disminución de su capacidad de controlar el sistema de acumulación por la vía del propio trabajo. Para el Marco de Asistencia del PNUD también se traduce en mayor pobreza relativa.

Estas cifras muestran nuevamente que los problemas de absorción inciden negativamente en la efectividad de la participación social sobre las políticas públicas soberanistas venezolanas y en la eficiencia de las políticas públicas en su conjunto.

8. Conclusiones.

8.1. La participación como modelo de gestión en la situaciones observadas: alcances y camino por recorrer.

El Estado venezolano, en combinación con diferentes formas de organización de la sociedad civil, ha creado e impulsado un sistema que suma 43 componentes nuevos o renovados civiles, financieros, comercializadores, productivos, jurídicos e ideológicos con la finalidad expresa de generar seguridad y soberanía alimentaria. Este sistema es denominado en esta tesis Sistema Socialista de Soberanía Alimentaria (SSSA) en virtud de sus objetivos declarados.

Muchas otras instancias estatales y civiles se han creado con fines paralelos pero también tienen incidencia indirecta o transversal en la generación de seguridad alimentaria. Entre ellos se cuenta con una red de bancos comunales instalados dentro de cada uno de los 36.812 consejos comunales contabilizados para el 2008 desde la 3a ola de participación. Muchos de ellos se integraron directamente a los componentes participados del SSSA, y otros le sirvieron de apoyo y fiscalización. También se cuenta con un importante número de cooperativas generadas antes del bolivarianismo y sobre todo luego de la 3a. ola de participación. También se cuenta con políticas educativas que incluyeron comedores escolares o políticas de salud que integraron a la población a observación médica y a protocolos de hábitos alimenticios saludables.

De los 43 componentes que le fueron específicos al SSSA, 18 cuentan con espacios de participación directa (la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario -incluyendo al Instituto Nacional de Tierras-, el Plan Bolívar 2000, el Primer Plan Socialista, los Consejos Locales de Planificación Pública, las otras tres leyes habilitantes de alta incidencia en la alimentación, la Corporación Venezolana Agrícola, la Empresa de Producción Socialista Florentino, la Fundación Programa Alimentario –Fundaproal-, el Fondo de Eficiencia Socialista, el Fondo Zamorano, la Fundación de Capacitación e Innovación para Apoyar la Revolución Agraria, la marca Venezuela –Areperas, café, abastos, panaderías-, la Ley Orgánica de Soberanía y Seguridad Alimentaria y las Empresas de Producción Socialista/Unidades de Producción Socialista en general), 8 componentes son asistidos por formas de participación indirecta

(Mercal, Producción y Distribución Venezolana de Alimentos –Pdval-, Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral –INSAI-, el Sistema Integral de Control Agroalimentario, Comercios Socialistas –Comersso, Corporación Venezolana de Alimentos –CVAL-, Abastos Bicentenario, Agrotiendas Socialistas y Agropatria) y los demás componentes son de tipo solamente estatal.

Se crearon tres importantes estrategias territoriales, los Núcleos de Desarrollo, el *punto y círculo* y la Nueva Geometría del Poder (NGP). Se crearon nuevos ministerios y nuevos formatos de gobierno como el Ministerio de Salud y Desarrollo Social (MSDS) en el 2000, el Ministerio de Agricultura y Tierras (MAT) en el 2002, las Misiones alimentarias y productivas desde el 2003, el Ministerio del poder popular para la Alimentación (Minppal) en el 2008 o la Vicepresidencia productiva en el 2010. Aparte de los instrumentos jurídicos se crearon estrategias políticas e ideológicas como los 5 Motores, el Árbol de las Tres Raíces y las estrategias mediáticas entre las que se cuenta la capacidad de convocatoria del propio Presidente del Ejecutivo. En todos estos nuevos formatos y orientaciones estratégicas, se redefinió y fortaleció la participación social en las políticas públicas alimentarias.

Desde la perspectiva de las tierras cosechadas, el SSSA aumentó un 10%, revirtiendo, aunque precariamente, el abandono del campo. Los componentes comercializadores del SSSA alcanzaron alrededor del 50% de la demanda alimentaria nacional. En general, todo el sector público ha estado relacionado directa o indirectamente con formas de participación política y económica no partidistas. Todo el sector alimentario nacional ha estado regulado por políticas de seguridad y soberanía alimentaria desde la fijación de los precios, la obtención de divisas, la fiscalización de las cadenas, la competencia entre el sector público y el privado de la alimentación o las políticas aduanales. En todos estos aspectos, de alguna manera u otra, se hacen sentir las formas de la participación social a través del Estado o a través de formas políticamente más autónomas.

En términos de la intensidad de la acción pública, la presencia de la participación hizo posible a esta tesis hablar de 5 olas de participación social, algunas más inclusivas que otras, según el contexto en que se produjeron.

La 1a ola correspondió al período anterior al golpe de Estado y el paro petrolero-alimentario de los años 2002-2003. En esta ola fue particularmente característica la generación de agendas civiles

inspiradas por el discurso del presidente Chávez, pero sin apoyo financiero o gubernamental estructurado. Los componentes de estas olas eran fundamentalmente de tipo asistencial, los diseños de las políticas públicas eran verticales y se comunicaban con la sociedad civil a través de instancias consultivas.

La 2a. ola correspondió al período post-paro en el que se impulsaron las misiones y los comités sociales adjuntos a las misiones. Esta ola experimentó un fuerte empuje de parte de los nuevos emprendimientos sociales y económicos que hicieron vida en el país.

La 3a ola correspondió a la creación de los consejos comunales, los cuales tejieron formas de poder social de las comunidades vecinales con sus territorios. Como en la 2a ola, la agenda civil bolivariana tuvo una enorme incidencia en las políticas públicas. Adicionalmente, en esta ola se definió la transición al socialismo, uno de tipo especial.

La 4a ola correspondió a la llamada profundización del socialismo, asociada a las propuestas de la “reforma constitucional”, un referendun perdido por el gobierno a finales del 2007, pero que siguió tratando de reimpulsar a través de la Ley de Comunas del 2008. Esta ola trató de elevar la experiencia de los consejos comunales a formas más estructuradas de poder social-territorial hasta el 2010. Las directrices socialistas de esta ola no fueron asumidas plenamente por la sociedad civil como sucedió durante la 3a ola.

La 5a ola correspondió al “reimpulso Bicentenario” en el 2010. En este período el Estado evaluó la necesidad de profundizar nuevamente los esfuerzos anteriores y dispuso una mayor cantidad de recursos, fundamentalmente administrativos y económicos, para transformar el modelo productivo en uno definido como “socialista” (propiedad social de los medios de producción y responsabilidad de las nuevas empresas con el desarrollo). Sin embargo, la agenda civil volvió a matizar su fuerza ante el impulso del Estado. En esta ola como en la anterior se evidenció un impacto creciente de los problemas de absorción económica del gasto en todo el subsistema, incluyendo los emprendimientos asociados al SSSA.

A lo largo de todas las olas se presentaron las siguientes características, entre otras:

a. La relación creativa entre sociedad civil y Presidente del Ejecutivo, y la consiguiente creación de agendas civiles. Este fenómeno fue particularmente característico en las olas 2a y 3a.

b. La transversalidad de los emprendedores sociales y económicos bolivarianos entre las diferentes políticas dentro y fuera del SSSA. Ello permitió integrar las políticas públicas en la agenda de los líderes y emprendedores de manera diversa.

c. La importancia de la visibilidad política del sujeto subalterno en las motivaciones de los emprendimientos. Las políticas sociales se hicieron acompañar de importantes expresiones de pertenencia al proyecto nacional que confirieron estabilidad y sentido al concepto de ciudadanía en los sujetos de las políticas. Tales expresiones fueron particularmente marcadas en las observaciones de los sujetos de la 2a. a la 4a. ola .

d. La experimentalidad o experimentalismo de las políticas públicas y de las agendas civiles motivadas por la idea de “urgencia social”. La ausencia de recetas administrativas fue un fenómeno constatable desde los Consejos Comunales hasta las diferentes instancias del gobierno central, generando, para bien o para mal, una importante diversidad de prácticas políticas, sobre todo desde la 1a hasta la 3a ola de participación.

e. La ausencia de transversalidad en el poder popular. Las organizaciones estatales y civiles participadas se comunicaban entre sí a través de puentes con el gobierno central, desde los programas de TV hasta las convocatorias electorales. La articulación de políticas independientes entre las distintas instancias del poder popular no fue la norma.

f. Se declararon récords de producción en 6 de las 21 situaciones observadas y un aumento relativo de la producción al menos en otras dos. De las 7 situaciones productivas observadas solo una no dejaba constancia del aumento de la producción, al menos en su inicio. De ello se desprende el alto desempeño de los emprendimientos del poder popular que contaron con los recursos adecuados, sobre todo, aquellos que provinieron de empresas adquiridas o recuperadas cuyas plantillas de personal se mantuvieron incólumes.

g. El efecto negativamente creciente del gasto y de las políticas públicas que *desdibujaron al mercado dentro del mercado* en el desempeño de los emprendimientos productivos, sobre todo en las últimas dos olas. Asimismo, los lazos de dependencia con el Estado fueron creciendo en la medida en que, en líneas generales, resultaba difícil de controlar el mercado por causa de la inflación, la fuga de recursos del subsistema, los controles del Estado, la ineficiencia y la corrupción.

En las 21 situaciones observadas y entrevistas realizadas dentro del SSSA, se ha demostrado alguna efectividad en el manejo del territorio en 7: La Casa del Pueblo, La Central Azucarera Venezuela, la EPS Rafael Urdaneta, Diana C.A., las cooperativas agrícolas de Sabana de Parra, la Unidad de Producción Socialista Pedro Camejo y Mercal Producción. No se cuentan con suficientes datos sobre manejo del territorio en los otros casos. En todos los 7 casos es posible hablar de aumento de la producción, al menos en su inicio, asociable al control del medio de producción y del territorio. En solo dos de las EPS revisadas se ha demostrado control autogestionado del mercado de manera persistente a través de las olas: Diana SA y Enlandes. Todas las 21 situaciones observadas debieron enfrentar problemas de la estructura económica relativos a la absorción y las políticas de control del Estado.

En Obuchi, Abadi y Lira (2011) se indican problemas de eficiencia en 8/10 empresas socialistas alimentarias, pero cuando se observan los análisis a detalle, muchos de estos problemas están íntimamente ligados nuevamente a problemas de estructura económica, concretamente problemas de absorción macroeconómica y problemas de política económica alimentaria relativas a precios, inflación y control estatal del mercado.

De tal modo que, a pesar de las diferencias entre los resultados de esta tesis y de la investigación arriba indicada, esto es, si se enfoca el peso de la participación en la generación de seguridad alimentaria o bien si se enfocan los problemas de eficiencia de las empresas socialistas, los resultados pueden ser similares: la mayor parte de los emprendimientos productivos enfrentan graves problemas relacionados a las políticas del Estado, tanto a nivel de regulaciones en la cadena, como a nivel macroeconómico. A pesar de que existen excepciones, hay evidencias que el papel del gasto no juega a favor del despunte de la oferta producida nacionalmente. De hecho, muchos de los problemas acusados por el Estado como producto de la deslealtad del sector productivo tradicional, también son vividos por varios sujetos del sector leal de la economía alimentaria, debilitando este argumento.

8.2. Impacto del SSSA en la generación de seguridad alimentaria.

En términos de acceso y disponibilidad de recursos es posible identificar un aumento de los nutrientes efectivamente consumidos para el período del SSSA sobre todo desde el 2003. Desde el año 2000

hasta el 2010 tal aumento permitió que un 2,4% de los niños menores de 5 años ya no presentasen déficit nutricional e incorporó a la suficiencia calórica a un 15% de la población con prevalencia de desnutrición.

El SSSA se trata de un giro importante, si se le compara con las políticas alimentarias y sociales en general antes del 2003 y, sobre todo, antes del bolivarianismo.

Las conclusiones que se vaciarán en este capítulo están en consonancia con análisis puntuales realizados por la FAO para Venezuela. Según una Nota de Análisis Sectorial realizado por la FAO-Corporación Andina de Fomento, el aumento de la pobreza fue la norma durante los períodos neoliberales hasta el golpe de Estado del 2002 así como el llamado paro petrolero-alimentario del 2002 y 2003:

“De acuerdo a todas las medidas utilizadas, la pobreza crece en forma notable desde comienzos de los años 80 hasta los primeros años del siglo XXI. Por el método de la Línea de Pobreza, la población en situación de pobreza o pobreza extrema se duplica o triplica cualquiera sea la fuente de información utilizada incluyendo el Instituto Nacional de Estadísticas. Por el Método de las Necesidades Básicas Insatisfechas se observa igual tendencia, agudizándose con las crisis del 2002 y 2003” (Organización Munidal para la Alimentación y Corporación Andina de Fomento, 2006: 16).

La pobreza había impactado negativa y progresivamente los niveles nutricionales de la población, al menos hasta el 2002-2003:

“El proceso de empobrecimiento se refleja, como era de esperarse, en la situación nutricional. En efecto, en el trienio 1977-79 la disponibilidad calórica se ubicaba cerca de las 2.700 calorías mientras en el trienio 2002-2004 no alcanza las 2.200. Dado que el consumo de alimentos varía ampliamente en los distintos estratos de ingreso, la FAO considera que en 2000-2002 alrededor del 17% de población estaba sub-nutrida, proporción muy superior al 11% de 1979-81” (Organización Munidal para la Alimentación y Corporación Andina de Fomento, 2006: 16).

Es importante hacer ver que las fuentes de este informe no solo proceden de las estadísticas estatales venezolanas (el Instituto Nacional de Nutrición y el BCV) sino también de mediciones corroboradas por los propios organismos internacionales (Hojas de Balance de Alimentos y el informe “El Estado Mundial de la Agricultura y la Alimentación” (FAO, 2004).

El informe continúa a favor de las políticas luego del 2003, pues el SSSA produce una mejoría sustancial en los aspectos nutricionales de la población. Tal como se ha corroborado por varias medidas y fuentes, el 2003 es el año del *giro*, esto es, el año del fin del llamado paro petrolero-alimentario y el año de la aparición de Misión Mercal. Con esta Misión se impulsan los demás componentes del SSSA.

“En los años 2004 y 2005 la situación social ha mejorado indudablemente revirtiendo las tendencias preexistentes. Las Misiones y la multiplicación del Gasto Social han logrado una recuperación de los sectores de menores ingresos y un incremento muy significativo del consumo de alimentos. Las estimaciones preliminares de consumo de alimentos del INN muestran un incremento de alrededor de 200 calorías en la disponibilidad en 2004 y 350 adicionales en 2005. Estas tendencias son confirmadas por el seguimiento de las ventas al detal que realiza el BCV, que muestran cómo las compras de alimentos en supermercados y otros establecimientos han aumentado a partir de 2003 entre 51% y 69%” (Organización Mundial para la Alimentación y Corporación Andina de Fomento, 2006: 17).

Al reunir estas evidencias con las vaciadas en el capítulo 7, se confirma que:

- Los niveles de suficiencia alimentaria en Venezuela han ascendido durante el SSSA.
- La pobreza y la pobreza extrema se han reducido, medidos convencionalmente por línea de ingreso, necesidades básicas insatisfechas (NBI) y pobreza crónica.
- El descenso de la pobreza y el aumento de la suficiencia alimentaria se traducen en una mayor seguridad alimentaria, sobre todo en comparación a los períodos anteriores del bolivarianismo.

- El hecho de que este proceso se produjo persistentemente desde el 2003 hasta la fecha final de este estudio, en el 2012, permite indicar “estabilidad” de tal seguridad alimentaria, a pesar de las diferentes amenazas estructurales del modelo.
- Los recursos del SSSA para facilitar el “acceso” a la alimentación, tanto territorial, institucional, jurídico, como por la vía de los precios, se han multiplicado.
- Las condiciones de los servicios relacionados con el desarrollo humano han mejorado, según sus indicadores, creando una base socio-económica y cultural más estable para asumir el desarrollo de políticas alimentarias.
- Han aumentado los recursos dispuestos por el Estado como el gasto, los medios de participación civil y la infraestructura asociada, que permitirían un desarrollo de las bases para la autosuficiencia alimentaria.
- Sin embargo, la autosuficiencia alimentaria, o “autonomía” nacional en la provisión de nutrientes, es extremadamente precaria, toda vez que es progresivamente más dependiente de las importaciones y del gasto público. Hasta la fecha de este estudio, el problema del aumento de las importaciones alimentarias, no solo no presenta indicios de recuperación sino que se agrava.
- El aparato productivo del SSSA, desde la recuperación de tierras y empresas hasta su puesta en marcha, no solo es marcadamente insuficiente frente al crecimiento de la demanda y de la población, sino que tampoco revela indicaciones de que pueda revertir la dependencia de las importaciones y del propio gasto público.
- La desproporción de la demanda urbana, asociable con el sector terciario de la economía, orientó el SSSA hacia el cumplimiento de las metas de seguridad alimentaria por la vía de la importación, provisión directa de alimentos, el control de la comercialización y de los precios, entre otras medidas similares.
- Sin embargo se sigue erogando una gran proporción de recursos financieros y no financieros en activar la producción tanto socialista como la no socialista, con resultados contrarios a los esperados, según diferentes medidas.

- Las causas fundamentales de los problemas de autonomía son identificables en problemas de absorción macroeconómica de la renta petrolera, desproporción del gasto y en las políticas públicas alimentarias que se han implementado durante este período, en particular desde la 4a y 5a ola de participación.
- El peso del gasto público está asociado íntimamente con el aumento persistente de la pobreza relativa. Tal pobreza se mide como la proporción del valor del trabajo en relación a la renta nacional, el sobre-dimensionamiento del Estado y, sobre todo, del sector privado terciario. La pobreza relativa refleja la distribución del ingreso nacional. De tal modo que un aumento de la pobreza relativa es asociable a una distribución más deficiente del ingreso nacional y, con ello, a la pérdida de poder político interdependiente de la sociedad civil. Esto sucede, sobre todo, durante la 4a y 5a ola de participación social, tal como se presentó en las observaciones.
- La marcada pobreza del sector productivo agrícola en relación al resto del país ha condicionado negativamente la independencia política y económica del sector, incluyendo a los productores del SSSA. Esta dependencia hace difícil pensar en algún tipo de gestión socialista o auto-sustentable que surja de las propias fuerzas agrícolas para transformar o mejorar el modelo productivo. El desempeño productivo del poder popular no consigue una respuesta adecuada por parte del mercado nacional ni por parte de los controles estatales, por lo que depende cíclicamente de créditos públicos y otras formas de subsidio directo o indirecto.
- En el SSSA se percibió un desdoblamiento simbólico del discurso. Este consistió en el *desdibujamiento del mercado dentro del mercado*, un proceso discursivo y cognitivo que participó negativamente en el diseño de las estrategias soberanistas de control del mercado.
- Sin embargo, la seguridad alimentaria venezolana presentó avances importantes e, incluso, mostró condiciones positivas para alcanzar los Objetivos del Milenio en esa área y en el área de pobreza.
- El modelo del SSSA demostró que la participación social en el diseño e implementación de las políticas fue fundamental, sobre todo en la 2a y 3a ola de participación. Sin tal participación de la

sociedad civil ni su deseo de articularse a la convocatoria del presidente del Ejecutivo, habría sido más difícil el logro de muchos objetivos del SSSA .

- El modelo del SSSA demostró nuevamente que una relación articulada entre participación y territorio fue fundamental para alcanzar los objetivos de la seguridad alimentaria.

9. Fuentes

9.1 Libros y artículos científicos.

Adriani, Alberto (1990) [1937]. "La crisis, los cambios y nosotros" en Valecillos, Héctor y Bello, Omar (comp.), 1990: *La economía contemporánea de Venezuela. Ensayos escogidos*. Tomo I. Ediciones del 50 Aniversario. BCV.

Aguilar Villanueva, Luis (2007). *El estudio de las políticas públicas*. Colección Antologías de Política Pública. Primera Antología. 2ª Reimpresión. Miguel Angel Porrúa. México DF

-- (2007a). *La Hechura de las Políticas*. Miguel Angel Porrúa. México DF.

Alegrett, Raúl (2003). "Evolución y tendencias de las reformas agrarias en América Latina" en 2003: *Reforma agraria. Colonización y cooperativas*. FAO Document Repository. Economic and Social Development Department. FAO. Roma.
<http://www.fao.org/docrep/006/j0415t/j0415t0b.htm>

Alonso, José Antonio y Garcimartín, Carlos (2010). *El impacto de la ayuda internacional en la calidad de las Instituciones*. ICEI Workpapers. Universidad Complutense de Madrid. Madrid.

Alvarado Chacín, Neritza (2011). "La política social de la lucha contra la pobreza y la exclusión en el gobierno de Hugo Chávez (1999-2009)" en Ramos Pismataro, Romero y Ramírez Arcos (edit. académicos), 2011: *Hugo Chávez: una década en el poder*. CEPI. OV. Universidad del Rosario. Editorial Universidad del Rosario. Bogotá.

Álvarez, Víctor (2009). *Venezuela: ¿hacia dónde va el modelo productivo?*. Centro Internacional Miranda. Caracas.

Amín, Samir (1974). *La acumulación a escala mundial. Crítica de la teoría del subdesarrollo*. Siglo XXI de España editores SA. Madrid.

-- (2010). *La desconexión, hacia un sistema mundial policéntrico*. IEPALA. 2ª. edición. Madrid.

Amodio, Emanuele (1993). *Formas de la alteridad. Construcción y difusión de la imagen del indio americano en Europa durante el primer*

siglo de la conquista de América. Colección Tierra Incognita. Edit. Abya Yala. Quito.

Angulo Rivas, Alfredo (1994). *Pérez Jiménez: tres décadas después*. Ediciones de la ULA. Mérida.

Anido, Daniel (2002). "Políticas económicas y sectoriales agrícolas: efectos sobre la situación de seguridad alimentaria en Venezuela, 1970-2000" en 2002: *Revista Ágora*. No. 10 Julio-Diciembre. Trujillo.

Anido, Daniel y Fuentes, Luis (2007). *Impacto del crédito en la producción agrícola en Venezuela, 1970-1999*. III Jornadas de Investigación del CIDE. UNESUR-ULA.

Aponte Blank, Carlos (2010). "El gasto público social durante los períodos presidenciales de Hugo Chávez: 1999-2009" en 2010: *Cuadernos del CENDES*. Año 27. No. 73. Enero-Abril. Caracas.

Arrighi, Giovanni (2002). *The Long 20th Century. Money, Power and the Origins of our Times*. Verso (New Left Books). New York, London.

Arenas, Ender (2001). "Política, legitimidad y democracia en una sociedad en transición. Las viejas y nuevas representaciones sociales sobre las nociones de política, partidos políticos y la sociedad civil bajo el impacto de la crisis social venezolana (notas para su discusión)" en 2001: *Revista Espacio Abierto*. Vol. 10 No.2. Maracaibo.

Avritzer, Leonardo (2002). *Democracy and the Public Space in Latin America*. Princeton University Press.

Bachrach, Peter y Baratz, Morton (1962). *Two Faces of Power*. *The American Political Science Review*, Volume 56, Issue 4. 947-952.

Baptista, Arsdrúbal (1997). *Teoría económica del capitalismo rentístico. Economía, petróleo y renta*. IESA. Caracas.

--(1997a). *Bases cuantitativas de la economía venezolana, 1830-1995*. Fundacion Polar. Caracas.

--(2001). *Un buen número = una buena palabra* en 2001: "Venezuela siglo XX: Visiones y testimonios". Libro 2. Fundación Polar. Caracas.

Bauman, Zigmunt [1999](2001). *En busca de la política*. FCE. Buenos Aires.

Berdegúe, Julio y Schejtman, Alexander (2008). "La desigualdad y la pobreza como desafíos para el desarrollo territorial rural" en 2008: *Revista Española de Estudios Agrosociales y Pesqueros. Revista Española de Economía Rural*. No. 218. MARM. Madrid.

Betancourt, Rómulo (1937). "Tendencias parasitarias del capital nacional. Parte I". Diario Ahora. 24 de Julio, en: *Sala Virtual de Investigación Rómulo Betancourt*. CIC-UCAB. <http://saber.ucab.edu.ve/bitstream/handle/123456789/45052/rb008519370724.pdf?sequence=2>

Betancourt, Rómulo (1976). *El petróleo en Venezuela*. FCE. Archivo del Fondo 61-62. México DF.

Bethell, Leslie (2000). *Historia de América Latina. De 1870 a 1930*. Editorial CRITICA. Barcelona.

Biardeau, Javier (2009). "Del árbol de las tres raíces al 'socialismo bolivariano del siglo XXI'. ¿Una nueva narrativa de emancipación?" en 2009: *Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales*. Enero-Abril 1/2009. Vol 15, No. 1. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela. Caracas.

Bobrow, Davis B. (2008). "Social and Cultural Factors: Constraining and Enabling" en Moran, Rein y Goodin (eds.), 2008: *The Oxford Handbook of Public Policy*. Oxford University Press. Oxford.

Bonnet, Alberto (2007). "Imperio, poder y Estado. Los recientes aportes de Negri y Holloway" en Thwaites Rey, Mabel, 2007: *Estado y Marxismo. Un Siglo de Debates*. Prometeo Libros. Buenos Aires.

Bonnet, Douglas (1977). "Defining Ideology: The Danger of Methodological Deformation" en 1997: *Terms of Conflict. Ideology in Latin American Policies*. Stuart Hills. México DF, NY.

Boué, Juan Carlos (1993). *Venezuela. The Political Economy of Oil*. Oxford Institute for Energy Studies. Oxford University Press. Bath.

Bracho, Frank (1998). *Petróleo y globalización ¿Salvación o perdición?. Reflexiones a las puertas del nuevo milenio para una nueva civilización*. Vadell Hermanos. Caracas.

Bressano, Clara y Freibrun, Nicolás (2007). "El itinerario de Althusser: La ruptura como creación" en Thwaites Rey, Mabel, 2007: *Estado y Marxismo. Un Siglo de Debates*. Prometeo Libros. Buenos Aires.

Brito Figueroa, Federico (1972). *Historia económica y social de Venezuela*. Guairas. Editorial de Ciencias Sociales. La Habana.

-- (1994). *Tiempo de Ezequiel Zamora*. Ediciones de la UCV. Biblioteca Familia. Biografía. Caracas.

Caballero, Manuel (1993). *Gómez, el tirano liberal : vida y muerte del siglo XIX*. Monte Ávila. Banco de Maracaibo. Caracas.

Cadenas, José María (2011). "Diez años de polarización política en Venezuela" en Ramos Pismataro, Romero y Ramírez Arcos (edit. académicos) en 2011: *Hugo Chávez: una década en el poder*. CEPI. OV. Universidad del Rosario. Editorial Universidad del Rosario. Bogotá.

Camero, Ysrrael (2000). "El octubrismo" en *La Bitblioteca*. www.analitica.com/bitblioteca/ycarrero. Caracas.

Campo-Redondo, María Susana; Andrade, Gabriel y Andrade, Jesús (2007). "La matricentralidad de la familia venezolana desde una perspectiva histórica" en 2007: *Frónesis* V.14, No. 2. Agosto. Universidad del Zulia. Caracas.

Carmona, Andrés (2001). "Venezuela: Seguridad Alimentaria Comprometida" en 2001: *Revista SIC*. No 633. Abril. Caracas.

Carrillo, José Ernesto (2007). "La genealogía del Estado en Marx" en Thwaites, Mabel, 2007: *Estado y marxismo. Un siglo y medio de debates*. Prometeo Libros. Buenos Aires.

Carrillo Cano, Antonio y Francés García, Francisco (2008). *Guía metodológica de los presupuestos participativos*. Colectivo PREPARACIÓN www.presupuestosparticipativos.com. Alicante.

Carrera Damas, Germán (1981). "Juan Vicente Gómez: La evasora personalidad de un dictador" en 1981: *Revista Crítica & Utopía*. No. 5. Escenarios alternativos. www.bibliotecavirtual.clacso.org.ar

-- (1983). *Cirios para Gómez* . "Jornadas de Historia Crítica". Caracas.

-- (1986). *Venezuela: proyecto nacional y poder social*. Edit. Crítica. Grupo Editorial Grijalbo. Barcelona.

Cartay, Rafael (1998). "La filosofía del régimen perezjimenista: El Nuevo Ideal Nacional" en 1998: *Economía*. No. 14. Pp. 1-18. ULA. Mérida.

Castoriadis, Cornelius (2000). *La exigencia revolucionaria*. Acuarela Libros. Madrid.

Castro Aniyar, Daniel (1996). *El entendimiento*. Ediciones Casa de las Américas. La Habana-Bogotá.

-- (2000). "Hugo Chávez: Una descripción antropológica de lo contemporáneo" en 2000: *Espacio Abierto*. Vol.9. No.1. Ene-Mar. Maracaibo.

-- (2007). "Territorialización simbólica del centro de Maracaibo. I parte" en 2007: *Portafolio*. No. 6. FAD- LUZ. Maracaibo.

Chumaceiro Arreaza, Irma (2011). "El discurso de Hugo Chávez. Del poder de la seducción a la confrontación como estrategia" en Ramos Pismataro, Romero y Ramírez Arcos (edit. académicos), 2011: *Hugo Chávez: una década en el poder*. CEPI. OV. Universidad del Rosario. Editorial Universidad del Rosario. Bogotá.

CIDOB (2010). *Carlos Andrés Pérez Rodríguez*. Centro de Estudios y Documentación Internacionales de Barcelona. <http://www.cidob.org>

Coronil, Fernando (1997). *The Magical State. Nation, Money and Modernity in Venezuela*. The University of Chicago Press.

-- (2007). "El estado de América Latina y sus Estados. Siete piezas para un rompecabezas por armar en tiempos de izquierda" en 2007: *NUEVA SOCIEDAD*. No 210, julio-agosto. Santiago de Chile.

-- (2008). "Chávez's Venezuela. A New Magical State?" en 2008: *ReVista. Harvard Review of Latin America*. Volume VIII, Number 1. Cambridge.

-- (2008). "*It's the Oil, Stupid!!!*" en 2008: *ReVista. Harvard Review of Latin America*. Volume VIII, Number 1. Cambridge.

Coronil, Fernando y Skurski, Julie (2006). *States of Violence*. The University of Michigan Press.

Crazut, Ramón (2006). *La Siembra del Petróleo como Postulado Fundamental de la Política Económica Venezolana: Esfuerzos, Experiencias y Frustraciones*. UCV-BCV-CDCH. Caracas.

Criado de Diego, Marcos (2009). "Democracia y derechos participativos: elementos de ruptura con la democracia liberal" en 2009: *Estudios sobre la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela X Aniversario*. Procuraduría General de la República. Editorial Latina. Caracas.

Dahl, Robert [1971](1974). *La poliarquía*. Guadiana de Publicaciones. Madrid.

-- (2002). *La democracia económica*. University of California Press. Edit. Hacer. Barcelona.

D'Elia, Yolanda, coord. (2006). *Las Misiones Sociales en Venezuela: una aproximación a su comprensión y análisis*. CDB publicaciones, Ildis. Caracas. <http://www.venescopio.org.ve/docs/misiones1.pdf>

D'Elia, Yolanda y Cabezas, Luis Francisco (2008). *Las Misiones Sociales en Venezuela*. ILDIS-CONVITE AC. Caracas.

D'Elia, Yolanda y Maingon, Thais (2011). "Balance de lo social en las prácticas del gobierno bolivariano" en Ramos Pismataro, Romero y Ramírez Arcos (edit. académicos), 2011: *Hugo Chávez: una década en el poder*. CEPI. OV. Universidad del Rosario. Editorial Universidad del Rosario. Bogotá.

De Kostka Fernández, Estanislao (2009). "Políticas Públicas". En Reyes, Román, 2009: *Diccionario Crítico de Ciencias Sociales*. Universidad Complutense de Madrid. http://www.ucm.es/info/eurotheo/diccionario/P/politicas_publicas_b.htm

De Cabo de la Vela, Antonio (2012). *Nuevo constitucionalismo latinoamericano. El caso venezolano*. Conferencia. "Jornada de lucha por la educación pública y gratuita". UNAM. México.

De La Pradelle, Michèle (2007). "La ciudad de los antropólogos" en 2007: *Revista Cultura Urbana*. No. 4. Abril. http://cultura-urbana.cl/pdf/la_ciudad_de_los_antropologos.pdf

Del Campo, Esther (2009). "Descentralización, políticas sociales y participación en los gobiernos locales: ¿qué hemos aprendido?" en 2009: *Observatorio Social*. No. 25. Diciembre. Buenos Aires.

Díaz de Rada, Angel y Cruces, Francisco (1996). *La ciudad emergente. Transformaciones urbanas, campo político y campo asociativo en un contexto local*. UNED. Madrid.

Díaz Polanco, Jorge (2008). *Salud y hegemonía en Venezuela: Barrio Adentro, continente afuera*. CENDES-UCV. Caracas.

Dilliard, Dudley (1973). *La teoría económica de John Maynard Keynes*. Aguilar. Madrid.

Drèze, Jean y Sen, Amartya (2011)[1994]. *India Development and Participation*. Oxford India paperbacks. 9th Impression. Oxford University Press. New Delhi.

Dror, Yehezkel (1970). "Prolegomena to Policy Sciences" en *Policy Sciences* Num. 1, en Aguilar, Luis, 2007: *El estudio de la Políticas Públicas*. Miguel Angel Porrúa. México.

Ducrot, Oswald (1998). *Dire et ne pas dire. Principes de sémantique linguistique*. Hermann edit.. 3^{ra} edición. Paris.

Duncan Barreto, Silvio y Markoff, John (2006). "Civilization and Barbarism: Cattle Fronteers" en 2006: *States of Violence*. The University of Michigan Press.

El-Troudi, Haiman y Monedero, Juan Carlos (2006). *Empresas de Producción Social. Instrumento para el Socialismo del Siglo XXI*. 2a Edición. Centro Internacional Miranda. Caracas.

España, Luis Pedro (1989). *Democracia y renta petrolera*. UCAB-IIES. Caracas.

-- (1997). "Dos Décadas de Empobrecimiento en Venezuela" en 1997: *Revista SIC*. No. 600. Diciembre. Caracas.

Espíndola, León, Martínez y Schejtman (2004). *Pobreza, hambre y seguridad alimentaria en Centroamérica y Panamá*. Serie Políticas Sociales. División de Desarrollo Social. CEPAL, WFP. Publicaciones de las Naciones Unidas. Santiago de Chile.

Feldman, Allen (2006). "Violence and Vision. The Prosthetics and Aesthetics of Terror" en 2006: *States of Violence*. The University of Michigan Press.

Fine, Ben y Saad-Filho, Afredo (2004). *The Marx's Capital*. Fourth Edition. Pluto Press. London.

Figuerola Pedraza, Dixis (2005). "Medición de la seguridad alimentaria y nutricional" en 2005: *Revista de salud pública y Nutrición (RESPYN)*. Vol. 6. No 2. Abril-Junio. <http://www.respyn.uanl.mx/vi/2/ensayos/MedicionSAyN.htm>

Flinders, Mathews (2006). "Public/Private: The Boundaries of the State" en Hay, Lister and Marsh, 2006: *The State. Theories and Issues*. Palgrave Macmillan. Political Analysis. Hampshire.

Flores, Cilia (2009). "Aportes para una historia de la Asamblea Nacional Constituyente de 1999" en 2009: *Estudios sobre la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela X Aniversario*. Procuraduría General de la República. Editorial Latina. Caracas.

Frantz Fanon [1961] (1963). *Los condenados de la tierra*. Fondo de Cultura Económica. México, D.F.

Frank Gunder, André (1967). *Capitalismo y subdesarrollo en América Latina*. <http://www.eumed.net/cursecon/textos/Frank/index.htm>

Follari, Roberto (2011). "Alternativas neo-populistas en América Latina". Entrevista hecha por Fernández Farías, Marcelo, 2011: *Utopía y Praxis Latinoamericana*. Año 16. No. 52. CESA-FCES-LUZ. Maracaibo.

Foucault, Michel (2005). *Las palabras y las cosas. Una arqueología de las ciencias humanas*. Siglo XXI. Buenos Aires, Coyoacán.

Foucault, Michel (2008). *La verdad y las formas jurídicas*. Editorial Gedisa. Serie "Cla.De.Ma". Buenos Aires.

Fukuyama, Francis (1992). *The End of History and Last Man*. Avon Books. New York.

Fung, Archon (2008). "Democratizing the Policy Process" en Moran, M.; Rein, M y Goodin, R., 2008: *The Oxford Handbook of Public Policy*. Oxford University Press. Oxford, New York.

García, Antonio (1985). *Modelos operacionales de reforma agraria y desarrollo rural en América Latina*. IICA. San José.

García Canclini, Nestor (1985). "¿Modernidad sin modernización?". *Revista Mexicana de Sociología*. Tomo L. No 2. México DF

-- (1994). *Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad*. Grijalbo. México.

García Larralde, Humberto (2005). "La renta petrolera y la estrategia de desarrollo en Venezuela" en 2005: *Nueva Economía*. Año XIV. No.24. Academia Nacional de Ciencias. Caracas.

García Linera, Alvaro; Prada, Raúl; Tapia, Luis; Vega Camacho, Oscar (2010). *El Estado. Campo de lucha*. Clacso, Muela del Diablo, Comuna. La Paz.

Garcidiego, Javier (2010). *Textos de la revolución mexicana*. Fundación Biblioteca Ayacucho. Colección clásica No. 247. Caracas.

Garrido, Oswaldo y Montilla, Maxcelia (1999). *La idea de generalidad ilusoria en el fenómeno Chávez: las elecciones nacionales y regionales de 1998*. Tesis de Grado. Escuela de Sociología. Universidad del Zulia. Maracaibo.

Geertz, Clifford (1995). *La interpretación de las culturas*. Editorial Gedisa. VI Edición. Barcelona.

Gómez, Rodolfo (2007). "Las miradas de Habermas y Offe sobre el Estado benefactor" en Thwaites, Mabel, 2007: *Estado y marxismo. Un siglo y medio de debates*. Prometeo Libros. Buenos Aires.

Gómez Calcaño, Luis y López Maya, Margarita (1990). *El tejido de Penélope : la reforma del Estado en Venezuela (1984-1988)*. CENDES. APUCV-IPP, Caracas.

González Oquendo, Luis (2007). *La teoría de sistemas sociales de Niklas Luhman*. Ediciones del Vicerrectorado Académico. LUZ. Maracaibo.

Gutiérrez Alvarado, Gladys María (2009). "Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 10 años de revolución constitucional" en 2009: *Estudios sobre la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela X aniversario*. Procuraduría General de la República. Editorial Latina. Caracas.

Gutiérrez, Eduardo y Albarracín, Daniel (2008). *Financiarización y economía real: perspectivas para una crisis civilizatoria*. Viento Sur. <http://www.vientosur.info/documentos/Financiarizacion.pdf>

El-Troudi, Haiman y Monedero, Juan Carlos (2006). *Empresas de Producción Social. Instrumento para el socialismo del siglo XXI*. Ediciones Centro Internacional Miranda. 2a. Edición. Caracas.

Harnecker, Marta (2010). "Apuntes para un socialismo distinto, popular y democrático" en Lang, Miriam y Santillana, Alejandra, comps., 2010: *Democracia Participación y Socialismo. Bolivia-Ecuador-Venezuela*. Fundación Rosa Luxemburg. Quito.

Harris, Marvin (2001) [1979]. *Cultural Materialism: The Struggle for a Science of Culture*. Random House. New York.

Harris, Marvin (2004)[1984]. *La cultura norteamericana contemporánea. Una visión antropológica*. Alianza Editorial. Madrid.

Hay, Lister and Marsh (2006). *The State. Theories and Issues*. Palgrave Macmillan. Political Analysis. Hampshire.

Hellinger, Daniel (2002). *Nationalism, Globalization and Chavismo*. Jornadas Visión de Venezuela. Junio 13-14. Universidad de Zulia. Maracaibo.

Hernández, Juan Luis (2009). "Evolución y resultados del sector agroalimentario en la V República" en 2009: *Cuadernos del CENDES*, 26, 72, S. 67-100.

-- (2010). "La agricultura en Venezuela" en 2010: *Temas de Formación Sociopolítica*. Caracas.

Hindmoor, Andrew (2006). "Public Choice" en Hay, Lister and Marsh, 2006: *The State. Theories and Issues*. Palgrave Macmillan. Political Analysis. Hampshire.

Hinkelammert, Franz (1999). *El cálculo de utilidad y la creación del infierno en la tierra*. www.una.ac.cr/ambi/Ambien-Tico/99/hinkel.htm

Hinkelammert, Franz (2004). "Plenitud y escasez: Quien no quiere el Cielo en la tierra produce el infierno" en 2004: *Polis. Revista de la Universidad Bolivariana*. Año 3 Vol 3. Número 008. Universidad Bolivariana. Santiago de Chile.

Hirschman, Albert O. (1986). *Interés privado y acción pública*. FCE. México.

Howlett, Michael; Ramaesh, M y Perl, Anthony (2009). *Studying Public Policy. Policy Cycles & Policy Subsystems*. Oxford University Press. Ontario.

Huertas Vargas, Nelson (2011). *Formas y alcances de la financiarización en el sector financiero colombiano e incidencia sobre una muestra de empresas nacionales en el período 1996 – 2006*. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad Nacional de Colombia. <http://www.bdigital.unal.edu.co/5127/3/NFHuertas%7D.pdf>. Bogotá.

Huntington, Samuel Phillips (1997). *El choque de civilizaciones y la reconfiguración del orden mundial*. Paidós. Barcelona.

Ibarra, Pedro (2005). *Manual de sociedad civil y movimientos sociales*. Síntesis. Ciencias Políticas. Madrid.

Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (2004). *Más que alimentos en la mesa: la real contribución de la agricultura en la economía*. IICA. Caracas.

Jácome, Francine (2011). “La sociedad civil en el marco de la Revolución Bolivariana y del Socialismo del siglo XXI (1999-2009)” en Ramos Pismataro, Romero y Ramírez Arcos (edit. académicos), 2011: *Hugo Chávez: una década en el poder*. CEPI. OV. Universidad del Rosario. Editorial Universidad del Rosario. Bogotá.

Jessop, Robert (1982). *Orden social, reforma y revolución*. Edit Tecnos. Madrid.

-- [2003](2008). *El futuro del Estado capitalista*. Los Libros de la Catarata. Madrid.

-- (2008a). *State Power. A Strategic-Relational Approach*. Polity. Cambridge, Malden.

Jurado Toro, Bernardo (1980). *Bolívar y el mar*. Edición del Banco Central de Venezuela. Caracas.

Kaiser, Gunter (1988). *Introducción a la criminología*. Dykinson. Madrid.

Karl, Terry Lynn (1997). *The Paradox of Plenty. Oil Booms and Petro-States*. University of California Press. Berkeley, London.

Kay, Cristóbal (1998). *Latin America's agrarian reform: lights and shadows*. FAO Document Repository. Economic and Social Development Department. <http://www.fao.org/docrep/x1372t/x1372t02.htm>

Keynes, John Maynard (1939). "The Income and Fiscal Potential of Great Britain" en 1939: *The Economic Journal*. Diciembre. Vol. XLIX, Num. 196.

Keynes, John Maynard (2010) [1936]. *Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero*. Sección de Obras de Economía. Fondo de Cultura Económica. México.

Kolakowsky, Lester y Hampshire, Stuart (1976). *El mito de la autoidentidad humana. La unidad de la sociedad civil y la sociedad política*. Universidad de Valencia. Departamento de Lógica y Filosofía de la Ciencia. Valencia.

Kozloff, Nicolás (2008). *Revolution!. South America and the Rise of the New Left*. Palgrave Mac Millan. NewYork.

Lacaste, J. Ignacio (1981). *Revolución socialista e ideario en Gramsci*. Edit. Revolución. Madrid.

Laclau, Ernesto (2009). "Populismo: ¿qué nos dice el nombre?" en Panizza, Francisco (comp.), 2009: *El populismo como espejo de la Democracia*. FCE. Buenos Aires.

Lander, L. Edgardo y López Maya, Margarita (1999). "Venezuela. La victoria de Chávez. El polo patriótico en las elecciones de 1998" en 1999: *Nueva Sociedad* No 160, julio-agosto. Santiago de Chile.

Laws, David y Hajer, Marteen (2008). "Policy in practice" en Moran, Rein y Goodin edits., 2008: *The Oxford Handbook of Public Policy*. Oxford University Press. Oxford.

La Torres, Carlos (2010). "Populismo y Democracia" en *Cuadernos del CENDES*. Año 27. No. 73. Caracas.

López Maya, Margarita (2009). "Economía rentista petrolera y socialismo" en López Maya, Margarita, edit., 2009: *Ideas para debatir en socialismo del siglo XXI*. Vol II. Colección Hogueras. Editorial Alfa. Caracas.

López Portillo, Felicitas (1986). *El perezjimenismo: génesis de las dictaduras desarrollistas*. Nuestra América. UNAM. México DF.

López Vigil, José Ignacio (2006). *Golpe de radio. Los tres días que transmitimos peligrosamente*. ALER. Editorial Venezolana CA. Mérida.

Lowi, Theodore J. (1964) "American Business, Public Policy, Case-Studies, and Political Theory" en *World Politics*, XVI. Pp 677-715. en Aguilar Villanueva, Luis, 2007: *La hechura de las políticas*. Edic. Miguel Angel Porrúa. México DF.

Lyotard, Jean François (1979). *La Condition Postmoderne*. Edit. Minuit. Paris.

Machado de Acedo, Clemy (2011). "Aspectos sociales de la política social" en Ramos Pismataro, Romero y Ramírez Arcos, edits. académicos, 2011: *Hugo Chávez: una década en el poder*. CEPI. OV. Universidad del Rosario. Editorial Universidad del Rosario. Bogotá.

Machado, Jesús (2008). *Estudio de los consejos comunales en Venezuela*. Coordinador General Observatorio de participación y convivencia Social de Venezuela. Fundación Centro Gumilla. <http://gumilla.org/files/documents/Estudio-Consejos-Comunales01.pdf>

Madueño, Luis (2008). "Despolitización de la política o nuevo estatus de la política: política reflexiva" en 2008: *Sociología política de la cultura*. SABER ULA. CIPCOM. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. ULA. Mérida.

Majone, Giandomenico (1998). *Evidencia, argumentación y persuasión en la formulación de políticas*. Fondo de Cultura Económica. México.

Majone, Giandomenico (2008). "Agenda setting" en Moran, Rein y Goodin, edits., 2008: *The Oxford Handbook of Public Policy*. Oxford University Press. Oxford.

Malamud, Carlos (1999). *América Latina, siglo XX. La búsqueda de la democracia*. Editorial Síntesis SA. Madrid.

Malavé Mata, Héctor (2005). "Los espejismos de la riqueza petrolera o la falsificación del crecimiento (1999-2005)" en 2005: *Revista Nueva Economía*. Año XIV. No. 24. Octubre. Caracas.

Malavé Mata, Héctor (1980). *Formación histórica del antidesarrollo en Venezuela*. Liceduka Libros. Bogotá.

Maldonado Trujillo, Claudia (2000). "Reseña de Making Democracy Work. Civic Traditions in Modern Italy de Robert Putnam" en *Estudios Sociológicos*. Septiembre/Diciembre, año/vol XVIII, número 003. El Colegio de México. México DF.

Malinowitz, Stanley Simon (2008). *La financiarización: algunos puntos para el debate en América Latina*. Memorias del IV Coloquio. Sociedad Latinoamericana de Economía Política y Pensamiento Crítico (SEPLA). Buenos Aires.

Malinowitz, Stanley Simon (2010). *Geopolítica de la alimentación*. Entrevista en la Radio de la Universidad Nacional de Colombia. 17 de Junio. www.unradio.unal.edu.co

Margulis, Julia. 2010. *Rolling the Wheel of Development Forward*. <http://www.weitz-center.org/articles-on-development.html>

Mariátegui, José Carlos (2006). *Literatura y estética*. Fundación Biblioteca Ayacucho. Colección Claves de América. Caracas.

Mariátegui, José Carlos (2007). *7 ensayos de interpretación de la realidad peruana*. Fundación Biblioteca Ayacucho. Colección Claves de América. Caracas.

Maringoni, Gilberto (2011). “¿Cuál es el tipo de liderazgo de Chávez?” en Ramos Pismataro, Romero y Ramírez Arcos, edits. académicos, 2011: *Hugo Chávez: una década en el poder*. CEPI. OV. Universidad del Rosario. Editorial Universidad del Rosario. Bogotá.

Márquez, Gustavo (1993). *Gasto público y distribución del ingreso en Venezuela*. IESA. Caracas.

Martín-Baró, Ignacio (2003). *Poder, ideología y violencia*. Edit. Trotta. Madrid.

Martínez, Miguel (1992). *La investigación cualitativa etnográfica en educación. Manual teórico-práctico*. 2a. Edición. Edit Trillas. Caracas.

Marx, Carlos [1867] (1991). *Capital. A Critique of Political Economy*. Tomo III. Penguin Books/New Left Review. London.

Mauss, Marcel (1967). *Introducción a la etnografía*. Colección Fundamentos 13. Ediciones Istmo. Madrid.

Melcher, Dorothea (2008). “Cooperativismo en Venezuela: teoría y praxis” en 2008: *Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales*. Vol 14. No. 1. Caracas.

Mendoza Potellá, Carlos (1995). *El poder petrolero y la economía venezolana*. UCV CDCH. Caracas.

Mendoza Potellá, Carlos (2000). *Crítica petrolera contemporánea. Crónicas disidentes sobre la apertura petrolera y el poder petrolero (1996-1999)*. FACES. UCV. Caracas.

Mieres, Francisco (1976). "Introducción" en Pérez Alfonzo, Juan Pablo, 1976: *Hundiéndonos en el excremento del diablo*. Editorial Lisbona. Publicaciones españolas. Caracas.

-- (2010). *El petróleo y la problemática estructural venezolana*. Colección Venezuela y su Petróleo. Ediciones BCV. Caracas.

Mignolo, Walter D. (2003) [2000]. *Historias locales/diseños globales. colonialidad, conocimientos subalternos y pensamiento fronterizo*. Ediciones Akal. Madrid.

Ministerio de Agricultura y Cría, Instituto Agrario Nacional, Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, Organización de Estados Americanos (1995). "La evaluación de la reforma agraria venezolana" en 1995: *Revista AGROALIMENTARIA* No 1. Septiembre. ULA. Mérida.

Molina, José Enrique y Álvarez Díaz, Ángel (2004). *Los partidos políticos venezolanos en el siglo XXI*. Melvin C. A. Caracas.

Molina, José E. y Pérez V, Carmen B (2004). "Radical Change at the Ballot Box: Causes and Consequences of Electoral Behavior in Venezuela's 2000 Elections" en 2004: *Latin American Politics & Society* 46.1 103-134. University of Miami. Miami.

Mommer, Bernard y Baptista, Asdrúbal (1992). *El pensamiento petrolero venezolano: un ensayo*. Ediciones IESA. Caracas.

Mommer, Bernard (1990). "La distribución de la renta petrolera. El desarrollo del capitalismo rentístico venezolano" en Valecillos, Héctor y Bello, Omar (comps.), 1990: *La economía contemporánea de Venezuela. Ensayos escogidos*. Tomo I. Ediciones del 50 Aniversario. BCV.

-- (2002). *Global Oil and Nation State*. Oxford Institute for Energy Studies. Oxford University Press. New York.

Monedero, Juan Carlos (2007). "En donde está el peligro... La crisis de la representación y la construcción de alternativas en América Latina" en 2007: *Cuadernos del CENDES* 24. N° 64. Tercera Época. ENERO-

ABRIL. Caracas.

-- (2008a). *Disfraces de leviatán. El papel del Estado en la globalización neoliberal*. Centro Internacional Miranda. Caracas.

-- (2008b). "El Estado moderno como relación social: La recuperación de un concepto politológico del Estado" en Jessop, Robert, 2008: *El futuro del Estado capitalista*. Los Libros de la Catarata. Madrid.

-- (2009). *El gobierno de las palabras*. FCE. Madrid.

-- (2009 a). "La economía social en Venezuela: entre la voluntad y la posibilidad" en 2009: *Otra Economía. Revista Latinoamericana de Economía Social y Solidaria*. Vol. 3. No. 5. <http://www.unisinos.br/revistas/index.php/otraeconomia/article/view/1155/319>

-- (2010). "Venezuela bolivariana: reinención del presente y persistencia del pasado" en 2010: *Temas y Debates* 20. Octubre. <http://www.temasydebates.com/tyd20/Monedero.pdf>

Mora Esparza, José Luis (2007). *La economía comunal*. Edición electrónica gratuita. Texto completo en www.eumed.net/libros/2007c/335/

Moreno Olmedo, Alejandro (2008). *El aro y la trama. Episteme, modernidad y pueblo*. CONVIVIUM PRESS. Caracas.

Morgan, Lewis Henry (2005) [1877]. *Ancient Society of Research in the Lines of Human Progress from Savagery through Barbarium to Civilization*. Elibron Classic Series.

Mouffe, Chantal (1999). *El retorno de lo político*. Paidós. Madrid.

Moyo, Dambisa (2009). *Dead Aid. Why Aid Is not Working and How There Is a Better Way for Africa*. Farrar, Strauss and Giroux. New York.

Navarro, Pablo (1996). *La metáfora del holograma social* <http://www.netcom.es/pnavarro/home.html>

Navarro, Vincenç, Torres López, Juan y Garzón Espinosa, Alberto (2011). *Hay alternativas. Propuestas para crear empleo y bienestar social en España*. Sequitur ATTAC España. Madrid

Nova González, Armando (2010). "La cadena agro comercializadora en

el sector agropecuario (partes I, II y III)” en 2010: *Cuba Siglo XXI*.
Octubre. Numero C.
<http://www.nodo50.org/cubasisgloXXI/economia.htm>

Obuchi, Abadi y Lira; Richard, Anabella y Bárbara (2011). *Gestión en rojo. Evaluación de desempeño de 16 empresas estatales y resultados generales del modelo productivo socialista*. Ediciones IESA. Caracas.

Ocampo, José Antonio (2001). “Raúl Prebisch and the Development Agenda at the Dawn of the 21th Century” en 2001: *C E P A L Review*. No. 75. December.

O'Donnell, Guillermo (1997). “Rendición de cuentas horizontal y nuevas poliarquías” en 1997: *Revista Nueva Sociedad*. Nro. 152. Noviembre-Diciembre. pp. 143-167.

-- (2009). *El Estado burocrático autoritario 1966-1973. Triunfos derrotas y crisis*. Prometeo libros. Buenos Aires.

Ortega y Gasset, José (1967). “La Historia como sistema” en *Obras completas*. Tomo VI. Edit Aguilera. Barcelona.

-- [1937](1967). “La rebelión de las masas” en *Obras completas*. Tomo IV. Edit Aguilera. Barcelona.

Ouviña, Hernán (2007). “Lenin y la revolución permanente contra el Estado. El problema de la transición al comunismo” en Thwaites, Mabel, 2007: *Estado y marxismo. Un siglo y medio de debates*. Prometeo Libros. Buenos Aires.

Palacios Romeo, Francisco (1999). *La civilización de choque. Hegemonía occidental, modernización y Estado periférico*. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Madrid.

Panizza, Francisco (2009). “Introducción. El populismo como espejo de la Democracia” en Panizza, Francisco, comp., 2009: *El populismo como espejo de la Democracia*. FCE. Buenos Aires.

Pérez Alfonzo, Juan Pablo (1976). *Hundiéndonos en el excremento del diablo*. Editorial Lisbona. Publicaciones españolas. Caracas.

Pérez Castillo, Juan Pablo (2006). *Precios y divisas petroleras, dependencia del petróleo, Hugo Chávez y Juan Pablo Pérez Alfonzo*. Venezuela Analítica. www.analitica.com

Peters y Pierre, B. Guy y Jon (2006). "Governance, Government and the State" en Hay, Lister and Marsh, 2006: *The State. Theories and Issues*. Palgrave Macmillan. Political Analysis. Hampshire.

Pisarello, Gerardo (2009). "El nuevo constitucionalismo latinoamericano y la constitución venezolana de 1999: balance de una década" en *Sin Permiso*.
<http://www.sinpermiso.info/sumarios/?numerosp=06#>

Portantiero, Juan Carlos e Ipola, Emilio (1988). "Lo nacional popular y los populismos realmente existentes" en Portantiero e Ipola, 1988: *El Estado periférico latinoamericano*. Editorial Universitaria de Buenos Aires. Buenos Aires.

Prebisch, Raúl (1981). *Capitalismo periférico, crisis y transformación*. FCE. México DF. <http://168.96.200.17/gsd/cgi-bin/library?a=p&p=home&l=es&w=utf-8>

Puccinelli Orlandi, Eni. (1993). *As formas do silêncio. No movimento dos sentidos*. Unicamp. 2a Edición. Campinas.

Puente, Raquel y López Sabina (2008). *Mercado de alimentos (MERCAL)*. Ediciones IESA. Caracas. En http://servicios.iesa.edu.ve/portal/CasosDocentes/Mercado_alimentos.pdf

Purroy, Ignacio M. (1980). "La peor dependencia: los alimentos" en 1980: *Revista SIC*. Caracas.

Putnam, Robert (2011). *Para que la democracia funcione. Las tradiciones cívicas en la Italia moderna*. Centro de Investigaciones Sociológicas. Cyan. Madrid.

Quintero, Rodolfo (1972). *Antropología del petróleo*. Siglo XXI. México.

-- (1985). *La cultura del petróleo*. UCV. FCES. División de publicaciones. Caracas.

Quijano, Aníbal (2007). "José Carlos Mariátegui. Reencuentro y debate" en Mariátegui, 2007: *7 ensayos de interpretación de la realidad peruana*. Fundación Biblioteca Ayacucho. Colección Claves de América. Caracas.

Ramos Mejías, José Manuel; García, Juan y Basadre, Jorge (2009). *Antecedentes de la historia social latinoamericana*. Fundación Biblioteca Ayacucho. Colección clásica No.240. Caracas.

Ritzer, George y Goodman, Douglas (2004). *Classical Sociological Theory*. McGraw Hill. Varias Ciudades.

Rivero, Ramón (1979). *El imperialismo petrolero y la revolución venezolana. La OPEP y las nacionalizaciones: la renta absoluta*. Tomo 3. Fondo Editorial Salvador de la Plaza. Caracas.

Rodríguez Araque (2002). "Forewords" en Mommer, Bernard, 2002: *Global Oil and Nation State*. Oxford Institute for Energy Studies. Oxford University Press. New York.

Rodríguez Araque, Alí y Müller Rojas, Alberto (2009). "Ideas socioeconómicas y políticas para debatir el socialismo venezolano" en López Maya, Margarita (edit.), 2009: *Ideas para debatir el socialismo del siglo XXI*. Vol II. Colección Hogueras. Editorial Alfa. Caracas.

Rodríguez, Miguel (2004). "¿Hemos perdido el tren del desarrollo?. El impacto de la política económica en el proceso de desarrollo venezolano" en 2004: *Revista Conciencia Activa*. No. 5. Julio. Caracas.

Rubinstein, Juan Carlos (1988). *El Estado periférico latinoamericano*. Editorial Universitaria de Buenos Aires. Buenos Aires.

Ruiz Olabuénaga, José Ignacio (2009). *Metodología de la investigación cualitativa*. Universidad de Deusto. Bilbao.

Salcedo Bastardo, José Luis (1977). *Historia fundamental de Venezuela*. Venezuela-Fundación Gran Mariscal de Ayacucho. Caracas.

Sandbrook, Richard; Edelman, Marc; Heller, Patrick y Teichman, Judith (2007). *Social Democracy in the Global Periphery. Origins, Challenges, Prospects*. Cambridge University Press. Cambridge.

Santos, Boaventura de Sousa (2008). *Pensar el Estado y la sociedad: desafíos actuales*. Clacso, CIDES-UMSA, Muela del Diablo, Comuna. La Paz.

-- (2008 a). *Reinventar la democracia, reinventar el Estado*. Sequitur. Buenos Aires, Ciudad de México, Madrid.

-- (2009). *Una epistemología del Sur: la reinención del conocimiento y la emancipación social*. CLACSO-Siglo XXI. Capuchinas.

-- (2011). *El milenio huérfano. Ensayos para una nueva cultura política*. Editorial Trotta/Ilsa. Madrid.

Sefton, Tom (2008). "Distributive and Redistributive Policy" en Moran, M.; Rein, M y Goodin, R., 2008: *The Oxford Handbook of Public Policy*. Oxford University Press. Oxford, New York.

Schejtman, Alexander (1999). "Las dimensiones urbanas en el desarrollo rural" en 1999: *Revista de la CEPAL*. No. 67. Abril. Santiago de Chile.

Schwartz, Jorge y Sosnowsky, Saúl (1994). *Brasil: o trânsito da memória*. Editora da Universidade de São Paulo. São Paulo.

Shweder, Richard (1989). "Anthropology's romantic rebellion against the enlightenment or there's more to thinkng than reason and evidence" en 1984: *Cultural Theory. Essays on Mind, Self and Emotion*. Cambridge University Press. Cambridge, New York, Port Chester, Melbourne, Sidney.

SIC (1976). *Crisis de alimentos como arma política*. Editorial. <http://gumilla.org/?p=page&id=1217972416>

Siso Martínez, José Manuel. *Historia de Venezuela*. Yokoima. 3a Edición. Mexico DF.

Sosa Barajas, Sergio W. (2002). "Hacia una Macroeconomía para las Sociedades Periféricas" en 2002: *Aportes: Revista de la Facultad de Economía-BUAP*. Año VIII Núm. 22.

Sottoli, Susana (2000). "La política social en América Latina bajo el signo de la economía de mercado y la democracia" en 2000: *European Review of Latin American and Caribbean Studies*. No. 68, Abril. Amsterdam.

Tapia Maruri, Joaquín (2009). "Efectos nominales y reales de la incertidumbre en los precios del petróleo" en 2009: *Comercio Exterior*. Vol 59. No. 3. Marzo.

Thwaites Rey, Mabel (comp.) (2007). *Estado y marxismo. Un siglo medio de debates*. Prometeo Libros. Buenos Aires.

-- (2007a). "Legitimidad y hegemonía. Distintas dimensiones del dominio consensual" en Thwaites Rey, Mabel (comp.), 2007: *Estado y marxismo. Un siglo de debates*. Prometeo Libros. Buenos Aires.

-- (2007b). "Complejidades de una paradójica polémica: estructuralismo vs instrumentalismo" en Thwaites Rey, Mabel (comp.),

2007: *Estado y marxismo. Un siglo de debates*. Prometeo Libros. Buenos Aires.

Tilman, Evers (1989). *El Estado en la periferia capitalista*. Siglo XXI. 5a edición. México.

Taussig, Michael [1980](1984). *The Devil and Commodity Fetishism in South America*. The University of North Carolina. Press Chapel Hill.

Torres López, Juan (coord.) (2006). *Venezuela a contracorriente. Los orígenes y claves de la revolución bolivariana*. Icaria. Más Madera. Barcelona.

Useem, Jerry (2003). *The Devil Excrement*. Fortune Magazine. <http://money.cnn.com>

Vallenilla, Luis (1998). *La Nacionalización del petróleo venezolano (1975-1988)*. Vol. II. Ediciones Porvenir. Caracas.

Van Den Bosch, Karen y Cantillon, Bea (2008). "Policy Impact" en Moran, M.; Rein, M y Goodin, R., 2008: *The Oxford Handbook of Public Policy*. Oxford University Press. Oxford, New York.

Viciano Pastor, Roberto y Martínez Dalmau, Rubén (2007). "Reflexiones sobre la coyuntura constitucional y política en Venezuela" en *Rebelión*. 2 de diciembre. <http://www.rebelion.org/noticia.php?id=59951>

Vilda, Carmelo (2004). *Proceso de la cultura en Venezuela III. Siglo XX*. Centro Gumilla-UCAB. Temas de formación sociopolítica No. 31. 2a Edición. Caracas.

Virtuoso, José S.L (2006). "La política social desde los sectores populares de los barrios urbanos" en Maingon, Thais, 2006: *Balance y perspectiva de la política social en Venezuela*. Caracas (291-308).

Wagner, Sarah (2005). *Mercal: Reducing poverty and Creating National Food Sovereignty y Venezuela*. www.venezuelananalysis.com/analysis/1211.

Waldmann, Peter (2003). *El Estado anómico. Derecho, seguridad pública y vida cotidiana en América Latina*. Edit Nueva Sociedad. Caracas.

Wallerstein, Immanuel (1999). *El Moderno Sistema Mundial III. La Segunda era de la Gran expansión de la Economía Mundo Capitalista, 1730-1850*. Vol III. Siglo XXI Editores. Madrid. México DF.

--- (2006). *Análisis de sistemas-mundo. Una introducción*. Siglo XXI. Madrid.

--- (2003). *Saber el mundo, conocer el mundo. Una nueva ciencia de lo Social*. UNAM. Siglo XXI. IIS UNAM. Madrid.

Weimberg, Liliana (2004). *Literatura latinoamericana. Descolonizar la imaginación*. Centro Coordinador y Difusor de Estudios Latinoamericanos. UNAM. México.

Wilpert, Gregory (2007). *Changing Venezuela by Taking Power. The History and Policies of the Chávez Government*. Verso. London, NY.

9.2 Prensa, informes y otras fuentes indirectas.

Agropatria (2011). *Quiénes Somos*. Consultado en 2011 <http://agropatria.co.ve>

ALADI (2010). *Sistema de Informaciones de Comercio Exterior*. Consultado en 2010 <http://www.aladi.org/>

Álvarez, Víctor (2011). “¿Crece el capitalismo?” en *Los Domingos de Díaz Rangel*. Diario Últimas Noticias. 13 de febrero. Consultado en 2011. Caracas.

Antivero, Ignacio y BCV (1995). *Series Estadísticas de Venezuela de los Últimos Cincuenta Años*. Tomo VI: Indicadores Macroeconómicos de Venezuela Período 1940-1990. Ediciones del 50 Aniversario del BCV. Caracas.

-- (1998). *Series Estadísticas de Venezuela*. Tomo I-A: Cuentas Nacionales. Consultado en marzo del 2012 <http://www.bcv.org.ve/cuadros/series/cuentasnacionales/seriecuentanac.pdf>

Asamblea Nacional (2001). *Gaceta Oficial No. 37323*. Año CXXIX. Mes II. 13 de Noviembre del 2001. Consultado en marzo del 2012 <http://150.188.8.226/db/bibpgr/edocs/2001/37323.pdf>

-- (2002). *Informe de la Comisión Parlamentaria Especial para investigar los sucesos de Abril de 2002*. Consultado en marzo del 2012 http://www.asambleanacional.gob.ve/index.php?option=com_docman&task=doc_details&gid=1563&&Itemid=89

-- (2005). *Ley Orgánica de Poder Público Municipal*. Consultado en marzo del 2012 http://www.cne.gob.ve/web/normativa_electoral/LEY_ORGANICA_DE_L_PODER_PUBLICO_MUNICIPAL.pdf

-- (2006). *Ley de Consejos Comunales*. Consultado en marzo del 2012 <http://www.asuntopublico.com/documentos/LECC.pdf>

-- (2007). *Proyecto de Reforma Constitucional*. Consultado en marzo del 2012

http://www.minci.gob.ve/alocuciones/4/15343/presentacion_del_proyecto.html

-- (2010). *Acuerdo mediante el cual se declara de utilidad pública e interés social bienes de almacenes ÉXITO C.A., propiedad de la Cadena de Tiendas Venezolanas, S.A. (CATIVEN)*. Gaceta Oficial 39349. Consultado en marzo del 2012 www.asambleanacional.gov.ve

--(2010 a). Ley Orgánica de las Comunas. Ministerio del poder popular para las Comunas. http://www.mpcomunas.gob.ve/publicaciones/ley_comunas_2010.pdf

Asamblea Nacional Constituyente (1999). "Constitución de la República Bolivariana de Venezuela". Consultado en marzo del 2012 http://www.asambleanacional.gov.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=24728&Itemid=238&lang=es

Avances de la Nueva PDVSA (2008). Gerencia Corporativa de Asuntos Públicos / 13 de enero. Consultado en marzo del 2012 www.pdvsa.com

Avances de la Nueva PDVSA (2008). Gerencia Corporativa de Asuntos Públicos / 01 de Julio. Consultado en marzo del 2012 www.pdvsa.com

AVN (2012). *Revolución bolivariana ha reducido 22% pobreza del pueblo*. Consultado en marzo del 2012 <http://www.avn.info.ve/node/93718>

Bancoex (2010). *Exportación de Bananas o plátanos frescos o secos según país destino*. Documento código 08030019. Archivo Bancoex. Consultado en marzo del 2012. Caracas.

BANDES (2012). *Quiénes somos*. Consultado en marzo del 2012 <http://www.bandes.gob.ve/quienessomos>

BAV (2011). *Banco Agrícola de Venezuela. Más de 4 mil millones para soberanía alimentaria*. YVKE Mundial. Consultado en 2011 <http://www.bav.com.ve/noticias/noticias.php?noticia=298>

BAV (2011 a). *Lácteos Los Andes y Diana realizan aporte por Bs. 29 millones al Fondo de Eficiencia Socialista*. Consultado en 2011 <http://www.bav.com.ve/noticias/noticias.php?noticia=921>

BCV (2007). *III Encuesta Familiar de Presupuestos Familiares*. Gerencia de Estadísticas Económicas del Banco Central de Venezuela. Consultado en marzo del 2012 <http://www.bcv.org.ve/>.

-- (2010). "BCV articula esfuerzos para abatir la inflación". Declaración del presidente del BCV en *Foro 2011 Retomando la senda del Crecimiento*. Nota de Prensa del BCV. 29/11/2010. Consultado en marzo del 2012 www.bcv.org.ve.

-- (2011). *Hábitos Alimenticios del Venezolano: Principales Resultados*. IV Encuesta Nacional de Presupuestos Familiares. Abril. Consultado en marzo del 2012 www.bcv.org.ve.

-- (2011 a). *Información Estadística*. Consultado en 2011 www.bcv.org.ve.

-- (2011 b). *El PIB aumentó significativamente en el tercer trimestre de 2011: 4,2%*. Nota de prensa. 27 de Noviembre. Consultado en marzo del 2012 <http://www.bcv.org.ve/c4/notasprensa.asp?Codigo=9533&Operacion=2&Sec=False>

-- (2012). *Indice de Remuneraciones IV Trimestre 2011*. Nota de Prensa. Consultado en marzo del 2012 <http://www.bcv.org.ve/c4/notasprensa.asp?Codigo=9679&Operacion=2&Sec=False>

Bloomberg (2010). *Record Food Prices May Persist as Economic Growth Boosts Demand, IMF Says*. Consultado en marzo del 2012 <http://www.bloomberg.com/news/2011-03-04/record-food-prices-may-persist-as-economic-growth-boosts-demand-imf-says.html>

Bottome, Roberto (2008). *Lusinchí II*. Consultado en enero 2008 www.Veneconomia.com.

Buitrago Arcia, Leonardo (2011). *Ministro Loyo: Superficie Agrícola Nacional se incrementó un 49%*. Entrevista a Juan Carlos Loyo. Prensa Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierra. AT. Consultado en marzo del 2012 http://www.mat.gob.ve/busquedaNoticia/busquedas/mostrar_noticia.php?var=9779

CADIVI (2011). *Sistema cambiario. Cadivi, una medida necesaria*. Consultado en marzo del 2012 <http://www.cadivi.gob.ve/institucion/sistematicambiarior.html>

Calzadilla, Pedro (2010). *Historiador Pedro Calzadilla: El sueño integrador de Simón Bolívar sigue latente*. Intervención en la sesión solemne de la Asamblea Nacional de Venezuela. Bicentenario de nuestro primer grito independentista. Consultado en marzo del 2012 <http://www.youtube.com/watch?v=8jefRlyuTzM>

CAVILAC (2008). *La industria lechera en Venezuela y su evolución (2008)*. Consultado en marzo 2012. [http://www.cavilac.org/Informacion/Documentos/Octubre 2009/InformeLaIndustriaLecheraenVenezuela2008.pdf](http://www.cavilac.org/Informacion/Documentos/Octubre%202009/InformeLaIndustriaLecheraenVenezuela2008.pdf)

CEME (2005). *La Escuela de las Américas*. Archivo Chile. Historia Político Social – Movimiento Popular.

CENDAS-FVM (2011). *Los alimentos aumentaron 28,9% entre octubre 2010 y octubre 2011*. Base de datos Oscar Meza. Noviembre. Consultado en marzo del 2012 <http://www.cendasfvm.org/noticias/noticia4.html>

Chacón, Emilce (2007). *Conozcamos la planta procesadora de lácteos Rafael Urdaneta. Las Empresas de Producción Social no están aisladas de su entorno*. Actualidad. MinCi. Consultado en marzo del 2012 http://www.minci.gob.ve/reportajes/2/14518/conozcamos_la_planta.html

Chávez, Hugo Rafael (2000-2010). *Aló Presidente*. Consultado en marzo del 2012 <http://www.alopresidente.gob.ve/>

-- (2003). *Aló Presidente No. 148*. Montañas de Yacambú. 4 de Mayo. Estado Lara. Consultado en marzo del 2012 <http://www.alopresidente.gob.ve/>

-- (2006). *Aló Presidente*. Nº 259. En Unidad de Producción Socialista Manuel Carlos Piar. Domingo, 6 de agosto. Estado Bolívar. Consultado en marzo del 2012 <http://www.alopresidente.gob.ve/>

- (2007). *Aló Presidente*. N° 267. En Sala de Prensa de Miraflores. 23 de Febrero. Caracas. Consultado en marzo del 2012 <http://www.alopresidente.gob.ve/>
- (2007a). *Aló Presidente*. N° 264. En Centro de Formación Socialista José Laurencio Silva. Estado Cojedes. Domingo, 28 de enero. San Carlos. Consultado en marzo del 2012 <http://www.alopresidente.gob.ve/>
- (2007 b). *Todos los Motores a Máxima Revolución*. Fragmentos de la Memoria y Cuenta del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, realizada el 11 de Enero del 2007. Consultado en marzo del 2012 <http://www.bibliotecayacucho.gob.ve/fba/index.php?id=102>.
- (2008). *Aló Presidente N° 318*. Sector 3 de La Bombilla. Petare. Estado Miranda. Caracas. Consultado en marzo del 2012 <http://www.alopresidente.gob.ve/>
- (2008 a). *Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria*. Ministerio del poder popular para la alimentación. Consultado en marzo del 2012 http://www.minpal.gob.ve/index.php?option=com_content&task=view&id=82&Itemid=1
- (2009). *Aló Presidente N° 337*. Planta termoeléctrica “Josefa Camejo”. Estado Falcón. Domingo, 16 de agosto. Península de Paraguaná. Consultado en marzo del 2012 <http://www.alopresidente.gob.ve/>
- (2010). *¡¡Campana Admirable, Patria Admirable!!* en “Las Líneas de Chávez” <http://www.minci.gob.ve/lineas-de-chavez>. 10 de Enero.
- (2010 a). *Aló Presidente No. 360*. Lara. Consultado en marzo del 2012 <http://www.alopresidente.gob.ve>
- (2010 b). *Aló Presidente No. 364*. Tiznados Edo. Guárico. Consultado en marzo del 2012 <http://www.alopresidente.gob.ve>
- (2010 c). *El Camino de la Victoria Económica*. Folleto promocional de la Economía Socialista. MPPCI. Gobierno Bolivariano de Venezuela.
- (2010 d). *Misión Mercal Será Ampliada en 2010*. Prensa Presidencial 2010. San Francisco, Edo Zulia.

-- (2012). *Aló Presidente*. No. 388. Unidad de Producción Socialista General Ezequiel Zamora. Santa Bárbara de Barinas. Consultado en marzo del 2012 <http://www.youtube.com/watch?v=YGzKkAZVRf0&feature=related>

-- (2012 a). *Mensaje Anual del Presidente Chávez 2011*. Asamblea Nacional de Venezuela. Consultado en marzo del 2012 http://www.asambleanacional.gob.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=37400%3Amensaje-anual-del-presidente-chavez&catid=284%3Anoticias&Itemid=249&lang=es

Chávez, Hugo Rafael y la Asamblea Nacional (2007). *Propuesta de Reforma Constitucional*. Consultado en marzo del 2012 <http://www.iniciativacomunista.org/venceremos/spip.php?article125>

COFAVIC (2012). *Organización no gubernamental para la protección y promoción de los Derechos Humanos*. Consultado en marzo del 2012. <http://www.cofavic.org/index.php>

(El) Comité Nacional de Copei (1948). *Comunicado ante el golpe del 24 de Noviembre de 1948*. Consultado en marzo del 2012 <http://www.analitica.com/archivo/vam1997.07/semana/semnac14.htm>

Contacto con la Nueva PDVSA (2006). *Revista*. Agosto. No. 7 República Bolivariana de Venezuela. Consultado en marzo del 2012 www.pdvsa.com. Caracas.

Contacto con la Nueva PDVSA (2008). *Revista*. Julio No.6. República Bolivariana de Venezuela. Consultado en marzo del 2012 Caracas. www.pdvsa.com.

Correo del Orinoco (2011). *Fondo de Eficiencia Socialista cuenta con Bs. 210 millones para proyectos del Estado*. 19 de octubre. Consultado en marzo del 2012 <http://www.correodelorinoco.gob.ve/poder-popular/fondo-eficiencia-socialista-cuenta-bs-210-millones-para-proyectos-estado/>

CVA (2011). *Corporación Venezolana Agraria*. Ministerio del Poder Popular para Agricultura y Tierras. Consultado en marzo del 2012 <http://www.cva.gob.ve/sitio/empresa5.php>.

CVA (2011 a). *Centro Productivo Socialista Florentino*. Consultado en

marzo del 2012 <http://www.florentino.gob.ve/>

Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948. Consultado en marzo del 2012. <http://www.un.org/es/>

Foro Social Mundial para la Alimentación (2007). *Declaración de Nyéléni*. Sélingué. Mali. Consultado en 2010 <http://www.world-governance.org/spip.php?article253>

Demeester, Erik (2007). "Venezuela: regulación de precios, escasez de alimentos, especulación y socialismo" en revista *In Defence of Marxism*. Consultado en marzo del 2012 <http://www.marxist.com/venezuela-precios-alimentos-especulacion-socialismo.htm>

Dos Santos, Theotonio (2010). *André Gunder Frank*. Consultado en 2010 <http://www.rrojasdatabank.info/agfobit5.htm>.

EFE (2002). *Oposición insiste en llamar a 'chavistas' a unirse a sus reclamos*. Artículo de prensa. 21 de diciembre. Consultado en marzo del 2012 <http://www.eluniverso.com/2002/12/21/0001/14/C37A4428408F4D699F35E5AEEDF5FA86.html?p=14A&m=2349>

Eljuri, Elías (2012). *El desarrollo de Venezuela en números y perspectivas de futuro*. Instituto Nacional de Estadística. Febrero. Consultado en marzo del 2012 http://venezuela-us.org/es/wp-content/uploads/2009/06/Presentación_Dr-Eljuri_Español.pdf

El Universal (2005). *Manifiestan Dudas sobre el Ejercicio Democrático* 16 de diciembre. Consultado en marzo del 2012 http://buscador.eluniversal.com/2005/12/16/pol_art_16108C.shtml

FAO (1992). *Guidelines on sociological analysis in agricultural investment project design*. FAO Investment Centre Technical Paper No. 9. Consultado en marzo del 2012 <ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/008/t0657e/t0657e00.pdf>

FAO (1996). *Plan de acción de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación*. 13 de noviembre. Cumbre mundial sobre la alimentación. Consultado en marzo del 2012 <http://www.fao.org/docrep/003/w3613s/w3613s00.htm>

FAO (1996a). *Declaración de Roma sobre la Seguridad Alimentaria Mundial*. 13 de noviembre. Cumbre mundial sobre la alimentación. Consultado en marzo del 2012 <http://www.fao.org/docrep/003/w3613s/w3613s00.htm>

FAO (2001). *Estado de la inseguridad alimentaria en el mundo, 2001*. Consultado en marzo del 2012 <ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/003/y1500s/y1500s01.pdf>

FAO (2005). *Informe del taller sobre la mejora de la medición y evaluación de la privación de alimentos y subnutrición*. Comité de Seguridad Alimentaria Mundial. 31º período de sesiones. Roma. Depósito de documentos. Consultado en marzo del 2012 <http://www.fao.org/docrep/meeting/009/j4630s.htm>

FAO (2010 a). *The State of Food Insecurity in the World 2010. Technical Notes*. Consultado en marzo del 2012 <http://www.fao.org>

FAO (2010 b). *Disminuye el hambre mundial, pero sigue inaceptablemente alta. Los Objetivos de la comunidad internacional son difíciles de alcanzar*. Departamento Económico y Social. Consultado en marzo del 2012 <http://www.fao.org>

FAO (2010 c). *Índice de la FAO para los precios de los alimentos*. Consultado en marzo del 2012 <http://www.fao.org/worldfoodsituation/wfs-home/foodpricesindex/es/>

FAO (2012). *Índice de la FAO para los precios de los alimentos*. Consultado en marzo del 2012 <http://www.fao.org/worldfoodsituation/wfs-home/foodpricesindex/es/>

FAO (2012 a). *Perfil de país: indicadores de seguridad alimentaria. País: Republica Bolivariana de Venezuela*. Consultado en marzo del 2012 [http://www.fao.org/fileadmin/templates/ess/documents/food_security_statistics/country_profiles/esp/Venezuela S.pdf](http://www.fao.org/fileadmin/templates/ess/documents/food_security_statistics/country_profiles/esp/Venezuela_S.pdf)

Organización Munidal para la Alimentación y Corporación Andina de Fomento (2006). *Venezuela. Nota de análisis sectorial*. Informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación – Roma. Dirección del Centro de Inversiones. Corporación Andina de Fomento.

FMI (2012). *Principal Global Indicators*. Consultado en marzo del 2012 <http://www.principalglobalindicators.org/default.aspx>

Fundaproal (2012). *¿Quiénes somos?*. Consultado en marzo del 2012 http://www.fundaproal.gob.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=17&Itemid=27

GEM (2004). *GEM Global Report 2003*. Paul D. Reynolds, William D. Bygrave, Erkko Autio and others. Consultado en marzo del 2012 http://www.gemconsortium.org/about.aspx?page=global_reports_2003

--(2005). *Executive Report*. Maria Minniti with William D. Bygrave and Erkko Autio. London Bussiness School. Babson. London, Babson

--(2006). *Executive Report*. Niels Bosma, Jonathan Levie and Global Entrepreneurship Research Association (GERA). London, Babson Park.

--(2007). *Executive Report*. Niels Bosma, Jonathan Levie and Global Entrepreneurship Research Association (GERA). London, Babson Park.

--(2008). *Executive Report*. Niels Bosma, Jonathan Levie and Global Entrepreneurship Research Association (GERA). London, Babson Park.

--(2009). *Executive Report*. Niels Bosma, Jonathan Levie and Global Entrepreneurship Research Association (GERA). London, Babson Park.

--(2010). *Executive Report*. Niels Bosma, Jonathan Levie and Global Entrepreneurship Research Association (GERA). London, Babson Park.

--(2011). *Informe ejecutivo, Venezuela 2009-2010*. GEM/IESA. Caracas. Consultado en marzo del 2012 <http://www.gemconsortium.org/document.aspx?id=1142>

Giordani, Jorge (2011). *Venezuela inicia nueva fase de crecimiento económico*. Nota de Prensa. www.bcv.org.ve.

Giordani, Jorge (2011 a). *Abona la Siembra del Petróleo. Presentación del Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional y Ley Especial de Endeudamiento Anual para el ejercicio fiscal del año 2011*. Informe ante la Asamblea Nacional. Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas. Caracas.

Giordani, Jorge (2011 b). *Crisis bancaria provocada por estafadores le costó al país \$17.631 millones*. Nota de Prensa en Correo del Orinoco. 24 de Mayo 2011. Consultado en marzo del 2012 <http://www.correodelorinoco.gob.ve/economia/giordani-crisis-bancaria-provocada-por-estafadores-le-costo-al-pais-17-631-millones/>

González Medina (2007). *Venezuela, capitalismo de Estado, reforma y revolución*. Consultado en 2010 <http://www.eumed.net/libros/2007a/244/1x.htm>

Hernando-Llorens, Belén; Lorenzo, Silvia; Pierce, Joseph (2009). *Entrevista a Boaventura de Sousa Santos*. Revista Pterodáctilo. No 6. Consultado en 2009 <http://pterodactilo.com/numero6/?p=422>

IFAD, WFP y FAO (2011). *The State of Food Insecurity in the World. How does international price volatility affect domestic economies and food security?* <http://www.fao.org/docrep/014/i2330e/i2330e.pdf>

Indepabis (2012). *Precios Regulados*. Productos de la Cesta Básica. Página del instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios. Consultado en marzo del 2012 www.indepabis.gob.ve

INE (2001). *Censo de población y vivienda 2001*. Consultado en marzo del 2012 <http://www.ine.gov.ve/poblacion/index.html>

-- (2011). *Resumen de indicadores socioeconómicos*. Presentación. Noviembre 2011.

-- (2012). *Fichas técnicas*. Programas. Instituto Nacional de Estadísticas. Consultado en marzo del 2012 <http://www.ine.gob.ve/fichastecnicas/menufichastecnicas.asp>

-- (2012 a). *Resumen de indicadores socioeconómicos*. Marzo 2012. <http://www.ine.gov.ve/>

-- (2012 b). *Indicadores básicos de la Fuerza de Trabajo*. Marzo 2012. http://www.ine.gov.ve/index.php?option=com_content&view=category&id=103&Itemid=40#

-- (2012 c). *Resumen de Indicadores Socio-Demográficos*. Marzo. http://www.ine.gov.ve/documentos/Social/IndicadoresSocioeconomicos/Resumen_ISD.pdf

INN (2012). *Hoja de balance de alimentos*. Consultado en marzo del 2012. <http://www.inn.gob.ve/>

Innova (2012). *Base de datos agroalimentarios de Venezuela*. Consultado en marzo del 2012. <http://www.innovaven.org/>

Jaua, Elías (2010). *Impulso a productores de soya promueve la siembra del socialismo*. <http://www.minci.gob.ve/noticias>.

Jaua, Elías (2010 a). *Discurso del Vicepresidente de la República en el Día Mundial de la Alimentación* en el diario "Correo del Orinoco". Domingo 17 de Octubre. Caracas.

Jaua, Elías (2010 b). *Memoria y Cuenta de la Vicepresidencia de la República 2009*. Consultado en 2010 <http://www.vicepresidencia.gob.ve/noticia.php?id=2393>.

Jaua, Elías (2010 c). *Recuperación de Central Azucarero Venezuela es ejemplo de participación de trabajadores y comunidad*. Entrevista. INDER-ABN. Junio. Consultado en 2010 http://www.inder.gob.ve/agricultura_al_dia.php?id=3329&anho=2010&mes=6

Juzgado Superior Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia con Competencia en el Estado Falcón (2011). Expediente 000626. Consultado en marzo del 2012 <http://jca.tsj.gov.ve/decisiones/2009/abril/531-6-626-213.html>

León, Luis Vicente (2009). *Cerca de la mitad de la población compra en Mercal y Pdval* Consultado en marzo del 2012 <http://www.consumid.org/detalle/3463/cerca-de-la-mitad-de-la-poblacion-compra-en-mercal>.

López, Manuel (2011). *Mercal es sinónimo de revolución bolivariana*. Entrevista de prensa. Correo del Orinoco. 4 de Septiembre. Caracas.

Loyo, Juan Carlos (2011). *43.6 millardos de bolívares serán destinados al financiamiento*. Entrevista al Ministro del PP para la Agricultura y Tierras realizada en el programa "Contragolpe" de VTV. http://www.fondas.gob.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=2405:436-millardos-de-bolivares-seran-destinados-al-financiamiento&catid=54:prensa-mppat&Itemid=58

-- (2011 a). *Sólo 10% del total de tierras productivas del país pertenece al Estado venezolano* en Agencia Venezolana de Noticias. Consultado en marzo del 2012 <http://www.avn.info.ve/node/37645>

Mercal (2011). *Misión*. Ministerio del Poder Popular para la Alimentación. Consultado en 2011 http://www.mercal.gob.ve/web/index.php?option=com_content&task=view&id=6&Itemid=

-- (2012). *Red Mercal/Distribución Nacional*. Consultado en marzo del 2012

http://www.mercal.gob.ve/web/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=

Mesa de la Unidad Democrática (2012). *Lineamientos para el Programa de Gobierno de Unidad Nacional (2013-2019)*. Comisión de Políticas Públicas. Unidad Técnica. Consultado en marzo del 2012

<http://www.unidadvenezuela.org/wp-content/uploads/2012/02/MUD.-Lineamientos-para-el-Programa-de-Gobierno-de-Unidad-Nacional-23-Enero-2012.-Final-1.pdf>

Ministerio de energía y petróleo (2012). *Evolución precios 2010-2011*. Consultado en marzo del 2012

<http://www.menpet.gob.ve/secciones.php?option=view&idS=45>

Ministerio del poder popular para la Planificación y el Desarrollo (2001). *Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación*. Consultado en marzo del 2012

<http://www.mpd.gob.ve/pdeysn/plan.htm> .

-- (2012). *Proyecto Nacional Simón Bolívar. Primer Plan Socialista – PPS- Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013*. <http://www.mpd.gob.ve/images/pdf/POAN/Proyecto%20Nacional%20Simon%20Bolivar.pdf>

Ministerio del poder popular para la Planificación y la Finanzas (2011). *Proyecto de Ley De Presupuesto Para el Ejercicio Fiscal 2012 República Bolivariana de Venezuela*. www.asambleanacional.gob.ve

Ministerio del poder popular para la Alimentación (2009). *Minppal. Memoria y Cuenta 2008*. Consultado en marzo del 2012

http://www.minpal.gob.ve/index.php?option=com_content&task=view&id=9&Itemid=27

-- (2011). *Memoria y Cuenta del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación 2010*. Consultado en marzo del 2012

<http://www.derechos.org.ve/pw/wp-content/uploads/Min-Alimentación-20101.pdf>

Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras (2011). *Gobierno ha entregado más de 1.402 millones de bolívars en financiamientos*. Nota de Prensa. <http://www.mat.gob.ve/>

-- (2012). "VII Censo Agrícola". Consultado en marzo del 2012 <http://200.47.151.243/>

Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores (MPPRE) (2012). *2005: Año del Salto Adelante, hacia la construcción del Socialismo del Siglo XXI*. http://celac.gob.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=2097&Itemid=9

Ministerio del poder popular para la Comunicación y la Información (2006). *Misión Zamora*. MinCI. Programas Sociales. http://minci.gob.ve/programas_sociales/20/10402/mision_zamora.html

-- (2011). *Misión Agro Venezuela permitirá alcanzar la soberanía alimentaria. El objetivo fundamental de la iniciativa es sumar voluntades para dignificar la labor del agricultor*. Consultado en marzo del 2012. www.MinCi.gob.ve

-- (2010). *Gobierno no descarta nacionalización de Empresas Polar*. Nota de Prensa. 02 de Junio. Consultado en marzo del 2012 . www.MinCi.gob.ve.

-- (2010 a). *Venezuela de Verdad, Verdad*. Año 1. No 13. Caracas.

Naciones Unidas (2011). *Objetivos de desarrollo del milenio. Informe 2011*. Naciones Unidas. Nueva York. Consultado en marzo del 2012 <http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/>

ONAPRE (2011). *Oficina Nacional de Presupuestos. Informe Global. Año 2009*. Consultado en 2011 <http://www.ocepre.gov.ve/>

Pagina 12 (2003). *Saliendo a romper el eje del 'lock-out' petrolero*. Artículo de prensa. 9 de enero. Consultado en marzo del 2012 <http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-15107-2003-01-09.html>

PDVAL (2012). *Nosotros*. Minppal Consultado en marzo del 2012 <http://www.pdval.gob.ve/portal/nosotros.php>

PDVSA SA. y sus Filiales (2008). *Informe de gestión anual*. Informe. Minpppep. Caracas.

PDVSA (2011). *El sabotaje contra la industria petrolera nacional*. Consultado en 2011 http://www.pdv.com/index.php?tpl=interface.sp/design/readmenuhi.st.tpl.html&newsid_obj_id=119&newsid_temas=13

Pérez, Anaís (2009). *Instalada comuna agraria socialista en Valles de Tucutunemo*. Prensa presidencial. Consultado en marzo del 2012 http://www.alopresidente.gob.ve/informacion/2/1072/instalada_comuna_agraria.html

Petkoff, Teodoro (1997). *Este es un programa político*. Entrevista en SIVENSA en el archivo de Venezuela Analítica. Consultado en marzo del 2012 <http://www.analitica.com/archivo/vam1997.02/doc1.htm>

Piñeiro Harnecker, Camila (2008). *Principales Desafíos de las Cooperativas en Venezuela* en "Cayapa: Revista de Economía Social Venezolana" No. 5 Año 2008. en <http://www.rebellion.org/docs/83458.pdf>

Presidencia de la República (2009). *Gaceta oficial N° 5.933 Extraordinario*. 21 de Octubre. Consultado en marzo del 2012 http://www.milicia.mil.ve/sitio/web/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=61

Prensa Presidencial (2010 a). *Misión Mercal será ampliada en 2010*. 18 de marzo. Consultado en marzo del 2012 <http://www.minci.gob.ve/noticias-prensa-presidencial/28/>

-- (2010 b). *Gobierno no descarta nacionalización de Empresas Polar*. 2 de Julio. Consultado en marzo del 2012 <http://www.minci.gob.ve/noticias-minci/1/>

-- (2010 c). *Presidente Chávez inaugura Hipermercado Bicentenario*. 13 de febrero. Consultado en marzo del 2012 http://www.minci.gob.ve/noticias_-_prensa/28/196159/presidente_chavez_inaugura.html

-- (2010 d). *Rafael Coronado Patiño: 'Vamos rumbo a la soberanía alimentaria'*. 9 de julio. Consultado en marzo del 2012 http://www.minci.gob.ve/entrevistas/3/200007/rafael_coronado_patiño/vamos.html

-- (2010 e). *Presidente Chávez convocó a la guerra económica contra la burguesía*. 2 de Julio. Consultado en marzo del 2012 <http://www.minci.gob.ve/noticias-minci/1/>

Procompetencia (2012). *Empresas estatizadas 2005-2010*. Ministerio del Poder Popular para el Comercio. Consultado en marzo del 2012 <http://www.procompetencia.gob.ve/images/estatizadas.pdf>

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (2011). *Human Development Report 2011*. <http://hdr.undp.org/en/>

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y Ministerio del Poder Popular para la Planificación y el Desarrollo (2008). *República Bolivariana de Venezuela. Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo*. Marco de Asistencia de Naciones Unidas para el Desarrollo (MANUD) 2009-2013. Febrero. Consultado en marzo del 2012 http://web.undp.org/latinamerica/country-docs/UNDAF_Venezuela_2009-20013.pdf

Provea (2000). *Informe Anual 2000*. Consultado en marzo del 2012 <http://www.derechos.org.ve/informes-anuales/informe-anual-2000/>

Provea (2006). *Informe Anual 2006*. Consultado en marzo del 2012 <http://www.derechos.org.ve/informes-anuales/informe-anual-2006/>

Provea (2011). *Informe Anual 2011*. Consultado en marzo del 2012 <http://www.derechos.org.ve/informes-anuales/informe-anual-2011/>

Provea (2011). *Corriente revolucionaria Bolívar y Zamora exige una investigación por el secuestro y asesinato de campesinos en reserva forestal en el estado Barinas*. Consultado en marzo del 2012 <http://www.derechos.org.ve/proveaweb/?p=12189>.

Ramos Flamerich, Guillermo (2010). *La venezolanidad desde la perspectiva del Nuevo Ideal Nacional*. Consultado en marzo del 2012 <http://venezuelaysuhistoria.blogspot.com/search?updated-max=2010-03-24T02%3A24%3A00-04%3A30>.

Red de Abastos Bicentenario (2012). *Sucursales*. Minppal. Consultado en marzo del 2012 http://abastosbicentenario.gob.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=56&Itemid=58

República Bolivariana de Venezuela (2010). *Cumpliendo las Metas del Milenio*. Septiembre. Consultado en marzo del 2012 unstats.un.org/unsd/dnss/docViewer.aspx?docID=2696

Reuters (2011). *Venezuela, Economy and Risks*. Consultado en marzo del 2012 <http://uk.reuters.com/article/2011/03/28/us-latam-summit-venezuela-idUKTRE72R1WB20110328>

SADA (2012). *Home*. Superintendencia nacional de Silos y Depósitos Agrícolas. Consultado en marzo del 2012 http://sada.gob.ve/index.php?option=com_content&view=category&id=34&Itemid=54

SAFONACC (2012). *3 millones de toneladas de alimentos vendieron las redes del Estado*. Sistema Autónomo Fondo Nacional de Consejos Comunales. 6 de enero. Consultado en marzo del 2012 http://www.safonacc.gob.ve/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=5&Itemid=78&limitstart=123

SISOV (2011). *Sistema Integrado de Indicadores Sociales en Venezuela*. Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas. Consultado en 2011. <http://www.sisov.mpd.gob.ve/indicadores/>

Treviño, Jesús A. (2006). “Conversación con Osvaldo Sunkel” en 2006: *Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad*. 16 de mayo de <http://www.insumisos.com/lecturasinsumisas/Platica%20con%20Oswaldo%20Sunkel.pdf>

Torres, Raymond (2008). *Informe sobre el trabajo en el mundo-2008. Desigualdades de la renta en la era de la finanza global*. OIT. IIEL. Ginebra.

UN-Habitat (2012). *Best Practices and Leadership Program*. Consultado en marzo del 2012 <http://www.unhabitat.org/categories.asp?catid=34>

Uslar Pietri, Arturo (1936). “Sembrar el Petróleo” en *Diario Ahora*. 14 de Julio. Caracas.

-- (2009). *Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez*. Consultado en 2009 www.youtube.com/watch?v=Ez8GKjFV2ZE.

Varela, Maryurí (2010). *Pdval vende los alimentos con 65% menos que el precio capitalista*. Prensa Presidencial 2010. 6 de junio. <http://www.alopresidente.gob.ve>

Vethencourt, José Luis (1997). "La crisis de autoridad no es una crisis de autoestima, sino de responsabilidad". *Revista SIC*. #592. Caracas.

Vheadline (2005). *Según Datanálisis 92% de los venezolanos aprueba Mercal*. Consultado en marzo del 2012 <http://spanish.vheadline.com/readnews.asp?id=43577>.

Vheadline (2006). "Datanálisis: Mercal es el lugar preferido para comprar" en 2006: *Alimentos*. Consultado en marzo del 2012 <http://spanish.vheadline.com/readnews.asp?id=55906>.

Via Campesina (2009). *Documentos políticos de La Vía Campesina*. V Conferencia Mozambique, del 17 al 23 de Octubre, 2008. Consultado en marzo del 2012 <http://viacampesina.org/downloads/pdf/policydocuments/POLICYDOCUMENTS-SP-FINAL.pdf> Yakarta.

Villegas Poljak, Ernesto (2010). *Abril golpe adentro*. Editorial Galac. 4a reimpresión. Caracas.

Vinogradoff, Ludmila (2003). *Duro revés para Chávez al rechazar Brasil cambios en el Grupo de Amigos*. Artículo de prensa. Diario ABC. http://www.abc.es/hemeroteca/historico-19-01-2003/abc/Internacional/duro-reves-para-chavez-al-rechazar-brasil-cambios-en-el-grupo-de-amigos_156511.html

ViVe (2007). "La Reforma Constitucional venezolana y la agroecología". Núñez, Miguel Angel, 2007: *ECOPORTAL.net*. Consultado en 2007 http://www.vive.gob.ve/inf_art.php?id_not=4853&id_s=3

ViVe (2011). *De la Agroisleña capitalista a la Agropatria socialista hay mucho trecho*. Infoartículo. Consultado en 2011 http://www.vive.gob.ve/inf_art.php?id_not=27075&id_s=3

Wallerstein, Inmanuel (s/f). *Entrevista a Inmanuel Wallerstein*. http://www.youtube.com/watch?v=BKH82yRcD_o

Welt Hunger Life, IFPRI, Concern Worldwide (2011). *Global Hunger Index. The Challenge of Hunger: Taming price spikes and excessive food price volatility*. Bonn, Washington, Dublin. Consultado en marzo del 2012 <http://www.ifpri.org/sites/default/files/publications/ghi11.pdf>

Wilpert, Gregory (2005). *Land for People not for Profit in Venezuela*. Consultado en marzo del 2012 <http://venezuelanalysis.com/analysis/1310>.

YVKE (2008). "Braulio Álvarez Denuncia Asesinato -por Sicarios- de Dirigente Campesino en Portuguesa". Consultado en marzo del 2012 <http://www.radiomundial.com.ve/yvke/noticia.php?15769>.

9.2 Fuentes directas y observaciones de campo.

Alvarado, Any (2010). Funcionario medio de ECISA-MAT. Entrevista. Carretera San Felipe-Yaritagua. Yaracuy.

Amin, Samir; Bachi, Aniya; Bello, Walter; Sader, Emir (2009). *El impacto de la crisis actual sobre la desigualdad global y las estrategias de desarrollo de las economías emergentes*. Conferencia dictada en el Auditorio del Museo Reina Sofía. Mayo. Madrid.

Angela y demás pobladores (2002-2005). Pobladores del barrio Hugo Chávez Frías. Entrevistas y observaciones de campo. Parroquia Ydelfonso Vásquez. Maracaibo.

Arelis y demás pobladores del Barrio San Benito (2003-2007). Miembros de la Casa de la Alimentación de San Benito, del Barrio Adentro y pobladores del barrio San Benito. Entrevistas y observaciones de campo. Barrio San Benito, Sector Sabaneta. Maracaibo.

Bermúdez, Pepe (2006). Ex director regional de Mercal-Zulia. Entrevista. Julio. Maczul, Maracaibo

Campesinos del Frente Agrario Ezequiel Zamora y demás pobladores de Las Piedras (2003). Entrevistas y observación de campo. San José de Perijá-Las Piedras.

Comunicadores Comunitarios de Canal Z (2000-2011). Miembros de varios medios comunitarios de prensa y TV. Entrevistas y observación participante. Estado Zulia.

Casal, Ricardo (2005). Entrevista. Dispensario médico de El Batey. Noviembre. El Batey.

Círculo Bolivariano “Luis Hómez” (2000-2008). Entrevistas y Observaciones de campo. Maracaibo.

Consejo comunal Los Modines II (2007). Entrevistas y observaciones de campo. Parroquia Raúl Leoni.

Coop. Socialistas Sabana de Parra (2010). Entrevistas individuales, colectivas y diarios de observación a campesinos y trabajadores de Agropatria. Octubre. Estado Yaracuy. Sabana de Parra-Carretera a Yaritagua.

Coopedor, campesinos y pobladores de San José de Perijá-Las Piedras (2004-2007). Entrevistas y observación de campo. San José de Perijá-Las Piedras.

CVA-ECISA (2010). Entrevistas a Funcionarias de Media y Media-Alta Dirección. Sabana de Parra.

Directivo Mercal, 2010. Dirección Media Nacional. Entrevistas. Octubre. Caracas.

Directivo PDVAL-COL (2010). Directivo de Centro Piloto de PDVAL para la Costa Oriental del Lago. Entrevistas y Diarios de Campo. Cabimas, Zulia.

Directivo INSAI (2010). Directivo Nacional de INSAI (Instituto Nacional de Salud Agraria Integral) . Entrevistas. Villa de Cura, Aragua.

Facchi, Sergio (2002). Exgerente de calidad de alimentos. Empresas Polar. Entrevista. Noviembre. Mérida.

Familia Hernández, Fernández y demás miembros de “La Casa del Pueblo” (2000-2003). Participantes comunitarios del proyecto “La Casa”. Entrevistas y observaciones. Parroquia Ydelfonso Vásquez.

Franca, Humberto (2005). Alcalde del Municipio Sucre del Estado Zulia. Entrevistas. Caja Seca-Bobures-El Batey.

Frente Socialista Campesino Pedro Camejo (2010). Campesinos-Cooperativistas del Valle de Tucutunemo. Entrevistas y Diario de Campo de Observaciones. . Villa de Cura, Aragua.

Godoy, Yuruani (2010). Directora del INSAI (Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral). Entrevista. Caracas.

Inmerca (2010). Instituto Integral de Mercados de Caracas. Entrevistas y Observaciones. Octubre. Mercado de Coche, Caracas.

Investigador Venepal-Venirauto (2010). Investigador de Campo vinculado al Estado sobre el Funcionamiento de Venirauto y Venepal. Entrevista. Autopista Regional del Centro, Carabobo.

Izarra, Rafael (2010). Gerente de Asistencia técnica, Unidad de Información Comercial. Banco de Comercio Exterior. Entrevista. Abril. Caracas.

Korzeniewick, Patricio; Martins, Carlos Eduardo; Sandoval Ramírez, Luis (2009). *El impacto de la crisis actual sobre la desigualdad global y las estrategias de desarrollo de las economías emergentes*. Conferencia dictada en el Auditorio del Museo Reina Sofía. Mayo. Madrid.

Lauchó, Elsy (2012). Arquitecta especializada en asentamientos urbanos y urbanismo popular en Marruecos y Venezuela. Entrevista. Enero. Madrid.

Manrique, Franco (2010). Director de Inmerca (Instituto Integral de Mercados de Caracas). Entrevista. Octubre. Caracas.

Matiuzze, miembros del Comité de Tierras y demás pobladores de Mene Grande (2003-2005). Cooperativas COPROA y de los Tres Ríos. Entrevistas y observación de campo. Mene Grande. Municipio Baralt.

Mendoza Potellá, Carlos (2010). Entrevista Personal. Septiembre. BCV. Caracas.

Osal, José (2010). Ingeniero de la CVA. Entrevista en diario "Correos del Orinoco". 7 de Julio. El Batey.

Osorio, Carlos (2010). Ministro del Poder Popular para la Alimentación. Entrevista. Octubre. Nuevo Circo de Caracas. Caracas.

Reyes, Dayana (2010). Funcionario medio de ECISA-MAT. Entrevista. Carretera San Felipe-Yaritagua. Yaracuy.

Rodríguez, Sergio Adán (2010). Miembro de la Vicepresidencia Productiva de la Nación. Viceministro de Ambiente. Presidente, diseñador y fundador de Mercal en el 2003. Entrevista realizada en Julio 2010. Caracas.

Sayago, Ganlush, Sabbad y demás Trabajadores-Presidentes (2010). Trabajadores Presidentes y otros Trabajadores de las Empresas Básicas de Producción Socialista Venalum, Alcasa y Ferrominera del

Orinoco. Entrevistas y Diarios de Campo. Zona Industrial de San Félix-Puerto Ordaz. Entre San Félix y Puerto Ordaz, Bolívar.

Solarte, Solarte y demás Trabajadores (2005-2008). Trabajadores del sindicato y consejo obrero de la Central Azucarera Venezuela. Entrevistas y observaciones de campo. El Batey.

Trabajadores de la EPS Rafael Urdaneta (2007). EPS Rafael Urdaneta, carretera La Cañada-Villa del Rosario. Municipio La Cañada de Urdaneta. Sector Andrés Bello.

Trabajadores-presidentes de la Coop. Siventub (2010). Trabajadores de Empresa Recuperada Sideroca de Fabricación de Tuberías Petroleras. Entrevistas y Diarios de Campo del 2006 al 2010. Punta Gorda, Zulia.

Trabajadores del Mercado de Coche (2010). Mercado de Coche. Autopista del Valle-Coche. Octubre. Caracas.

Trabajadores-Directores de Diana (2010). Empresa de Producción Socialista Aceites Diana y Margarina La Estancia. Entrevistas y Diarios de Campo de Observación. Zona Industrial de Valencia. Valencia.

Trabajadores Agroisleña Cagua (2010). Trabajadores de Empresas consorciadas de Agroisleña. Entrevistas y Diarios de Campo. Cagua, Aragua.

Trabajadores Arepera Socialista (2010). Parque El Calvario y Wararira Repano. Entrevistas y Diarios de Campo. Caracas.

Trabajadores Indepabis (2011). Diferentes sitios. Entrevistas y Diarios de Campo. Caracas.

Trabajadores-socios SIVENTUB (2005-2012). Siventub-PDVSA empresarial. Entrevistas y Diarios de Campo. Punta Gorda.

Trabajadores PDVSA-La Salina (2007). PDVSA-La Salina. Entrevistas y Diarios de Campo. Cabimas.

Trabajadores Central Azucarero Venezuela (2005-2008). Entrevistas y observaciones de campo. Septiembre 2005-Octubre 2008. El Batey y Llanos de Bobures.

Trabajadores de Agroisleña en proceso de expropiación a Agropatria (2011). Sabana de Parra, Mercado de Coche. Entrevistas y observaciones. Centro y Centro-Occidente.